

21
30



INSTITUCIONES PENALES ARGENTINAS

DEL MISMO AUTOR

- Clasificación de delitos en el Código de 1870.* Tesis de la licenciatura. Barcelona, 1878.
- El derecho de acrecer en el Digesto y en las Partidas.* Premio de la Facultad. Barcelona, 1878.
- Relaciones de la Economía Política con el Derecho.* Tesis del doctorado. Madrid, 1880.
- Código de Procedimientos Civiles y Comerciales*, 2 tomos, 2ª edición. Librería Nacional de F. Lajouane. Buenos Aires, 1894-95.
- Efectos penales de la quiebra.* Premio del concurso de « El Tribunal de Comercio ». Librería Nacional de F. Lajouane, 1896.
- Las huelgas ante el Derecho.* Publicación del « Centro Socialista de Estudios », 1898.
- Procedimiento penal argentino* (en colaboración), 3 tomos. Librería Nacional de F. Lajouane, 1910-1911.
- Código Penal Argentino*, 3 tomos. Librería Cervantes de Julio Suárez, 1927.



INSTITUCIONES NAcionales ARGENTINAS



TEXTOS LEGALES

ANOTADOS POR EL DOCTOR

CARLOS MALAGARRIGA

TOMO I

ANTECEDENTES
JUSTICIA FEDERAL — JURISDICCION ORDINARIA
CODIGO PENAL
CODIGO CIVIL (PARTE PENAL)
CODIGO DE COMERCIO (PARTE PENAL)
CODIGO DE MINERIA (PARTE PENAL)
CODIGO RURAL DE TERRITORIOS
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
Y COMERCIALES (PARTE PENAL)
CODIGO DE JUSTICIA MILITAR
LEYES COMPLEMENTARIAS

BIBLIOTECA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION	
	9015
JUSTICIA	E 422
FICHA MATERIA	

BUENOS AIRES

LIBRERIA Y CASA EDITORA DE JESUS MENENDEZ

Bernardo de Irigoyen, 186

1929

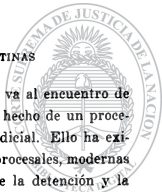




En esta obra se recopila ordenadamente tanto las leyes de carácter exclusivamente penal como las que no teniéndolo encierran sanciones aplicables por la jurisdicción criminal. Van seguidas de sendas notas que sólo tratan de facilitar su sentido, aunque en los Códigos fundamentales de la materia hayan requerido cierta extensión. De uno de ellos, el Penal, no ha mucho publicamos un comentario principalmente analítico, a la luz de sus fuentes legislativas, la doctrina de los autores y los fallos judiciales ⁽¹⁾; el de ahora, aun siguiendo el mismo método de estudiar los artículos uno a uno, es sintético y breve. No así sucede con las notas que hemos puesto al pie de cada título del otro Código, el de Procedimientos, las cuales no sólo comentan sus disposiciones según los autores ⁽²⁾ y la jurisprudencia, sino que apuntan las reformas más urgentemente reclamadas y éstas como aquéllas son contempladas

(1) *Código Penal Argentino. Precedentes, sentencias, notas*, 3 tomos. Buenos Aires, 1927. Librería Cervantes, de Julio Suárez.

(2) Uno de ellos, el del presente libro: Malagarriga y Sasso, *Procedimiento Penal Argentino*, 3 tomos. Buenos Aires, 1910. Librería Nacional, de J. Lajouane y Cía. Esta obra, en que colaboró nuestro entrañable amigo y muy discreto funcionario judicial, señor Santiago Sasso, se agotó a poco de publicada y los requerimientos que repetidamente se nos ha hecho, de una segunda edición, no sabemos si se verán satisfechos ahora, ya que los actuales comentarios tienen distinta orientación aunque quizá acusen mayor experiencia que los que tan benévolutamente fueron entonces acogidos por la prensa y el foro.



desde un ángulo esencialmente jurídico que va al encuentro de lo que la práctica, sobre todo la policial, ha hecho de un procedimiento que debería ser exclusivamente judicial. Ello ha exigido ciertos desarrollos en punto a sistemas procesales, modernas normas en indicios y pericias, caracteres de la detención y la prisión preventiva, extensión del *Habeas corpus*, extradición según sus tres fuentes legales, etc. La amplitud del propósito ha obligado a destinar a este Código un tomo entero, el segundo de la obra.

Pero en el resto de ésta nos hemos ajustado a su carácter de Compilación, y así hemos devuelto al comentario su naturaleza accesoria de los respectivos textos legales que por esto hemos insertado las más de las veces en toda su integridad y cuando no, dado de ellos disposiciones comprensivas de lo esencial en la materia: supuestos legales y penas.

Expondremos ahora el plan adoptado.

Una primera parte, *Tribunales*, comprende las leyes de organización y funcionamiento de la Justicia federal, de la Jurisdicción ordinaria de la Capital y de los Juzgados letrados de los Territorios nacionales.

La segunda parte, *Códigos*, contiene los cuatro reservados por la Constitución al Congreso Nacional y cuatro leyes que éste ha dictado (una, adoptada) también con el nombre de *Códigos*.

De este modo han quedado para la tercera y última parte las *Leyes* propiamente así llamadas que el Congreso ha dado, unas para regir en toda la Nación y aplicables casi todas ellas por la Justicia federal, otras para imperar sólo en la Capital y Territorios y sujetas a la Jurisdicción ordinaria, otras, las obrero-sociales, que hemos reunido por su objeto común y no por la forma varia de su aplicación judicial.

Por lo demás el autor tampoco pretende con este libro haber realizado una honda labor científica: su propósito como más

proporcionado a sus fuerzas, ha sido el mismo que expresaba, pensando en una frase de Bergson ⁽¹⁾, al final de la nota preliminar de la obra antes aludida y con que es bien que acabe esta Advertencia:

« Sale así el presente libro, si desnudo de autoridad, horro de pretensiones. Pero aspira a ser útil. Su autor o compilador u organizador, como quiera llamársele, alienta la esperanza de que esta obra, ya que no pueda ocupar en la biblioteca del estudioso un sitio de honor, por lo menos quede en su mesa de trabajo al alcance de la mano como una buena herramienta ».

C. M.

(1) « A poder desprendernos de un necio orgullo y atenernos estrictamente, para definir nuestra especie, a lo que la historia y la prehistoria nos muestran como constante característica del hombre y su inteligencia, quizá en vez de *Homo sapiens*, diríamos *Homo faber*. » (L'EVOLUTION CREATRICE, pág. 151).



ANTECEDENTES



I. — La colonia y el Virreinato. Legislación española.

España trajo con sus hombres, sus leyes. Ni éstas ni aquéllos eran peores o mejores que los de su tiempo. Serían los *hombres* de aventura, quizá codiciosos, seguramente duros para sí mismos y para los demás, pero no puede negárseles las virtudes que son la esencia del actual pueblo argentino: sobriedad en el gesto, la palabra y el juicio; fe segura en el porvenir que se quiere grande y luminoso; la convivencia social basada en el amor a la tierra que se trabaja; una gran seguridad en el valer propio que hace fácil el respeto del derecho ajeno. Las fórmulas netamente argentinas: «serás lo que debes ser; la victoria no da derechos; no se mata a las ideas; América para la humanidad; la Argentina abierta a todos los hombres de buena voluntad»... no son creaciones artificiales o esporádicas sino que debe buscarse su raigambre en los tan mal tratados tiempos coloniales. La Constitución norteamericana, la influencia francesa, el crecimiento demográfico, al llegar encontraron ya estos tan sólidos cimientos.

Pues en punto a *legislación* es bien sabido que la civil española desde las Partidas fué la primera de Europa, como consecuencia del derecho germano y del romano que supo combinar con la doctrina de los glosadores y el derecho canónico. Y no se diga de la mercantil, que desde el Consulado de Mar de Barcelona a las Ordenanzas de Bilbao sentó reglas pronto adoptadas por los países más adelantados. Con tales leyes vivieron la colonia del Plata, el virreinato y la República Argentina



hasta muy mediado el siglo XIX. Ahora, si nos atenemos al asunto de este libro, la legislación penal, hay que partir de un hecho que nadie niega: estuvo en constante transformación que es decir en continuo progreso. Desde la Ley de los Jueces, el venerable Fuero Juzgo « fecho enno quarto concello de Toledo ante la presencia del Rey don Sisnando enno anno DCLXXXI » hasta la Ordenanza de Corregidores dictada por el señor don Carlos III, la línea ascendente no se interrumpió. Un rápido resumen del cuadro que presentaban a fines del siglo XVIII los delitos y las penas, cuadro que regía en este virreinato y siguió en vigor hasta 1886, demostrará lo que fué aquella legislación de la que blasfeman los que no la conocen ⁽¹⁾.

Veamos primero las penas:

1º. *Corporales afflictivas*. Muerte. Azotes. Presidio. La mutilación (lengua, dientes, manos) dejó de usarse a principios del siglo XVI.

2º. *Corporales restrictivas*. Expatriación. Deportación. Destierro. Confinamiento. Prisión.

3º. *Infamantes*. Declaración de infamia. La hace la ley para las adúlteras, alcahuetas, cómicos, toreros, militares expulsados, usureros, contra natura, letrados con *cuota litis* o prevaricadores, duelistas y padrinos, acusador que desiste sin licencia judicial, juez prevaricador, caballero degradado. La hace la *sentencia* en los delitos de traición, tutor o curador doloso, el azotado públicamente. La argolla que cayó en desuso. La marca de fuego nunca se ha usado en España aunque una ley la impuso como veremos.

4º. *Pecuniarias*. Confiscación. Multa. Pérdida de la cosa. Costas.

Los delitos se penaban:

CONTRA LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO. *Traición*: penas de muerte y confiscación. Esta última en desuso; las Partidas admitían que las hijas heredasen su legítima. En el siglo XVIII ya no existía.

⁽¹⁾ Seguimos en esto el *Febrero* de García Goyena y Aguirre en la edición del mismo Aguirre y Montalbán, de Madrid, 1843, cuyas páginas 70 a 236 del tomo VII resumimos.



CONTRA EL MONARCA. Muerte.

CONTRA EL ORDEN PÚBLICO. *Sedición o tumulto:* diez años de presidio a los cabezas de motín y de ahí abajo a los demás. *Pasquines públicos:* la ley de Enrique III: «si es hombre de mayor guisa y estado, que nos lo envien preso para que le mandemos dar la pena que entendiéramos que merece: y si fuera otro y hobiese hijos de bendición, que pierda la mitad de sus bienes para nuestra Cámara y la otra que sea para sus hijos.» *Desobediencia a las autoridades:* si hay muerte de magistrado, Jefe político o Juez, pena capital sin confiscación; si lesiones, presidio; si usando armas o reuniendo gente alguien se apoderase de algún preso, teniendo éste pena capital, para aquél la misma y sino destierro o muerte; los contrabandistas diez años de presidio. *Escalamiento y fuga de cárcel:* pena arbitraria; a los que huyen de las cárceles, pena sólo si han empleado medios de violación, fractura o quebrantamiento. *Vagancia:* servicios de armas o marina o encierro en un hospicio o casa de misericordia. *Juegos prohibidos* (desde la banca a la taba): multa y a la tercera vez un año de destierro. *Armas prohibidas:* seis años de presidio. *Monopolio,* confiscación y destierro: en la práctica multa. (Advierte el *Febrero* que es acto de monopolio «el acuerdo de los menestrales y jornaleros de no trabajar sino por cierto estipendio!»)

DELITOS CONTRA LA RELIGIÓN. *Apóstatas y herejes:* aunque las leyes alfonsinas condenaban a hoguera, «la práctica era condenar a los pertinaces con extrañamiento, pero una ley recopilada impone a los que vuelven, muerte o confiscación.» *Blasfemia:* la ley recopilada impone un mes de cárcel por la vez primera y seis meses de destierro por la segunda y por la tercera «clavarle la lengua, a no ser que fuere persona de distinción en cuyo caso incurre en un año de destierro y dos mil maravedís de multa.» *Sacrilegio:* rigen las leyes de Partida: en general el arbitrio de los jueces: pero matar a un clérigo de misa, 600 maravedís; si de evangelio o monja, 400; si de epístola, 300; un obispo valía 900, pero siendo dentro de la iglesia cualquier homicidio tiene pena capital. *Superstición:* ya el Fuero Juzgo imponía 100 azotes a los adivinos: una ley recopilada aprueba las penas de las Partidas diciendo que «ningunas personas sean osadas de usar de estas maneras de adivi-



nanzas, conviene a saber de agüeros de aves, ni de estornudos ni de hechizos etc. so pena de scyéndoles probado por testigos o por confesión de los mismos, que los maten por ello », pero últimamente se imponía una pena correccional. *Perjurio*: si aquel contra quien se practicó mereciese pena de muerte u otra corporal, será castigado el perjurio con la misma pena: el perjurio en causas civiles o criminales no graves, « pena de vergüenza pública y galeras que pueden ser perpetuas ».

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PERSONAL. *Homicidio simple* (por pasión o riña): el ilícito si con premeditación, pena de muerte; sin ella, diez años de presidio. El lícito, en defensa propia o de la mujer, padres, o hijos o en acciones de guerra no tiene pena; tampoco el marido que mata al que hallara yaciendo con su esposa, pero esto último había caído en desuso mucho antes del siglo XIX, como veremos. *Parricidio*: la práctica últimamente adoptada era la muerte en garrote vil siendo arrastrado el reo hasta el lugar del patíbulo: « las cofradías de caridad sostienen al reo en un serón de esparto »; (así fué arrastrado en 1823 el general Riego que tres años antes en Cabezas de San Juan proclamó la Constitución de 1812 con el ejército preparado para combatir a Bolívar). *Infanticidio*: pena capital. *Asesinato*: pena capital. *Envenenamiento*: en desuso las leyes de Partida (tormento, echar a las fieras) pero la pena es de muerte. *Homicidio en desafío*: las leyes más rigurosas desde el Fuero Juzgo a Fernando VI, muerte, confiscación, etc., nunca han sido del todo aplicadas y así ha pasado en todos los países. *Suicidio*: una ley recopilada hacía que todos los bienes del muerto pasaran al fisco: se olvidó con esto la excepción de las Partidas a favor del que « se matase por locura o por dolor o por euita de enfermedad o por otro gran pesar ». *Homicidio casual*: cuando es por culpa, el padre que mata al hijo en el acto de castigarlo por vía de corrección o el maestro a su discípulo y el médico y cirujano al enfermo por impericia: pena pecuniaria. *Mutilación*: en desuso las leyes antiguas: ojo quebrantado, cien sueldos; oreja tajada, cincuenta; narices cortadas, cien; cuatro dientes de delante, cada uno cien sueldos. *Castración*: la pena del homicidio. *Heridas*, que puedan ser mortales de necesidad, es decir que a pesar de los auxilios producen muerte, pena del homicidio; peligrosas



que puedan causar la muerte aunque no la causen, presidio. *Violencia o privación de libertad*: destierro perpetuo en una isla y confiscación de bienes.

DELITOS CONTRA LA REPUTACIÓN: las Partidas imponen la pena del Tali6n, esto es, la misma que mereciera el calumniado si se justificase el delito que se le imputaba. *Injurias verbales*: si son *palabras mayores* (leproso, sodomita, cornudo, p... a mujer casada), debe el reo desdecirse p6blicamente y pagar 1200 maravedís, la mitad para la C6mara y la otra para el injuriado: las injurias menores, 200. *Injurias reales*: romper vestidos, escupir a la cara, amenazar con palo o piedra, dibujar unos cuernos en la puerta de un casado, así como las encerradas a los viudos que se casan, 100 ducados de multa y cuatro años de presidio; siendo injuria real los malos tratamientos del marido, la Ordenanza de Corregidores (1788) ordena al Juez buscar medios conciliatorios: en cuanto a la ley de Partidas que considera injuria las repetidas visitas a mujeres doncellas, casadas o viudas o seguirlas hasta las iglesias por las calles o en los paseos p6blicos o mandarles regalos para conseguir sus favores, advierte el *Febrero* que la ley descuid6 fijar la pena a tal «delito». *Injurias escritas*: el libelo famoso («el mal que los homes dicen unos a otros por escrito o por ritmas») tiene la pena que tendria el injuriado si se le probase la verdad de la imputaci6n.

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD. *Hurto simple*: adem6s de la restituci6n de lo hurtado y de sus frutos, pena al mayor de 17 años, de vergüenza y seis años de galeras por la vez primera y 100 azotes y servicio perpetuo en aquellas por la segunda: pero una ley recopilada dej6 la pena al arbitrio del Juez seg6n fueran las circunstancias. *Hurto con violencia*: robo o rapiña por saltadores de caminos, piratas y ladrones que entran por fuerza en las casas, la pena de Partidas es la capital, pero en la pr6ctica suele imponerse la de presidio: s6lo si hay reincidencia ser6 la de muerte. *Abigeato*: a los cuatrerros se les impone trabajo en obras p6blicas y si tienen costumbre, pena de muerte: iguales penas al que de una vez se apodere «de una «grey, esto es diez o m6s ovejas, cinco o m6s puercos, cuatro «o m6s yeguas u otros tantos animales de los que nacen de «éstos.» Con raz6n dice el autor censurando tanto rigor, que



el juez deberá tener presente aquella otra ley de Partidas: « Por razón de furto non deben matar nin cortar miembro alguno ». *Exhumación*: para despojar un cadáver o un sepulcro; si es a fuerza armada pena de muerte; de otro modo, presidio. *Hurto doméstico*: pena capital, cuya atrocidad asegura la impunidad, pues nadie llegaba a denunciarlo. *Usurpación*: además del reintegro del bien, el que entrare o tomare por fuerza alguna cosa en cuya pacífica posesión estuviera otro, pierde el derecho que tuviere a ella y si no le tenía « la devuelva con otra suya equivalente »: si un acreedor ocupa por sí mismo los bienes de su deudor debe ser castigado con pena arbitraria. *Incendio*: la Recopilación da pena de muerte al que con ánimo deliberado quema casas, mieses o viñas y al que por quitar a otro la vida pone fuego en una casa; además se le confisca la mitad de sus bienes: la práctica judicial impone en muchos casos el presidio. *Usura*: una ley recopilada permite el interés de 6 %: lo que suele hacerse, en caso de exceso y de queja de parte, es condenar al usurero por la vez primera a la restitución del exceso y pago de costas; por la segunda a la pérdida de los intereses según prescribe el Fuero Juzgo y por la tercera a duplo de estos mismos intereses con arreglo al Fuero Real. Se castiga igualmente la *mohatra*, que consiste en la obligación de dar una cantidad mayor por parte menor recibida en géneros que hay que vender con pérdida.

DELITOS DE FALSEDAD. *Falsificación de firmas o sellos*: del rey, sus ministros, altos funcionarios públicos, arzobispos o cualquier otro prelado, pena capital (García Goyena duda que se haya aplicado); de personas de inferior clase, presidio. *De documentos públicos*: se cortaba la mano al autor, pena de Partidas, reemplazada por presidio. *De nombre, estado, condición y oficio*. Igual pena. *De moneda*: Pena capital, pero no al que la rae o cereena, a quien sólo se le confisca la mitad de sus bienes. *De pesos y medidas*. Multas: los vivanderos, según la Ordenanza militar, tienen presidio por seis años si usan o falsifican pesos o medidas. *Estelionato* o sea « la ocultación de las obligaciones afectas a la casa que se vende o hipoteca »: pena que al juez aconseje su prudencia. *Suposición de parto*: define el delito una ley de Partidas, pero no le señala pena; será la general para las falsedades. *Cokecho o baratería*: del



juez, privación de oficio, inhabilitación perpetua y devolución de cuatro tantos; de los demás empleados, pérdida del empleo, devolución del duplo y destierro por diez años. *Prevaricato*: pago al litigante de todos los daños que le ha causado la culpa, malicia o impericia del abogado, con otro tanto más por vía de pena. *Intercepción de la correspondencia pública*: sin violencia, 10 años de presidio; con ella, además multa de mil ducados.

DELITOS DE INCONTINENCIA O DE SENSUALIDAD. *Amancebamiento*: de casado con soltera; perdimiento del quinto de sus bienes que pasa a ser de la manceba después de un año de vida honesta; esto según la Recopilación, pero en la práctica si la mujer no es deshonesta o ramera se la dota; de casado con casada, ésta sólo tiene pena si acusa el marido, aquél presidio; de soltero con casada, lo mismo; de clérigo, pena a la barragana de destierro por un año, a aquél pérdida del beneficio; contra el que tiene una o varias mancebas en su casa, no se procederá hasta después de una investigación privada con amonestación. *Prostitución*: en general, prohibiciones gubernativas. *Estupro* o acceso ilegítimo de un hombre con mujer honesta soltera o viuda (si fuere con casada, sería adulterio y si con ramera, simple fornicación): el voluntario no tiene pena; el con seducción o fuerza, tenía por ley del Fuero Real pena de confiscación hasta la mitad de sus bienes, con azotes y destierro por cinco años; siendo siervo de la casa, morir quemado, pena ésta que la del Ordenamiento de Alcalá convirtió en capital simplemente y otra recopilada redujo el castigo a 100 azotes y destierro por dos años: penas siempre graves por lo que en la práctica se admitieron las disposiciones del derecho canónico: el estuprador debe casarse con la estuprada o darle dote o reconocer la prole que resultare. *Fuerza*: si es en despoblado, pena capital; sino, presidio. *Robo de mujeres*: decía el Fuero Viejo de Castilla: «e aquella mujer que dier la querella (de) que es forzada, si fuer fecho en yermo (el campo) a la primera villa que legase debe echar las tocas en tierra, arrastrarse e dar apellido (voces) diciendo: fulán me forzó, si le conosciere; e si nol conosciere, diga la señal dél e si fuere mujer virgen, debe mostrar su corrompimiento a bonas mujeres, las mejores que fallare; E si el fecho fuer en lugar poblado (lo mismo) e



si non fuese mujer que non sea virgen debe cumplir todas estas cosas, fuera de la muestra de catarla. E si éste que la forzó se podier aver (fuera habido) deve morir por ello. » Claro que el rapto debe ser violento; el de cualquier otra clase, incluso de ramera, tendría pena al arbitrio del juez. Ultimamente la pena no era capital sino de presidio. *Adulterio*: Las penas han variado y dar las que imponen las distintas leyes sería hacer la historia de la legislación española: la más notable es la de Toro que para evitar que los particulares se tomasen la justicia por su mano con desdoro de la autoridad pública, determinó que el marido que tal hiciese, aunque fuera *in fraganti* « no ganase la dote de ella o los bienes del difunto ». Luego Felipe V por un auto acordado, prohibió « a todos generalmente « sin excepción de personas el que tomen por si las satisfacciones de cualquiera agravio e injurias bajo las penas impuestas. » De ahí y de que « poner a los adúlteros sorprendidos a disposición del marido es tanto como disminuir el derecho social y aumentar hasta un punto indebido el derecho del individuo », que hayan dejado de observarse las antiguas penas imponiendo en vez las de presidio, destierro, reclusión y multa ⁽¹⁾. *Poligamia*: aquí la marcha de la legislación fué retrógrada: las Partidas penaban al bigamo con destierro y pérdida de los bienes que tuviese en el lugar donde celebró el segundo matrimonio, a favor de los hijos y sino por mitad al fisco y al cónyuge que sufrió el engaño; pero la Recopilación aumentó la pena con la marca con hierro ardiente en la frente

(1) Los confeccionadores de libros de texto universitario que abominan de las « vetustas leyes de la antigua España » (Sarmiento pronunciaba y hasta escribió « España ») y que todo lo malo argentino lo atribuyen a los antecedentes coloniales, deberían reflexionar sobre el hecho de que en un asunto penal tan preciso como el que tratamos, la legislación española pasó de las leyes góticas a los fueros, de éstos por las leyes de Toro a las reformas de las recopiladas y así llegó al Código Penal de 1870, cuyo artículo 438 establece que « El marido que sorprendiendo en adulterio a su mujer matase en el acto a ésta o al adúltero o les causare alguna de las lesiones graves será castigado con la pena de destierro. Si les causare lesiones de otra clase quedará exento de pena ». Se dirá que el actual Código Penal Argentino en esto se atiene al derecho común, pero en el derogado, de 1886, el artículo 81 declaraba exento de pena «... 12° Al cónyuge que sorprendiendo a su consorte en flagrante delito de adulterio, hiere o mata a los culpables o a uno de ellos ». (Obsérvese la redacción maliciosa: se quiere cohonestar la atrocidad del acto, haciéndola extensivo a la esposa que sorprendiese a su marido en adulterio. ¿Como si fuera tan natural que una mujer mate!) Lo cual ha sido ley hasta 1921.



de una *Q*; otra recopilada posterior reemplazó todo con diez años de galera que más tarde se convirtieron en ocho de presidio. *Sodomía*: la castración del Fuero Juzgo, agravada por el Fuero Real con la publicidad de la operación y el colgamiento de las personas hasta la muerte, fué pena capital en las Partidas y de hoguera en la Recopilación (sin duda por lo que reñó el vicio con el Renacimiento), pero da a entender el *Febrero* que ni la simple pena de muerte se usaba ya. *Alcahuetería*: las penas en las leyes son corporales y algunas veces la capital, pero « la práctica ha adoptado la de poner encorazados o emplumados a los alcahuetes a la vergüenza pública destinando después a los hombres a presidio y las mujeres a reclusión ». *Incesto*: aun en el caso de imponerse alguna pena nunca se ejecuta la de muerte y sí otra personal según las circunstancias.

En cuanto a procedimiento y organización judicial hubo también mudanzas y progresos que es inútil detallar. Concretándonos a lo de aquí, cabe decir que la justicia que se administró desde los primeros tiempos de la colonia y en que con el andar del tiempo entraron jueces, pesquisadores, alcaldes, ordenanzas, el cabildo, el corregidor, conociendo de las apelaciones, etc., fué suficiente para que hubiera paz en la colonia. El progreso que en la metrópoli representó una superior organización como fué la reforma y extensión de las Audiencias, repercutió en Buenos Aires, por cierto que en forma notable, pues cuando se recibió la Cédula Real organizando una tal como eran las de la Metrópoli y sin tener en cuenta el carácter propio de su colonia del Plata, fué sin duda recibida con la acostumbrada fórmula de: « Se obedece pero no se cumple », pues al parecer se estableció aquí (1661) una Audiencia de la cual no se sabe sino que en 1673 no funcionaba. Fué en 1783 cuando ya las necesidades de la colonia eran más complejas, que el virrey marqués de Loreto, el regente y los oidores que venían nombrados por la cédula ereccional de la « Audiencia de Buenos Aires » al obedecer el mandato real, le dieron cumplimiento pero de hecho tardó poco en ajustarse la nueva institución a la práctica de la justicia que se venía aquí administrando de tiempo atrás. Y tal es la fuerza de la realidad que cuando



en 1812 quedó abolida la Real Audiencia, la Cámara de apelaciones que se creaba, adoptó la misma organización de aquella, suprimiendo naturalmente el recurso de segunda suplicación ante el Rey, pero siguiendo el mecanismo del tribunal, oidores, ahora magistrados, fiscales, relatores, abogados, defensores de pobres e incapaces, los votos en el acuerdo, etc., etc.: hasta había un principio de oralidad en los juicios: en las vistas el relator exponía lo actuado y las partes discutían la causa. Poca cosa, pero obsérvese que no se ha adelantado en ello nada: al contrario se ha retrocedido; hoy, cuando llega el caso de permitir que haga un discurso el abogado, éste se encuentra tan extraviado en ese «país nuevo», al tener que hablar, acostumbrado como está al procedimiento esencialmente escrito (mejor escriturario), que sale del paso presentando un memorial.

En resumen la legislación penal española se caracterizaba por su dinamismo: en ella el progreso fué continuo y bien se vió cuando apenas empezado el siglo XIX las Cortes de Cádiz suprimieron el tormento, abolieron la inquisición, aseguraron las libertades individuales de inviolabilidad de domicilio y la correspondencia, la obligación de someter a la autoridad judicial toda detención por razón de delito. Y el impulso siguió durante todo el siglo hasta llegar a la implantación del Jurado.

Que aquí no sucediera la misma es cosa sabida y excusable, pero no vemos por qué de ello deba culparse a la vieja, vetusta, oscurantista (así se la ha llamado) legislación española, que en sus progresos siempre se ha adelantado a todas: años antes del *Forum iudicum*, el Libro de los jueces, la monarquía visigoda en los famosos Concilios de Toledo se dió leyes no menos famosas como siglos más tarde los ministros reformistas de Carlos III se anticiparon a las novedades que a poco Francia proclamara; en lo penal, asunto de este libro, la Ordenanza que citamos, es anterior a la boga de Beccaria.

II. — Hasta la legislación moderna.

De torpes califica el Dr. González Roura (tomo 1º, pág. 132) las leyes que en lo penal se dictaron después de la Revolución. Su índice bien lo prueba:



1811. Cuatro bandos a cual más «torpe»: de 20 de abril contra los abusos de imprenta, ratificado por el de 25 de octubre; el de 4 de octubre que mandaba juzgar militarmente por una comisión especial e imponía la pena de presidio a los ladrones hasta cien pesos y de muerte a los demás. Únicamente se salva de la «torpeza» el decreto de 23 de noviembre que establece requisitos para detenciones, allanamientos y un humano régimen carcelario ⁽¹⁾.

1812. Reglamento para la elección de diputados, castigando el fraude con destierro y pérdida de la ciudadanía.

1813. Abolición del Tribunal de la Inquisición que aquí hizo poco daño, y supresión del tormento «cuyos instrumentos se quemarán en la plaza pública». (Dícese que alguno quedó).

1814. Pena de muerte a los duelistas y sus padrinos.

1817. Reglamento provisorio que aprovechó lo menos malo de los bandos de octubre de 1811. Declara en vigencia las leyes

(1) Aun en esto había un buen modelo colonial. La *Ordenanza de Corregidores* establecía: «En las causas criminales procederán los Corregidores y Alcaldes con la mayor actividad y diligencia... Recibirán por sí mismos las deposiciones de los testigos en las causas que sean de alguna gravedad y en todas cuando el testigo no supiera firmar y siempre las declaraciones y confesiones de los reos sin cometerlas en ningún caso a los Escribanos ni a otra persona alguna y sin usar la cautela de tomar los Escribanos a solas las deposiciones de los testigos y leerlas después ante el Juez, so pena de ser castigados por la contravención y de nulidad del proceso, advirtiéndose que dentro de veinticuatro horas de estar en la prisión cualquier reo se le ha de tomar su declaración sin falta alguna. La estancia en la cárcel trae consigo indispensablemente incomodidades y molestias y causa también nota a los que están detenidos en ellas. Por esta razón los Corregidores y demás justicia procederán con toda prudencia, no debiendo ser demasiadamente fáciles en decretar autos de prisión, en causas o delitos que no sean graves, ni se pene la fuga u ocultación del reo, lo que principalmente deberá entenderse respecto a las mujeres, por ser esto muy conforme al espíritu de las leyes del Reyno y también respecto a los que ganan la vida con un jornal y trabajo, pues no pueden ganarlo en la cárcel, lo que suele ser causa del atraso de sus familias y muchas veces de su perdición. Cuidarán de que los presos sean bien tratados en las cárceles, cuyo objeto es solamente la custodia y no la aflicción de los reos, no siendo justo que ningún ciudadano sea castigado antes de que se le pruebe el delito legítimamente. Claro es que en las cárceles haya la seguridad y custodia correspondiente, como también el aseo y limpieza que previenen las leyes del Reyno para que en cuanto sea posible no se perjudique la salud de los que están detenidos en ellas». Siguen a esto reglas numerosas y disposiciones respecto a la visita de cárceles sobre todo las del Presidente y Oidores del Consejo: «Y mandamos que los dichos Oidores ni alguno de ellos ni sus mujeres no rueguen a los Alcaldes por sultura de presos, y hecha la visita visiten y vean los presos que esturiscen en las cárceles aunque no hayan salido a la visita y se informen cómo y de qué manera son tratados los presos pobres y si tienen camas en que duerman.»



Recopiladas y las de Indias, pero dando en esto un paso atrás al restablecer el arbitrio de los jueces en cuanto a penas, el que había sido abolido aquí por una ley de Indias.

1821. Pena de muerte a los falsificadores de papel moneda, a sus cómplices y circuladores. Y la acostumbrada ley de imprenta. Además se suprime la elección popular de «subrogantes de los cabildos» y se atribuye la jurisdicción penal a jueces letrados elegidos por el P. E. y catorce comisarios de policía nombrados también por el gobierno.

Todavía padecemos del mal de esto último.

1822. Penas a los ciudadanos que no ayuden a la policía.

1823. Se legisla sobre robo de ganados: con sólo dos testigos procede la pena de azotes o seis meses de presidio «sin apelación».

1828. Nueva ley de imprenta.

1830. Azotes, presidio o muerte a los autores de lesiones u homicidios cometidos con instrumentos punzantes o armas de fuego. Procedimiento verbal.

1840. «Pena discrecional» al que atacara la persona o la propiedad de un ciudadano o extranjero.

No hay por qué insistir sobre lo que sería la justicia con los Tribunales especiales en la época en que se dictaron estas últimas leyes.

En resumen se innovó poco y mal y no se ve la razón de que se dé la culpa del en esto evidente atraso de la República en los dos primeros tercios del siglo XIX a España que, por su parte, entroncó fácil y naturalmente sus reformas legislativas (desde 1812) en su derecho histórico.

Obsérvese que en lo civil y lo comercial las leyes dictadas en este período no alteraron substancialmente el «derecho patrio». En la ley de enfiteusis, Rivadavia (18 mayo de 1826), por el contrario, lo aplicaba con gran precisión y muchos creen que es un error de Vélez Sársfield no haberla seguido. En la familia lo poco y transitorio que se legisló duró cuatro años: aludimos a la prohibición de matrimonios de españoles con americanas (de 1817 a 1821). En materia de sucesión la ley de 1813 prohibió los mayorazgos y vinculaciones. Lo demás que se hizo (V. en *Salvat*, «Tratado de Derecho Civil Argentino». n.º 178-200, su resumen) no alteró substancialmente las viejas leyes que siguieron formando la estructura social a



pesar de todas las luchas por qué hubo de pasar la Argentina hasta su cabal y definitiva organización. Merced a esto el régimen familiar, de propiedad, de sucesión y del comercio, se mantuvo y pudo así llegar la hora de la codificación que también natural y fácilmente derivó de las antiguas leyes que habían sido la defensa de la sociedad y de la economía argentinas.

Por lo que tiene de público y aun de político lo penal fué en cambio llevado y traído durante el mismo largo período y hubo que confiar la elaboración de sus dos Códigos básicos a la ciencia de unos pocos, a los que se fijaba un tiempo a veces corto para redactarlos. Si en ellos no se alcanzó todo lo que se deseaba y que los progresos de la ciencia y legislación europeos exigían, no hay por qué culpar al régimen colonial.

III. — Las leyes de 1863.

No se llegó de golpe a la codificación. Debieron precederla las leyes exigidas con más urgencia por la Constitución Nacional y a las que diez años después de dictada ésta y ya hecha la unidad llegó su hora. Para «afianzar la justicia», la hermosa fórmula de la Constitución, había que poner ésta por encima de todo como intangible y con ella las leyes que dictara el Congreso: había que asegurar reciamente la estructura política y establecer el Tribunal Superior que con los otros nacionales dirimiera las cuestiones de orden civil en cuya mejor solución estaba interesado el régimen, a la par que las de orden penal que por su naturaleza (personas, lugar, materia) tenían con éste atingencia.

En la primera parte de este libro veremos las leyes de forma y orgánicas que a dicho efecto se dictaron en 1863. Las insertamos y comentamos con excepción de la n° 49 ley de fondo. «Crímenes y delitos contra la Nación», por haber sido derogada por el Código Penal vigente, y la n° 50, ley de procedimientos federales, porque su parte civil (por lo demás parte muy modificada por leyes posteriores) sale del cuadro de la presente obra y su título dedicado al procedimiento en lo criminal fué derogado por el Código de Procedimientos en lo Criminal hoy vigente (Cód. Proc. Crim.).

Pero ésta y las demás leyes «del 63» dieron una base sólida



al Poder Judicial de la Nación, empresa urgente si había que establecer el perfecto equilibrio que el régimen federal exigía, equilibrio entre los tres poderes en que se dividía el Gobierno nacional, equilibrio entre éste y los gobiernos provinciales; el primero asegurando la estabilidad de la Nación entre todas las del mundo, el segundo poniendo definitivo término a las luchas internas que formaban el tejido de la vida pública argentina desde la anarquía del año xx.

Así pudo ya pensarse en una legislación atenta a los progresos de la ciencia jurídica: en lo civil por el influjo del Código de Napoleón, en lo penal desde la honda innovación principalmente italiana por Beccaria y Filangieri y en lo comercial por el nuevo impulso que esta materia cobró con los modernos inventos, sobre todo en el tráfico internacional. Quizá esto no se logró del todo. Es posible que en ello influyera el plazo relativamente corto de su confección.

IV. — Los cuatro Códigos de la Constitución. El Penal.

Desprendidas las Provincias de la facultad de legislar en materia civil, comercial, de minería y penal atribuida expresamente al Congreso nacional (art. 67, inc. 11° de la Constitución), el mismo año 1863 (12 septiembre) el Congreso dictó de inmediato una ley adoptando para toda la República el Código de Comercio vigente en la provincia de Buenos Aires y que no se reformó hasta 1889.

A poco se daba la ley n° 36 ⁽¹⁾ autorizando al P. E. a nombrar comisiones encargadas de proyectar los Códigos Civil, Comercial y Penal, además de las Ordenanzas militares. Para el primero el P. E. no nombró comisión, sino al Dr. Vélez Sarsfield (20 de octubre de 1864) que ni corto ni perezoso, el 21 de junio del año siguiente, 1865, presentó el primer libro del Código, hasta 1869 (25 de agosto) en que el P. E. envió

(1) Pasamos por alto como sobradamente conocidos los antecedentes de esta ley: el decreto de Urquiza (1852) instituyendo una comisión que redactara los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Procedimientos y la Ley de 12 septiembre 1854 (n° 12 de las dictadas por el Congreso de la Confederación reunido en Paraná) autorizando al P. E. para aquel mismo trabajo. Ni ésta se nombró ni aquella llegó a funcionar.

al Congreso la obra total; es decir que en algo más de cuatro años dió cima al empeño. Una ley de 25 de septiembre del mismo año lo declaró vigente a contar desde el 1º de enero de 1871.

En virtud de la citada ley nº 36 el P. E. tampoco para el proyecto de Código Penal nombró comisión, sino que encargó del trabajo al Dr. Carlos Tejedor (5 diciembre 1864) que lo presentó en dos partes, la primera en 1865 y el resto en 1867. Al año siguiente (11 septiembre) se dictó la ley nº 250 autorizando al P. E. a nombrar una comisión que examinara el proyecto de Tejedor, la cual presentó en 3 de enero de 1881 un nuevo proyecto substituyendo el examinado. Con esto se eternizó el asunto hasta que en 1886 (7 noviembre) se llegó a la ley nº 1920 que como Código Penal ha regido hasta entrado el año 1922. A la par se promulgó como Código de Minas un proyecto del Dr. Enrique Rodríguez. Algún tiempo después (7 junio 1890) el P. E. nombró una comisión (Dres. R. Rivarola, N. Piñero y J. N. Matienzo) para la reforma del Código Penal, la cual en junio de 1891 presentó un sabio proyecto que no salió de la Cámara de Diputados: ésta en vez de adoptarlo lo destrozó; «retazo inorgánico de una excelente obra de legislación» llama el Dr. González Roura a aquella ineptia que se llamó, para mayor irrisión, ley de reformas (nº 4189 de 22 agosto 1903) y que se ha estado aplicando casi durante veinte años. En 1904 (19 diciembre) se nombró otra comisión (Rivarola, Piñero, Saavedra, Beazley, Moyano Gacitua y J. N. Ramos Mejía) que dos años después presentaba un nuevo proyecto que tampoco salió del Congreso. Finalmente un proyecto presentado a su Cámara por el diputado R. Moreno (hijo) pasó a «una Comisión especial de Legislación Penal y Carcelaria» (Del Barco, Del Valle, Pradere, De Toma y el autor) para después de varias vicisitudes y modificaciones ser promulgado como Código Penal el 22 de octubre de 1921, a regir seis meses después de su promulgación, es decir, desde el 29 de abril de 1922.

De estos cuatro Códigos insertamos en su integridad el que responde a la especialidad de esta obra, el Penal: de los otros tres, Civil, Comercial y de Minería, sólo nos debe interesar la parte que cada uno encierra de penal y es la que estudiamos





en la Parte segunda de esta obra con otros cuatro Códigos, que también ha dictado el Congreso, pero como leyes de la Nación. Son el de Justicia militar, el Rural para los territorios nacionales, el de Procedimientos penales y el de Procedimientos civiles; de este último sólo estudiamos la parte que nos interesa, la penal; en cambio, damos en su integridad el Rural por lo abundante que es su parte penal y por de contado los otros dos esencialmente de orden criminal.

V. — El procedimiento penal.

El procedimiento judicial, tanto el penal como el civil y comercial, es materia no delegada por las provincias, cada una de las cuales tiene los suyos propios. Esto creó dos problemas:

1°. En lo nacional no bastaba el título XXX de la ley de Procedimientos de 1863, primero por lo incompleto de sus disposiciones y luego porque había que dar cumplimiento a una exigencia constitucional, la organización del Jurado.

2°. Había que establecer reglas procesales para los juicios criminales que, por no estar comprendidos en las leyes federales, son de los que se llaman de jurisdicción común u ordinaria de Capital.

No se hablará aquí de la jurisdicción común o no federal de las provincias, porque éstas tienen sus tribunales (civiles y penales) propios además de sus propias leyes procesales.

Cada uno de los dos problemas, tuvo su especial solución.

1. — *Los proyectos González-Plaza. El Jurado*

Es conveniente contemplar aquí un punto de gran importancia en materia penal: el Jurado.

Escríbe lo define: reunión o suma de cierto número de ciudadanos (se les llama jurados por el juramento que prestan al formar el Tribunal popular) que sin tener el carácter público de magistrados son elegidos por sorteo y llamados ante el Tribunal o Juez de derecho para declarar según su ciencia y conciencia si un hecho está o no justificado, a fin de que éste pronuncie su sentencia de absolución o condenación y en este último caso aplique la pena de acuerdo a las leyes. Debe completarse esta definición con la declaración que hace el Tribunal de



quién es el culpable, pero en algunas naciones como en el proyecto argentino, esto sólo se exige cuando el acusado alega no ser culpable. En los países que primeramente establecieron este sistema de enjuiciar, Inglaterra y Estados Unidos, hay dos Jurados, uno de acusación y otro (Jurado grande) que es el que da el veredicto en que el Juez o Tribunal de derecho funda su sentencia.

Institución democrática, la Constitución Nacional en sus artículos 24, 67, 11 y 102 se refiere a su establecimiento en la Argentina, pero el único intento que en esto se hizo, no llegó a cuajar. En mayo de 1870 los senadores Aráoz y Ordóñez presentaron a su Cámara una proposición al respecto: se produjo un gran debate en que don Manuel Quintana dijo: « para honor del país, ninguna voz se ha levantado en este recinto atacando la institución del jurado que es una de las grandes conquistas de la civilización moderna y una de las garantías más firmes sobre que reposan las libertades públicas y privadas. » La proposición-proyecto fué aprobada por unanimidad y pasó a la otra Cámara: en 6 de octubre de 1871 se aprobaba una ley (nº 483) en los siguientes términos: « El P. E. nombrará una comisión de dos personas idóneas que proyecten la ley de organización del Jurado y la de enjuiciamiento en las causas criminales ordinarias de la jurisdicción federal, debiendo someterlas a la consideración del Congreso en las primeras sesiones del próximo período legislativo. » El P. E. nombró a los Dres. Florentino González y Victorino de la Plaza que en 23 de abril de 1873 presentaron su proyecto, es decir, sus proyectos, porque se atuvieron a la letra del mandato conferido y dividieron en dos su labor, en la que resulta que el proyecto sobre Jurado consta de 47 artículos que no van más allá de la formación de listas de jurados; es en el de Procedimiento Criminal donde se trata del enjuiciamiento por este sistema, artículos 123 al 695. Los anteriores — interesantes por lo nove-dosos — tratan del « modo de prevenir y suprimir los delitos sin o con intervención de la autoridad pública »; los posteriores (696 al 744) de los juicios en que no entiende el Jurado, militares, raterías y delitos con pena máxima de cuatro meses de trabajo o servicio forzado, seis meses de prisión, multa de 1000 pesos y destierro o extrañamiento por más de seis meses.



Y además los juicios políticos ante el Senado a los que se refieren los últimos artículos del proyecto hasta el 777.

Los dos proyectos debieron haber integrado un Código, la separación quizá influyó en su fracaso.

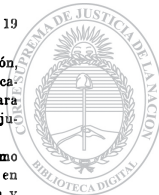
Ambos, por lo demás, responden plenamente el propósito que el Informe empieza por declarar de « dar al departamento judicial un carácter congruente con la naturaleza de la forma de gobierno que aspiramos a plantear; organizando los tribunales de justicia y estableciendo un modo de proceder para administrar ésta, que facilite el control de la opinión pública ilustrada sobre la conducta de los jueces y asegure a los ciudadanos la decisión imparcial, justa, pronto y barata de las cuestiones que se ventilan ante ellos. »

Ni por un momento pusieron en duda los dos redactores que esto sólo se podía realizar aplicando el claro precepto de la Constitución sobre el Jurado. Lo hicieron estudiando a fondo la materia y así les vemos tomar como antecedentes las leyes de los Estados Unidos, en vez de las del país de origen de la institución, porque, como se dice en el informe, tienen aquéllas a su favor « las recomendaciones de criminalistas tan distinguidos como Mittermaier, Oudot y otros y no haber dado lugar a abusos como los que hubo que lamentar en Inglaterra bajo los Estuardos. »

El sistema se aplica a los delitos de que corresponde conocer a los Jueces y tribunales federales e implica la existencia de un Jurado de acusación y de otro llamado de juicio. Se exceptúa, como hemos visto, los juicios políticos, los delitos militares y los de raterías o hurtos de poca importancia y en general todo delito que tiene penas menores.

Están obligados a « servir como miembros del Tribunal de Jurado » los argentinos mayores de 21 años y que no pascen de sesenta y con propiedad propia o de su mujer que valga más de 300 pesos fuertes si poseen la plenitud de los derechos civiles y el de sufragio y de 500 pesos si no la tienen, y también los que en razón de alguna industria, oficio o profesión, paguen algún impuesto nacional, provincial o municipal. Y también los extranjeros en estas mismas condiciones últimas. Art. 4º del Proyecto de Jurado.

En éste, además, se indican prolijamente cómo se forman las respectivas listas y las excusaciones (no poseer las condi-



ciones dichas al hacerse la lista, ser ministro de una religión, médico, abogado, procurador, notario, empleado en ciertas casas, profesor, militar, policía, etc.), lo mismo que el sorteo para entrambos Jurados, que convoca y cita un « comisario de jurados ».

En substancia no dice más la ley: el primer proyecto, como antes indicamos, el procedimiento del Jurado, se completa en el Proyecto del Código cuya segunda parte le está destinada y que trata sucesivamente: De la jurisdicción y los juicios; Competencia de éstos; Información preparatoria (sumario); Procedimiento del Juez de Sección después de terminada la información preparatoria y antes de que se reúna el Jurado de acusación; Composición del Jurado y período de sus sesiones; Formación y modo de proceder del Jurado de acusación; Acta de acusación; Procedimiento posterior; Juicio de la acción criminal; Procedimientos después del debate y antes de que se pronuncie la sentencia; Esta y su ejecución; Apelación ante la Suprema Corte.

Eran muchas las novedades de este proyecto de Código, empezando por el doble Jurado, poco conocido por los que sólo sabían del vigente en Francia que no admite los dos jurados. El de acusación, por lo demás, no procedía cuando el acusado, por confesión espontánea hecha en tribunal abierto o sesión pública del juzgado, se declarase culpable del delito de que se le hace cargo (art. 14 del proyecto de Jurado) con lo cual evidentemente es innecesario que haya Jurado de acusación, cuya única función es declararle o no culpable del hecho que se le imputa. También se innovaba en lo referente a la apelación, no conocida en otros países y de que en ciertos casos no conocía la Corte sino el Juzgado de sección de la provincia limítrofe.

Sea por esto o por el error técnico antes citado de no refundir en un solo Código los dos proyectos o por razones de inercia legislativa (no porque el Jurado tuviera entonces algún enemigo) el hecho es que éstos no pasaron; el Congreso declaró así implícitamente que no era llegado el caso de establecer un procedimiento que la Constitución había dejado en meramente posible. También es de creer que se retrocediera ante la concesión que se proyectaba en favor de los extranjeros admitién-



dolos como jurados. Sin embargo, las razones de la Comisión eran bien atendibles. « Es un principio evidente, dice el informe, que la participación en el ejercicio de la autoridad pública, de todos aquellos a quienes interesa más que esa autoridad se ejerza de manera que llene el fin de su institución — la buena administración de los negocios comunes y la protección eficaz de los derechos de los individuos — es sumamente ventajosa porque de este modo se logra que las personas pongan al servicio de la sociedad su interés o su capacidad individual y que por dar seguridad a sus propios derechos, la den igualmente a los de los demás. El extranjero domiciliado en el país que posee una propiedad inmueble o ejerce una industria o profesión tiene tanto interés en que los delitos sean castigados, para que haya seguridad para las personas y las propiedades, como puede tenerlo un individuo nacido en el territorio nacional... »

Fué luego parte principal en que la institución no se implantase el repentino auge de la escuela penal positivista que se mostró desde luego enemiga del Jurado. Su obra capital « Los nuevos horizontes del Derecho y el Procedimiento penal », de Enrique Ferri dice rotundamente (cap. IV) que los Jurados, como elegidos por la ciega suerte entre todas las clases del pueblo, no pueden representar de éste más que su cualidad fundamental, la ignorancia. No es del caso transcribir la muy conocida discusión que allí hace Ferri estudiando los orígenes del Jurado marcadamente políticos, « porque no solamente se reconoce que del pueblo emana la autoridad judicial, sino que hace que el pueblo mismo la manifieste directamente », ventaja de orden político que en determinadas condiciones étnicas y sociales se transforma en daño para la libertad y negando las ventajas de orden jurídico: al efecto recuerda a Sócrates y Foción, víctimas de una justicia popular soberana (†), para terminar afirmando que el Jurado está en absoluta contradicción con la norma universal de la vida pública y privada de que los cargos se den a las personas más capaces, aspecto de la ley inevitable de la división del trabajo y además con él se elevan a la categoría de principios fundamentales la incapacidad de las personas y la incongruencia de los actos; añádase la tendencia de los jurados a dejarse guiar por el sentimiento de mal entendida



compasión cuando no por el de venganza. Y así pulularon aquí desde entonces los detractores del Jurado en la Argentina.

Pero en la mayor parte de las demás naciones el sistema sigue funcionando y dando seguramente un porcentaje de injusticias inferior al viejo sistema. Es cierto que en España la dictadura de 1923-1929[†] la suprimió alegando la cobardía de algunos jurados que no reaccionaron ante la anarquía industrial de Cataluña, pero que fué un pretexto, bien lo demuestra que a la par se suprimió la libertad de prensa y se desterraba (Unamuno) o se encarcelaba (Jiménez de Asúa) a catedráticos ilustres. El Jurado es la participación del pueblo en la Justicia y los que no la admiten en la vida política, no pueden en aquélla concedérsela.

Por esto recientemente en su discurso de instalación en la presidencia de los Estados Unidos, Mr. Hoover, alarmado ante la cuestión social allí planteada por la aplicación de la «ley seca» ha hablado de todo, desde la mejor selección de los jurados al apoyo que reclama, de «los hombres y mujeres de buena voluntad que no podrán prestar un servicio nacional más grande que éste», pero su catilinaria no encierra ni la más remota alusión a quitar al pueblo su intervención en el régimen judicial. Oigase su severa palabra:

«Para restablecer el vigor y la eficacia de la imposición de la ley deberemos considerar con espíritu crítico toda la maquinaria de la justicia federal, la distribución de sus funciones, la simplificación de sus procedimientos, el establecimiento de nuevos tribunales especiales, la mejor selección de los jurados y la organización más eficaz de nuestros servicios de investigación y de persecución, a fin de que la justicia sea segura y rápida. Aunque la autoridad del Gobierno Federal se extiende sólo a una parte de nuestro vasto sistema nacional, en la justicia local de los estados los modelos que establece el Gobierno Federal tienen la más profunda influencia sobre todo el sistema. Tenemos la fortuna de contar con jueces y fiscales federales que son hábiles e íntegros. Pero el sistema que estos funcionarios están llamados a administrar no se adapta en muchos sentidos a las condiciones de los tiempos actuales. Sus intrincadas reglas de procedimiento constituyen un refugio tanto para los grandes como para los pequeños criminales. Existe en el extranjero la creencia de que, invocando los aspectos técnicos, apelando a subterfugios y demoras, los fines de la justicia son susceptibles de torcerse para los que pueden pagar las costas. La reforma, la reorganización y el refuerzo de todo nuestro sistema de distribución de justicia, tanto en el aspecto civil como en el criminal, han sido ahogados durante años por los estadistas, los jueces y las asociaciones del foro. La iniciación de los primeros pasos hacia ese fin no debería demorarse más. La justicia rígida y expedita es la primera salvaguardia de la libertad, la base de toda libertad ordenada y la fuerza vital del progreso. No puede ser que nuestra república se vea vencida por la indiferencia del ciudadano, por



la explotación de las demoras y complicaciones de las leyes o por las combinaciones de los criminales. La justicia no debe fracasar porque las organizaciones encargadas de su imposición no estén a la altura de sus funciones o estén organizadas en forma ineficaz. La necesidad más urgente de nuestra época es considerar estos males y darles remedio.»

Así se habla en las democracias. Se dice en qué estriba el poco rendimiento de las instituciones procesales y se pide a la opinión pública ayuda para mejorarlas.

El Dr. Máximo Castro, en sus « Conferencias sobre procedimientos penales », enumera con precisión las ventajas del Jurado y destruye las objeciones que contra él se han levantado (tomo I, pág. 79 y sig.).

Ventajas: Obra como freno sobre los jueces que así lo son con la cooperación de sus conciudadanos. Son espectadores de las cuestiones y más imparciales que los jueces de derecho por su composición popular y controlada por el medio ambiente en que se despliegan sus actividades. Da el máximo de publicidad a los juicios haciendo que el público se interese por ellos. Fomenta los caracteres enérgicos poniendo en juego la responsabilidad de cada jurado ante su conciencia y la de sus conciudadanos. Hace ver a todos que el ciudadano si con el sufragio participa de los poderes legislativo y ejecutivo, con el Jurado participa del judicial. Interesa al pueblo en la vida del derecho mostrándole como obra la ley. Da ocasión a que no se juzgue el delito sino al delincuente. Desarrolla el espíritu público.

Objeciones:

Que comete más errores que los jueces. Pero éstos fallan en secreto, por decirlo así, mientras que el Jurado está sometido a la crítica popular. Añadamos que tampoco se ha probado estadísticamente ese más alto porcentaje de injusticias o errores y que los jueces suelen dar a los diarios pocas sentencias y aun de algunas sólo se da noticia en dos líneas. Como además se publican en colección sólo las de segunda instancia, no todas, pero sí muchas injusticias son sólo conocidas del que las sufre, que se queda rumiando por qué las habrá cometido el Juez.

Que es más fácil la corrupción y el cohecho. Parece que lo contrario es lo cierto, empezando porque se sabe de antemano quién va a juzgar, cosa que en el Jurado sólo se sabe momentos antes de empezar el juicio.

Que se deja impresionar por los defensores. Lo mismo pasa con los otros jueces; sólo que en éstos influyen por la camara-



dería u otro interés ignoto y en el Jurado sólo por la elocuencia.

Que favorece la impunidad. Cuando no es demasiado riguroso. El Dr. Castro dice con razón: es evidente que doce convecinos del lugar donde el delincuente realizaba sus fechorías, supongamos La Pampa, han de cuidarse de él más que la Cámara Federal de La Plata que es el tribunal permanente que en nuestra organización tendrá que juzgarlo en última instancia.

Que los jurados son ignorantes. Así ha dicho Ferri, pero dejando aparte que hay jueces — y esto no es disculpable — que lo son, para el conocimiento de los hechos basta un término medio de inteligencia.

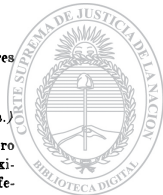
Que influye la pasión política. Pero el Jurado se compone de hombres de todos los partidos.

En resumen: la mayor parte de estas objeciones pueden hacerse a la justicia histórica. De lo que se trata no es de llegar a la perfección (tampoco ésta lo ha conseguido) sino como en todo lo humano, a lo relativamente útil, lo menos malo.

Quiere decir que no hay motivo para que se dilate el cumplimiento de una prescripción constitucional tan clara como la de establecer el Jurado en los Tribunales de la Nación (no tardarían en hacerlo las Provincias). La transición brusca que alarmaba a la Comisión de Códigos de 1888, podría suavizarse estableciendo la oralidad de los juicios que fallarían (sin otro recurso que el de nulidad) jueces colegiados de derecho. Pero esto diciéndose explícitamente que es en preparación del Jurado y exceptuándose los delitos correccionales, como se hacía en el proyecto de 1873.

Las tentativas de establecer éste para casos determinados, proyecto de 1886 aprobado por el Senado y olvidado en Diputados estableciendo el Jurado para los delitos políticos y de imprenta, el de varios jóvenes entonces, doctores Rodríguez Larreta, Herrera Vegas, Ibarguren, Carlos O. Bunge, limitándolo a calumnias e injurias, no prosperaron por lo pequeñas: en cambio la del Dr. Del Valle Iberlucea extendiéndolo a todos los delitos y en todo el territorio de la Nación, incluso las Provincias, no podía tener acogida por esta inconstitucionalidad.

El Jurado argentino deberá establecerse por una ley muy parecida al proyecto González-Plaza teniendo naturalmente en cuenta la moderna legislación comparada.



Es de desear que para proyectarlo se encuentren hombres tan bien informados y tan animosos como aquellos dos.

II. — *El actual Código de Procedimientos (Cód. Proc. Crim.)*

De los problemas de que hablamos antes, quedó el primero sin solución, tanto por lo que toca al cumplimiento de la exigencia judicial de implantación del Jurado, como por lo referente a la ampliación del diminuto procedimiento penal establecido para lo federal en la ley n° 50.

Al acometer el segundo procedimiento para los procesos de jurisdicción ordinaria (es decir, los de la capital federal, no sometidos a la jurisdicción excepcional de los Jueces Federales), apareció claramente que al establecer las nuevas normas procesales, para la jurisdicción común, a la manera que para sus respectivos procesos también no federales hacen las provincias, quedaba de hecho resuelto el primer problema en la parte que exigía normas procesales para la justicia federal. Bastaba con adoptar las mismas que se creían buenas para la justicia ordinaria o local.

Así se elaboró el actual Código de Procedimientos en lo criminal a observarse en los asuntos criminales pertenecientes al fuero federal y a la par en los Tribunales ordinarios de la Capital y de los territorios nacionales aunque hoy los jueces de éstos son considerados con jurisdicción exclusivamente federal.

Como antecedentes del Código, pueden citarse la creación de un Juzgado Correccional en Buenos Aires (1857); la autorización a la policía para allanar domicilios, y para recibir declaraciones de testigos (1859) sombra negra desde entonces proyectada sobre el procedimiento y que obscurece el Código actual; la división de la Cámara de Apelaciones o tribunal de alzada, en tres salas y desde luego las leyes de 1863.

Como antecedente inmediato tenemos el decreto de 6 de marzo de 1882, en el que aparece rediviva la comisión del otro proyecto, a pesar de que los Dres. González y Plaza dieron en 1873 por terminada su misión. El decreto dice que «la Comisión ha manifestado la imposibilidad en que se encontró para dar cumplimiento a lo que le fué encomendado relativo a los procedimientos, por lo que atendiendo a que los Tribunales de la Ca-



pital actualmente están haciendo uso de leyes de procedimiento del orden provincial y que el gobierno debe procurar que desaparezca esta irregularidad justificada sólo por la falta de una ley Nacional » se encarga de la redacción del Proyecto de Código de Procedimientos en materia penal a los doctores Manuel Obarrio y Emilio R. Coni debiendo conformar sus disposiciones con las del proyecto de Código penal que se halla sometido a la consideración del Congreso. Algunos días después, el 28 del mismo mes de marzo, el Ministerio de Justicia hacía saber a los Dres. Coni y Obarrio « que el P. E. entiende que la ley sobre Justicia Nacional debe ser comprendida en el estudio que hagan y refundida convenientemente en el Proyecto de Código que redacten ». Se habían dado tres meses de plazo a los redactores y habiendo renunciado el Dr. Coni se encargó del trabajo el Dr. Obarrio que tres meses después, 30 de junio, lo presentaba.

El P. E. al acusar recibo del proyecto Obarrio ordenaba su publicación y la del informe. Esto fué en 16 de julio de 1882. Pero meses después el mismo Presidente (Roca) y ministro (Wilde) que firmaron el decreto anterior, dictaban otro en que « haciendo justicia a la indiscutible competencia del Dr. Obarrio, estimaban que el proyecto debía ser estudiado por personas que a su ilustración reconocida unan la práctica en el ejercicio de la magistratura », a cuyo efecto nombraban a un ex ministro de la Cámara Civil, Dr. Filemón Posse, y a otro de la Criminal (entonces y Comercial), Dr. Juan E. Barra. Los cuales en 1884 (26 de julio) presentaron su trabajo con un informe en que exponían lo que en el primitivo habían reformado: ampliación de las facultades de la policía; defensa del acusado « como principio »; ejercicio conjunto de las acciones civil y penal; inclusión de los delitos de imprenta por jurados; extensión del Código a los territorios; supresión del Juez Municipal y de Policía; sobre jueces de sentencia, se referían « a un proyecto de juicio por jurados que presentaremos a V. E. dentro de breves días » (?); recusación de fiscales; libertad bajo fianza para el reo absuelto; libertad de la prueba que « la Comisión, dice, no acepta con tanta liberalidad, ni con sus franquicias para la libertad de la defensa rayana en lo exagerado »; supresión de los artículos sobre las atribuciones

de los conductores de trenes; dar a los dictámenes periciales el valor que tienen en el procedimiento civil; ampliar el recurso de revisión.

Pasó el proyecto a Diputados en donde todavía lo empeoró la Comisión de Códigos que muy ufana hizo constar que a sus sesiones habían asistido el Ministro de Justicia y dos señores camaristas.

El proyecto así revisado es la ley actual. Ni el Senado ni la Cámara joven opinaron: se limitaron a votar. Era en 1888: el «unicato», como se ve, no regía sólo en lo político.

Promulgado el 27 de octubre del mismo año, empezó a regir el 1º de enero de 1889.

Desde entonces se viene hablando de reformarlo...



PRIMERA PARTE

TRIBUNALES

CAPITULO I

JUSTICIA FEDERAL



Textos legales.

I. Constitución Nacional. — II. Ley n° 27. Organización de los tribunales federales. — III. N° 43. Personal. — IV. N° 48. Jurisdicción y competencia. — V. N° 205. Secretarios de la Corte. — VI. N° 935. Suplencia de Jueces. — VII. N° 1190. Secretarios de Juzgado. — VIII. N° 1893. Organización de los tribunales de la Capital. — IX. N° 3976. Tercer Juzgado en la Capital. — X. N° 4055. Reformas. — XI. N° 4074. Nuevos Juzgados en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. — XII. N° 4162. Integración de magistrados. — XIII. N° 5011. Nuevo Juzgado en Entre Ríos. — XIV. N° 5133. Autenticación de actos provinciales. — XV. N° 7099. Cámara en Rosario. — XVI. N° 7055. Reorganización. — XVII. N° 8843. Nuevo Juzgado en Córdoba. — XVIII. N° 11192. Nuevo Juzgado en la provincia de Buenos Aires. — XIX. Cámara en Bahía Blanca.

Penalidades: en las IV, X y XV.

I. — Constitución Nacional

Preámbulo.

Nos, los Representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las Provincias que la componen, en cumplimiento de Pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz in-

terior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino; invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina.



PRIMERA PARTE

CAPITULO UNICO

DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTIAS

Artículo 1. La Nación Argentina adopta para su Gobierno la forma Representativa Republicana Federal, según lo establece la presente Constitución.

2. El Gobierno Federal sostiene el Culto Católico Apostólico Romano.

3. Las autoridades que ejercen el Gobierno Federal, residen en la ciudad que se declare Capital de la República por una ley especial del Congreso, previa cesión hecha por una o más Legislaturas Provinciales, del territorio que haya de federalizarse.

4. El Gobierno Federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación (1), *hasta mil ochocientos sesenta y seis, con arreglo a lo estatuido en el inciso 1° del artículo 67*; del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional; de la renta de Correos; de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decreta el mismo Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional.

5. Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el Gobierno Federal garante a cada Provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.

6. El Gobierno Federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia.

7. Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes gene-

(1) Lo impreso en bastardilla fué suprimido por la Convención Nacional, reunida en la ciudad de Santa Fe el 12 de septiembre de 1866.



rales determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y procedimientos, y los efectos legales que producirán.

8. Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás. La extradición de los criminales es de obligación recíproca entre todas las provincias.

9. En todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales registrarán las tarifas que sancione el Congreso.

10. En el interior de la República es libre de derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas clases, despachadas en las aduanas exteriores.

11. Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie, que pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, buques o bestias en que se transporten; y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su denominación, por el hecho de transitar el territorio.

12. Los buques destinados de una provincia a otra no serán obligados a entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito; sin que en ningún caso puedan concederse preferencias a un puerto respecto de otro, por medio de leyes o reglamentos de comercio.

13. Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación; pero no podrá crearse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la Legislatura de las provincias interesadas y del Congreso.

14. Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.

15. En la Nación Argentina no hay esclavos: los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución; y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen de que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan, quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República.

16. La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales, ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

17. La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación



puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que lo acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.

18. Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al Juez que la autorice.

19. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los Magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

20. Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República.

21. Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la Patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo Nacional. Los ciudadanos por naturalización son libres de prestar o no este servicio por el término de diez años contados desde el día en que obtengan su carta de ciudadanía.

22. El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza



armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste comete delito de sedición.

23. En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el Presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.

24. El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados.

25. El Gobierno Federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes.

26. La navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la Autoridad Nacional.

27. El Gobierno Federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución.

28. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.

29. El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni las Legislaturas Provinciales a los Gobernadores de provincia, FACULTADES EXTRAORDINARIAS, ni la SUMA DEL PODER PÚBLICO, ni otorgarles SUMISIONES o SUPREMACÍAS, por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria.

30. La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto.

31. Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contegan las leyes o constituciones pro-



vinales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859.

32. El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.

33. Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

34. Los Jueces de las Cortes Federales no podrán serlo al mismo tiempo de los tribunales de provincia, ni el servicio Federal, tanto en lo civil, como en lo militar, da residencia en la provincia en que se ejerza, y que no sea la del domicilio habitual del empleado, entendiéndose esto para los efectos de optar a empleos en la provincia en que accidentalmente se encuentre.

35. Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber: *Provincias Unidas del Río de la Plata*; *República Argentina*; *Confederación Argentina*, serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del Gobierno y territorio de las Provincias, empleándose las palabras «Nación Argentina» en la formación y sanción de las leyes.

SEGUNDA PARTE

AUTORIDADES DE LA NACIÓN

TITULO I

GOBIERNO FEDERAL

SECCION PRIMERA

Del Poder Legislativo

36. Un Congreso compuesto de dos Cámaras, una de Diputados de la Nación y otro de Senadores de las Provincias y de la Capital, será investido del Poder Legislativo de la Nación.

CAPITULO I

DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

37. (1) La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la Capital, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo es-

(1) Este artículo fué reformado por la Convención Nacional reunida en la Capital de la República el 15 de marzo de 1898, y quedó establecido en la forma que con el mismo número se expresa a continuación.



tado, y a simple pluralidad de sufragios, en razón de uno por cada veinte mil habitantes, o de una fracción que no baje del número de diez mil.

Art. 37. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la Capital, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo estado, y a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje de diez y seis mil quinientos. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado.

38. Los Diputados para la primera Legislatura se nombrarán en la proporción siguiente: por la provincia de Buenos Aires, doce; por la de Córdoba, seis; por la de Catamarca, tres; por la de Corrientes, cuatro; por la de Entre Ríos, dos; por la de Jujuy, dos; por la de Mendoza, tres; por la de La Rioja, dos; por la de Salta, tres; por la de Santiago, cuatro; por la de San Juan, dos; por la de Santa Fe, dos; por la de San Luis, dos; y por la de Tucumán, tres.

39. Para la segunda Legislatura deberá realizarse el censo general, y arreglarse a él el número de Diputados; pero este censo sólo podrá renovarse cada diez años (1).

40. Para ser Diputado se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella.

41. Por esta vez las Legislaturas de las provincias reglarán los medios de hacer efectiva la elección directa de los Diputados de la Nación: para lo sucesivo el Congreso expedirá una ley general.

42. Los Diputados durarán en su representación por cuatro años, y son reelegibles, pero la Sala se renovará por mitad cada bienio; y cuyo efecto los nombrados para la primera Legislatura, luego que se reúnan sortearán los que deban salir en el primer período.

43. En caso de vacante el Gobierno de provincia o de la Capital hace proceder a elección legal de un nuevo miembro.

44. A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas.

45. Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al Presidente, Vicepresidente, sus Ministros y a los miembros de la Corte Su-

(1) Por el art. 3 de la ley n° 10.834 de 14 octubre de 1919, ese artículo de la Constitución se aplicará en la siguiente forma:

Art. 3°. A partir de la renovación bienal de 1920 el número de diputados será de uno por cada 49.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500.

En consecuencia, la Capital Federal elegirá 32 diputados, Buenos Aires 42, Santa Fe 19, Entre Ríos 9, Corrientes 7, Córdoba 15, San Luis 3, Santiago del Estero 6, Tucumán 7, Mendoza 6, San Juan 9, La Rioja 2, Catamarca 2, Jujuy 2, Salta 3.

Total 158 diputados. »



prema y demás Tribunales inferiores de la Nación, en las causas de responsabilidad que se intente contra ellos, por el mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones: o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.

CAPITULO II

DEL SENADO

46. El Senado se compondrá de dos Senadores de cada provincia elegidos por sus Legislaturas a pluralidad de sufragios; y dos de la Capital, elegidos en la forma prescripta para la elección del Presidente de la Nación. Cada Senador tendrá un voto.

47. Son requisitos para ser elegido Senador: tener la edad de treinta años, haber sido seis años ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella.

48. Los Senadores duran nueve años en el ejercicio de su mandato, y son reelegidos indefinidamente; pero el Senado se renovará por terceras partes cada tres años, decidiéndose por la suerte, luego que todos se reunan, quiénes deben salir en el 1º y 2º trienio.

49. El Vicepresidente de la Nación será Presidente del Senado; pero no tendrá voto sino en el caso que haya empate en la votación.

50. El Senado nombrará un Presidente provisional que lo presida en caso de ausencia del Vicepresidente, o cuando éste ejerza las funciones de Presidente de la Nación.

51. Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el Presidente de la Nación, el Senado será presidido por el Presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes.

52. Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo de la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo, conforme a las leyes, ante los Tribunales ordinarios.

53. Corresponde también al Senado autorizar al Presidente de la Nación para que declare en estado de sitio uno o varios puntos de la República, en caso de ataque exterior.

54. Cuando vacase alguna plaza de senador por muerte, renuncia u otra causa, el Gobierno a que corresponde la vacante hará proceder inmediatamente a la elección de un nuevo miembro.



CAPITULO III

DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CAMARAS

55. Ambas Cámaras se reunirán en sesiones ordinarias todos los años desde el 1º de mayo hasta el 30 de setiembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el Presidente de la Nación, o prorrogadas sus sesiones.

56. Cada Cámara es Juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros; pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones, en los términos y bajo las penas que cada Cámara establecerá.

57. Ambas Cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Ninguna de ellas, mientras se hallan reunidas, podrá suspender sus sesiones más de tres días, sin el consentimiento de la otra.

58. Cada Cámara hará su reglamento, y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renunciaciones que voluntariamente hicieren de sus cargos.

59. Los Senadores y Diputados prestarán, en el acto de su incorporación, juramento de desempeñar debidamente el cargo, y de obrar en todo en conformidad a lo que prescribe esta Constitución.

60. Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de Legislador.

61. Ningún Senador o Diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado: excepto el caso de ser sorprendido *in fraganti* en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho.

62. Cuando se forme querrela por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier Senador o Diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del Juez competente para su juzgamiento.

63. Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su Sala a los Ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes.

64. Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cámara respectiva, excepto los empleos de escala.



65. Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los Gobernadores de Provincia por la de su mando.

66. Los servicios de los Senadores y Diputados son remunerados por el Tesoro de la Nación, con una dotación que señalará la ley.

CAPITULO IV

ATRIBUCIONES DEL CONGRESO

67. Corresponde al Congreso:

1° Legislar sobre las aduanas exteriores y establecer los derechos de importación, los cuales, así como las evaluaciones sobre que recaigan, serán uniformes en toda la Nación; bien entendido, que ésta, así como las demás contribuciones nacionales, podrán ser satisfechas en la moneda que fuere corriente en las provincias respectivas, por su justo equivalente. Establecer igualmente los derechos de exportación ⁽⁴⁾ hasta 1866, en cuya fecha cesarán como impuesto nacional, no pudiendo serlo provincial. 2°. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. 3°. Contratar empréstitos de dinero sobre el crédito de la Nación. 4°. Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional. 5°. Establecer y reglamentar un Banco Nacional en la Capital y sus sucursales en las provincias, con facultad de emitir billetes. 6°. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación. 7°. Fijar anualmente el presupuesto de gastos de administración de la Nación, y aprobar o desechar la cuenta de inversión. 8°. Acordar subsidios del Tesoro Nacional a las provincias cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios. 9°. Reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos que considere convenientes, y crear y suprimir aduanas, sin que puedan suprimirse las aduanas exteriores que existían en cada provincia al tiempo de su incorporación. 10. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de pesas y medidas para toda la Nación. 11. Dictar los Códigos civil, comercial, penal y de minería, sin que tales Códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los Tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y ciudadanía natural; así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados. 12. Reglar el comercio marítimo y terrestre con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí. 13. Arreglar y establecer las postas y correos gene-

(4) Lo impreso en bastardilla fué suprimido por la Convención Nacional, reunida en la ciudad de Santa Fe, el 12 de septiembre de 1866.



rales de la Nación. 14. Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, fijar los de las provincias, crear otras nuevas, y determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias. 15. Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo. 16. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros, y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo. 17. Establecer tribunales inferiores a la Suprema Corte de Justicia; crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores y conceder amnistías generales. 18. Admitir o desechar los motivos de dimisión del Presidente o Vicepresidente de la República; y declarar el caso de proceder a nueva elección; hacer el escrutinio y rectificación de ella. 19. Aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones, y los concordatos con la Silla Apostólica; y arreglar el ejercicio del Patronato en toda la Nación. 20. Admitir en el territorio de la Nación otras órdenes religiosas a más de las existentes. 21. Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz. 22. Conceder patentes de corso y de represalias, y establecer reglamentos para las presas. 23. Fijar la fuerza de línea de tierra y de mar en tiempo de paz y guerra; y formar reglamentos y ordenanzas para el gobierno de dichos ejércitos. 24. Autorizar la reunión de las milicias de todas las provincias o parte de ellas, cuando lo exija la ejecución de las leyes de la Nación y sea necesario contener las insurrecciones o repeler las invasiones. Disponer la organización, armamento y disciplina de dichas milicias, y la administración y gobierno de la parte de ellas que estuviese empleada en servicio de la Nación, dejando a las provincias el nombramiento de sus correspondientes jefes y oficiales, y el cuidado de establecer en su respectiva milicia la disciplina prescrita por el Congreso. 25. Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él. 26. Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso de conmoción interior, y aprobar o suspender el estado de sitio declarado, durante su receso, por el Poder Ejecutivo. 27. Ejercer una legislación exclusiva en todo el territorio de la Capital de la Nación, y sobre los demás lugares adquiridos por compras o cesión, en cualquiera de las provincias, para establecer fortalezas, arsenales, almacenes u otros establecimientos de utilidad nacional. 28. Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos

los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina.

CAPITULO V

DE LA FORMACION Y SANCION DE LAS LEYES

68. Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo; excepto las relativas a los objetos de que trata el artículo 44.

69. Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen pasa para su discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen; y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley.

70. Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles.

71. Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras, podrá repetirse en las sesiones aquel año. Pero si sólo fuese adicionado o corregido por la Cámara revisora, volverá a la de su origen; y si en ésta se aprobasen las adiciones o correcciones por mayoría absoluta, pasará al Poder Ejecutivo de la Nación. Si las adiciones o correcciones fuesen desechadas, volverá por segunda vez el proyecto a la Cámara revisora, y si aquí fuesen nuevamente sancionadas por una mayoría de las dos terceras partes de sus miembros, pasará el proyecto a la otra Cámara y no se entenderá que ésta reprueba dichas adiciones o correcciones, si no concurre para ello el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

72. Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen; ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto podrá repetirse en las sesiones de aquel año.

73. En la sanción de las leyes se usará de esta fórmula: El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., decretan o sancionan con fuerza de ley.





SECCION SEGUNDA

Del Poder Ejecutivo

CAPITULO I

DE SU NATURALEZA Y DURACION

74. El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de «Presidente de la Nación Argentina».

75. En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución del Presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Vicepresidente de la Nación. En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del Presidente y Vicepresidente de la Nación, el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la Presidencia, hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo Presidente sea electo.

76. Para ser elegido Presidente o Vicepresidente de la Nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero; pertenecer a la comunión Católica Apostólica Romana, y las demás cualidades exigidas para ser electo Senador.

77. El Presidente y Vicepresidente duran en sus empleos el término de seis años, y no pueden ser reelegidos sino con intervalo de un período.

78. El Presidente de la Nación cesa en el poder el día mismo en que expira su período de seis años; sin que evento alguno que lo haya interrumpido pueda ser motivo de que se le complete más tarde.

79. El Presidente y Vicepresidente disfrutaban de un sueldo pagado por el tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado en el período de sus nombramientos. Durante el mismo período no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de provincia alguna.

80. Al tomar posesión de su cargo el Presidente y Vicepresidente prestarán juramento en manos del Presidente del Senado (la primera vez del Presidente del Congreso Constituyente), estando reunido el Congreso, en los términos siguientes: «Yo, N. N., juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente (o Vicepresidente) de la Nación, y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciese Dios y la Nación me lo demanden.»



CAPITULO II

DE LA FORMA Y TIEMPO DE LA ELECCION DEL PRESIDENTE
Y VICEPRESIDENTE DE LA NACION

81. La elección del Presidente y Vicepresidente de la Nación se hará del modo siguiente: La Capital y cada una de las provincias nombrarán por votación directa una junta de electores igual al duplo del total de Diputados y Senadores que envían al Congreso, con las mismas calidades y bajo las mismas formas proscriptas para la elección de Diputados.

No pueden ser electores los Diputados, los Senadores, ni los empleados a sueldo del Gobierno Federal.

Reunidos los electores en la Capital de la Nación y en la de sus provincias respectivas, cuatro meses antes que concluya el término del Presidente cesante, procederán a elegir Presidente y Vicepresidente de la Nación por cédulas firmadas expresando en una la persona por quien votan para Presidente y en otra distinta la que eligen para Vicepresidente.

Se harán dos listas de todos los individuos electos para Presidente, y otras dos de los nombrados para Vicepresidente con el número de votos que cada uno de ellos hubiese obtenido. Estas listas serán firmadas por los electores y se remitirán cerradas y selladas dos de ellas (una de cada clase) al Presidente de la Legislatura provincial, y en la Capital al Presidente de la Municipalidad, en cuyos registros permanecerán depositadas y cerradas; y las otras dos al Presidente del Senado (la primera vez al Presidente del Congreso Constituyente).

82. El Presidente del Senado (la primera vez el del Congreso Constituyente), reunidas todas las listas, las abrirá a presencia de ambas Cámaras. Asociados a los Secretarios cuatro miembros del Congreso sacados a la suerte, procederán inmediatamente a hacer el escrutinio y a anunciar el número de sufragios que resulte en favor de cada candidato para la Presidencia y Vicepresidencia de la Nación. Los que reunan en ambos casos la mayoría absoluta de todos los votos, serán proclamados inmediatamente Presidente y Vicepresidente.

83. En el caso de que por dividirse la votación no hubiera mayoría absoluta, elegirá el Congreso entre las dos personas que hubiesen obtenido mayor número de sufragios. Si la primera mayoría que resultare hubiese cabido a más de dos personas, elegirá el Congreso entre todas éstas. Si la primera mayoría hubiese cabido a una sola persona, y la segunda a dos o más, elegirá el Congreso entre todas las personas que hayan obtenido la primera y segunda mayoría.

84. Esta elección se hará a pluralidad absoluta de sufragios y por votación nominal. Si verificada la primera votación no resultare mayoría absoluta, se hará segunda vez, contrayéndose la votación a la



dos personas que en la primera hubiesen obtenido mayor número de sufragios. En caso de empate se repetirá la votación, y si resultase nuevo empate, decidirá el Presidente del Senado (la primera vez el del Congreso Constituyente). No podrá hacerse el escrutinio, ni la rectificación de estas elecciones, sin que estén presentes las tres cuartas partes del total de los miembros del Congreso.

85. La elección del Presidente y Vicepresidente de la Nación debe quedar concluida en una sola sesión del Congreso, publicándose el resultado de ésta y las actas electorales por la prensa.

CAPÍTULO III

ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO

88. El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:

1° Es el jefe supremo de la Nación, y tiene a su cargo la administración general del país. 2° Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. 3° Es el jefe inmediato y local de la Capital de la Nación. 4° Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las sanciona y promulga. 5° Nombra los magistrados de la Corte Suprema y de los demás tribunales federales inferiores, con acuerdo del Senado. 6° Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del Tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados. 7° Concede jubilaciones, retiros, licencias y goce de montepíos conforme a las leyes de la Nación. 8° Ejerce los derechos del Patronato nacional en la presentación de obispos para las iglesias catedrales, a propuesta en terna del Senado. 9° Concede el paso o retiene los decretos de los Concilios, las Bulas, Breves y Rescriptos del Sumo Pontífice de Roma con acuerdo de la Suprema Corte; requiriéndose una ley cuando contienen disposiciones generales y permanentes. 10. Nombra y remueve a los Ministros Plenipotenciarios y Encargados de Negocios con acuerdo del Senado; y por sí sólo nombra y remueve los Ministros del despacho, los Oficiales de sus Secretarías, los Agentes consulares y demás empleados de la Administración, cuyo nombramiento no está reglado de otra manera por esta Constitución. 11. Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas Cámaras en la Sala del Senado, dando cuenta en esta ocasión al Congreso del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes. 12. Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, o lo convoca a sesiones extraordinarias, cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera. 13. Hace recaudar las rentas de la Nación, y decreta su inversión con arreglo a la ley o presupuestos de gastos nacionales. 14. Concluye y firma tratados de paz, de comercio, de navegación, de



alianza, de límites y de neutralidad, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las potencias extranjeras, recibe sus Ministros y admite sus Cónsules. 15. Es comandante en jefe de todas las fuerzas de mar y de tierra de la Nación. 16. Provee los empleos militares de la Nación: con acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores del Ejército y Armada; y por sí sólo en el campo de batalla. 17. Dispone de las fuerzas militares marítimas y terrestres, y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación. 18. Declara la guerra y concede patentes de corso y cartas de represalias con autorización y aprobación del Congreso. 19. Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso de ataque exterior y por un término limitado, con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior, sólo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde a este Cuerpo. El Presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el artículo 23. 20. Puede pedir a los jefes de todos los ramos y Departamentos de la Administración, y por su conducto a los demás empleados, los informes que crea convenientes, y ellos son obligados a darlos. 21. No puede ausentarse del territorio de la Capital, sino con permiso del Congreso. En el receso de éste, sólo podrá hacerlo sin licencia por graves objetos de servicio público. 22. El Presidente tendrá facultad para llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que espirarán al fin de la próxima Legislatura.

CAPITULO IV

DE LOS MINISTROS DEL PODER EJECUTIVO

87. Cinco Ministros Secretarios, a saber: del Interior, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Justicia, Culto e Instrucción Pública y de Guerra y Marina, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán y legalizarán los actos del Presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. Una ley deslindará los ramos del respectivo despacho de los Ministros (1).

88. Cada Ministro es responsable de los actos que legaliza; y solidariamente de los que acuerda con sus colegas.

89. Los Ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar resoluciones, a excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos Departamentos.

(1) Este artículo fué reformado por la Convención Nacional reunida en la Capital de la República el 15 de marzo de 1898, y quedó establecido en la forma siguiente:

Art. 87. Ocho Ministros Secretarios tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación y refrendarán y legalizarán los actos del Presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. Una ley especial deslindará los ramos del respectivo despacho de los Ministros.



90. Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los Ministros del despacho presentarle una memoria detallada del estado de la Nación, en lo relativo a los negocios de sus respectivos Departamentos.

91. No pueden ser Senadores ni Diputados, sin hacer dimisión de sus empleos de Ministros.

92. Pueden los Ministros concurrir a las sesiones del Congreso y tomar parte en sus debates, pero no votar.

93. Gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, que no podrá ser aumentado ni disminuido en favor o perjuicio de los que se hallen en ejercicio.

SECCION TERCERA

Del Poder Judicial

CAPITULO I

DE SU NATURALEZA Y DURACION

94. El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por los demás Tribunales inferiores que el Congreso estableciese en el territorio de la Nación.

95. En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.

96. Los Jueces de la Corte Suprema y de los Tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuída en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones.

97. Ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, sin ser Abogado de la Nación con ocho años de ejercicio y tener las calidades requeridas para ser Senador.

98. En la primera instalación de la Corte Suprema, los individuos nombrados prestarán juramento en manos del Presidente de la Nación, de desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución. En lo sucesivo lo prestarán ante el Presidente de la misma Corte.

99. La Corte Suprema dictará su reglamento interior y económico, y nombrará todos sus empleados subalternos.

CAPITULO II

ATRIBUCIONES DEL PODER JUDICIAL

100. Corresponde a la Corte Suprema y a los Tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación,



con la reserva hecha en el inciso 11 del artículo 67, y por los Tratados con las naciones extranjeras; de las causas concernientes a Embajadores, Ministros públicos y Cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que la Nación sea parte; de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero.

101. En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a Embajadores, Ministros y Cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente.

102. Todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados, se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiese cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el Derecho de Gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio.

103. La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándole ayuda y socorro. El Congreso fijará por una ley especial la pena de este delito, pero ella no pasará de la persona del delincuente, ni la infamia del reo se transmitirá a sus parientes de cualquier grado.

TITULO SEGUNDO

104. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.

105. Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus Gobernadores, sus Legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno Federal.

106. Cada provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º.

107. Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal; y promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines, y con sus recursos propios.

108. Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No



pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre comercio, o navegación interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales, ni acuñar moneda; ni establecer Bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal; ni dictar los Códigos civil, comercial, penal y de minería, después que el Congreso los haya sancionado; ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o documentos del Estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación, dando luego cuenta al Gobierno Federal; ni nombrar o recibir agentes extranjeros; ni admitir nuevas órdenes religiosas.

109. Ninguna provincia puede declarar ni hacer la guerra a otra provincia. Sus quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y dirimidas por ella. Sus hostilidades de hecho son actos de guerra civil calificados de sedición o asonada, que el Gobierno Federal debe sofocar y reprimir conforme a la ley.

110. Los Gobernadores de provincia son agentes naturales del Gobierno Federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación.

REFORMAS

DE LA CONVENCION NACIONAL DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 1866

Primero.—Suprimase del artículo 4° de la Constitución Nacional la parte que sigue: « hasta 1866, con arreglo a lo estatuido en el inciso 1° del artículo 67 », debiendo quedar dicho artículo 4° en los términos siguientes: « El Gobierno Federal provee a los gastos de la Nación con « los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de « importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional; de la venta de correos; de las demás contribuciones « que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso « General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decreta el « mismo Congreso para urgencia de la Nación o para empresas de utilidad nacional. »

Segundo.—Suprimase igualmente la parte final del inciso 1° del artículo 67, que dice: « hasta 1866, en cuya cesarán como impuesto nacional, « no pudiendo serlo provincial » En consecuencia, quedará dicho inciso 1° como sigue: « Legislar sobre las aduanas exteriores y establecer los « derechos de importación, los cuales, así como las evaluaciones que recaigan, serán uniformes en toda la Nación, bien entendido que ésta, « así como las demás contribuciones nacionales, podrán ser satisfechas « en la moneda que fuese corriente en las provincias respectivas, por su « justo equivalente. Establecer igualmente los derechos de exportación. »

Tercero.—Comuníquese al Gobierno Federal de la República, para que se cumpla en todo el territorio de la Nación, y publíquese.



Insertamos íntegra la ley fundamental de la Nación, no sólo porque debe ser la primera en toda recopilación, sino porque hay que citarla con frecuencia en la presente obra.

II. — Organización de los Tribunales Federales

CAPITULO I

NATURALEZA Y FUNCIONES GENERALES DEL PODER JUDICIAL NACIONAL

Nº 27 Art. 1. La justicia nacional procederá siempre apli-
16 Octubre cando la Constitución y las Leyes nacionales a la deci-
1862 sión de las causas en que se versen intereses, actos o
 derechos de Ministros agentes públicos, de simples in-
 dividuals, de Provincia o de la Nación.

Art. 2. Nunca procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte.

Art. 3. Uno de sus objetos es sostener la observancia de la Constitución nacional, prescindiendo, al decidir las causas, de toda disposición de cualquiera de los otros poderes nacionales, que esté en oposición con ella.

Art. 4. Conoce y decide en todos los asuntos regidos por la constitución y Leyes nacionales, y en todas las causas expresadas en los arts. 100 y 101 de la Constitución, pero cuando fuere llamada, de conformidad con el art. 100, a juzgar entre vecinos de diferentes provincias, lo hará con arreglo a las respectivas leyes provinciales.

Art. 5. No interviene en ninguno de los casos en que, compitiendo ese conocimiento y decisión a la jurisdicción de Provincia, no se halle interesada la Constitución ni ley alguna Nacional.

CAPITULO II

DE LA SUPREMA CORTE

Art. 6. La Justicia Nacional se ejercerá por medio de una Corte Suprema de Justicia, compuesta de cinco Ministros y un Procurador General.

Art. 7. La Corte Suprema conoce: 1º Originaria y exclusivamente, de las causas concernientes a Embajadores, Ministros, Cónsules y Vicecónsules extranjeros y en las que alguna provincia fuese parte; 2º En grado de apelación o nulidad de las causas que con arreglo al artículo 22, corresponden a los Juzgados de Sección, y de los que le



vayan de los Tribunales Superiores de Provincia, con arreglo al artículo 23; 3º En grado de revisión de las causas que quedan expresadas en el inciso 1º de este artículo, según las reglas que establezca una ley especial, que la misma Corte propondrá al Congreso, por conducto del Poder Ejecutivo.

Art. 8. En caso de discordia o bien de impedimento o de recusación o excusación justificadas, de uno o más miembros de la Corte Suprema, será integrada por abogados particulares, que ella nombrará, y cuyo honorario será de cuenta del tesoro público.

Art. 9. La Corte no podrá expedir sentencia ni auto alguno que no sea de simple sustanciación, sin la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros.

Art. 10. De los fallos de la Corte Suprema no hay recurso alguno, a excepción del de revisión, expresado en el inciso 3º del artículo 7.

Art. 11. La Corte nombrará y podrá remover sus empleados subalternos. Además de su reglamento interno, dictará otro uniforme para todos los Juzgados de Sección. Avisará al P. E. el número y propondrá las dotaciones de los empleados subalternos que resulte ser necesarios para el ejercicio de todo el Poder Judicial a fin de que aquél solicite del Congreso la ley de su creación y sueldos.

Art. 12. Cada miembro de la Corte Suprema gozará del sueldo mensual de quinientos pesos.

CAPITULO III

DE LOS JUZGADOS NACIONALES

Art. 13. La Justicia Nacional, se ejercerá igualmente por medio de Juzgados inferiores de Sección.

Art. 14. Cada Provincia formará uno o más Juzgados Seccionales, según fuere necesario a juicio del Poder Ejecutivo.

Art. 15. Los Juzgados de Sección serán unipersonales, y cuando en alguna causa fuese necesaria la intervención de un Fiscal, podrán nombrar para este cargo a un abogado particular, cuyo honorario será de cuenta del Tesoro Nacional.

Art. 16. En caso de impedimento, recusación o excusación, el Juez lo avisará directamente al P. E., el cual nombrará un suplente para aquella causa o causas; siendo el honorario también a cargo del Tesoro Nacional.

Art. 17. Para ser Juez de Sección, se necesita tener veinticinco años de edad, y ser abogado argentino, con tres años al menos de ejercicio. Antes de entrar en funciones, jurará ante la Autoridad, que el P. E. delegue al efecto, el bueno y el fiel desempeño de su cargo.

Art. 18. Los Jueces Seccionales propondrán a la Corte Suprema, las personas que, con arreglo al reglamento interno de sus Juzgados, ha-



yan de desempeñar las funciones subalternas de ellos, y podrán removerlos por sí solos.

Art. 19. Cada Juez de Sección, gozará del sueldo mensual de doscientos cincuenta pesos.

Art. 20. Los Juzgados de Sección conocen en primera instancia, de todas las causas que se expresan en el artículo 100 de la Constitución, sin incluir en ellas las exceptuadas en el artículo 101 de la misma Constitución, de las contenciosas administrativas y demás que interesen al Fisco Nacional; mas en las de contrabando, lo harán, por ahora, tanto en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, cuanto en el resto de la República, ajustándose a las respectivas leyes y disposiciones dictadas y vigentes en ellas.

Art. 21. Pueden conocer en grado de apelación de los fallos y resoluciones de los Juzgados inferiores de Provincia, en los casos regidos por la Constitución y Leyes Nacionales, siempre que el agraviado no prefiera ocurrir al Juzgado o Tribunal Superior de la Provincia.

Art. 22. En todas las causas mencionadas en los artículos precedentes, habrá los ordinarios recursos de apelación o nulidad para ante la Corte Suprema.

Art. 23. Cuando en un Juzgado de Provincia hubiera duda o cuestión sobre si el asunto de que se trata, debe ser regido solamente por las leyes Provinciales, y se decidiese en última instancia en ese sentido, el agraviado podrá apelar para ante la Corte Suprema.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES ESPECIALES

Art. 24. La presente Ley será puesta en ejercicio luego que se halle instalada la Suprema Corte y los Juzgados Seccionales.

Art. 25. El P. E., podrá verificar los gastos previos que la ejecución de esta ley demanden.

1. Esta es la primera de las leyes que dieron forma y organización a la justicia federal con arreglo a los arts. 100 y 101 de la Constitución. Dictada en la primera Legislatura después de la reconciliación de la Provincia de Buenos Aires y la Confederación, pocos días después de proclamado Presidente de la República el general Bartolomé Mitre (5 de octubre, la ley n° 27 es del 8 del mismo mes) ella demuestra la preocupación de éste por la organización de la Justicia Nacional. El Congreso de la Confederación, que desde 1854 funcionó en la ciudad de Paraná, por ley de 30 noviembre de dicho año, auto-



rizó al P. E. (general Urquiza) para nombrar una comisión codificadora y en 16 de julio de 1856 organizó provisionalmente los tribunales federales, ley que fué derogada por la de 27 de julio de 1857, que a su vez fué modificada por la de 13 de agosto de 1858, que además de la Corte y los jueces de sección establecía cinco cortes de circuito (las Cámaras federales que medio siglo después retoñarían), pero nunca llegó a funcionar la justicia federal. Tampoco entró en ejercicio con dictarse la presente ley n° 27 y nombrarse dos días después el personal que establecía. Así los miembros de la Corte redactaron en 1863 las tres leyes n° 48, 49 y 50. En conjunto se dictaron las siguientes:

A. N° 42, de 26 de agosto, sobre arancel de costas en la Suprema Corte y Juzgados nacionales.

B. N° 43, de 12 de agosto, organizando el personal de los Juzgados.

C. N° 44, de igual fecha, sobre autenticación de actos provinciales.

D. N° 48, de 25 también de agosto, sobre jurisdicción y competencia de los Tribunales nacionales.

E. N° 49, de igual fecha, sobre crímenes cuyo juzgamiento compete a los Tribunales nacionales.

F. N° 50, de igual fecha, sobre procedimientos en lo civil y criminal de los mismos.

G. N° 76, de 7 de noviembre, procedimientos en los juicios de contrabando.

De estas leyes insertamos aquí, además de la de 1862, las que hemos señalado con B y D. Las demás de 1863 no entran en nuestro plan: la A por extraña a la materia penal, la E por haber sido expresamente derogada por el vigente Código Penal, la F porque después del Cód. Proc. Crim. sólo rige de ella la parte referente al procedimiento civil (aunque la parte penal de éste la transcribimos en la parte segunda como una de tantas) y la G por haber sido derogada en parte por las leyes de Aduanas y en otra parte por el referido Cód. Proc. Crim.

2. Después de las de 1863 se han dictado otras leyes que transcribimos después de estas tres; a la primera ponemos



estas notas. Sobre ella hay que advertir que la ley n° 48, sobre jurisdicción y competencia es «adicional y correctiva» de la presente, aunque lo esencial de ésta no ha sido tocado. Más honda ha sido la modificación que introdujo la ley n° 4055.

Cabe también advertir que la ley especial de revisión que según el inciso 3° del art. 7° debió proponer la Corte al Congreso, no fué nunca proyectada: en lo civil la ley federal de procedimientos preceptúa (arts. 341-247) lo necesario y así lo ratificó la ley n° 4055, aunque ya el Cód. Proc. Crim. había legislado al respecto.

3. Sobre el artículo 9 el Reglamento que se ha dado la Corte con arreglo al art. 99 de la Constitución establece que sus providencias interlocutorias serán autorizadas con la media firma del Presidente, y las definitivas o las que tengan fuerza de tales deberán llevar la firma entera de los vocales del acuerdo, sin certificación del secretario.

En cuanto a los secretarios de Juzgado de Sección la ley n° 1190 no les hace autorizar las resoluciones de los jueces. Ni a las de las Cámaras la ley n° 4055.

4. Considerándola en su contenido observamos:

Art. 1°. Se refiere a la Constitución y las leyes nacionales: da por entendidos los tratados y la restante enumeración del art. 100 Const. Nac.

Art. 2°. Sienta la doctrina de que el Poder Judicial de la Nación nunca procede de oficio, sino en los casos contenciosos en que es requerida su jurisdicción. Lo cual debe entenderse como no excluyendo las causas del derecho penal (al fin contenciosas entre el Fiscal y el acusado), pero que en éstas como en las civiles se necesita un caso; es decir, que no cabe proceder en abstracto, sin una cuestión real y efectiva que requiere solución concreta.

Los artículos 3, 4 y 5 desarrollan la doctrina anterior (observamos en todas las colecciones legislativas que en el artículo 5 se escribe «compitiendo» que es gerundio del verbo «competir» en vez de «competiendo» que lo es de «competer»).

Art. 6 a 20. Da las bases de la organización que ha regido hasta 1902 (Ley n° 4055).

Art. 21. Ha sido derogado por el art. 14 de la ley n° 48,



que establece la vía extraordinaria para llegar a la Corte en recurso contra las resoluciones provinciales y no por cierto de sus juzgados inferiores.

III.—Personal de Juzgados. — Abogados

Nº 43
12 Agosto
1863

Artículo 1. Los Juzgados Nacionales de Sección tendrán para su despacho y servicio un escribano de actuación y diligencias, un oficial de justicia y un ordenanza.

Art. 2. El nombramiento de estos empleados, se hará la primera vez por los Jueces Seccionales en personas que sean mayores de edad, gocen de buena reputación y acrediten ante ellos poseer una instrucción suficiente para desempeñar el oficio a que aspiran.

Art. 3. Los escribanos y oficiales de justicia jurarán el fiel desempeño de sus cargos, ante los mismos Jueces Seccionales.

Art. 4. Estos propondrán a la Suprema Corte, los sueldos con que se han de remunerar los servicios de los oficiales de justicia y los ordenanzas.

Art. 5. Los abogados y procuradores de los Tribunales de Provincia serán admitidos a desempeñar los deberes de su profesión en los Tribunales Nacionales.

Las partes, sin embargo, podrán comparecer y hacer por sí mismas sus defensas ante ellos a menos que por auto fundado en justas causas, resultantes de lo actuado, sean privadas de ese derecho.

Art. 6. Queda autorizado el Poder Ejecutivo para nombrar procuradores fiscales titulares en aquellas Secciones en que lo estimen conveniente con el sueldo que propondrá al Congreso.

1. Los dos primeros artículos de esta ley han sido modificados por la ley nº 1190, que sustituye los escribanos de actuación por secretarios de Juzgado, siendo éstos nombrados por la Corte, siempre a propuesta del juez respectivo.

2. El artículo 5º ha sido derogado en lo que toca a los procuradores por la ley nº 10.996, sobre ejercicio de la procuración, que sólo es permitido en los tribunales federales a los previamente inscriptos en la matrícula especial que la misma establece.



IV.—Jurisdicción y Competencia

Nº 48
26 Agosto
1863

Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia Nacional conocerá en primera instancia:

1º De las causas que versen entre dos o más Provincias, y las civiles que versen entre una Provincia y algún vecino o vecinos de otra, o ciudadanos o súbditos extranjeros;

2º De aquellas que versen entre una Provincia y un Estado extranjero;

3º De las causas concernientes a Embajadores u otros Ministros diplomáticos y extranjeros, a las personas que compongan la Legación, a los individuos de su familia, o sirvientes domésticos, del modo que una Corte de Justicia pueda proceder con arreglo al derecho de gentes;

4º De las causas en que se versen los privilegios y exenciones de los Cónsules y Vicecónsules extranjeros, en su carácter público.

Art. 2. Los Jueces Nacionales de Sección, conocerán en primera instancia de las causas siguientes:

1º Las que sean especialmente regidas por la Constitución Nacional, las leyes que haya sancionado y sancionare el Congreso y los Tratados Públicos con naciones extranjeras;

2º Las causas civiles en que sean partes, un vecino de la Provincia en que se suscite el pleito y un vecino de otra, o en que sean partes un ciudadano argentino y un extranjero;

3º Las que versen sobre negocios particulares de un Cónsul o Vicecónsul extranjero;

4º Todo pleito que se inicie entre particulares, teniendo por origen actos administrativos del Gobierno Nacional;

5º Toda acción fiscal contra particulares o corporaciones; sea por cobro de cantidades debidas o por cumplimiento de contratos, o por defraudación de rentas nacionales, o por violación de rentas nacionales o por violación de reglamentos administrativos;

6º En general, todas aquellas causas en que la Nación o un recaudador de sus rentas sea parte;

7º Todas las causas a que den lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempo de guerra;

8º Las que se originen por choques o avería de buques, o por asaltos hechos, o por auxilios prestados en alta mar, o en los puertos, ríos y mares en que la República tiene jurisdicción;

9º Las que se originen entre los propietarios o interesados de un buque sea sobre su posesión o sobre su propiedad;

10º Las que versen sobre la construcción y reparos de un buque; sobre hipoteca de su casco; sobre fletamentos y estadías; sobre seguros marítimos; sobre salarios de oficiales y marineros; sobre salvamento civil y militar; sobre naufragios; sobre avería simple y grue-



sa; sobre contratos a la gruesa ventura; sobre pilotaje; sobre embarcos de buques y penas por violación de las leyes de impuestos y navegación; sobre la nacionalidad del buque y legitimidad de su patente o regularidad de sus papeles; sobre arribadas forzosas; sobre reconocimientos; sobre abandono, venta y liquidación de créditos del buque; sobre cumplimiento de las obligaciones del capitán y tripulantes; y en general, sobre todo hecho o contrato concerniente a la navegación y comercio marítimo.

Art. 3. Los Jueces de Sección conocerán igualmente de todas las causas de contrabando, y de todas las causas criminales cuyo conocimiento compete a la Justicia Nacional; a saber:

1° Los crímenes cometidos en alta mar, a bordo de buques nacionales o por piratas extranjeros, serán juzgados por el Juez de Sección del primer puerto argentino a que arribase el buque;

2° Los crímenes cometidos en los ríos, islas y puertos argentinos, serán juzgados por el Juez que se halle más inmediato al lugar del hecho; o por aquél en cuya sección se encuentren los criminales, según sea el que prevenga en la causa;

3° Los crímenes cometidos en el territorio de las Provincias en violación de las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofendan la soberanía y seguridad de la Nación, o tiendan a la defraudación de sus rentas, u obstruyan o corrompan el buen servicio de sus empleados, o violenten o estorben la correspondencia de los correos, o estorben o falseen las elecciones nacionales, o representen falsificación de documentos nacionales o de moneda nacional; o de billetes de Banco autorizados por el Congreso, serán juzgados en la sección Judicial en que se cometieren;

4° Los crímenes de toda especie que se cometan en lugares donde el gobierno Nacional tenga absoluta y exclusiva jurisdicción, serán juzgados por los Jueces de Sección allí existentes.

Art. 4. La Corte Suprema conocerá por apelación de las sentencias definitivas y de todo auto que tenga fuerza definitiva en todas las causas criminales iniciadas ante los Jueces de Sección y en las civiles que quedan expresadas siempre que el valor en las civiles disputado exceda de la cantidad de doscientos pesos fuertes y la sentencia de segunda instancia, sea que confirme o revoque, causará ejecutoria.

Art. 5. Las cuestiones que se susciten entre los individuos de la tripulación de un buque mercante, o entre alguno de ellos y su capitán, u otros oficiales del mismo, y cuya importancia no pase de cincuenta pesos, serán decididas en juicio verbal por el capitán del puerto donde se halle el buque, con apelación para ante el Juez de Sección, que conocerá también en juicio verbal.

Art. 6. Siempre que un Juez de Sección se excuse de conocer en una causa de su competencia, o retarde el administrar justicia, se podrá ocurrir a la Corte Suprema por el recurso de justicia denegada o retardada.



Y siempre que conozca de causa que no le compete, y rehusare inhibirse, podrá igualmente apelarse a la Corte, que resolverá el artículo según su mérito.

Art. 7. La jurisdicción criminal atribuida por esta ley a la justicia nacional, en nada altera la jurisdicción militar en los casos en que, según las leyes existentes, deba procederse por consejos de guerra.

Art. 8. En las causas entre una provincia y vecinos de otra, o entre una provincia y un súbdito extranjero, o entre un ciudadano y un extranjero, o entre vecinos de diversas provincias, para surtir el fuero federal, es preciso que el derecho que se disputa pertenezca originariamente, y no por cesión o mandato, a ciudadanos extranjeros o vecinos de otras provincias respectivamente.

Art. 9. Las corporaciones anónimas creadas y haciendo sus negocios en una provincia serán reputadas, para los efectos del fuero, como ciudadanos vecinos de la provincia en que se hallen establecidas, cualquiera que sea la nacionalidad de sus socios actuales.

Art. 10. En las sociedades colectivas, y en general en todos los casos en que dos o más personas asignables pretendan ejercer una acción solidaria, o sean demandadas por una obligación solidaria, para que caigan bajo la jurisdicción nacional, se atenderá a la nacionalidad o vecindad de todos los miembros de la sociedad o comunidad, de tal modo que será preciso que cada uno de ellos individualmente tenga el derecho de demandar, o pueda ser demandado ante los Tribunales Nacionales, con arreglo a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 2.

Art. 11. La vecindad en una Provincia se adquirirá para los efectos del fuero, por la residencia continua de dos años, o tener en ella propiedades raíces, o un establecimiento de industria o comercio, o por hallarse establecido, de modo que aparezca el ánimo de permanecer.

Art. 12. La jurisdicción de los Tribunales Nacionales en todas las causas especificadas en los artículos 1, 2 y 3 será privada, excluyendo a los Juzgados de Provincia, con las excepciones siguientes:

1º En todos los juicios universales de concurso de acreedores y participación de herencia, conocerá el Juez competente de Provincia, cualquiera que fuese la nacionalidad o vecindad de los directamente interesados en ellos, y aunque se deduzcan allí acciones fiscales de la Nación;

2º En los lugares en que no haya establecidos Jueces de Sección o que se halle distante la residencia de éstos, los Fiscales o Colectores de rentas, o individuos comisionados al efecto podrán demandar a los deudores del Fisco ante los Jueces de Provincia;

3º Cuando se cometiére un crimen de los que por esta ley caen bajo la jurisdicción nacional, los Jueces de Provincia, de cualquier categoría, podrán aprehender a los presuntos reos, que pondrán a disposición del Juez Nacional de Sección correspondiente, con la remisión del sumario que hayan levantado para justificar la prisión;

4º Siempre que en pleito civil un extranjero demande a una Pro-



vincia o a un ciudadano, o bien el vecino de una Provincia demande al vecino de otra, ante el Juez o Tribunal de Provincia, o cuando siendo demandados el extranjero o el vecino de otra Provincia, consten a la demanda, sin oponer la excepción de declinatoria, se entenderá que la jurisdicción ha sido prorrogada, la causa se sustanciará y decidirá por los Tribunales Provinciales; y no podrá ser traída a la jurisdicción nacional por recurso alguno, salvo en los casos especificados en el artículo 14.

Art. 13. Las Autoridades dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, prestarán todo auxilio para la ejecución de las sentencias del Poder Judicial, y siempre que un Juez Nacional dirija un despacho precatório a un Juez Provincial, sea para hacer citaciones o notificaciones, o recibir testimonios, o practicar otros actos judiciales, será cumplido el encargo. Y siempre que un alguacil u oficial ejecutor presente una orden escrita de un Juez o Tribunal Nacional para ejecutar una prisión o embargo, las Autoridades Provinciales y personas particulares estarán obligadas a prestar el auxilio que él les requiera para el cumplimiento de su comisión.

Art. 14. Una vez radicado un juicio ante los Tribunales de Provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial, y sólo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los Tribunales Superiores de Provincia en los casos siguientes:

1º Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un Tratado, de una Ley del Congreso, o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación, y la decisión haya sido contra su validez;

2º Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de Provincia se haya puesto en cuestión bajo pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los Tratados o Leyes del Congreso, y la decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de Provincia;

3º Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, o de un Tratado o Ley del Congreso, o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia del litigio.

Art. 15. Cuando se entable el recurso de apelación que autoriza el artículo anterior, deberá deducirse la queja con arreglo a lo prescripto en él, de tal modo que su fundamento aparezca de los autos y tenga una relación directa e inmediata a las cuestiones de validez de los artículos de la Constitución, leyes, Tratados o comisiones en disputa, quedando entendido que la interpretación o aplicación que los Tribunales de Provincia hicieran de los Códigos Civil, Penal, Comercial y de Minería, no dará ocasión a este recurso por el hecho de ser leyes del Congreso en virtud de lo dispuesto en el inciso 11, art. 67 de la Constitución.

Art. 16. En los recursos de que tratan los dos artículos anteriores,



cuando la Corte Suprema revoque, hará una declaratoria sobre el punto disputado, y devolverá la causa para que sea nuevamente juzgada; o bien resolverá sobre el fondo, y aún podrá ordenar la ejecución, especialmente si la causa hubiese sido una vez devuelta por idéntica razón.

Art. 17. La Corte Suprema decidirá las competencias que se susciten a instancia de parte, sobre jurisdicción de los Jueces Nacionales.

Art. 18. La Corte Suprema podrá establecer los reglamentos necesarios para la ordenada tramitación de los pleitos, con tal que no sean repugnantes a las prescripciones de la ley de procedimientos.

Art. 19. La Corte Suprema y los Jueces de Sección tendrán la facultad de corregir con multas que no excedan de cincuenta pesos fuertes, o prisión que no exceda de ocho días, las faltas de respeto que se cometieran contra su dignidad en los alegatos o las audiencias de las causas; y las que sus subalternos u otras personas cometieren contra su autoridad, obstruyendo el curso de la justicia o en daño de las partes; sin perjuicio de las acciones que del hecho nacieren por daños causados.

Art. 20. Cuando un individuo se halle detenido o preso por una Autoridad Nacional o a disposición de una Autoridad Nacional, o en color de una orden emitida por Autoridad Nacional; o cuando una Autoridad Provincial haya puesto preso a un miembro del Congreso, o cualquier otro individuo que obre en comisión del Gobierno Nacional, la Corte Suprema o los Jueces de Sección podrán a instancia del preso o de sus parientes o amigos, investigar sobre el origen de la prisión, y en caso de que ésta haya sido ordenada por Autoridad o persona que no esté facultada por la ley, mandarán poner al preso inmediatamente en libertad.

Art. 21. Los Tribunales y Jueces Nacionales en el ejercicio de sus funciones procederán aplicando la Constitución como ley Suprema de la Nación, las leyes que haya sancionado o sancione el Congreso, los tratados con Naciones extranjeras, las leyes particulares de las Provincias, las leyes generales que han regido anteriormente a la Nación y los principios de derecho de gentes, según lo exijan respectivamente los casos que se sujeten a su conocimiento, en el orden de prelación que va establecido.

Art. 22. Las causas que se hallen pendientes ante los Tribunales de Provincia a la promulgación de esta ley, serán terminadas y fenecidas en los mismos Tribunales, aunque por su materia o por las personas interesadas en ellas pudieran pertenecer a la jurisdicción nacional.

Art. 23. La presente ley será considerada como adicional y correctiva de la de 16 de Octubre de 1862.

1. Esta ley es la fundamental de las federales. Las posteriores la han respetado salvo en los puntos siguientes, completándola unas veces y modificándola otras:



a) el artículo 111 de la ley n° 1893, orgánica de los tribunales de la Capital de 12 noviembre 1886, al repetir para los jueces de sección de ésta el precepto constitucional que el art. 2° de la presente ley había establecido para toda la justicia nacional — causas especialmente regidas por los tratados y las leyes del Congreso — añade, « con excepción de las (leyes) que se refieren al gobierno y la administración de la Capital ».

b) aunque sea ajeno a la materia penal el inciso 2° del citado art. 2, es de considerar que el fuero federal civil a que se refiere, hoy comprende a los vecinos de la Capital según la ley 1467 de 18 de septiembre de 1884 y la citada orgánica n° 1893.

c) el inciso 1° del art. 3° ha sido completado por el art. 23, inciso 6° del Cód. de Proc. Crim., refiriéndose a piratas « nacionales » o extranjeros.

d) sobre el inciso 2° del mismo art. 3° la jurisprudencia de la Corte ha establecido que si el juez federal de La Plata ha prevenido en el conocimiento de la causa, será siempre el competente aunque el lugar donde se cometió el hecho esté más próximo a la Capital.

e) sobre el inciso 4° del mismo art. 3°, el art. 23, inciso también 3° del Cód. Proc. Crim. agrega « con excepción de aquellos delitos que por esta ley quedan sometidos a la jurisdicción ordinaria de los jueces de la Capital y Territorios Nacionales ». Deben entenderse ambos incisos distinguiendo los lugares donde el gobierno de la Nación ejerce el gobierno local de aquellos en que obra como gobierno nacional; sólo en estos últimos cabe la jurisdicción federal.

f) desde luego todo el art. 4° ha sido modificado por la ley 4055 que instituyó las Cámaras federales. (Aunque se trata de materia civil, ajena a este libro, hay que advertir que en las causas de menor cuantía cabe el recurso de nulidad según la ley federal de procedimientos). Lo mismo cabe advertir respecto al art. 6°; véase la misma ley n° 4055, art. 6°, y la n° 1893, art. 90, sobre el 14 de la presente.

g) también sobre el art. 17, concordante con el 3° de la ley n° 927, ha introducido novedades la repetida ley n° 4055



2. El artículo 20 establece en breves pero comprensivos términos el recurso de *habeas corpus* que luego desarrolló el Cód. de Proc. Crim. La Corte ha declarado que sólo le corresponde intervenir en grado de apelación; originariamente sólo puede conocer (en lo penal) en cuanto a las personas, tratándose de las del art. 101, Const. Nac.

3. El artículo 21 se refiere a las leyes que debe aplicar la justicia federal y son las siguientes, por este orden de prelación:

- a) la Constitución Nacional;
- b) las leyes del Congreso (las dictadas para toda la Nación, no las exclusivas para la Capital);
- c) los Tratados;
- d) las leyes generales que han regido anteriormente en la Nación, lo que debe relacionarse con b; la referencia a las provinciales debe darse por suprimida.
- e) los principios del derecho de gentes, lo cual debe entenderse no sólo respecto del art. 101 de la Constitución, sino en casos de los llamados de almirantazgo y jurisdicción marítima.

Penas.

Multa hasta 50 pesos. Corrección disciplinaria, art. 19.

V.—Secretarios de la Corte Suprema

Nº 205
4 Octubre
1886

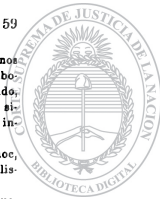
Artículo 1. La Secretaría de la Suprema Corte de Justicia será desempeñada por dos secretarios, con la dotación de 2820 \$ fuertes al año cada uno.

1. Esta ley no ha sufrido alteración en los sesenta y dos años que cuenta, más que en el monto del sueldo de esos funcionarios judiciales.

VI.—Suplencia de Jueces

Nº 935
24 Septiembre
1878

Artículo 1. Los Jueces Federales de Sección, legalmente impedidos o recusados, serán suplidos por abogados de la matrícula designados como se establece en el artículo siguiente.



Art. 2. Todos los años por el mes de noviembre o por lo menos antes de las vacaciones, la Suprema Corte formará una lista de abogados residentes en el lugar en que tenga su asiento cada Juzgado, que no bajen de tres ni excedan de diez, quienes durante el año siguiente, por turno, suplirán a los expresados jueces en los casos indicados.

Art. 3. Los nombramientos que se hicieren de Fiscales ad hoc, recaerán también en los letrados comprendidos en la enunciada lista, debiendo igualmente ser llamados por turno.

Art. 4. Los funcionarios suplentes creados por esta ley sólo pueden ser recusados con los mismos requisitos que los titulares y sus honorarios serán costeados por el Tesoro Nacional.

Art. 5. En las informaciones de pobreza que se produzcan en los Juzgados Nacionales, se observarán las mismas reglas establecidas en cada Provincia, determinando quienes deben ser considerados pobres para litigar.

1. Sobre conjucees, véase *Cód. Proc. Crim.*, art. 83-101.

VII.—Secretarios de Juzgado

Nº 1190
1º Agosto
1882

Artículo 1. Desde el 1º de enero de 1883, los Escribanos de los Juzgados Nacionales de Sección, serán funcionarios rentados que se denominarán "Secretarios del Juzgado".

Art. 2. Para ser Secretario se requiere ser ciudadano argentino en ejercicio, mayor de edad, de buenas costumbres y graduado en derecho o Escribano Público recibido.

Art. 3. En la misma fecha arriba expresada, quedarán suprimidos los derechos de arancel que perciben actualmente los Escribanos Nacionales y la Secretaría de la Suprema Corte.

Art. 4. Cada Juzgado Federal tendrá un Secretario, y en la Capital dos.

Art. 5. Los Secretarios de Juzgados, serán nombrados por la Suprema Corte, a propuesta de los respectivos Jueces; sus funciones serán las mismas de los actuales Escribanos, y gozarán del sueldo que establezca la ley de Presupuesto.

Art. 6. Quedan derogadas las disposiciones de la Ley de Procedimientos de 1863 que se opongan a la presente.

1. Un decreto de 29 de septiembre de 1883 reglamenta esta ley en la siguiente forma:

Art. 1º. En los juzgados federales donde exista un solo secretario y éste se encuentre accidentalmente impedido de des-



empeñar sus funciones en determinadas causas, se procederá por analogía en la misma forma que cuando se trate de hacer designación, fijación de honorarios y pago de los fiscales *ad hoc* (se refiere a la ley n° 935 de 24 de septiembre de 1878, derogada hoy por la n° 4162).

Art. 2°. Si el caso de impedimento se presenta en un juzgado que dispone de dos o más secretarios titulares, se substituirán, respectivamente, según lo designe el juez, y si todos ellos se hallaran al mismo tiempo impedidos se procederá como lo dispone el artículo anterior.

2. La ley de Procedimientos a que se refiere el art. 6° es la n° 50 que no insertamos (sólo en algunos artículos. V. en Parte tercera) porque derogado el título XXX «del procedimiento las causas criminales», por el Cód. Proc. Crim., ha quedado como mera ley de procedimientos civiles.

VIII.—Organización de los Tribunales de la Capital

TITULO VI (1)

DE LOS JUECES FEDERALES

N° 1893
12 Noviembre
1886

Art. 110. Habrá dos jueces federales para el territorio de la Capital, de los cuales uno ejercerá la jurisdicción criminal y otro la mercantil. La jurisdicción civil será ejercida por ambos, turnándose mensualmente en el conocimiento de las causas que se inicien.

Art. 111. Los Jueces Federales conocerán en 1° instancia, de todos aquellos asuntos que con arreglo a la Constitución correspondan a la Justicia Nacional, en los siguientes casos:

1° Los que sean regidos especialmente por la Constitución Nacional, los tratados públicos con las Naciones extranjeras, las leyes nacionales y que sancionare el Congreso, con excepción de las que se refieren al Gobierno y Administración de la Capital;

2° Las causas civiles en que sean partes un ciudadano argentino y un extranjero y aquellas en que lo sean un vecino de la Capital y el de una provincia;

3° Las que versen sobre negocios particulares de Cónsules y Vice-cónsules extranjeros;

4° Las cuestiones que se susciten entre particulares, teniendo por origen actos administrativos del Gobierno Nacional;

(1) V. nota 2.



5° Las acciones fiscales contra particulares o corporaciones, sean por cobro de cantidades adeudadas o por cumplimiento de contratos, por defraudación de rentas nacionales o por violación de reglamentos administrativos; y en general, todas aquellas causas en que la Nación o un recaudador de sus rentas sea parte. En la precedente disposición, no se comprenden las acciones fiscales por cobro o defraudación de rentas o impuestos que sean exclusivamente para la Capital y no generales para la Nación;

6° Todas las causas a que den lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempo de guerra;

7° Las que se originen por choques o averías de buques, por asaltos hechos o por auxilios prestados en alta mar o en los puertos, ríos o mares en que la República tenga jurisdicción si estuvieren muy inmediatos a la Capital;

8° Las que se originen entre los propietarios e interesados de un buque, sea sobre su posesión o sobre su propiedad;

9° Las que versen sobre construcción y reparo de un buque, sobre hipoteca de su casco; sobre fletamentos y estadías; sobre seguros marítimos; sobre salarios de oficiales y marineros; sobre salvamento civil y militar; sobre naufragios; sobre avería gruesa y simple; sobre contrato a la gruesa ventura; sobre pilotaje; sobre embargo de buques o penas por violación de las leyes de impuestos y navegación; sobre la nacionalidad del buque y legitimidad de su patente o regularidad de sus papeles, sobre arribadas forzosas; sobre reconocimientos; sobre abandono, venta y liquidación de créditos del buque; sobre cumplimiento de las obligaciones del capitán y tripulantes, y en general, sobre todo contrato concerniente a la navegación y comercio marítimo;

10. De las causas de contrabando en los puertos o territorios de la Capital;

11. De todos los delitos cometidos en alta mar a bordo de los buques nacionales o piratas extranjeros, cuando los buques arribaseu directamente a los puertos de la Capital;

12. Los delitos cometidos en los ríos, islas y puertos, cuando el lugar donde fuese cometido el hecho, quede más próximo a la Capital, que al asiento de los demás Jueces Federales, o cuando los criminales se encuentren en el territorio de la Capital, a menos que en este último caso otro Juez Federal hubiese prevenido en el asunto;

13. Los delitos cometidos en el territorio de la Capital en violación de leyes nacionales de carácter general para la República.

Art. 112. Son aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 4° y siguientes de la ley de 14 de septiembre de 1863 sobre jurisdicción y competencia de los Tribunales Nacionales en cuanto no se opongan a la presente.

Art. 113. La ley de procedimientos de 14 de septiembre de 1863 y demás vigentes sobre justicia nacional, serán aplicables a los asuntos que se promovieren ante los jueces federales de la Capital.



Art. 114. Cada Juzgado Federal tiene, para su despacho y servicio, dos escribanos de actuación, un oficial de justicia y un ordenanza.

Art. 115. Para optar al puesto de Escribano y Oficial de Justicia, se requieren las mismas condiciones que para los de los Juzgados de Sección, y su nombramiento se hará en la forma prescripta por éstos.

TITULO IX

DEFENSORES DE POBRES Y AUSENTES

Art. 140. La defensa oficial se hará en la Capital de la República por un defensor de pobres y ausentes ante la Suprema Corte y Juzgados federales y por seis defensores de pobres y ausentes ante los Juzgados de Paz, Civil, Comercial, del Crimen y Correccional y para ante las Cámaras respectivas.

Art. 141. Los deberes y atribuciones del primero serán establecidos por la Suprema Corte y por las Cámaras de apelaciones de la Capital los que deben corresponder a los demás.

Art. 142. Para ser nombrado defensor de pobres y ausentes se requiere ser ciudadano argentino, haber ejercido en el país durante dos años por lo menos la profesión de abogado o haber desempeñado durante ese término una magistratura.

Art. 143. El nombramiento y remoción de estos funcionarios corresponde al P. E. sin perjuicio de que la Suprema Corte o las Cámaras de apelaciones, según los casos, puedan también amonestarlos, suspenderlos temporalmente o destituirlos.

Art. 144. Gozarán del sueldo mensual que les asigne el Presupuesto.

1. Esta ley pudo haberse limitado a la justicia ordinaria de la Capital, pues para ésta son la mayor parte de sus disposiciones. Al intercalar en ella dos títulos, referente una a jueces federales y otro a funcionarios de los mismos, afirmó el Congreso su poder legislativo para todo lo nacional y para la Capital, sin distinción de Congreso y Legislatura local.

2. Hemos comprendido aquí tan sólo los dos referidos títulos. En conjunto (véase el resto en el segundo capítulo de esta Parte) la ley N° 1893, trata:

I. De los alcaldes, jueces de paz y Cámaras de paz, modificado substancialmente por la ley de Justicia de Paz de la Capital n° 2860, de 23 de noviembre de 1861. Todo materia ajena a la de este libro.

II. De los jueces de mercado. De sus disposiciones sólo nos



interesa el artículo 56, que impone una multa de \$ 500 m/n. a la persona que sin excusarse o después de haberse desechado su excusación se negare a desempeñar el cargo de juez de mercado.

III. De los jueces de primera instancia: Se refiere a la jurisdicción ordinaria, por lo cual lo insertamos íntegro en el próximo capítulo.

IV. De las Cámaras de apelaciones. Idem, ídem, ídem.

V. Disposiciones generales que completan los dos títulos anteriores, ídem.

VI. De los jueces federales; arriba transcripto.

VII. Del Ministerio Público; también de la justicia ordinaria.

VIII. De los defensores y asesores de menores e incapaces, ídem.

IX. De los defensores de pobres y ausentes que se refiere también a los federales, y por esto también la transcribimos.

X. Del médico de los tribunales. Justicia ordinaria.

XI. Secretarios y demás empleados de las Cámaras. Justicia ordinaria.

XII. De los escribanos públicos. Idem, ídem.

XIII. Del Registro y escrituras, materia civil.

XIV. Registro de la Propiedad, hipoteca, etc., materia civil.

XV. Archivo general de los Tribunales. Lo poco que tiene de penal excusa considerarlo.

XVI. Disposiciones complementarias. Todas referentes a la justicia ordinaria.

3. Comparando las atribuciones que esta ley confiere a los jueces seccionales con las que les confiere el artículo 2º de la ley 48 se observa:

Su inciso 1º igual al primero de la antigua ley, pero a « las leyes nacionales y que sancionare el Congreso » añade « con excepción de las que se refieren al Gobierno y Administración de la Capital ».

Su inciso 2º es igual a aquel 2º, aunque ya hemos advertido, a pesar de no ser materia penal, que el fuero surte en los casos que dice, también para los vecinos de la Capital.

Su inciso 3º es igual al 3º de la ley nº 48.



Lo mismo los dos 4º, salvo un insignificante cambio de palabras: dice ahora: «Las cuestiones» donde antes «Todo pleito».

El actual inciso 5º refunde los 5º y 6º de la ley antigua, distinguiendo, cosa que este último no hacía, las rentas e impuestos que sean exclusivamente para la Capital de los demás: sólo estos últimos son federales.

El actual inciso 6º es igual al viejo 7º.

El 7º es el 8º de la ley anterior pero añadiéndole las palabras «si estuvieren más inmediatos a la Capital».

El 8º es el 9º viejo.

Como el 9º es aquel 10º.

El artículo 10 substituye la referencia que hacía el artículo 3º de la ley n° 48: «todas las causas de contrabando»; por dichas causas «en los puertos o territorios de la Capital»; esto porque de los jueces de la Capital se trata.

Nuestro inciso 11 limita el alcance del inciso 1º del artículo 3º de la vieja ley, a la Capital.

El 12 establece preceptos iguales a los del inciso 2º del art. 3º de la ley antigua, pero limitados a la Capital.

El inciso 13 deja subsistentes, en los términos generales, lo que establecen el 3º y 4º del art. 3º de la ley 48, aunque los contempla desde el punto de vista de la jurisdicción de los jueces de sección de la Capital. Este punto de vista no lo podía tomar la ley n° 48 dictada cuando no había territorio federal de la Capital y así sólo hablaba del territorio de las Provincias.

4. Precisamente en este inciso 13, comprensivo de los 3º y 4º de la ley n° 48, nos fundaremos para distinguir en las leyes nacionales la parte sometida a la jurisdicción federal, incluso el Código Penal, que contempla todas las infracciones punibles tanto por las jurisdicciones locales (y ordinaria de la Capital) como por aquélla.

5. El artículo 110 no da más que dos jueces para la capital. En 1898, se creó un tercer Juzgado (V. la ley siguiente).

5. El artículo 112 de la presente ley declara en vigor — para los jueces de sección de la Capital — los artículos 4º y siguientes de la ley n° 48. De éstos nos interesan el 4º (modificado por la ley 4058), el 7º referente a la jurisdicción militar



y el 12 que declara la federal privativa y excluyente de la provincial.

¿Cómo habrá entonces que entender para los jueces de sección de la Capital las disposiciones del inciso 3º del artículo 12?

Substituyendo simplemente la referencia a « lo provincial » por « la jurisdicción ordinaria de la Capital »; así, un juez local podrá aprehender a un presunto reo que le entregue la policía, pero deberá ponerlo a disposición inmediata del juez federal.

En cuanto al artículo 13, también referente a jueces provinciales que reciban un despacho precatorio de un juez nacional para hacer citaciones o notificaciones, no puede darse el caso disponiendo éste de los mismos medios que los jueces ordinarios para el acto; tampoco parece que sea a éstos aplicable lo que dicho artículo obliga a los jueces de provincia: oír testigos o practicar actos judiciales.

En resumen la presente ley sólo ha modificado la n° 48 en lo que convenía especificar de ésta al tener que aplicarla a los jueces federales de la sección de la Capital.

IX.—Tercer Juzgado de la Capital

N° 3477
18 Enero
1897

Presupuesto: Anexo E. Inciso 3º, Item 1º: Dos jueces en lo civil y comercial, un juez en lo criminal. Cada uno 900 pesos.

X.—Reformas

N° 4055
11 Enero
1902

Artículo 1. El Poder Judicial de la Nación será ejercido:
1º Por la Corte Suprema de Justicia;
2º Por cuatro Cámaras Federales de apelación;
3º Por los Jueces de Sección de la Capital y de cada una de las Provincias.

CAPITULO I

DE LA SUPREMA CORTE

Art. 2. La Suprema Corte conocerá originaria y exclusivamente, de las causas mencionadas en el art. 101 de la Constitución Nacional y art. 1º de la ley n. 48 de 14 de septiembre de 1863, y en revisión, con arreglo al art. 241 de la ley 50 de la misma fecha.



Art. 3. La Corte Suprema conocerá también en última instancia por apelación y nulidad de las sentencias definitivas de las Cámaras Federales de Apelación en los siguientes casos:

1° De las que fueren dictadas en las demandas contra la Nación, a que se refiere la ley n° 3952 de 6 de octubre de 1900;

2° De las que recayesen sobre acciones fiscales contra particulares o corporaciones, sea por cobro de cantidades adeudadas o por cumplimiento de contratos; por defraudación de rentas nacionales o por violación de reglamentos administrativos y, en general, en todas aquellas causas en que la Nación o un recaudador de sus rentas sea parte actora, siempre que el valor disputado excediere de cinco mil pesos.

En la precedente disposición no se comprenden las acciones fiscales por cobro o defraudación de rentas o impuestos que sean exclusivamente para la Capital y Territorios Nacionales, y no generales para la Nación;

3° De las que recayesen en todas las causas a que dieran lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempo de guerra, sobre salamento militar y sobre nacionalidad del buque, legitimidad de su patente o regularidad de sus papeles;

4° De las causas de extradición de criminales reclamados por países extranjeros;

5° De las dictadas en cualquier causa criminal, por los delitos de traición, rebelión, sedición y en las de homicidio, incendio o explosión, piratería y naufragios cometidos en alta mar a bordo de buques nacionales o por piratas extranjeros: y en todos aquellos casos en que la pena impuesta excediera de diez años de presidio o penitenciaria.

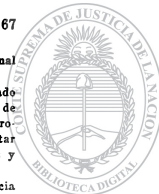
Art. 4. En los casos que, con arreglo a lo establecido en el art. 551 del Código de Procedimientos en lo Criminal, proceda el recurso de revisión contra las sentencias de las Cámaras Federales, la Corte Suprema conocerá de dicho recurso por apelación.

Art. 5. Conocerá igualmente de los recursos que se promovieran por retardo o denegación de justicia, en los casos a que se refieren los artículos anteriores.

Art. 6. La Corte Suprema conocerá por último, en grado de apelación, de las sentencias definitivas pronunciadas por las Cámaras Federales de Apelación de la Capital; por los Tribunales Superiores de Provincias y por los Tribunales Superiores Militares, en los casos previstos por el art. 14 de la Ley n° 58 de 14 de septiembre de 1863.

Art. 7. Si procediese el recurso del artículo anterior, y la sentencia de la Cámara o Tribunal fuese confirmatoria de la de los Juzgados de primera instancia, el apelado podrá solicitar su ejecución, dando fianza de responder de lo que percibiese si el fallo fuera revocado por la Suprema Corte.

Dicha fianza será calificada por la Cámara o Tribunal que la hubiese dictado y quedará de hecho concluida, si la sentencia re-



currida fuese confirmada por la Suprema Corte. El fisco nacional estará exento de la fianza a que se refiere esta disposición.

Art. 8. En los casos en que la Suprema Corte conozca en grado de apelación, recibido el expediente, se dictará la providencia de autos y las partes podrán, dentro de los diez días comunes e improrogables, siguientes al de la notificación de esa providencia presentar una memoria sobre la causa, que se mandará agregar a los autos y sin más trámite quedará la causa concluida para definitiva.

Art. 9. La Suprema Corte dirimirá las cuestiones de competencia que se susciten:

a) Entre las Cámaras Federales de Apelación; entre éstas y un Juez o Tribunal Superior local de la Capital, o Juez y Tribunal Superior de Provincia;

b) Entre un Juez de Sección y un Juez o Tribunal Superior local de la Capital o un Juez o Tribunal Superior de Provincia;

c) Entre un Juez Letrado de Territorio Nacional y un Juez o Tribunal Superior local de la Capital, o un Juez o Tribunal Superior de Provincia;

d) Entre un Juez o Tribunal Superior local de la Capital y un Juez o Tribunal Superior de Provincia; entre los Tribunales Superiores de dos provincias; entre jueces de distintas provincias; y entre un Tribunal Militar y uno de cualquiera otra jurisdicción nacional o provincial.

Art. 10. La Suprema Corte ejercerá superintendencia sobre las Cámaras Federales, Jueces de Sección, Jueces Letrados de Territorios Nacionales y demás funcionarios de la Justicia Federal, debiendo dictar los reglamentos convenientes para procurar la mejor administración de justicia.

Art. 11. La superintendencia de la Suprema Corte comprende:

1º Velar por el cumplimiento de esos reglamentos e imponer las penas disciplinarias que ellos fijen para los casos de infracción;

2º Exigir que se le remita anualmente o en cualquier tiempo, una relación de las causas entradas, del número y estado de las pendientes y de las falladas;

3º Acordar o denegar licencia a los miembros de las Cámaras Federales, Jueces de Sección, Jueces Letrados de los Territorios Nacionales y demás funcionarios de la Justicia Federal, para ausentarse del lugar en que desempeñan sus funciones, por más de tres días, o dejar de asistir al tribunal, juzgado u oficina por más de una semana;

4º Imponer a los mismos penas disciplinarias por faltas a la consideración y respeto debidos a la Corte o alguno de sus miembros, por actos ofensivos al decoro de la administración de justicia, o por falta o negligencia en el cumplimiento de su deber.

Las penas consistirán en prevención, apercibimiento o multas que no excederán de doscientos pesos.

En caso de reincidencia y cuando el abuso, la falta o negligencia



fuera grave, la Corte Suprema la pondrá en conocimiento de la Cámara de Diputados de la Nación, cuando fuesen cometidas por miembros de las Cámaras Federales y Apelación, por los Jueces de Sección y Jueces de los Tribunales Nacionales; y cuando ellas fuesen cometidas por los Procuradores Fiscales, Defensores de Menores, pobres y ausentes, los suspenderá, solicitando en seguida su exoneración del Poder Ejecutivo.

CAPITULO II

DE LAS CAMARAS FEDERALES DE APELACION

Art. 12. Habrá cuatro Cámaras Federales de Apelación, que serán compuestas cada una de tres miembros y tendrán su asiento, la primera en la Capital de la República, la segunda en la ciudad de La Plata, la tercera en la ciudad de Paraná y la cuarta en la ciudad de Córdoba, y ellas ejercerán en su respectiva circunscripción la jurisdicción apelada que les confiere la presente ley.

La primera circunscripción comprende la Capital de la República, las provincias de San Luis, de Mendoza y de San Juan.

La segunda circunscripción comprende la Provincia de Buenos Aires y los Territorios de la Pampa, del Neuquén, del Río Negro, del Chubut, de Santa Cruz y de la Tierra del Fuego.

La tercera circunscripción comprende las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, y Territorios del Chaco, de Formosa y de Misiones.

La cuarta circunscripción comprende las demás Provincias y demás Territorios que no se incluyen en las otras tres.

El ministerio público será desempeñado por un funcionario que tendrá el título de Procurador Fiscal de las Cámaras Federales de Apelación en la Capital y ciudad de La Plata. En las Cámaras de Paraná y Córdoba, dicho cargo y el de Procurador Fiscal ante el Juzgado de Sección, serán desempeñados por un solo funcionario.

Art. 13. Las condiciones para ser miembros de las Cámaras Federales de Apelación y Procurador Fiscal de las mismas, y para su nombramiento, serán las que se requieren para ser miembros de la Suprema Corte.

Art. 14. No podrán ser simultáneamente jueces de la misma Cámara, los parientes o afines dentro del cuarto grado civil, y en caso de afinidad sobreviviente, el que la causare abandonará su puesto.

Art. 15. Cada Cámara nombrará anualmente su Presidente, y actuará con el Secretario y demás empleados que le designe la Suprema Corte de conformidad con la ley de presupuesto.

Art. 16. Las Cámaras Federales conocerán en grado de apelación, en segunda instancia, en todos los casos enumerados en el art. 3º de la presente ley.

Art. 17. Las Cámaras Federales conocerán en grado de apelación y en última instancia:



1º De los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los Jueces de Sección en las causas de su competencia, que no fueren de las enumeradas en el art. 3 de la presente ley, y siempre que el valor disputado, en las causas civiles o comerciales, exceda de quinientos pesos;

2º De los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los Jueces Letrados de los Territorios Nacionales, aunque fueren dictadas en causas *criminales* del fuero común;

3º De los recursos por retardación o denegación de justicia por parte de los Jueces de Sección o de los Letrados de los Territorios Nacionales;

4º De las consultas que elevaren los Jueces Letrados de los Territorios Nacionales en los casos del art. 42 de la ley de organización de dichos territorios.

Art. 18. Contra las sentencias dictadas por las Cámaras Federales en los casos del artículo anterior, sólo se concederán los recursos autorizados por los artículos 4 y 6 de la presente ley.

Art. 19. Las Cámaras Federales conocerán de las cuestiones de competencia que se susciten entre los Jueces de Sección, entre los Jueces Letrados de los Territorios Nacionales y entre éstos y aquellos.

Art. 20. Las Cámaras observarán en materia civil y comercial, los procedimientos establecidos para la Suprema Corte en la ley n° 50 de 14 de septiembre de 1863 y leyes especiales, y en materia penal el Código de Procedimientos criminales de la Nación.

Art. 21. En caso de recusación o impedimento de alguno de los miembros de las Cámaras de la Capital, el Tribunal se integrará inasculando a la suerte el número de jueces que sea necesario, de la lista a que se refiere el art. 23 de la ley n° 50 de 14 de septiembre de 1863.

Las Cámaras Federales de La Plata, Córdoba y Paraná, se integrarán en la misma forma, de la lista de Conjueces que se inasculare anualmente para suplir los Jueces de Sección respectivos con arreglo al art. 2 de la ley de 24 de septiembre de 1878.

Art. 22. Las Cámaras Federales dictarán su reglamento interno y lo someterán a la aprobación de la Suprema Corte.

Art. 23. Sin perjuicio de la superintendencia de la Suprema Corte, las Cámaras Federales de Apelación podrán corregir a sus Secretarios y demás empleados subalternos con apercibimientos, suspensiones sin goce de sueldo por término que no exceda de quince días o multas hasta cien pesos por negligencia en el cumplimiento de sus deberes, desobediencia o falta a la consideración y respeto debidos al Tribunal o a alguno de sus vocales.

Tendrán también la facultad de corregir con multas que no excedan de cincuenta pesos o prisión que no exceda de ocho días, las faltas de respeto que se cometieren contra su dignidad en alegatos y las audiencias de las causas y las que se cometieren contra su autoridad



obstruyendo el curso de la justicia o en daño de las partes, sin perjuicio de las acciones que del hecho nacieren por daños causados.

Art. 24. Los expedientes actualmente en trámite ante la Suprema Corte, que sean del conocimiento de las Cámaras Federales de Apelación según las disposiciones de la presente ley, se distribuirán para su resolución entre las distintas Cámaras creadas y de acuerdo con la jurisdicción del Tribunal de origen, una vez terminado su trámite. Las causas especificadas en el art. 16 de la presente ley, que a la fecha de su promulgación se encontraren pendientes del fallo de la Suprema Corte, serán decididas por ésta.

Art. 25. En la primera instalación de las Cámaras Federales los jueces nombrados para la que tenga su asiento en la Capital de la República, prestarán juramento ante la Suprema Corte, de desempeñar fielmente su cargo, de conformidad a lo que prescriben la Constitución y las leyes de la Nación: los nombrados para las que tengan su asiento en La Plata, Córdoba y Paraná, lo prestarán ante los gobernadores de provincia. En lo sucesivo prestarán ese juramento ante las mismas Cámaras. Los Secretarios jurarán el fiel desempeño de sus funciones ante los mismos tribunales.

Art. 26. Los miembros de las Cámaras Federales de la Capital y su procurador fiscal gozarán del mismo sueldo asignado a los miembros de las Cámaras de Apelación de la Capital, y tendrán un Secretario con setecientos cincuenta pesos, un Ujier con doscientos, un Oficial primero con ciento veinte, tres escribientes con cien pesos cada uno—Gastos de oficina, cincuenta—Alquiler de casa, quinientos—Tres ordenanzas, a cincuenta pesos cada uno—Un auxiliar para el Fiscal con cien pesos—Gastos de oficina para el mismo, cincuenta—Un ordenanza para el mismo, cincuenta pesos: todo al mes.

Los miembros de la Cámara Federal de La Plata y su Procurador Fiscal, tendrán mensualmente mil doscientos pesos cada uno, y un secretario con quinientos. Un ujier con ciento ochenta—Un oficial 1º, con ciento veinte—Tres escribientes con ciento ochenta cada uno—Gastos de oficina y alquiler de casa, quinientos—Tres ordenanzas con cincuenta cada uno—Un auxiliar del Fiscal con ochenta—Gastos de oficina para el mismo, cincuenta—Un ordenanza para el mismo, cincuenta.

Los miembros de las Cámaras Federales de las ciudades de Córdoba y Paraná y los Procuradores, gozarán del sueldo mensual de ochocientos pesos, y tendrán cada Cámara, un Secretario, con cuatrocientos pesos—Un ujier, con ciento ochenta pesos—Un Oficial mayor, un Oficial 1º, y tres escribientes, con ochenta pesos—Gastos de oficina y alquiler de casa, trescientos pesos—Dos ordenanzas a cuarenta pesos cada uno—Un auxiliar del Fiscal, con ochenta pesos—Ordenanza para el mismo, cuarenta pesos.

Estos sueldos y asignaciones regirán mientras se provee a ellos en la ley de Presupuestos.



CAPÍTULO III

DE LOS JUECES DE SECCION

Art. 27. La jurisdicción y competencia de los Jueces de Sección, será la determinada en la ley sobre jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de 14 de septiembre de 1863 y demás leyes especiales dictadas por el H. Congreso.

Art. 28. Quedan derogadas las disposiciones contrarias a la presente ley.

1. Sobre el artículo 1º: hoy son seis las Cámaras federales.

2. Sobre el artículo 3º, inciso 1º: la ley 3952 a que se refiere no es de carácter penal: se refiere a las demandas contra la Nación en su carácter de persona jurídica, que no necesitan previa autorización legislativa, pero sí constancia de la resolución administrativa.

3. El inciso 2º del mismo artículo 3º no hace más que repetir el inciso 5º del artículo 111 de la ley 1893, que, como hemos visto (pág. 64), es una repartición de los incisos 5º y 6º de la ley nº 48 (verdadera base de la jurisdicción federal) si bien con el agregado que ahora vemos aquí repetido de que no son de ésta las acciones fiscales por rentas o impuestos para la Capital (y territorios).

4. La misma tercera instancia se extiende en lo criminal a los casos de extradición (3º, inciso 4º) y a los graves delitos del inciso 5º de dicho artículo 3º.

5. El artículo 6º especifica los casos en que procede el recurso extraordinario del artículo 14 de la ley nº 48, entre ellos contra las sentencias definitivas de los tribunales superiores militares, es decir, no sólo del Consejo Supremo de Guerra y Marina, sino la de los demás consejos cuando no hay recurso contra las de ellos.

6. Sobre el artículo 21. Ha sido modificado por la ley 4162.

7. Sobre el artículo 23, hay en la ley nº 7099 (Cámara de



Rosario) una importante ampliación de facultades y no para esta sola Cámara sino para todas.

Penas.

Multa hasta 200 pesos. Art. 11; hasta 100 pesos. Art. 23.

XI.—Nuevos Juzgados de sección: Santa Fe y Buenos Aires

Nº 4074 Artículo 1. La Provincia de Santa Fe se dividirá en
4 Junio dos secciones para la administración de la Justicia Fe-
1902 deral.

La primera comprenderá los departamentos: La Capital, San Jerónimo, San Martín, Las Colonias, Castellanos, San Cristóbal, Reconquista, Vera, San Javier, Garay y San Justo; y la segunda, los del Rosario, Iriondo, Belgrano, San Lorenzo, Caseros, Constitución y General López.

Art. 2. Créase para el servicio de la primera sección un Juzgado Federal, que tendrá su asiento en la Capital de la Provincia, con el mismo personal, sueldos y gastos que el existente.

Art. 3. Instalado el Juzgado de la primera sección, el Juez de la segunda le remitirá las causas pendientes que le correspondan, según la jurisdicción territorial establecida, si hubiere conformidad de partes.

Art. 4. Las funciones especiales que para la ejecución de las leyes de la Nación correspondan al Juez Federal de la Provincia de Santa Fe, serán desempeñadas por el titular de la 1ª sección.

Art. 5. Créase otro Juzgado Federal en la Provincia de Buenos Aires con asiento en la ciudad de Bahía Blanca, con el mismo personal, sueldos y gastos que el que actualmente tiene; y su jurisdicción territorial comprenderá a los siguientes partidos: Azúl, Dolores, Las Flores, Maipú, Rauch, Tapalqué, Tuyú, General Guido, Bolívar, Ayacucho, Adolfo Alsina, Balcarce, Bahía Blanca, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, General Pueyrredón, General Alvarado, Guaminí, Juárez, Lamadrid, Lobería, Laprida, Coronel Vidal, Necochea, Olavarría, Patagones, Puan, Saavedra, Tandil, Tres Arroyos, Villarrino, Trenque-Lauquen y Pehuajó; quedando los demás partidos de la Provincia comprendidos dentro de la jurisdicción del Juzgado Federal existente en La Plata.

Art. 6. Instalado el Juzgado en la ciudad de B. Blanca, el Juez de La Plata le remitirá todas las causas pendientes, en la misma forma y casos del artículo 3. Las funciones especiales que para la ejecución de las leyes de la Nación corresponden al Juez Federal de la Provincia de Buenos Aires serán desempeñadas por el que tiene su asiento en la ciudad de La Plata.



1. Esta ley exigida por el crecimiento de las dos provincias y en la de Santa Fe además por razones de supremacía que ejercía Rosario y se le reconocía al ser la sede del juez federal de la sección, no requiere más que una observación respecto de sus artículos 4° y 6°. Hay leyes como la de enroalamiento, ley federal, y la de Educación común, de jurisdicción local, en que se alude al juez de sección partiendo de no haber más que uno en cada provincia. Al haber más de uno ha habido que indicar cuál sería el competente a los efectos de las leyes nacionales cuando al juez de sección se refiere como juez de una provincia.

XII.—Integración de Magistrados Federales

Nº 4162
8 Enero
1903

Artículo 1. En los casos de recusación, impedimento, vacancia o licencia de algunos de los Ministros de la Suprema Corte, se integrará este Tribunal, hasta completar el número legal para fallar, en el orden

siguiente:

1º Con el Procurador General;

2º Con los miembros de la Cámara Federal de Apelación de la Capital;

3º Con los conjuces de la lista de 25 abogados, que reúnan las condiciones para ser miembros de la misma Corte y que ésta formará por insaculación en el mes de diciembre de cada año.

Art. 2. En lo sucesivo la integración de las Cámaras Federales, en los casos del artículo primero, se hará:

1º Con el Fiscal de la Cámara;

2º Con el Juez o Jueces de la sección donde funcione el Tribunal;

3º En la de la Capital, como se establece en el inciso 3º del artículo primero;

4º En las Cámaras de La Plata, Córdoba y Paraná, con los conjuces que en diciembre de cada año insaculará la Corte Suprema para el siguiente, en número de diez, de una lista de abogados que reúnan las condiciones para ser miembros titulares, que las mismas Cámaras le pasarán al efecto en el mes de noviembre.

Art. 3. Para las suplencias de los Jueces Federales y de Territorios Nacionales en los casos del art. 1º, serán llamados en este orden:

1º El Fiscal Letrado;

2º El Defensor Letrado de pobres, menores e incapaces;

3º El conjuce correspondiente a la lista anual que forma la Suprema Corte para los Jueces Federales y para los Jueces de Territorios Nacionales, el Juez de Sección o territorio más próximo, como lo prescribe el art. 1º, inc. 4º, de la ley nº 3575 de 8 de octubre de 1897.



Art. 4. En las secciones que fueran servidas por más de un Juez, éstos se reemplazarán recíprocamente y, en su defecto, como lo determina el artículo anterior.

Art. 5. En los casos del art. 1º, el Procurador General de la Nación, será substituido en primer término por el Fiscal de la Cámara Federal de Apelación de la Capital.

Art. 6. Los Fiscales de las Cámaras, serán suplidos en los mismos casos:

1º Por el Procurador Fiscal de la sección donde funciona el Tribunal;

2º Por el Defensor Letrado de menores o incapaces de la misma;

3º Con los Fiscales ad hoc, que serán nombrados de las listas a que se refiere el art. 2º, inc. 3 y 4º de esta ley.

Art. 7. Los Fiscales y Defensores Letrados de menores, pobres e incapaces, se reemplazarán recíprocamente, reservándose para los casos de impedimento de los suplentes, la designación de funcionarios ad hoc, que se hará por los Jueces Federales de la lista prescripta por la ley n° 935, de 24 de septiembre de 1878, y por los jueces de los Tribunales Nacionales, en personas que tengan título de abogado, y en defecto de ellas, en personas que sean idóneas; salvo lo dispuesto en la ley n° 3367, de 8 de julio de 1896.

Art. 8. Los Secretarios de las Cámaras Federales, mientras sea uno solo por cada Tribunal, serán suplidos preferentemente por los Secretarios de los Juzgados Federales del lugar donde funcionen aquellas.

En los Juzgados de Sección se substituirán entre sí los del mismo Juzgado, y en caso de impedimento de ambos, el que se halle en turno de otro Juzgado.

En la localidad donde no haya sino un Juzgado con un sólo Secretario, éste será suplido por el Prosecretario o por uno ad hoc, designado por el mismo Juez; no pudiendo, en ningún caso, gozar el suplente de mayor emolumento que el que correspondería al titular.

Art. 9. Los funcionarios suplentes a que esta ley se refiere serán llamados por su orden o en el subsiguiente si se hallaren impedidos, y cuando fueren dos o más los indicados en la misma línea, la designación se hará por el turno que establezca la Suprema Corte.

Art. 10. En los casos a que se refiere el art. 460 del Código de Procedimientos en lo criminal, los Jueces Federales de la Capital de la República y de La Plata, pasarán el proceso al Fiscal de la Cámara respectiva, quien ejercerá las funciones que el mismo artículo atribuye al Procurador General en la primera parte, y al Fiscal especial en la última.

Art. 11. Además de las atribuciones que les confiere la ley n° 4055, las Cámaras Federales de Apelación, tendrán las siguientes:

1º Nombrar y renovar sus Secretarios y demás empleados subalternos, y acordar o denegar a los mismos, licencias para ausentarse



en los mismos casos y por el mismo término que establece el art. 11, inc. 3°, de la Ley n° 4055.

Art. 12. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

1. Los antecedentes dentro de la ley son: 1° la ley n° 50, cuya parte especial en lo penal ha sido derogada por el Cód. Proc. Crim. pero que en lo demás está vigente; 2° la ley 935 de Proc.; 3° el mismo Cód. Proc. Crim.

I. De la ley n° 50 sobre Procedimientos de los Tribunales Nacionales:

Art. 20. Los miembros de la Suprema Corte no pueden ser recusados sino por las causas enumeradas en esta ley (son nueve según el art. 44, pero en materia penal las establecen los arts. 74 y sig. del Cód. de Proc. V. en la Segunda parte de esta obra. Hay que advertir que por la ley n° 3966, de 7 de octubre de 1895, puede recusarse sin causa a un miembro de la Corte).

Art. 21. En ningún caso puede ser recusado el Procurador General; pero la Corte puede declararle impedido siempre que le manifieste alguna causa que a juicio de ella le inhabilite para desempeñar convenientemente su ministerio. La Corte en este caso, en el mismo auto en que declare impedido al Procurador General, nombrará un letrado que lo subrogue, cuyo nombramiento quedará sin efecto si las partes se conformasen con que intervenga aquel magistrado, no obstante el impedimento.

Art. 22. Toda vez que a consecuencia de la recusación queden separados dos de los miembros de la Corte, los tres restantes conocerán del pleito, pero si se inhabilitase mayor número, se nombrarán abogados que integren el de tres, no debiendo completarse el de cinco, sino cuando los interesados lo pidan a su costa.

Art. 23. Toda vez que fuesen recusados o resultasen impedidos todos o la mayoría de los miembros de la Corte Suprema, se integrará el Tribunal insaculando a la suerte el número de conjuces que se necesite de una lista de 25 abogados que la Corte formará el 1° de enero de cada año.

Art. 24. Los conjuces deben ser recusados con los mismos requisitos que los miembros titulares; para ser conjuce no



se requieren las condiciones que se necesitan para ser miembro de la Suprema Corte, debiendo, sin embargo, tener al menos las que se necesitan para un juez de sección.

Los arts. 25-30 se refieren al procedimiento en cuanto a lo penal, y han sido derogados por los arts. 85-89 del referido Código.

Los arts. 31-39 han sido derogados también para lo penal por los arts. 93-101 del mismo Código.

II. Ley 935, de 24 de septiembre de 1878, que es la VI de estos textos legales.

(Poco ha quedado de esta ley entre el Cód. Proc. Crim. y la presente n° 4162).

III El Cód. de Proc. Crim. como queda dicho.

2. La Corte Suprema reglamentó el art. 2° de la presente ley por una acordada de 8 de enero de 1903, en la siguiente forma:

Para los casos del inciso 1° rige el orden de antigüedad de los camaristas y siendo ésta la misma, el orden de edad.

Para los del inciso 2° el mismo régimen.

Para el inciso 3° la integración de la Cámara de la Capital se hará por sorteo como lo prescribe el art. 23 de la ley n° 50.

Para los del inciso 4° las Cámaras de La Plata, Paraná y Córdoba, es decir las demás, aún las creadas después, verificarán la integración por turno, según el régimen de la ley n° 935.

En la misma acordada, se previno que se harán igualmente por turno los nombramientos de fiscales *ad hoc* a que se refiere el inciso 3°, art. 6° de la presente ley.

XIII.—Nuevo juzgado de sección: Entre Ríos

N° 5011
4 Octubre
1906

Artículo 1. Créase otro Juzgado Federal en Entre Ríos, con asiento en la ciudad de Concepción del Uruguay.

Art. 2. La jurisdicción de este nuevo juzgado comprenderá los departamentos de Uruguay, Gualaguaychú, Concordia, Colón, Villaguay, Federación y Feliciano, quedando como jurisdicción del que funciona en la capital de la provincia, los Departamentos de Paraná, Gualaguay, Tala, Diamante, Victoria, Nogoyá y La Paz.



Art. 3. El personal del Juzgado del Uruguay, se compondrá de un Juez con 800 \$ mensuales de sueldo, un Secretario con 250 \$, un Procurador Fiscal con 250 \$, un Defensor de pobres, incapaces y ausentes con 150 \$, dos Escribientes con 80 \$ cada uno, un Oficial de Justicia, un escribiente con 80 \$ y un Ordenanza con 40 pesos.

Art. 4. Autorízase además la erogación de 80 \$ mensuales para alquiler de casa, 50 \$ para gastos de oficina y publicación de edictos y 1000 \$ por una sola vez para adquisición de muebles y útiles.

Art. 5. Instalado el Juzgado del Uruguay, el Juez del Paraná le remitirá las causas pendientes que le correspondan según la jurisdicción territorial establecida, si hubiere conformidad de partes.

Art. 6. Las funciones especiales que para la ejecución de las leyes de la Nación correspondan al Juez Federal de la provincia de Entre Ríos, serán desempeñadas por el Juez de Paraná.

1. La otra provincia del Litoral siguió el camino de sus hermanas.

2. El art. 6º encierra una disposición que ya hemos visto aplicar a los juzgados de las capitales de dichas dos provincias.

XIV.—Autenticación de actos provinciales

Nº 5133
19 Septiembre 1907 Artículo 1. Modifícanse los artículos 2º y 3º de la ley de 26 de agosto de 1863 sobre Autenticación de los actos públicos y Procedimientos judiciales de cada provincia, en la siguiente forma:

1º Serán igualmente tenidos por auténticos los autos, procedimientos judiciales, sentencias y testimonios de cualquiera de ellas con la atestación del Escribano Secretario del Tribunal Superior o de cualquiera de las Cámaras de Apelación de la Provincia, el certificado del presidente respectivo asegurando que la atestación está en debida forma, y con el sello del Tribunal;

2. Los instrumentos públicos y todo certificado, copia o todo documento que proceda de las corporaciones y oficinas que no pertenezcan al orden judicial, serán tenidos por auténticos, siendo firmados por el jefe de la corporación u oficina, con la atestación, además, del Escribano Secretario del Tribunal Superior o de cualquiera de las Cámaras de Apelaciones de la Provincia, certificado del presidente respectivo, de hallarse extendida la atestación en debida forma, y el sello del Tribunal o Cámara.

Art. 2. Comuníquese al Poder Ejecutivo.



1. La segunda ley federal, la n° 44 es la que aparece derogada por la presente: de ahí que no la hayamos insertado.

2. Esta es de aplicación en pocos casos criminales.

XV.—Cámara en Rosario

N° 7099 Artículo 1. Créase en la ciudad de Rosario, bajo el
27 Septiembre régimen de la ley 4055, una Cámara Federal de Ape-
1910 lación, que ejercerá en la Provincia de Santa Fe la
 jurisdicción apelada estatuida por dicha ley.

Art. 2. Independientemente de la superintendencia general que ejerce la Suprema Corte, corresponde a las Cámaras Federales de Apelaciones: 1° Velar porque los jueces y el personal de las circunscripciones observen los reglamentos de la Suprema Corte; 2° Exigir estadísticas del movimiento judicial; 3° Acordar o denegar licencias a los jueces y secretarios, no pudiendo exceder éstas de ocho días; 4° Imponer a los jueces y personal subalterno, penas disciplinarias por falta a la consideración y respeto debidos a las Cámaras o alguno de sus miembros por actos afectivos al decoro de la administración de justicia, por falta o negligencia en el cumplimiento de sus deberes. Las penas consistirán en prevenciones, apercibimientos o multas que no excedan de cien pesos. En caso de reincidencia por falta de los jueces, procuradores fiscales y defensores de menores, pobres y ausentes, la Cámara pondrá el hecho en conocimiento de la Corte a los efectos del inc. 4°, art. 11, Ley 4055.

Art. 3. Los juicios que a la vigencia de esta ley se hallen en tramitación ante la Cámara Federal de Apelación de Paraná elevados de los juzgados federales de Santa Fe, serán remitidos a la Cámara Federal de Rosario.

Art. 4. La Cámara Federal de Rosario tendrá igual personal y los mismos sueldos que establece la ley general del presupuesto para la Cámara Federal de Apelación de La Plata.

Art. 5. Destinase la suma de cincuenta mil pesos para gastos de instalación y biblioteca de la Cámara, y para mobiliarios de los juzgados de su circunscripción.

Art. 6. Los gastos que origine el cumplimiento de la presente ley se imputarán a la misma hasta tanto se incluya en la ley general de presupuestos.

Art. 7. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

1. Esta vez la referida rivalidad entre la capital política de la provincia y el emporio mercantil de Rosario se decidió a favor de este último.

2. El art. 23 de la ley 4055 limitaba la superintendencia



de las Cámaras federales, sin perjuicio de la de la Corte, a 1º apercibir, 2º suspender, 3º multar. Estas facultades ahora se extienden a 4º velar porque los jueces y el personal observen los Reglamentos de la Corte, 5º exigir estadísticas, 6º acordar a denegar licencias y 7º poner las reincidencias en conocimiento de la Corte para un juicio político o una exoneración según el caso.

Penas.

Multas hasta 100 pesos. Art. 2º.

XVI.—Reorganización de la Justicia de la Capital

Nº 7055
17 Agosto
1910

Art. 4. Desde la sanción de la presente ley, la Cámara de Apelación que funciona en la Capital Federal, en virtud de la ley 4055, se compondrá de 5 miembros y sus resoluciones causarán ejecutoria en materia criminal.

1. Otra ley en que según los teóricos del Congreso — Legislatura local éste como tal hubiera dictado un artículo referente a la jurisdicción federal siendo los otros 10 de reforma de la Cámara del Crimen de la jurisdicción ordinaria. Ella se inserta íntegra en su lugar: tribunales de la jurisdicción ordinaria. El Congreso en la ley 1893 legisla sobre los jueces de sección de la Capital, como en ésta lo hace de la Cámara que no es sólo de la Capital, sino además de San Luis Mendoza y San Juan.

2. El artículo suprime la última instancia — en materia criminal — que la ley nº 4055 atribuía a la Corte Suprema. Se ha creído que siendo mayor el número de magistrados que los de las demás Cámaras no era necesaria la intervención de la Corte.

XVII.—Nuevo juzgado de sección: Córdoba

Nº 11539
29 Septiembre
1928

Artículo 1. La Provincia de Córdoba se dividirá en dos secciones a los efectos de la Administración de la Justicia Federal.

La primera sección, correspondiente a la jurisdicción territorial del Juzgado Federal con asiento en la Capital de la Provincia, comprende los siguientes departamentos: Capital, Colón.



Punilla, Río Primero, Río Segundo, Santa María, Totoral, Tumbá, Cruz del Eje, Ischilin, Minas Pocho, Río Seco y Sobremonte.

La segunda sección, correspondiente a la jurisdicción territorial del Juzgado Federal con asiento en Bell-Ville, comprende los departamentos: Unión, Marcos Juárez, General Roca, Juárez Celman, Río Cuarto, Calamuchita, Tercero Arriba, Tercero Abajo, San Justo, San Javier y San Alberto.

Art. 2. Después de la promulgación de la presente ley, el Juzgado de la primera sección remitirá al de la segunda, las causas pendientes que le correspondan, si hubiera conformidad de partes.

Art. 3. Las funciones especiales que para la ejecución de las leyes de la Nación corresponden al Juez Federal de la Provincia de Córdoba, serán desempeñadas por el titular de la primera sección.

XVIII.—Nuevo juzgado de sección: P. de Buenos Aires

Nº 11192
6 Octubre
1922

Artículo 1. Créase un Juzgado Federal en la provincia de Buenos Aires con el mismo personal, sueldos y gastos que el juzgado de Bahía Blanca. Tendrá su asiento en la ciudad de Mercedes y su jurisdicción comprenderá los partidos que actualmente forman los Departamentos judiciales del Centro y Norte de la Provincia, menos Baradero, San Pedro, Ramallo y San Nicolás, quedando los demás partidos comprendidos dentro de la jurisdicción de los juzgados de La Plata y Bahía Blanca, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 4075 de 4 de junio de 1902.

XIX.— Cámara en Bahía Blanca

Nº 11.539
6 Septiembre
1928

Art. 10. (Presupuesto) La Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que se crea por la presente ley, tendrá la jurisdicción territorial que corresponde al Juzgado Federal de Bahía Blanca y los territorios de la Pampa, Neuquén y Río Negro.

Comentario al capítulo primero.

§ 1º. Extensión y limitación de la jurisdicción federal. —
§ 2º. Sus características. — § 3º. Jurisdicción federal y ordinaria. — § 4º. Constitución, leyes y tratados. — § 5º. Corte

Suprema. — § 6°. Cámaras federales. — § 7°. Juzgados de sección. — § 8°. Otros funcionarios federales. — Al párrafo 7°, nota sobre jueces en general, prohibiciones e incompatibilidades, juicio político, etc.

§ 1°. *Extensión y limitación de la jurisdicción federal.*

En general surte el fuero federal por razón de las personas, de la materia o del lugar. Especialmente en lo penal surte:

A) *Por razón de las personas:* El artículo 101 de la Constitución establece que la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción originaria y exclusivamente « en los asuntos concernientes a Embajadores, Ministros y Cónsules extranjeros ». Y la ley 48 (inc. 3° del art. 1°) y el Cód. Proc. Crim. (art. 21) dicen que la Corte Suprema conocerá originariamente « de las causas criminales concernientes a Embajadores, Ministros o Agentes diplomáticos extranjeros; o a las personas que compongan la legación, a los individuos de su familia o servidumbre del modo y en los casos en que una Corte de Justicia puede proceder de acuerdo al derecho de gentes o internacional ». En cuanto a los cónsules, cuando obran en carácter de tales, conoce la Corte originariamente, pero si obran en carácter particular rige la jurisdicción federal, empezando por el Juez de Sección (inciso 4° del dicho art. 1°).

La palabra « concernientes » parece referirse tanto a los asuntos criminales en que el diplomático es agente activo de la infracción como siendo el damnificado. Pero en esto rige el derecho internacional, como veremos más adelante tratando de la jurisdicción de la Corte Suprema.

Quiere decir que en puridad no hay, fuera del caso de *habeas corpus*, jurisdicción federal por razón de las personas más que en la Corte Suprema. Aquella se reparte jerárquicamente entre ésta y los tribunales inferiores y en lo penal es exclusiva, es decir, que excluye a todas las demás jurisdicciones. Pero cuando el fuero (siempre en lo penal) es por razón de las personas, que son las previstas por el artículo 101 de la Constitución y no otras, no hay más jurisdicción que la de la Corte, que es *originaria*, es decir, que ésta funciona como tribunal de primera y única instancia y es a la vez *exclusiva*, lo que debe entenderse como excluyendo (cual lo hace la jurisdicción





federal en general) no sólo toda otra jurisdicción, sino también la federal de los tribunales inferiores.

El caso a que antes nos referimos lo introdujo el artículo 20 de la ley 48 (la IV de Textos Legales), según el cual en el recurso de *habeas corpus* es competente tanto la Corte como el juez de sección ante quien se entable, si bien aquélla ha declarado corresponderle sólo en grado de apelación, a no ser tratándose de un diplomático, que es únicamente cuando ella procede originariamente.

B) *Por razón de la materia.* El artículo 2º de dicha ley n° 48 determina que los jueces de sección (originariamente porque por apelación pasan sus fallos al Superior, entonces la Corte, hoy la Cámara y luego — cuando corresponde — a aquélla) conocen de las causas especialmente regidas por la Constitución Nacional, las leyes del Congreso y los Tratados. Como ésta es la esencia de la jurisdicción federal, hasta el punto de que aun tratándose de resoluciones de cualquier otro poder local, provincial y aun nacional, incumbe la defensa de aquellas altas disposiciones a la Corte por la vía del recurso extraordinario, nos referimos a los párrafos 4º y 5º del comentario de este capítulo.

Dicha ley atribuye además a los jueces de sección (originariamente y en la forma antes dicha) el conocimiento de toda acción fiscal por defraudación de rentas nacionales o por violación de reglamentos administrativos y en general de todas las causas en que un recaudador de rentas de la Nación sea parte. Son las leyes federales de la Parte tercera, capítulo 1º de este libro.

Hay también los casos de almirantazgo y jurisdicción marítima en que no se puede decir que el fuero federal surta por razón de la materia y que tampoco él se deba al lugar. La especialidad habría que buscarla en legislaciones extrañas, particularmente en la inglesa. Son las causas, las más de ellas no penales, de los incisos 6º, 7º, 8º y 9º del artículo 111 de la ley n° 1893 (es la VIII de « Textos legales »).

Fuente principal del fuero por razón de la materia son:

1º. Los delitos de contrabando (inciso 10º del art. recién citado).

2º. Los delitos cometidos en violación de leyes de la Nación



para la Nación, aunque en alguna de éstas puede decirse que surte el fuero también por razón del lugar. Véase, por ejemplo en la Parte tercera la ley de ferrocarriles, su nota 4.

C) *Por razón del lugar.*

1°. Los crímenes (hoy delitos) cometidos en alta mar a bordo de buques nacionales o por piratas extranjeros (la ley añadió o nacionales). Los cometidos en parte sujeta a jurisdicción extranjera serán del resorte de ésta, como los tribunales argentinos (según el inciso 2° de este mismo artículo) conocen de los delitos cometidos en buques extranjeros dentro de la jurisdicción del país. En cuanto al delito de piratería, el derecho de gentes reconoce el de castigarlo el primer barco de cualquier nacionalidad que esté en condiciones materiales de hacerlo.

2° Los crímenes cometidos en los ríos, islas y puertos argentinos.

Aquí no se distingue entre buques nacionales y extranjeros ni que los delitos se cometan a bordo o en tierra, limitada esta última a los 35 metros del Código Civil que constituyen la ribera. Los puertos y adyacencias o dependencias entran en la jurisdicción federal.

En cuanto a las islas, la Corte Suprema, modificando su criterio anterior, declaró que tratándose de un delito cometido en una isla del delta del Paraná, que forma parte de la provincia de Entre Ríos, no puede conocer la jurisdicción federal, pues sobre la ley 48 del Congreso, que llama «disposición legal de carácter complementario», está la Constitución, cuyo artículo 67, inciso 11°, salva las jurisdicciones locales y soberanía de las provincias en la parte no delegada a la Nación.

En realidad el concepto de la ley 48 tiende a asegurar la jurisdicción nacional, o sea la soberanía de la Nación sobre los ríos, como caminos que andan, es decir, como vías de navegación, y la palabra islas que emplea debe subordinarse a este evidente espíritu legal.

3°. Delitos (crímenes según la terminología de las leyes de 1863) de toda especie que se cometan en lugares donde el Gobierno nacional tenga absoluta y exclusiva jurisdicción. No habla el texto de propiedad; del inmueble donde se cometa el delito, puede ser locataria la Nación, o una repartición nacio-



nal y surtir el fuero; o viceversa la Nación propietaria de un bien en una provincia puede alquilarlo, con lo que desaparece su jurisdicción sobre lo que en él ocurra. Debe también entenderse por lo que a la Capital Federal respecta que debe distinguirse en el Gobierno nacional su carácter de autoridad general de la Nación, del de autoridad local en cuanto el presidente de la República es el jefe inmediato de la administración local; así un delito cometido en una dependencia municipal o en la administración de contribuciones será de la jurisdicción ordinaria; el cometido en la administración de correos o en la administración de impuestos internos será de la jurisdicción federal. El factor diferencial es la autoridad nacional. En cuanto a cuarteles y arsenales, los jueces de la Constitución conocen de los delitos que en ellos se cometen: aquí el conflicto no es de autoridad general y local, sino de autoridades judiciales de la misma extensión, por decirlo así: por lo menos en este sentido va la jurisprudencia. (V. además el Código de Justicia Militar).

Aunque la jurisdicción federal es excluyente, la ley ha previsto el caso de que intervenga en procesos federales un juez de provincia. En lo penal los casos son tres:

1°. Cuando se cometiese un crimen de los que caen bajo la jurisdicción nacional, los jueces de provincia pueden aprehender a los presuntos reos que pondrán a disposición del juez de sección con el sumario que al efecto hayan levantado (art. 12 de la ley 48).

Un comentarista pone en duda que «el Congreso pueda encomendar esta clase de funciones a los jueces de provincia», pero es evidente que la ley no les manda ejercerlas, sino que les faculta (*pueden*). Una ley provincial podría prohibir a sus jueces hacer uso de la autorización que les «concede» la ley nacional, como un juez puede hacer caso omiso de la facultad; pero el vínculo federal no está sólo en las leyes escritas. O se siente igualmente por todos o suprímasele.

2°. Cuando un oficial de justicia presente orden de juez federal para ejecutar una prisión, las autoridades provinciales (y los particulares) deberán prestarle el auxilio que requiera.

3°. El de la ley de defensa de la producción agrícola (n° 4863, V. en la tercera parte) que impone multas hasta de 5000 pesos.



Un funcionario administrativo hace constar la infracción ante la autoridad nacional o « provincial » más inmediata o ante dos testigos y determina la pena impuesta que se hará efectiva por el juez federal en juicio sumario en que aquel funcionario será parte. El caso no es único como allí veremos.

§ 2º. *Sus características.*

Las provincias argentinas conservan por la Constitución Nacional todos los poderes no delegados expresamente: su facultad de legislar está limitada por los cuatro Códigos generales, Civil, Comercial, Penal y Minería, delegados al Congreso Nacional, que son, sin embargo, interpretados y aplicados según las normas procesales y por los tribunales que cada provincia ha dictado y establecido. Adviértase que la Corte Suprema ha declarado que sobre la materia civil, comercial, penal y minería no pueden legislar las provincias.

Pero la Constitución, para afianzar la Justicia en la República, ha instituido « una Corte Suprema » con sus tribunales inferiores, justicia de excepción limitada a casos taxativamente fijados por la ley, advirtiendo que dentro de esta limitación no reconoce superior ni en los otros poderes nacionales ni en los que rigen en las provincias. Y si en el mismo territorio de estas mismas hay jueces y Cámaras federales que en los casos excepcionales referidos, excluyen en lo penal a los tribunales provinciales, sobre aquéllos, enfrente de éstos y enfrente de los otros dos poderes nacionales, el Ejecutivo y el Legislativo, se yergue la Corte Suprema con la alta y exclusiva misión de hacer respetar en todo el territorio argentino, tanto en lo penal como en lo demás, la Constitución, las leyes del Congreso y los tratados, que es en lo que el vínculo federal halla su defensa permanente.

Todavía en esto hay una nueva y más precisa limitación.

La justicia federal sólo procede por *casos*.

El caso debe promoverlo « una parte lesionada que reclama sus derechos en la forma prescripta por la ley » (Story). Cuando el tribunal federal declara inconstitucional una ley no la anula — declaración general que no le compete hacer — sino que la invalida en el caso concreto sometido a su resolu-



ción con arreglo a la jerarquía del « poder judicial de la Nación ».

En lo penal es excluyente. No así en lo demás.

Es ajena a nuestro propósito la consideración de la justicia no penal de los tribunales federales. De ella lo característico es que el fuero federal surte por razón de las personas por la distinta vecindad y por la nacionalidad, que no influyen en lo penal. Quizá hubiera sido mejor que cuando el extranjero infringe la ley penal o es víctima de la infracción y por ello reclama, se le hubiera atribuido el derecho de pedir un juez nacional. En este sentido se han oído voces aisladas y aunque en un mensaje al Congreso el vicepresidente en ejercicio, doctor Pellegrini, manifestó la intención de proponer una reforma en este sentido, el asunto parece abandonado definitivamente y sigue rigiendo la declaración de la Corte Suprema de que « la justicia nacional no tiene jurisdicción sobre delitos comunes, aunque sea un extranjero el paciente o que acuse y aunque sólo entable la acción civil que nace del delito ».

Entendemos que esto último se refiere al caso de que la acción civil se dedujera en el proceso que se siga ante la jurisdicción local o provincial, pero que sentenciado aquél y condenado el reo, podrá el damnificado, si es extranjero y en su caso surte el fuero federal, demandar al reo por la reparación civil ante el juez de sección.

Por lo demás no se ve la razón de que hoy un extranjero pueda recelar de la justicia provincial en cuanto a sus bienes y no en cuanto a lo más fundamental: el honor. Porque en el fondo de toda apelación a la justicia federal en lo civil y comercial que se le permite, está la idea de que un tribunal superior y sobre todo el más alto, la Corte Suprema, impedirá la injusticia en que un tribunal local puede incurrir por razones políticas o simplemente de alejamiento de la Capital Federal con su opinión pública siempre alerta...

§ 3º. *Jurisdicciones federal y común.*

Si la nacional-federal es de excepción y todo lo que no se le ha reservado es lo común, de otro modo, si cada provincia tiene sus jueces propios, sus leyes exclusivas (fuera de los cuatro Códigos generales, tratados y leyes de la Nación) sus nor-



mas procesales que rigen todo lo que queda fuera de dicha excepción, es decir, todo lo ordinario, ¿qué procedía hacer en la Capital Federal en esto ordinario, local o común? ¿Había que borrar la excepción y considerar *todo* común? ¿O bien conservar la justicia federal limitada en sus puntos de aplicación, pero de autoridad decisiva, y a su lado crear una administración de justicia local que comprendiera todos los casos de la autoridad judicial, menos los de excepción o federales?

El problema no llegó a plantearse porque de hecho estaba ya resuelto: la justicia histórica que en Buenos Aires venía funcionando desde antes de la consolidación del régimen federal, y que con ésta vió limitadas un tanto sus atribuciones y así convivió durante años con la justicia federal que en la misma ciudad tenía su Juez de Sección como cualquier otra provincia y la sede de la Corte, no tuvo al separarse de la provincia la ciudad que interrumpir su normal funcionamiento. Fué bastante que la legislatura de la provincia de Buenos Aires diera la ley de 26 de noviembre de 1880, invocando el artículo 3º de la Constitución Nacional para ceder a la Nación el territorio del Municipio de la ciudad de Buenos Aires que ha sido declarado capital de la República por la ley nacional del 24 de septiembre de 1880 ⁽¹⁾. Así quedó resuelto para la Capital el caso que para las provincias antes se planteaba: la necesidad de que el poder judicial de la Nación en aquélla se desarrollara en términos análogos a los que antes, o en, o enfrente de aquéllas se manifestara, es decir, que en lo que a la Nación se refiriera, dentro de los límites que antes indicamos se dirimirán las cuestiones, las taxativamente marcadas según leyes también determinadas, mientras que en lo que sólo puede considerarse de la Nación, por tratarse del territorio nacional, sede de sus autoridades, se aplicarán las leyes comunes como si de una provincia se tratara. Así declaró la Corte, en un caso del que se sostenía que debía entender la Justicia federal por tratarse de la aplicación de la ley orgánica municipal, que ésta «siendo de carácter puramente local y estando organizado el gobierno de la Capital en lo judicial como

(1) La ley provincial de cesión debió, según la Constitución, ser *previa* a la nacional de capitalidad. Pero fué previo a todo el éxito de una guerra civil. Parirás con dolor...



un gobierno propio e independiente y de jurisdicción amplia y completa en todo lo que es régimen local, su interpretación y aplicación, como de las demás leyes que conciernen sólo a la administración local, debe entenderse deferida solamente a los tribunales de este orden, en tanto en tanto no afecten cuestiones especialmente regidas por la Constitución, tratados, leyes nacionales, u otras de carácter igualmente federal.» Todo ello, continúa diciendo la Corte, con el bien entendido de que «la jurisdicción de los jueces federales, difiere substancialmente de la de los jueces del territorio de la Capital, no obstante ser unos y otros nacionales y proceder su nombramiento del gobierno de la Nación, pues los primeros ejercen una jurisdicción de excepción limitada a los casos enumerados en el artículo 100 de la Constitución, mientras que los segundos ejercen la jurisdicción ordinaria que el poder legislativo les confiere y que éste puede ampliar o restringir según lo creyere conveniente. Los primeros son propiamente los jueces de la Constitución, los segundos son los jueces de la ley establecidos por el Congreso.»

Este es el hecho y dentro de él se desarrolla la vida judicial en el territorio federalizado que forma la Capital de la Nación, por lo que este libro tiene que ajustarse a la realidad presente. Pero son muchos los que tienen por artificial esa distinción entre jueces de la Constitución y jueces del Congreso o de las leyes del Congreso; según su crítica unos y otros son jueces nacionales y los segundos no hacen más que librar a los primeros del conocimiento de determinadas causas convirtiéndolos de jueces de excepción en jueces excepcionales y como de primera clase, lo cual es explicable en las provincias, cuyos jueces es natural que cedan en importancia a los que lo son nacionales, pero en la Capital no debería mantenerse esta diferenciación, bastando con que sobre todos a la Corte Suprema incumbiese la función que le marca la Constitución de salvaguardar ésta, los tratados y las leyes que el Congreso dicta con carácter nacional. Ni en lo civil y comercial ni en lo penal se ve, dicen aquellos críticos, la conveniencia de sostener en la Capital dos poderes judiciales.

Dícese también y parece la razón más decisiva, que la situación actual sólo se explica por el antecedente histórico de la



capitalidad de Buenos Aires que se produjo después de una lucha sangrienta en que el vencedor, como en todas acaece, tuvo que aceptar la realidad de una situación anómala en que convivieron durante cerca de veinte años dos poderes, el nacional y el provincial en la ciudad. *Ai posteri l'ardua sentença...*

Parecería entonces que por una ley del Congreso, pues no se necesita enmendar la Constitución, se podría organizar la justicia de la Capital, declarándola toda nacional, atribuyendo a sus jueces por igual dentro de los límites de su respectiva jurisdicción penal, civil o comercial, el conocimiento de todas las causas y procesos, con normas judiciales comunes dentro de las cuales aplicar las prescripciones del derecho sustantivo tanto el común como el federal (como se ha hecho con los jueces de Territorio), con sus Cámaras de apelación y con la Corte Suprema que entendiera como hoy lo hace en lo federal y que podría también ver extendidas sus atribuciones en casos de casación, estrictamente fijados, alta tarea que la convertiría en tribunal de doctrina que por su prestigio influiría moral pero directamente en la administración de justicia en todo el territorio de la Nación. Por lo que ha hecho unificando la jurisprudencia federal, es decir, obrando en esto como Corte de Casación, cabe suponer lo que representaría su unificación de todos los Códigos y leyes, aunque de hecho sólo extendiera su acción a la Capital Federal.

Que esto se hará más tarde o más temprano sobre todo cuando cese la « adoración » por los precedentes norteamericanos y se vaya a la raíz de la vida argentina que tiene caracteres propios, es cosa que cabe presumir. Que muchos la desean es innegable.

Por de pronto, repetimos, la realidad es que hay en la Capital dos órdenes de tribunales. En este capítulo nos ocupamos en los federales.

§ 4º. Constitución, leyes y tratados.

Si la jurisdicción es la parte de soberanía atribuida por la Constitución o las leyes al Poder Judicial, invistiendo a sus jueces de la facultad de administrar justicia, habrá distintas jurisdicciones. Hemos visto ya en qué consisten la federal y

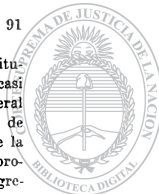


la ordinaria o común. Pero además hay la del Congreso en el enjuiciamiento de ciertos funcionarios, jurisdicción política, hay la militar como la administrativa, la municipal, la policial y en cierto sentido la arbitral.

Concretándonos a la jurisdicción federal, distinguiremos en ella la distinta competencia de sus tribunales. Competencia es el círculo de jurisdicción que se señala a un tribunal principalmente por razón de la porción de territorio sobre el que ejerce sus funciones. La competencia viene señalada por las leyes de organización judicial y el Código de Procedimientos. Pero la jurisdicción federal la ha establecido con arreglo a la Constitución la ley n° 48, cuyo inciso 1° atribuye a los jueces de sección — y por ende a los Tribunales superiores mediante los recursos — *el conocimiento de las causas especialmente regidas por la Constitución, las leyes del Congreso y los tratados.*

1°. *La Constitución.* « Especialmente », ha dicho la ley, por lo que la Corte Suprema ha declarado repetidamente que las disposiciones constitucionales « en cuanto garantizan en general los derechos relativos a la propiedad, lo mismo que los referentes a la vida y libertad de los individuos, no fundan por sí la jurisdicción federal cuando son traídos a juicio, porque para que esta jurisdicción proceda, es necesario, como lo dice el artículo 20, inciso 10 de la ley de la materia, que la causa sea *especialmente* regida por dicha Constitución. Una interpretación contraria extendiendo la jurisdicción federal a todos los casos en que están en cuestión algunos de los derechos mencionados, limitaría considerablemente la jurisdicción provincial para la interpretación y aplicación de los Códigos comunes, por ser materia propia de estos Códigos la reglamentación de tales derechos, limitación que se opone a los artículos 67, inciso 11°, y 100 de la Constitución. »

Con no menor precisión dijo el doctor David Zavala, entonces Procurador fiscal en un juicio contra empleados de policía procesados por violación de domicilio (cita del doctor Clodomiro Zavala, *Derecho federal*, pág. 60) : « Es cierto que la Constitución Nacional dice que el domicilio es inviolable, como también dice que lo son la vida, la libertad y la propiedad de los habitantes de la República; pero para que surta el fuero federal no basta la sola circunstancia de que los dere-



chos que se creen violados estén garantizados por la Constitución, porque de ser así resultaría que el conocimiento de casi todas las causas criminales correspondería a la justicia federal absorbiendo así la de los jueces ordinarios de la Capital y de las provincias y dejándoles sin misión que cumplir porque la mayor parte de los delitos contra las personas, contra la propiedad y demás garantías individuales, importan la trasgresión de alguna cláusula constitucional.» Pueden considerarse como garantías *especialmente* protegidas por la jurisdicción federal, las de los siguientes artículos de la Constitución: 15, 17, 18, 23, 32, 60, 61 y 62.

2°. *Las leyes que ha sancionado y sancione el Congreso.* La Constitución (art. 67, inc. 11°), atribuye a la jurisdicción federal (como a las locales) los Códigos comunes. Las leyes especiales de aplicación, por exclusión, a la Justicia Federal en lo penal son las que dicte el Congreso como leyes de la Nación para toda la Nación y por tanto fuera de la facultad del inciso 27 del mismo artículo 67 (el supuesto Congreso-Legislatura de la Capital) aunque hay algunas de éstas, como la de papel sellado, que se ha declarado «mixta» de jurisdicción federal y local de modo que la imitación fraudulenta de sellos como medio de evitar el pago de impuestos locales no es por su naturaleza un delito del fuero federal.

En la parte tercera de este libro enumeramos y transcribimos las leyes penales todas que ha dictado el Congreso y de ellas ponemos en primer término las de jurisdicción federal.

Digamos aquí que el carácter de éstas, lo que constituye su especialidad, no depende del nombre de la ley, ni aun de su texto mismo, sino de la naturaleza del asunto. Así cuando la ley hoy derogada 7029, que se llamó de defensa social (algunos la llamaban «ley de pánico»), determinó que sus draconianas sanciones fuesen aplicadas por los jueces federales — declarándose así ley *especial* — la Corte estableció que no podía aquélla tener «el alcance amplio de que todos los delitos por ella reprimidos sin distinción de instituciones o personas ofendidas ni de lugares de ejecución, son de competencia de los jueces federales, pues en tal caso se habría investido a éstos de una jurisdicción más extensa que la que el Congreso puede conferirles, y desnaturalizado su misión por el mismo hecho



de convertirlos en jueces del fuero común. » Realmente el Congreso había transgredido la Constitución que fija el campo de la Justicia Federal.

3°. *Los Tratados* celebrados con naciones extranjeras.

Empezando por el tratado de Derecho penal internacional de Montevideo (V. en la Parte Segunda). Hay también muchos celebrados sobre extradición.

§ 5°. *La Corte Suprema.*

La componen cinco Ministros y un Procurador general. Además de las atribuciones de orden reglamentario o de superintendencia y resoluciones de las cuestiones de competencia que determina el artículo 9° de la ley 4055, tiene su jurisdicción propia que unas veces es originaria y otras se ejerce por la vía de los recursos ordinarios o por la vía extraordinaria del recurso del artículo 14 de la ley 68.

Originaria: Surte aquí, repetimos, el fuero federal por razón de las personas. La Corte conoce « originaria y exclusivamente » como tribunal de instrucción (suele delegar estas funciones a uno de los cinco ministros) y de sentencia de las causas criminales de Embajadores, Ministros extranjeros, agentes diplomáticos extranjeros, sus funcionarios y domésticos del modo que una Corte de Justicia puede proceder con arreglo al derecho de gentes, lo que debe entenderse en cuanto a la extraterritorialidad que determina exención de los tribunales del país. En tal caso « el Jefe de la Misión diplomática y los demás indicados sólo son sometidos al poder de la Corte si « el eximido es acusado y acepta que siga el proceso o bien es « querellante, porque en los dos casos ha habido prórroga de « jurisdicción que implica renuncia de la extraterritorialidad. « En caso de conspiración contra el Estado en que reside, el « gobierno de éste sólo puede pedir al gobierno respectivo que « los retire y en caso negativo y en caso también de urgencia, « darles los pasaportes o ponerlos en la frontera » (De nuestro *Código Penal Argentino*, tomo 3°, pág. 106).

Debe entenderse que la exención debe ser alegada por el jefe de la misión (que suele consultar a su gobierno) hasta cuando sea en favor de sus funcionarios, familiares y domésti-



cos como se dice en el inciso 3°. Y que como establece el 4° del caso se resolverá del mismo modo tratándose de funcionarios consulares, siempre que se trate de sus privilegios y exenciones, incluyéndose en ellos los llamados vicecónsules honorarios siempre que hayan recibido el exequatur que los equipara a los de carrera, con el bien entendido de que esos vicecónsules extranjeros, como no gozan del privilegio de extraterritorialidad, no tienen el derecho de ser juzgados en sus causas particulares, originariamente por la Corte Suprema, sino por los jueces federales (ley 48).

Sólo hasta ahora en un caso penal ha conocido la Corte originariamente en delito de un doméstico de Ministro extranjero: en el caso la Corte delegó en uno de sus ministros la función de juez de instrucción y luego actuó en pleno como tribunal de sentencia en única instancia.

Por recurso ordinario: La Corte conoce en última instancia por apelación y nulidad de las sentencias definitivas de las Cámaras Federales (menos de la de la Capital). Las causas de extradición y los delitos de traición, rebelión, sedición, homicidio, por incendio, explosión y naufragio o por piratas y en general cuando la pena excede de diez años de prisión, son de jurisdicción de la Corte, cuando no por vía de apelación, por consulta. Entre los recursos ordinarios entra el de revisión de los artículos 551-555 del Código de Procedimientos y el de queja por retardo o denegación de justicia.

Por recurso extraordinario: Conoce la Corte Suprema de las resoluciones definitivas de cualquier tribunal nacional (incluso la Cámara de la Capital) local o provincial y también los militares (art. 6°, ley 4055) en los casos del artículo 14 de la ley 48, es decir:

1°. Cuando en el *pleito* (debe entenderse aquí *causa*) se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley del Congreso, o de una autoridad nacional y la decisión recurrida haya sido contra su validez.

2°. Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad haya sido tachada de repugnante ⁽¹⁾ a la Constitución Nacional, a

(1) La palabra *repugnante*, por lo expresiva y rigurosamente jurídica, fué empleada por el autor de este libro, hace muchos años, en un escrito judicial en que se expresaba serlo para el letrado del querellante damnificado seguir patrocinando a éste en un proceso en que se venía pi-



los tratados o Leyes del Congreso y la decisión haya sido en favor de la validez o autoridad de Provincia.

3°. Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, de un tratado o ley del Congreso, o una comisión en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia del litigio (o causa).

Se previene que el recurso extraordinario no procede por la alegada mala interpretación o aplicación que los tribunales de provincias (y los ordinarios de la Capital) hiciesen de los Códigos Civil, Comercial, Penal o de Minería.

La misma Corte ha dictado muchos fallos en que establece la procedencia del recurso extraordinario. Véase algunos:

—Los fallos provinciales no podrán ser considerados por la Corte en cuanto hayan apreciado los hechos e interpretado sus propias leyes.

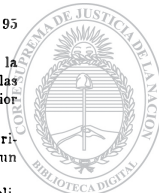
—No procede el recurso por la aplicación que hayan hecho los tribunales locales de la ley de quiebras ⁽¹⁾.

—No procede cuando se haya citado un artículo de la Constitución o una ley del Congreso que no han sido materia de discusión ante el tribunal superior de provincia ni han servido de base a la sentencia.

diendo inútilmente que el juez redujera a prisión al procesado. (El juez había renovado en un Banco un pagaré firmado por éste.) Dicho magistrado, poco versado en literatura jurídica, se alarmó ante la palabra y prendió no al procesado, sino al patrocinante de la víctima de éste; vino luego un proceso por desacato en el que naturalmente el letrado fué absuelto en primera y segunda instancia; el agente fiscal, no menos ignaro había apelado. Más tarde los azarres de la política llevaron al juez en cuestión a un alto cargo en su provincia, en que no reveló grandes progresos en el conocimiento literal y esencial de las leyes.

(1) Se discute todavía el punto. Es evidente que al Congreso (Constitución, art. 67, inc. 11°) corresponde dictar especialmente leyes generales sobre bancarrotas. En realidad el Congreso ya lo ha hecho al dictar el Código de Comercio, cuyo libro cuarto trata de las quiebras. Para considerar que el conocimiento de éstas es de la justicia federal se alegan los antecedentes norteamericanos pero allí no hay Código general de comercio. El régimen argentino de quiebras se refiere sólo a los comerciantes. La bancarrota de que habla la Constitución es, pues, la mercantil. Del concurso civil tratan las leyes provinciales o locales.

A pesar de esto se sigue alegando que las quiebras deben ser consideradas de derecho federal: es un caso de respeto a los antecedentes constitucionales de Estados Unidos que no son en todo — y menos en el caso — irrotables siempre entre nosotros. (V. sobre este punto en la Parte segunda nuestra nota a la ley de quiebras.)



—La Corte no puede considerar otras disposiciones de la Constitución, tratados o ley federal que las invocadas en las instancias inferiores y en la sentencia del tribunal superior local.

—La sentencia para ser recurrible ha de emanar de un tribunal de última instancia que puede serlo una Cámara o un juez en el caso.

—Los recursos deben fundarse en citas concretas con aplicación al caso resuelto: no basta una referencia general a la Constitución o ley especial.

—El término de cinco días para el recurso, es fatal.

—Las leyes y los actos administrativos emanados de las autoridades, que se aleguen ser repugnantes a la Constitución local no pueden ser objeto del recurso extraordinario, sino sólo de los recursos previstos por las leyes provinciales respectivas ante el Superior tribunal provincial.

—La interpretación y aplicación por los tribunales locales de sus propias leyes de procedimiento no dan lugar al recurso extraordinario a no ser que ante aquéllos hayan sido impugnados como violatorias de la garantía de defensa en juicio o alguna otra contenida en la Constitución Nacional.

§ 6°. *Cámaras Federales.*

Las Cámaras Federales se componen de tres miembros, excepto la de la Capital que cuenta con cinco. Las respectivas circunscripciones son:

Capital: Esta, las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan.

La Plata: La provincia de Buenos Aires, excepto Bahía Blanca.

Bahía Blanca: La ciudad.

Rosario: La provincia de Santa Fe.

Paraná: Las de Entre Ríos y Corrientes.

Córdoba: Las de Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Salta.

Las atribuciones de cada Cámara, además de las cuestiones de competencia especiales que determina la ley 4055, artículo 3°, y de la superintendencia (su artículo 23), son las de conocer «en grado de apelación y en última instancia», salvo las que



hemos visto que llegan hasta la Corte Suprema (en que no entran, vimos, las de la Cámara de la Capital), las causas que les llegan:

1°. De los recursos contra las resoluciones de los jueces de sección. Exceptúanse las del artículo 3°, ley 4055, que hemos visto en el párrafo anterior. Se entiende que las Cámaras conocen de las apelaciones de estas sentencias aunque no en última instancia que es la de la Corte.

2°. De los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los jueces de territorios aunque fuesen dictados en causas criminales del fuero común. Como veremos, estos jueces tienen ambas jurisdicciones.

3°. De los recursos de queja contra los jueces de sección y de territorio. En cuanto al recurso de nulidad, como debe deducirse a la par que el de apelación, se comprende en el inciso anterior. En realidad este inciso sobra en la ley, pues el 1° habla de «recursos» sin distinción.

4°. De las sentencias que eleven en consulta los jueces de territorio, según el artículo 42 de la ley 1532, que las limita a los asuntos en que sean parte el fisco, los incapaces y los menores. En lo penal sólo se aplicará esto en los asuntos en que estos últimos sean parte (Ley del Patronato).

Por alguna de las leyes de la Nación tienen facultades de tribunal contencioso administrativo.

§ 7°. Jueces de Sección.

Hay los siguientes jueces de sección:

Capital: Según la ley 27 correspondía a la provincia de Buenos Aires y su capital (aunque en ésta residieran los altos poderes de la Nación) un juez; pero al federalizar la Capital (1880), hubo que señalar un juez para ésta, dejando a la provincia el suyo (ley 1144). La ley 1892, del año 1886, aumentó otro juzgado para la Capital, siendo de los dos uno para lo criminal y otro para lo mercantil, turnándose para lo civil. Finalmente la ley de presupuesto para 1898 estableció el actual régimen: tres jueces de sección, uno para lo criminal y los otros dos siguieron turnándose para lo civil y comercial.

Buenos Aires: Son tres los jueces de sección con sede en La Plata, Bahía Blanca y Mercedes. La ley 4074 establece



la jurisdicción de las dos secciones y la 11.192 la del tercero, pero éste no funciona todavía.

Santa Fe: Tiene dos jueces federales con el reparto de departamentos que hace el artículo 1° de la ley 4074.

Entre Ríos: Tiene dos, uno en Concepción y otro en Paraná. V. ley 5011.

Córdoba: Tiene también dos, uno en la capital de la provincia y otro en Bell Ville. Ley 8843.

Demás provincias: Tiene cada una un juez de sección: el de la de Salta lo es de 1ª instancia del territorio de Los Andes (V. ley 3906, en el tercer capítulo de esta Parte segunda). El mismo juzgado de Salta abarcó la provincia de Jujuy (refundición establecida en la ley 767) pero fué por poco tiempo; la ley 1039 restableció los dos juzgados.

No hay jueces federales de instrucción y de sentencia: el mismo juez de sección instruye el sumario que puede cerrar por auto de sobreseimiento o entrar en el plenario ⁽¹⁾.

(1) Puede ser útil reunir aquí lo concerniente a nombramientos de jueces y magistrados, incompatibilidades y juicio político, materia que comprende no sólo a la justicia federal, sino a la ordinaria de la Capital y territorios.

Los jueces de todos los tribunales federales y ordinarios, unipersonales o colegiados son nombrados por el Poder Ejecutivo de la Nación, con acuerdo del Senado y en caso de receso de éste el nombramiento es en comisión.

Las distintas condiciones para ser nombrados son las siguientes:

Para ser Ministro de la Corte exige la Constitución (art. 97) ser abogado de la Nación con ocho años de ejercicio «y tener las cualidades requeridas para ser Senador». Esto evidentemente sólo se refiere de las que exige a los últimos el art. 47, a la edad, treinta años, las otras dos, renta anual y procedencia de la provincia que los nombra, no se refieren a los magistrados de la Corte.

Para ser miembro de una Cámara se requiere (art. 93 de la ley orgánica 1893) ser ciudadano mayor de treinta años, y seis años de ejercicio de la abogacía o de empleo en el orden judicial.

Para ser juez se requieren (ídem, art. 70), las mismas condiciones, si bien los seis años quedan reducidos a cuatro.

Antes de ocupar sus puestos prestan juramento los ministros de la Corte y los miembros de las Cámaras ante el respectivo cuerpo en que ingresan; los jueces federales ante la autoridad que fije el P. E., los locales ante su respectiva Cámara, los de Territorio ante la Corte, los de Paz de éstos ante su Consejo Municipal, los de la Capital, ante la Cámara Civil.

Como incompatibilidades en general los jueces no pueden ser diputados ni senadores, ni desempeñar ninguna otra función pública, retribuida o no; se exceptúan los casos docentes. Tampoco pueden ejercer la profesión de Abogado.

Los jueces federales no pueden serlo provinciales o locales.

En las Cámaras (incluso las de jurisdicción ordinaria de la Ca-



§ 8º. Otros funcionarios judiciales.

El ministerio fiscal tiene los siguientes funcionarios:

Procurador General de la Suprema o de la Nación:

Sus atribuciones vienen señaladas en el Código de procedimientos, artículo 116:

Intervenir en las causas de jurisdicción originaria de la Corte que al efecto le da vista o traslado.

Intervenir en los asuntos en que hubieran intervenido los

pital) no pueden ser simultáneamente jueces de la misma Cámara, los parientes o afines dentro del cuarto grado civil y si sobreviene afinidad el que la causare debe abandonar su puesto.

No pueden ejercer el comercio los jueces en el territorio donde lo son: se exceptúan los que no hagan del comercio profesión habitual y los accionistas de una sociedad. El Código de Minas, art. 20, les prohíbe adquirir minas ni tener en ellas (las de su jurisdicción) parte, interés, ni derecho alguno, salvo (art. 21) en las minas adquiridas antes del nombramiento.

Tampoco pueden los jueces constituirse en cesionarios de créditos sobre los que ante ellos se litiguen ni comprar bienes de menores o incapaces cuyas tutelas o curatelas hayan discernido o cuyas cuentas tengan que considerar. Tampoco pueden intervenir en causas en que puedan tener vinculaciones de familia, amistad, odio o intereses.

El juicio político es la sanción de la mala actuación de los jueces (inconducta) por su inmoralidad patente, su incompetencia manifiesta, la trasgresión de las incompatibilidades, la parcialidad o la negligencia.

La declaración de inconducta se hace en el juicio a que se refiere el artículo 45 de la Constitución, el que atribuye a la Cámara de Diputados la acusación y al Senado la resolución.

En cuanto a la primera el mismo artículo previene que debe conocer de los cargos que se atribuyen al acusado y declarar por dos tercios de votos presentes que procede la formación de causa.

El reglamento de la Cámara de Diputados no hace al juicio político más que la breve referencia del artículo 68: «Corresponde a la comisión de investigación judicial dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios públicos sometidos a juicio político por la Constitución y en las quejas o denuncias que contra ellos se presentara a la Honorable Cámara.» Con esto último comprende también a los magistrados que no son federales. En cuanto al Senado, un Apéndice a su reglamento, establece el siguiente procedimiento: se constituye el Senado en tribunal previo juramento ante su Presidente que avisa de ello a la Cámara de Diputados y emplaza al acusado que tiene nueve días para contestar por sí o por defensor, pudiendo luego abrirse a prueba que será pública, después de lo cual se oirá el informe de la acusación representada por tres o más diputados y el de la defensa, procederá a la votación que siendo contraria los 2/3 al acusado (con declaración de culpable) puede también por votación declararlo incapaz de ocupar empleo de honor, de confianza o a sueldo de la Nación por tiempo indeterminado.

Después de la resolución del Senado es llegado el caso de aplicación — por el respectivo tribunal criminal — de las penas de los arts. 269, 270 y 273 del Código Penal y por la justicia civil de las indemnizaciones de los arts. 1109 y 1112 de su Código.



procuradores fiscales en primera instancia, lo cual no le obliga a aceptar sus pedidos.

Puede hacer que los procuradores fiscales promuevan las cuestiones que les correspondan; pero este ensayo de articulación del Ministerio público, de hecho no ha prosperado.

Procuradores Fiscales de Cámara de Apelación:

Son uno para cada Cámara, salvo en las de Córdoba y Paraná en que ejerce este cargo el Procurador Fiscal.

Sus atribuciones son, en su Cámara, las mismas que tiene el procurador general ante la Corte.

Tiene además las del artículo 461 del Código de Procedimientos (en el caso de sobreseimiento pedido por el procurador fiscal y denegado por el juez) porque aunque dicho artículo habla del procurador de la Corte, la ley 4162 la atribuye al fiscal de Cámara.

Procuradores fiscales (Art. 118, Cód. de Proced.):

Promueven la averiguación y enjuiciamiento de los delitos de fuero federal, pidiendo lo necesario al efecto, interviniendo en el examen de testigos y demás pruebas.

Requieren el despacho de los procesos y vigilan el fiel cumplimiento de las leyes de fondo y procesales, especialmente en punto a competencia.

Deducen los recursos que corresponden (reposición, apelación, nulidad y queja).

JURISDICCION ORDINARIA DE LA CAPITAL

**Textos legales.**

I. Ley n° 1893. Organización de los Tribunales de la Capital (menos los títulos 6° y 9° dados en Textos legales del anterior capítulo: Ley VIII). — II. N° 2644. Nuevos Juzgados de Instrucción. — III. N° 2860. Justicia de Paz. — IV. N° 3071. Fiscales de Cámara. — V. N° 7055. Reorganización de la Justicia ordinaria de la Capital. — VI. N° 8918. Reorganización de la Cámara.

Notas sobre penalidad en las leyes I y III.

I.—Organización de los Tribunales de la Capital

N° 1893 Suprimimos de esta ley el título primero:
12 Nov. 1886 Alcaldes, jueces de paz, Cámaras de Paz y el se-
y N° 2222 gundo, Jueces de Mercado, por ser materia ajena
11 Nov. 1889 a lo penal (y aquél está además derogado por la
ley n° 2860, de 23 de noviembre de 1891). Suprimimos tam-
bién sus últimos títulos: el XIII del Registro y escrituras; el
XIV, Registro de la Propiedad, hipotecas, etc.; el XV, Archivo
general de los Tribunales; y el XVI, Disposiciones complemen-
tarias, éste por sido en gran parte derogado, y aquéllos por re-
ferirse principalmente a lo civil.

TITULO III

DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA

Art. 60. Los Jueces de lo Civil de la Capital conocerán en 1° ins-
tancia de todos los asuntos regidos por las leyes civiles, con las li-
mitaciones prescriptas en la presente ley y en la de Procedimientos.

En los juicios sucesorios y de concurso civil de acreedores, si de las di-



ligencias practicadas resultare que su monto no excede de dos mil pesos, dispondrá pasen los precedentes al Juez de Paz respectivo.

Art. 61. Sus sentencias y resoluciones son apelables para ante la Cámara de lo Civil.

Art. 62. Los Jueces de Comercio entenderán en 1ª instancia de todos los asuntos regidos por el Código y leyes de Comercio con las limitaciones establecidas en esta ley y en la de Procedimientos. En los juicios de concurso comercial de acreedores, cuando de las diligencias practicadas resultare que su monto no excede de dos mil pesos, dispondrán pasen los antecedentes al Juez de Paz respectivo.

Art. 63. Sus sentencias y resoluciones serán apelables para ante la Cámara en lo Comercial.

Art. 64. Mientras no se establezca el juicio por jurados, los Jueces de lo Criminal conocerán:

1º En todos los juicios por delitos en los que pueda imponerse pena mayor de un año de prisión o mil pesos de multa;

2º De las causas por defraudación de rentas fiscales, cuando provengan de impuestos establecidos exclusivamente para la Capital.

Art. 65. La sentencia y resolución serán apelables en 2ª y última instancia para ante la Cámara en lo Criminal.

Art. 66. Los Jueces de lo Correccional conocerán en 1ª instancia de los delitos en que la pena no exceda de un año de prisión o mil pesos de multa.

Art. 67. Sus sentencias y resoluciones en las causas que conozcan originariamente serán apelables en 2ª y última instancia para ante la Cámara de lo Criminal.

Art. 68. Conocerán en segunda y última instancia de los recursos interpuestos contra las resoluciones de la Municipalidad o Policía, cuando la pena impuesta exceda de cinco días de arresto o veinte pesos de multa.

Art. 69. Los Jueces de 1ª Instancia serán nombrados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado.

Conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y gozarán del sueldo que les asigne la ley, el cual no podrá ser disminuido mientras permanecieren en sus funciones.

Art. 70. Para ser Juez de 1ª Instancia se requiere ser ciudadano argentino, tener 30 años de edad, haber ejercido en el país la profesión de abogado durante 4 años, o desempeñado por igual término una magistratura o empleo judicial.

Art. 71. Al recibirse del cargo prestarán juramento ante la Cámara respectiva, de desempeñarlo fielmente y de conformidad con lo que prescriben la Constitución y las leyes de la Nación.

Art. 72. Los Jueces de 1ª Instancia darán audiencia diariamente, pudiendo habilitar horas y días feriados, cuando los asuntos de su competencia lo requieran, con sujeción a las leyes de Procedimientos. Las audiencias serán públicas, salvo cuando el decoro exija reserva.

Art. 73. Las resoluciones, órdenes y despachos de los Jueces de 1ª



Instancia deberán ser firmados por ellos y autorizados con la firma de un Secretario.

Art. 74. Cada Juzgado tendrá para el despacho de los asuntos el número de Secretarios que por la ley se determine: tendrán igualmente un Oficial de Justicia y los ordenanzas necesarios para el servicio, con el sueldo que respectivamente les asigne la ley de presupuesto.

Art. 75. Los Jueces de 1ª Instancia tendrán facultad para reconvenir y penar las faltas contra su autoridad y decoro, ya sea que se cometan en las audiencias o en los escritos, pudiendo dictar apercibimientos e imponer hasta diez días de arresto o cuarenta pesos de multa, según los casos.

Art. 76. Los Jueces de 1ª Instancia podrán corregir a los Secretarios y demás subalternos de los respectivos Juzgados, con apercibimiento, suspensión temporaria, que no exceda de diez días, o multas que no excedan de cuarenta pesos por faltas en el ejercicio de sus funciones.

Art. 77. Trimestralmente pasarán a la Cámara correspondiente una relación que contenga el movimiento de sus juzgados, expresando el número de asuntos iniciados, terminados y de las providencias y sentencias dictadas, debiendo en cuanto a estas últimas expresarse los asuntos en que hubiesen recaído. Los Jueces del Crimen y de lo Correccional, deberán además expresar en dicha relación el estado de cada causa.

TITULO IV

DE LAS CAMARAS DE APELACIONES

Art. 78. Habrá dos Cámaras de Apelaciones, una en materia Civil y otra en materia Criminal, Correccional y Comercial.

Art. 79. Cada Cámara se compondrá de un Presidente y cuatro Vocales.

Art. 80. La Cámara de lo Civil conocerá en última instancia:

1º De los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los Jueces de 1ª Instancia en lo Civil;

2º De los recursos de fuerza;

3º De los recursos contra las resoluciones de la Municipalidad, en asuntos de carácter contencioso-administrativo;

4º De los recursos por retardación o denegación de justicia por parte de los Jueces de 1ª Instancia.

Art. 81. La Cámara de lo Criminal, Correccional y Comercial, conocerá en última instancia de los recursos contra las resoluciones de los respectivos Jueces Letrados.

Art. 82. Las providencias de mera sustanciación, serán dictadas por el Presidente de cada Cámara o por quien lo reemplazare, pudiendo pedirse en el término de tres días reforma o revocatoria, ante la Cámara, debiendo ésta resolver el caso sin más trámite.

Art. 83. Las Cámaras formarán Tribunal con el Presidente y dos Vocales para la decisión de los recursos interpuestos contra las reso-



luciones interlocutorias y las definitivas en juicios sumarios y sus resoluciones serán a simple mayoría.

Art. 84. A los efectos del artículo precedente, los Vocales de cada Cámara se turnarán mensualmente, y en caso de impedimento o recusación del Presidente o vocales en turno, se subrogarán con los otros.

Art. 85. Para juzgar en definitiva en juicio ordinario, las Cámaras procederán con el número íntegro de sus miembros, pero podrán también hacerlo con tres o cuatro miembros en caso de impedimento o de recusación, siempre que las partes no pidiesen integración o el Tribunal no la ordenase.

Art. 86. Las sentencias definitivas deberán fundarse cuando menos en la opinión conforme de la mayoría del Tribunal, aunque los motivos de esas opiniones sean diversos.

Art. 87. En las causas criminales en que pudiera imponerse penas por más de diez años, la Cámara respectiva sólo podrá conocer y resolver con el número íntegro de sus miembros.

Art. 88. Cuando en las causas a que se refiere el artículo anterior hubiese de confirmarse meramente, con o sin costas, la sentencia del Juez inferior, bastará la opinión uniforme de tres miembros, aunque difieran en sus motivos; pero si por esta sentencia hubiera de elevarse el tiempo de la pena impuesta por el Juez inferior a más de diez años, será necesario la uniformidad de los cinco miembros en la decisión.

Art. 89. La pena de muerte sólo podrá aplicarse por el Tribunal íntegro y por unanimidad de votos.

Art. 90. Contra las sentencias dictadas por las Cámaras, no habrá recurso alguno, con excepción de los casos previstos por el artículo 14 de la ley de septiembre de 1863 sobre jurisdicción y competencia de los Tribunales Nacionales.

Art. 91. Cada Cámara tendrá un Secretario que autorizará con su firma las providencias, resoluciones y sentencias por ellas dictadas.

Art. 92. Las Cámaras de Apelaciones funcionarán todos los días hábiles. Las audiencias serán públicas a menos que razones de decoro requieran reserva.

Art. 93. Las Cámaras tendrán el tratamiento de «Excmo. Cámara».

Art. 94. Para ser miembro de las Cámaras, se requiere ser ciudadano mayor de 30 años, haber ejercido en el país durante 6 años la profesión de abogado o desempeñado alguna magistratura o empleo judicial por igual tiempo.

Art. 95. Los Jueces nombrados prestarán juramento de desempeñar sus funciones bien y fielmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución y las Leyes de la Nación, ante la Cámara para que fuesen designados.

Art. 96. El nombramiento de los miembros de las Cámaras será hecho por el Presidente de la República con acuerdo del Senado.



Art. 97. Cada Cámara nombrará su Presidente. La designación se hará por elección entre los vocales.

Art. 98. En caso de impedimento o recusación de alguno de los miembros de una de las Cámaras, será reemplazado por uno de la otra Cámara, designado por sorteo; y si todos los miembros de ésta estuvieren igualmente impedidos, su reemplazo se hará en la misma forma con los Jueces de 1ª Instancia que no hubieren conocido en la causa.

Art. 99. Cada Cámara nombrará su Secretario y demás empleados y los Secretarios y empleados de los Jueces de 1ª Instancia según corresponda a la jurisdicción y a propuesta de los Jueces.

Art. 100. No podrán ser simultáneamente Jueces de una misma Cámara los parientes y afines dentro del 4º grado civil. En caso de afinidad sobreviviente, el que la causare, abandonará su puesto.

Art. 101. En caso de producirse contienda de competencia entre ambas Cámaras, el Presidente de la Sala de lo Civil los reunirá en tribunal y la decidirán a mayoría de votos; si hubiese empate se dará intervención a un Juez de 1ª Instancia elegido en la forma del artículo 97, quien la decidirá con su voto.

Las que se susciten entre los Jueces de diversa jurisdicción en la Capital, serán resueltas en última instancia por la cámara de Apelación de quien depende el Juez que primero hubiera conocido.

TITULO V

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 102. Cada Cámara ejercerá superintendencia sobre los Tribunales y funcionarios inferiores de su ramo y dictará los reglamentos convenientes para la mejor administración.

Para el ejercicio de la superintendencia serán citados todos los miembros del Tribunal, bastando para formarlos la concurrencia de la mayoría. La Cámara en lo Civil ejercerá superintendencia sobre los Jueces y Cámaras de Paz.

Art. 103. La superintendencia de las Cámaras comprende:

1º Velar por el orden y disciplina de los Tribunales, oficinas y funcionarios de su dependencia;

2º Imponer a los Jueces inferiores y demás funcionarios, penas disciplinarias por infracciones a los reglamentos internos de los Tribunales, por faltas a la consideración y respeto a los magistrados, por actos ofensivos al decoro de la Administración de Justicia y por negligencia en el cumplimiento de sus deberes, pudiendo aplicar penas que consistirán en apercibimientos o multas que no excedan de doscientos pesos;

3º Tomar o proponer, según los casos, las medidas necesarias para que los registros y archivos de las Oficinas Públicas de la Administración, se conserven en buen estado y con toda seguridad.



Art. 104. La autoridad policial de la Casa de Justicia estará a cargo del Presidente de la Cámara de lo Civil; pero si funcionase en la misma casa la Corte Suprema, corresponderá esa autoridad al Presidente de ésta.

Art. 105. A la Cámara de lo Criminal, incumbe la visita de cárceles, que deberá hacerse trimestralmente y mensualmente por uno de sus miembros.

Art. 106. Los miembros de las Cámaras de Apelaciones y los Jueces de 1ª Instancia, no podrán ser separados de su cargo sino por sentencia del Senado, mediante acusación de la Cámara de Diputados.

Art. 107. Las Cámaras podrán reprimir con apercibimiento y pena de multa que no exceda de 80 pesos o arresto de 20 días, las faltas contra su autoridad y decoro, ya sea en las audiencias o escritos.

Art. 108. Corresponde a las Cámaras examinar las relaciones que les pasarán los Jueces, del movimiento de sus respectivos Juzgados, debiendo en caso que notaren negligencia o retardo, conminar a los Jueces al cumplimiento de su deber; y cuando esas faltas fuesen reiteradas, las pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo para que éste dé cuenta a la Cámara de Diputados a los efectos consiguientes.

Art. 109. Cada Cámara pasará anualmente al Ministerio respectivo una memoria que contenga el movimiento de la Administración de Justicia, en su ramo correspondiente, observando los abusos e inconvenientes que hubiese notado en su marcha o en la aplicación de las leyes, y proponiendo todas aquellas medidas tendientes a su mejoramiento y a la más pronta y expedita marcha de la Justicia.

TITULO VII

DEL MINISTERIO PUBLICO

Art. 116. El Ministerio Público será desempeñado ante los Tribunales de la Capital por un Fiscal de las Cámaras de Apelación y por Agentes Fiscales ante los Jueces de 1ª Instancia y ante la Justicia de paz.

Art. 117. Corresponde al Ministerio Público:

1º Representar y defender la causa pública en todos los casos y asuntos en que su interés lo requiera;

2º Promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales;

3º Requerir el cumplimiento de las penas impuestas y de las leyes relativas a presos y sentenciados;

4º Velar por el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que deben aplicar los Tribunales, pidiendo el remedio de los abusos que notaren;

5º Defender la jurisdicción de los tribunales;

6º Intervenir en todos los negocios concernientes al orden público.



Art. 118. Corresponde especialmente a los Agentes Fiscales de lo Criminal y Correccional:

1º Promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos que se cometieren en la jurisdicción de la Capital y que llegasen a su conocimiento por cualquier medio, pidiendo para ello las medidas que consideraren necesarias, sea ante los Jueces o ante cualquier otra autoridad inferior, salvo aquellos casos en que por las leyes penales no sea permitido obrar de oficio;

2º Promover las acciones que correspondan contra la publicación y circulación de escritos, grabados y estampas que fueren contrarias a la moral pública;

3º Asistir al examen de testigos y verificación de otras pruebas en los procesos, y ejercitar todas las acciones y recursos previstos en las leyes penales y de procedimientos;

4º Requerir de los Jueces el activo despacho de los procesos, deduciendo en caso necesario los reclamos que correspondan;

5º Asistir a las visitas de Cárcelas y dar datos e informes a los Jueces sobre las causas que estuviesen a su despacho.

Art. 119. Corresponde a los Agentes Fiscales en lo civil intervenir: 1º En todo asunto en que haya interés fiscal a menos que la representación de esos intereses estuviese asignada a otra repartición administrativa; 2º En los juicios sucesorios, en los casos en que por ley corresponda; 3º En los casos que interesen a los establecimientos de beneficencia u otras instituciones del Estado, cuando no tuvieren representante determinado por las leyes; 4º En las declinatorias de jurisdicción y cuestiones de competencia; 5º En las causas sobre nulidad de matrimonios celebrados sin autorización de la Iglesia Católica o sobre divorcio entre los casados sin esa autorización; 6º En las causas sobre filiación y todas las demás relativas al estado civil de las personas; 7º En los juicios sobre venias supletorias de mujeres casadas; 8º En las declaraciones de pobreza; 9º En todos los demás asuntos en los que el Ministerio Público deba ejercer funciones según lo dispongan los Códigos Civil, Mercantil o leyes especiales.

Art. 120. Corresponde al Fiscal de las Cámaras:

1º Continuar ante ellas la intervención que el Ministerio Público hubiese tenido ante los Jueces inferiores;

2º Intervenir en los asuntos que se promovieren relativos a la superintendencia de las Cámaras;

3º Promover la aplicación de penas disciplinarias contra los Jueces inferiores y demás empleados subalternos de la Administración de Justicia;

4º Intervenir en los recursos de fuerza;

5º Cuidar de que los Agentes Fiscales promuevan las gestiones que les corresponda;

6º Asistir a los acuerdos de las Cámaras cuando fuese invitado.

Art. 121. Para ser Fiscal de las Cámaras se requieren las mismas condiciones que para Vocal de éstas; y para Agente Fiscal, la de Juez



de 1ª Instancia, con sólo dos años de ejercicio en el país de la profesión de abogado.

Art. 122. Los miembros del Ministerio Público no podrán abogar ni ejercer representación de terceros en juicio; pero podrán hacerlo en sus propios asuntos o en los de sus esposas, padres e hijos.

Art. 123. El Fiscal de las Cámaras, será nombrado y removido con las mismas formalidades que los vocales de éstas.

Art. 124. Los Agentes Fiscales serán nombrados y removidos por el Presidente de la República.

Art. 125. Al tomar posesión del cargo, el Fiscal y Agentes Fiscales de lo Civil, prestarán juramento en la Cámara de lo Civil, y los Agentes Fiscales de lo Criminal ante esa Cámara, de desempeñar fielmente sus empleos.

Art. 126. Los Agentes Fiscales deberán dar conocimiento al Fiscal de cualquier irregularidad que notaren, y procurarán la unidad posible en la acción del Ministerio, poniéndose de acuerdo con aquel funcionario, sin perjuicio de la independencia de sus opiniones.

Art. 127. Los Agentes Fiscales deberán llevar, además de los libros que exprese el Reglamento de sus oficinas, un registro especial, en que anotarán todos los asuntos en que aparezca indudable el interés fiscal, y pasarán trimestralmente al Ministerio de Hacienda una relación de dichos asuntos y del estado en que se encuentren.

TITULO VII

DE LOS DEFENSORES Y ASESORES DE MENORES E INCAPACES

Art. 128. La guarda y protección oficial de las personas e intereses de los menores e incapaces, en los casos previstos por las leyes estarán a cargo de los Defensores y Asesores Letrados que en esta ley se establecen.

Art. 129. Los defensores tendrán las siguientes atribuciones:

1º Cuidar de los menores huérfanos o abandonados por los padres, tutores o encargados; tratar de colocarlos convenientemente, de modo que sean educados o se les dé algún oficio o profesión que les proporcione medios de vivir;

2º En caso de tener bienes, tomarán las medidas necesarias para su seguridad y para que se les provea de tutores;

3º Atender las quejas que se les llevasen por malos tratamientos a menores, dadas por los padres, parientes o encargados, y dar cuenta a los Asesores Letrados para que, en caso que corresponda, eleven la queja a los Jueces o tomen por sí medidas para evitar tales hechos, sea sacando a los menores del poder en que se encuentren cuando no estén en el de los padres, para colocarlos en mejores condiciones, o procediendo como se considere más prudente;

4º Imponer penas de reclusión correccional con intervención judi-



cial en las casas destinadas al objeto, a los menores que observasen mala conducta. Esas reclusiones no podrán exceder de un mes;

5º Inspeccionar los establecimientos de Beneficencia y Caridad, e imponerse del tratamiento y educación que se les dé a los menores, dando cuenta a quien corresponda de los abusos o defectos que notaren;

6º Hacer arreglos extrajudiciales con los padres sobre prestación de alimentos a sus hijos naturales, y con los tutores y curadores sobre las personas y derechos de los incapaces;

7º Ejercer todos los demás actos que fueren del caso para la protección de los menores como lo haría un buen padre de familia.

Art. 130. Las disposiciones precedentes son también aplicables a la guarda y protección de las personas e intereses de los incapacitados mayores de edad, sin excluir en uno y otro caso los derechos que a los padres, hijos, parientes, tutores y curadores correspondan.

Art. 131. Los Defensores de Menores pueden llamar y hacer comparecer a su despacho a cualquier persona cuando a su juicio sea necesario para el desempeño de su Ministerio, para pedir explicaciones o contestar a cargos que por mal tratamiento a menores o incapaces, o por cualquier otra causa se formularan. Pueden con el mismo objeto dirigirse a cualquier autoridad o funcionario público.

Art. 132. Los Defensores pueden proceder de oficio y extrajudicialmente en la defensa de las personas e intereses puestos bajo su guarda.

Art. 133. Los Defensores pedirán dictamen verbal o escrito y consultarán a sus Asesores Letrados sobre las dudas o dificultades que les ocurran en el desempeño de sus funciones.

Art. 134. La intervención en los asuntos judiciales en que se trate de la persona o bienes de incapaces, corresponde exclusivamente a los Asesores Letrados.

Art. 135. Para ser Defensor, se requiere ser ciudadano argentino, mayor de cincuenta años, y tener las aptitudes necesarias para desempeñar el cargo.

Art. 136. Los Defensores y Asesores gozarán del sueldo que les fije la Ley del Presupuesto, y los primeros tendrán para el desempeño de sus funciones un escribiente y un portero, que serán nombrados por los Defensores.

Art. 137. Corresponde a los Asesores de Menores:

1º Intervenir en todo asunto judicial que interese a la persona o bienes de los menores de edad, dementes y demás incapaces, y entablar en su defensa las acciones o recursos necesarios, sea directa o conjuntamente con los representantes de los incapaces;

2º Dar dictámenes escritos o verbales, según el caso, en aquellos asuntos en que fueren consultados por los Defensores de Menores.

Art. 138. Para ser Asesor de Menores se requieren las mismas condiciones que para Agente Fiscal.

Art. 139. Los Defensores y Asesores de Menores serán nombrados y removidos por el Presidente de la República.



TITULO IX

DEFENSORES DE POBRES Y AUSENTES

Art. 140. La defensa oficial se hará en la Capital de la República por un Defensor de Pobres y Ausentes ante la Suprema Corte y Juzgados Federales, y por siete defensores de Pobres y Ausentes ante los Juzgados de Paz, Civil, Comercial, del Crimen y Correccional, y para ante las Cámaras respectivas.

Art. 141. Los deberes y atribuciones del 1º, serán establecidas por la Suprema Corte, y por las Cámaras de Apelaciones de la Capital, los que deban corresponder a los demás.

Art. 142. Para ser nombrado Defensor de Pobres o Ausentes se requiere ser ciudadano argentino, haber ejercido en el país durante dos años, por lo menos, la profesión de abogado o haber desempeñado durante ese término una magistratura.

Art. 143. El nombramiento y remoción de estos funcionarios corresponde al Poder Ejecutivo, sin perjuicio de que la Suprema Corte o las Cámaras de Apelaciones, según los casos, puedan también amonestarlos, suspenderlos temporalmente o destituirlos.

Art. 144. Gozarán del sueldo mensual que les asigne el Presupuesto.

TITULO X

DEL MEDICO DE LOS TRIBUNALES

Art. 145. Habrá un Médico de los Tribunales que dará los informes y practicará los reconocimientos que estos necesiten y le pidan para mejor desempeño de sus funciones. El médico será nombrado por el Presidente de la República, y gozará del sueldo que le asigne la Ley de Presupuesto.

TITULO XI

SECRETARIOS Y DEMAS EMPLEADOS DE LAS CAMARAS

Art. 146. Para ser Secretario de las Cámaras se requiere ser abogado.

Art. 147. Las obligaciones de los Secretarios serán:

- 1º Concurrir a los acuerdos y redactarlos en el libro respectivo;
- 2º Formular los proyectos de sentencia en vista de los acuerdos;
- 3º Dar cuenta de los escritos, peticiones, oficios y demás despachos, sin demora;



4º Autorizar las actuaciones, providencias y sentencias que ante ellos pasen;

5º Custodiar los expedientes y documentos que estuvieren a su cargo, siendo directamente responsables de su pérdida o deterioro;

6º Llevar en buen orden los libros que prevengan las leyes y disposiciones reglamentarias;

7º Conservar el sello de las Cámaras;

8º Cumplir las demás obligaciones que les impongan las leyes y reglamentos.

Art. 148. Cada Cámara tendrá dos Ujieres para las notificaciones, embargos y demás diligencias, y para la ejecución de las órdenes que reciban del Presidente.

Art. 149. Cada Cámara tendrá además del número de escribientes que fuesen necesarios para el servicio, un ordenanza y un portero.

Art. 150. Los Secretarios y Ujieres y demás empleados serán nombrados por las Cámaras respectivas, y gozarán del sueldo que les fije la ley de Presupuesto, sin que les sea permitido cobrar emolumentos a las partes por actuaciones o diligencias en los juicios, bajo pena de destitución.

Art. 151. Las Cámaras podrán separar a sus Secretarios, Ujieres y demás empleados de su puesto por razones de mejor servicio público.

TITULO XII

DE LOS ESCRIBANOS PUBLICOS

Art. 152. Para optar al cargo de Escribano Público se requiere ser ciudadano argentino, mayor de edad, haber cursado los estudios y cumplido las demás formalidades que esta ley previene.

Art. 153. Las solicitudes para optar a dicho cargo se presentarán al Ministerio de Justicia con los siguientes comprobantes: 1º Certificado en forma de haber rendido examen de estudios preparatorios, con arreglo a los programas de los Colegios Nacionales de la República;

2º Constancia de haber practicado durante tres años con un Escribano Secretario o de Registro;

3º Justificación de buena conducta por medio de información sumaria, aprobada por Juez competente;

4º Constancia de tener la edad requerida y de ciudadanía.

Art. 154. Los que aspiren al cargo de Escribano Público, al comenzar su práctica solicitarán ante la Cámara de lo Civil se les inscriba en el Libro que con tal objeto se llevará en Secretaría. La solicitud será también firmada por el Escribano con quien hayan de practicar; y en caso que el aspirante cambiase de oficina, deberá hacerlo saber con las mismas formalidades a la Cámara para la debida anotación.

Art. 155. El Ministerio de Justicia, en el caso del artículo 153, mandará pasar la solicitud con todos sus antecedentes a la cámara



de lo Civil, para que si ésta no encontrase observación, proceda a tomar el examen (1).

Art. 156. El examen versará:

1º Sobre los Códigos Civil, Comercial y Penal;

2º Sobre los Códigos de Procedimientos Civiles, Comerciales y Penales;

3º Sobre las obligaciones de los Escribanos Públicos.

Art. 157. Terminado el examen, se levantará acta en el libro correspondiente, y si el examinado resultare aprobado, se le expedirá diploma por la Cámara, que será registrado en el Ministerio de Justicia.

Art. 158. En caso de no ser aprobado, no podrá presentarse a nuevo examen hasta después de un año.

Art. 159. Los Escribanos, antes de entrar al ejercicio de su cargo, prestarán juramento ante la Cámara de lo Civil de desempeñarlo fielmente.

Art. 160. Los Abogados que quieran optar al cargo de Escribano, deberán solicitarlo en la misma forma, acreditando solamente su edad, buena conducta y ciudadanía, y en vista de estos justificativos se le expedirá el diploma correspondiente.

Art. 161. Los Secretarios son los funcionarios encargados de actuar en los juicios ante los Jueces Letrados.

Art. 162. Para desempeñar el cargo deberán tener el título de Abogado o de Escribano, y ser nombrados por la Cámara respectiva a propuesta de los Jueces.

Art. 163. Las funciones de los Escribanos Secretarios serán:

1º Concurrir diariamente al despacho y presentar al Juez los escritos y documentos que le fueren entregados por los interesados;

2º Autorizar las resoluciones de los Jueces, las diligencias y demás actuaciones que pasen ante ellos, y darles su debido cumplimiento en la parte que les concierna;

3º Organizar los expedientes a medida que se vayan formando, y cuidar de que se mantengan en buen estado;

4º Redactar las actas, declaraciones y diligencias en que intervengan;

5º Custodiar los expedientes y documentos que estuvieren a su cargo, siendo directamente responsables por su pérdida o por mutilaciones o alteraciones que en ellos se hicieren;

6º Llevar los libros de conocimientos y demás que establezcan los reglamentos;

7º Dar recibo de los documentos que les entregaren los interesados, siempre que estos lo soliciten;

(1) Este artículo y los 156, 157 y 158 han sido derogados por el artículo 2º de la ley n° 7048 de 4 Agosto de 1910 cuyo artículo primero dice: "El título de escribano será otorgado por las Universidades Nacionales de conformidad con los planes y programas de estudios que ellas mismas establezcan".

- 8º Poner cargo en los escritos, con designación del día y hora en que fueren presentados por las partes;
 9º Desempeñar todas las demás funciones designadas en las leyes generales y disposiciones reglamentarias.

II.—Nuevos Juzgados de Instrucción

Nº 2644
 19 Octubre
 1889

Artículo 1. Apruébase el acuerdo general fecha 8 de febrero del corriente año dotando de una Secretaría más a los Juzgados de Instrucción para la capital.

Art. 3. Créanse tres nuevos Juzgados de Instrucción para la capital con la misma dotación de empleados que actualmente tienen los existentes.

Art. 4. El Poder Ejecutivo dividirá en tantas secciones el Municipio cuantos Juzgados de Instrucción funcionen debiendo los jueces reemplazarse respectivamente en los casos de recusación, ausencia, enfermedad u otro impedimento en la forma establecida para los Jueces de Paz en el art. 18 de la ley de 12 de Noviembre de 1886, (Art. 18 de la ley nº 1893 — El Juzgado de Paz será reemplazado en los casos de recusación, ausencia, enfermedad u otro impedimento por el Juez de Paz de la sección que le sigue en el orden numérico).

1. Como veremos, el artículo 4º ha sido objeto de una reglamentación distinta por la Cámara. V. pág. 120.

2. La ley misma en cuanto al número de Juzgados de Instrucción ha sido modificada por el art. 8 de la Nº 7055. (Es la V).

III.—Justicia de Paz

Nº 2860
 23 Noviembre
 1891

Art. 22. Los Jueces de Paz pondrán **multas** hasta de diez pesos o arresto de dos días por las faltas que se cometieran en las audiencias al respeto y consideración que les son debidos. Podrán también **corregir** a los empleados de sus respectivos Juzgados con apercibimientos, suspensión temporaria sin goce de sueldo, que no exceda de quince días o **multa** que no exceda de **veinte** pesos.

1. Esta ley modificó la Justicia de Paz como la había establecido la ley nº 1893 (parte aquí suprimida por ser de competencia meramente civil). Entre las reformas está el presente artículo que rebaja la penalidad que pueden imponer esos





funcionarios: en aquella ley llegaban las multas hasta \$ 20 m/n. y los días de arresto hasta 5.

Penas:

Multa hasta 10 pesos y arresto hasta 48 horas.

IV.—Fiscales de Cámara

Nº 3071
21 Junio
1891 Artículo 1. Desde la promulgación de esta ley, la fiscalía de las Cámaras de Apelaciones de la Capital será desempeñada por dos fiscales; uno para la materia civil y otro para la comercial y criminal, nombrados de conformidad a la Ley Orgánica de los Tribunales de la Capital.

Art. 2. Cuando el fiscal de una Cámara estuviese impedido, ausente o fuese recusado, será reemplazado por el de la otra Cámara.

Art. 3. Queda derogado el título séptimo (VII) de la Ley Orgánica de los Tribunales de la Capital en cuanto se oponga a lo prescrito en la presente.

1. Esta ley corresponde al régimen de las dos Cámaras que entonces había: al partirse en dos la Comercial, Correccional y Criminal, hubo que crear un juzgado para la nueva Cámara. Actualmente son dos los fiscales de la Cámara Correccional y Criminal por lo cual el artículo 2 no rige tampoco salvo recusación de ambos Fiscales.

V.—Reorganización de las Cámaras de la Capital

Nº 7055
17 Agosto
1910 Art. 3. La actual Cámara de Apelaciones de la Capital en lo Criminal, Correccional y Comercial queda convertida en Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y se crea una Cámara de cinco miembros para los asuntos comerciales. Cada una de estas Cámaras tendrá un fiscal y demás personal que fije la Ley de Presupuesto. La Cámara en lo Criminal y Correccional y la Cámara en lo Comercial tendrán, dentro de sus respectivas Jurisdicciones, todas las atribuciones que hasta la sanción de la presente Ley correspondían a la Cámara en lo Criminal, Correccional y Comercial.

Art. 4. Desde la sanción de la presente Ley, la Cámara de Apelaciones que funciona en la Capital Federal en virtud de la Ley nº 4055



se compondrá de cinco miembros, y sus resoluciones, causarán ejecutoria en materia criminal.

Art. 5. En caso de impedimento o recusación de alguno de los miembros de una de las Cámaras en lo Criminal, será reemplazado por uno de la otra Cámara en lo Civil; si todos los miembros de ésta estuvieran igualmente impedidos, su reemplazo se hará también por sorteo con los miembros de la Cámara Comercial y de la Criminal y Correccional sucesivamente. En caso de impedimento o recusación de miembros de la Cámara de lo Criminal serán reemplazados, siguiendo las mismas reglas, por los miembros de las Cámaras en lo Civil y en lo Criminal sucesivamente.

Si el impedimento o recusación afectara a miembros de la Cámara en lo Criminal y Correccional, el reemplazo se hará comenzando con los miembros de la Cámara en lo Comercial y siguiendo por los de las Cámaras 1ª y 2ª en lo Civil.

Art. 6. En caso de producirse contienda de competencia entre dos Cámaras, el Presidente de la que primero hubiese conocido, las reunirá en Tribunal y la decidirán por mayoría de votos. Si hubiere empate se dará intervención a un miembro de las otras Cámaras elegido a la suerte. Igual procedimiento se observará en los casos en que al celebrarse acuerdo para dictar sentencia definitiva, cualquiera de las Cámaras entendiera que en cuanto al punto en debate es conveniente fijar la interpretación de la Ley o de la doctrina aplicable. Las contiendas de competencia que se susciten entre los jueces de diversa jurisdicción, serán resueltas en última instancia por la Cámara de que depende el Juez que primero hubiere conocido. Si se tratara de jueces en lo Civil entenderá la Cámara a la que corresponde el turno mensual.

Art. 7. En la primera instalación de las Cámaras que se crean por esta ley, los nombrados prestarán juramento ante la Suprema Corte de Justicia, de desempeñar sus funciones bien y fielmente y en conformidad a lo que prescriben la Constitución y leyes de la Nación. En lo sucesivo jurarán ante la Cámara para que fueren designados.

Art. 8. En la capital habrá 10 jueces en lo Civil, 4 en lo Comercial, 4 en lo Criminal, 4 en lo Correccional y 10 jueces de instrucción criminal. Los juzgados que se creen tendrán el personal y asignaciones que fije la Ley de Presupuesto para los demás juzgados existentes (los de Instrucción eran 4 según la ley 2942 de 22 febrero 1893).

Art. 9. Para ser jueces de 1ª Instancia en la Administración de Justicia de la Capital se requieren las mismas condiciones establecidas para ser jueces de sección.

Art. 10. Los actuales miembros de la Cámara de la Criminal, Correccional y Comercial podrán optar entre continuar en la Cámara de que forman parte o ingresar a la que se crea por la presente ley.

1. Esta ley vino a dar fin al régimen especialísimo que daba a una Cámara el carácter de tribunal superior en dos



materias distintas como la mercantil y la penal. Hubiera sido explicable que un tribunal conociera de lo civil y lo comercial ya que esto último es una derivación de lo primero que le es supletorio, pero habría que acudir con carácter ofensivo e injusto para el comercio en general a la Mitología (Mercurio, dios del Comercio y de los ladrones) para encontrar la relación que pudiera haber entre dos cosas tan distintas como son un infanticidio y un seguro de incendio. Ciertamente los magistrados encargados de repartir a unos los años de presidio y a otros los dividendos de una sociedad anónima en discusión, estuvieron la mayor parte de las veces a la altura de su misión; pero cuando se dictó la presente ley casi todos desertaron la materia criminal y se pasaron a la otra Cámara.

2. El artículo 4 se refiere a la Cámara Federal; los 1 y dos a las Cámaras de lo Civil.

3. El artículo 8, aumentó considerablemente el número de Juzgados: seguramente se mostró parca. Por de pronto en cuanto a la Cámara, dos años después hubo que agrandarle.

VI.—Reorganización de la Cámara

Nº 8918
12 Septiembre
1912

Art. 1. La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional se compondrá de siete miembros.

Art. 2. Actuará con todos sus miembros en las causas por delitos a que corresponde pena de muerte y con cinco miembros (el Presidente y cuatro vocales) sorteados en cada caso de entre los que forman el tribunal para la resolución de las causas por delitos a que corresponde pena de presidio o penitenciaría. Se dividirá en tres salas compuesta cada una del Presidente y dos vocales para la resolución de las demás causas.

Art. 3. Las salas que tendrán un presidente común, se turnarán en la forma que determine el reglamento del tribunal.

Art. 4. Deróganse las disposiciones de la Ley Orgánica de los Tribunales y las del Cód. de Procecd. en lo Criminal, en cuanto se opongan a la presente.

1. Esta ley a que nos referimos en la última nota a la ley anterior, ha facilitado grandemente la labor del tribunal.



Comentario al capítulo segundo.

§ 1°. Extensión de la jurisdicción ordinaria. — § 2°. Cámara. — § 3°. Jueces de primera instancia; A) Correccionales; B) Del crimen; 1: De Instrucción; 2: De Sentencia; § 4°. Ministerio Público; A) Fiscal de Cámara; B) Agentes Fiscales; § 5°. Otros funcionarios; § 6°. La feria.

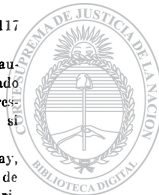
Queda dicho, que toda la materia penal no reservada especialmente a la justicia federal, en las provincias, pertenece a su respectiva justicia, cuyos tribunales aplicarán las leyes penales, la 1° el Código, con arreglo a normas procesales que cada una se da sin que de las resoluciones definitivas que aquellos dicten (de sus jueces sin ser recurridas y por el Tribunal Superior cuando lo son) pueda apelarse ante la Corte Suprema Nacional, a no ser por la vía extraordinaria del artículo 14 ley n° 48.

Del mismo modo, en la Capital Federal a su justicia propia, local u ordinaria, quedan sometidos todos los procesos criminales sin más excepción que los reservados a la justicia federal, que por esto es justicia de excepción y de las resoluciones de aquella no se puede recurrir a la Suprema Corte sinó por el recurso extraordinario que acabamos de citar. En esto, la justicia ordinaria de la Capital es igual a la de una provincia, sin que en ello introduzca ninguna diferencia el hecho de que las mismas normas procesales por las que se rige la justicia federal, imperen en la ordinaria.

Su jurisdicción comprende:

1°. El conocimiento de los delitos (no reservados a la federal) cometidos en la capital, tanto los que prevé el Código Penal como los de las demás leyes penales que dicte el Congreso para toda la Nación y con más motivo las exclusivas para la capital. Así, cuando se trate de rentas fiscales o municipales, provenientes de impuestos establecidos exclusivamente para la capital, conocerá de las infracciones respectivas, pero si se trata de impuestos internos, por ejemplo, la jurisdicción será la federal.

2°. El conocimiento de los delitos cometidos por un argentino en el extranjero o allí por un extranjero, (infractor de



leyes argentinas) que no han sido juzgados por aquellas autoridades y son aprehendidos por las argentinas. El acusado puede optar a ser juzgado por la justicia argentina, correspondiendo la ordinaria si el delito es común, y la federal, si ha surtido este fuero por razón de la materia.

Esta justicia común u ordinaria tiene dos instancias; hay, por tanto, un tribunal superior o de alzada, la “Cámara de Apelaciones en lo Correccional y Criminal” y jueces de primera instancia.

§ 2º. *Cámara:*

Carece de jurisdicción ordinaria, sólo conoce del caso que le llega por virtud de recurso contra un auto definitivo o una sentencia de un juez de primera instancia. Resuelve también las contiendas de competencia entre los juzgados de su propia jurisdicción (y también entre éstos y los Tribunales eclesiásticos de la Capital, art. 44 del Cód. de Proced.).

Tiene superintendencia sobre los jueces y funcionarios de su ramo velando por el orden y disciplina de los Tribunales y pudiendo dictar los reglamentos necesarios. Al efecto puede aplicar apercibimientos y multas hasta 200 pesos.

Finalmente entran en sus atribuciones las visitas de cárceles, la mensual y la trimestral, de los artículos 686 y 687 del Cód. de Proced.

La Cámara se compone de siete miembros, con cuatro de los cuales (sorteados en cada caso), y el Presidente, se forma el tribunal pleno que entiende en las causas de presidio o penitenciaria, según la ley 8918. Como el Código Penal posterior a éste establece que, estas penas “quedan reemplazadas por la reclusión y las de prisión y arresto, por la de prisión” art. 305, interpretando los textos literalmente, el Tribunal pleno sólo podría conocer de los asuntos en que se discute la pena de reclusión, pero esta interpretación literal llevaría al absurdo de que una sentencia de primera instancia condenando a veinticinco años de prisión tendría que someterse a una sala de tres mientras que de una de dos años de reclusión, debería conocer el Tribunal pleno, por lo que la jurisprudencia ha establecido que, cuando la prisión que se discute es superior a tres años, entenderá el Tribunal de cinco. Sin duda.



se ha tenido presente también lo dispuesto en el art. 87 de la ley 1893 (Tribunal íntegro para penas de más de 10 años).

De los demás asuntos, queda dicho que entienden tres salas, que se forman por el Presidente de la Cámara y dos vocales. La sala 1ª, conoce en las causas cuya primera actuación lleve fecha del 1 al 10 de cada mes; la sala 2ª, cuando fecha del 11 al 20; la sala 3ª, del 21 en adelante (Art. 3º del Reglamento) aun cuando se trate (art. 6º) de la aplicación del art. 52 del Cód. Penal, reclusión por tiempo indeterminado al reincidente.

Hay un Tribunal pleno de los siete miembros de la Cámara para resolver las cuestiones de superintendencia, si bien de las correcciones disciplinarias "en los expedientes traídos por vía de recurso conocerá la sala o, en su caso, el Tribunal pleno que entienda de éste", (ibid. art. 4º y 11).

La secretaría de la Cámara se compone de:

1º. Secretario interno que atiende el despacho, lleva y clasifica la jurisprudencia, dirige la oficina de copia y organiza el despacho (y archivo) de las libertades condicionales. Tiene un oficial mayor y oficial primero, además de los escribientes. Autoriza los autos y sentencias.

2º. Secretario externo que dirige la Oficina de Entradas y las oficinas de los Ujieres: prepara el despacho de la Presidencia; lleva el libro de sorteo de expedientes; autoriza las providencias de trámite, exhortos, copias, certificaciones, legalizaciones; administra fondos, lleva el libro de asistencia del personal y asiste como actuario a las audiencias.

Tiene empleados como el anterior.

3º. Prosecretario que tramita los asuntos de superintendencia y de menores, lleva un libro de todo el personal judicial y la estadística. (Art. 10 a 30).

§ 3º. *Juzc de primera Instancia:*

Los jueces de primera instancia son Correccionales y del Crimen; éstos, son de instrucción y de sentencia. (Art. 32 del Cód. de Proced.).

A) *Jueces Correccionales:*

Son tres, y conocen en primera instancia (correspondiendo



la segunda a la Cámara) de todas las infracciones del Código Penal o de las leyes no derogadas por éste, cuya pena máxima sea un año de prisión, o mil pesos de multa, aunque haya acumulación de penas.

Son, a su vez, jueces de segunda instancia en los recursos que se interpongan contra las penas impuestas por la Municipalidad o la Policía en los juicios de faltas.

Los jueces correccionales son a la vez de instrucción y de sentencia, pues sumario y plenario se desarrollan dentro del mismo Juzgado que inició el proceso.

A los efectos del turno la Capital se divide en dos distritos judiciales, uno constituido por las Comisarias de número impar, desde la 1 a la 45, y el segundo, por las de número par, desde la 2 hasta la 44 y subcomisaría del puerto.

De los tres Juzgados, uno (actualmente a cargo del Dr. Obligado) entiende de las causas que se inicien en febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre en el primer distrito, y en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre en el segundo distrito. Otro Juzgado (actualmente a cargo del Dr. Ortega) conoce en las demás causas. Finalmente, el tercer Juzgado (hoy a cargo del Dr. Viale), conoce exclusivamente de las causas correccionales en que intervengan menores procesados y damnificados, ley 10.903 (art. 61 del Reglamento citado).

B) *Jueces del Crimen:*

Las causas no sometidas a los jueces correccionales corresponden a los Jueces llamados del Crimen, que son de dos clases: entendiendo unos en el sumario, y otros en el plenario.

C) *Jueces de Instrucción:*

Son los jueces del sumario; lo inician por denuncia, acción fiscal o querrela, y lo desarrollan en la forma que el Código señala, es decir, con el máximo de facultades, de cuyo mal uso en general, no cabe recurrir a la Cámara; ésta conoce del proceso mediante recurso del fiscal, querellante, procesado o su defensor, cuando se dicta el auto de prisión preventiva. También es recurrible el auto que cierra el sumario terminando el proceso por sobreseimiento provisional o definitivo. Y algunas otras, pocas, resoluciones.



Pueden visitar las cárceles, para dar cuenta al Superior de las reclamaciones (arts. 684 y 685 Cód. de Proce., en desuso ambos).

A los efectos del turno, el citado reglamento ha numerado los juzgados del siguiente modo:

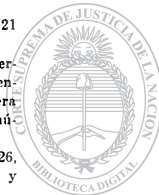
Nº 1: Actualmente a cargo del Dr. González Oliver; 2: del Dr. Llavallol; 3: del Dr. Benítez; 4: del Dr. Escalante Echagüe; 6: del Dr. Moreno; 7: del Dr. Rodríguez Ocampo; 8: del Dr. Díaz; 9: del Dr. Lamarque; 10: del Dr. Avellaneda Huergo.

Y ha clasificado distritos y comisarias en la siguiente forma:

Distrito 1º: que comprende las comisarias 1, 2, 14, 22 y subcomisaría del puerto; 2º: las 24, 26, 30 y 32, y diligenciamiento de exhortos; 3º: las 3, 4, 15 y 16; 4º: las 28, 34, 36, 42, 43 y 45; 5º: las 8, 18 y 20; 6º: las 5, 7, 9, 17 y 44; 7º: las 19, 21, 23, 31, 33 y 35; 8º: las 25, 27, 29, 37, 39, 40 y 41; 9º: las 10, 11, 12, 13 y 38.

JUZGADOS	DISTRITOS JUDICIALES									
N.º 8	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
N.º 4	1	9	8	7	6	5	4	3	2	
N.º 2	2	1	9	8	7	6	5	4	3	
N.º 5	3	2	1	9	8	7	6	5	4	
N.º 6	4	3	2	1	9	8	7	6	5	
N.º 10	5	4	3	2	1	9	8	7	6	
N.º 3	6	5	4	3	2	1	9	8	7	
N.º 9	7	6	5	4	3	2	1	9	8	
N.º 7	8	7	6	5	4	3	2	1	9	
Años 19	M E S E S									
26, 29, 32, 35	Ener.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agos.	Setie.	
38, 41, 44, 47	Oct.	Nov.	Dic.							
27, 30, 33, 36				Ener.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Junio	
39, 42, 45, 48	Julio	Agos.	Setie.	Oct.	Nov.	Dic.				
28, 31, 34, 37							Ener.	Feb.	Mar.	
40, 43, 46, 49	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agos.	Setie.	Oct.	Nov.	Dic.	

Para establecer qué Juez deberá entender en una causa iniciada en una fecha dada, se buscará en la casilla "Años 19..." el año que corresponda y luego en línea horizontal se llegará



hasta el mes correspondiente; a partir de aquí, se guiará verticalmente hasta encontrar el distrito judicial en que se encuentra la comisaría respectiva, y hallado éste, en la primera casilla de la izquierda, en línea horizontal, se tendrá el número del Juzgado que debe intervenir.

Se incluyen en el cuadro los años ya transcurridos 1926, 1927 y 1928, teniendo en cuenta delitos en ellos cometidos y no conocidos, o denunciados, o querellados.

Al aplicar el cuadro, debe tenerse presente (art. 60) que si el sumario se inicia por prevención policial, conoce el juez que corresponda por la fecha de aquella iniciación.

Si es por denuncia directa al Juez (o querella) o por prevención policial de la División de Investigaciones, corresponde al Juez del lugar y fecha de comisión del delito: si éste no se puede precisar, conoce el Juez a cargo del Distrito del último domicilio del acusado en la fecha de presentación de la denuncia o querella y si no se conoce este domicilio, o siendo varios los acusados y que se domiciliaran en distintos distritos, conoce el Juez del Distrito del denunciante o querellante también en la fecha de la denuncia o querella.

Cuando el proceso deba iniciarse por la remisión de antecedentes de otra jurisdicción, conocerá en la causa el Juez que se hallase a cargo del 6° distrito en la fecha que el Juez de la otra jurisdicción ordenó el envío de los antecedentes.

En caso de urgencia, el Juez de Instrucción a quien la Policía haya dado intervención o ante quien se formule una denuncia o querella, practicará las diligencias que no admitan dilación, sin perjuicio de remitir en su oportunidad (practicadas éstas) la causa al Juez que corresponda.

Pero previene el artículo 70 que en las secretarías de los Juzgados de Instrucción (y lo mismo en las correccionales) no puede rechazarse ningún escrito de denuncia o querella aunque no corresponda al turno. El Secretario lo pondrá al despacho del Juez, quien si procediera (es decir, si no le corresponde o si no se da el caso citado de diligencias urgentes) resolverá la remisión al Juzgado que le corresponda: si éste considera que no se halla comprendido en su turno, lo remitirá con auto fundado (art. 56) sin más trámite, a la Presidencia de la Cámara que decidirá en el día.



2. Jueces de Sentencia:

Reciben del respectivo de Instrucción el sumario, y proceden a la substanciación del plenario. Para el turno, se sigue el siguiente orden:

Un Juzgado de Sentencia (el que actualmente está a cargo del doctor Martínez) interviene en las causas iniciadas (en Instrucción) durante los meses de mayo y septiembre y además las de menores, según la ley 10903.

Otro, (el actualmente a cargo del doctor García Rams) conoce en las causas que se inicien en enero (del 1 al 10) febrero, junio y octubre.

Otro, (el actualmente a cargo del doctor García Torres) en los iniciados en enero (del 11 al 20), marzo, julio y noviembre.

Finalmente, el hoy a cargo del doctor Pessagno, en los de enero (del 21 al 31), abril, agosto y diciembre.

El turno no rige (ni tampoco en los Juzgados de Instrucción) para los recursos de *habeas corpus*.

En los juicios por infracciones electorales los jueces de sentencia intervendrán del siguiente modo:

Juzgado hoy a cargo del doctor Pessagno: infracciones en las Secciones electorales 1ª a 5ª.

Juzgado hoy a cargo del doctor Martínez: las de la 6ª a la 10ª.

Juzgado hoy a cargo del doctor García Torres: las de las 11ª a 15ª.

Juzgado hoy a cargo del doctor García Rams: las de las 16ª a 20ª.

Los autos que dictan los Jueces de Sentencia, en cuanto causen gravamen irreparable a cualquiera de las partes, son objeto de recursos para decisión definitiva de la Cámara.

Lo son también las que dicten con carácter definitivo, que sólo lo revisten cuando no han sido recurridas. Pero tratándose de penas de reclusión, los artículos 690 al 692 del Código de Procedimientos, establecen un régimen de consulta a la Cámara.

A estos jueces corresponde, luego, la ejecución de la sentencia.

Cada juez (de instrucción o de sentencia) tiene, dos ése.



y aquel tres, secretarios, sobre los cuales, como sobre los demás empleados, ejerce una especie de superintendencia pudiéndoles imponer apercibimientos, suspensión hasta diez días, y multas hasta 40 pesos. Pero suelen llevarse bien.

§ 4º. *Ministerio público:*

A) *Fiscales del Crimen.* El ministerio fiscal se ejerce ante la Cámara por dos fiscales que entenderán por turno del 1º al 15 de cada mes uno, y el resto el otro, según la fecha de entrada del expediente en la Cámara, art. 9º del Reglamento citado.

El art. 120 de la ley 1893 atribuye a los fiscales de Cámara, las siguientes funciones:

1º Intervenir en los procesos que lleguen al Tribunal. Pueden pedir mayor o menor pena que la pedida por el agente fiscal en primera instancia o la impuesta por el juez, o desistir de la apelación deducida por aquél; a pesar de esto último la Cámara, según su jurisprudencia, sigue entendiendo.

2º Intervenir en los casos que se presentaren relativos a superintendencia, pudiendo además promover la aplicación de sanciones disciplinarias al efecto.

Si bien la ley (inciso 5º, de dicho artículo) le faculta para "cuidar de que los Agentes fiscales promuevan las gestiones que les corresponden" no se ha dado hasta ahora el caso. Este tímido ensayo de articulación del Ministerio Público, no ha seguido adelante, con evidente daño del servicio.

Finalmente, estos Fiscales tienen la extraordinaria facultad que les atribuye el Cód. de Proced., cuando el agente fiscal en la vista del sumario para acusar pide el sobreseimiento y el Juez disiente, de adherirse al pedido fiscal, importando esta adhesión el sobreseimiento obligado por parte del Juez.

B) *Agentes Fiscales:*

Son ocho, y rige para ellos un turno que comprende los juzgados Correccionales y los de Instrucción: en los de Sentencia sigue el que intervino en el sumario.

Si el Agente Fiscal creyera que no le corresponde el turno (prescindimos de transcribirlo por no ser de interés general) y el Juez respectivo estuviera disconforme, pasa a resolución



del Presidente de la Cámara, lo mismo que si el Juez está conforme y lo pasa a otro fiscal que disiente.

Pero en caso de querella entablada por el Agente Fiscal y radicada en un juzgado, sigue actuando aquél aunque no le corresponda por turno.

Es función especial de los Agentes Fiscales el contralor de los libros de pagos de multas en cuotas, que deben llevar los jueces correccionales (Cap. III del Reglamento).

Pero su función substancial es la de promover (promotores se les ha llamado) la averiguación y enjuiciamiento de los delitos que conozcan, lo cual incluye la intervención en las diligencias de prueba, pedir penas, opinar en los casos que el Juzgado lo requiera y, en su caso, deducir los recursos de apelación, etc., que sean necesarios.

La ley (art. 118 de la 1893) se refiere a "acciones que corresponden contra la publicación y circulación de escritos o estampas inmorales", lo que si se trata de delitos no hacía falta decirlo y, en otro caso, no se ve qué pueda hacer el Agente Fiscal, a no ser acudir a la Policía, lo que no debe haber entrado en los propósitos del legislador.

Deben asistir a las visitas de cárceles, es de suponer que sólo las trimestrales.

El art. 126 de la ley orgánica n° 1893, supone un contacto constante de los Agentes Fiscales y los de Cámara al hablar de la posible unidad en la acción de Ministerio Público: no creemos que se aplique mucho el artículo como por parte de los Fiscales de la Cámara no se aplica el inciso 5° de su artículo 120, según decimos más arriba.

§ 5°. *Otros funcionarios:*

La ley orgánica de los Tribunales de la Capital establece que la defensa de pobres (y de ausentes, pero ésta no cabe en lo penal, arts. 148-154 del Cód. de Proced.) se hará por un defensor ante la Suprema Corte y juzgados federales (y en las Cámaras Federales por tanto) y por seis defensores ante los juzgados de paz, los de primera instancia y Cámaras.

En cuanto a los menores, los asesores de menores tienen el deber de intervenir en su defensa, supónese que sin perjuicio del defensor particular que designare la familia.



Téngase presente, además, que los artículos 36 al 39 del Código Penal, han fijado un régimen especial para aquéllos de los que se ocupa también la ley 10903 (Patronato de Menores). Esto, además de dos instituciones: los defensores de menores que entre otras atribuciones tienen la de imponerles penas de reclusión correccional hasta un mes con intervención judicial y dichos asesores.

El cuerpo médico de los Tribunales (aqué! "un médico" de la ley 1893) cuenta hoy con facultativos peritos o médicos forenses, además de los que dependen de la Policía y que intervienen en el sumario de prevención. Eligen un presidente que se llama Decano y un vice-decano: este decanato representa al cuerpo médico ante la Administración pública y los Magistrados. Uno de los médicos es encargado del servicio de Radiología y otro corre con los informes de la Justicia de Paz.

El servicio de la Morgue, el de autopsias y el Museo de Medicina Legal, dependen también de la Cámara por intermedio del citado decano.

§ 6°. La feria:

La feria judicial que no ha sido objeto de reglamentación alguna y cuyo origen legal es por demás oscuro, ha sido reglamentada por la Cámara, y por la novedad del caso, tanto por la relación que esto tiene con el procedimiento y el régimen de los Tribunales, transcribimos a continuación los artículos del capítulo que el reglamento titula: *Feria*.

Art. 95. Antes del quince de diciembre de cada año la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional elegirá un tribunal de tres miembros para resolver los asuntos de feria. Este tribunal designará, de su seno, un Presidente.

Art. 96. En la misma oportunidad se designará un juez para atender el despacho urgente en lo criminal y correccional, la mitad del número de los Jueces de Instrucción, un Fiscal de Cámara, dos Agentes Fiscales y un Defensor de Pobres que atenderán los demás juzgados, fiscalías y defensorías, de acuerdo con la distribución respectiva.

Art. 97. Los jueces designados para actuar en la feria comunicarán al Tribunal la nómina del personal que haya de quedar en funciones durante el feriado, debiendo permanecer, por lo menos, un secretario



de cada Juzgado de Instrucción, uno de Sentencia, otro en la Correccional y un empleado de cada Secretaría.

Art. 98. Los jueces, funcionarios o empleados, que permanezcan en el desempeño del cargo durante la feria, tendrán derecho a un mes de licencia que la Cámara acordará en la oportunidad que lo estime, respondiendo a la buena marcha de la Administración de Justicia.

Art. 99. Durante la feria ningún proceso de Instrucción podrá paralizarse y ninguno correccional en que hubiere detenidos.

Art. 100. En plenario las causas quedarán paralizadas, salvo los asuntos que por este reglamento se exceptúan.

Art. 101. Además de los recursos de habeas corpus, prisiones preventivas, excarcelaciones, embargos preventivos, levantamientos de embargos y diligenciamientos de exhortos de cualquier naturaleza, que deben ser tramitados sin excepción, el Tribunal de Feria decidirá, en cada caso que se plantee, por vía de recurso, si teniendo en cuenta su urgencia debe o no darse trámite a un asunto.

Art. 102. El Tribunal de Feria resolverá los recursos que se interpongan en las causas o incidentes a que se refiere el precedente artículo y aquéllos que declare de carácter urgente.

Art. 103. El decano del Cuerpo Médico de los Tribunales comunicará a la Cámara la nómina de los médicos que permanecerán en funciones durante la feria.

Art. 104. No habrá más feriado durante el año que los días oficialmente declarados tales. Son los dos días de Carnaval, la Semana Santa, la Ascensión, Corpus, fiestas nacionales de 25 de mayo, 9 de julio y 12 de octubre, 29 de junio, 15 y 30 de agosto, 1 y 11 de noviembre, 8 y 25 de diciembre, y los domingos. (Quedan 262 días del año hábiles).

En resumen, la justicia ordinaria de la Capital se desenvuelve en lo penal (y lo mismo en lo civil) con toda la plenitud de atribuciones que hace considerar a la Administración de Justicia como poder judicial. En el sentido político de esta palabra sería error darle un nombre que sólo corresponde a la justicia federal, pero jurídicamente es soberana dentro de la ley, en cuanto resuelve absoluta y definitivamente sobre todas las infracciones no reservadas especialmente a los Tribunales Federales, que el Código Penal y demás leyes castigan con penas corporales o multas, sin que sus resoluciones ejecutoriadas sean susceptibles de modificación por Tribunal alguno, pues la Corte Suprema sólo puede hacerlo por la vía del recurso extraordinario, vía en realidad angosta, pues sólo admite los casos fundamentales pero extremos del art. 14 de la ley 48.

JUECES LETRADOS DE TERRITORIOS NACIONALES

**Textos legales.**

I. Ley n° 1532 y otras. Organización de los territorios nacionales. — II. N° 3906. Territorio de Los Andes. — III. De la n° 4055 (V. Cap. 1°). — IV. N° 11.539. Cámara de Bahía Blanca.

Notas sobre penalidad en la I y la III.

I.—Límites, Administración y Gobernación de los Territorios Nacionales

- | | |
|---|---|
| <p>N° 1532
18 Octubre
1884</p> <p>N° 2662
9 Noviembre
1889</p> <p>N° 2785
8 Octubre
1890</p> <p>N° 3575
3 Agosto
1896</p> | <p>Artículo 1° Los Territorios Nacionales se dividen para los efectos de la Administración, sin perjuicio de lo que se establezca oportunamente por la ley general de límites, en las siguientes Gobernaciones: 1°, de la Pampa (siguen los límites); 2°, del Neuquén (id. id.); 3°, del Río Negro (id. id.); 4°, del Chubut (id. id.); 5°, de Santa Cruz (id. id.); 6°, de la Tierra del Fuego (id. id.); 7°, de Misiones con sus límites actuales; 8°, de Formosa (siguen los límites); 9°, del Chaco (id. id.).</p> <p>Art. 4° Cuando la población de una Gobernación alcance a setenta mil habitantes constatados por el censo general y los censos reglamentarios sucesivos, tendrá derecho para ser declarada Provincia argentina.</p> <p>Art. 6° El Gobernador será nombrado por el P. E. con acuerdo del Senado. Durará tres años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelecto y teniendo el P. E. la facultad de exonerarlo de su cargo.</p> <p>Art. 7° El Gobernador tendrá los deberes y atribuciones siguientes:</p> <p>1° Es la autoridad local superior encargada de velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones nacionales...</p> |
|---|---|



6° Nombra los Jueces de Paz en los distritos o secciones que tengan menos de 1000 habitantes. (En los demás es por elección popular).

10° Distribuye la fuerza y presta el auxilio que requieran el juez Letrado y los jueces de Paz.

Art. 10. En los distritos cuya población pase de 1000 habitantes, los jueces de Paz serán elegidos directamente por el pueblo; y la Municipalidad de Sección con 2/3 de votos podrá removerlos por faltas en el cumplimiento de sus deberes.

Art. 11. Los Jueces de Paz durarán dos años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelegidos.

Art. 13. Son atribuciones de los Jueces de Paz conocer y resolver:

1° En las causas civiles y comerciales cuando el valor cuestionado no excede de \$ 300 m/n., pero no en los juicios sucesorios o de concurso de acreedores;

2° En las demandas por desalojo cuando no medie contrato por escrito cualquiera que sea el valor demandado;

3° (suprimido por la ley 2662) En las causas correccionales cuando la pena no exceda de cuatro días de arresto o de 20 \$ de multa;

4° En las demandas reconventionales, siempre que su valor no pase de la cantidad fijada como límite a su jurisdicción;

5° Cuando las partes reconozcan la existencia de un contrato y tengan cuestiones relativas a las transacciones del mercado, que versen sobre entrega de ganados y frutos, sobre fletes de los transportes terrestres y sobre exactitud de pesas y medidas.

Art. 14. El procedimiento de los jueces de paz, será verbal y actuado, resolverán a verdad sabida y buena fe guardada exigiendo, sin embargo, la defensa y la prueba.

Art. 15. Cuando el valor de lo cuestionado no alcance a veinte pesos, las sentencias de los Jueces de Paz serán inapelables, lo mismo que las que dicten en causas correccionales. (V. inciso 3°).

Art. 16. Podrán ser recusados por justa causa, y en tal caso, el conocimiento del asunto, corresponde al Juez de Paz más inmediato.

Art. 17. Fuera de los casos señalados en el artículo 15, las sentencias de los Jueces de Paz serán apelables en relación y sin exigir el comparendo de las partes, dentro de cinco días útiles para ante el Juez Letrado de la Gobernación cuando el valor cuestionada no exceda de 400 \$ y libremente en los demás casos.

Art. 18. Cada Juzgado de Paz tendrá un Secretario nombrado por la Municipalidad a propuesta del Juez de Paz y que actuará en todas sus decisiones.

Art. 19. Antes de entrar en el ejercicio de sus funciones, los Jueces de Paz prestarán juramento ante el Concejo Municipal de desempeñar fielmente los deberes de su cargo.

Art. 20. Los Jueces de Paz darán cumplimiento a las comisiones que les sean conferidas por los Jueces Letrados.

Art. 21. Los Jueces de Paz, como sus Secretarios, residirán en la Sección donde deben prestar sus servicios, no podrán ausentarse sin



licencia del Juez Letrado y tendrán el sueldo que les señale el Presupuesto.

Art. 23. Las secciones cuya población pase de mil habitantes tendrán derecho a elegir un Concejo municipal compuesto de 5 miembros, mayores de edad y domiciliados en el distrito. Entre ellos nombrarán un Presidente encargado de mantener el orden en la discusión y representar al Concejo en sus relaciones oficiales.

Art. 23. Los municipales durarán dos años en el ejercicio de sus funciones; el cargo será gratuito; se renovarán por mitad cada año, debiendo sortearse al efecto los que deberán salir la primera vez.

Art. 24. Las atribuciones del Concejo Municipal son las siguientes: 11° (antes 6°) Fijar multas que no excedan de 20 \$ a los infractores de sus ordenanzas.

Art. 33. El Juez Letrado será nombrado por el P. E. con acuerdo del Senado; residirá en la Capital de la Gobernación, gozará del sueldo que le asigne la ley, el cual no podrá ser disminuido mientras permaneciere en sus funciones y no podrá ser removido sino en la forma establecida para la remoción de los funcionarios de su clase en la Capital de la República.

Arts. 34 y 35. (Como han sido reformados por la ley 3575): 1° Para ser Juez Letrado de los Territorios Nacionales se requiere ser ciudadano, mayor de edad y abogado con título expedido o reconocido por una Universidad Nacional; 2° Los jueces letrados durarán 4 años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelectos; 3° Al recibirse de su cargo prestarán juramento ante la Suprema Corte y les serán aplicables las disposiciones de la ley n° 1893; 4° No podrán ser recusados sin justa causa, y una vez admitida la recusación así como en caso de impedimento o vacancia, corresponderá el conocimiento del asunto al Juez de sección o de territorio más próximo.

Art. 36. Los Jueces Letrados conocerán y resolverán en las causas que en la ley citada en el artículo precedente se atribuyen a los jueces en lo civil, comercial, correccional y criminal, y también las que correspondan al Juez Federal.

Art. 37. El procedimiento ante el Juez Letrado será el vigente en la Capital de la Nación (agrega el art. 10 de la ley 2735. "Y dicho Juez ejercerá sobre los de paz la superintendencia que por la ley respectiva corresponde a las Cámaras de apelación de la Capital").

Art. 38. (según la ley 3577) No podrán ser recusados sin justa causa, y una vez admitida la recusación corresponderá el conocimiento de la causa al Juez de la sección o territorio más próximo.

Art. 39. Conocerán en grado de apelación de las sentencias dictadas por los jueces de paz, y su resolución terminará el asunto, bien que confirme o revoque las del Juez inferior.

Art. 40. El médico de la Gobernación prestará los servicios de médico de Juzgado.

Art. 41. De las sentencias que dicten los Jueces Letrados en 1° ins-



tancia podrá apelarse para ante la Suprema Corte de Justicia, con arreglo a las leyes de procedimiento para la Justicia Federal (modificado por la ley 4055, art. 17, inc. 2º: "De los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los Jueces Letrados de los Territorios Nacionales, aunque fueren dictados en causas criminales del fuero común... conocen las Cámaras Federales en grado de apelación y en última instancia").

Art. 42. Los Jueces Letrados elevarán en consulta aun cuando no se interponga apelación, todas las sentencias definitivas en asuntos en que sean parte el fisco, menores, incapaces, etc., (modificada por la ley 4055, art. 17, inc. 4º: "De las consultas que elevarán los Jueces Letrados de los Territorios nacionales en los casos del art. 42, ley 1532, conocerán las Cámaras Federales en grado de apelación y en última instancia").

Art. 43. Podrán ser nombrados como árbitros arbitadores y resolverán sin apelación las causas que en este carácter se les sometan. (Derogado por la ley 3367 de 8 de Julio de 1896, « Art. 3º. A los tribunales y jueces federales y a los de la Capital y Territorios, les es prohibido aceptar nombramientos de árbitros, jueces arbitadores o amigables componedores, bajo pena de nulidad absoluta a excepción de los casos en que sean designados en tal carácter por el Gobierno de la Nación o los Gobiernos de Provincias »).

Art. 44. (según la ley 2662). Habrá un Escribano secretario encargado de actuar en los juicios que se sigan ante el Juez Letrado, el que será también de registro. El P. E. podrá crear nuevos registros en los centros de la población que contando con no menos de 5.000 habitantes, se hallen distantes de la Capital de la Gobernación. A este Escribano le serán aplicables las disposiciones de la ley sobre Organización de los Tribunales de Justicia de la Capital en cuanto no se opongan a la presente.

Art. 45. (según la ley 2662) El Escribano será nombrado y removido por el P. E., previo informe del Juez Letrado: residirá en la Capital de la Gobernación de donde no podrá ausentarse sin permiso del mismo P. E. y gozará del sueldo que le asigne su Presidente, sin perjuicio del cobro de los derechos de registro.

1. Hemos refundido aquí con la ley fundamental de 1884, las tres que la modifican en varios artículos.

2. El artículo 13, inciso 3º, confirió a los jueces de paz atribuciones de juez correccional que les suprimió la ley nº 2662.

3. Hemos creído necesario dar **in extenso** lo concerniente a Justicia de paz aunque sólo conoce de lo civil, para dar



idea de cómo es en general la Administración de justicia en los territorios.

4. Las disposiciones de la ley 1893 a que se refiere el artículo 34, inc. 3º, son las de su título VI —Jueces Federales.

5. La referencia del art. 37 al procedimiento que se sigue en la Capital de la Nación, debe entenderse al de la jurisdicción ordinaria.

Penas:

Multa hasta 20 \$. Por infracciones municipales, art. 24. Además las penalidades de los Códigos de Proced. civil y comercial de la Capital y el Cód. Proc. Crim.

II.—Territorio de los Andes

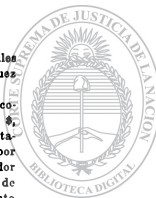
Nº 3908 Artículo 1. El territorio incorporado a la República Ar-
9 Enero gentina en virtud de la delimitación hecha en 24 de Marzo
1900 de 1899 por la comisión internacional, se denominará «Terri-
torio de los Andes», y estará bajo la autoridad exclusiva
del Gobierno Federal, sin perjuicio de lo que más adelante se resuelva
respecto a los límites definitivos de las provincias colindantes.

Art. 2. El gobierno de dicho territorio será ejercido por funcionarios nombrados por el Poder Ejecutivo, dependerá del Ministerio del Interior, y sus atribuciones serán las que determina la presente ley y las que le acuerden los decretos del Poder Ejecutivo dentro de las facultades enumeradas por las leyes de 18 de Octubre de 1872 y 18 de Octubre de 1884, sobre las gobernaciones de los Territorios Nacionales.

Art. 3. La administración política y municipal del territorio estará a cargo de un Gobernador, nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, por dos años, quien tendrá un Secretario que refrendará sus actos; y podrá hacerse auxiliar, en lo referente a higiene, viabilidad, inspección escolar y otros servicios municipales, por comisiones gratuitas de vecinos nombrados por él.

Art. 4. El Secretario, quien deberá ser abogado, a más de las facultades administrativas que le correspondan, será el presidente del tribunal de apelaciones en las causas de la jurisdicción de los Jueces de Paz.

Art. 5. La justicia correccional, la civil y comercial en causas cuyo valor no pase de 1.000 \$, será ejercida por Jueces de Paz nombrados por el Poder Ejecutivo, en el número que considere necesarios, según la densidad de la población y la subdivisión territorial que se haga. Los nombrados no podrán excusarse de aceptar el cargo.



Art. 6. El conocimiento en las causas criminales y en las civiles y comerciales de valor mayor de 1.000 \$, corresponderá al Juez de Sección de Salta.

Art. 7. De las resoluciones de los Jueces de Paz en las causas correccionales y en las comerciales y civiles de valor mayor de 50 \$, habrá recurso de apelación ante un tribunal formado por el Secretario de la Gobernación como presidente, y dos vocales nombrados por el Gobernador del Territorio. Anualmente nombrará el Gobernador dichos dos vocales y dos suplentes, para los casos de impedimento de aquéllos, de entre los vecinos de la localidad en que tengan asiento las oficinas de la gobernación. Las resoluciones, en las causas civiles y comerciales de valor de 50 \$ o menos, tendrán fuerza de definitivas.

Art. 8. Los procedimientos ante los Jueces de Paz y ante el tribunal de apelaciones serán verbales y actuados.

Art. 9. El Poder Ejecutivo fijará los sueldos del personal de empleados y los demás gastos de la administración del territorio, dentro de la suma que señale la ley de presupuesto.

Art. 10. Las oficinas de la Gobernación se instalarán en el punto que elija el P. E., quedando autorizado a fin de celebrar arreglos con los gobiernos de las provincias limítrofes para que éstas cedan a la nación el punto o puntos de su territorio, que se considere necesarios para la mejor ejecución de esta ley.

1. Es manifiestamente superflua la referencia que se hace en el art. 2º a las leyes N.ºs. 1532 y 273 desde que se trata de un Territorio Nacional como todos.

2. El mecanismo judicial en resumen es el siguiente:

En lo criminal, lo correccional a los jueces de Paz, lo demás al Juez de Sección de Salta.

En lo civil y comercial aquellos hasta 1.000 pesos, en pasando, éste.

Apelaciones: de lo correccional y civil y comercial de menor cuantía el tribunal que dice el art. 7º. De lo criminal y civil y comercial de más de 1.000 pesos, la Cámara federal de la 4ª circunscripción (Córdoba), de las que establece la siguiente ley 4055, que sólo puede referirse al Territorio de Los Andes, cuando se refiere a aquélla en las palabras finales del art. 12.



III.—Reformas en la Justicia Federal

Nº 4055 **Art. 10.** La Suprema Corte ejercerá superintendencia
11 Enero sobre las Cámaras Federales, Jueces de Sección, Jueces
1902 Letrados de Territorios Nacionales y demás funcionarios
 de la Justicia Federal, debiendo dictar los reglamentos
 convenientes para procurar la mejor administración de justicia.

Art. 11. La superintendencia de la Suprema Corte comprende:

1º Velar por el cumplimiento de esos reglamentos e imponer las penas disciplinarias que ellos fijen para los casos de infracción;

2º Exigir que se le remita anualmente o en cualquier tiempo una relación de las causas entradas, del número y estado de las pendientes y de las falladas;

3º Acordar o denegar licencias a los miembros de las Cámaras Federales, Jueces de Sección, Jueces Letrados de los Territorios Nacionales y demás funcionarios de la Justicia Federal para ausentarse del lugar en que desempeñan sus funciones por más de tres días, o dejar de asistir al tribunal, juzgado u oficina por más de una semana, (Modificado por el art. 11 de la ley 4162 (V. en capit. 1º) por el que «las Cámaras Federales de Apelación además de las atribuciones que les confiere la ley 4055 tendrán las siguientes: Nombrar y remover sus secretarios y demás empleados subalternos y acordar o denegar a los mismos la licencia, etc., del art. 11, inc. 3º, ley 4055) »;

4º Imponer a los mismos penas disciplinarias por faltas a la constitución y respeto debidos a la Corte o alguno de sus miembros, por actos ofensivos al decoro de la administración de justicia o por falta o negligencia en el cumplimiento de su deber. Las penas consistirán en prevenciones, apercibimientos o multas que no excedan de doscientos pesos. En caso de reincidencia y cuando el abuso, la falta o negligencia fuere grave, la Corte Suprema la pondrá en conocimiento de la Cámara de Diputados de la Nación, cuando fueren cometidas por miembros de las Cámaras Federales de Apelación, por los jueces de Sección o jueces letrados de los territorios nacionales; cuando ellas fueren cometidas por los Procuradores Fiscales o defensores de menores, pobres y ausentes los suspenderá, solicitando su exoneración del Poder Ejecutivo.

Art. 12. Habrá cuatro Cámaras Federales de Apelación que serán compuestas cada una por tres miembros, y tendrán su asiento, la primera, en la Capital de la República, la segunda, en la ciudad de La Plata, la tercera, en la ciudad de Paraná, y la cuarta, en la ciudad de Córdoba, y ellas ejercerán en su respectiva circunscripción la jurisdicción apelada que les confiere la presente ley.

La primera circunscripción comprende la capital de la República, las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan.



La segunda circunscripción comprende la provincia de Buenos Aires y los Territorios de la Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La tercera circunscripción comprende las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe y Territorios del Chaco, Formosa y Misiones.

La cuarta circunscripción comprende las demás provincias: Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, La Rioja, Salta y Catamarca y demás Territorios que no se incluyen en las otras tres.

1. Repetimos de esta ley que insertamos en el primer capítulo, los artículos en que se alude a los jueces de territorio como miembros de la Justicia Federal.

2. El inciso 4º del art. 11, los comprende entre los que pueden ser objeto de juicio político. Es lo mismo que establece el art. 33 de la ley de organización.

IV. — De la n° 11.539 — Cámara en Bahía Blanca

(V. en pág. 80).

1. Con arreglo a esta ley la Cámara de La Plata se ha desprendido de la jurisdicción de apelación que la ley n° 4055 le señalaba en los Territorios Nacionales de la Pampa, Neuquén y Río Negro que pasan a la nueva Cámara de Bahía Blanca.

Comentario al capítulo tercero.

§ 1º Naturaleza de los Juzgados Letrados. — § 2º Los Jueces Letrados y el P. E. — § 3º Decretos del P. E. sobre funciones judiciales. — § 4º El Juez Letrado y el Gobernador. — § 5º Acordadas de la Corte.

§ 1º. *Naturaleza de los Juzgados Letrados de territorio; número.*

El juez letrado de territorio es Federal como repetidamente se declara en las anteriores leyes; pero además de las causas que como tal le corresponden, conoce y resuelve las de la ju-



jurisdicción ordinaria o local, como es la de la Capital. Artículos 35 y 36 del primer texto legal anterior.

Es el juez que pretenden para la Capital los que no quisieran para ella más que una clase de jueces que conocieran a la vez de las causas de que hoy conocen los federales y los de la justicia ordinaria.

Los hoy existentes son:

Pampa: 3 jueces letrados (se turnan) con dos fiscales.

Chaco: 2 jueces con dos fiscales que se turnan también.

Misiones: ídem.

Río Negro: ídem.

Formosa, Chubut, Neuquén y Santa Cruz: Cada uno un juez y un fiscal.

Tierra del Fuego: No tiene juzgado; entiende el de Santa Cruz.

Los Andes: El Juez de sección de Salta.

§ 2º. *Los jueces letrados y el P. E.*

Una resolución del P. E. del 12 de Noviembre de 1884 del Ministerio del Interior « organizó » una sección separada para el despacho de los asuntos de los Territorios Nacionales o que se relacionen con éstos, « la que será desempeñada en cuanto sea posible con los actuales empleados del Ministerio. » Pero un decreto de 16 de Mayo de 1888, dispuso (art. 1º) que « los Juzgados Letrados de los Territorios Nacionales pasaran a depender del Ministerio de Justicia ».

En 31 de Diciembre de 1891 otro decreto estableció que « el nombramiento de Jueces de Paz suplentes de los Territorios Nacionales en los casos no previstos por la ley se hará por los Gobernadores, debiendo dar inmediatamente cuenta al Ministerio de Justicia ». En 14 de Enero de 1896, otro decreto dispone que « en los casos en que la designación de los Jueces de Paz, en los Territorios Nacionales, corresponde a los Gobernadores, éstos deberán designar además del titular, un suplente que reemplace al primero cuando se halle ausente o impedido ».

Por decreto del 31 de Enero de 1889 « confiérese a los Jueces Letrados de los Territorios Nacionales la facultad de suspender por sí o a pedido de los Gobernadores respectivos, a los



Jueces de Paz nombrados con arreglo al artículo 7° de la ley 1532 y proponer su remoción al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, remitiéndoles los antecedentes del caso ».

Un decreto de 9 de Abril de 1902 establece que « los médicos dependientes de las gobernaciones de los Territorios Nacionales están obligados a desempeñar las funciones de carácter pericial que les encomienden directamente los Jueces Letrados respectivos, salvo casos excepcionales en que para cumplirlas debieran alejarse considerablemente del lugar de su residencia o abandonando enfermos que por su gravedad reclamaren con urgencia las atenciones profesionales de su servicio oficial ».

En 14 de Julio de 1904, un decreto establece que los Gobernadores propondrán al P. E. por intermedio del Ministerio de Justicia el nombramiento de los Jueces de Paz y encargados de Registro Civil para los departamentos que tengan una población mayor de 1.000 habitantes cuando no se haya hecho la designación por elección popular (Art. 1°). Los funcionarios nombrados por el P. E. durarán dos años en ejercicio de sus cargos, sin perjuicio de su cese inmediato, si antes de su término se hiciera la elección popular del titular (Art. 2°).

En 21 de Enero de 1905 se decretó, que los Gobernadores « ejercerán vigilancia », entre otras oficinas, sobre los Juzgados de Paz.

Finalmente, por decreto del 6 de Abril de 1906, se hizo saber a los Jueces de Paz de Territorios « que mientras desempeñaran sus cargos no podrán ejercer las profesiones de procurador, rematador o perito en asuntos judiciales ».

§ 3°. *Decretos del P. E. sobre funcionarios judiciales.*

De 16 de Febrero de 1895:

Teniendo en cuenta que el Ministerio Público y de menores en los Territorios Nacionales se halla desempeñado por funcionarios creados por la Ley de Presupuesto sin que se haya dictado una ley especial que determine sus deberes y atribuciones, y considerando que la mente del Honorable Congreso al crear esos cargos, no puede haber sido otra que la de dotar a los Juzgados Letrados de aquellos Territorios, de funcionarios con obligaciones y facultades que las leyes y disposiciones vigentes atribuyen a los que funcionan con igual



carácter en los Tribunales Federales y ordinarios, El Presidente de la República decreta:

Art. 1. Mientras no se dicte una ley especial, serán aplicables a los Fiscales de los Juzgados Letrados de los Territorios Nacionales, las leyes y disposiciones vigentes relativas al ministerio público ante la justicia ordinaria y federal, en cuanto sea posible, dadas las condiciones especiales de las gobernaciones aludidas.

Art. 2. Los Defensores de menores tendrán los deberes y atribuciones que la ley número 1893, de Noviembre 12 de 1886, sobre la organización de los Tribunales de la Capital, señala en sus títulos VIII y IX, a los Defensores de Menores e Incapaces, y de Pobres y Ausentes.

De 23 de Agosto de 1900:

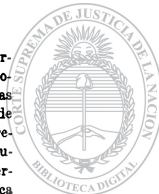
Artículo 1. Queda prohibido a los Defensores de menores, pobres, incapaces y ausentes de los Territorios Nacionales el ejercicio de la abogacía o representación de terceros, en juicios que tramiten ante el Juzgado Letrado del territorio en que estén radicados.

Art. 2. Sin perjuicio de lo determinado en el artículo precedente, registrarán para los funcionarios aludidos, las disposiciones de los títulos 3º y 9º de la ley n° 1893, de 12 de Noviembre de 1886.

§ 4º. *El Juez Letrado y el Gobernador.*

Por lo distantes de sus respectivos superiores, suelen producirse conflictos entre los Gobernadores funcionarios dependientes del Ministerio del Interior y los Jueces Letrados que, si administrativamente dependen del de Justicia e Instrucción Pública, tienen su superior en la Cámara Federal respectiva y por ella en la Corte Suprema. Además de las resoluciones gubernativas que aquellos conflictos han tenido, es de citarse la de orden general que el P. E. dictó en 29 de Enero de 1902. En ella se establece que el Gobernador tiene a su cargo la Administración General del Territorio y ejerce dentro de él todas las atribuciones que en toda la República corresponden al P. E. Nacional para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación (Art. 1º).

Procurará mantener con las autoridades judiciales del Territorio la más constante armonía de relaciones, concurriendo con ellas dentro de su esfera de acción y de sus recursos, conforme al art. 13 de la ley 48, a cuyo efecto deberá prestar a los jueces el auxilio de la fuerza pública siempre que sea debidamente requerido por ellos (Art. 2º).



Los jueces dirigirán los referidos requerimientos al Gobernador, quien transmitirá inmediatamente las órdenes que correspondan, a sus subordinados, por oficio o telegrama, las que se reputarán actos oficiales concluidos a los efectos de denuncias de crímenes o delitos, pudiendo en caso de duda, requerirse exhibición o copia autorizada del original (Artículos 3º y 4º). Si por carecer de personal suficiente el Gobernador no pudiera hacer efectivo el auxilio de fuerza pública pedido por los jueces, telegrafiará al Ministerio del Interior recabando el proceder que debe adoptar (art. 6º). Se previene que «el Gobernador tendrá presente que él y la policía deben ayudar a la autoridad judicial, pero que, ni los jueces ni autoridad alguna pueden encargarle en general como agente del P. E. de la Nación la ejecución de acto alguno que signifique por su parte el ejercicio de funciones judiciales (artículo 95 de la Constitución), con excepción de los casos previstos en la última parte del art. 13 de la ley 48».

§ 5º. *Acordadas de la Corte.*

«En 21 de febrero de 1905, reunidos en la sala de acuerdos de la Suprema Corte Nacional los señores Ministros doctores Octavio Bunge, Nicanor González del Solar, Mauricio P. Daract y Antonio Bermejo, con asistencia del Sr. Procurador Fiscal Dr. Julio Botet, dijeron: que siendo necesario dictar un reglamento para los Jueces Letrados de los Territorios Nacionales a fin de procurar la mejor administración de la Justicia y haciendo uso de las facultades conferidas al Tribunal por el artículo 10 de la ley nº 4055, acordaron el siguiente:

Artículo 1. Los Jueces Letrados de los Territorios Nacionales deberán asistir al despacho todos los días hábiles del año durante cuatro horas, quedando a su discreción determinar las que juzgaren más convenientes para los litigios.

Art. 2. Solamente se consideran feriados los días de fiesta religiosa de ambos preceptos, los de fiesta nacional, los de la semana santa, los de carnaval y los de vacaciones que tendrán lugar en el mes de Enero de cada año.

Art. 3. Los Jueces Letrados, Fiscales, Defensores de pobres y menores, y demás empleados no podrán ausentarse del Territorio de su jurisdicción durante las ferias, debiendo residir en el lugar designado por el asiento del Juzgado.

Art. 4. Siempre que una causa civil o criminal de carácter urgente lo requiera, los Jueces Letrados habilitarán los días de estas ferias que sean necesarios para su prosecución o resolución.



Art. 5. Por regla general, deberán dar preferencia en el despacho a las causas criminales y a las fiscales sin desatender por esto ni causar retardo en las demás que no se hallen comprendidas en estas clasificaciones.

Art. 6. Estas últimas deben tramitarse y resolverse por el orden de su entrada al despacho, con la sola excepción de aquellas que, por su naturaleza, reclamen, a su juicio, una resolución urgente.

Art. 7. Siempre que hayan de librarse despachos dirigidos a autoridades de Provincia a o autoridades Nacionales fuera de su jurisdicción, pondrán el sello de tinta del Juzgado con la firma del Juez. Que asimismo, siempre que hayan de librar exhortos a las autoridades de países extranjeros, o siempre que en el juzgado se expidan testimonios de actuaciones o de escrituras para tener efecto fuera de su jurisdicción o en países extranjeros, deberán poner el sello de tinta, haciendo en su caso saber a las partes el deber de hacerlos legalizar.

Art. 8. Los pedidos de extradición hechos a las autoridades de los estados entre quienes rige el tratado de Derecho Internacional Privado celebrado en Montevideo y aprobado por la ley n° 3192, los Jueces Letrados deberán sujetarse a lo prescripto en el artículo 30 del mismo, debiendo en los demás casos observar lo dispuesto en los tratados y leyes vigentes.

Art. 9. Los Jueces Letrados tienen el deber de mantener el buen orden y disciplina entre los empleados de su dependencia, pudiendo imponer a los mismos y demás personas que intervengan en los juicios, las correcciones disciplinarias establecidas en el artículo 53 del Código de Procedimientos en la Capital, por las faltas contra su autoridad y decoro.

Art. 10. Los Jueces Letrados deberán observar, en cuanto a la forma en que ha de hacerse la extracción de fondos depositados en el Banco de la Nación Argentina a la orden de ellos, lo dispuesto en la Acordada de esta Suprema Corte, de 12 de Mayo de 1900.

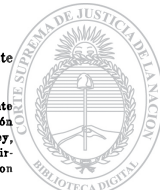
Art. 11. Igualmente deberán observar la Acordada de esta Suprema Corte de 5 de Febrero de 1903 y las demás dictadas o que se dictaren en cuanto les fueren aplicables.

Art. 12. En todo lo demás que no esté contenido en este Reglamento y que a él se oponga, deberán los Jueces Letrados regirse por lo que se halle dispuesto en las leyes comunes.

Las acordadas a que se refieren los arts. 10 y 11 son las siguientes:

De 13 de Febrero de 1897:

Que se librara oficio a los jueces federales y jueces letrados de los territorios nacionales previniéndoles que en las causas



en que intervengan deben observar y hacer cuidadosamente lo siguiente:

«1° Al pie de todos los escritos debe ponerse el correspondiente cargo de presentación, autorizado por el Secretario con indicación de día y hora. Cuando el escrito sea de aquellos que, por la ley, debe presentarse dentro de un término fatal, el cargo deberá ser firmado por el interesado, o por quien lo presentase, conjuntamente con el actuario.

«2° La reposición del papel sellado y uso de estampillas de abogados, procuradores, peritos, etc., se hará en todos los casos sin demora, y en los términos fijados por la ley de la materia.

«3° Los Jueces Federales y los de los Territorios Nacionales, dirigirán todas las comunicaciones al Secretario de la Suprema Corte.

«4° En todos los casos en que se otorguen libremente los recursos para ante la Suprema Corte, fijarán en el mismo auto, el término de emplazamiento a que se refiere la segunda parte del artículo 211 de la Ley de Procedimientos.

«5° Las causas por infracciones a la ley de enrolamiento, deben tramitarse, en lo pertinente, según las reglas establecidas en el artículo 1°, sección 1°, libro 4° del Código de Procedimientos en lo Criminal.

«6° Las citas de las leyes se harán con toda precisión, sin dejarse en blanco alguna, como tampoco el número de fojas de autos, escritos o diligencias a que se haga referencia.

«Igualmente acordaron se hiciera saber a los Jueces Federales, Procuradores Fiscales, Jueces Letrados de los Territorios Nacionales, Agentes Fiscales, Defensores de pobres y menores, Secretarios y demás empleados de unos y otros Juzgados, que la feria no los autoriza para ausentarse de la sección o territorio de su jurisdicción; y que deben residir en el lugar designado para asiento del Juzgado, como está dispuesto para los Jueces Letrados de los citados territorios, por el artículo 33 de la ley sobre organización de los mismos.

«El señor Ministro, doctor Bazán, manifestó que, a su juicio, no era necesaria la disposición que se consigna en la segunda parte del número primero de este Acuerdo.

«Con lo que terminó el acto, firmando el señor Presidente, los señores Ministros y el señor Procurador General».

De Mayo 12 de 1900:

Con objeto de tomar en cuenta los oficios por el Banco de la Nación Argentina pidiendo la reglamentación de la forma en que debe hacerse la extracción de los fondos depositados en el citado establecimiento a la orden de los jueves federales o de los jueces letrados de los territorios Nacionales:

1° Que la mencionada extracción de depósitos se efectúe por li-



bramientos del Juzgado que conozca el asunto, a favor de la persona que resulte deber percibirlos, la que ocurrirá con el libramiento al Banco de la Nación Argentina, en compañía del Secretario o actuario, quien llevará el expediente en que se haya ordenado la extracción para hacer constar en él su cumplimiento;

2° Que cuando el depósito se hubiese constituido en una sucursal donde no tuviese su asiento el Juzgado, éste deberá ordenar la transferencia del depósito a la sucursal del lugar de su jurisdicción, para proceder en seguida según se indica en el número anterior;

3° Que se comunique este Acuerdo a los Jueces Federales de sección y a los Jueces Letrados de los territorios, debiendo estos últimos mandar que los Jueces de Paz, en los casos de su competencia, procedan con arreglo a lo dispuesto anteriormente;

4° Que los expresados Jueces Federales y Letrados manden colocar en tablilla este Acuerdo, que deberá publicarse en los diarios de esta Capital y comunicarse al Banco de la Nación.

APÉNDICE A LA PARTE SEGUNDA

§ 1°. *La justicia en las provincias:*

La jurisdicción común, ordinaria o local no ha sido delegada por las provincias al gobierno federal (arts. 104 y 105 Constitución Nacional). En materia judicial, la Nación no tiene más que una jurisdicción taxativa que es por tanto de excepción. Así cada provincia se ha dado formas procesales propias y ha establecido su propia Administración de Justicia.

En todas, por lo general, hay primeramente un tribunal superior que es de alzada, pues conoce en última instancia de las causas que le llegan en apelación, y resuelve los conflictos constitucionales y cuestiones de competencia; hay, luego, los jueces de primera instancia y finalmente los jueces de paz: de las resoluciones de éstos conocen aquéllos en grado de apelación.

Los jueces nombrados por el Poder Ejecutivo provincial con acuerdo de la legislatura suelen ser temporarios aunque reelegibles. En Entre Ríos, los reelectos pasan a ser inamovibles.

En algunas provincias hay además del Tribunal Superior Cámaras de Apelación, formándose en algunas el Superior con magistrados de las Cámaras.



La provincia de Buenos Aires que en su Código de Procedimientos ha establecido algunas novedades (juicio oral en ciertos casos, recursos de *habeas corpus* contra resoluciones de jueces, etc.), tiene organizados sus Tribunales en la siguiente forma:

1ª Instancia: 24 Jueces, de ellos 4 en lo Criminal, a saber: cuatro en el departamento de la Capital; tres en el Centro (Mercedes); dos en el del Norte (San Nicolás); dos en los del Sur (Dolores) y Costa Sur (Bahía Blanca), y uno en el Sudoeste (Azul).

2ª Instancia: 9 Cámaras de Apelación: 3 en la Plata (1 Criminal); 2 en Mercedes (id.), y uno en cada uno de los otros cuatro departamentos.

Suprema Corte: Esta es una institución que honra ciertamente, no sólo a la Provincia sino a toda la República, por el conjunto de atribuciones que se le han señalado:

1º. *Como tribunal político:* Porque las contiendas de que como tal conoce entre poderes públicos y entre tribunales cuanto a competencia no versan sobre derechos de personas o de bienes, sino entre autoridades y el procedimiento lo da la Constitución o las leyes administrativas o electorales.

2º. *Como juez de lo contencioso administrativo:* Previa denegación o retardación de Justicia por parte de la autoridad administrativa, la Corte conoce en instancia única de: 1º causas contra una resolución administrativa que vulnere un derecho de carácter administrativo establecido en favor del reclamante por una ley o resolución administrativa; 2º causas contra resoluciones administrativas que rescindan, modifiquen o interpreten contratos celebrados por el P. E. en su carácter de poder público; 3º contra la denegación o concesión de jubilación (1).

(1) El Dr. M. Castro, cuyo notable curso seguimos en esto (tomo 1º, pág. 90), admite que «en el orden federal no existe jurisdicción contenciosa administrativa sino que la Nación es demandable ante los tribunales federales previa venia del Congreso, cuando la acción emerge de un hecho realizado por aquélla en su carácter de poder público, no como persona jurídica (una compra, p. ej.) en que no hace falta venia.»

Observamos: 1º que en las leyes federales no se establece un procedimiento contencioso administrativo, y 2º que en la jurisdicción ordinaria hay recurso contencioso administrativo ante la Cámara Civil contra resoluciones municipales.

Digamos también de paso que es cierto que en 1913 la Provincia puso



3°. *Como Tribunal de Casación*: El recurso así llamado, se acuerda contra las sentencias definitivas para anularlas por violación o aplicación falsa o errónea de la ley o doctrina legal, entendiéndose por ésta la derivada del espíritu y de la letra. Si así lo decide, la Corte debe declarar cuál es la ley o la doctrina aplicable al caso, por lo que, respecto de este recurso, viene a ser un tribunal de tercera instancia. Así se asegura la unidad de jurisprudencia.

4°. *Como Juez definitivo en materia de interpretación constitucional*: De las disposiciones de cualquier poder, el legislativo (leyes) el ejecutivo (decretos, reglamentos, etc.), y el mismo judicial (de las Cámaras). La Corte procede por dos vías: A) *Originaria*: queja o demanda de inconstitucionalidad, cuando una parte interesada entiende que los derechos, exenciones o garantías « acordadas por alguna cláusula » de la Constitución provincial han sido vulneradas por una medida de aquellos poderes; B) *por vía de apelación*: es decir, en juicios ya iniciados en que se plantee un caso también de constitucionalidad. Los términos son los mismos (tres hipótesis) en que se funda, en la nacional, el recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48, que constituye a la Corte Suprema Nacional en alto vigilante de la Constitución, las leyes y los Tratados.

§ 2°. *Justicia Militar*:

El Código de Justicia Militar que más adelante transcribimos, no sólo comprende (tratado 2°) los procedimientos en tiempos de paz (libro 2°) y de guerra (libro 3°) y la penalidad (tratado 3°), sino que en el tratado primero se ocupa de la organización y competencia de los tribunales militares, el Consejo Supremo de Guerra y Marina, los Consejos de guerra permanentes, los especiales, los Jueces de Instrucción y otros funcionarios.

En el informe de la Comisión parlamentaria, se sintetiza en la siguiente forma la materia penal militar que comprende:

a los secretarios de Juzgado a sueldo. En un pleito valioso acababa de regularse al secretario en concepto de costas 24.000 pesos (lo que no ganó el juez mientras duró el pleito, un año), pero, ¿qué menos si hubo que regular a uno de los letrados 84.000 pesos?



1° Los delitos meramente militares, es decir, los que sólo puedan cometerse por militares. El motín militar, las distintas especies de insubordinación, el abandono del servicio, la desertación, la venta de elementos militares, las infracciones en el mando superior o de los que reciben consigna, y la de las incluidas bajo el título de «Indecoro militar» se consideran delitos que substancialmente afectan a la institución y accesoriamente a la colectividad social.

2° Los delitos comunes cometidos por militares, pero que por razones de lugar y tiempo, ocasión o causa, lesionan principalmente a la institución militar. Ejemplos: (siempre siendo militar el agente) por razón de lugar, homicidio cometido en el mismo campamento; por razones de lugar y tiempo, robo cometido por un soldado franco en territorio militarmente ocupado durante una guerra; por razón de la ocasión, delito cometido en el servicio o con ocasión de él.

3° Los delitos cometidos por no militares cuando aquéllos son referentes a la institución militar; incitación a desertar o a la insubordinación, compra de efectos militares, etc.

4° Los delitos cometidos por no militares cuando por razón de circunstancias extraordinarias convenga reprimirlos por consejo de guerra (bandos infringidos, ocupación militar de territorio enemigo).

Se ha fundado la jurisdicción militar en el artículo 67 de la Constitución que atribuye al Congreso la facultad de «formar reglamentos y ordenanzas para el gobierno de los ejércitos» Por lo cual se ha formado «un Código» con leyes orgánicas, procedimientos propios y penalidad especial que no siempre van a compás de los progresos de la legislación general.

§ 3°. *Policía, Municipalidad, Aduana, Prefectura:*

Los jefes de estas reparticiones tienen funciones verdaderamente judiciales como veremos en las leyes respectivas.

§ 4° *Otras reparticiones:*

También habremos de ver otras sanciones penales de carácter administrativo. V. Parte Tercera.

CODIGOS



I. *Código Penal*: Ley n° 11.179, de 29 octubre 1921. Texto íntegro seguido de las leyes incorporadas: 1. N° 11.210. Represión de trusts. — 2. N° 11.309. Venta de alcaloides. — 3. N° 11.331. Ampliación de la anterior. — 4. N° 11.317. Trabajo de mujeres y niños. — 5. N° 9643. Warrants. — 6. N° 9644. Prenda agraria. — 7. N° 10.903. Patronato de menores.

II. *Código civil*: Ley n° 340, de 29 septiembre 1869. Artículos de carácter penal, con las leyes agregadas: 1. N° 2393. Matrimonio. — 2. N° 11.156. Alquileres. — 3. N° 11.278. Pago de salarios. — 4. N° 11.357. Derechos civiles de la mujer.

III. *Código de Comercio*: Ley n° 2637 de 5 octubre 1889. Artículos de carácter penal, con las leyes agregadas: 1. N° 4156. Quiebras. — 2. N° 5125. Balances de sociedades anónimas. — 3. N° 8875. Debentures. — 4. N° 11.388. Sociedades cooperativas.

IV. *Código de Minería*: Ley n° 1919, de 8 diciembre 1881. Artículos de carácter penal.

V. *Código Rural* para los Territorios Nacionales: Ley n° 3088, de 14 agosto 1894.

Texto íntegro.

VI. *Código de Procedimientos* en materia civil y comercial. Artículos de carácter penal con las leyes agregadas: 1° Procedimiento federal en lo civil y comercial. 2° N° 189. Expropiación. 3° N° 1096. Ejercicio de la procuración.

VII. *Código de Justicia Militar*: Ley n° 4708, de 21 sep-



tiembre 1905. Texto íntegro seguido de las leyes: 1. N° 4707. Orgánica Militar, de 21 septiembre 1905. — 2. N° 4856. Orgánica de la Armada, de 29 septiembre 1905. — 3. N° 11.386, de 21 octubre 1926. Enrolamiento general. — 4. N° 9697. Estadística de caballos, etc., para el ejército movilizado.

VIII. *Código de Procedimiento en lo criminal*: Ley n° 2372 de 17 de octubre de 1888 con dos agregados. 1° Ley N° 612. Extradición. 2° Tratado de Montevideo.

I. — Código Penal

LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

TITULO I

APLICACION DE LA LEY PENAL

Artículo 1. Este Código se aplicará: 1° Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina o en los lugares sometidos a su jurisdicción. 2° por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo.

Art. 2. Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley. En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho.

Art. 3. En el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado.

Art. 4. Las disposiciones generales del presente código se aplicarán a todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario.

(¹) De la aplicación del Código en cuanto al espacio y al tiempo tratan los tres primeros artículos. *En cuanto al espacio*

(¹) Para el comentario de cada artículo de este Código puede consultarse nuestro *Código Penal Argentino*, (3 tomos: Editor, Julio Suárez, Buenos Aires 1927) en el que se estudian sus antecedentes



él rige en el territorio nacional, entendiéndose por tal no sólo el limitado por sus fronteras, sino el mar territorial, es decir, la porción de mar comprendida entre la costa y una línea ficticia paralela a la ribereña (los ríos comunes se rigen por acuerdos internacionales); los buques extranjeros que en los puertos nuestros y en nuestro mar territorial son teatro de una infracción al Código; el ejército nacional que en guerra ocupa territorio extranjero y las embajadas, legaciones y consulados de la República en el exterior. Salvo esto último, en el territorio nacional va comprendido el aéreo. Los buques argentinos en alta mar forman parte del territorio nacional.

En cuanto al tiempo rige el principio de la ley más benigna para el procesado como para el condenado y ello aun de oficio, es decir, sin tenerlo que invocar el reo. El principio llega hasta el cómputo de la prisión preventiva, ya que ésta se descuenta de la pena impuesta.

El artículo 4° debe entenderse para las leyes penales que no son el Código; es como si el libro I de éste figurase al principio de cada una de ellas; en algunas no sucede así.

Hay que advertir que el artículo 114 no rige en las provincias; lo ha dictado el Congreso no para toda la Nación, sino para la parte de ésta en que su legislación es excluyente de la provincial, es decir, para la Capital y territorios nacionales. no para la Justicia Federal que por la Constitución no sabe ni conoce de los delitos de prensa.

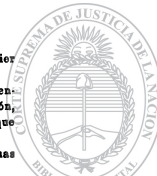
TITULO II

DE LAS PENAS

Art 5. Las penas que este código establece son las siguientes: reclusión, prisión, multa e inhabilitación.

Art. 6. La pena de reclusión, perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio en los establecimientos destinados al efecto.

legislativos y doctrinales y se resumen y analizan las diversas cuestiones que cada precepto legal suscita. En las notas presentes adoptamos un punto de vista más bien sintético que a los doctos poco puede interesar, pero ~~que~~ en una obra que abarca el conjunto de la legislación penal vigente en la República Argentina puede contribuir a la mejor comprensión de su cuerpo legal básico.



Los reclusos podrán ser empleados en obras públicas de cualquier clase con tal que no fueren contratadas por particulares.

Art. 7. Los hombres débiles o enfermos y los mayores de sesenta años que merecieron reclusión, sufrirán la condena en prisión, no debiendo ser sometidos sino a la clase de trabajo especial que determine la dirección del establecimiento.

Art. 8. Los menores de edad y las mujeres sufrirán las condenas en establecimientos especiales.

Art. 9. La pena de prisión, perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio, en establecimientos distintos de los destinados a los reclusos.

Art. 10. Cuando la prisión no excediera de seis meses podrán ser detenidas en sus propias casas las mujeres honestas y las personas mayores de sesenta años o valetudinarias.

Art. 11. El producto del trabajo del condenado a reclusión o prisión se aplicará simultáneamente:

1° A indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito que no satisficere con otros recursos. 2° A la presentación de alimentos según el código civil. 3° A costear los gastos que causare en el establecimiento. 4° A formar un fondo propio, que se le entregará a su salida.

Art. 12. La reclusión y la prisión por más de tres años llevan como inherente la inhabilitación absoluta, por el tiempo de la condena, la que podrá durar hasta tres años más, si así lo resuelve el tribunal, de acuerdo con la índole del delito. Importan además la privación, mientras dure la pena, de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos. El penado quedará sujeto a la curatela establecida por el código civil para los incapaces.

Art. 13. El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido veinte años de condena, el condenado a reclusión temporal o a prisión por más de tres años que hubiere cumplido los dos tercios de su condena y el condenado a reclusión o prisión, por tres años o menos, que por lo menos hubiese cumplido un año de reclusión u ocho meses de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrán obtener la libertad por resolución judicial previo informe de la dirección del establecimiento bajo las siguientes condiciones:

1° Residir en el lugar que determine el auto de sultura. 2° Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especialmente la obligación de abstenerse de bebidas alcohólicas. 3° Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia. 4° No cometer nuevos delitos. 5° Someterse al cuidado de un patronato, indicado por las autoridades competentes. Estas condiciones regirán hasta el vencimiento de los términos de las penas temporales y en las perpetuas



hasta cinco años más, a contar desde el día de la libertad condicional.

Art. 14. La libertad condicional no se concederá a los reincidentes.

Art. 15. La libertad condicional será revocada cuando el penado cometiere un nuevo delito o violare la obligación de residencia. En estos casos no se computará, en el término de la pena, el tiempo que haya durado la libertad. En los casos de los incisos 2º, 3º y 5º del artículo 13, el tribunal podrá disponer que no se compute en el término de la condena todo o parte del tiempo que hubiere durado la libertad, hasta que el condenado cumpliera lo dispuesto en dichos incisos.

Art. 16. Transcurrido el término de la condena, o el plazo de cinco años señalado en el artículo 13 sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena quedará extinguida, lo mismo que la inhabilitación absoluta del artículo 12.

Art. 17. Ningún penado cuya libertad condicional haya sido revocada, podrá obtenerla nuevamente.

Art. 18. Los condenados por tribunales provinciales a reclusión o prisión por más de cinco años serán admitidos en los respectivos establecimientos nacionales. Las provincias podrán mandarlos siempre que no tuvieran establecimientos adecuados.

Art. 19. La inhabilitación absoluta importa:

1º La privación del empleo o cargo público que ejercía el penado aunque provenga de elección popular. 2º La privación del derecho electoral. 3º La incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas. 4º La pérdida de toda jubilación, pensión o goce de montepío que disfrutase. Si el penado tuviese esposa, hijos menores, de cualquier clase, o padres ancianos y desvalidos, correspondería a éstos el importe de la jubilación, pensión o goce de montepío. En caso contrario, su importe se destinará a aumentar los fondos provenientes de la aplicación del artículo 11.

Art. 20. La inhabilitación especial producirá la privación del empleo, cargo, profesión o derecho sobre que recayera y la incapacidad para obtener otro del mismo género durante la condena. La inhabilitación especial para derechos políticos producirá la incapacidad de ejercer durante la condena, aquellos sobre que recayera.

Art. 21. La multa obligará al reo a pagar la cantidad de dinero que determinare la sentencia, teniendo en cuenta además de las causas generales del artículo 40, la situación económica del penado. Si el reo no pagare la multa en el término que fije la sentencia, sufrirá prisión que no excederá de un año y medio. El tribunal, antes de transformar la multa en la prisión correspondiente, procurará la satisfacción de la primera, haciéndola efectiva sobre los bienes, sueldos u otras entradas del condenado. Podrá autorizarse al condenado a amortizar la pena pecuniaria, mediante el trabajo libre, siempre que se presente ocasión para ello. También se podrá



autorizar al condenado a pagar la multa por cuotas. El tribunal fijará el monto y la fecha de los pagos, según la condición económica del condenado.

Art. 22. En cualquier tiempo que se satisficiera la multa, el reo quedará en libertad. Del importe se descontará, de acuerdo con las reglas establecidas para el cómputo de la prisión preventiva, la parte proporcional al tiempo de detención que hubiere sufrido.

Art. 23. La condena importa la pérdida de los instrumentos del delito, los que, con los efectos provenientes del mismo, serán decomisados, a no ser que pertenecieran a un tercero no responsable. Los instrumentos decomisados no podrán venderse, debiendo destruirse. Pueden aprovechar sus materiales los gobiernos de provincia o el arsenal de guerra de la nación.

Art. 24. La prisión preventiva se computará así: por dos días de prisión preventiva, uno de reclusión; por un día de prisión preventiva, uno de prisión o dos de inhabilitación o la cantidad de multa que el tribunal fijase entre cuatro y diez pesos.

Art. 25. Si durante la condena el penado se volviere loco, el tiempo de la locura se computará para el cumplimiento de la pena, sin que ello obste a lo dispuesto en el apartado 3º del inciso 1º del artículo 34.

El artículo 5º suprime las penas de muerte, reclusión, penitenciaría, arresto, destierro y relegación. Esta última sigue aplicándose en los casos del artículo 51 y 52, si bien éste se define como medida de seguridad. La de presidio y penitenciaría se llaman hoy reclusión y el arresto, prisión. Artículo 305.

La prisión se diferencia de la reclusión, no en el trabajo que en las dos es obligatorio, sino en que debe hacerse (y por tanto la pena debe cumplirse) en establecimientos distintos, y nunca la de prisión en obras públicas contratadas por particulares.

La inhabilitación absoluta es pena accesoria de las de reclusión y prisión por más de tres años y puede seguir otros tres: ella comprende el ejercicio de la patria potestad, la administración de bienes y su libre disposición a título oneroso y lucrativo.

Fuera de esto la inhabilitación absoluta o temporal, como pena, es de efectos administrativos y políticos. Arts. 19 y 20.

La pena de multa tiene tres especialidades: puede satisfacerse en cuotas; no pagándose se transforma en prisión, artículo 21; pagando antes de la sentencia el máximo de la señalada por la ley, cesa el juicio por extinción de la acción penal. Art. 64.



El artículo 24 establece el cómputo de la prisión preventiva que debe consignarse en la sentencia.

El 25 prevé el caso de locura durante el cumplimiento de la condena que se supondrá que sigue cumpliendo. El texto encierra un error; su referencia al artículo 34 debe entenderse hecha al inciso 2º, no al 1º.

Libertad condicional: Arts. 13-17.

Procede como facultad judicial, no como derecho del reo: en las penas perpetuas a los veinte años; en las temporales de más de tres años, cumplidos los dos tercios; en las inferiores, a los ocho meses de prisión o al año de reclusión.

Efectos: no extingue la pena sino que la suspende, quedando en pie las accesorias y la indemnización civil. Al terminar el tiempo de la pena impuesta por la condena, se da por cumplida.

Revocación: por nuevo delito cometido o violación de las condiciones impuestas en el auto. Por la primera causa, el juez del nuevo proceso atiende, para la fijación de la pena, a lo que de la anterior pena quedaba por cumplir. La revocación impide una nueva liberación condicional.

TITULO III

CONDENACION CONDICIONAL

Art. 26. En los casos de primera condena a pena de reclusión o prisión que no exceda de dos años, o de multa, los tribunales podrán ordenar, en el mismo pronunciamiento, que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión se fundará en la personalidad moral del condenado, la naturaleza del delito y las circunstancias que lo han rodeado en cuanto puedan servir para apreciar esa personalidad. El tribunal requerirá las informaciones que crea pertinentes para formar criterio. En los casos de concurso de delitos procederá la condenación condicional, si la pena impuesta al reo no excediere de dos años de prisión o fuese de multa.

Art. 27. La condenación se tendrá como no pronunciada si dentro del término para la prescripción de la pena, el condenado no cometiere un nuevo delito. Si cometiere un nuevo delito, sufrirá la pena impuesta en la primera condenación y la que le correspondiere por el segundo delito conforme a lo dispuesto sobre acumulación de penas.

Art. 28. La suspensión de la pena no comprenderá la reparación de los daños causados por el delito y el pago de los gastos del juicio.



La condenación condicional la concede el juez, como facultad suya y no derecho del reo y ello precisamente en la sentencia:

1º. Cuando éste no es reincidente.

2º. Cuando la condena no excede de dos años y lo mismo si es por concurso de delitos o multa. Procede en las contravenciones municipales según la C. C. C.

En caso de nuevo delito se acumula la pena en suspenso a la de esta infracción. V. art. 58.

TITULO IV

REPARACION DE PERJUICIOS

Art. 29. La sentencia condenatoria podrá ordenar:

1º La indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba. 2º La restitución de la cosa obtenida por el delito, y si no fuere posible la restitución, el pago por el reo del precio corriente de la cosa, más el de estimación si lo tuviere. 3º El pago de costas. 4º Cuando la reparación civil no se hubiese cumplido durante la condena o cuando se hubiese establecido a favor del ofendido o de su familia una pena de indemnización, el juez, en caso de insolvencia, señalará la parte de los salarios del responsable que debe ser aplicada a esas obligaciones, antes de proceder a concederle la libertad condicional.

Art. 30. La obligación de indemnizar es preferente a todas las que contrajere el responsable después de cometido el delito y al pago de la multa. Si sus bienes no fueren suficientes para cubrir todas las responsabilidades pecuniarias, se satisfarán éstas en el orden siguiente:

1º La indemnización de los daños y perjuicios. 2º El resarcimiento de los gastos del juicio.

Art. 31. La obligación de reparar el daño es solidaria entre todos los responsables del delito.

Art. 32. El que por título lucrativo participare de los efectos de un delito, estará obligado a la reparación hasta la cuantía en que hubiere participado.

Art. 33. En caso de insolvencia total o parcial, se observarán las reglas siguientes:

1º Tratándose de condenados a reclusión o prisión, la reparación se hará en la forma determinada en el artículo 11. 2º Tratándose de condenados a otras penas, el tribunal señalará la parte de sus entradas o emolumentos que deban depositar periódicamente hasta el pago total.



El juez de oficio *podrá* (si hay querellante que lo haya reclamado, *deberá*) en la sentencia comprender las responsabilidades civiles, indemnización, restitución y costas. La primera *prima* sobre las costas. Si el reo es insolvente se seguirán las reglas del artículo 33.

La deuda por reparación es solidaria en el sentido de que puede exigirse de cualquiera de los condenados y seguir con los demás, sin que él o los que paguen, puedan reclamar de los otros.

El encubridor que se hubiese aprovechado del delito y en general todo el que haya participado por donación u otro título lucrativo de sus efectos, debe restituir la parte o por la parte en que se haya beneficiado.

TITULO V

IMPUTABILIDAD

Art. 34. No son punibles:

1º El que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas, por su estado de inconciencia, error o ignorancia de hecho no imputable, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá, sino por resolución judicial, con audiencia del ministerio público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás. En los demás casos en que se absolviera a un procesado por las causales del presente inciso, el tribunal ordenará la reclusión del mismo en un establecimiento adecuado hasta que se comprobare la desaparición de las condiciones que le hicieren peligroso. 2º El que obrare violentado por fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e inminente. 3º El que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño. 4º El que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. 5º El que obrare en virtud de obediencia debida. 6º El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurriesen las siguientes circunstancias: a) Agresión ilegítima. b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel que durante la noche rechazar el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor. Igualmente respecto de



aquel que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia. 7° El que obrare en defensa de la persona o derechos de otro, siempre que concurren las circunstancias a y b del inciso anterior y caso de haber procedido provocación suficiente por parte del agredido, la de que no haya participado en ella el tercero defensor.

Art. 35. El que hubiere excedido los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad, será castigado con la pena fijada para el delito por culpa o imprudencia.

Art. 36. No es punible el menor de 14 años. Si de las circunstancias de la causa y condiciones personales del agente o de sus padres, tutores o guardadores, resultare peligroso dejarlo a cargo de éstos, el tribunal ordenará su colocación en un establecimiento destinado a corrección de menores hasta que cumpla diez y ocho años de edad. La entrega podrá anticiparse mediante resolución judicial, previa justificación de la buena conducta del menor y de sus padres o guardadores. Si la conducta del menor en el establecimiento donde estuviere, diese lugar a suponer que se trata de un sujeto pervertido o peligroso, el tribunal podrá, después de las comprobaciones necesarias, prolongar su estadía hasta que tuviere veintidós años.

Art. 37. Cuando el menor tuviese más de catorce años y menos de diez y ocho, se observarán las siguientes reglas:

a) Si el delito cometido tuviere pena que pudiera dar lugar a la condena condicional, el tribunal quedará autorizado para disponer la colocación del menor en un establecimiento de corrección si fuese inconveniente o peligroso dejarlo en poder de los padres, tutores o guardadores o de otras personas. El tribunal podrá disponer esa colocación hasta que el menor cumpla veintidós años, pudiendo anticipar la libertad o retardarla hasta el máximo establecido cuando el término fijado fuese menor, si resultase necesario, dadas las condiciones del sujeto. b) Si el delito tuviese pena mayor, el tribunal queda autorizado para reducirla en la forma determinada para la tentativa.

Art. 38. El menor que no ha cumplido diez y ocho años, no puede ser declarado reincidente.

Art. 39. En todos los casos de delito cometido por un menor, el tribunal puede privar a los padres de la patria potestad y a los tutores de la tutela. Podrá también disponer el cambio de guardadores. Para tomar esas medidas se tendrán en cuenta las situaciones respectivas del menor, sus padres, tutores o guardadores y lo que convenga al desenvolvimiento moral y educacional del primero.

Art. 40. En las penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, los tribunales fijarán la condenación de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso y de conformidad a las reglas del artículo siguiente.

Art. 41. A los efectos del artículo anterior, se tendrá en cuenta:



1° La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y del peligro causados. 2° La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones procesales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad. El juez deberá tomar conocimiento directo de visu del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso.

Con la advertencia de que además de las causas de exención del artículo 34 hay las de los artículos 185 y 278, notamos sobre el artículo 34:

Inciso 1°: Funda la inimputabilidad en motivos psíquicos, uno patológico, alteraciones morbosas, y otro mixto, enajenación. Sobre esta última establece un régimen de reclusión, facultativo del juez; sobre los demás motivos no es facultativa sino obligatoria la reclusión; ésta es temporal en uno y otro caso.

2°: Debe tratarse de un peligro inminente, y que no haya podido rehuirse de otro modo. Si hay culpa o imprudencia, ésta será castigada.

3°: Mal menor el que causan los bomberos al apagar un incendio o el caso de destrucción médica del feto. Art. 86-1°.

4°: El que detiene a un delincuente in fraganti. Art. 3°, Cód. Proc. Crim.

5°: Obediencia debida por el hijo al padre, el pupilo al tutor, el discípulo al maestro. Obediencia en el servicio del Estado, siempre que la orden emane de la autoridad competente y dentro de sus atribuciones concerniente a un asunto del servicio, que no importe un abuso, exceso o violación de los deberes funcionales del superior y que al ejecutarlo el inferior no vaya más allá de sus propias funciones (1°).

6°: Legítima defensa que comprende al que encuentra un extraño en su hogar que resiste. El primer requisito requiere que la agresión sea actual; puede ser ilegítima la de una auto-

(1) Ob. citada, tomo I, pág. 231.



ridad que se excede en sus funciones. El segundo debe apreciarse subjetivamente. En cuanto al tercero exige la provocación inmediata ⁽¹⁾.

7º: Aquí la defensa requiere que aquel a quien se defiende no hubiera empezado agrediendo, etc. En este inciso como en el anterior si hubo exceso en la defensa (art. 35) en cualquiera de sus tres requisitos, se castigará el hecho como culposos. (Art. 84 y 94).

Los anteriores casos de inimputabilidad *pueden* ser declarados en sumario por auto de sobreseimiento.

Cuando hay imputabilidad, la pena se fijará por las reglas de los artículos 40 y 41 que tienen en cuenta principalmente los grados de peligrosidad del reo.

Régimen de procesados menores: Lo establecen prolijamente los artículos 36-39. Debe tenerse presente el artículo 8º.

TITULO VI

TENTATIVA

Art. 42. El que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las penas determinadas en el artículo 44.

Art. 43. El autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito.

Art. 44. La pena que correspondería al agente, si hubiere consumado el delito, se disminuirá de un tercio a la mitad. Si la pena fuere de reclusión perpetua, la pena de la tentativa será reclusión de quince a veinte años. Si la pena fuese de prisión perpetua, la de la tentativa será prisión de diez a quince años. Si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad y podrá reducirse al mínimo legal o eximirse de ella, según el grado de peligrosidad revelada por el delincuente.

No hay tentativa en el delito formal, en el que sólo se castiga la consumación visible aunque el autor tuviera una intención mayor o peor: hurto, calumnia, falsificación de moneda.

En los demás delitos (materiales) son elementos de la tentativa la intención dolosa de cometerlo, principio de ejecución

(1) V. sobre este inciso ob. cit. tomo I, pág. 232-249, en que además de sus precedentes — proyectos Tejedor y de 1891 — se extractan 26 sentencias sobre el punto y este mismo es dilucidado doctrinalmente.



que requiere en el acto exteriorización, ejecución, idoneidad, y que el agente realice todos los actos necesarios que no han dado el resultado buscado por imprevisión, interrupción u otro accidente, o circunstancias físicas, morales o legales. El desistimiento espontáneo implica sólo el castigo de los actos hasta entonces realizados si son punibles de por sí.

El artículo 44 establece el régimen de la pena con relación a la que hubiese correspondido al agente si hubiese consumado el delito. Para las penas temporales se disminuye de 1/3 a la 1/2. Hay dos sistemas al respecto: hacer el cálculo suponiendo que esa pena la hubiese fijado el juez y otro que lo hace sobre la pena en abstracto fijada al delito en el libro II ⁽¹⁾.

Siendo la pena perpetua, si es de prisión la tentativa tendrá de 10 a 15 años; si es reclusión, de 15 a 20.

El delito imposible del artículo 44 es una tentativa que no llega al fin; o bien por no ser idóneos los medios puestos en juego por el agente (revólver desprovisto de balas sin saberlo éste, veneno que es un purgante, bomba que no estalla) o por la naturaleza del objeto propuesto (« homicidio » de un cadáver, aborto de una ingrátida).

TITULO VII

PARTICIPACION CRIMINAL

Art. 45. Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o presen-
tasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no
habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el de-
lito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado di-
rectamente a otro a cometerlo.

Art. 46. Los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución
del hecho y los que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas
anteriores al mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente
al delito, disminuida de un tercio a la mitad. Si la pena fuere de
reclusión perpetua, se aplicará reclusión de quince a veinte años
y si fuere de prisión perpetua, se aplicará prisión de diez a quince
años.

(1) En la obra citada nos decidimos por este último por no obligar
al juez a hacer dos veces la calificación de los artículos 40 y 41, aun-
que a la letra el 44 parece señalar el primero. Tomo I, pág. 306.



Art. 47. Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un hecho menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del hecho que prometió o ejecutar. Si el hecho no se consumase, la pena del cómplice se determinará conforme a los preceptos de este artículo y a los del título de la tentativa.

Art. 48. Las relaciones, circunstancias y calidades personales, cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad, no tendrán influencia sino respecto al autor, o cómplice a quienes correspondan. Tampoco tendrán influencia aquellas cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo el caso en que fueren conocidas por el partícipe.

Art. 49. No se considerarán partícipes de los delitos cometidos por la prensa a las personas que solamente prestaren al autor del escrito o grabado la cooperación material necesaria para su publicación, difusión o venta.

Autores: Son por igual responsables (art. 45):

a) Los materiales que realizan el acto físico productor del efecto (elemento material del delito) y los que a él cooperan en forma que lo ha hecho posible;

b) Los morales o instigadores, es decir, por mandato, comisión o encargo, orden, coacción y consejo.

Cómplices: La complicidad requiere:

a) Un hecho punible de otro: si éste desiste (la tentativa admite complicidad) o muere o se fuga o está exento de pena, la complicidad subsiste. V. art. 48.

b) Un hecho de complicidad o bien ayudando al autor en el acto o bien prestando una ayuda, antes convenida, al autor, sin llegar a tratarse de un hecho sin el cual el del autor no hubiera podido realizarse.

c) Intención criminal por parte del cómplice, pero si el autor comete otro que el convenido, rige la pena de éste. Art. 47.

La penalidad de los cómplices que se calcula como en el artículo 44, sufre las excepciones de los delitos de los artículos 83, 86, 102, 103, 128, 136, 137 y 178. V. además el caso del artículo 49.

Ténganse también en cuenta los casos de participación de la banda o asociación ilícita de los artículos 166-2º, 167-2º, 184 y 210 y los delitos de conspiración de los artículos 216 y 232.

La complicidad en las quiebras se rige en lo penal por las prescripciones del presente Código y no por el libro IV del de Comercio, hoy ley n° 4156.



TITULO VIII

REINCIDENCIA

Art. 50. Habrá reincidencia siempre que el condenado por sentencia firme, a una pena privativa de libertad, dictada por cualquier tribunal del país, cometiere un nuevo delito, aunque hubiere mediado indulto o conmutación. La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta para la reincidencia si ha sido pronunciada por razón de un delito que pueda, según la ley argentina, dar lugar a extradición. A los efectos de la reincidencia, no se tomará en cuenta los delitos militares o políticos ni los amnistiados.

Art. 51. El reincidente por segunda vez, condenado a pena privativa de la libertad que excediera de dos años, cumplirá su condena con reclusión en un paraje de los territorios del sud. La pena de privación de libertad que el procesado sufrió por delito cometido antes de haber cumplido veintiún años, no podrá computársele para la agravación de la pena.

Art. 52. La reclusión en un paraje de los territorios del sud será impuesta por tiempo indeterminado y como accesorio de la última condena, cuando mediaron las siguientes circunstancias:

1° Dos condenas a reclusión o una a reclusión y otra a prisión por más de tres años. 2° Tres condenas a prisión por más de tres años o una de reclusión por más de tres años y dos de prisión de tres años o menos. 3° Cuatro condenas a prisión, siendo una de ellas mayor de tres años. 4° Cinco condenas a prisión de tres años o menores. Se aplicará la reclusión como accesorio de la condena en los casos de concurso de delitos, siempre que los delitos juzgados hubieren sido cinco por lo menos y que dos de ellos tuviesen fijada pena mayor de tres años de prisión.

Art. 53. La condena anterior no se tendrá en cuenta a los efectos de considerar al reo como reincidente cuando hubieren transcurrido los términos señalados en el artículo 65 y otro tanto más, que nunca excederá de diez años.

Es reincidente el procesado que haya sido condenado por un delito (de la misma especie u otro cualquiera), a pena corporal en el país o en el extranjero; en este último caso por delito que pueda determinar la extradición. Aunque la pena no se hubiese cumplido por fuga, conmutación o indulto. Se exceptúan los delitos amnistiados, los políticos y los militares.

La reincidencia debe ser contemplada a los efectos de los artículos 41 y 42. Presupone un Registro General que hoy no existe.



Determinará además en la nueva condena la imposibilidad de la liberación y la condenación condicionales de los artículos 13 y 26. V. además el 28 de la ley de Patronato de Menores. (Nº 10.903 agregada al Código Civil.)

Si la nueva condena excede de dos años y ha habido ya una anterior reincidencia, ella importa la relegación (art. 51) salvo ser por delito cometido antes de los 21 años.

Si de la primera condena a la nueva han transcurrido los términos que el artículo 65 establece para la prescripción de las penas y otro tanto, no hay reincidencia (art. 53).

Medida de seguridad: Se impone como pena accesorio de la última condena en los casos del artículo 52 (que importan peligrosidad definida) la reclusión por tiempo indeterminado en Ushuaia.

TITULO IX

CONCURSO DE DELITOS

Art. 54. Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor.

Art. 55. Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo en tal caso tendrá como máximo, la suma resultante de la acumulación de las penas correspondientes a los diversos hechos. Sin embargo, esta suma no podrá exceder del máximo legal de la especie de pena de que se trate.

Art. 56. Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con penas divisibles de diferente naturaleza, se aplicará la pena más grave, teniendo en cuenta los delitos de pena menor. Si alguna de las penas no fuere divisible, se aplicará ésta únicamente, salvo en caso en que con la prisión perpetua y la de reclusión temporal, en que se aplicará reclusión perpetua. La inhabilitación se aplicará sin sujeción a lo dispuesto en el párrafo 1º.

Art. 57. A los efectos del artículo anterior, la gravedad relativa de las penas de diferente naturaleza se determinará por el orden en que se hallan enumeradas en el artículo 5º.

Art. 58. Las reglas procedentes se aplicarán también en el caso en que después de una condena pronunciada por sentencia firme, se deba juzgar a la misma persona que esté cumpliendo pena por otro hecho distinto; o cuando se hubieren dictado dos o más sentencias firmes con violación de dichas reglas. Corresponderá al juez que haya aplicado la pena mayor dictar, a pedido de parte, su única sentencia, sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en las



otras. Cuando por cualquier causa la justicia federal, en autos en que ella haya intervenido, no pueda aplicar esta regla, lo hará la justicia ordinaria nacional o provincial que conoció de la infracción penal, según sea el caso.

Reiteración es la comisión por una misma persona de dos o más delitos no juzgados todavía, cometidos al mismo tiempo o no, contra una misma persona o varias, sobre una misma cosa o cosas distintas, en una sola acción o en acciones diferentes.

Se diferencia de la reincidencia en que ésta importa sucesión de hechos y que uno haya sido ya condenado ⁽¹⁾.

El concurso de delitos, llamado así porque « concurren » o son materia de un solo proceso, puede ser:

1º: *Ideal o formal* en que: A la acción encierra en sí varios delitos: a veces el Código los comprende y pena como una sola infracción (abuso de armas con lesiones leves; B uno de los delitos es medio de la ejecución del otro (falsificación para estafar).

2º: *Real* en que: A las acciones si distintas tienen penas homogéneas y ofrecen unicidad de objeto, sujeto pasivo e intención del agente, se las llama delitos continuos; B hechos independientes pero con penas homogéneas; C hechos independientes pero con penas heterogéneas.

El artículo 54 se refiere al concurso ideal o n° 1 y además a los delitos continuos (A del n° 2). El artículo 55 a los hechos de la letra B del n° 2. El artículo 56 a los de la letra C del mismo número 2.

La pena es para el concurso ideal y delitos continuos, la del delito más grave. Los delitos continuos o continuados por la unicidad antes indicada implican: 1º pluralidad de acciones aunque hayan tenido lugar en tiempos diversos; 2º violación de una misma disposición legal; 3º que la intención criminal sea una.

Hechos homogéneos (2º.B): por ejemplo, el abuso de armas con lesiones (que por sí forma un concurso ideal) y hurto: los dos tienen la misma pena, prisión; se forma la escala sumando

⁽¹⁾ Extractamos aquí las páginas 369-394, tomo I, ob. cit. en que con detención se analizan los textos del presente título especialmente la teoría del delito continuo o continuado y en cuanto al artículo 58, explica las dificultades que pueden ofrecerse por mediar la justicia federal.



los tres años máximo del artículo 104 y el del 162, dos años, y estos cinco años serán el máximo de la escala; el mínimo será un año de prisión, pena mínima de la pena menor que es la del artículo 104. Entre un año y cinco el juez impondrá la pena que por las normas del artículo 40 y 41 entienda que corresponde. Esto por el artículo 55.

El 56 rige para los delitos heterogéneos: como la heterogeneidad es de las penas, no de los delitos, ha habido que atenderse a la más grave que es también el principio general del 54.

El 57 fija el orden de las penas que es el del 5: reclusión, prisión, multa e inhabilitación.

Los artículos anteriores implican un solo proceso en que entren los delitos reiterados; el 58 presupone que durante el cumplimiento de la pena señalada en un juicio anterior, el reo se ve sometido, por un delito posterior, a nuevo proceso o resulta que había un delito anterior no conocido y por el cual sufre nuevo proceso. En tal caso el juez de éste, por requerimiento del procesado o de oficio, reclama el expediente del anterior juicio y dicta una pena única con arreglo a los artículos anteriores.

TITULO X

EXTINCION DE ACCIONES Y DE PENAS

Art. 59. La acción penal se extinguirá:

1º Por la muerte del imputado. 2º Por la amnistía. 3º Por la prescripción. 4º Por la renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción privada.

Art. 60. La renuncia de la persona ofendida al ejercicio de la acción penal, sólo perjudicará al renunciante y a sus herederos.

Art. 61. La amnistía extinguirá la acción penal y hará cesar la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a particulares.

Art. 62. La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación:

1º A los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua. 2º Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años. 3º A los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua. 4º Al año, cuando



do se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal. 5° A los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa mayor de dos mil pesos. 6° Al año, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa de dos mil pesos o menos.

Art. 63. La prescripción de la acción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o, si éste fuere continuo, en que cesó de cometerse.

Art. 64. La acción penal por delito reprimido con multa, se extinguirá en cualquier estado del juicio por el pago voluntario del máximo de la multa correspondiente al delito y de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

Art. 65. Las penas se prescriben en los términos siguientes:

1° La de reclusión perpetua, a los veinte años. 2° La de prisión perpetua, a los veinte años. 3° La de reclusión o prisión temporal, en un tiempo igual al de la condena. 4° La de multa mayor de dos mil pesos, a los tres años. 5° La de multa que no excediere de dos mil pesos, al año.

Art. 66. La prescripción de la pena empezará a correr desde la media noche del día en que se notificare al reo la sentencia firme o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiere empezado a cumplirse.

Art. 67. La prescripción correrá o será interrumpida separadamente para cada uno de los partícipes de un delito. La prescripción se interrumpe si, antes de vencido el término, comete el reo otro delito.

Art. 68. El indulto del reo extinguirá la pena y sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a particulares.

Art. 69. El perdón de la parte ofendida extinguirá la pena imputada por delito de los enumerados en el artículo 73. Si hubiere varios partícipes, el perdón en favor de uno de ellos aprovechará a los demás.

Art. 70. Las indemnizaciones pecuniarias inherentes a las penas, podrán hacerse efectivas sobre los bienes propios del condenado, aun después de muerto.

Distingue el título la extinción de la acción penal de la de las penas:

Extinción de la acción penal (1):

Muerte del imputado durante el proceso.

Renuncia del agraviado en los casos del artículo 73.

Amnistía que comprende también a la pena ya pronunciada.

(1) La teoría de las acciones penales, su naturaleza y su extinción se trata en esta obra extensamente en el comentario al Código de Procedimientos para lo criminal.



Prescripción que corre durante el juicio y en tanto no haya éste terminado por sentencia firme; jurisprudencia de la C. C. C. y que después de ciertas disensiones ha sentado la Corte Suprema. La prescripción se interrumpe por la comisión de un nuevo delito. Art. 67.

Para la multa, como ya se ha dicho, rige el artículo 64.

Extinción de las penas:

Cumplimiento de las mismas.

Prescripción dentro de los plazos del artículo 65.

Indulto que deja subsistentes las responsabilidades civiles.

Perdón del ofendido en los casos de instancia privada.

La muerte del imputado como la del penado dejan subsistente el derecho a indemnización contra los bienes que deja.

TITULO XI

DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES

Art. 71. Deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las siguientes:

1º Las que dependieren de instancia privada. 2º Las acciones privadas.

Art. 72. Son acciones dependientes de instancia privada, las que nacieren de los delitos de violación, estupro, raptó y ultrajes al pudor, cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91. En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado o de su tutor, guardador o representantes legales. Sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador.

Art. 73. Son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos:

1º Adulterio. 2º Calumnias e injurias. 3º Violación de secretos, salvo en los casos del artículo 154. 4º Concurrencia descal, prevista en el artículo 159.

Art. 74. La acción por delito de adulterio corresponde únicamente al cónyuge ofendido, quien deberá acusar a ambos culpables, pero no podrá intentar la acción penal mientras no se declare el divorcio por causa de adulterio. La sentencia en el juicio de divorcio, no producirá efecto alguno en el juicio criminal. El cónyuge que ha consentido el adulterio o lo ha perdonado no tiene derecho de iniciar la acción. La muerte del cónyuge ofendido extingue la acción penal y hace cesar la ejecución de la pena.



Art. 75. La acción por calumnia o injuria, podrá ser ejercitada sólo por el ofendido y después de su muerte por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes.

Art. 76. En los demás casos del artículo 73, se procederá únicamente por querrela o denuncia del agraviado o de sus guardadores o representantes legales.

El principio general es que no necesitan querrela más que las acciones privadas (del art. 72) y las dependientes de instancia privada (del art. 73), pero si en éstas no entra el fiscal más que para cuidar del procedimiento, en las primeras el fiscal toma parte de inmediato y aunque desista el acusador privado, él sostiene la acción pública.

En cuanto a las acciones privadas distingue la ley:

Adulterio: La acción necesita previa sentencia civil que lo declare causal del divorcio.

Calumnia o injuria: Se ejerce la acción sin sumario.

Violación de secretos que siendo por empleado de correos o telégrafos ya es de acción pública.

Concurrencia desleal.

En los cuatro casos puede el querellante desistir de la acción antes de la sentencia firme en que muere la acción y empieza la pena. V. además en Parte Tercera la ley de Marcas.

TITULO XII

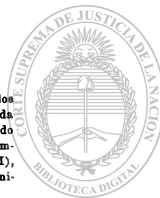
SIGNIFICACION DE CONCEPTOS EMPLEADOS EN EL CODIGO

Art. 77. Para la inteligencia del texto de este código, se tendrá presente las siguientes reglas:

Los plazos señalados en este código se contarán con arreglo a las disposiciones del código civil. La expresión «reglamentos» u «ordenanzas» comprende todas las disposiciones de carácter general dictadas por la autoridad competente en la materia de que traten. Por los términos «funcionario público» y «empleado público», usados en este código, se designa a todo el que participa accidental o permanente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente. Con la palabra «mercadería», se designa toda clase de efectos susceptibles de expendio. El término «capitán», comprende a todo comandante de embarcación o al que le sustituye. El término «tripulación», comprende a todos los que se hallan a bordo como oficiales o marineros.

Art. 78. Queda comprendido en el concepto de «violencia», el uso de medios hipnóticos o narcóticos.

LIBRO SEGUNDO
DE LOS DELITOS



Este libro segundo contiene dos partes: en los seis primeros títulos el sujeto pasivo de cada infracción es la persona humana considerada en su integridad física (I), su honor (II), honestidad (III), su estado civil (IV), su libertad (V), su propiedad (VI). Los delitos que contemplan los demás títulos son de carácter social: seguridad pública (VII), orden público (VIII), contra la Nación (IX), el Estado (X), la Administración (XI) y la fe pública (XII).

TITULO I
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS

CAPITULO I
Delitos contra la vida

Art. 79. Se aplicará reclusión o prisión de ocho a veinticinco años, al que matare a otro, siempre que en este código no se estableciere otra pena.

Art. 80. Se aplicará reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52:

1º Al que matare a su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son. 2º Al que matare a otro con alevosía o ensañamiento, por precio, promesa remuneratoria, sevicias graves, impulso de perversidad brutal o por veneno, incendio, inundación, descarrilamiento, explosión o cualquier otro medio capaz de causar grandes estragos. 3º Al que matare a otro para preparar, facilitar, consumir u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o la impunidad para sí o para sus cooperadores o por no haber obtenido el resultado que se propuso al intentar el otro hecho punible.

Art. 81. 1º Se impondrá reclusión de tres a seis años, o prisión de uno a tres años:

a) Al que matare a otro, encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusable. b) Al que, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte. 2º Se impondrá reclusión hasta tres años o prisión de seis meses a dos años a la madre que, para ocultar su deshonra, matare a su hijo durante el nacimiento o mientras se encontrara bajo la influencia del estado puerperal y a los padres, hermanos, marido e hijos que, para ocultar la deshonra de su hija,



hermana, esposa o madre, cometiesen el mismo delito en las circunstancias indicadas en la letra a del inciso 1º de este artículo.

Art. 82. Cuando en el caso del inciso 1º del artículo 80 concurriese alguna de las circunstancias del inciso 1º del artículo anterior, la pena será de reclusión o prisión de diez a veinticinco años.

Art. 83. Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado.

Art. 84. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes de su cargo, causare a otro la muerte.

Art. 85. El que causare un aborto será reprimido:

1º Con reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer. 2º Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer. El máximo de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.

Art. 86. Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. El aborto practicado por un médico diplomado, con el consentimiento de la mujer en cinta, no es punible:

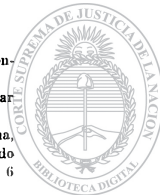
1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

Art. 87. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la paciente fuere notorio o le constare.

Art. 88. Será reprimida con prisión de uno a cuatro años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible.

1º *Homicidio simple*: 8 a 25 años de prisión o reclusión: penas que se llaman paralelas para que el juez imponga la que crea responder a las normas del artículo 40 y el 41.

2º *Parricidio*: contra ascendiente, descendiente o cónyuge (uxoricidio).



3°. *Asesinato*: alevosía o ensañamiento: precio, crueldad continuada, veneno.

4°. «*Criminis causa*»: para preparar, consumir o facilitar otro delito; aunque éste no se realice.

En estos tres casos, 2°, 3° y 4°, la pena es reclusión perpetua, pero se rebaja a reclusión o prisión de 8 a 25 años, cuando ocurra alguna de las circunstancias que en los números 5 y 6 que siguen, se consideran atenuantes.

5°. *Con emoción violenta*: (repentina y excusable) reclusión de tres a seis años, o prisión de uno a tres.

6°. *Preterintencional*: en que la muerte no entraba en la intención del reo: la pena del anterior.

7°. *Infanticidio*: para ocultar la deshonra de la madre; para ésta reclusión hasta tres años o prisión de medio a dos. Para los familiares, si hay emoción violenta y excusable, igual pena.

8°. *Suicidio*: se pena al instigador o cooperador; uno a cuatro años de prisión.

9°. *Culposo*: imprudencia, impericia, etc., seis meses a dos años de prisión e inhabilitación especial de 5 años a 10.

10°. *Aborto*: Sin consentimiento de la mujer, tres a diez años de reclusión o prisión hasta quince si aquélla muere. Con consentimiento, uno a cuatro años de reclusión o prisión y hasta seis si la mujer muere. Las mismas penas a los médicos, parteras, etc., que intervengan. Pero no es punible el practicado por un médico en las circunstancias del artículo 86. El aborto preterintencional tiene prisión de 1/2 a 2 años. La mujer que causa o consiente su aborto, prisión de uno a cuatro años.

CAPÍTULO II

Lesiones

Art. 89. Se impondrá prisión de un mes a un año, al que causare a otro, en el cuerpo o en la salud, un daño que no esté previsto en otra disposición de este código.

Art. 90. Se impondrá reclusión o prisión de uno a seis años, si la lesión produjere una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra o su hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiere inutilizado para el trabajo por más de un mes o le hubiere causado una deformación permanente del rostro.



Art. 91. Se impondrá reclusión o prisión de tres a diez años, si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir.

Art. 92. Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80, la pena será: en el caso del artículo 89, de seis meses a dos años; en el caso del artículo 90, de tres a diez años; y en el caso del artículo 91, de tres a quince años.

Art. 93. Si concurriere la circunstancia enunciada en el inciso 1º letra a) del artículo 81, la pena será: en el caso del artículo 89, de quince días a seis meses; en el caso del artículo 90, de seis meses a tres años; y en el caso del artículo 91, de uno a cuatro años.

Art. 94. Sufrirá la pena de doscientos a mil pesos de multa e inhabilitación especial por uno a cuatro años, el que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud.

1º. *Lesiones leves* (art. 89): Prisión de un mes a un año. Se entiende por lesión todo daño en la salud o en el cuerpo.

2º. *Lesiones graves* (art. 90): Debilitación permanente de la salud, de un órgano, de un miembro. Inutilización para el trabajo en general, comprobada pericialmente con indicación del tiempo. Deformación del rostro a estimar según la edad, el sexo, posición social, etc. Dificultad permanente de la palabra. Peligro de la vida según los peritos. Reclusión o prisión de uno a seis años.

3º. *Lesiones gravísimas* (art. 91): Enfermedad incurable cierta o probablemente según pericia médica. Pérdida de un sentido, un órgano o su uso, de un miembro o su uso, de la palabra y de la capacidad de engendrar (castración) o concebir.

Todas estas penalidades tienen el aumento o la disminución que establecen los artículos 92 y 93, relacionándolas con las de los artículos que cita, del anterior capítulo.

4º. *Lesiones culposas* (art. 94): Por imprudencia, impericia etc., multa e inhabilitación especial temporal.



CAPITULO III

Homicidio o lesiones en riña

Art. 95. Cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos personas, resultare muerte o lesiones de las determinadas en los artículos 90 y 91, sin que constare quiénes las causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido y se aplicará reclusión o prisión de dos a seis años en caso de muerte y de uno a cuatro en caso de lesión.

Art. 96. Si las lesiones fueren las previstas en el artículo 89, la pena aplicable será de cuatro a ciento veinte días de prisión.

La riña o agresión de varias personas puede producir la muerte o lesiones de uno o varios y no constar su autor o autores. Se consideran entonces autores a todos y se les castiga con reclusión o prisión de dos a seis años en caso de muerte, uno a cuatro en caso de lesión grave o gravísima o prisión de cuatro días a 120 en el de lesiones leves.

La pena es igual para todos, salvo en el caso del artículo 37, menores de edad.

CAPITULO IV

Duelo

Art. 97. Los que se batieren en duelo, con intervención de dos o más padrinos, mayores de edad, que elijan las armas y arreglen las demás condiciones del desafío, serán reprimidos:

1º Con prisión de uno a seis meses, al que no infiriere lesión a su adversario o sólo le causare una lesión de las determinadas en el artículo 89. 2º Con prisión de uno a cuatro años, al que causare la muerte de su adversario o le infiriere lesión de las determinadas en los artículos 90 y 91.

Art. 98. Los que se batieren, sin la intervención de padrinos, mayores de edad, que elijan las armas y arreglen las demás condiciones del desafío, serán reprimidos:

1º El que matare a su adversario, con la pena señalada para el homicida. 2º El que causare lesiones, con la pena señalada para el autor de lesiones. 3º El que no causare lesiones, con prisión de un mes a un año.

Art. 99. El que instigare a otro a provocar o a aceptar un duelo



y el que desacreditare públicamente a otro por no desafiar o por rehusar un desafío, serán reprimidos:

1º Con multa de doscientos a mil pesos, si el duelo no se realizare o si realizándose, no se produjere muerte ni lesiones o sólo lesiones de las comprendidas en el artículo 89. 2º Con prisión de uno a cuatro años, si se causare muerte o lesiones de las mencionadas en los artículos 90 y 91.

Art. 100. El que provocare o diere causa a un desafío, proponiéndose un interés pecuniario u otro objeto inmoral, será reprimido:

1º Con prisión de uno a cuatro años, si el duelo no se verificare o si efectuándose, no resultare muerte ni lesiones. 2º Con reclusión o prisión de tres a diez años, si el duelo se realizare y resultaren lesiones. 3º Con reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si se produjere la muerte.

Art. 101. El combatiente que faltare, en daño de su adversario, a las condiciones ajustadas por los padrinos, será reprimido:

1º Con reclusión o prisión de tres a diez años, si causare lesiones a su adversario. 2º Con reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si le causare la muerte.

Art. 102. Los padrinos de un duelo que usaren cualquier género de alevosía en la ejecución del mismo, serán reprimidos con las penas señaladas en el artículo anterior, según fueren las consecuencias que resultaren.

Art. 103. Cuando los padrinos concertaren un duelo a muerte o en condiciones tales que de ellas debiere resultar la muerte, serán reprimidos con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si se verificare la muerte de alguno de los combatientes. Si no se verificare la muerte de alguno de ellos, la pena será de multa de doscientos a mil pesos.

1º. *Duelo regular* con padrinos: Penas desde uno a cuatro años de prisión.

2º. *Sin padrinos*: Las del 98. Se considera tal cuando los padrinos son menores de edad.

3º. *La instigación o provocación* a duelo tiene las penas del art. 99. Pero la provocación a un funcionario público por el hecho de sus funciones se considera desacato. Art. 144, cuya pena en el caso de muerte o lesiones graves o gravísimas no se aplicará, sino la del 99-2º.

4º *Duelos calificados*:

a): el que provoca o causa un desafío con un interés inmoral o pecuniario tiene las penas del art. 100.

b): el combatiente que en el acto del duelo procediera en



contra de las condiciones ajustadas, en perjuicio de su adversario, es penado por el art. 101.

c): los padrinos que concertaren un duelo a muerte o en la ejecución del duelo procediesen con alevosía, tienen las penas de los artículos 102 y 103.

CAPÍTULO V

Abuso de armas

Art. 104. Será reprimido con uno a tres años de prisión, el que disparare un arma de fuego contra una persona sin herirla. Esta pena se aplicará aunque se causare herida a que corresponda pena menor, siempre que el hecho no importe un delito más grave. Será reprimida con prisión de quince días a seis meses, la agresión con toda arma, aunque no causare herida.

Art. 105. Si concurriera alguna de las circunstancias previstas en los artículos 80 y 81, inciso 1º letra a, la pena se aumentará o disminuirá en un tercio respectivamente.

1º: El disparo o los disparos no han producido lesión alguna: tiene un año de prisión. Si el arma falla, se considera tentativa.

2º: Se producen lesiones leves: uno a tres años.

3º: Se producen lesiones graves: la pena del art. 90, prisión o reclusión de uno a seis años.

4º: Las lesiones son gravísimas: la pena del artículo 91, reclusión o prisión de tres a diez años, según la regla del artículo 54, es decir, apreciando como agravante el delito o sea el disparo.

La simple agresión con cualquier otra arma tendrá en el caso del n° 1. de 15 días a seis meses; si hay lesiones, las de los artículos 89, 90 y 91 respectivamente.

En cualquier caso, las circunstancias que en el homicidio lo califican art. 80, o lo atenúan art. 81, aumentarán la pena como dice el art. 105.

CAPÍTULO VI

Abandono de personas

Art. 106. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que abandonare a un menor de diez años u otra persona incapaz por causa de enfermedad, a quien deba mantener o cuidar. La pena será



de reclusión o prisión de dos a seis años, si a consecuencia del abandono resultare un grave daño en el cuerpo o en la salud del menor o incapaz. La reclusión o prisión será de tres a diez años, si ocurriere la muerte.

Art. 107. El máximo y el mínimo de las penas establecidas en el artículo precedente, serán aumentados en un tercio cuando el delito fuere cometido por los padres contra sus hijos y por éstos contra aquéllos o por el cónyuge. Serán disminuidos a la mitad, cuando el abandono fuere de un menor de tres días aún no inscripto en el Registro Civil, para salvar el honor propio o de la esposa, madre, hija o hermana.

Art. 108. Será reprimido con multa de cien a quinientos pesos, el que encontrando perdido o desamparado a un menor de diez años o a una persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio necesario, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la autoridad.

1º: *Abandono:*

Se castiga el abandono de los niños que reúne las siguientes condiciones:

a): por parte del abandonado, que sea menor de diez años o enfermo incapaz.

b): por parte del que abandona, un acto expreso con la intención de desprenderse de las obligaciones que la ley le impone o que ha aceptado libremente.

Si el abandono es delito-medio de otro delito-fin, habrá concurso de delitos: véase un caso de concurso legal en el art. 139, 2º.

Se califica el delito por la agravante o la atenuante del artículo 107.

2º: *Desamparo:*

Delito por omisión de auxilio o de aviso a la autoridad. El desamparado aquí es menor de diez años, o persona herida, inválida o en peligro.

TÍTULO II

DELITOS CONTRA EL HONOR

Art. 109. La calumnia o falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción pública, será reprimida con prisión de uno a tres años.



Art. 110. El que deshonrare o desacreditare a otro, será reprimido con multa de cien a mil pesos o prisión de un mes a un año.

Art. 111. El acusado de injuria sólo podrá probar la verdad de la imputación en los casos siguientes:

1º Si la imputación hubiere tenido por objeto defender o garantizar un interés público actual. 2º Si el hecho atribuido a la persona ofendida, hubiere dado lugar a un proceso penal. 3º Si el querellante pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él. En estos casos, si se probare la verdad de la imputación, el acusado quedará exento de pena.

Art. 112. El acto de calumnia o injuria equívoca o encubierta que rehusare dar en juicio explicaciones satisfactorias sobre ella, sufrirá de minimum a la mitad de la pena correspondiente a la calumnia o injuria manifiesta.

Art. 113. El que publicare o produjere, por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate.

Art. 114. Cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa, en la capital y territorios nacionales, sus autores quedarán sometidos a las sanciones del presente código y el juez o tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los editores inserten en los respectivos periódicos, a costa del culpable, la sentencia o satisfacción.

Art. 115. Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores, en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales y no dados a publicidad, quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes.

Art. 116. Cuando las injurias fueren recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, declarar exentas de pena a las dos partes o a alguna de ellas.

Art. 117. El culpable de injuria o calumnia contra un particular o asociación, quedará exento de pena, si se retractare públicamente antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo.

A) Disposiciones comunes a injuria y calumnia:

Art. 112: Injuria o calumnia equívocas (que pueden considerarse dirigidas a otro) o encubiertas (por medio de expresiones vagas, interrogaciones, dudas, etc.). No explicadas satisfactoriamente en el comparendo de conciliación o en el traslado de la querella.

Art. 113: Es tan autor el que profirió la calumnia o la injuria como el que las reproduce o publica.

Art. 114: Propagación por la prensa. Este artículo sólo rige en la jurisdicción ordinaria de la capital y ante los jueces



de territorios en cuanto la tienen también. Al dictarla, el Congreso no ha hecho uso del art. 67-11° de la Constitución Nacional, sino del 67-14°, y éste por la razón de su artículo 32.

Art. 117: Retracción que surte efecto hecha en el comparendo o antes de evacuar el traslado de la querrela o al evacuarlo; después es inútil.

B) Disposiciones referentes a injuria:

Art. 110: Definición.

Art. 111: Exención de pena al acusado que puede probar la verdad de la imputación en los tres casos que se fijan.

Art. 115: Inmuniza las injurias forenses pero si se dan a la publicidad caen bajo el imperio del art. 114.

Art. 116: Para todas las injurias además de las forenses.

C) Calumnia:

No tiene más que un artículo especial, el 109 en que se define; la falsedad debe ser objetiva (no he cometido tal delito) y subjetiva (el que me lo imputa sabe que yo no lo he cometido).

TITULO III

DELITOS CONTRA LA HONESTIDAD

CAPITULO I

Adulterio

Art. 118. Serán reprimidos con prisión de un mes a un año:

1° La mujer que cometiere adulterio. 2° El codeincente de la mujer. 3° El marido, cuando tuviere manceba dentro o fuera de la casa conyugal. 4° La manceba del marido.

El marido es adúltero cuando tiene manceba, delito continuado porque hay unidad de propósito y es una misma la persona perjudicada.

El adulterio de la mujer no necesita ser continuado para que sea penado. Su codeincente sólo es punible si le consta que la mujer es casada.

Hay principio de jurisprudencia que no admite como delito el adulterio del divorciado.



También la hay cuando se alega la nulidad del matrimonio en un caso la C. C. C. anuló la sentencia que declaraba ésta y absolvía; el juez no pudo fundar su fallo en una nulidad que no había sido declarada por el juez civil, único competente. En otro proceso, el querellado probó haber iniciado demanda por nulidad de matrimonio, el juez ordenó la suspensión del proceso y la Cámara la confirmó cancelando además la fianza de la excarcelación.

CAPÍTULO II

Violación y estupro

Art. 119. Será reprimido con reclusión o prisión de seis a quince años, el que tuviere acceso carnal con persona de uno u otro sexo en los casos siguientes:

1º Cuando la víctima fuere menor de doce años. 2º Cuando la persona ofendida se hallare privada de razón o de sentido, o cuando por enfermedad o cualquier otra causa, no pudiese resistir. 3º Cuando se usare de fuerza o intimidación.

Art. 120. Se impondrá reclusión o prisión de tres a seis años, cuando la víctima fuere mujer honesta mayor de doce años y menor de quince y no se encontrare en las circunstancias de los números 2 y 3 del artículo anterior.

Art. 121. Se impondrá reclusión o prisión de tres a seis años, al que abusare del error de una mujer fingiéndose su marido y tuviere con ella acceso carnal.

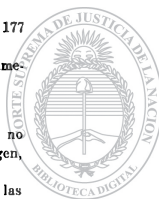
Art. 122. La reclusión o prisión será de ocho a veinte años, cuando en los casos del artículo 119, resultare un grave daño en la salud de la víctima o se cometiere el hecho por un ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, sacerdote o encargado de la educación o guarda de aquélla o con el concurso de dos o más personas.

Art. 123. Se impondrá reclusión o prisión de seis a diez años, cuando, en el caso del artículo 120, mediare alguna de las circunstancias expresadas en el anterior.

Art. 124. Se impondrá reclusión o prisión de quince a veinticinco años, cuando, en los casos de los artículos 119 y 120 resultare la muerte de la persona ofendida.

1º. Violación: Art. 119.

La violencia física y moral se presume *juris et de jure* si la víctima es una o un menor de doce años; se presume *juris tantum* en los casos del inciso 2º, que pueden dar lugar a



prueba contraria; es manifiesta cuando hay fuerza moral (amenazas) o física.

2º. Estupro: Art. 120.

La mujer tiene más de doce años y menos de quince, y no ha habido violencia física o moral. Y aunque no sea virgen, pero sí honesta.

En uno y otro caso se agrava la pena al producirse las circunstancias o con las consecuencias que se detallan en los artículos 122, 123 y 124.

3º. Cópula fraudulenta:

En que el agente se finge marido de la mujer y yace con ella.

La acción es privada en todos estos casos, salvo las excepciones de los tres artículos antes citados.

CAPÍTULO III

Corrupción y ultrajes al pudor

Art. 125. El que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos propios o ajenos, promovere o facilitare la prostitución o corrupción de menores de edad, sin distinción de sexo, aunque mediere el consentimiento de la víctima, será castigado:

1º Con reclusión o prisión de cuatro a quince años, si la víctima fuera menor de doce años. 2º Con reclusión o prisión de cuatro a quince años, si la víctima fuera mayor de doce años y menor de diez y ocho. 3º Con prisión de dos a seis años, si la víctima fuera mayor de diez y ocho años y menor de veintidos. Cualesquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión, desde diez a quince años, cuando mediere engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, marido, hermano, tutor o persona encargada de su educación o guarda o que hiciera con ella vida marital.

Art. 126. Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez años, el que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos, promovere o facilitare la corrupción o prostitución de mayores de edad, mediando engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualesquiera otros medios de coerción.

Art. 127. Se impondrá prisión de uno a cuatro años, al que abusare deshonestamente de persona de uno u otro sexo, concurriendo alguna de las circunstancias del artículo 119, sin que haya acceso



carnal. Si el autor del hecho fuera alguna de las personas mencionadas en el artículo 122, se le aplicará de tres a diez años de reclusión o prisión.

Art. 128. Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que publicare, fabricare o reprodujere libros, escritos, imágenes u objetos obscenos y el que los expusiere, distribuyere o hiciera circular.

Art. 129. Será reprimido con multa de cincuenta a quinientos pesos, el que en sitio público ejecutare o hiciere ejecutar por otro exhibiciones obscenas. La misma pena se aplicará cuando los actos tuvieran lugar en sitio privado, pero expuesto a que sean vistos involuntariamente por terceros.

1°. Prostitución de menores: Art. 125.

Entra en el concepto de prostitución (satisfacer deseos ajenos con propósitos de lucro) el que busca la satisfacción de deseos propios, pero esto es un error de la ley, pues el caso puede ser violación, estupro o no ser delito, a no ser que se entienda que se satisfacen los deseos propios y, además, se piensa en prostituir a la mujer.

La penalidad distingue edades, pero no sexos.

Hay agravantes calificativas, pero no cabe tentativa; el delito es formal. Puede haber co-autor por instigación o mandato.

La acción penal es pública.

2°. Prostitución de mayores: Art. 126.

Mujeres mayores de 22 años, salvo mediar consentimiento de éstas.

3°. Abuso deshonesto: Art. 127.

Con violencia física o moral y la agravante que cita.

Cabe tentativa de este delito y cabe que el hecho sea tentativa de violación; la intención debe decidirlo.

4°. Libros, etc., obscenos:

El autor no es castigado si se ha hecho la publicación sin su noticia o consentimiento.

5°. Exhibiciones obscenas: Art. 129.

No basta que el acto sea impúdico; se requiere la intención obscena, o contraria al pudor.



CAPITULO IV

Rapto

Art. 130. Sufrirá prisión de uno a cuatro años, el que con miras deshonestas sustrajere o retuviere a una mujer por medio de fuerza, intimidación o fraude. La prisión será de dos a seis años, si la robada fuere una mujer casada.

Art. 131. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que cometiere rapto de una menor de quince años y mayor de doce, con su consentimiento. El culpable será reprimido con prisión de dos a seis años, si el rapto fuere de una menor de doce años, con o sin su consentimiento.

Sólo es punible el rapto cuando no ha mediado consentimiento de la raptada.

El delito se consuma con la simple subtracción aunque no le siga retención. La falta de consentimiento se presume *juris et de jure* tratándose de una menor de doce años. Si la raptada es una meretriz, el delito será privación de libertad.

El delito puede complicarse con otros: violación, estupro, etc., en cuyo caso habrá concurso (arts. 55 y 56).

CAPITULO V

Disposiciones comunes a los artículos anteriores

Art. 132. En los casos de violación, estupro, rapto o abuso deshonesto de una mujer soltera, quedará exento de pena el delincuente si se casare con la ofendida, prestando ella su consentimiento, después de restituida a casa de sus padres o a otro lugar seguro.

Art. 133. Los ascendientes, descendientes, afines en línea recta, hermanos y cualesquiera persona que, con abuso de autoridad, encargo o confianza cooperaren a la perpetración de los delitos comprendidos en este título, serán reprimidos con la pena de los autores.

1º. Exención de pena:

No la hay tratándose de una menor de doce años.

En caso de que sea mayor de doce y menor de veintidos, si el padre niega el consenso habrá que pedir autorización judicial al juez civil.



Si la víctima niega el consentimiento, podrá esto ser considerado como atenuante en la sentencia.

2º. Coautores:

El art. 133 importa una excepción del 46.

TITULO IV

DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL.

CAPITULO I

Matrimonios ilegales

Art. 134. Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años, los que contrajeran matrimonio sabiendo ambos que existe impedimento que cause su nulidad absoluta.

Art. 135. Serán reprimidos con prisión de dos a seis años:

1º El que contrajere matrimonio cuando, sabiendo que existe impedimento que cause su nulidad absoluta, ocultare esta circunstancia al otro contrayente. 2º El que engañando a una persona, simulare matrimonio con ella.

Art. 136. El oficial público que a sabiendas autorizare un matrimonio de los comprendidos en los artículos anteriores, sufrirá, en su caso, la pena que en ellos se determina. Si lo autorizare sin saberlo, cuando su ignorancia provenga de no haber llenado los requisitos que la ley prescribe para la celebración del matrimonio, la pena será de multa de cien a mil pesos o inhabilitación especial por seis meses a dos años. Sufrirá multa de cien a mil pesos el oficial público que, fuera de los demás casos de este artículo, procediere a la celebración de un matrimonio sin haber observado todas las formalidades exigidas por la ley.

Art. 137. En la misma pena incurrirá el representante legítimo de un menor impúbere que diere el consentimiento para el matrimonio del mismo.

1º. *Los impedimentos según la ley civil son:*

1º: Consanguinidad entre ascendientes y descendientes.

2º: Idem entre hermanos.

3º: Afinidad en la línea recta.

4º: No tener la mujer 12 años y el varón 14.

5º: Matrimonio anterior subsistente.

6º: Autor o cómplice de homicidio de cónyuge.

7º: La locura.



Pero el 4° y el 7° no caen bajo la ley penal, que se refiere a nulidad absoluta; en cambio, estos matrimonios, serán anulables. El 6° no comprende al homicida culposo.

2° *Bigamia:*

Es el 5° impedimento. Es delito instantáneo, no continuo: empieza la prescripción de la acción penal el día en que se contrae el segundo matrimonio. Es cuestión prejudicial la planteada ante la jurisdicción civil sobre nulidad de uno de los matrimonios, pero no basta anunciar al juez del proceso que se va a deducir la acción civil o realmente presentarla sin la seriedad que puede darle un principio de prueba, por ejemplo.

No hay bigamia cuando el primer matrimonio ha sido disuelto por sentencia extranjera; pero si éste fué celebrado en la República Argentina, la tal sentencia no rompe el vínculo, ya que para los matrimonios aquí celebrados no hay divorcio absoluto: es decir, que el casado aquí, divorciado en Montevideo y que aquí vuelve a casarse, comete el delito de bigamia.

3° *La pena* en general para los cónyuges sabiendo ambos el impedimento, es prisión de uno a cuatro años, pero si uno lo ignora, la pena del otro es prisión de dos a seis años.

4° *El matrimonio simulado:* en realidad, el falso, tiene también su pena, art. 135-2°: pero si el engaño es delito-medio de un delito-fin que puede ser estupro, estafa, etc., habrá concurso de delitos.

5° *Funcionarios cómplices:* Tienen su pena. V. en la Parte Tercera la ley de Registro Civil.

6° *Padre o representante de un impúber:*

El que da su consentimiento para el matrimonio del o de la menor declarando la edad cierta tiene multa de 100 a 1000 pesos, y el oficial público que, a pesar de ésto legaliza el matrimonio, tiene de dos a seis años de prisión. Pero si aquél da una edad falsa y así engaña al oficial, éste no tiene pena, y aquél infringe el art. 137 y el 293 (falsedad) lo cual determina el concurso-ideal de ambos delitos.



CAPITULO II

Supresión y suposición del estado civil

Art. 138. Se aplicará prisión de seis meses a dos años al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterar o suprimiere el estado civil de otro, con el propósito de causar perjuicio.

Art. 139. Se impondrá prisión de uno a cuatro años:

1º A la mujer que fingiere preñez o parto para dar a su supuesto hijo derechos que no le correspondan y al médico o partera que coope- rare a la ejecución del delito. 2º Al que por medio de exposición, de ocultación o de otro acto cualquiera, hiciere incierto, alterar o supri- miere el estado civil de un menor de diez años.

Alteración del estado civil:

Por ejemplo, inscribir en el Registro como hijo a un niño que no lo es; fingirse padre de una menor para dar el consenti- miento al matrimonio de ésta; inscribir como legítimos hijos naturales o viceversa; tomar en algún acto el nombre de otra persona.

Pero se necesita ánimo de causar con ello un perjuicio.

Suposición de parto o preñez:

En el primer caso, se considera que el delito se consuma cuando se inscribe como propio el hijo ajeno; antes hay ten- tativa. En el segundo, el delito consistiría en la afirmación o propagación por la mujer de su falso estado.

Se exige también intención criminal.

Estado civil de un menor de diez años:

Se lo daría por ejemplo, entregándolo a la casa de Expósi- tos o a un Hospicio cualquiera, ocultando su nombre.



TITULO V

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

CAPITULO I

Delitos contra la libertad individual

Art. 140. Serán reprimidos con reclusión o prisión de tres a quince años, el que redujere a una persona a servidumbre o a otra condición análoga y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella.

Art. 141. Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que ilegalmente privare a otro de su libertad personal.

Art. 142. Se aplicará prisión de uno a cuatro años, al que privare a otro de su libertad personal, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1º Si el hecho se cometiere con violencias o amenazas o con propósitos de lucro o con fines religiosos o de venganza. 2º Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o de otro individuo a quien se deba respeto particular. 3º Si resultare grave daño a la persona, a la salud o a los negocios del ofendido, siempre que el hecho no importare otro delito por el cual la ley le imponga pena mayor. 4º Si el hecho se cometiere simulando autoridad pública u orden de autoridad pública. 5º Si la privación de la libertad durare más de un mes.

Art. 143. Será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo:

1º El funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley, privare a alguno de su libertad personal. 2º El funcionario que retuviere a un detenido o preso, cuya soltura haya debido decretar o ejecutar. 3º El funcionario que prolongare indebidamente la detención de una persona, sin ponerla a disposición del juez competente. 4º El funcionario que incomunicare indebidamente a un detenido. 5º El funcionario que impusiere a los presos que guarda, severidades, vejaciones o apremios ilegales, o los colocare en lugares del establecimiento que no sean los señalados para el efecto. 6º El jefe de prisión u otro establecimiento penal o el que lo reemplace, que recibiere algún reo sin testimonio de la sentencia firme en que se le hubiere impuesto la pena. 7º El alcaide o empleado de las cárceles de detenidos y seguridad que recibiere un preso sin orden de autoridad competente, salvo el caso de flagrante delito. 8º El funcionario que desempeñando un acto del servicio, cometiere cualquiera vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales. 9º El funcionario competente que teniendo noticia de una detención ilegal,



omitiera, retardare o rehusare hacerla cesar o dar cuenta a la autoridad que deba resolver.

Art. 144. Cuando en los casos del artículo anterior, concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 142, se aplicará la pena establecida en este último.

Art. 145. Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que condujere a una persona fuera de las fronteras de la república, con el propósito de someterla ilegalmente al poder de otro o de alistarla en un ejército extranjero.

Art. 146. Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que sustrajere a un menor de diez años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare.

Art. 147. En la misma pena incurrirá el que, hallándose encargado de la persona de un menor de diez años, no lo presentara a los padres o guardadores que lo solicitaren o no diere razón satisfactoria de su desaparición.

Art. 148. Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que indujere a un mayor de diez años y menor de quince, a fugar de casa de sus padres, guardadores o encargados de su persona.

Art. 149. Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que ocultare a las investigaciones de la justicia o de la policía, a un menor de quince años que se hubiere substraído a la potestad o guarda a que estaba legalmente sometido. La pena será de seis meses a dos años, si el menor no tuviera diez años.

1°. Esclavitud:

Es delito reducir a una persona a servidumbre (de siervo, no de servicio) o estado análogo, aunque lo consienta, y cualquiera que sea el propósito del autor.

2°. Privación de libertad personal:

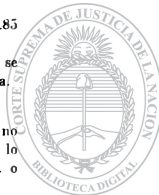
a) Delito simple:

Detención privada por parte de todo el que no sea funcionario público. Se pena, aunque aquella sea por breve tiempo. En el Cód. de Proced. hay excepciones como las de los artículos 3, 5 y 368.

b) Delito calificado:

Violencias, propósitos de herir, religiosos, etc. Del cónyuge, ascendiente, hermano. Causando daño que no importe delito mayor. Simulación de autoridad pública, o de orden de ésta. Que dure más de un mes.

El consentimiento del sujeto pasivo (votos monacales por



ej.), hace inexistente el delito, pero éste nacerá cuando se manifieste su voluntad de recobrar su libertad y se le impida:

c) Delito cometido por funcionario público:

El art. 43, enumera los casos ⁽¹⁾ en que el funcionario no se limita a retener el sujeto en detención privada, sino que lo manda a la cárcel, disfrazada con el nombre de Alcaidía o Depósito.

La pena de este delito cometido por funcionario se agrava, art. 144, cuando comete el delito *b* o calificado.

En todo esto hay que tener presente el art. 248 y siguientes: «Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos».

3°. Conducción fuera de fronteras: art. 145.

Con uno de los propósitos que éste indica.

4°. Contra menores:

a: secuestro de niños: art. 146, siendo autor el que los substrahe como el que luego los retiene.

b: secuestro implícito o presunto, siempre que reclame al niño su padre, tutor o guardador, art. 147.

c: inducción a la fuga. Art. 148, que en un menor de diez años equivale a secuestro de menor.

d: ocultación de todo menor de quince años substraído (por sí o por otro) a la potestad de su padre, tutor, etc. Artículo 149.

CAPÍTULO II

Violación de domicilio

Art. 150. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, si no resultare otro delito más severamente penado, el que entrare en morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo.

Art. 151. Se impondrá la misma pena e inhabilitación especial de seis meses a dos años, al funcionario público o agente de la autoridad

(1) En la obra antes citada se estudia detenidamente el punto, Tomo II, págs. 269-275, V. más adelante, en Código de Procedimientos en lo criminal, varios comentarios *passim*.



que allanare un domicilio sin las formalidades prescriptas por la ley o fuera de los casos que ella determina.

Art. 152. Las disposiciones de los artículos anteriores no se aplicarán al que entrare en los sitios expresados, para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o a un tercero, ni al que lo hiciere para cumplir un deber de humanidad o prestar auxilio a la justicia.

Definición del delito:

Entrada o permanencia en domicilio ajeno contra la voluntad de quien tiene derecho de oponerse a ella, voluntad expresa o presunta. Domicilio es la morada de una persona o familia, cualquier recinto habitado por una o más personas. Una casa de negocio (esta última se entiende que en su parte abierta a todos no rige la voluntad presunta de que no penetre alguien: hace falta la expresa): un escritorio u oficina, un hotel o casa de pensión se consideran de libre acceso, salvo voluntad del dueño expresa, pero cada pieza habitada o escritorio, etc., se considera domicilio.

Violación por un particular:

Tiene la pena del art. 150. Además, el agente se expone a veces a lo que establece el art. 34-6°.

Violación por un funcionario:

Es decir, invocando éste carácter de tal o sin orden de autoridad competente e yendo más allá de ella.

Excepciones:

Además de las del art. 152, ténganse presente las otras dos que establece el art. 189, Cód. Proced. Crim.

CAPÍTULO III

Violación de secretos

Art. 153. Será reprimido con prisión de quince a seis meses, el que abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado o un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una carta, de un pliego, o de un des-



pacho o de otro papel privado, aunque no esté cerrado; o suprimiere o desviare de su destino una correspondencia que no le esté dirigida. Se le aplicará prisión de un mes a un año, si el culpable comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, escrito o despacho.

Art. 154. Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el empleado de correos o telégrafos que, abusando de su empleo, se apoderare de una carta, de un pliego, de un telegrama o de otra pieza de correspondencia, se impusiere de su contenido, la entregare o comunicare a otro que no sea el destinatario, la suprimiere, la ocultare o cambiare su texto.

Art. 155. El que, hallándose en posesión de una correspondencia no destinada a la publicidad, la hiciere publicar indebidamente, aunque haya sido dirigida a él, será reprimido con multa de doscientos a mil pesos, si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros.

Art. 156. Será reprimido con multa de doscientos a mil pesos e inhabilitación especial, en su caso, por seis meses a tres años, el que teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa.

Art. 157. En la misma pena incurrirá el que divulgare actuaciones o procedimientos, que por la ley deban quedar secretos.

Violación de correspondencia: Art. 153.

Por abrir esta otra persona que el destinatario. Habiendo ya sido abierta o estando cerrada el agente se apodera de la pieza. Supresión de la entrega a aquél.

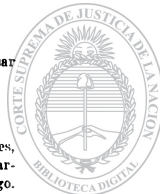
Es un delito dependiente de instancia privada, pero ni en sumario ni en plenario interviene el fiscal.

Empleado delincuente: Art. 154.

De correos y telégrafos, éstos nacionales, provinciales o particulares. Es el único delito del título que se persigue por acción pública del fiscal.

Publicidad: Art. 155.

Para que haya delito se requiere: 1° Que la correspondencia postal o telegráfica no estuviere destinada a la publicidad; 2° Que sea indebida, pues es permitida si se quiere evitar un daño, revelar un complot, proteger el propio honor y casos análogos; la publicidad puede ser por imprenta, manuscrita



o de cualquier medio mecánico; 3º Que el hecho pueda causar perjuicios, aunque no los cause de inmediato.

Secreto profesional: Art. 156.

Sacerdotes (secreto de confesión), abogados, procuradores, médicos, jueces, secretarios, peritos, etc. Coincide con el artículo 275, Cód. Proc. Crim., V. Art. 243 del presente Código.

Divulgación de actuaciones o procedimientos: art. 157.

Judiciales generalmente.

CAPITULO IV

Delitos contra la libertad de trabajo y asociación

Art. 158. Será reprimido con prisión de un mes a un año, el obreiro que ejerciere violencia sobre otro para compelerlo a tomar parte en una huelga o boycott. La misma pena sufrirá el patrón, empresario o empleado que, por sí o por cuenta de alguien, ejerciere coacción para obligar a otro a tomar parte en un lock-out y a abandonar o ingresar a una sociedad obrera o patronal determinada.

Art. 159. Será reprimido con multa de mil a cuatro mil pesos, el que, por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, tratara de desviar, en su provecho, la clientela de un establecimiento comercial o industrial.

Huelga:

Derecho del trabajador, que comprende la propaganda; limitado:

- a) Por la intimidación o violencia moral. V. Arts. 211 y 212;
- b) La violencia física que puede determinar un concurso de delitos si se dañan las cosas o se lesionan personas.

El boycott entra en el derecho de huelga y también la de brazos caídos, a no ser que por sabotage produzca daños. Artículos 183 y 184.

Lockout:

Derecho del patrón o empleado (un empleado de éste puede ser autor o cómplice). Este derecho está limitado por:



a) La coacción en otros empleadores para que entren en el lockout, o ingresen en una sociedad patronal.

b) La coacción en los obreros para que dejen de pertenecer a determinada sociedad o para que ingresen a otra.

Propaganda desleal:

Delito cuya acción es dependiente de instancia privada.

Los medios pueden ser: avisos periodísticos, circulares, artículos parecidos manifiestamente inferiores, etc.

CAPITULO V

Delitos contra la libertad de reunión

Art. 160. Será reprimido con prisión de quince días a tres meses, el que impidiere materialmente o turbare una reunión lícita, con insultos o amenazas al orador o a la institución organizadora del acto.

Es reunión lícita, la que no es armada, ni se atribuye los derechos del pueblo. (Const. Nacional arts. 22 y 229 del Código).

La policía considera ilícita toda reunión que no se ha autorizado previamente.

La palabra «materialmente» según la comisión redactora, ha sido acompañada de «con insultos o amenazas», con el fin de que no se considere como delito el acto de pedir la palabra u otro por el estilo (†).

CAPITULO VI

Delitos contra la libertad de la prensa

Art. 161. Sufrirá prisión de uno a seis meses, el que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico.

La ley no admite el concepto de «delitos de prensa», artículo 114, pero sí que ésta puede ser el medio o vehículo de cualquier delito.

En libros o periódicos, entran diarios, semanarios y revistas, pero no las hojas sueltas, los carteles que se fijan en las paredes, los números únicos y, en general, todo impreso o gra-



bado en que desaparezca o se haga difícil de hallar la responsabilidad de los autores.

El delito de este título se agrava cuando lo comete un empleado de correos, art. 154, o de policía, art. 248.

TÍTULO VI

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

CAPÍTULO I

Hurto

Art. 162. Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena.

Art. 163. Se aplicará prisión de uno a seis años en los casos siguientes:

1° Cuando el hurto fuese de ganado mayor o menor o de productos separados del suelo o máquinas o instrumentos de trabajo, dejados en el campo; o de alambres u otros elementos de los cercos, causando su destrucción total o parcial. 2° Cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, amonada o motín o aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre o conmoción pública o de un infortunio particular del damnificado. 3° Cuando se hiciera uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante, para penetrar al lugar donde se halla la cosa objeto de la sustracción o de la llave verdadera que hubiere sido sustraída o hallada. 4° Cuando se perpetrare con escalamiento.

Hurto simple: Art. 162.

Apoderamiento ilegítimo, es decir, sin o contra el consentimiento de sus dueños (se excluyen, por tanto, las cosas abandonadas o sin dueño) de un objeto mueble, sólido o gaseoso (el fluido eléctrico generalmente se considera defraudación); también el de la cosa perdida art. 175-1°.

Hurto calificado: Art. 163.

1°: Abigeato, hurto de un conjunto mayor o menor de vacunos, yeguarizos, ovejunos, porcinos, etc. De cosecha aga-



villada. De máquinas y útiles dejados en el campo. De alambrados y piques derechos de los cercos.

2º: Cometido en ocasiones de alarma, calamidad, etc., aumentando peligrosidad en el agente.

3º: Usando ganzúa u otro medio que importa una casi violencia en las cosas. Por esto tiene igual pena que el robo.

4º: Con escalamiento, es decir, entrar el delincuente o salir de un edificio, local o recinto aun el no habitado, para hurtar o depositar la cosa hurtada.

CAPÍTULO II

Robo

Art. 164. Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que se apoderara ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitararlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad.

Art. 165. Se impondrá reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio.

Art. 166. Se aplicará reclusión o prisión de cinco a quince años:
1º Si por las violencias ejercidas para realizar el robo, se causare alguna de las lesiones previstas en los artículos 90 y 91. 2º Si el robo se cometiere en despoblado y en banda.

Art. 167. Se aplicará reclusión o prisión de tres a diez años:
1º Si se cometiere el robo en despoblado y con armas. 2º Si se cometiere en lugares poblados y en banda. 3º Si se perpetrare el robo con perforación o fractura de pared, cerco, techo o piso, puerta o ventana de un lugar habitado o sus dependencias inmediatas. 4º Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 163.

Robo simple: Art. 164.

Apoderamiento como el del hurto pero:

a) Con fuerza en las cosas, con alteración (romper, arrancar, etc.), en la cosa que se roba o en los muebles que la rodean o el inmueble.

b) O violencia física en las personas; si hay lesión grave, habrá concurso de delitos, si grave o gravísima, véanse los dos artículos siguientes. Pero tiene que ser para facilitar el delito, al cometerlo o después para escapar.



Con homicidio: Art. 165.

No es el homicidio planeado antes (art. 80, 3º), sino el cometido con motivo u ocasión del robo, es decir, cometido a la par de él, de un modo imprevisto o accidental.

Con lesiones: Art. 166, 1º.

Si leves, se formará el concurso del art. 56.

Si graves o gravísimas, el presente artículo forma ya un concurso ideal legal. En caso de conflicto con el art. 92 regirá el presente, porque lo especial prima sobre lo general.

En despoblado y banda: Art. 166, 2º.

Despoblado es a una distancia de poblado, desde el cual se pudieran oír las voces de auxilio. Banda es asociación para cometer todo delito « que se presente ».

En despoblado y con armas: Art. 167, 1º.

Haciendo uso o aunque sea mera ostentación de « cualquier objeto con que se pueda lesionar o matar ».

En poblado y banda: Art. 167, 2º.

Aunque sea sin armas.

Con perforación: Art. 167, 3º.

Perforación o fractura de las seguridades externas que dice el texto.

Se excluyen los alambrados: debe tratarse de un lugar habitado o dependencias en comunicación con él. Tampoco va incluida la fractura para salir.

Agravación: Art. 167, 4º.

Se refiere a las circunstancias que hacen calificado el hurto.



CAPITULO III

Extorsión

Art. 168. Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. Incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia, obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito.

Art. 169. Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años, el que, por amenaza de imputaciones contra el honor o de violación de secretos, cometiere alguno de los hechos expresados en el artículo precedente.

Art. 170. Sufrirá prisión de tres a diez años, el que detuviere en rehenes a una persona para sacar rescate.

Art. 171. Sufrirá prisión de dos a seis años, el que substraiera un cadáver para hacerse pagar su devolución.

Extorsión:

Es robo con violencia moral.

La exigencia debe ser ilegítima, porque el que usa de su derecho, aún con amenazas, no es punible.

Lo esencial es el fin económico de la acción.

Chantage:

Aquí la intimidación no es general, sino que se hace la amenaza concreta de revelaciones difamatorias. Una de sus formas es la periodística.

Rescate:

En el art. 142, 2º: se pena la detención privada con fines de lucro; (por ejemplo, reclusión en un manicomio para despojar); aquí el lucro se busca ofreciendo la cesación de la detención privada.

Substracción de cadáver:

No es robo propiamente, sino ocultación del cadáver para obtener un rescate de parte de una persona interesada. Si no llega el agente a conseguirlo, será tentativa.



CAPITULO IV

Estafas y otras defraudaciones

Art. 172. Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño.

Art. 173. Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece:

1° El que defraudare a otro en la substancia, calidad o cantidad de las cosas que le entregue en virtud de contrato o de un título obligatorio. 2° El que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver. 3° El que defraudare, haciendo subscribir con engaño algún documento. 4° El que cometiere alguna defraudación abusando de firma en blanco, extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo que la dió o de tercero. 5° El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de tercero. 6° El que otorgare en perjuicio de otro, un contrato simulado o falsos recibos. 7° El comisionista, capitán de buque o cualquier otro mandatario que cometiere defraudación, alterando en sus cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo gastos o exagerando los que hubiere hecho. 8° El que cometiere defraudación, substituyendo, ocultando o mutilando algún proceso, expediente, documento u otro papel importante. 9° El que vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados; y el que vendiere, gravare o arrendare como propios, bienes ajenos. 10. El que defraudare, con pretexto de supuesta remuneración a los jueces u otros empleados públicos.

Art. 174. Sufrirá prisión de dos a seis años:

1° El que para procurarse a sí mismo o procurar a otro un provecho ilegal en perjuicio de un asegurador o de un dador de préstamo a la gruesa, incendiare o destruirere una cosa asegurada o una nave asegurada o cuya carga o flote estén asegurados o sobre la cual se haya efectuado un préstamo a la gruesa. 2° El que abusare de las necesidades, pasiones, o inexperiencia de un menor o de un incapaz, declarado o no declarado tal, para hacerle firmar un documento que importe cualquier efecto jurídico, en daño de él o de otro, aunque el acto sea civilmente nulo. 3° El que defraudare usando de pesas o medidas falsas. 4° El empresario o constructor de una obra cualquiera o el



veedor de materiales de construcción que cometiere, en la ejecución de la obra o en la entrega de los materiales, un acto fraudulento capaz de poner en peligro la seguridad de las personas, de los bienes o del Estado. 5° El que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública. En los casos de los dos números precedentes, el culpable, si fuere empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua.

Art. 175. Será reprimido con multa de quinientos a dos mil pesos:

1° El que encontrare perdida una cosa que no le pertenezca o un tesoro y se apropiare la cosa o la parte del tesoro correspondiente al propietario del suelo, sin observar las prescripciones del código civil. 2° El que se apropiare de una cosa ajena, en cuya tenencia hubiere entrado a consecuencia de un error o de un caso fortuito. 3° El que vendiere la prenda sobre que prestó dinero o se la apropiare o dispusiere de ella, sin las formalidades legales. 4° El acreedor que a sabiendas exija o acepte de su deudor, a título de documento, crédito o garantía por una obligación no vencida, un cheque o giro de fecha posterior o en blanco.

Defraudación:

Se llama hurto impropio, porque tiene todos los caracteres del hurto, menos la violación de la posesión, porque aquí, el sujeto pasivo se desprende (o antes se desprendió) voluntariamente de ésta.

Requiere lucro para el sujeto activo o un tercero, y perjuicio para el pasivo o un tercero. Se consuma el delito con un acto, en que a la par se producen el lucro y el perjuicio.

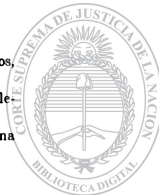
El dolo civil se diferencia del criminal en que aquél no interesa al Estado: cada uno debe vigilar sus bienes o negocios, pero si se da el caso de que uno no podía prever, o no puede resistir el ataque a ellos, se produce la intervención social en forma de proceso criminal.

Supuesto general: Art. 172.

El uso de nombre inventado o apropiado no es delito, sino en cuanto influye en la defraudación.

Calidad simulada es suponer un cargo, un grado militar o un estado civil falsos. No lo es invocar un mandato inexistente o un domicilio falso.

Título falso, académico, de nobleza, siempre que influya en la estafa; influencia mentida, cuando es cierta, no hay estafa, sino coima.



Abuso de confianza del cajero, sirviente, tenedor de libros, pero no del mandatario, depositario o administrador.

Apariencia de bienes, comisión, etc. Cuento del tío, del legado, de la herencia, etc.

Cualquier otro ardid o engaño, desde la mentira hasta una aparatosa mise en scène.

Supuestos especiales: Art. 173.

1º: Vender plata por oro o platino. Frecuente en substancias medicinales. Calidad: falsificación de materia o productos aunque no estén protegidos por la ley de marcas. Cantidad no es el delito del art. 174, 3º, sino la mezcla de piedras arena o agua, etc., en la mercadería que se da como pura.

2º: Aprobación indebida. Se consuma el delito por la negativa del depositario, mandatario, etc., a entregar la cosa cuando se le intima o en el tiempo fijado por el contrato, y también por la negativa de haber recibido la cosa.

3º: Caso parecido al de la extorsión en su objeto, pero aquí no hay violencia moral, sino astucia o engaño.

4º: Aunque el abuso del documento dado con la firma en blanco no cause el daño que se proponía el que lo ha llenado.

5º: Puede haber pasado la cosa a poder de un acreedor prendario, locatario, mandatario, etc. Su dueño no puede substraerla.

6º: Aunque no se perjudique. V. arts. 955, 957 y 958 del Cód. Civil.

7º: Suponer precios altos y condiciones onerosas, o gastos mayores que los reales.

8º: Es decir, cambiar un documento por otro, esconderlo o destruirlo en parte. Puede darse el caso del art. 255.

9º: Estelionato. V. art. 1719, Cód. Civil. La venta de cosa ajena permitida por el Cód. de Comercio, art. 450 y prohibida por el Civil, art. 1329, es objeto del Penal cuando encierra una maniobra para perjudicar y lucrarse.

10º: Simulación de soborno o cohecho (¹).

(¹) En la ob. citada, Tomo II, págs. 391-418, se estudian detenidamente estos diez casos, sobre todo en punto a consumación.



Con pena de minimum distinto: Art. 174.

1°: Daño causado para cobrar el seguro o no pagar el préstamo.

2°: Sin tener en cuenta el resultado: se consuma con hacer firmar al menor.

3°: La simple falsificación no basta, pero sí el mero uso.

4°: Ejecución dañosa de una obra, malos materiales. Basta la posibilidad del daño.

5°: Administración nacional, provincial o municipal, reparticiones autónomas, Banco de la Nación, Hipotecario Nacional, Obras de Salubridad, etc.

Con penas cortas: Art. 175.

1°: No basta el apoderamiento de la cosa; debe existir la intención de tenerla por suya. V. arts. 2531-2534 y 2539, Cód. Civil. Para el tesoro, los arts. 2550-2556.

2°: Error sobre la cosa (un mueble comprado en que se encuentra dinero) o sobre la persona (una carta recibida por error, con dinero, que no se devuelve).

3°: V. art. 3226, Cód. Civil. Téngase presente la prenda agraria.

4°: El supuesto es que el acreedor exige el giro o cheque en blanco o con fecha anterior, tratándose de una obligación futura. Los otros tres supuestos que hace el código en punto a cheques, son los de los arts. 172, 175 y 302.

CAPÍTULO V

Quebrados y otros deudores punibles

Art. 176. Será reprimido, como quebrado fraudulento, con prisión de dos a seis años e inhabilitación especial de tres a diez años, el comerciante declarado en quiebra que, en fraude de sus acreedores, hubiere incurrido en algunos de los hechos siguientes:

1° Simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas. 2° No justificar la salida o existencia de bienes que debiera tener; sustraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa. 3° Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor.

Art. 177. Será reprimido, como quebrado culpable, con prisión de



un mes a un año e inhabilitación especial de dos a cinco años, el comerciante que hubiere causado su propia quiebra y perjudicando a sus acreedores, por sus gastos excesivos con relación al capital y al número de personas de su familia, especulaciones ruinosas, juego, abandono de sus negocios o cualquier otro acto de negligencia o imprudencia manifiesta.

Art. 178. Cuando se tratare de la quiebra de una sociedad anónima o cooperativa o de una persona jurídica que ejerza el comercio, todo director, administrador o gerente de la sociedad o establecimiento fallido o contador o tenedor de libros, que hubiere cooperado a la ejecución de alguno de los actos a que se refieren los artículos anteriores, será reprimido con la pena del quebrado fraudulento o culpable, en su caso.

Art. 179. Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el deudor no comerciante concursado civilmente que, para defraudar a sus acreedores, hubiere cometido o cometiere alguno de los actos mencionados en el artículo 176.

Art. 180. Será reprimido con prisión de un mes a un año, el acreedor que consintiere en un concordato, convenio o transacción judicial, en virtud de una connivencia con el deudor o con un tercero, por la cual hubiere estipulado ventajas especiales para el caso de aceptación del concordato, convenio o transacción. La misma pena sufrirá, en su caso, todo deudor o director, gerente o administrador de una sociedad anónima o cooperativa o de una persona jurídica de otra índole, en estado de quiebra o de concurso judicial de bienes, que concluyere un convenio de este género.

Sólo pueden ser quebrados los comerciantes, aun los no matriculados. El delito se consuma en el día que el auto del Juez declara como fecha de la cesación de pagos.

Hoy no hay cuestión prejudicial a resolver antes de empezar el proceso: sólo se exige que haya declaración de quiebra.

Quebrado fraudulento: Art. 176.

Aumentando el pasivo. Con subtracciones en el activo. Dando ventajas a un acreedor (que no las tenga por su privilegio). La quiebra de corredor es considerada como fraudulenta por la ley comercial que no obliga al juez de lo criminal.

Quebrado culpable: Art. 177.

V. el art. 137 de la ley n° 4146, de quiebras.



Quiebra de sociedad anónima, etc.: Art. 178.

El delito no tiene por nombre la acción delictuosa o culpable, sino quien la ha ejecutado (no es quiebra, sino de quebrados), por lo cual se establece un régimen de autores distinto del del artículo 45.

Concursado civil: Art. 171.

Tiene pena el fraudulento, pero no el imprudente o culposo.

Casos de connivencia: Art. 180

V. el 31 de la ley 4146 y los 931 y 932, Cód. Civil (1).

CAPÍTULO VI

Usurpación

Art. 181. Será reprimido con prisión de un mes a dos años:

1º El que por violencia, engaño o abuso de confianza, despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble o de un derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis, constituido sobre un inmueble. 2º El que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites del mismo. 3º El que, con violencias o amenazas, turbare la posesión de un inmueble.

Art. 182. Será reprimido con prisión de quince días a un año:

1º El que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro sacare aguas de represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos o las sacare en mayor cantidad que aquella a que tenga derecho. 2º El que estorbare el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas. 3º El que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro represar, desviare o detuviere las aguas de los ríos, arroyos, canales o fuentes o usurpare un derecho cualquiera referente al curso de ellas. La pena se aumentará hasta dos años, si para cometer los delitos expresados en los números anteriores, se rompieren o alteraren diques, esclusas, compuertas u otras obras semejantes hechas en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, canales o acueductos.

(1) En la ob. citada, tomo II, pág. 451, se comenta el añadido de la palabra deudor entre **todo y o director** y la divertida polémica de los comentaristas sobre lo que uno de éstos llama «lo que se ha armado». *Literatura docente!*



Despojo de inmueble o de derecho real sobre él: Art. 181, 1°.

Protege los bienes inmuebles contra las violencias, el engaño y el abuso, pero sólo la posesión, no el dominio, es decir, que si el dueño posee hay delito, y sinó no, y los demás derechos reales.

Destrucción o alteración de términos: Íd., 2°.

Deshacer, mudar de sitio o borrar los límites, linderos o mojones de piedra, madera o hierro, setos vivos, etc., para usurpar el inmueble ajeno.

Turbación de posesión: Íd., 3°.

Aquí el acto es violento física y moralmente. V. art. 2470, Cód. Civil.

Usurpación de aguas:

Son éstas inmuebles. Art. 2348, Cód. Civil. Sacar mayor cantidad de agua que la que toca, estorbar el derecho de otro aun sin beneficiarse, desviar o detener aguas, son los tres incisos del artículo 182. La agravación del apartado final prescinde de la intención del usurpador; se funda en el daño social.

CAPITULO VII

Daños

Art. 183. Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que destruyere, inutilizare, hiciero desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado.

Art. 184. La pena será de tres meses a cuatro años de prisión, si mediare cualquiera de las circunstancias siguientes:

1° Ejecutarse el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones. 2° Producir infección o contagio en aves u otros animales domésticos. 3° Emplear sustancias venenosas o corrosivas. 4° Cometer el delito en despoblado y en banda. 5° Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos



o en puentes, caminos, pascos u otros bienes de uso público; o en tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos.

Los atentados contra el patrimonio de los seis capítulos anteriores tienen por finalidad más el lucro del sujeto activo que el perjuicio del pasivo: aquí es lo contrario. Aquéllos no tienden a la destrucción de la cosa, sino a conservarla... para sí.

Daño simple: Art. 183.

Entra el sabotage. Art. 159.

La cosa tiene que ser ajena, por lo menos en parte. No lo hay culposos.

Daño calificado: Art. 184.

1º: Se diferencia del desacato que trata de burlar a la autoridad o vengarse de ella. Aquí sólo se trata de impedir su acción.

2º: Daño de virtualidad superior a la buscada por el agente.

3º: Por el peligro general que encierra.

4º: V. art. 186, 2º.

5º: En bienes públicos o de uso público, archivos, bibliotecas, museos, carreteras, caminos, viveros, obras de salubridad. Tumbas consideradas por el lado-propiedad, (otros Códigos penan cualquier menosprecio de la memoria de los muertos), signos conmemorativos, placas, antenas. Monumentos o edificios declarados tales. Estatuas, etc., de edificios o lugares públicos. Los daños causados en estatuas, cuadros u objetos artísticos de propiedad particular, entran en el art. 183.

CAPÍTULO VIII

Disposiciones generales

Art. 185. Están exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de la civil, por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaron:

1º Los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en la línea recta. 2º El consorte viudo, respecto de las cosas de la pertenencia



de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otro. 3° Los hermanos y cuñados, si viviesen juntos. La excepción establecida en el párrafo anterior, no es aplicable a los extraños que participan del delito.

1° y 3°: Se refieren a la familia en el sentido limitado de la palabra. A diferencia de los delitos contra la persona en los que el parentesco determina agravación, en éstos contra la propiedad, no debe la ley intervenir, trazando líneas divisorias entre el delito y la indelicadeza, y atizando odios.

El 2° se refiere al viudo o viuda que antes de habersele atribuido legalmente una cosa mueble de la difunta o el difunto, haya continuado en la posesión del mismo.

El apartado final es una aplicación del art. 48.

TITULO VII

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA

CAPITULO I

Incendios y otros estragos

Art. 186. El que causare incendio, explosión o inundación, será reprimido:

1° Con reclusión o prisión de tres a diez años, si hubiere peligro común para los bienes. 2° Con reclusión o prisión de tres a diez años el que causare incendio o destrucción por cualquier otro medio: a) de cereales en parva, gavillas o bolsas, o de los mismos todavía no cosechados. b) de bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodinales, yerbatales o cualquiera otra plantación de árboles o arbustos en explotación, ya sea con sus frutos en pie o cosechados. c) de ganado en los campos o de sus productos amontonados en el campo o depositados. d) de la leña o carbón de leña, apilados o amontonados en los campos de su explotación y destinados al comercio. e) de alfalfares o cualquier otro cultivo de forrajes, ya sea en pie o emparvados, engavillados, ensilados o enfardados. f) de los mismos productos mencionados en los párrafos anteriores, cargados, parados o en movimiento. 3° Con reclusión o prisión de tres a quince años, si hubiere peligro para un archivo público, biblioteca, museo, arsenal, astillero, fábrica de pólvora o de pirotecnia militar o parque de artillería. 4° Con reclusión o prisión de tres a quince años, si hubiere peligro de muerte para alguna persona. 5° Con reclusión o prisión de ocho a veinte años, si el hecho fuere causa inmediata de la muerte de alguna persona.

Art. 187. Incurrirá, según los casos, en las penas señaladas en el artículo precedente, el que causare estrago por medio de sumersión



o varamiento de nave, derrumbe de un edificio, inundación de una mina o cualquier otro medio poderoso de destrucción.

Art. 188. Será reprimido con prisión de uno a seis años el que, destruyendo o inutilizando diques u otras obras destinadas a la defensa común contra las inundaciones u otros desastres, hiciere surgir el peligro de que éstos se produzcan. La misma pena se aplicará al que, para impedir la extinción de un incendio o las obras de defensa contra una inundación, sumersión, naufragio u otro desastre, substraere, ocultare o hiciere inservibles, materiales, instrumentos u otros medios destinados a la extinción o a la defensa referida.

Art. 189. Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos. Si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta cuatro años.

1º. Estrago con peligro para las cosas. Art. 186, 1º, 2º y 3º:

a) Peligro común: no sólo en las del agente, sino posiblemente de que se extienda a las de otras personas.

b) Estrago rural: en los bienes que enumera el inciso 2º.

c) El peligro es para bienes no particulares, sino del Estado.

2º. Con peligro para las personas: Art. 186, 4º y 5º:

a) Se mide la pena, no por el resultado, sino por la posibilidad.

b) El estrago ha dado por consecuencia la muerte de una persona.

3º. Estrago por naufragio, abriendo una vía de agua, echando el buque contra arrecifes, etc., V. para el indeterminado el art. 194.

4º: Estrago culposo que se agrava si es con peligro de muerte o habiendo resultado muerte, Art. 189.

5º: Destrucción de obras o medios para impedir o defenderse de un estrago. Aunque no se consume el propósito, art. 188.

CAPÍTULO II

Delitos contra la seguridad de los medios de transporte y de comunicación

Art. 190. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que inutilizare o destruyere, en todo o en parte, las vías u obras destinadas a la comunicación pública por tierra o por agua, o impidiere



o estorbar la ejecución de las medidas adoptadas para la seguridad de las mismas. El máximo se elevará a seis años, si resultare peligro para las personas. Si resultare la muerte de alguna persona, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión.

Art. 191. El que empleare cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un tren o para hacerle descarrilar, será reprimido: 1° Con prisión de seis meses a tres años, si no se produjere descarrilamiento u otro accidente. 2° Con prisión de dos a seis años, si se produjere descarrilamiento u otro accidente. 3° Con reclusión o prisión de tres a diez años, si a consecuencia del accidente, resultare lesionada alguna persona. 4° Con reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si resultare la muerte de alguna persona.

Art. 192. Será reprimido con las penas establecidas en el artículo anterior en sus casos respectivos, el que ejecutare cualquier acto tendiente a interrumpir el funcionamiento de un telégrafo o teléfono destinado al servicio de un ferrocarril.

Art. 193. Será reprimido con prisión de un mes a un año, si el hecho no importare un delito más severamente penado, el que arrojar cuerpos contundentes o proyectiles contra un tren o tranvía en marcha.

Art. 194. Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que ejecutare cualquier acto tendiente a poner en peligro la seguridad de una nave o construcción flotante o a detener o entorpecer la navegación. Si el hecho produjere naufragio, avería o varamiento, la pena será de tres a doce años de reclusión o prisión. Si el accidente causare lesión a alguna persona, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión y si ocasionare la muerte, de diez a veinticinco años de reclusión o prisión.

Art. 195. Serán reprimidos con prisión de un mes a un año, si el hecho no importare un delito más severamente penado, los conductores, capitanes, pilotos, mecánicos y demás empleados de un tren o de un buque, que abandonaren sus puestos durante sus servicios respectivos antes de llegar a puerto o al término del viaje ferroviario.

Art. 196. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que, por imprudencia o negligencia o por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un descarrilamiento, naufragio u otro accidente previsto en este capítulo. Si del hecho resultare lesionada o muerta alguna persona, se impondrá prisión de uno a cuatro años.

Art. 197. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que interrumpiere o entorpeciere la comunicación telegráfica o telefónica o resistiere violentamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida.

1°: *Destrucción de vías u obras:* Art. 190.

En vías entran además de los rieles, las traviesas, etc. Obras son los terraplenes, puentes, muelles, estaciones. Medidas son



lo que hacen los señaleros, guarda agujas, etc. Entra el caso del art. 192.

2º: *Descarrilamiento*: Art. 191.

O cualquier entorpecimiento a la marcha de los trenes. Con explosivos, señales o telegramas de servicio falsos, detención de empleados, etc., frenos rotos, tornillos aflojados, rotura de puentes, etc.

Si el daño en las personas ha sido el delito-fin, rige el art. 80, 2º.

3º: *Por culpa o imprudencia*: Art. 196.

Generalmente por inobservancia del reglamento.

4º. *Contra buques*: Art. 194.

Naufragio indirecto. El agente pone en práctica medios, que den por resultado el naufragio de cualquier buque. El art. 187 castiga el directo contra un buque determinado.

5º. *Delitos análogos*:

Art. 193: Cuerpos contundentes son piedras, maderas, ladrillos; proyectiles, los disparados con armas. Si se causa daños en las cosas o lesiones, será caso de concurso.

Art. 195: Abandono de servicio.

Art. 197: A diferencia del 192, en que se ataca el telégrafo o teléfono para entorpecer o descarrilar, aquí se trata de cualquier daño en los teléfonos o telégrafos.

CAPITULO III

Piratería

Art. 198. Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años:

1º El que practicare en el mar o en los ríos de la república algún acto de depredación o violencia contra un buque o contra personas o cosas que en él se encuentren, sin estar autorizado por alguna potencia beligerante o sin que el buque, por medio del cual ejecute el acto, pertenezca a la marina de guerra de alguna potencia reconocida. 2º El que, abusando de una patente de corso legítimamente concedida, practicare algún acto de depredación o cualquier hostilidad contra bu-



ques de la república o de otra nación para hostilizar a la cual no estuvo autorizado. 3° El que se apodere de algún buque o de lo que perteneciere a su equipaje, por medio de fraude o violencia cometida contra su comandante. 4° El que entregare a piratas un buque, su carga o lo que perteneciere a su tripulación. 5° El que, con amenazas o violencias, se opusiere a que el comandante o la tripulación defendiera al buque atacado por piratas. 6° El que, por cuenta propia o ajena, equipare un buque destinado a la piratería. 7° El argentino o extranjero residente en la república que traficare con piratas o les suministrare auxilios. 8° El comandante de un buque armado, que navegare con dos o más patentes de diversas potencias.

Art. 198. Si los actos de violencia u hostilidad mencionados en el artículo anterior, fueren seguidos de la muerte de alguna persona que se encontrare en el buque atacado, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión.

Piratería: Art. 198.

1°: Comprende los ríos navegables o no y el mar aun fuera del territorial. Salvo patente de corso contra un país enemigo del patentado, que no sea la Argentina. Y salvo casos de guerra.

2°: Patente de corso dada por la República (el congreso, artículo 67-22 Const. Nac.) u otro país, contra un país determinado en la patente.

3°: Define el buque el art. 856, Cód. de Com. Equipaje quiere decir tripulación. El fraude debe ser específico, piratear, no el general del art. 172. La violencia debe dar por resultado el apoderamiento del buque.

4°: Por el capitán. Un individuo de la tripulación puede también cometerlo facilitando a los piratas la entrada en el buque.

5°: En cualquiera de los cuatro casos anteriores.

6°: En realidad, es tentativa de piratería, que la ley castiga como si ésta se consumara.

7°: El argentino, aun residente en el extranjero y que será reclamado por extradición. En realidad sería complicidad.

8°: Salvo que las patentes hayan sido dadas por dos potencias aisladas.

Concurso ideal legal: Art. 199.

Siendo la muerte ocasional, pero si ha sido buscada y prevista, regirá el 80. 2°.

Delitos contra la salud pública
Envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas (1)



Art. 200. Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años el que envenenare o adulterare, de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión.

Art. 201. Las penas del artículo precedente, serán aplicables al que vendiere, pusiere en venta, entregare o distribuyere medicamentos o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo.

Art. 202. Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.

Art. 203. Cuando alguno de los hechos previstos en los tres artículos anteriores, fuere cometido por imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se impondrá multa de quinientos a dos mil pesos, si no resultare enfermedad o muerte de alguna persona, y prisión de seis meses a dos años, si resultare enfermedad o muerte.

Art. 204. (antiguo) Será reprimido con multa de quinientos a dos mil pesos el que, estando autorizado para la venta de sustancias medicinales, las suministrare en especie, calidad o cantidad no correspondiente a las prescripciones médicas o diversas de la declarada o convenida. Si del hecho resultare enfermedad o muerte de alguna persona, la pena será de dos a seis años de prisión.

Art. 204. (con las modificaciones de las leyes n° 11309 y n° 11331) Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que, estando autorizado para la venta, venda o entregue o suministre alcaloides o narcóticos sin receta médica. En la misma responsabilidad incurrirán el médico que recete y el farmacéutico o empleado que los despachen en dosis mayores que las que señala la Farmacopea. En caso de que la venta o entrega o suministro sea hecho por persona no autorizada

(1) En nuestro "Código Penal Argentino" hemos explicado el error que implica este subtítulo. El capítulo entero fué tomado del Proyecto de 1906, que tenía la especialidad de que cada artículo tenía su título propio. Al tomar el capítulo quedó como subtítulo del Capítulo, el título correspondiente al primer artículo que por esta causa tenía en el rubro: en cambio, a los demás artículos les fue éste muy mal. Fué un simple error de tijera que nadie se atreve a corregir, pero que afea el texto del Código.



para la venta de substancias medicinales, la pena será de tres meses a un año de prisión. Los que no estando autorizados para la venta, tengan en su poder las drogas a que se refiere esta ley y que no justifiquen la razón legítima de su posesión o tenencia, sufrirán la misma pena. Será reprimido con multa de 500 a 2.000 pesos el que, estando autorizado para la venta de substancias medicinales, las suministraré en especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta médica o diversa de la declarada o convenida. En cualquiera de los casos previstos por este artículo, la pena será de tres a quince años de prisión, si resultare la enfermedad o muerte de alguna persona.

Art. 205. (antiguo) Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

Art. 205. (con el párrafo agregado por la ley n° 11309) Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Serán reprimidos con la misma pena los que introduzcan clandestinamente, en el país, alcaloides o narcóticos, y los productos introducidos en estas condiciones serán decomisados.

Art. 206. Será reprimido con prisión de uno a seis meses el que violare las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal.

Art. 207. En el caso de condenación por un delito previsto en este capítulo, el culpable, si fuere funcionario público o ejerciere alguna profesión o arte, sufrirá, además, inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena. Si la pena impuesta fuere la de multa, la inhabilitación especial durará de un mes a un año.

Art. 208. Será reprimido con prisión de quince días a un año:

1° El que, sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aun a título gratuito. 2° El que, con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, anunciare o prometiére la curación de enfermedades a término fijo o por medios secretos o infalibles. 3° El que, con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, prestare su nombre a otro que no tuviere título o autorización, para que ejerza los actos a que se refiere el inciso 1° de este artículo.

1°. *Adulteración peligrosa:* Art. 200.

Se entiende, no como medio de cometer otro delito, sino de aguas o substancias destinadas al uso público o de una coleccion: el dolo es indeterminado.



2°. *Ocultación del peligro*: Art. 291.

Medicamentos o mercaderías aun los no adulterados. No es necesario que alguien los compre. Se castiga al que los ofrece en venta al público o a una persona.

3°. *Contagio*: Art. 293.

Sobre todo el venéreo.

4°. *Culpa en los tres casos anteriores*: Art. 204:

Se da por inobservancia de reglamentos en el 1° y 2°, y por descuido en el 3°.

5°. *Alcaloides o narcóticos*. Art. 204:

a) Farmacéutico o idóneo que los despache sin receta médica.

b) Médico que los recete en dosis desproporcionadas (según lo establezca la pericia que el juez ordene) y farmacéutico que despacha esas recetas.

c) Expendio por personas no autorizadas (lo están los farmacéuticos y las casas mayoristas que las venden).

d) La persona autorizada se aparta en el expendio, de la receta o el convenio (comercial). Caso distinto del del artículo 173, 1°, en que se aprecia esto como defraudación: aquí se trata del perjuicio a la salud pública.

e) El introductor clandestino de alcaloides o narcóticos. Art. 205, 2°.

6°. *Violación de cuarentenas* o de desinfección domiciliaria, denuncia médica forzosa, hospitalización y cualquier medida contra epidemias. Art. 201, 1°.

6°. *Policía sanitaria animal*: Art. 206.

Modifica las penas de la ley así llamada n° 4155, art. 5°.

7°. *Curanderismo*: Art. 208.

1: Quien no tiene título universitario o no está autorizado por las autoridades sanitarias aun sin usar medicamentos, o solo electricidad estática, agua, etc., y aunque no medie lucro.

2°: Curanderismo de profesional.

3°: Préstamo oneroso o gratuito del nombre y título de otro que es considerado coautor.



TITULO VIII
DELITOS CONTRA EL ORDEN PUBLICO

CAPITULO I

Instigación a cometer delitos

Art. 209. El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de un mes a cuatro años, según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41.

Instigación es acto o discurso que puede determinar a una persona a obrar de cierto modo. Para ser delictuosa, debe ser pública, o ante muchas personas y el delito, cualquiera de los del Código.

El instigado tiene por su parte la pena del delito que comete aunque no sea el que fué objeto de la instigación.

La instigación particular constituye al agente en autor o cómplice del delito que el instigado cometa por ella.

CAPITULO II

Asociación ilícita

Art. 210. Será reprimido con reclusión o prisión de un mes a cinco años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos, por el solo hecho de ser miembro de la asociación.

Este delito se pena con independencia de los delitos que se cometan y aunque no se cometa ninguno.

No es la participación criminal ordinaria de los arts. 45 y siguientes en que se trata de un delito concreto: aquí no se sabe qué delito se cometerá.

No es tampoco la banda del art. 166 que solamente si se comete el robo se castiga, agravando la pena de éste.

Ni es la conspiración del art. 233 y que sólo tiene en vista dos delitos, rebelión y sedición.



CAPITULO III

Intimidación pública

Art. 211. Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere gritos de alarma, hiciere estallar bombas o materias explosivas, las colocare con ese fin o amenazare con un desastre de peligro común.

Art. 212. Será reprimido con prisión de seis meses a tres años:

1° El que fabrique, venda, transporte o conserve explosivos o instrumentos o materias destinadas a su fabricación susceptibles de causar estragos, sin permiso de la autoridad. 2° El que propague, por cualquier medio, los procedimientos para causar incendio o estragos y para fabricar los materiales destinados a producirlos. 3° El que propague los medios de causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos.

1°. *Intimidación pública*: Art. 211.

El delito es formal: es indiferente que los gritos no hayan causado pánico, la bomba no haya estallado o las amenazas no se realicen. Si es medio para cometer otros delitos, habrá concurso o reiteración.

2°. *Explosivos*: Art. 212, 1°.

Susceptibles de causar estragos. Si los causa, concurrirá con delitos de incendio, daños, homicidio, lesiones, etc.

3°. *Propaganda criminal*: Art. 212, 2°.

Que trata de facilitar los dos anteriores delitos: la propaganda puede ser verbal, escrita o impresa.

4°. *Sabotage*:

El art. 183 reprime este delito. Aquí no se trata de daño, sino de propaganda de medios para causarlo.

CAPITULO IV

Apología del crimen

Art. 213. Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito.

Apología de un delito:

Es decir, de lo que el Código llama así y como tal lo pena:



referirse a un delito concreto cometido por un procesado y alabarlo, no entra en el texto del artículo. En contra de esto hay jurisprudencia evidentemente errada.

Apología del condenado por un delito:

Importa un acto antisocial postular la injusticia de una sentencia que ha aplicado una ley. Este punto de vista llevado al extremo, llevaría a suprimir la crítica judicial tan necesaria.

Pero el texto se refiere a la intención que en esta última no puede ser más que científica o técnica.

TITULO IX

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACION

CAPITULO I

Traición

Art. 214. Será reprimido con reclusión o prisión de diez a veinticinco años o reclusión o prisión perpetua y en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este código, todo argentino o toda persona que deba obediencia a la nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las armas contra ésta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro.

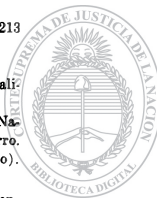
Art. 215. Será reprimido con reclusión o prisión perpetua, el que cometiere el delito previsto en el artículo precedente, en los casos siguientes:

1º Si ejecutare un hecho dirigido a someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad. 2º Si indujere o decidiere a una potencia extranjera a hacer la guerra contra la República.

Art. 216. Será reprimido con reclusión o prisión de uno a ocho años, el que tomare parte en una conspiración de dos o más personas, para cometer el delito de traición, en cualquiera de los casos comprendidos en los artículos precedentes, si la conspiración fuere descubierta antes de empezar su ejecución.

Art. 217. Quedará eximido de pena el que revelare la conspiración a la autoridad, antes de haberse comenzado el procedimiento.

Art. 218. Las penas establecidas en los artículos anteriores se aplicarán, también, cuando los hechos previstos en ellos fueren cometidos contra una potencia aliada de la república, en guerra contra un enemigo común.



1º. *Traición*: Art. 214.

Puede ser sujeto activo: 1, un argentino nativo; 2, naturalizado; 3, extranjero con empleo o función pública.

Dos supuestos del delito: tomar las armas contra la Nación o unirse a sus enemigos prestándoles ayuda o socorro. Const. Nac., Art. 103, (o los prestare según el presente texto).

2º. *Traición calificada*: Art. 215.

1: Correspondencia con el enemigo, con instrucciones, encubrir sus espías, etc.

2: Por discursos, cartas, artículos.

3º. *Tentativa*: Art. 216.

La individual no existe. O se comete el delito mediante uno de los actos citados o no hay delito.

La conspiración que en los demás delitos no se considera como tentativa, aquí basta para constituir un delito propio.

4º. *Contra un aliado*: Art. 218.

Iguals penas porque en realidad van contra la patria.

5º. *Delación*: Art. 217.

En cierto sentido equivale a desistimiento de tentativa.

CAPÍTULO II

Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la nación

Art. 219. Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que por actos hostiles, no aprobados por el gobierno nacional, diere motivo al peligro de una declaración de guerra contra la nación, expusiere a sus habitantes a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes o alterare las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero. Si de dichas hostilidades resultare la guerra, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión.

Art. 220. Se impondrá prisión de seis meses a dos años, al que violare los tratados concluidos con naciones extranjeras, las treguas y armisticios acordados entre la república y una potencia enemiga o entre sus fuerzas beligerantes de mar o tierra o los salvoconductos debidamente expedidos.

Art. 221. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las inmunidades del jefe de un estado o del representante de una potencia extranjera.

Art. 222. Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que revelare secretos políticos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la



nación. En la misma pena incurrirá el que obtuviere la revelación del secreto.

Art. 223. Será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo, el que por imprudencia o negligencia diere a conocer los secretos mencionados en el artículo precedente, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo u oficio.

Art. 224. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que indebidamente levantare planos de fortificaciones, buques, establecimientos, vías u otras obras militares o se introdujere con tal fin clandestina o engañosamente en dichos lugares, cuando su acceso estuviera prohibido al público.

Art. 225. Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que, encargado por el gobierno argentino de una negociación con un estado extranjero, la condujere de un modo perjudicial a la nación, apartándose de sus instrucciones.

1º: *Actos hostiles*: Art. 219.

Deben ser actos contra las personas o la propiedad, emblemas, banderas, no discursos o artículos.

a) Que ofrezcan peligro de una declaración de guerra, aunque no sea actual o inmediato.

b) Aquí el peligro (potencial también) es de que se sufran vejaciones por parte de súbditos de otros países, o represalias por la de su gobierno.

c) Alteración; el peligro se ha concretado en un hecho.

d) Guerra: agravación de las penas de los anteriores supuestos.

2º: *Violación de tratados, etc.*: Art. 220.

Se refiere a los tratados de paz y amistad, o de alianza defensiva u ofensiva, no a los de comercio, extradición, postales, etcétera.

Treguas, armisticios, y salvoconductos en la mayor parte de los casos caerán bajo la jurisdicción militar.

3º: *Inmunidades*: Art. 221.

Las de un rey como las de un presidente no son más que las de un representante diplomático: inviolabilidad y extraterritorialidad; ésta comprende tanto la jurisdicción civil como la penal. V. art. 2º.

4º: *Espionaje*: Arts. 222, 223 y 224.

Comunicar documentos, planos, planes, fotografías, etc., a una potencia. Publicarlos. La revelación culposa o por impru-



dencia sólo (en tiempo de paz) en un funcionario público que conozca o guarde los secretos por su cargo. El espionaje gráfico puede consistir en sacar copias, croquis, fotografías, primer supuesto, o introducirse clandestinamente o engañosamente donde puedan sacarse, que es el segundo.

5°. *Negociación diplomática perjudicial*: Art. 225.

Sólo pueden ser sujetos activos quienes dice el artículo. Este delito requiere: 1° posibilidad o efectividad de perjuicio para la Nación; 2° olvido o infracción de las instrucciones recibidas.

TÍTULO X

DELITOS CONTRA LOS PODERES PUBLICOS Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL

CAPÍTULO I

Rebelión

Art. 226. Serán reprimidos con prisión de uno a cinco años, los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales.

Art. 227. Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria, los miembros del congreso que concedieren al poder ejecutivo nacional y los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona. (Artículo 29 de la Constitución Nacional).

Art. 228. Se impondrá prisión de seis meses a dos años, al que ejecutare o mandare ejecutar decretos de los concilios, bulas, breves y rescriptos del Papa que, para su cumplimiento, necesiten del pase del gobierno, sin haberlo obtenido; y de uno a seis años de la misma pena, al que los ejecutare o mandare ejecutar, a pesar de haber sido denegado dicho pase.

1°. *Rebelión*: Art. 226.

Se refiere sólo a los poderes nacionales: es delito sometido a la justicia federal. La sedición es contra los provinciales, (salvo un caso del art. 229), y sometida a sus tribunales.



Alzarse en armas es cargarlas (llevarlas ostensiblemente) llevar municiones, apoderarse de arsenales, saquear armerías, arrancar rieles, formar cantones o barricadas, para:

- a) Cambiar la Constitución que en su artículo 30 prevé el modo legal de reformarla;
- b) Deponer uno de los tres poderes, ejecutivo, legislativo o judicial;
- c) Arrancarle un decreto, una ley o una sentencia;
- d) Impedir que el gobierno actúe o las cámaras se reúnan o los magistrados acudan a llenar sus funciones;
- e) Impedir la formación y renovación legales de los tres poderes o de cualquiera de ellos.

2°. *Dictadura*: Art. 227.

Es la conversión del criterio individual del gobernante en fuente exclusiva de las obligaciones de los gobernados.

El dictador es pasible de las penas de los que le han nombrado.

3°. *Contra el Patronato*: Art. 228.

V. Const. Nac., art. 86, 8° y 9°.

Comprende las disposiciones disciplinarias de los concilios, no las dogmáticas: las bulas y breves que contengan nombramientos, leyes, reglas, que necesitan pase que se da con acuerdo de la Corte Suprema en cuanto no se opongan a las regalías, costumbres, leyes y derechos de la Nación, y no induzcan en novedades perjudiciales, gravamen público o de tercero. Las bulas ordinarias (de carne, de laticinios, etc.), y los breves sobre asuntos privados no requieren pase.

CAPÍTULO II

Sedición

Art. 229. Serán reprimidos con prisión de uno a tres años, los que, sin rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidos en la ley.

Art. 230. Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años:

- 1° Los individuos de una fuerza armada o reunión de personas, que



se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaran a nombre de éste. (Art. 22 de la Constitución Nacional). 2º Los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código.

1º. *Sedición*: Art. 229.

Cae bajo la jurisdicción provincial, salvo tratarse de una provincia armada contra otra, y tratándose de territorios. Es un alzamiento armado.

Primer supuesto: Provincia contra provincia. Art. 139, Const. Nac.

Segundo: Querer cambiar la constitución local, etc, como en la rebelión.

Cuando es contra uno o los dos poderes públicos de un territorio (no lo hay legislativo) la sedición será juzgada por el Juez de Sección respectivo.

2º. *Asonada o motín*: Art. 230.

Primer inciso: V. art. 22 Const. Nac. citado.

Segundo inciso: Alzamiento no armado; cae bajo la jurisdicción federal si el motín va contra los poderes nacionales, y bajo la de la provincia respectiva, si contra los de una provincia.

CAPÍTULO III

Disposiciones comunes a los capítulos precedentes

Art. 231. Luego que se manifieste la rebelión o sedición, la autoridad nacional más próxima intimará hasta dos veces a los sublevados que inmediatamente se disuelvan o retiren, dejando pasar entre una y otra intimación el tiempo necesario para ello. Si los sublevados no se retiraren inmediatamente después de la segunda intimación, la autoridad hará uso de la fuerza para disolverlos. No serán necesarias, respectivamente, la primera y segunda intimación, desde que los sublevados hicieron uso de las armas.

Art. 232. En caso de disolverse el tumulto sin haber causado otro mal que la perturbación momentánea del orden, sólo serán enjuiciados los promotores o directores, a quienes se reprimirá con la mitad de la pena señalada para el delito.

Art. 233. El que tomare parte como promotor o director, en una conspiración de dos o más personas para cometer los delitos de rebelión o sedición, será reprimido, si la conspiración fuere descubierta



antes de ponerse en ejecución, con la cuarta parte de la pena correspondiente al delito que se trataba de perpetrar.

Art. 234. El que sedujere tropas o usurpare el mando de ellas, de un buque de guerra, de una plaza fuerte o de un puesto de guardia o retuviere ilegalmente un mando político o militar para cometer una rebelión o una sedición, será reprimido con la mitad de la pena correspondiente al delito que trataba de perpetrar. Si llegaro a tener efecto la rebelión o la sedición, la pena será la establecida para los autores de la rebelión o de la sedición en los casos respectivos.

Art. 235. Los funcionarios públicos que hubieren promovido o ejecutado alguno de los delitos previstos en este título, sufrirán además inhabilitación especial por un tiempo doble del de la condena. Los funcionarios que no hubieren resistido una rebelión o sedición por todos los medios a su alcance, sufrirán inhabilitación especial de uno a seis años.

Art. 236. Cuando al ejecutar los delitos previstos en este título, el culpable cometiere algún otro, se observarán las reglas establecidas para el concurso de hechos punibles.

1º. *Régimen intimatorio*: Art. 231.

Si el tumulto ha cesado, se aplica la casi amnistía legal que importa este artículo. Pero no alcanzará ésta a los delitos contra la propiedad o las personas.

2º. *Tumulto concluido*: Art. 232.

El supuesto es que la intimación ha surtido efecto. (V. el nº siguiente).

3º. *Promotores en conspiración*: Art. 233.

Si ésta no pasa de tal, se les aplica su benigna pena.

4º. *Pronunciamiento*: Art. 234.

No usa la ya clásica palabra española que el general Riego ennobleció y el general Primo de Rivera actualizó, pero en los tres incisos del texto cae bien el término.

5º. *Agravación*: Art. 235.

La sufren las penas de los artículos anteriores cuando el agente es un funcionario público. Estos, además, deben oponerse, en lo posible y dentro de sus cargos, a la comisión de esos delitos.

6º. *Concurso*: Art. 436.

Importa decir que los delitos llamados conexos se castigarán como tales, aunque ocurran ocasionalmente y tanto si son contra las personas como contra las cosas.

TITULO XI
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA (1)

CAPITULO I

Atentado y resistencia contra la autoridad

Art. 237. Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones.

Art. 238. La prisión será de seis meses a dos años:

1º Si el hecho se cometiere a mano armada. 2º Si el hecho se cometiere por una reunión de más de tres personas. 3º Si el culpable fuere funcionario público. 4º Si el delincuente pusiere manos en la autoridad. En el caso de ser funcionario público, el reo sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena.

Art. 239. Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.

Art. 240. Para los efectos de los dos artículos precedentes, se reputará funcionario público al particular que tratase de aprehender o hubiere aprehendido a un delincuente en flagrante delito.

(1) En la obra citada, Tomo III, páginas 138 y siguientes, haremos notar que los delitos de los catorce capítulos de este título son sociales, pero no son contra la Sociedad, la Nación o el Estado, sino contra la parte de éste, que ejecuta las leyes o cuida que no sean infrigidas, y de serlo castiga. Los delitos pueden formar tres grupos:

A: Que sólo pueden cometerlos los particulares; Atentado y resistencia; Desacato; Falso testimonio.

B: Que sólo pueden cometerlos los funcionarios de la Administración pública; Abuso de autoridad; Violación de deberes; Negociaciones incompatibles; Exacciones; Denegación y retardo de justicia.

C: Que pueden cometerlos lo mismo un particular que un funcionario; Usurpación de autoridad, títulos y honores; Violación de sellos y documentos; Cohecho; Malversación; Prevaricato; Encubrimiento; Evasión o sultura de presos.

De estos delitos sólo pueden ser culpables: (por imprudencia, negligencia, etc.), los de malversación, violación de sellos y evasión, que tienen sus penas especiales cuando son sin intención criminal.

Funcionario público es el que tiene facultad de hacer ejecutar sus disposiciones: si las dicta más allá de sus funciones o fuera del radio material de éstas, no puede ser tenido como funcionario público





Art. 241. Será reprimido con prisión de quince días a seis meses:
1° El que perturbare el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia o donde quiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones. 2° El que sin estar comprendido en el artículo 237, impidiere o estorbare a un funcionario público cumplir un acto propio de sus funciones.

Art. 242. Será reprimido con multa de quinientos a dos mil pesos e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, en el arresto o formación de causa contra un miembro de los poderes públicos nacionales o provinciales, de una convención constituyente o de un colegio electoral, no guardare la forma precripta en las constituciones o leyes respectivas.

Art. 243. Será reprimido con prisión de quince días a un mes, el que siendo legalmente citado como testigo, perito o intérprete, se abstuviere de comparecer o de prestar la declaración o exposición respectiva. En el caso del perito o intérprete, se impondrá, además al reo, inhabilitación especial de un mes a un año.

1º. *Atentado simple:* Art. 237.

Se exige violencia moral o amenazas físicas para que un funcionario realice u omita en acto propio de sus funciones.

2º. *Calificado:* Art. 238.

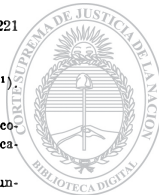
- a) Valiéndose de llevar y ostentar armas, aunque no las use.
- b) En grupo o « patota » aunque no sea a mano armada.
- c) Plantear con violencia un conflicto de atribuciones.
- d) Emplear la violencia física.

3º. *Desobediencia o resistencia:* Art. 239.

Resistir es emplear la fuerza o las amenazas contra la acción del funcionario, la desobediencia es el incumplimiento de la orden dada. Debe el funcionario estar ejecutando un acto dentro de sus funciones.

Este delito se diferencia del atentado:

- a) La resistencia se produce estando en plena función el funcionario; el atentado antes de empezar.
- b) En el atentado se trata de sojuzgar, imponerse al funcionario; la resistencia se opone a su mandato en forma negativa, casi defensiva.
- c) En el atentado hay un principio de preordenación ya que no premeditación; la desobediencia surge de improviso al recibirse la orden.



4°. *Particular funcionario*: Art. 240.

Es el caso de los artículos 3 y 5, del Cód. Proc. Crim. (1).

5°. *Perturbación*: Art. 241.

a) Además hay las prescripciones reglamentarias y las correccionales que aplicadas excluyen pena de atentado o desacato; *non bis in idem*.

La autoridad de que habla, quiere decir ejerciendo sus funciones, no paseando en la calle o estando en el teatro o en sitios peores.

b) El art. 237, excluye la astucia o el engaño, que son los medios de realizar el atentado, aquí previstos.

6°. *Contra el fuero parlamentario*: Art. 242.

Los miembros de las cámaras nacionales o provinciales:

a) No pueden ser arrestados, sino en flagrante delito de los que indica el art. 61, Const. Nac.

b) No pueden ser querellados por ningún delito de acción pública, privada o dependiente de instancia privada.

c) Se extiende el fuero a los convencionales de una constituyente y a las autoridades de un colegio electoral.

7°. *Incomparecencia*: Art. 243.

V. arts. 270 y 273 del Cód. Proc. Crim.

La legalidad de la citación la apreciará el juez cuando la alegue el citado que debe empezar por comparecer.

Primer supuesto: el testigo, perito, etc., no comparece. V. además el art. 291, Cód. Proc. Crim. y el art. 182, Cód. Proc. Civ. y Com.

Segundo: comparece y no declara: hay desobediencia. El Cód. Proc. Crim. lo llama por error desacato.

(1) En la obra citada decíamos, Tomo III, pág. 151, que el texto habla de flagrante delito que aunque de etiología distinta (de *flagrare*, *arder*) vale lo mismo que *infraganti* (de *fragare*, *oler*) pues ya sea que se vea o que se sienta, se ha cometido públicamente o ha sido presenciado por varias personas o por una el acto de robar o se halla a una con las cosas robadas en el lugar mismo que se ha cometido el robo o en el acto de matar o con la espada teñida de sangre en el lugar del homicidio. El concepto debe extenderse al que después que se ha cometido un hecho, al parecer delictuoso, por las voces oídas u otras circunstancias, ve huir a un hombre y lo detiene. Quizá esto no entra en los términos de la ley procesal (ver o presenciar la perpetración) pero el art. presente 240 es más lato.



Art. 244. Será reprimido con prisión de quince días a seis meses, el que provocare a duelo, amenazare, injuriare o de cualquier modo ofendiere en su dignidad o decoro a un funcionario público, a causa del ejercicio de sus funciones o al tiempo de practicarlas. La prisión será de un mes a un año, si el ofendido fuere el presidente de la nación, un miembro del congreso, un gobernador de provincia, un ministro nacional o provincial, un miembro de las legislaturas provinciales o un juez.

Art. 245. Al culpable de desacato, no se le admitirá la prueba de la verdad o notoriedad de los hechos o cualidades atribuidas al ofendido.

Este delito tiene por elemento moral la intención de desconectar, deprimir, desacreditar, etc., al funcionario: no se le impide el ejercicio de sus funciones (atentado) ni se le desobedece o resiste. El elemento material, palabras, escritos, impresos, puede revestir varias formas, provocación a duelo, amenazas, injurias aun de hecho.

El delito puede ser durante el ejercicio de las funciones del desacatado, como causa o consecuencia de él.

No cabe prueba de lo que se imputa al funcionario.

CAPITULO III

Usurpación de autoridad, títulos u honores

Art. 246. Será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo:

1° El que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente. 2° El que después de haber cesado por ministerio de la ley en el desempeño de un cargo público o después de haber recibido de la autoridad competente comunicación oficial de la resolución que ordenó la cesantía o suspensión de sus funciones, continuare ejerciéndolas. 3° El funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo.

Art. 247. Será reprimido con multa de cincuenta a mil pesos, el que públicamente llevare insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere o se abrogare grados académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieren.

Primer supuesto del art. 246. No basta una jactancia verbal o escrita, sino que se ejercen las funciones públicas, sin corresponder.

Segundo supuesto: Funcionario por tiempo determinado: entran los electivos. Funcionario por tiempo indeterminado: después de saber que ha sido declarado cesante.

Tercero: Es una ampliación del primero.

El art. 247 tiene tres supuestos:

- a) Usar distintivos de un cargo público sin derecho.
- b) Arrojar grados académicos o títulos profesionales oficiales.
- c) Usar medallas, condecoraciones o exigir tratamiento sin corresponder.



CAPITULO IV

Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos

Art. 248. Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

Art. 249. Será reprimido con multa de cien a mil pesos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.

Art. 250. Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el jefe o agente de la fuerza pública, que rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente.

Art. 251. Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que requiriere la asistencia de la fuerza pública contra la ejecución de disposiciones u órdenes legales de la autoridad o de sentencias o de mandatos judiciales.

Art. 252. Será reprimido con multa de cincuenta a quinientos pesos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público.

Art. 253. Será reprimido con multa de cien a mil pesos e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no con-



currieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales.

1º. Abuso de autoridad: Art. 248.

El funcionario dispone de la autoridad que inviste para violar la ley o bien dictando órdenes que están en oposición con la Constitución o las leyes (no se trata de casos de interpretación dudosa) o bien ejecutando órdenes de sus superiores manifestamente contrarias a aquéllas.

2º. Por omisión o retardo: Arts. 249 y 250.

a) Omisión manifiesta, o implícita por vencimiento del término fijado por la ley o por reglamento o costumbre.

b) Retardo en las mismas condiciones.

c) El que disponiendo de fuerza pública, niega, retarda o no presta el auxilio de ésta reclamado por autoridad competente.

3º. Abuso agravado: Art. 251.

Pueden cometerlo los funcionarios que disponen de fuerza pública o bien los que acuden a la ajena.

4º. Abandono de cargo: Art. 252.

Exige la intención de causar una perturbación en el servicio.

5º. Empleado sin condiciones:

Tanto éste como el que lo ha propuesto sabiendo que no las tiene, son coautores del delito. Se trata de condiciones establecidas por la ley o los reglamentos.

CAPÍTULO V

Violación de sellos y documentos

Art. 254. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare los sellos puestos por la autoridad para asegurar la conservación o la identidad de una cosa. Si el culpable fuere funcionario público y hubiere cometido el hecho con abuso de su cargo, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo. Si el hecho se hubiere cometido por imprudencia o negligencia del funcionario público, la pena será de multa de cincuenta a quinientos pesos.

Art. 255. Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el que sustrajere, ocultare, destruyere o inutilizare objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documen-



tos confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona en el interés del servicio público. Si el culpable fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo. Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia del depositario, éste será reprimido con multa de cincuenta a quinientos pesos.

1º. Violación de sellos: Art. 254.

Se refiere a los sellos puestos fijados o impresos por la autoridad, como hacen el Juez de Instrucción en el cuerpo o instrumentos de un delito, el Juez de Comercio en la casa, oficinas o depósitos del fallido. Se incluye al escribano en el caso del art. 3666, Cód. Civil.

Puede cometer el delito un funcionario público, con dolo o por imprudencia o negligencia.

2º. Substracción, etc., de elementos de prueba: Art. 255.

a) De objetos destinados a servir de pruebas: instrumentos del delito, pesas y medidas, envases, etc.

b) De registros públicos, o de oficinas de escribanos o reparaciones oficiales.

c) De documentos que la ley o la autoridad ordena sean guardados: expedientes judiciales y administrativos, libros de comercio que se confían a contadores o peritos, documentos indubitados, etc.

La substracción es la remisión clandestina o fraudulenta.

La ocultación no importa llevarlos a otra casa o habitación.

La destrucción puede ser por fuego, rotura, etc.

La inutilización es la destrucción parcial cuantitativa o cualitativa.

Este delito casi siempre es medio de un delito-fin: habrá entonces concurso.

CAPÍTULO VI

Cobro

Art. 256. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años o inhabilitación absoluta por tres a diez años, el funcionario público que, por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquiera otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones.

Art. 257. Será reprimido con prisión de cuatro a doce años o inhabilitación absoluta y perpetua, el juez que aceptare promesa o dá-



diva para dictar o demorar u omitir dictar una resolución o fallo, en asunto sometido a su competencia.

Art. 258. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que, directa o indirectamente, diere u ofreciere dádivas a un funcionario público para que haga u omita un acto relativo a sus funciones. Si la dádiva se hiciere u ofreciere a un juez, la pena será de un mes a cuatro años de prisión. Si el culpable fuere funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial, en el primer caso, por seis meses a seis años, y en el segundo, por uno a diez años.

Art. 259. Será reprimido con inhabilitación absoluta de uno a seis años, el funcionario público que admitiere dádivas que le fueren presentadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo.

1º. *Cuhecho*: Arts. 256 y 257.

Si no se trata de funcionario público, podrá haber estafa.

El supuesto es que se muestre (de un modo fehaciente) dispuesto a recibir la cosa prometida o si entregada a él o algún pariente, no denuncia el hecho. Pero debe ser para que realice o deje de realizar un acto propio de su cargo. Y aunque no lo cumpla.

Si la proposición parte del funcionario y el particular la rechaza, el caso puede ser el del art. 168.

La pena se agrava cuando es el Juez.

2º. *Caso especial*: Art. 258.

En el anterior, se considera el cohecho en cuanto al que recibe la dádiva. El presente, en cuanto al que la ofrece.

3º. *Cuhecho mitigado*: Art. 217.

El funcionario que acepte dádivas que evidentemente tienen en vista el serlo, no es reo de cohecho, porque no se le ofrecen para que haga o deje de hacer algo, pero su indelicadeza es considerada como delito.

CAPÍTULO VII

Malversación de caudales públicos

Art. 260. Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída.



Art. 261. Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo.

Art. 262. Será reprimido con multa del veinte al sesenta por ciento del valor sustraído, el funcionario público que, por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, diere ocasión a que se efectúare por otra persona la sustracción de caudales o efectos de que se trata en el artículo anterior.

Art. 263. Quedan sujetos a las disposiciones anteriores los que administraren o custodiaren bienes pertenecientes a establecimientos de instrucción pública o de beneficencia, así como los administradores y depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares.

Art. 264. Será reprimido con inhabilitación especial por uno a seis meses, el funcionario público que, teniendo fondos expeditos, demorare injustificadamente un pago ordinario o decretado por autoridad competente. En la misma pena incurrirá el funcionario público que, requerido por la autoridad competente, rehusare entregar una cantidad o efecto depositado o puesto bajo su custodia o administración.

1º. *Malversación:* Art. 260.

No hay intención de lucrar, pero dar a los fondos que el funcionario maneja, un destino que no es el legal, es una perturbación que implica peligrosidad del agente. Debe constar con arreglo a la ley de Contabilidad.

2º. *Sustracción:* Art. 261.

No es la momentánea, sino la fraudulenta, con intención de apropiarse los caudales o efectos que le han sido confiados. Es decir, que si se reponen, no hay delito. V. Arts. 31-83, de la ley de Contabilidad.

3º. *Sustracción ajena por culpa:* Art. 232.

Si la sustracción la hace un particular o un funcionario que no sea el responsable directo de los fondos, el delito será robo, o hurto para quienes lo han hecho. Pero si consta que estos últimos han podido hacerlo por descuido de aquél, surge (para éste) el delito.

4º. *Depositarios:* Art. 263.

Se aplica al depositario judicial tanto si los bienes son propios como ajenos, por el carácter público de que le inviste una designación casi siempre hecha por el oficial de justicia en el acto del embargo.



5°. *Demoras de pagos: Art. 264.*

Es un caso de malversación generalmente de poca gravedad: puede complicarse con el del art. 259, formándose un concurso.

CAPITULO VIII

Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas

Art. 265. Será reprimido con prisión de uno a tres años e inhabilitación absoluta por uno a cinco años, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo. Esta disposición será aplicable a los peritos y contadores particulares respecto de los bienes en cuya tasación, partición o adjudicación hubieren intervenido y a los tutores, curadores, albaceas y síndicos respecto de los pertenecientes a pupilos, curados, testamentarios o concursos.

CAPITULO IX

Exacciones ilegales

Art. 266. Será reprimido con prisión de uno a seis meses e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que, abusando de su cargo, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden.

Art. 267. Si se empleare intimidación o se invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta un año y la inhabilitación hasta cuatro.

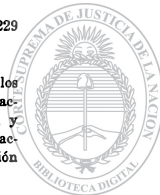
Art. 268. Será reprimido con prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores.

1°. *Concusión: Art. 266.*

Exige: a) abuso de funciones; b) percepción ilegítima; c) saber el concusionario que la exacción es injusta por no corresponder el pago, o no ser éste tan alto como lo exigido.

2°. *Calificada: Art. 267.*

- a) Por amenazar con un daño como embargo o multa;
- b) Por no existir la orden, mandamiento, etc., que se invocan.



3º. *Explícita*: Art. 268.

Se caracteriza por el beneficio que se busca, lo que en los casos 1º y 2º puede no existir. Se diferencia de la substracción, art. 261, en que ésta se refiere a caudales públicos, y aquí se trata de dinero del particular. Además, la substracción se consuma por el hecho de realizarse y para la concusión explícita basta la mera exigencia para que haya delito.

CAPÍTULO X

Prevaricato

Art. 269. Sufrirá multa de mil a cuatro mil pesos e inhabilitación absoluta perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por él mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas. Si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Lo dispuesto en el párrafo 1º de este artículo, será aplicable, en su caso, a los árbitros y arbitradores amigables componedores.

Art. 270. Será reprimido con multa de quinientos a dos mil quinientos pesos e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el juez que decretare prisión preventiva por delito en virtud del cual no proceda o que prolongare la prisión preventiva que, computada en la forma establecida en el artículo 24, hubiere agotado la pena máxima que podría corresponder al procesado por el delito imputado.

Art. 271. Será reprimido con multa de doscientos a dos mil pesos e inhabilitación especial de uno a seis años, el abogado o mandatario judicial que defendiere o representare partes contrarias en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente o que de cualquier otro modo, perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada.

Art. 272. La disposición del artículo anterior será aplicable a los fiscales, asesores y demás funcionarios encargados de emitir su dictamen ante las autoridades.

1º. *Prevaricato*:

A) *De juez, árbitros o amigables componedores*: Art. 269.

Se refiere a las sentencias y a los autos interlocutorios que no pueden ya ser objeto de recurso, y por tanto, revocarse por el superior y que sean contrarios a la ley invocada o que se funden en citas falsas. En el caso de sentencia en esas condiciones de Juez de lo criminal y que sea absolutoria, no hay delito.



No puede procesarse al Juez sin previo juicio político.

B) *De abogado y procurador*: Art. 271.

El patrocinio o la representación simultánea o sucesiva, aunque no cause perjuicio ⁽¹⁾. Cualquier perjuicio que se cause, sea cualquiera el medio; si el delito de por sí es medio de defraudación, por ejemplo, se formará un concurso de delitos.

C) *De ciertos funcionarios judiciales*: Art. 272.

Los que no pueden ejercer de tales en asuntos en que han intervenido como abogados.

2°. *Prisión preventiva*: Art. 270.

Disposición de orden lírico que es fácil burlar ⁽²⁾.

CAPITULO XI

Designación y retardo de justicia

Art. 273. Será reprimido con inhabilitación absoluta de uno a cuatro años, el juez que se negare a juzgar so pretexto de obscuridad, insuficiencia o silencio de la ley. En la misma pena incurrirá el juez que retardare maliciosamente la administración de justicia después de requerido por las partes y de vencidos los términos legales.

Art. 274. El funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución y represión de los delinquentes, será reprimido con inhabilitación absoluta de seis meses a dos años, a menos que pruebe que su omisión provino de un inconveniente insuperable.

1°. *Negativa de fallo*: Art. 273, 1°.

El artículo 16 del Código Civil, autoriza en tales casos la interpretación analógica.

Los 12 y 13 del Código Proc. Crim., en la misma situación vedan la aplicación de analogía, resolviéndose la duda en favor del procesado.

2°. *Justicia retardada*: Art. 273, 2°.

No basta para que haya delito que se hayan vencido los

⁽¹⁾ En nuestro Código Penal Argentino decimos, Tomo III, pág. 237: "La ética profesional se vería más ampliamente tutelada que por prohibiciones fáciles de eludir, mediante la constitución de un verdadero foro, que rodeara a los tribunales como sucede con l'Ordre en Francia y los Colegios de Abogados en otros países. Se habla de colegios que sean algo más que círculos de carácter privado".

⁽²⁾ Véase el modo en la obra antes citada, Tomo III, pág. 236.



términos legales para resolver, sino que debe haber un requerimiento a que lo haga, sobre el cual nada resuelva el juez.

3º. *Obligación descuidada*: Art. 274.

Se refiere a jueces, fiscales y policía que tienen esa obligación: los demás funcionarios, que según el art. 164, del Cód. Proc. Crim., al conocer un delito debe denunciarlo a aquéllos, no tienen por su parte otra obligación.

CAPITULO XII

Falso testimonio

Art. 275. Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callar la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de uno a diez años de reclusión o prisión. En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo de la condena.

Art. 276. La pena del testigo, perito o intérprete falso, cuya declaración fuere prestada mediante cohecho, se agravará con una multa igual al duplo de la cantidad ofrecida o recibida. El sobornante sufrirá la pena del simple testigo falso.

Testigos, peritos e intérpretes son, aunque accidentalmente, funcionarios públicos.

Los elementos de este delito son: 1º Falsedad, es decir, dar por cierto lo que no es, o negar la verdad que se conoce; 2º Intención de burlar a la justicia; las contradicciones o errores pueden deberse a turbación, deficiente memoria, etc., que no entran; 3º Perjuicio posible, aunque no se produzca realmente.

En la causa criminal la intención dolosa puede causar daños irreparables: de ahí su mayor pena.

CAPITULO XIII

Encubrimiento

Art. 277. Será reprimido con prisión de quince días a dos años, el que, sin promesa anterior al delito, cometiere después de su ejecución, alguno de los hechos siguientes:



1º Ocultar al delincuente o facilitar su fuga para substraerlo a la justicia. 2º Procurar la desaparición de los rastros o pruebas del delito. 3º Guardar, esconder, comprar, vender o recibir en prenda o en cambio los efectos substraídos. 4º Negar a la autoridad, sin motivo legítimo, el permiso de penetrar en el domicilio para tomar la persona del delincuente que se encuentre en él. 5º Guardar habitualmente delinquentes u ocultar en la misma forma armas o efectos de los mismos, aunque no tuviere conocimiento determinado de los delitos. 6º Dejar de comunicar a la autoridad las noticias que tuviere acerca de la comisión de algún delito, cuando estuviere obligado a hacerlo por su profesión o empleo.

Art. 278. Estarán exentos de pena por ocultación los consanguíneos y afines en línea ascendente y descendente, los hermanos, los cónyuges y los afines colaterales en segundo grado. En los casos de delitos contra las personas, quedarán también exentos de pena por ocultación, los amigos íntimos y los que hubieren recibido grandes beneficios del responsable del delito, antes de su ejecución.

Art. 279. La exención de pena a que se refiere el artículo anterior, se entenderá siempre que la ocultación no se haya hecho por precio o participando de los efectos del delito.

En general, el encubrimiento requiere: 1º ser posterior al delito; 2º no haber promesa anterior, que determinara complicidad; 3º que de cualquier otro modo no llegue a la participación. Arts. 45 y 46.

Inciso 1º. Del art. 280: Delincuente quiere decir presunto o reo antes del encarcelamiento: el supuesto del art. 281 es, por el contrario, que se trata de un preso.

2º. Encubrimiento objetivo: alejar testigos, alterar o suprimir un indicio, prueba o instrumento del delito.

3º. Sólo en el hurto y el robo, ya que en la extorsión, en la defraudación, en el soborno, no se subtrae, sino que se recibe. No entra en el inciso el caso frecuente de que el ladrón done parte de lo robado; el donatario no es encubridor, aunque deberá restituirlo.

4º. Además del allanamiento judicial hay los casos del artículo 189, Cód. Proc. Crim.

5º. La mera ocultación no es delito: éste requiere habitualidad.

6º. Los profesionales de los arts. 165 y 166, Cód. Proc. Crim., salvo que los ampare el secreto profesional. Los funcionarios públicos, (art. 164), y por ordenanza municipal o edicto policial, algunos negocios...



Exención de pena. Arts. 278 y 279:

a) Los familiares, sea cual sea el delito.

b) En los delitos contra la propiedad tampoco se castiga el enebtrimiento por ocultación personal o real, a los amigos del reo y los grandemente favorecidos por él.

CAPÍTULO XIV

Evasión

Art. 280. Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hallándose legalmente detenido se evadiere por medio de violencia en las personas o fuerza en las cosas.

Art. 281. Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el que favoreciere la evasión de algún detenido o condenado. Y si fuere funcionario público, sufrirá, además, inhabilitación absoluta por triple tiempo. Si la evasión se produjere por negligencia de un funcionario público, éste será reprimido con multa de cien a mil pesos.

Detenido, comprende: a) el que lo es por un agente de la autoridad; b) por cualquier persona que presencia un delito; c) el autor de una contravención o falta; d) el sospechado o acusado mientras dura el sumario de prevención y que el juez mantiene en este estado hasta dictar el auto de prisión preventiva; e) el sujeto de este auto; f) el condenado. Estos últimos casos no son realmente detenciones, pero aquí la ley las engloba todas.

La evasión puede ser: a) con violencia en las personas, física o moral; b) fuerza en las cosas; no la hay en caso de llaves falsas, usar disfraz, sobornar empleados o cualquier otra astucia.

La evasión puede ser de la cárcel, de un coche, de un vagón; no lo es escaparse de los que le llevan preso.

El favorecedor tiene una pena. Si es empleado responsable del reo, tiene otra, pero si se debe la evasión a un mero descuido la pena es de multa.

TITULO XII
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA

CAPITULO I

*Falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador
y documentos de crédito*



Art. 282. Serán reprimidos con reclusión o prisión de tres a quince años, el que falsificare moneda que tenga curso legal en la república y el que la introdujere, expendiere o pusiere en circulación.

Art. 283. Será reprimido con reclusión o prisión de uno a cinco años, el que cercenare o alterare moneda de curso legal y el que introdujere, expendiere o pusiere en circulación moneda cercenada o alterada. Si la alteración consistiere en cambiar el color de la moneda, la pena será de seis meses a tres años de prisión.

Art. 284. Si la moneda falsa, cercenada o alterada se hubiere recibido de buena fe y se expendiere o circulara con conocimiento de la falsedad, cercenamiento o alteración, la pena será de cien a dos mil pesos de multa.

Art. 285. Para los efectos de los artículos anteriores, quedan equiparados a la moneda, los billetes de banco legalmente autorizados, los títulos de la deuda nacional, provincial o municipal y sus cupones, los bonos o libranzas de los tesoros nacional, provinciales o municipales, los títulos, cédulas y acciones al portador emitidos legalmente por los bancos o compañías autorizados para ello, y los chequos.

Art. 286. Si la falsedad, cercenamiento o alteración se cometiere respecto de monedas extranjeras que no tengan curso legal en la república o respecto de billetes de banco, títulos de deuda pública, títulos al portador y documentos de crédito extranjeros, la pena será de uno a cinco años de prisión en el caso del artículo 282, de seis meses a dos años en el del artículo 283 y de cincuenta a quinientos pesos de multa en el del artículo 284.

Art. 287. Serán reprimidos con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación absoluta por doble tiempo, el funcionario público y el director o administrador de un banco o de una compañía que fabricare o emitiera o autorizare la fabricación o emisión de moneda, con título o peso inferiores al de la ley, billetes de banco o cualesquiera títulos, cédulas o acciones al portador, en cantidad superior a la autorizada.

1°. *Moneda legal, oro, plata o papel:* Arts. 282, 283 y 284.

Falsificarla, introducirla, expendirla o circularla. Circularla de buena fe no es delito; hacerlo porque a uno se la han



dado por buena tiene sólo pena de multa. La alteración de la moneda metálica (legal) o su coloramiento, tienen la pena del art. 283.

2º. Efectos equiparados: Art. 285.

Falsificar, introducir, etc.: 1, Billetes de banco legalmente autorizados, (hoy no los hay, los del Banco de la Nación son moneda legal); 2. Títulos de deuda, bonos, libranzas, giros postales, letras de Tesorería; 3: Cédulas hipotecarias; 4: Toda la papelería de las sociedades anónimas, desde las acciones a los debentures; 5: Los cheques, caso distinto del art. 302, en que el cheque es legítimo aunque ilegal.

3º. Monedas extranjeras: Art. 286.

Que no tienen curso legal, sino la fuerza cancelatoria que le atribuye el convenio de partes; son de curso comercial.

4º. Falsificación especial: Art. 287.

Primer supuesto: sólo pueden ser agentes los funcionarios públicos que tengan la responsabilidad de la fabricación, acuñación de moneda o impresión del billete de Banco).

Segundo: pueden serlo tanto los funcionarios públicos como los miembros del Directorio, gerente o administradores de las entidades bancarias o comerciales del texto.

CAPÍTULO II

Falsificación de sellos, timbres y marcas

Art. 288. Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años:

1º El que falsificare sellos oficiales. 2º El que falsificare papel sellado, sellos de correos o telégrafos o cualquiera otra clase de efectos timbrados cuya emisión esté reservada a la autoridad o tenga por objeto el cobro de impuestos. En estos casos, así como en los de los artículos siguientes, se considerará falsificación la impresión fraudulenta del sello verdadero.

Art. 289. Será reprimido con prisión de seis meses a tres años:

1º El que falsificare marcas, contraseñas o firmas de que se use en las oficinas públicas o por funcionarios públicos para contrastar pesos o medidas o identificar cualquier objeto. 2º El que falsificare billetes de empresas, sellos, marcas o contraseñas de fábricas o establecimientos particulares, exigidos por la ley en cierta clase de trabajos o de artículos. 3º El que aplicare marcas o contraseñas de las oficinas públicas o los sellos, marcas o contraseñas de fábricas o establecimientos particulares, a que se refiere el número precedente, a

objetos, obras o artículos distintos de aquellos a que debían ser aplicados.

Art. 200. Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que hiciera desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseñas, a que se refieren los artículos anteriores, el signo que indique haber ya servido o sido inutilizado para el objeto de su expedición. El que a sabiendas usare, hiciera usar o pusiere en venta estos sellos, timbres, etc., inutilizados, será reprimido con multa de cien a cinco mil pesos.

Art. 201. Cuando el culpable de alguno de los delitos comprendidos en los artículos anteriores, fuere funcionario público y cometiere el hecho abusando de su cargo, sufrirá, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena.

1°. Sellos oficiales: Art. 288, 1°.

De juzgado, de diploma universitario, de oficinas, reparticiones. El uso fraudulento tiene el mismo carácter delictuoso que la falsificación.

2°. Papel sellado: Art. 288, 2°.

Nacional, provincial, municipal, tanto para tramitación de asuntos como pago de impuestos y multas.

3°. Sellos, íd.

De correos, las estampillas, tarjetas, fajas, sobres.

4°. Efectos timbrados:

Estampillas, fajas de impuestos internos, boletas, y, en general, todos los valores que emite la Administración para el cobro de impuestos, garantías de análisis, etc.

5°. Marcas y contraseñas:

a) Las que por ejemplo usan los empleados de Aduana para identificar los bultos ya revisados; las que se ponen en las pesas y medidas contrastadas.

b) Las particulares: billetes de teatro, sport, tranvía, ferrocarril, sellos o membretes que se ponen en los papeles o en otros objetos; las marcas que la ley exige; y las que la ley protege, marcas de fábrica o industria.

c) Mala aplicación, tanto de las a) como de las b). En estas últimas, esta penalidad ha derogado la ley de marcas. V. en contra una sentencia en la nota 5 a dicha ley (Parte Tercera).

6°. Falsificación especial: Art. 290.

Primer supuesto: se defrauda a la Administración que no



expende los sellos, marcas, etc., que se necesitaría poner porque el defraudador utiliza los que ya han servido.

Segundo: supone otro agente del delito del primero.

7°. *Funcionario público*: Art. 291.

Tiene doble pena en cuanto el cargo le ha permitido cometer el delito: el mero hecho de tener un empleo ajeno al manejo de sellos y señales no agrava la penalidad que será la de un simple particular.



CAPÍTULO III

Falsificación de documentos en general

Art. 292. El que hiere en todo o en parte un documento falso o adultero uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de seis meses a dos años, si se tratare de un instrumento privado.

Art. 293. Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.

Art. 294. El que suprimiere o destruyere, en todo o en parte, un documento de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en las penas señaladas en los artículos anteriores, en los casos respectivos.

Art. 295. Sufrirá prisión de un mes a un año, el médico que diere por escrito un certificado falso, concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de alguna enfermedad o lesión cuando de ello resulte perjuicio. La pena será de uno a cuatro años, si el falso certificado debiera tener por consecuencia que una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro hospital.

Art. 296. El que hiere uso de un documento o certificado falso o adulterado, será reprimido como si fuere autor de la falsedad.

Art. 297. Para los efectos de este capítulo, quedan equiparados a los instrumentos públicos los testamentos ológrafos o cerrados, las letras de cambio y los títulos de crédito transmisibles por endoso o al portador, no comprendidos en el artículo 283.

Art. 298. Cuando alguno de los delitos previstos en este capítulo, fuere ejecutado por un funcionario público con abuso de sus funciones, el culpable sufrirá, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena.

Art. 292 (1). Puede el instrumento ser falso *materialmente* (en el mismo documento en que se ha escrito lo que no

(1) Véase también aquí las páginas 292-293 de nuestro «Cód. Penal Arg.».

debía escribirse o no se ha escrito lo que debía) o *personalmente* (simulando que una persona comparece o existe o manifiesta algo). Hay una tercera falsedad *ideológica* en que el documento como tal no es falso, pero lo es su contenido: Se trata en el art. 293. Es necesario que haya perjuicio aunque sólo sea posible.

Falsedad en documento público:

Para que haya delito debe haber la intención o conciencia del perjuicio actual o futuro, aunque no haya ánimo de lucro.

Son documentos públicos los del art. 979, Cód. Civ.

La falsedad puede ser: 1º, por firma falsa o alterada; 2º, por suposición de personas; 3º, por falsas declaraciones.

Falsedad en documento privado:

Sólo hay incriminación cuando se hace uso de él. (En la de documento público el mero hecho de falsificación es delito).

El sujeto activo de este delito es el escribano.

Art. 293. El supuesto legal es de un documento que esteriormente no es falso, pero en su contenido hay declaraciones falsas (el escribano da fe de que en su presencia se ha pagado el precio y no es cierto). La simulación no fraudulenta no perjudica: si es fraudulenta tampoco es falsedad ideológica, sino defraudación.

Art. 294. Variedad de la *material*. Requiere posible perjuicio.

Art. 295. Afirmando la existencia de enfermedad o de lesión o su no existencia, o atribuyéndoles falsamente caracteres distintos de los reales.

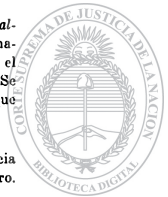
El delito (del médico) se consuma con el uso del certificado por el enfermo supuesto, etc. Este será coautor, salvo el caso del art. siguiente.

Art. 296. No se refiere a los autores o cómplices, sino a los que hacen uso del documento (falsificado por otros y sin su intervención próxima o lejana, consejo, etc.), en provecho propio.

Art. 297. Son tres casos:

a) Testamento, cuando se produce ante el Juez: antes son privados;

b) Si a las letras les faltan algunos de los requisitos de los arts. 598, 599 y 560 del Código de Comercio, son documentos privados;





c) Títulos, en sí privados, pero a los que se protege por la ley.

También en los supuestos b) y c), sólo hay delito con el uso o presentación del documento falsificado.

Art. 298. Entra en él el eclesiástico, que extiende documentos con efectos jurídicos, partidas de bautismo, matrimonio anterior a 1888, etc.

CAPÍTULO IV

Disposiciones comunes a los capítulos precedentes

Art. 299. Sufrirá prisión de un mes a un año, el que fabricare, introducir en el país o conservare en su poder, materias o instrumentos conocidamente destinados a cometer alguna de las falsificaciones legisladas en este título.

El artículo exceptúa las máquinas, elementos químicos, planchas, etc., que si bien pueden servir para falsificar pueden también ser destinados a objetos industriales.

CAPÍTULO V

De los fraudes al comercio y a la industria

Art. 300. Serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años:
1º El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías, fondos públicos o valores, por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado. 2º El que ofreciere fondos públicos o acciones u obligaciones de alguna sociedad o persona jurídica, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas. 3º El fundador, director, administrador o síndico de una sociedad anónima o cooperativa o de otro establecimiento mercantil, que publicare o autorizare un balance o cualquier otro informe falso o incompleto, cualquiera que hubiese sido el propósito perseguido al verificarlo.

Art. 301. Será reprimido con prisión de dos a seis años, el director, gerente o administrador de una sociedad anónima o cooperativa o de una persona jurídica de otra índole, que prestare su concurso o consentimiento a actos contrarios a los estatutos, leyes u ordenanzas que los rijan, a consecuencia de los cuales la persona jurídica o la asociación, quedare imposibilitada de satisfacer sus compromisos o en la necesidad de ser disuelta.



Art. 300:

Inciso 1°: Comprende fondos públicos nacionales, provinciales, y valores en general, moneda fiduciaria o metálica, acciones, debentures, merenderías, cotizadas oficialmente o por sus precios corrientes. Por los siguientes medios:

a) Noticias falsas, enviadas o que se suponen recibidas.

b) Reunión o coalición. *Trusts*. Para éstos no rige ya el artículo, sino la ley 11210, sobre: «*Represión de la especulación y Monopolios*». V. en las leyes agregadas a este Código.

Inciso 2°:

No es defraudación personal, sino oferta indeterminada y públicamente hecha.

Inciso 3°:

Aunque no haya lucro ni perjuicio para nadie.

Art. 301:

El concurso o el consentimiento se entiende que deben ir acompañados del conocimiento de que se trata de actos ilegales.

CAPÍTULO VI

Del pago con cheques sin provisión de fondos

Art. 302. Será reprimido con prisión de uno a seis meses el que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero y siempre que no concurren las circunstancias del artículo 172, un cheque o giro sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto y no abonare el mismo en moneda nacional de curso legal dentro de las 24 horas de haber sido protestado.

El delito consiste en dar o entregar, como pago, préstamo o cualquier concepto, un cheque o un giro contra un Banco sin tener éste fondos del librador o autorización para que gire en descubierto.

El artículo suspende las responsabilidades penales del delito (caso único) hasta las formalidades determinadas que fija.

Según la jurisprudencia de la C. C. C. el pago o el arreglo, siendo posteriores, no borran el delito.

El artículo se aplica sin perjuicio de aplicar también en caso de estufa, el 175.



DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Art. 303. El presente código regirá como ley de la nación seis meses después de su promulgación.

Art. 304. El poder ejecutivo dispondrá la edición oficial del código conjuntamente con la exposición de motivos que lo acompaña. Los gastos que origine la publicación se imputarán a esta ley.

Art. 305. Quedan derogadas las leyes números 49, 1920, 3335, 3900, 3972, 4189, 7029, 9077 y 9143, lo mismo que las demás, en cuanto se opusieran a este código. Las penas de presidio y penitenciaría que establecen las leyes especiales no derogadas por este código, quedan reemplazadas por la de reclusión y las de prisión y arresto por la de prisión.

Art. 303:

Promulgado el 29 de octubre de 1921, empezó a regir el 29 de abril de 1922. Como las leyes se indican por la fecha de su promulgación, no de su entrada en vigor, éste es el Código Penal de 1921, como el anterior es llamado por todo el mundo Código de 1886, por haber sido promulgado en 7 de noviembre del mismo año, aunque sólo empezó a regir el 1º de marzo de 1887.

Art. 304:

Se ha hecho una edición incompleta.

Art. 305:

Las leyes derogadas son:

Nº 49: Crímenes sometidos a los tribunales federales (1863).

» 1920: Código Penal (1880).

» 3335: Relegación de reincidentes (1895).

» 3900: Modificando los arts. 190 y 191 Cód. Penal (1900).

» 3972: Falsificación de moneda (1900).

» 4189: Reformas al Código Penal (1903).

» 7029: Defensa social (1910).

» 9077: Cheques dolosos (1913).

» 9143: Corrupción de mujeres (1913).

Las no derogadas por el Código figuran en el presente libro, (Parte Tercera) y la derogación parcial a que se refiere el presente artículo debe entenderse en lo referente a penalidad, pues subsisten en lo referente a caracteres del respectivo delito, agravación, excepciones y supuestos en general. De modo



que si la ley especial tiene un sistema propio de reincidencia y de autores y cómplices, como la de juegos de azar, es el de éste que se aplicará y no el del Código, a pesar de lo que se dijo en la nota al art. 4° de que el libro I del Código se supone que forma parte o es el preámbulo de toda ley penal especial.

ÍNDICE

LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

	Pág.
Título I. — Aplicación a la ley penal	140
Título II. — De las penas	147
Título III. — Condenación condicional	151
Título IV. — Reparación de perjuicios	152
Título V. — Imputabilidad	153
Título VI. — Tentativa	155
Título VII. — Participación criminal	157
Título VIII. — Reincidencia	157
Título IX. — Concurso de delitos	160
Título X. — Extinción de acciones y penas	162
Título XI. — Del ejercicio de las acciones	164
Título XII. — Significación de conceptos empleados en el Código	165

LIBRO SEGUNDO

DE LOS DELITOS

Título I. — Delitos contra las personas.	
Capítulo I. Delitos contra la vida	166
Capítulo II. Lesiones	168
Capítulo III. — Homicidio o lesiones en riña	170
Capítulo IV. — Duelo	170
Capítulo V. — Abuso de armas	172
Capítulo VI. — Abandono de personas	172
Título II. Delitos contra el honor	173
Título III. Delitos contra la honestidad.	
Capítulo I. Adulterio	175
Capítulo II. Violación y estupro	176
Capítulo III. — Corrupción y ultrajes al pudor	177
Capítulo IV. — Rapto	179
Capítulo V. Disposiciones comunes a los capítulos anteriores	179
Título IV. — Delitos contra el estado civil.	
Capítulo I. Matrimonios ilegales	180
Capítulo II. Supresión y simulación del estado civil	182

Título V. — Delitos contra la libertad.

Capítulo I. — Delitos contra la libertad individual	183
Capítulo II. — Violación de domicilio	185
Capítulo III. — Violación de secretos	186
Capítulo IV. — Delitos contra la libertad de trabajo y asociación	188
Capítulo V. — Delitos contra la libertad de reunión	189
Capítulo VI. — Delitos contra la libertad de la prensa	189

Título VI. — Delitos contra la propiedad.

Capítulo I. — Hurto	190
Capítulo II. — Robo	191
Capítulo III. — Estoración	193
Capítulo IV. — Estafas y otras defraudaciones	194
Capítulo V. — Quebrados y otros deudores punibles	197
Capítulo VI. — Usurpación	199
Capítulo VII. — Daños	200
Capítulo VIII. — Disposiciones generales	201

Título VII. — Delitos contra la seguridad pública.

Capítulo I. — Incendios y otros estragos	202
Capítulo II. — Delitos contra la seguridad de los medios de transporte y de comunicación	203
Capítulo III. — Piratería	205
Capítulo IV. — Delitos contra la salud pública	207

Título VIII. — Delitos contra el orden público.

Capítulo I. — Instigación a cometer delitos	210
Capítulo II. — Asociación ilícita	210
Capítulo III. — Intimidación pública	211
Capítulo IV. — Apología del crimen	211

Título IX. — Delitos contra la seguridad de la Nación.

Capítulo I. — Traición	212
Capítulo II. — Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación	213

Título X. — Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.

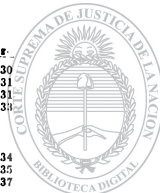
Capítulo I. — Rebelión	215
Capítulo II. — Sedición	216
Capítulo III. — Disposiciones comunes a los capítulos precedentes	217

Título XI. — Delitos contra la administración pública.

Capítulo I. — Atentado y resistencia contra la autoridad	219
Capítulo II. — Desamto	222
Capítulo III. — Usurpación de autoridad, títulos u honores	222
Capítulo IV. — Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos	223
Capítulo V. — Violación de sellos y documentos	224
Capítulo VI. — Cohecho	225
Capítulo VII. — Malversación de caudales públicos	226
Capítulo VIII. — Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas	228
Capítulo IX. — Excepciones ilegales	228
Capítulo X. — Prevaricato	229



	Pág.
Capítulo XI. — Denegación y retardo de justicia	230
Capítulo XII. — Falso testimonio	231
Capítulo XIII. — Encubrimiento	231
Capítulo XIV. — Evasión	233
Título XII. — Delitos contra la fe pública.	
Capítulo I. — Falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito	234
Capítulo II. — Falsificación de sellos, timbres y marcas	235
Capítulo III. — Falsificación de documentos en general	237
Capítulo IV. — Disposiciones comunes a los capítulos precedentes	239
Capítulo V. — De los fraudes al comercio y a la industria ..	239
Capítulo VI. — Del pago con cheques sin provisión de fondos.	240
Disposiciones complementarias	241



I bis. — Agregadas al Código Penal

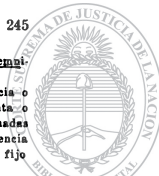
I. N° 11.210. Represión de trusts. — II. N° 11.309. Venta de alcaloides. — III. N° 11.331. Ampliación de la anterior. — IV. N° 11.317. Trabajo de mujeres y niños. — V. N° 9643. Warrants. — VI. N° 9644. Prenda agraria. — VII. N° 10.903. Patronato de menores.

N° 11210 Artículo 1°. Declárase delito todo convencio, pacto,
28 Agosto combinación, amalgama o fusión de capitales, tendientes
1923 a establecer o sostener el monopolio y lucrar con él, en
 uno o más ramas de la producción, del tráfico terrestre,
 fluvial o marítimo, o del comercio interior o exterior, en una locali-
 dad o en varias o en todo el territorio nacional.

Art. 2°. Considéranse actos de monopolio o tendientes a él y punibles por la ley, los que sin importar un progreso técnico ni un progreso económico, aumenten arbitrariamente las propias ganancias de quien o quienes los ejecuten, sin proporción con el capital efectivamente empleado y los que dificulten o se propongan dificultar a otras personas vivientes o jurídicas la libre concurrencia en la producción o en el comercio exterior y especialmente:

a) La destrucción intencional de productos en cualquier forma y en cualquier grado de su elaboración o producción, por productores, empresarios o comerciantes, con el propósito de determinar el alza de los precios y sin que sus autores puedan ampararse en disposiciones gubernativas que la autoricen;

b) El abandono de cultivos o plantaciones existentes, el paro de fábricas, usinas, canteras, minas o cualquier otro establecimiento de pro-



ducción, cuando ese abandono o paro sean determinados por indemnizaciones pagadas a los propietarios;

c) Los convenios para repartirse una localidad, región, provincia o cualquier parte del territorio como mercados exclusivos de venta o compra para determinados productos y en beneficio de determinadas personas o sociedades con el propósito de suprimir la competencia y producir el alza o la baja de los precios o imponer un precio fijo de compra o venta;

d) El acaparamiento, sustracción al consumo en cualquier forma, o convenio para no vender, con el propósito de determinar el alza de los precios de artículos de primera necesidad destinados a la alimentación, vestidos, vivienda, alumbrado y calefacción, cuya enumeración hará por decreto el Poder Ejecutivo al reglamentar la presente ley;

e) Los convenios o pactos para limitar la producción o elaboración de uno o varios artículos con el propósito que se expresa en el artículo 1º de la presente ley;

f) La venta de cosas o la prestación de servicios deliberada y sostenida por debajo del precio de costo, no tratándose de artículos determinados o en liquidación siempre que tenga por objeto impedir la libre concurrencia;

g) Los convenios que exijan del comprador no comprar de otro vendedor; *mayorista* *no compra* *no compra*

h) Los convenios que impongan al revendedor un precio determinado de reventa;

i) Que la misma persona sea director de diferentes compañías o sociedades, o administrador o gerente de una y director de otra u otras del mismo ramo, cuando esta vinculación pueda conducir al monopolio o a la restricción de la competencia;

j) Toda garantía directa o indirecta que presten industriales u obreros a comerciantes por mercaderías suministradas a obreros dependientes de aquéllos.

Art. 3º. Los que violen lo dispuesto por los artículos 1º y 2º de esta ley y los que tomen parte en los actos que ella prohíbe en su carácter de banqueros, serán penados con multa de 2.000 a 100.000 \$ m/n. o en su defecto con prisión de uno a tres años. En caso de reincidencia se aplicará una y otra pena conjuntamente.

Art. 4º. En los casos de violaciones a lo dispuesto en el artículo 2º, se considerará realizado el delito con circunstancias agravantes, a los fines de la penalidad establecida en el artículo anterior.

Art. 5º. Cuando los que violen lo dispuesto por esta ley sean sociedades comerciales o personas jurídicas, los directores, administradores, gerentes o miembros de la razón social que hayan intervenido en los actos considerados punibles, serán personalmente responsables. Cuando se realizaren convenios o combinaciones de cualquier naturaleza con el propósito de producir actos declarados punibles por esta ley, todos los que intervengan en esos convenios o combinaciones, ac-

no se lea
delictos, uno de



Como: debe ser de lo mismo

rán personalmente responsables de las violaciones que se produzcan, aun cuando no tomaren parte especialmente en éstas.

Art. 6°. En caso de reincidencia ~~de una sociedad anónima o persona jurídica, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3° para los reincidentes, la violación entrañará la pérdida de la personería jurídica y la anulación de las prerrogativas o concesiones que se le hubieren otorgado.~~

Art. 7°. Los tribunales deberán decretar al mismo tiempo que la prisión preventiva de los procesados, el embargo de las mercaderías y demás valores comprometidos en los actos de violación de esta ley, los cuales quedarán afectados a la multa y demás consecuencias de los pleitos o indemnizaciones a que hubiere lugar.

Art. 8°. Desde la promulgación de la presente ley, en el territorio de la República, será obligatorio para los comerciantes o industriales que determine por decreto el Poder Ejecutivo, comunicar al Ministerio de Agricultura, en la forma que aquél establezca, la existencia en su poder de los productos a que se refiere el inciso d) del artículo segundo. Si no lo hicieran incurrirán en una multa de 1.000 a 5.000 pesos m/n., computable por prisión, de acuerdo con lo dispuesto por el Código Penal. Esta obligación se extiende a las empresas ferroviarias y a todas las que se ocupen de la guarda de esos artículos.

Art. 9°. El producido de las multas cobradas, deberá destinarse al Consejo Nacional o Consejos Provinciales de Educación.

Art. 10. Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley, la que se tendrá por incorporada al Código Penal.

1. *Incorporación de la ley 11.210* (1). Fué esta ley la primera de carácter penal que se dictó después de entrar en vigor el nuevo Código. En ella se la declara incorporada a éste.

2. *Primer supuesto de la ley*. En su primer artículo se declara delictuoso todo pacto, convenio, etc., tendiente a establecer el monopolio en todos los ramos de la producción, tráfico y comercio.

3. *Otros supuestos*. En su segundo artículo prevé la ley actos de monopolio más graves por lo vasto de su alcance o por el mayor perjuicio. Esto lo hace en un primer apartado que da el concepto general y en diez incisos que lo ejemplifican.

4. *Penalidad*. Es la misma para los dos artículos, pero con cierta falta de técnica jurídica se establece (art. 4°), que si se trata de violaciones del artículo 2° «se considerará rea-

(1) De nuestro *Código Rural Argentino*, tomo III, pág. 333.



lizado el delito con circunstancias agravantes a los fines de dicha penalidad». ¿Es que en los casos del artículo primero no habrá agravación de pena si hay agravantes? Y si estas mismas concurren en los casos del artículo 2º, ¿cómo podrán pesar ellas en la penalidad ya de por sí agravada?

La pena es de multa — 2.000 a 100.000 pesos — y en su defecto prisión que es el sistema del Código, art. 21, sólo que en este último la prisión subsidiaria no puede exceder de año y medio cuando aquí ya la ley señala de uno a tres años.

En caso de reincidencia se impondrán las dos penas, pudiendo el Juez señalar tres años como subsidiaria de una y otros tres como pena complementaria de la primera.

Lo demás del artículo 21, Cód. Pen., ejecución de bienes, sueldos, etc., y pago por cuotas, no hay motivo para que no rija en el caso.

5. *Sujeto activo.* Lo es todo el que infrinja los dos primeros artículos y también los banqueros que financien las operaciones, los que tendrán carácter de autores, aunque su intervención sea la de cómplices, art. 46. En la misma responsabilidad incurrirán los que intervengan en esos convenios u operaciones.

Naturalmente no habrá delito para el que intervenga, principal o secundariamente, sin el propósito de producir actos punibles, es decir, sin el elemento intencional que es uno de los dos que forman el delito: el material viene constituido por el convenio, pacto, etc., consistiendo la consumación del delito en el acto de convenirse, pactarse, etc., y aunque no se consiga el monopolio.

6. *Personas jurídicas, sociedades comerciales.* La responsabilidad es personal: el delito, aunque otra cosa diga el artículo 5º, no lo pueden cometer las personas jurídicas ni las sociedades comerciales en general, ni las anónimas en particular, pero sus directores, administradores, gerentes o miembros de la razón social (en las colectivas, no los comanditarios), tendrán la responsabilidad penal de la ley, como dice el mismo artículo.

7. *Disposiciones no penales.* Las del artículo 7º, prisión preventiva, embargo, etc., son de derecho procesal y por cierto



superfluas. Por su carácter sólo serán aplicables en la Capital y Territorios y en lo Federal.

La del artículo 6º, que para el caso de reincidencia de una sociedad anónima o persona jurídica dispone la pérdida de la personería y la anulación de sus prerrogativas o concesiones, es de derecho administrativo y obligará al P. E. a dictar el respectivo decreto sin el cual es dudoso que la sentencia sólo produzca dichos efectos. Lo más probable es que el Juez se limite a declarar que hay reincidencia y que después de imponer la doble pena del artículo 3º, ordene ponerlo en conocimiento del P. E.

También es de orden administrativo el artículo 9º, destino de las multas.

8. *Nuevo delito.* El artículo 8º impone de 1.000 a 5.000 pesos al comerciante o industrial a quien el Ministerio de Agricultura le exija que denuncie la existencia que tenga de artículos de primera necesidad, destinados a la alimentación, vestidos, vivienda, alumbrado y calefacción, y no cumpla con esta obligación.

Como la multa es «computable por prisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 del Código Penal», no podrá cobrarse administrativamente, sino judicialmente y después de establecer el Juez que se ha producido la infracción.

II.—Represión de la venta de alcaloides

Nº 11309
2 Julio
1928

Art. 1º. Modificar el artículo 204 del Código Penal en la siguiente forma: «Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que, estando autorizado para la venta, venda o entregue o suministre alcaloides o narcóticos sin receta médica.

En la misma responsabilidad incurren el médico que receta y el farmacéutico o empleado que los despachen en dosis mayores que las que señala la Farmacopea.

En caso de que la venta o entrega o suministro sea hecho por persona no autorizada para la venta de sustancias medicinales, la pena será de tres meses a un año de prisión.

Será reprimido con una multa de 500 a 2.000 pesos el que, estando autorizado para la venta de sustancias medicinales, las suministrare en especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta médica o diversa de la declarada o convenida.



En cualquiera de los casos previstos por este artículo, la pena será de tres a quince meses de prisión, si resultare la enfermedad o muerte de una persona ».

Art. 2º. Agréguese como segunda parte del artículo 205 del mismo Código: « Serán reprimidos con la misma pena los que introduzcan clandestinamente, en el país, alcaloides o narcóticos, y los productos introducidos en estas condiciones serán decomisados ».

III.—Ampliación de la ley sobre la represión del uso de alcaloides

Nº 11331 Art. 1º. Agréguese como párrafo tercero del artículo 1º
29 Julio de la ley Nº 11309, el que sigue:
1926

« Los que no estando autorizados para la venta, tengan en su poder las drogas a que se refiere esta ley y que no justifiquen la razón legítima de su posesión o tenencia, sufrirán la misma pena ».

1. (De nuestro *Código Penal Argentino* T. III, pág. 56).

“Tal como estaba en la ley 11.179 votada y promulgada como Código Penal, el artículo 204 respondía a un fin general: proteger la salud pública contra los malos profesionales.

Pero a los dos años de vigente aquella ley y de aplicarse dicha disposición, se echó de ver: 1º Que algunas substancias medicinales, estupefacientes y narcóticas seguían haciendo estragos, sobre todo en la capital federal, y 2º Que proveían de ellas a los viciosos, no sólo los profesionales, sino otras personas. Con muy buen acuerdo se creyó que esto era un nuevo delito y que debían las nuevas disposiciones figurar en el Código siguiendo el plan de prescindir del sistema de leyes especiales. De ahí la ley 11.309 que en general castiga el expendio de esas drogas, sean o no profesionales los que lo realizan, dejando del art. 204 primitivo tan solo el segundo apartado que prevé el caso de enfermedad o muerte de la víctima del expendio.

El artículo — que como veremos luego, ha sido ampliado — tal como lo estableció la ley 11.309 plantea los siguientes supuestos:

a) El farmacéutico o su empleado (se alude seguramente



al dependiente llamado idóneo) que expendá alcaloides o narcóticos sin receta. Prisión de seis meses a dos años.

b) El médico que recete alcaloides o narcóticos en dosis mayores que "las señaladas por la Farmacopea". Esto requerirá en cada caso una pericia médica o un informe del Consejo N. de Higiene.

c) El farmacéutico que despache la anterior receta; tanto éste como el anterior tienen la pena del supuesto a).

d) Expendio de alcaloides por personas no autorizadas para la venta de substancias medicinales. Los autorizados son, no sólo los farmacéuticos, sino los introductores de substancias medicinales, pero el sentido de la ley es que éstos no están autorizados para vender más que a los farmacéuticos, que son los que se ponen en relación con el consumidor y contra los cuales están las sanciones de los casos a) y c). La pena es de tres meses a un año de prisión.

e) Reproduce el antiguo artículo 104 y se refiere al autorizado para vender y que comete el delito de defraudación del art. 173-1° que allí se contempla bajo el aspecto del lucro-perjuicio de los sujetos activo y pasivo del delito y aquí bajo el del daño hecho a la salud pública. La pena es de multa de \$ 500 a 2.000 m/n. como rezaba el art. 204 viejo. En todos estos supuestos las penas son fuertemente agravadas en caso de resultar enfermedad o muerte.

Bien pronto se echó de ver que la ley no daba los resultados que de ella se esperaban. Y así aprobó la Cámara de Diputados un proyecto de ley que decía:

Agréguese como párrafo 3° del art. 1° de la ley n° 11.309 el que sigue: "Los que tengan en su poder las drogas comprendidas en el régimen de esta ley y que no justifiquen la razón legítima de su posesión o tenencia, sufrirán la misma pena".

Llegado a la otra Cámara el proyecto, su Comisión de Códigos observó justamente (de su Informe y del discurso de su presidente Dr. Melo):

El proyecto venido de la otra Cámara iba más lejos en sus términos, de lo que en realidad exigían sus antecedentes. Por dicho proyecto pareciera que se penaba a todos los que tuvieran en su poder drogas comprendidas en el régimen de la ley, siendo así que ese no era el móvil determinante; y la misma ley indica quiénes podrían tener esas



drogas, por estar autorizados, como son, por ejemplo, los farmacéuticos. Lo único que pena en este caso, es la expedición de las drogas sin receta médica.

Con la sanción de diputados podría procesarse a cualquier persona autorizada a vender tales medicamentos, y entrar en investigaciones sobre situaciones distintas de las que señala la Policía.

Eso no es lo que quiere la ley, ella se propone que no se venda sino con receta médica. Hay en el Código de Comercio una disposición que niega a los jueces facultad para hacer pesquisas generales con relación a los actos de los comerciantes. Y en la forma que viene el artículo, cabrían esas pesquisas.

En consecuencia, el Senado votó una nueva redacción que aceptada sin discusión por la Cámara de Diputados, fué promulgada como ley en 29 de julio del corriente año 1926, y registrada bajo el N° 11.331 y constituye el último apartado del artículo presente.

Obsérvese que por ella no se agrava, por razón de muerte o lesiones, la pena del que a la vez que sujeto activo del delito es su propio sujeto pasivo. No puede ser punible el acto de lesionarse uno a sí mismo, como no lo es el de quitarse la vida. Pero así como en el suicidio se castiga al auxiliador o instigador, en el caso presente éstos vienen comprendidos en los términos generales del delito, quedando naturalmente excluidos los instigadores morales por la imposibilidad de probarse tal instigación a no ser por un acto material, y éste ya está previsto en los términos de los párrafos primero y segundo del actual artículo 204, uno de cuyos supuestos es la entrega, sin distinguir si es a título oneroso o gratuito.

Luego vino la ley 11.309 que en su artículo 2° dispuso que ella formara el segundo párrafo del art. 205 del Código Penal.

No se ve la congruencia que hay en completar un artículo referente a epidemias con una disposición sobre alcaloides y narcóticos cuya difusión sólo metafóricamente puede llamarse epidemia. El inciso debió haberse incluido en el artículo 204.

Además, el primer inciso es inconstitucional.

Las penas según la Constitución sólo se imponen por infracciones legales y no lo son las que prevé el artículo que no se refiere a ley alguna, sino a "medidas" que pueden adoptar las autoridades competentes, es decir, no sólo el P. E., sino



las municipales, policiales y aun las técnicas como el Consejo N. de Higiene o cuerpos provinciales análogos.

Mientras la Corte no lo declare inconstitucional, el inciso se aplicará en todos los casos de cuarentena, desinfección domiciliaria, denuncia médica forzosa, hospitalización, etc.

Obsérvese que la ley n° 11.309 pena la introducción de estos venenos cuando se hace clandestinamente. Cuando la efectúe declaradamente un comerciante no hay peligro porque supone (!) que podrá controlarse administrativamente su distribución hasta llegar a los que están autorizados para expender esas substancias, pero con la sanción de las penas del art. 204.

El legislador ha supuesto que los introductores no clandestinos serán siempre firmas respetables y responsables. Supone también que un gramo de cocaína que entre por la Aduana será seguido con prolijidad por la Administración pública para que no se extravíe por el camino y llegue hasta la farmacia. Parece todo esto demasiado optimista. »

IV.—Trabajo de las mujeres y niños

CAPÍTULO I

Trabajo de los niños

N° 11317 Art. 1°. Queda prohibido en todo el territorio de la
30 Octubre República ocupar a menores de 12 años de edad en cual-
1924 quier clase de trabajo por cuenta ajena incluso los tra-
 bajos rurales. Tampoco puede ocuparse a mayores de esta
edad que comprendidos en la edad escolar no hayan completado su
instrucción obligatoria. Sin embargo, el Ministerio de menores res-
pectivo podrá autorizar el trabajo de éstos cuando lo considere indis-
pensable para la subsistencia de los mismos o de los padres o herma-
nos, siempre que se llene en forma satisfactoria el mínimo de instruc-
ción escolar exigida por la ley.

Art. 2°. Ningún menor de 14 años podrá ser ocupado en caso alguno
en el servicio doméstico ni en explotaciones o empresas industriales
o comerciales, sean privadas o públicas, de lucro o de beneficencia, a
excepción de aquellas en que sólo trabajan los miembros de la misma
familia.

Art. 3°. La prohibición de los artículos anteriores no se refiere
al trabajo de los niños con propósitos educativos, en escuelas recono-
cidas al efecto por la autoridad escolar competente.



Art. 4°. Ningún varón menor de 14 años ni mujer soltera menor de 18 años podrá ejercer, por cuenta propia o ajena, profesión alguna que se ejerza en calles, plazas o sitios públicos.

CAPÍTULO II

Ocupación de mujeres y de menores de 18 años

Art. 5°. No podrá ocuparse en la industria y comercio a mujeres mayores de 18 años durante más de 8 horas diarias o 48 horas por semana, ni a menores de 18 años durante más de 6 horas diarias o 36 por semana.

Art. 6°. No se podrá ocupar a mujeres ni a menores de 18 años en trabajo nocturno, entendiéndose por tal el comprendido entre la hora 20 hasta las 7 del día siguiente en invierno y las 6 en verano, salvo en los servicios de enfermeras y doméstico. La disposición anterior no se aplicará a las empresas de espectáculos públicos nocturnos, en los que podrán trabajar mujeres mayores de 18 años.

Art. 7°. Las mujeres y los menores de 18 años que trabajen en horas de la mañana y de la tarde, dispondrán de un descanso de dos horas al medio día.

Art. 8°. Queda prohibido encargar la ejecución a domicilio de algún trabajo a mujeres y a menores de 18 años, ocupados en algún local u otra dependencia de la empresa.

Art. 9°. Queda prohibido ocupar mujeres y a menores de 18 años en industrias o tareas peligrosas e insalubres. La reglamentación determinará las industrias que esta prohibición comprende en general.

Art. 10. La prohibición del artículo anterior se refiere particularmente a las siguientes: a) La destilación de alcohol y la fabricación o mezcla de licores. b) La fabricación de albayalde, minio y cualquier otras materias colorante tóxicas, así como la manipulación de pinturas, esmaltes o barnices que contengan sales de plomo o arsénico. c) La fabricación, manipulación o elaboración de explosivos, materias inflamables o cáusticas, o el trabajo en locales o sitios en que se fabriquen, elaboren o manipulen o estén depositados explosivos, materias inflamables o cáusticas en cantidades que signifiquen peligro de accidente. d) La talla y pulimento de vidrio, el pulimento de metales con esmeril y el trabajo en cualquier local o sitio en que ocurra habitualmente desprendimiento de polvos o de vapores irritantes o tóxicos.

Art. 11. Queda prohibido ocupar a mujeres y a menores de 18 años: a) En carga y descarga de navios. b) En canteras o trabajos subterráneos. c) En la carga o descarga por medio de grúas o cabrias. d) Como maquinistas o foguistas. e) En el engrasado y limpieza de maquinaria en movimiento. f) En el manejo de correas. g) En sierras circulares y otros mecanismos peligrosos. h) En la fundición de metales y en la fusión y en el sopleo bucal de vidrio. i) En el



transporte de materias incandescentes. j) En el expendio de bebidas alcohólicas destiladas y fermentadas y en cualquier local o dependencia en que se expendan.

Art. 12. En caso de accidente del trabajo o de enfermedad de una mujer o menor, si se comprueba ser su causa alguna tarea de las prohibidas a su respecto por la presente ley o efectuado en condiciones que signifiquen infracción de sus requisitos, o el encontrarse la mujer o el menor en un sitio de trabajo en el cual es ilícita su presencia, se considerará por ese sólo hecho el accidente o la enfermedad como resultante de culpa del patrón.

CAPITULO III

Protección de la maternidad

Art. 13. Queda prohibido en los establecimientos industriales o comerciales y sus dependencias, sean urbanos o rurales, públicos o particulares, excepto aquellos en que sólo trabajen miembros de la familia del patrón, ocupar a mujeres durante el período de seis semanas posteriores al parto. Las mismas deberán abandonar el trabajo previa presentación de un certificado médico en el que conste que el parto se producirá probablemente en un plazo de seis semanas. No podrá despedirse a ninguna mujer con motivo de embarazo y deberá conservarse el puesto a la que permanezca ausente de su trabajo en virtud de las disposiciones anteriores.

Art. 14. En caso de que una mujer permanezca ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de enfermedad, que según certificado médico deba su origen al embarazo o al parto y la incapacite para reanudarlo, no se podrá declararla cesante con ese motivo.

Art. 15. Toda madre de lactante podrá disponer de un intervalo de 15 minutos cada tres horas, para amamantar a su hijo, salvo el caso en que un certificado médico establezca un intervalo menor. En los establecimientos que ocupen el número mínimo de mujeres que determine la reglamentación, deberán habilitarse salas maternales adecuadas para los niños menores de dos años, donde éstos quedarán en custodia durante el tiempo de ocupación de las madres.

CAPITULO IV

Disposiciones de aplicación

Art. 16. En los establecimientos industriales y comerciales que ocupen a menores de 18 años, deberán archivarse clasificados sus certificados de edad del registro civil o documentos equivalentes, llevándose, además, un registro general de dichos menores, con los datos que prescriba la reglamentación.



Art. 17. Las oficinas del Registro Civil deberán proveer gratuitamente de una libreta a todos los menores a que se refiere esta ley, en la que constará su nombre y apellido, edad, ocupación y horario de trabajo, así como el nombre y apellido, profesión y domicilio de sus padres, tutores o encargados. En la misma libreta se hará constar por la autoridad correspondiente, si el menor ha cumplido la obligación escolar.

Art. 18. Todo el que ocupe a menores de 18 años, está obligado a anotar en la libreta a que se refiere el artículo anterior, las condiciones del trabajo a que los destina y el sueldo o salario. Una planilla con estos datos deberá ser enviada a la autoridad de aplicación. Queda prohibida toda otra anotación y especialmente cualquiera que fuese perjudicial al portador, por signos o palabras, bajo pena de daños y perjuicios.

Art. 18. Son autoridades de aplicación de la presente ley, en la Capital Federal, el Departamento Nacional del Trabajo, y en las provincias y en los territorios nacionales, las autoridades que determine la respectiva reglamentación. La policía cooperará con dichas autoridades en la verificación de las infracciones.

Art. 20. Los representantes de la autoridad de aplicación, tienen facultad para penetrar en todos los establecimientos a que se refiere esta ley durante las horas de trabajo. Fuera de estas horas se requerirá orden judicial de allanamiento.

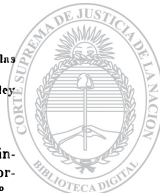
CAPÍTULO V

Disposiciones penales

Art. 21. Las infracciones a la presente ley, serán penadas con multa de 50 a 1.000 \$ m/n., que se doblará en caso de reincidencia o en su defecto prisión equivalente, de acuerdo con el Código Penal. Se contarán tantas infracciones como personas ocupadas ilegalmente o mujeres privadas de su ocupación en infracción de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de esta ley. En este último caso, el producido de la multa será entregado inmediatamente a la mujer perjudicada.

Art. 22. Será reprimido con multa de 1.000 a 5.000 \$ m/n. o en su defecto, prisión equivalente, de acuerdo con el Código Penal, todo el que haga ejecutar con mujeres o menores de 18 años, ejercicios peligrosos de fuerza o de dislocación. Sufrirá igual pena el que haga trabajar en espectáculos públicos nocturnos a un menor de 16 años, así como los padres o tutores que lucren con su trabajo. En caso de reincidencia en alguna de estas infracciones, se aplicará la pena pecuniaria máxima o prisión de seis meses a dos años.

Art. 23. Sin perjuicio de las facultades de la autoridad de aplicación y del ministerio de menores, tienen personería para denunciar y acusar criminalmente a los infractores, además de las personas dam-



nificadas, las entidades de protección a las mujeres y menores y las asociaciones obreras por medio de sus comisiones directivas.

Art. 24. Quedan incorporadas las disposiciones de la presente ley a los Códigos Civil y Penal de la Nación.

Art. 25. Dérógase la ley N° 5291.

1. Esta es la última de las leyes cuyo texto las da por incorporadas al Código Penal. Esta se declara también incorporada al Código Civil (art. 24) V. en Parte Tercera, Cap. 3°.

2. La ley que deroga es la de 30 de Setiembre de 1907 reglamentando también el trabajo de los niños menores de 16 años y de las mujeres que el decreto del P. E. de 20 de Febrero de 1908 puso en práctica sin gran éxito.

3. Sobre el artículo 21 recayó el siguiente fallo de la C. C. C., confirmado en el auto del Juez en lo Correccional Dr. Ortega que declaró parte en el proceso al Departamento N. del Trabajo y al fiscal: éste apeló.

La ley 11.317 no establece cuál es el procedimiento que debe seguirse en la aplicación de las sanciones penales que establece. De acuerdo con el art. 24 de la citada ley ella forma parte del Cód. Penal en lo pertinente, y por lo tanto, al aplicarse sus sanciones es el Código Penal el que se aplica. Dada la penalidad fijada por el art. 21 de la citada ley, para la infracción que se imputa al acusado, es la justicia en lo correccional la competente (art. 28, Cód. de Ptos.) y el procedimiento que debe seguirse es el establecido para tales juicios. Por lo tanto la intervención del señor Agente Fiscal es esencial de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 118 del Cód. de Ptos. 117 y 118 de la ley 1893, pues las disposiciones de los arts. 19 y 23 de ley 11.317, que atribuyen la acción penal a otras entidades no importan convertir sus infracciones en acción exclusivamente privada.

4. La substitución de la multa por prisión se hará con arreglo al art. 21. En puridad mejor que multa es indemnización, pues su importe es para la mujer perjudicada.

V. — Warrants

N° 9643
15 Octubre
1914

Artículo 1°. Las operaciones de crédito mobiliario sobre frutos o productos agrícolas, ganaderos, forestales, mineros o de manufacturas nacionales, depositados en almacenes fiscales o de terceros, serán hechas por medio de « certificados de depósitos » y « warrants » expedidos de acuerdo con



las disposiciones de esta ley y en la forma que reglamente el Poder Ejecutivo.

Art. 2º. Los almacenes o depósitos particulares sólo podrán emitir «certificados de depósito» y «warrants», a los efectos de esta ley, previa autorización del Poder Ejecutivo publicada en el «Boletín Oficial», la cual no podrá ser otorgada sino después de haberse comprobado:

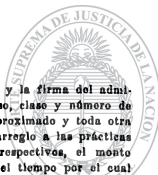
a) El capital con que se establecen. b) Las condiciones de seguridad, previsiones contra incendios y causas de deterioro que ofrezcan las construcciones y el seguro de las mismas. c) La forma de administración y sistema de vigilancia, clasificación y limpieza que se adoptará en los almacenes. d) Las tarifas máximas que se cobrarán por depósito y demás operaciones anexas, como seguros, elevación de cereales, limpieza y desecación de granos. e) Las obligaciones de la administración respecto a la entrada y salida de mercaderías o productos, su conservación y responsabilidad en los casos de pérdida y averías. f) Los nombres y domicilios de los representantes de la sociedad o empresa de depósito. g) El Poder Ejecutivo podrá fijar las garantías que estime convenientes para asegurar por parte de los depositantes autorizados a expedir «certificados de depósito» y «warrants», el cumplimiento de sus obligaciones; cuando se trate de garantía de valores, ella será hecha efectiva con títulos nacionales de renta, depositados en el Banco de la Nación y que representen hasta el 10 por ciento del capital empleado como máximo.

Art. 3º. Es absolutamente prohibido a las empresas de depósito a que se refiere la presente ley, efectuar operaciones de compraventa de frutos y de productos de la misma naturaleza de aquellos a que se refieren los «certificados de depósito» o «warrants» que emitan. El Poder Ejecutivo no otorgará la autorización exigida por el artículo anterior a las que se hallen en tales condiciones o retirará la misma en su caso, si la operación prohibida se efectúa con posterioridad a dicha autorización. Las empresas emisoras de «warrants» que quieran descontar o negociar con esta clase de papeles, sólo podrán hacerlo con autorización del Poder Ejecutivo y en las condiciones que el mismo fijare.

Art. 4º. Queda prohibido almacenar en un mismo local o en locales contiguos mercaderías susceptibles de alterarse recíprocamente.

Art. 5º. Los depositarios asegurarán contra incendio y por cuenta de los depositantes, si éstos no lo hubiesen hecho, las mercaderías recibidas, con sujeción a las condiciones y en la forma que determine el decreto reglamentario, el que, a la vez, especificará las constancias relativas al seguro, que habrán de inscribirse o agregarse al «certificado de depósito» y al «warrant».

Art. 6º. Contra la entrega de los frutos o productos depositados, la administración del respectivo almacén, expedirá a la orden del depositante, un «certificado de depósito» y «warrant» referente a aquéllos, con expresión de la fecha de expedición, el nombre y domi-



cillo del depositante, la designación del almacén y la firma del administrador, la clase de producto, su cantidad, peso, clase y número de envases, calidad y estado del mismo, su valor aproximado y toda otra indicación que sirva para individualizarlo, con arreglo a las prácticas establecidas en el comercio de los productos respectivos, el monto del seguro, nombre y domicilio del asegurador, el tiempo por el cual se efectúa el depósito y el monto del almacenaje; todo ello en formularios de tipo uniforme que el Poder Ejecutivo reglamentará, dejando consignadas las mismas circunstancias en los talonarios y en los libros rubricados especiales que deberá llevar, a fin de registrar diariamente y por orden, todas las operaciones en que intervenga.

Art. 7°. Para que puedan emitirse «certificados de depósito» y «warrants» por frutos o productos depositados, es menester:

1) Que dichos efectos estén asegurados, ya sea directamente por el dueño o por intermedio de las empresas emisoras, de acuerdo al artículo 2°, inciso d). 2) Que su valor no sea inferior a quinientos pesos moneda nacional. 3) Que estén libres de todo gravamen o embargo judicial notificado al administrador del depósito, sin cuyo requisito no reputarán no existentes.

Art. 8°. El warrant será siempre nominativo. El primer endoso del certificado de depósito, o en su caso del «warrant» se extenderá al dorso del respectivo documento debiendo para su validez, ser registrado en los libros de la empresa emisora dentro del término de seis días. Los endosos subsiguientes, cuyo registro no es obligatorio, podrán hacerse en blanco o a continuación del primero.

Art. 9°. El efecto del endoso, tratándose de un «certificado de depósito», es la transmisión de la propiedad de las cosas a que se refiere, con los gravámenes que tuvieren en caso de existir «warrant» negociado, y tratándose del «warrant», de los derechos creditorios del mismo.

Art. 10. El endoso deberá contener la fecha, nombre, domicilio y firma del endosante y endosatario, cantidad prestada, fecha del vencimiento y lugar convenido para el pago, y todos los que firmen un certificado de depósito o warrant son solidariamente responsables. El pago hecho al prestamista del importe del crédito, extingue junto con éste, su responsabilidad, quedando desligado de toda obligación en caso de negociarse nuevamente el warrant con un tercero. En el libro a que se refiere el artículo 6° deberán registrarse las firmas de los depositantes y en cuanto fuere posible, la de los nuevos endosantes de certificados de depósito o de warrants.

Art. 11. Negociado el warrant, se anotará al dorso del certificado de depósito respectivo, el monto del crédito, nombre y domicilio del prestamista, fecha de vencimiento y lugar del pago, debiendo estos mismos datos consignarse en el libro de Registro de la empresa emisora, al anotarse la primera transferencia del warrant, de acuerdo al artículo 8°.

Art. 12. Todo adquirente de un «certificado de depósito» o tenen-



dor del «warrant», tendrá derecho a examinar los efectos depositados y detallados en dichos documentos, pudiendo retirar muestras de los mismos, si se prestan a ello por su naturaleza, en la proporción y forma que determine el decreto reglamentario.

Art. 13. Los efectos depositados, por los cuales hayan sido expedidos «warrants», no serán entregados sin la presentación simultánea del «certificado de depósito» y del «warrant». En caso de haber sido registrada la transferencia del warrant, éste debe ser presentado con la constancia de la cancelación del crédito.

Art. 14. El propietario de un «certificado de depósito» con «warrant», tiene derecho a pedir que el depósito se consigne por bultos o lotos separados y que por cada lote se le den nuevos certificados, con los warrants respectivos, en sustitución del certificado y warrant anterior, que será anulado, no pudiendo ser cada uno de valor menor de quinientos pesos nacionales.

Art. 15. El propietario del «certificado de depósito», separado del «warrant» respectivo negociado, podrá antes del vencimiento del préstamo, pagar el importe del «warrant». Si el acreedor de éste no fuese conocido, o aléandolo, no estuviere de acuerdo con el dador sobre las condiciones en que tendrá lugar la anticipación del pago, el dueño del certificado consignará judicialmente la suma adeudada. Las mercaderías depositadas serán entregadas a la presentación de la orden del Juez ante quien se hubiere hecho la consignación, previo pago del almacenaje o impuesto del artículo 25 que adeudaren, conforme a la disposición del artículo 27. El acreedor del warrant tendrá derecho a exigir, a su vencimiento, la entrega del valor consignado con la sola presentación de aquél.

Art. 16. Si el warrant no fuere pagado al vencimiento de la obligación, el acreedor tendrá la acción que reglamenta esta ley para el cobro de su crédito y para hacer efectivo su privilegio sobre los efectos a que se refiere el warrant y, en su caso, sobre las sumas del seguro.

Art. 17. El acreedor del warrant deberá pedir, dentro de diez días de la fecha de su vencimiento, la venta en público remate de la mercadería afectada al mismo; cuando no hubiere endoso, podrá usar de este derecho dentro del mismo término. El pedido de venta se hará ante el administrador del depósito quien, una vez comprobada la autenticidad del warrant, por su conformidad con las constancias del registro, ordenará el remate por intermedio de los Mercados de Cereales o Bolsa de Comercio donde existan, y donde no los hubiere, por martilleros especiales designados por orden de nombramiento, dentro de una nómina que anualmente formarán los Tribunales Superiores de Comercio de la jurisdicción respectiva. Esta resolución será comunicada al dador y a los endosantes cuyos domicilios consten en el registro, por carta certificada con recibo de retorno. La comunicación se hará dentro del segundo día, si los interesados estuviesen domiciliados en el lugar del depósito y por segundo correo si tuviesen el



domicilio en otro punto. El remate tendrá lugar en la plaza comercial donde estuviere situado el depósito, y en su defecto, en una de las más inmediatas, y se anunciará durante diez días a lo menos, en dos periódicos del lugar donde debe efectuarse el remate o de la plaza comercial más próxima, debiendo especificarse en los avisos los productos materia de la venta, la fecha de la constitución y primera negociación del warrant y el nombre de su dueño primitivo. Para los casos en que la venta de las mercaderías deba realizarse por un warrant del que sea tenedor o endosante la misma empresa debe desempeñar las funciones que este artículo encomienda al administrador del depósito.

Art. 18. La venta de los efectos por falta de pago del warrant, no se suspenderá por quiebra, incapacidad o muerte del deudor, ni por otra causa que no sea orden judicial escrita, previa consignación del importe de la deuda, sus intereses y gastos calculados.

Art. 19. El producido del remate será distribuido por el administrador del depósito respectivo, siempre que no mediara oposición dentro del tercer día. En caso contrario, lo depositará a la orden del juez correspondiente, para su distribución dentro del orden de preferencias consignadas en el artículo 22. El sobrante si lo hubiere, quedará a disposición del dueño del certificado de depósito respectivo.

Art. 20. Por el saldo que resultare, el acreedor del warrant tendrá acción ejecutiva contra los endosantes del mismo, siempre que se hubiere solicitado la venta de las mercaderías afectadas al mismo, en los plazos con anterioridad establecidos y que la enajenación de aquellas se hubiere realizado ajustándose a los procedimientos proscriptos por el artículo 17.

Art. 21. Si la venta fuese suspendida de conformidad a lo dispuesto en el artículo 18, se entregará inmediatamente al acreedor del warrant la suma consignada, dando fianza para el caso de ser obligado a devolver su importe y debiendo aquella tenerse por extinguida si no se dedujera la acción correspondiente a tal efecto, dentro de los treinta días subsiguientes a la entrega.

Art. 22. Sobre los efectos comprendidos en el warrant, sobre su importe una vez enajenados aquellos o en los casos de consignación autorizados, y sobre el valor del seguro constituido, el acreedor de aquí goza de un privilegio superior con respecto a cualquier otro crédito, que no sean los derechos del depósito especial, las comisiones y gastos de venta y el impuesto establecido por el artículo 25.

Art. 23. El dueño o acreedor respectivamente de un certificado de depósito o de un warrant, en caso de pérdida o destrucción del mismo, dará aviso inmediato a la empresa emisora y podrá, mediante orden del juez, justificando ante él la propiedad y dando fianza, obtener un duplicado del certificado o del warrant. La fianza será cancelada si a los seis meses del otorgamiento del duplicado no se hubiere formulado reclamo presentando el warrant o certificado origi-



nales, y en caso de deducirse acción a base de los últimos, deberá judicialmente declararse el derecho discutido.

Art. 24. El Poder Ejecutivo inspeccionará las empresas emisoras de warrants a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones consignadas en esta ley o retirar, en su defecto, la autorización necesaria para continuar funcionando en dicho carácter.

Art. 25. Créase un impuesto de un cuarto por mil sobre el valor atribuido a las mercaderías depositadas, que será percibido por las mismas empresas emisoras, previamente a la entrega de los efectos, junto con los gastos y derechos por el depósito.

Art. 26. Sin perjuicio de su renovación total o parcial el warrant sólo produce efectos a los fines de su negociación, durante los seis meses siguientes a la fecha de su emisión.

Art. 27. El ejercicio de las acciones para el cobro y ejecución del warrant corresponderá, a opción del acreedor, a la jurisdicción del domicilio de éste o del lugar donde se halle el depósito, en caso de no haberse estipulado el lugar del pago.

Art. 28. Exonéranse de todo impuesto de sellos las operaciones de crédito que se realicen sobre warrants emitidos por depósitos sitos en jurisdicción nacional.

Art. 29. Exonéranse del impuesto de patente a los depósitos autorizados a emitir warrants que se establezcan en jurisdicción nacional, dentro de los dos años de promulgada esta ley.

Art. 30. El Poder Ejecutivo, al reglamentar esta ley, procurará fijar en cuanto sea posible, los tipos de clasificación de los productos a depositarse en los almacenes, a efecto de la emisión de warrants sobre los mismos.

Art. 31. Las personas o sociedades autorizadas para establecer almacenes que emitan certificados de depósito y warrants, se consideran comerciantes y están obligados a llevar los libros exigidos por la ley.

Art. 32. No será indispensable el traslado a almacenes de terceros, para la expedición de certificados de depósito y warrants en los productos de la industria vinícola, pudiendo el Poder Ejecutivo autorizar a los bodegueros que se constituyan en depositarios y siempre que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 2º, a emitir los referidos documentos los que, para ser negociables, deben previamente ser autorizados por la Dirección de Impuestos Internos de la Nación del distrito correspondiente. Formarán, además, parte integrante de aquéllos, los análisis correspondientes al producto sobre que se emiten. A la referida repartición competirán los actos que deben realizar las empresas de depósito, de acuerdo con los artículos 7 (inciso 3º), 8, 17, 19 y 25.

Art. 33. Quedan incorporadas al Código de Comercio las disposiciones de los artículos precedentes.

Art. 34. El depositario que abandone las cosas afectadas a un warrant, con perjuicio del dueño o acreedor, incurrirá en la pena de arre-



to o prisión, según la importancia del daño graduado a razón de dos meses de arresto o uno de prisión por cada cien pesos.

Art. 35. El depositario a que se refiere el artículo anterior, que enajene o retire del depósito, gravando como propios los bienes depositados, incurrirá en pena de prisión hasta tres años si el perjuicio no excediese de diez mil pesos; pasando esta suma hasta cincuenta mil pesos, de tres a seis años de penitenciaría y si fuese mayor, presidio de seis a diez años. Si el daño fuese inferior a quinientos pesos, se aplicará la penalidad del artículo anterior.

Art. 36. Todo el que con intención fraudulenta y en perjuicio de tercero, emita, use o ponga en circulación un warrant falso, será castigado con arreglo a las disposiciones de la ley n° 3972, sobre falsificación de moneda.

Art. 37. Sin perjuicio de la pérdida de la autorización para continuar funcionando como empresa emisora de warrants y de los daños y perjuicios de que sean responsables ante los depositantes, incurrirán igualmente en las penas del artículo 35 los directores o gerentes de aquella que efectúen por cuenta propia o ajena las operaciones de compra-venta prohibidas por el artículo 3°. Quedan exceptuadas las bodegas a que se refiere el artículo 32, de la prohibición del artículo 3° y la penalidad correlativa del presente.

Art. 38. Decláranse incorporadas al Código Penal las disposiciones comprendidas en los artículos 34, 35, 36 y 37 de la presente ley.

1. Del artículo 1° al 33, según dispone éste, la ley de Warrants queda incorporada al Código de Comercio; del 34 hasta el 37, según preceptúa el 38, al Código Penal.

En la discusión parlamentaria del art. 33, el autor de éste dijo que lo necesitaba la ley porque « las leyes de la Nación, fuera de los cuatro Códigos, son aplicables únicamente por los jueces federales ». Tan novedosa teoría fué combatida por el diputado Bas, estableciendo la verdadera de que al dictar una ley por separado de los Códigos, no la hace federal; « lo que determina ese carácter es la naturaleza del asunto que se legisla, y cuando tratamos de la ley de Warrants, legislamos sobre la garantía real sobre muebles, cuestión de fondo que afecta principios de los Códigos Civil y de Comercio, lo que implica una jurisdicción diferente de la federal. (V. sobre esta discusión *C. C. Malagarrija, Código de Comercio comentado*, pág. 336-337 del tomo V, 3ª edición).

2. Esta ley amplía la anterior de Warrants (1878) que casi toda ella se refería a mercaderías importadas, estableciendo en su artículo primero que la Aduana daría a los de-



positantes de mercaderías en los almacenes fiscales, un certificado de depósito por duplicado, y que éste llevaría la designación de Warrants (testimonio). Esto unido al largo expediente que exigía cada operación, sellos, impresos, protestos, etc., motivó la reforma que, como se ve, ha tardado largos años. Lo esencial de ésta es la ampliación del régimen a frutos del país y manufacturas nacionales y a los depósitos de particulares autorizados (por el P. E.), además de los depósitos de Aduana.

3. El artículo 36 se refiere a la ley N° 3972 sobre falsificación de moneda. Este delito (y por tanto la del warrant) viene hoy comprendido en los artículos 282-287 del Código Penal, que además en el artículo 305 deroga aquella *nominatim*.

4. Las penas de penitenciaria y presidio del artículo 35, serían hoy reclusión. Art. 305, Cód. Penal.

VI. — Prenda Agraria

N° 9644 Art. 1. El contrato de prenda agraria, que para la ga-
19 Octubre rantía especial de préstamos en dinero se instituye por
1914 la presente ley, queda sujeto a las disposiciones de los
 artículos siguientes y a las de la prenda en general, en
cuanto no se opongan a la presente.

Art. 2. La constitución de la prenda agraria puede recaer sobre:

a) Las máquinas en general, aperos e instrumentos de labranza;
b) Los animales de cualquier especie y sus productos, como las cosas
muebles afectadas a la explotación rural; c) Los frutos de cualquier
naturaleza, correspondientes al año agrícola en que el contrato se realice,
sean pendientes, sean en pie, o después de separados de la planta,
así como las maderas, los productos de la minería y los de la industria
nacional.

Art. 3. Los bienes afectados en prenda, garantizarán al acreedor
con privilegio especial el importe del préstamo, intereses y gastos,
en los términos de los contratos y de las disposiciones de esta ley.
Para la constitución de la prenda sobre cosas inmuebles por razón de
su destino, por el propietario del bien a que están incorporadas, en
caso de exigir hipoteca sobre éste, será necesaria la conformidad del
acreedor hipotecario.

Art. 4. El privilegio del tenedor del certificado de la prenda agraria,
que durará 2 años contados desde el día de la inscripción en los
términos que en seguida se establecen, se extiende a la indemniza-



ción del seguro en caso de siniestro y a la que corresponda abonar a los responsables por pérdidas o deterioros de los bienes empeñados.

Art. 5. El deudor conservará la posesión de la cosa materia de la prenda agraria en nombre del acreedor. Sus deberes y responsabilidades civiles serán las del depositario regular y las penas, las que más adelante se establecen.

Art. 6. La prenda agraria no afectará al privilegio del propietario por un año de arrendamiento vencido o la cantidad pagadera en especie por el uso o goce de la cosa durante el mismo tiempo, adouduo con anterioridad a la constitución de la prenda, siempre que el contrato respectivo, en cualquier forma que fuera celebrado, se hubiera inscripto con anterioridad al contrato de prenda en el registro que por esta ley se crea.

Art. 7. El contrato de prenda agraria podrá constituirse por instrumento público o privado, pero en ambos casos sólo producirá efectos con relación a terceros desde el día de su inscripción en el registro público, que funcionará en las oficinas nacionales o provinciales que determine el Poder Ejecutivo y con arreglo a la reglamentación especial que el mismo fijará. Cuando el contrato sea privado, se hará en formularios que entregarán gratuitamente las oficinas del registro de prenda.

Art. 8. Verificada la inscripción, el encargado del registro expedirá un certificado en el que conste el nombre de los contratantes, importe y fecha del vencimiento del préstamo, especie, cantidad y ubicación de los objetos dados en prenda, fecha de inscripción y demás detalles que la reglamentación de esta ley determine.

Art. 9. Tratándose de ganados o de productos de la ganadería el certificado especificará la clase de ganado, grado de mestización, número, edad, sexo, marca y señal, y en cuanto a los productos, su calidad, peso o número. El encargado del registro de prenda deberá comunicar dentro de las 24 horas de producidos los actos, por carta certificada, la inscripción del contrato, como la cancelación de éste, a la oficina local que expida certificados o guías, a fin de que ésta tome razón de aquél, gratuitamente, y, en su caso, no expida guía ni certificado de transferencia de los ganados o frutos gravados con prenda, sin la cancelación de ésta.

Art. 10. Queda prohibido al deudor que hubiere celebrado un contrato de prenda agraria, celebrar otros sobre los mismos objetos, salvo ampliación que le acuerde el acreedor o nuevo contrato consentido por éste.

Art. 11. Los encargados del registro podrán percibir los emolumentos que fije el decreto reglamentario, debiendo su importe ser abonado por quienes soliciten la inscripción. El registro es público y la expedición del certificado gratuita.

Art. 12. Los ganados dados en prenda no podrán ser trasladados fuera del lugar de la explotación agrícola o pecuaria a que correspondían cuando se constituyó la prenda, ni menos salir del radio de la



jurisdicción del registro en que está anotada la prenda, sin que el encargado del registro lo haga constar en el testimonio y notifique ese traslado al acreedor y endosante y encargado de la expedición de guías. La violación de esta cláusula que deberá ser inserta en el testimonio, constituye la presunción de fraude o delito, según los casos, y sujeta a su autor y a quien con él comercie sobre ese ganado a las penas establecidas en esta ley.

Art. 13. Si se quiere asegurar los beneficios de la inscripción en bienes de diversas explotaciones agrícolas a ganaderas sitas en las distintas jurisdicciones o distritos, la inscripción deberá hacerse en cada uno de los registros locales respectivos de prendas y de guías.

Art. 14. La inscripción que de acuerdo con el art. 4º conserva el privilegio de la prenda por 2 años, caduca por el mero vencimiento del término. Sin perjuicio de los casos en que se proceda por orden judicial, la inscripción puede cancelarse en cualquier tiempo a solicitud del deudor con la presentación del certificado de la prenda, endosado por el último tenedor, debiendo aquél ser archivado en la oficina respectiva con anotación de la cancelación.

Art. 15. Los frutos y productos del ganado y de la agricultura podrán ser vendidos por el deudor en la época en que estén listos para dicha venta, pero no podrá hacer tradición de los mismos el comprador, sin previo pago al acreedor de los valores a cuyo reembolso se encuentran aquellos afectados o de parte de los mismos, anotándose así al dorso del certificado de prenda.

Art. 16. El deudor de la prenda agraria podrá librar en cualquier momento el gravamen constituido sobre los bienes afectados al contrato, consignando en la institución bancaria oficial más próxima al lugar donde aquellos se encuentran, a la orden del legítimo tenedor del certificado, el importe del préstamo y obligaciones accesorias que en él se consignan y presentando la nota de depósito al registro para su anotación y archivo. La cancelación de la inscripción la efectuará el encargado de aquél, previa notificación que haga al acreedor por carta certificada, en el domicilio fijado en el contrato, y siempre que el mismo manifestare conformidad o no formulare oposición en el término de 10 días de la notificación referida.

Art. 17. El certificado de la prenda agraria es transmisible por endoso. Este deberá contener la fecha, nombre, domicilio y firma del endosante y endosatario. Todos los que firmen y endosen un certificado de prenda agraria son solidariamente responsables. El endosatario deberá hacer registrar el endoso en el registro de prendas.

Art. 18. El certificado de prenda agraria aparcará acción ejecutiva para hacer efectivo su privilegio sobre la prenda y, en su caso, sobre la suma del seguro, y para exigir del deudor y endosantes el pago de su importe, intereses, gastos y costas. La acción se promoverá ante el juez de comercio de la jurisdicción correspondiente al lugar convenido para el pago, o, en su defecto, ante el del domicilio del deudor o de la situación de las cosas, a opción del acreedor.



Art. 19. En el caso de venta de los bienes afectados, ya sea por mutuo convenio o ejecución judicial, el producido de aquélla será liquidado en la forma y orden siguientes:

1) Pago de los gastos judiciales por la venta y de la administración, incluso los salarios y sueldos, de los ganados y de los frutos y productos desde el día del contrato hasta el de la liquidación; 2) Pago de los impuestos fiscales que adeudaren por el mismo concepto o por razón de los frutos o productos; 3) Pago del arrendamiento del campo, si el deudor no fuere el propietario del mismo, en los términos del artículo 6°; 4) Pago del capital e intereses del préstamo o préstamos en el orden de la inscripción; 5) Pago de los salarios, sueldos y gastos de recolección, trilla y desgranado, que se adeuden con anterioridad al contrato, siempre que gocen de privilegio según el Código Civil. El saldo pertenece y será entregado al deudor.

Art. 20. Para conservar los derechos contra los endosantes, el tenedor deberá iniciar la ejecución dentro de los 15 días, a contar desde el vencimiento del certificado de prenda agraria y una vez liquidada la prenda por el saldo, podrá dirigir su acción contra deudor y endosantes a la vez, o sucesivamente, en las condiciones establecidas para los obligados solidarios, pero podrá pedirse embargo preventivo en caso de notoria desvalorización de la prenda. Etablada la acción, el juez deberá dar aviso al encargado del registro en que aparezca anotado el certificado, con transcripción del nombre y domicilio de los endosantes. El referido encargado dará a su vez aviso por carta certificada, con recibo de retorno, al deudor y endosantes.

Art. 21. No se admitirán tercerías de dominio ni de mejor derecho sobre los bienes afectados al contrato con excepción de las que correspondan al privilegio consignado en el art. 6°.

Art. 22. La acción ejecutiva del certificado de prenda agraria y la venta de los bienes dados en prenda o embargados será sumarísima, verbal y actuada, no admitiéndose otra excepción que la de pago comprobado por escrito y no se suspenderá por quiebra, muerte o incapacidad del deudor, ni por otra causa que no sea orden escrita por el juez competente, dictada previa consignación del valor del certificado, sus intereses y costas calculados. En los casos de muerte, incapacidad, ausencia o concurso del deudor la acción se iniciará o continuará con los respectivos representantes legales, y si éstos no se presentaren en el juicio después de 8 días de citados, el juez procederá sin más trámite a designar un defensor ad-hoc.

Art. 23. Durante la vigencia del contrato podrá el acreedor inspeccionar el estado de los bienes objeto de la prenda y es permitido convenir en el primero que el deudor pasará al prestamista, periódicamente, un estado descriptivo de los mismos, como también la forma de venta de los ganados, frutos y productos en las épocas convenientes bajo la base de que en todo caso su precio se aplicará al pago de la deuda, anotándose así en el certificado correspondiente.

Art. 24. Es nula toda convención que permita al acreedor apro-



piarse de la prenda fuera del remate judicial o que importe la renuncia del deudor a los trámites de ejecución en caso de falta de pago.

Disposiciones penales

Art. 25. El deudor que abandone las cosas afectadas a la prenda agraria con daño del acreedor, y sin perjuicio de las responsabilidades que en tales casos incumben al depositario, de acuerdo a las leyes comunes, incurrirá en la pena de 2 meses de arresto hasta 3 años de prisión, según la importancia del daño.

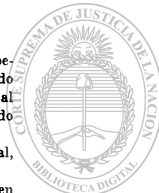
Art. 26. El deudor que disponga de las cosas empeñadas como si no reconocieran gravamen o que constituya prenda sobre bienes ajenos como propios y sobre éstos como libres estando gravados, incurrirá en pena de prisión desde 1 hasta 3 años, si el perjuicio no excediese de 10.000 \$; pasando esta suma, de 3 a 6 años de penitenciaría. Si el daño fuere inferior a 500 \$, se aplicará la pena de acuerdo a la graduación del artículo anterior.

Art. 27. Quedan derogadas las disposiciones del Código Civil sobre la prenda común que se opongan a las disposiciones especiales de esta ley.

Art. 28. Las disposiciones de esta ley, hasta el art. 24 inclusive, quedan incorporadas al Código de Comercio, y las restantes al Código Penal.

1. Creemos que están en un error los que creen vigente la parte penal que la presente ley establece. Hemos sostenido lo contrario, *Código Penal argentino*, tomo 2º, pág. 416, en que decíamos después de insertar los artículos 25 y 26:

«De la agregación de estos artículos al Código Penal (el de 1886 que regía cuando se dictó la ley) resultaba: 1º que el delito del artículo de aquel 204 (en el actual 173, inciso 9º), quedaba ampliado comprendiendo en él el caso de abandono por el deudor, de la cosa prendada (agrariamente) que quedó en su poder; 2º Que las penas de dicho artículo 204 habían sido substraídas en el caso de las del artículo 26 de la ley de prenda agraria, (aquel arresto de tres meses a un año; éste hasta tres años de prisión). Este era el derecho hasta que entró en vigor el actual código, que al derogar el anterior, derogó el sistema que resultaba en él de la agregación de los artículos 25 y 26 de la ley de prenda agraria. Y por si no resultaba esto claro, por la regla general de que la ley posterior deroga la anterior, lo acentuó el artículo 305 del actual Código al establecer que quedaban derogadas las leyes anteriores en cuanto se opusie-



ran a este Código. La ley de prenda agraria en su parte penal quedó, por tanto, derogada por el artículo 305 de modo explicito, aunque ya implícitamente había sido derogada al caer con el Código viejo entre cuyas disposiciones había sido intercalada dicha parte penal ».

A esto hemos aludido en el presente libro. (V. Cód. Penal, inciso 2º, art. 173).

De aquí que entendamos que el artículo 25 al no haber en el actual Código un supuesto como el que aquel encierra, no tiene aplicación por no haber pena.

Y que en cambio, el supuesto del artículo 26, al ser comprendido en el artículo 173, inciso 9º del Código Penal, tiene la pena de un mes de prisión a seis años en vez del arresto y no la de aquél.

VII.—Patronato de Menores

Nº 10903 Artículo 1º. Derógase el artículo 264 del Código Civil
21 Octubre y sanciónase en su reemplazo el siguiente:

1919

Art. 264. La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos, desde la concepción de éstos y en tanto sean menores de edad y no se hayan emancipado. El ejercicio de la patria potestad de los hijos legítimos corresponde al padre, y en caso de la muerte de éste o de haber incurrido en la pérdida de la patria potestad o el derecho de ejercitarla, a la madre. El ejercicio de la patria potestad del hijo natural corresponde a la madre o al que reconozca el hijo o a aquel que haya sido declarado su padre o su madre.

Art. 2º. Derógase el art. 306 del Código Civil y sanciónase en su reemplazo el siguiente:

I. Por la muerte de los padres o de los hijos. II. Por profesión de los padres, o de los hijos, con autorización de aquéllos, en institutos monásticos. III. Por llegar los hijos a la mayor edad. IV. Por emancipación legal de los hijos.

Art. 3º. Deróganse los artículos 307, 308, 309 y 310 del Código Civil y sanciónanse en su reemplazo los siguientes:

Art. 307. La patria potestad se pierde:

I. Por delito cometido por el padre o madre contra su hijo o hijos menores, para aquel que lo cometa. II. Por la exposición o el abandono que el padre o madre hiciera de sus hijos, para el que los haya abandonado. III. Por dar el padre o la madre a los hijos, consejos inmorales o colocarlos dolosamente en peligro material o moral, para el que lo hiciera.



Art. 308. El padre o la madre que haya sido condenado por delito grave o que haya sido objeto de varias condenas que demuestren que se trata de un delincuente profesional o peligroso, pierde el ejercicio de la patria potestad. La madre que contrajere nuevas nupcias pierde el ejercicio de la patria potestad de los hijos de los matrimonios anteriores, pero enviudando la recupera.

Art. 309. El ejercicio de la patria potestad queda suspendido en ausencia de los padres ignorándose su paradero, y por incapacidad mental, en tanto dure la ausencia o la incapacidad. Los jueces pueden suspender el ejercicio de la patria potestad si el padre o la madre tratasen a sus hijos sin motivo con excesiva dureza; o si por consecuencia de su ebriedad consuetudinaria, inconducta notoria o negligencia grave, comprometiesen la salud o moralidad de los hijos. Esa suspensión puede durar desde un mes, hasta que el hijo menor llegue a la mayor edad.

Art. 310. En los casos de pérdida de la patria potestad (art. 307) o de su ejercicio (art. 308), los menores quedan bajo el patronato del Estado Nacional o Provincial. En los casos de suspensión (art. 309) quedan también bajo el patronato del Estado Nacional o Provincial.

Art. 4°. El Patronato del Estado Nacional o Provincial se ejercerá por medio de los jueces Nacionales o Provinciales, con la concurrencia del Ministerio Público de menores. Ese patronato se ejercerá atendiendo a la salud, seguridad, educación moral o intelectual del menor, proveyendo a su tutela sin perjuicio de lo prescripto en los arts. 390 y 391 del Código Civil.

Art. 5°. Derógase el artículo 320 del Código Civil y sanciónase en su reemplazo el siguiente:

Art. 329. Lo dispuesto en los arts. 306, 307 y 309 del Código Civil se aplicará a la patria potestad de los hijos naturales sin perjuicio de lo prescripto en el artículo 330 del mismo Código.

Art. 6°. Modifícase el art. 393 del Código Civil en la siguiente forma:

Art. 393. Los jueces no podrán proveer la tutela, salvo que se tratase de menores sin recursos o de parientes de los mismos jueces, en socios, deudores o acreedores suyos, en sus parientes dentro del 4° grado, en amigos íntimos suyos o de sus parientes hasta dentro del 4° grado en los miembros de los Tribunales Nacionales o Provinciales, que ejercieran sus funciones en el mismo lugar en que se haga el nombramiento, ni proveerla dando a una misma persona varias tutelas de menores de diferentes familias, salvo que se tratase de filántropos reconocidos públicamente como tales.

Art. 7°. Derógase el artículo 457 del Código Civil y sanciónase en su reemplazo el siguiente:

Art. 457. Los jueces podrán remover los tutores por incapacidad o inhabilidad de éstos, por no haber formado inventario de los bienes del menor en el término y forma establecidos por la ley, y porque no cuidasen debidamente de la salud, seguridad, y moralidad del menor



que tuviesen a su cargo o de su educación profesional o de sus bienes.

Art. 8°. Todo menor confiado por sus padres, tutores o guardadores a un establecimiento de beneficencia privado o público quedará bajo la tutela definitiva de la dirección del establecimiento.

Art. 9°. Los menores sobre cuya situación se haya dispuesto de acuerdo con los artículos anteriores, quedarán bajo la vigilancia del Defensor de Menores, quien deberá controlar la acción de los referidos tutores o guardadores e inspeccionar por lo menos cada trimestre los establecimientos privados o públicos respectivos, atender las reclamaciones de los menores y poner en conocimiento del juez lo que juzgare conveniente.

Art. 10. Las denuncias sobre los hechos mencionados en los artículos anteriores, podrán ser presentadas a los defensores de menores por cualquier persona capaz, debiendo el Defensor iniciar una información sumaria y someterla al Ministerio Público de Menores para la iniciación del juicio en el cual deberá ser citado el Defensor de Menores a los efectos informativos.

Art. 11. Cuando el juez lo considere conveniente, la resolución podrá limitarse a la privación de la tenencia del menor, y en tal caso podrá ser entregado a una persona, pariente o no o al defensor de menores.

Art. 12. Los padres privados del ejercicio de la patria potestad o suspendidos en él, o en la tenencia de sus hijos, en virtud de esta ley, podrán solicitar que la medida se deje sin efecto, si hubieran transcurrido dos años desde la resolución definitiva y probaren que se hallan en situación de ejercer convenientemente sus obligaciones.

Art. 13. La pérdida de la patria potestad, la suspensión de su ejercicio o de la pérdida de la tenencia de sus hijos, en virtud de esta ley no importa liberar a los padres de las obligaciones impuestas por los artículos 265, 267 y 268 del Código Civil si no fueren indigentes. A ese efecto el juez establecerá el monto de los alimentos y la forma de suministrarlos.

Art. 14. Los jueces de la jurisdicción criminal y correccional en la Capital de la República y en las provincias y territorios nacionales, ante quienes comparezca un menor de diez y ocho años acusado de un delito o como víctima de un delito, podrán disponer preventivamente de ese menor si se encuentra material y moralmente abandonado o en peligro moral, entregándolo a una persona honesta, pariente o no, o a un establecimiento de beneficencia, privado o público, o a un reformatorio público de menores. A ese efecto no registrarán en los tribunales Federales ordinarios de la Capital y de los territorios nacionales, las disposiciones penales sobre prisión preventiva, la que sólo será decretada cuando el juez lo juzgue necesario y se cumplirá dónde y como él mismo lo indique. Podrán también dejarlos a sus padres, tutores o guardadores bajo la vigilancia del tribunal. La resolución judicial será susceptible de los recursos de revocación y apelación en las mismas condiciones prescriptas en el artículo 10.



Art. 15. Lo mismo los jueces cuando sobresean provisoria o definitivamente respecto a un menor de 18 años, o cuando lo absuelvan, o cuando resuelvan definitivamente en un proceso en que un menor de 18 años haya sido víctima de un delito, podrán disponer del menor por tiempo indeterminado y hasta los 21 años si se hallare material o moralmente abandonado, o en peligro moral y en la misma forma establecida en el artículo anterior.

Art. 16. Los jueces correccionales en la justicia nacional de la Capital y en los territorios nacionales, entenderán en primera y única instancia, en todos los casos de faltas y contravenciones imputadas a menores de 18 años y aplicarán las disposiciones de los artículos anteriores.

Art. 17. Todo menor de que hayan dispuesto los jueces indicados en los tres artículos anteriores, quedará bajo su vigilancia exclusiva y necesaria.

Art. 18. Los mismos jueces en los procesos a que se refiere el artículo 14, podrán imponer en cada caso a los padres, tutores o guardadores que aparezcan culpables de malos tratos o de negligencia grave o continuada con respecto a los menores a su cargo y que no importen delitos del derecho penal, multas hasta la suma de doscientos pesos o arresto hasta un mes, o ambas penas a la vez. Estas condenas podrán suspenderse si los culpables dieran seguridades de reforma quedando prescriptas en el plazo de dos años si no incurrieren en hechos de la misma naturaleza.

Art. 19. Los padres o tutores de los menores de quienes hayan dispuesto definitivamente los jueces de la jurisdicción criminal o correccional, o que hayan sido condenados en virtud del artículo anterior, podrán solicitar revocatoria de esas resoluciones dentro de los cinco días de la notificación de las mismas. Esta oposición se substanciará en una audiencia verbal con las pruebas que ordene el juez o indique el recurrente, si el juez las juzgare pertinentes. La resolución será apelable en relación.

Art. 20. Los tribunales de apelación en lo criminal y correccional de la justicia nacional ordinaria de la capital y territorios nacionales, designarán si lo juzgan conveniente, uno o más jueces, para que entiendan exclusivamente en sus respectivas jurisdicciones en los procesos en que se acuse a menores de 18 años; reglamentarán la forma de la cooperación policial en los sumarios e informaciones respectivas, la cooperación de los particulares o establecimientos particulares o públicos que se avengan a coadyuvar gratuitamente en la investigación y en la dirección y educación de los menores; así como también la forma de la vigilancia que corresponde a los jueces en virtud de lo dispuesto en los artículos 14 y 17.

Art. 21. A los efectos de los artículos anteriores, se entenderá por abandono material o moral, o peligro moral, la incitación por los padres, tutores o guardadores a la ejecución por el menor de actos perjudiciales a su salud física y moral; la mendicidad o la vagancia por



parte del menor, su frecuentación a sitios inmorales o de juegos, o con ladrones o gente viciosa o de mal vivir, o que no habiendo cumplido 18 años de edad, vendan periódicos, publicaciones u objetos de cualquier naturaleza que fueren, en las calles o lugares públicos, o cuando en estos sitios ejerzan oficios lejos de la vigilancia de sus padres, guardadores, o cuando sean ocupados en oficios o empleos perjudiciales a la moral o a la salud.

Art. 22. El Poder Ejecutivo presentará el plan general para la construcción en la Capital y en las provincias y territorios nacionales de establecimientos especiales para los menores expuestos o abandonados y para la detención preventiva de los menores delincuentes o de mala conducta, y la construcción de reformatorios para menores delincuentes o de mala conducta, con imputación a la presente ley. En esas escuelas y reformatorios regirá el trabajo de talleres y agrícola como principal elemento educativo de los menores reclusos, quienes serán parte en el beneficio pecuniario de esos trabajos. Las colonias-escuelas y las colonias-reformatorios ubicadas cerca de las ciudades o en pleno campo serán el tipo preferido de estas casas de prevención y reforma de menores.

Art. 23. Los asilos, escuelas primarias gratuitas, generales y especiales, y particularmente las de práctica técnica, como los demás establecimientos de beneficencia privados, que reciban niños subvencionados por el Estado, están obligados a recibir en secciones que podrán ser especiales, un número determinado de menores, remitidos por los jueces en virtud de esta ley, de acuerdo con la subvención recibida, la naturaleza del establecimiento y la reglamentación que establezca el Poder Ejecutivo.

Art. 24. Los parientes de los menores y las instituciones de beneficencia o de patronato de niños, podrán denunciar las transgresiones de esta ley, si se tratase de los jueces, a los cuerpos encargados de acusarlos o de juzgarlos, o si se tratase de los defensores o asesores de menores, a los funcionarios con facultad para controlarlos o removerlos.

1. Esta ley no forma parte propiamente del Código Penal: en cambio sus disposiciones civiles modifican textos del Código Civil. Pero lo que tiene de penal, desde el art. 14 (V. también el art. 3), y que luego este Código cuatro años después había de hacer suyo en gran parte siendo por lo demás de constante aplicación, nos determina a darle el lugar más cercano al Código Penal.

2. Se completa la ley con la siguiente acordada de la Cámara C. C.:

En Buenos Aires, a 24 de Octubre de 1910, reunidos los Sres. Vocales de la Excm. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional en



nuendo extraordinario a efectos de reglamentar la ley N° 10903, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la misma y para la aplicación de los artículos 14 al 21, resolvieron:

Artículo 1°. Recordar a los funcionarios encargados de su aplicación y a los particulares o instituciones colaboradores de aquéllos, que esta ley es de educación y no de castigo; que debe considerarse ante todo la salud física y moral de los menores que se hallen en la situación prevista por la misma; que deben evitarse todos los actos que depriman moralmente al menor, sobre todo, aquellos realizados en público; que las autoridades policiales y judiciales deben tender a inspirar confianza y no temor, tanto a los menores como a su familia, y que los procedimientos de estímulo dentro de una severa disciplina son superiores a los represivos.

Art. 2°. Los funcionarios de policía, cuando instruyan sumarios contra un menor de 18 años acusado de un delito o contravención, o en los casos en que un menor de esa edad aparezca víctima de un delito, procederán sin demora a levantar una información respecto a la situación del menor y su familia, que remitirán al Juez de la causa. Este informe podrá ser reemplazado por el de los inspectores que se designen.

Art. 3°. La información importará una relación sintética pero completa del medio familiar en que se desarrolla la vida del menor, de sus antecedentes y conducta; de los antecedentes y conducta de los padres, tutores o guardadores, y el juicio del informante sobre la situación del menor, en relación con la educación que recibe, debiendo servir como guía, a efectos de los hechos a averiguar, la circular que este Tribunal remitió con fecha 18 de Abril de 1918.

Art. 4°. Siempre que fuera posible, la Jefatura de Policía designará determinados funcionarios para que se ocupen de la averiguación de los hechos provistos en la expresada ley.

Art. 5°. A los efectos del art. 21, en su última parte, recomiéndase a la Jefatura de Policía la conveniencia de la formación de un Registro de menores que ejerzan oficios en la vía pública, registro que a la vez que se utilizaría para ir reuniendo todos los elementos de juicio que fueran posible para ser remitidos en momento oportuno al Señor Juez en lo Correccional, tendría por objeto proveer a aquéllos de una credencial con la que justificarían, en un caso dado, que están dentro de las condiciones de la ley.

Art. 6°. Salvo el caso en que fuere estrictamente necesario, por la gravedad del delito, por la temibilidad del menor, por la imposibilidad de averiguar de otra manera el domicilio del menor y de su familia, o por no existir otro medio de obtener la comparecencia del menor y de sus padres, tutor o guardador al Tribunal, podrá ser el menor detenido para ser puesto inmediatamente a la disposición del Juez. Aun en esos casos la detención durará el tiempo estrictamente necesario. Cuando los agentes de policía deban intervenir en la vía pública, se tratará de evitar al menor la publicidad del hecho y los actos



que lo depriman, sea durante la averiguación de los hechos y la conducción del mismo al lugar de detención o reclusión o a su casa y durante la reclusión. En los otros casos, y como regla general, la autoridad policial se limitará a citar al padre, tutor o guardador, para que se presente con el menor al día siguiente a más tardar ante el juez competente, de acuerdo con las horas de audiencia que la Cámara o los Jueces comuniquen a la Jefatura.

Art. 7°. La detención se hará efectiva, siempre que fuere posible, en el Instituto Tutelar de Menores, y la policía habilitará a la mayor brevedad una alcaldía especial, separada de todo otro lugar de reclusión, para aquellos que no puedan ser reclusos en dicho instituto.

Art. 8°. Los funcionarios policiales deberán prestar ayuda cada vez que le sea solicitada, a los inspectores, cuya lista se comunicará periódicamente a la Jefatura por este Tribunal y a los efectos de la cooperación que a éstos corresponda en las informaciones.

Art. 9°. En los casos de faltas o contravenciones hallándose reemplazada la jurisdicción del Jefe de Policía y las autoridades municipales, como jueces de primera instancia, por la de los Tribunales Correccionales, la intervención policial de las autoridades, policiales o municipales, será de prevención debiendo sujetarse a los artículos anteriores y remitir las actuaciones al Juez, dentro de las 24 horas; aplicarán las disposiciones de los artículos 587 y 588 del Código de Procedimientos y los demás del mismo que correspondan, según el caso.

Art. 10. A las audiencias ante los jueces del crimen y correccionales, en que figuren menores de 18 años como acusados, que serán secretas, podrán, de acuerdo con el art. 479 Cód. Proc., concurrir, fuera de las partes y sus defensores, las personas que el Juez indique, o los funcionarios judiciales o administrativos que lo deseen.

Art. 11. Si el Juez encontrase a la terminación del proceso, que es el caso de aplicar las disposiciones de la ley, desglosará del expediente las actuaciones que se refieren a la conducta y antecedentes del menor y de sus padres, tutores o guardadores, dejando las constancias necesarias en la causa, y aquellas servirán de cabeza en el nuevo expediente. Esas actuaciones serán secretas, y salvo con respecto a la aplicación de las disposiciones de esta ley, no podrán ser invocadas en otro proceso.

Art. 12. La libertad vigilada a que se refiere el artículo 14 en su última parte, será aplicada por los Jueces por intermedio de los inspectores «ad honorem» que este Tribunal inscriba, o los inspectores oficiales que pudieran nombrarse más adelante, o los funcionarios policiales que la policía pudiera dedicar a este objeto, o en ausencia de ellos por los medios que el Juez juzgare conveniente.

Art. 13. Las funciones de los inspectores consistirán en observar la conducta del menor e informar al Juez, tanto en esos casos como en los a que se refiere el art. 2° de esta acordada. En los casos en que los menores se hallen internados, estas informaciones serán suministradas periódicamente al Juez por la dirección de los establecimientos.



Art. 14. Sin perjuicio de la resolución que corresponde al P. E., de acuerdo con el art. 23, el Sr. Presidente del Tribunal solicitará sin demora de todos los establecimientos públicos destinados a menores, de las sociedades de beneficencia y escuelas o asilos, que reciban subsidios del Estado y alojen menores, se sirvan comunicar al Tribunal el número de menores a disposición de los jueces del crimen, de Instrucción o Correccionales en virtud de esta ley, que estén dispuestos a recibir en sus establecimientos a cuyo efecto se formará una lista en el Tribunal, que será comunicada periódicamente a los jueces.

Art. 15. También solicitarán de las sociedades de beneficencia la designación de aquellos de sus miembros, varones o mujeres, que deseen coadyuvar en la reeducación de los menores, desempeñando las funciones de inspectores, a efecto de averiguar la situación de los mismos dentro de sus familias, y de vigilar la conducta, que dispongan los Jueces, y también la de toda persona honesta que se avenga a desempeñar esas funciones.

Art. 16. Solicitará igualmente el concurso de los médicos que con el mismo alto propósito deseen prestar su ayuda científica, concurriendo a las audiencias y examinando la salud de los menores en situación de ser reeducados.

Art. 17. Solicitará asimismo, la colaboración del Consejo Nacional de Educación, de los Directores de Escuela y de los maestros, a los efectos de la educación de los retardados y de la cooperación en la vigilancia de los menores cuya concurrencia a la escuela sea ordenada por los Jueces.

Art. 18. Solicitará de igual modo la inscripción de aquellas personas honestas que se hallen dispuestas a tomar a su cargo bajo la vigilancia del Juez a los menores de que el mismo disponga.

Art. 19. Las disposiciones complementarias respecto a la cooperación de instituciones o particulares, de acuerdo con lo expuesto en los artículos anteriores, quedarán a cargo del Presidente de la Cámara.

Art. 20. En todos los casos en que los menores se hallaren en edad escolar, o cuando no tuvieran suficiente instrucción y no fueran remitidos a un establecimiento, el juez decidirá la concurrencia regular del menor a la escuela.

Art. 21. Los jueces podrán convocar periódicamente a todos los menores que se hallen bajo su vigilancia y no se encuentren en un establecimiento, a una reunión a la que podrán invitar a sus padres, tutores o guardadores y a los inspectores que lo deseen, a efectos de las indicaciones convenientes a la dirección y educación de los menores.

La Cámara teniendo en cuenta que el número de menores de que deberán disponer los Jueces será considerable, que son insuficientes los establecimientos públicos y privados para alojar menores que deban ser reclusos, que por las condiciones de nuestro ambiente la libertad vigilada no podrá aplicarse con la extensión con que lo ha sido en otros países, y que por consiguiente la obra eficaz de reeducación y de regeneración sólo podrá hacerse por medio de escuelas industria-



les y agrícolas y de reformatorios dedicados exclusivamente a menores a disposición de los Jueces, llama la atención de los poderes públicos sobre la necesidad de arbitrar recursos para la construcción inmediata de los establecimientos que prevé el art. 22, y exhorta a las personas y a las instituciones en situación de coadyuvar al progreso social y de ejercer eficazmente y con alta finalidad la beneficencia pública, a la fundación de esos establecimientos dentro y fuera de la Capital de la República, y a prestar en otra forma su ayuda pecuniaria, por intermedio de los Jueces respectivos o a solicitud de éstos. Y siendo una de las bases del éxito futuro de los reeducados el secreto absoluto sobre todo procedimiento de que hayan sido objeto durante su infancia, solicitase de la prensa de la Capital, la supresión en las noticias sobre hechos cometidos por menores, de los nombres de los mismos y de toda indicación que tienda a individualizarlos.

II. — Del Código Civil ⁽¹⁾

Nº 340
28 Setiembre
1869

Art. 151. La sentencia sobre demencia y su cesación sólo hace cosa juzgada en el juicio civil para los efectos declarados en este Código (recaudos de bienes, curador, etc.), mas no en juicio criminal, para excluir una imputación de delitos o dar lugar a condenaciones.

Art. 152. Tampoco constituye cosa juzgada en el juicio civil para los efectos de que se trata en los artículos precedentes cualquier sentencia en un juicio criminal que no hubiese hecho lugar a la acusación por motivo de la demencia del acusado o que hubiese condenado como si no fuese demente el procesado.

Art. 278. Los padres tienen la facultad de corregir o hacer corregir moderadamente a sus hijos; y con la intervención del Juez, hacerlos detener en un establecimiento correccional por el término de un mes. La autoridad local debe reprimir las correcciones excesivas de los padres.

Art. 841. No pueden hacer transacciones: 1º Los agentes del Ministerio Público, tanto nacionales como provinciales. . .

Art. 1178. El que hubiere contratado sobre cosas ajenas como cosas propias, si no hiciese tradición de ellas, incurre en el delito de estelionato, y es responsable de todas las pérdidas e intereses.

Art. 1179. Incurre también en el delito de estelionato y será responsable de todas las pérdidas e intereses quien contratara de mala fe sobre cosas litigiosas, pignoradas, hipotecadas o embargadas como si

(1) No tratamos de establecer las derivaciones penales de las instituciones civiles: nos limitamos a las disposiciones del Código relacionadas con la ley penal, como hacemos con otros Códigos.



estuviesen libres siempre que la otra parte hubiese aceptado la promesa de buena fe.

Art. 1858. Las donaciones también pueden ser revocadas por causa de ingratitud del donatario en los tres casos siguientes:

- 1º Cuando el donatario ha atentado contra la vida del donante;
- 2º Cuando le ha inferido injurias graves en su persona o en su honor;
- 3º Cuando le ha rehusado alimentos.

Art. 3747. Los ascendientes pueden desheredar a sus descendientes legítimos o naturales por las causas siguientes: 1º Por injurias de hecho, poniendo el hijo las manos sobre su ascendiente. La simple amenaza no es bastante; 2º Si el descendiente ha atentado contra la vida del ascendiente; 3º Si el descendiente ha acusado criminalmente al ascendiente, de delito que merezca pena de cinco años de prisión o de trabajo forzado.

Art. 151. Comentándolo dice Llerena: «Así, por ejemplo, si en el juicio civil se hubiese declarado improbadamente la demanda de un individuo al cual se acusa criminalmente por un delito, la sentencia en lo civil no impedirá que en el juicio criminal se alegue y pruebe que el acto fué cometido en un momento de enajenación mental.»

Con efecto las dos jurisdicciones tienen distinta finalidad: el Estado tiene interés inmediato en lo penal. Su interés en lo civil viene después del de los particulares que litigan: es inmediato.

Art. 152. Consecuencia del principio anterior.

Art. 278. El defensor de menores, con intervención judicial (a la que se refiere el texto) impone la pena (ley nº 1893, art. 129-4º).

Art. 841. V. sobre acciones penales nuestro comentario al artículo 14 del Cód. Proc. Crim.

Art. 1178 y 1179. Eseriche define el estelionato «toda especie de fraude o engaño que se cometa en las convenciones u otros actos y no tiene género o nombre determinado. Según el derecho romano lo cometía:

1º. El que por dolo, cede, vende o empeña una cosa que ya había cedido, vendido o empeñado, ocultando la primera cesión, venta o empeño a la persona con quien contrató.

2º. El deudor que empeña o da en pago a sus acreedores una cosa que sabe no le pertenece.

3º. El que subtrae, adultera o malca efectos obligados a otros.

- 4º. El que hace colusión con otro en perjuicio de un tercero.
5º. El mercader que da una mercadería de menor precio por otra más cara que ha vendido.
6º. El que hace una falsa declaración en algún acto o contrato. »

Es evidente que todos estos casos tienen hoy sendas representaciones en el Código Penal por lo que el estelionato ya no tiene existencia propia en nuestro derecho.

El doctor Vélez Sársfield creyó deber sacar de las leyes antiguas dos de los casos previstos en derecho romano. En derecho español ni éstas ni las demás se llamaban ya así; las Partidas hablan sólo de engaño y baratería.

Art. 1858, inciso 1º. Basta el intento. Por esto previene el 1859 que aunque el donatario no haya sido condenado por el hecho y aunque sus actos no presenten los caracteres de la tentativa según el derecho criminal, basta que por esos actos haya manifestado de una manera indudable intención de dar muerte al donante para que proceda la revocación.

Inciso 2º. Entran también las injurias contra la persona, o el honor de sus hijos, padres o esposa (por analogía con el art. 3291), hasta contra los bienes del donante (art. 1860).

Demolombe observa que es injuria grave acusar por un delito aunque sea cierto.

Inciso 3º. Según el 1862 el caso es de no haber prestado alimentos al donante que carecía de las personas a quien legalmente podía exigirselos o no tenían éstas con qué dárselos.

Art. 3747. Aquí se limitan los supuestos del artículo 1858. Allí el donatario nada le debía al donante, pero aquí hay por parte del descendiente cierto derecho del que sólo puede desistirse en los casos graves que dice el texto.

Adrede hemos prescindido de transcribir artículos de la sección segunda del libro I del Código, toda ella relacionada íntimamente con la materia penal. Su extensión hubiera aumentado excesivamente el volumen de la obra. Bastará al propósito de ésta recordar que el título VIII, « De los actos ilícitos », encierra disposiciones sin cuyo conocimiento no tienen cabal explicación muchos supuestos del Código Penal y que su capítulo cuarto está íntimamente relacionado con el Cód. Proc. Crim.





II^{bis}. — Leyes atinentes al Código Civil

I. Ley n° 2393. Matrimonio. — II. Ley n° 11.156. Alquileros.
III. Ley n° 11.357. Derechos civiles de la mujer ⁽¹⁾.

I. — Matrimonio

N° 2393
12 Noviembre
1889

Art. 77. Si por acusación criminal de alguno de los esposos contra el otro, hubiese condenación a prisión, reclusión o destierro, ninguno de los hijos, de cualquier edad que sea, podrá ir con el que deba cumplir alguna de estas penas, sin consentimiento del otro cónyuge.

Art. 100. Cuando la destrucción, falsificación o pérdida de un acta de matrimonio de lugar a una acción criminal, la sentencia que declare la existencia del matrimonio se inscribirá en el Registro de estado civil y suplirá el acta.

Art. 107. Será castigado con *prisión de uno a tres meses*, y con pérdida del oficio el oficial público que casara a un menor sin el consentimiento de sus padres, tutores o curadores, o del judicial en su defecto, y con *prisión de uno a dos años* y con multa de 100 a 500 pesos m/n, aquel que celebre un matrimonio sabiendo que existe un impedimento que puede ser causa de la nulidad del acta.

Art. 108. Incurrirá en la multa de \$ 100 a 500 m/n, el oficial del Registro Civil que contravenga cualquiera de las otras disposiciones de la presente ley.

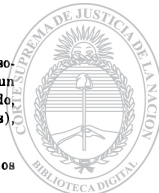
Art. 109. El cónyuge que hubiera contraído matrimonio conociendo la existencia de los impedimentos establecidos en el artículo 9 y que haya producido su nulidad responderá al otro de las pérdidas o intereses sin perjuicio de la acción criminal que corresponda. (V. pág. 180).

Art. 110. Los ministros, pastores y sacerdotes de cualquier religión o secta que procedieran a la celebración de un matrimonio religioso sin tener a la vista el acta de la celebración de un matrimonio estarán sujetos a las responsabilidades establecidas por el artículo 147 del Código Penal y si desempeñasen oficio público serán separados de él.

Art. 111. La aplicación de las penas establecidas en los artículos precedentes será pedida por el ministerio público ante el juzgado competente.

1. El artículo 12 del Código Penal establece que a las penas de prisión y reclusión por más de tres años, son inherentes

(1) Muchas de las leyes que llamamos obrero-sociales (Parte Tercera), son en realidad modificaciones o ampliaciones del Código Civil.



rentes — y duran lo que la condena — la inhabilitación absoluta y la privación de la patria potestad lo que exigirá un curador. Entendemos que el consentimiento del condenado, caso de que el otro cónyuge quiera irse (del lugar o del país), para llevarse los hijos, deberá prestarlo el curador.

2. El artículo 100 de la presente ley concuerda con los 1102 y 1103 del Código civil.

3. Las penas del artículo 107 han sido modificadas por el artículo 136 del Código Penal con penas que llegan hasta seis años de prisión. La multa (de \$ 100 a 1000 m/n.) queda para los casos de autorización por ignorancia.

4. Entendemos que la multa de 100 a 1.000 pesos que impone al oficial público el último inciso del antes citado artículo 136 del Código Penal viene a substituir a la de 100 a 500 pesos del artículo 108 de la presente ley.

5. El artículo 267 ha sido derogado porque el artículo 147 del Código Penal antiguo a que el mismo se refiere, no ha sido reproducido en el actual Código. Es un caso análogo al de la ley de Prenda agraria. (V. página 267 nuestra nota a la misma).

II. — Alquileres

Nº 11156
10 Setiembre
1921

Art. 4º. Los locatarios que no hagan constar en los contratos de subarriendo o en su defecto en los recibos que otorguen a los sublocatarios el nombre del locador y el precio del arriendo originario o que cobren más del 20 por ciento sobre el precio, sufrirán una multa igual al décuplo del exceso del alquiler indebidamente percibido. El producido de estas multas ingresará al Consejo Nacional de Educación o a los Consejos provinciales de Educación, quienes tendrán personería para exigir su aplicación y cobra.

1. El juicio ejecutivo que al respecto iniciará el personero del Consejo Nacional en la Capital y el de los Consejos provinciales en las respectivas provincias — servirá de título la resolución del mismo Consejo imponiendo la multa — se tramitará ante la justicia ordinaria o local.



III. — Derechos civiles de la mujer

Nº 11357
22 Setiembre
1926

Artículo 1º. La mujer mayor de edad (soltera, divorciada o viuda) tiene capacidad para ejercer todos los derechos y funciones civiles que las leyes reconocen al hombre mayor de edad.

Art. 2º. La madre natural tiene la patria potestad sobre sus hijos, con la misma amplitud de derechos, y facultades que la legítima. La tendrá también el padre natural que voluntariamente hubiera reconocido a los hijos naturales.

Art. 3º. La mujer mayor de edad, casada: 1º Conserva y ejerce la patria potestad de sus hijos de un matrimonio anterior; 2º Sin necesidad de autorización marital o judicial, puede: a) Ejercer profesión, oficio, empleo, comercio o industria honestos, administrando y disponiendo libremente del producido de esas ocupaciones; adquirir con el producto de su profesión, oficio, empleo, comercio o industria, toda clase de bienes, pudiendo administrar y disponer de estos bienes libremente. La mujer podrá hacer constar en la escritura de adquisición que el dinero proviene de alguno de esos conceptos. Esa manifestación importará una presunción «*juris tantum*». b) Formar parte de asociaciones civiles o comerciales y de sociedades cooperativas. c) Administrar y disponer a título oneroso de sus bienes propios y de los que le correspondan en caso de separación judicial de bienes de los esposos. Se presume que el marido tiene mandato para administrar los bienes de la mujer, sin obligación de rendir cuentas por las rentas o frutos percibidos, mientras la mujer no haga una manifestación de voluntad contraria inscrita en un registro especial o en el de mandatos donde no lo hubiere. d) Administrar los bienes pertenecientes a sus hijos de un matrimonio anterior, sin que los frutos naturales o civiles de los mismos pertenezcan a la nueva sociedad conyugal. e) Aceptar o repudiar el reconocimiento que de ella hicieron sus padres. f) Aceptar herencias con beneficio de inventario. g) Estar en juicio en causas civiles o criminales que afecten su persona o sus bienes o a la persona o bienes de sus hijos menores de un matrimonio anterior. h) Ser tutora, curadora, albacea, testigo en instrumentos públicos, y aceptar donaciones.

Art. 4º. Durante el matrimonio la mujer puede, con autorización judicial, disponer de los bienes propios del marido y de los bienes gananciales de la sociedad conyugal que el marido administre, para atender su subsistencia y la de los hijos menores de 18 años cuando el marido se encuentre privado de la libertad por condena definitiva que lo reclusa por dos años o más y no tuvieran la mujer y los hijos otros recursos.

Art. 5º. Los bienes propios de la mujer y los bienes gananciales que ella adquiere no responden por las deudas del marido, ni los bie-



nes propios del marido y los gananciales que él administre responden por las deudas de la mujer.

Art. 6°. Un cónyuge sólo responde con los frutos de sus bienes propios y con los frutos de los bienes gananciales que administre, por las obligaciones contraídas por el otro, cuando sean contraídas para atender las necesidades del hogar, para la educación de los hijos, o para la conservación de los bienes comunes.

Art. 7°. La mujer casada menor de edad tiene los mismos derechos civiles que la mujer casada mayor de edad, con la salvedad de que para hacer actos de disposición de sus bienes, necesita la venia del marido, cuando éste sea mayor de edad. Cuando el marido fuere menor de edad o se negare a acordar su venia, la mujer necesitará la correspondiente autorización judicial.

Art. 8°. La tutela legítima de los hermanos menores podrá ser ejercida por sus hermanas mayores de edad — sean solteras, casadas, divorciadas o viudas — en el caso de que no pudieran ejercerla sus abuelos o sus hermanos varones. La curatela legítima del padre o de la madre incapaces podrá ser ejercida por sus hijas mujeres mayores de edad — sean solteras, casadas, divorciadas o viudas — en el caso de que no pudieran ejercerla sus hijos varones.

Art. 9°. Quedan derogadas las disposiciones del Código Civil y de las leyes complementarias en cuanto sean modificadas o se opongan a la presente, la que formará parte de dicho código.

El art. 4° es el único de carácter penal. Se refiere sólo a la persona o bienes de los hijos de anterior matrimonio, porque para los del subsistente está la representación de su padre.

En las causas criminales la intervención de la madre puede ser por denuncia, querrela y acciones emergentes del delito de que han sido víctimas. Si el menor es delincuente, la madre intervendrá — sin autorización marital — en lo referente a responsabilidad civil, embargos, etc.

III.—Del Código de Comercio

N° 2637 Art. 78. Quedan prohibidas las operaciones que bajo
9 Octubre cualquier forma legítima impliquen un contrato aleatorio
1889 de los prohibidos por las leyes. Tales operaciones no producirán acción en juicio, y harán incurrir a sus autores y cómplices en las multas establecidas en el art. 86.

Art. 79. Cuando una operación resulte legítima para una de las partes y aleatoria para la otra, sólo producirá acción en favor de la parte de buena fe.

Art. 80. Las especulaciones llamadas juegos de bolsa, que consin-



ten en las ventas y compras que no obligan a ninguna de las partes a la entrega, y no deben resolverse sino por el pago de las diferencias entre el día de la compra y el de la entrega, son contratos ilícitos que no producen efecto legal.

Art. 81. Todo contrato de bolsa o mercado, obliga a los contratantes al cumplimiento efectivo de las prestaciones estipuladas, cuando no se tratare de contratos prohibidos.

Art. 82. Los corredores de bolsa están sujetos a los requisitos y disposiciones de este Código sobre los corredores, y en caso de infracción, no tienen acción para cobrar comisión ni emolumento alguno, quedando personalmente obligados en todas las operaciones o transacciones que verifiquen.

Art. 83. El resultado de las operaciones y transacciones reales y legítimas que se verifiquen habitualmente en las bolsas o mercados, determinará el curso del cambio, el precio corriente de las mercaderías, fletes, seguros, fondos públicos nacionales y otros cualesquiera papeles de crédito cuyo curso sea susceptible de cotización.

Art. 84. El reglamento interno de cada establecimiento deberá contener garantías suficientes para la verdad de la formación, registro y publicación de las cotizaciones y precios corrientes, para que no se realicen las operaciones prohibidas y sea expulsado todo socio que las verifique.

Art. 85. Queda prohibida la admisión en las bolsas o mercados y toda operación de personas que no tengan capacidad para ejercer el comercio. Tampoco podrá admitirse la cotización de títulos que no sean emitidos conforme a las leyes o por sociedades legalmente constituidas.

Art. 86. Los establecimientos y las personas que contravinieren a lo dispuesto en los artículos anteriores, podrán ser penados con multas de mil a cinco mil pesos por cada infracción, aplicables por los jueces de comercio, de oficio, a solicitud fiscal o de cualquiera del pueblo.

Art. 112. El corredor que quebrase será destituido por el Tribunal y su quiebra se reputará fraudulenta conforme al art. 1550 (hoy 141 de la ley de quiebras).

Art. 269. El comisionista que distrajere del destino ordenado los fondos de su comitente responderá «por los intereses» desde el día que entraron en su poder dichos fondos y por los daños resultantes de la falta de cumplimiento de la orden, sin perjuicio de las acciones criminales a que pudiera haber lugar en caso de dolo o fraude.

Art. 278. El comisionista a quien se pruebe que sus cuentas no están conformes con los asientos de sus libros o que ha exagerado o alterado los precios o los gastos verificados, será castigado como reo de delito, conforme a las leyes penales.

Art. 554. Es nulo el seguro si el que ha hecho asegurar su vida se suicida, es castigado con la pena de muerte o pierde la vida en **desafío** u otra empresa **criminal**.



Art. 588. El acreedor prendario que de cualquier modo enajenase o negociase la cosa dada en prenda, sin observar la forma establecida en el art. 585 (remate de bolsa), incurrirá en las penas del delito de estelionato sin perjuicio de la indemnización del daño.

Art. 990. Los oficiales y cualesquiera otros individuos de la tripulación que después de matriculados abandonasen el buque antes de empezar el viaje o se ausentasen antes de finalizado, pueden ser aprehendidos con prisión al cumplimiento del contrato, a reponer lo que se les hubiere dado adelantado y a servir un mes sin sueldo...

Art. 1143. El dador a la gruesa que se pone de acuerdo con el capitán para damnificar a los armadores o fletadores, respondo a éstos, solidariamente con el capitán, por todos los daños y perjuicios, y queda sujeto a la respectiva acción criminal.

Art. 1144. Incorre en el delito de estelionato el tomador que recibiese a la gruesa por mayor valor que el que tenga la cosa obligada o que no haya efectivamente cargado esa cosa. Incorre en el mismo delito el dador que no pudiendo ignorar esa circunstancia dejase de declararla a la persona a quien endosase la póliza.

Art. 78 ⁽¹⁾. Observan los comentaristas que estando prohibidos los contratos aleatorios, el texto consigna una disposición inútil. Sólo tendría importancia si hubiese una ley dándoles eficacia cuando revisten la forma de operaciones de Bolsa. Además el artículo llama cómplices a los que la ley penal llama coautores.

Art. 79. Tratándose de juego no se concibe que uno de los contratantes proceda de buena fe, es decir, que pretenda atribuir a la operación un carácter diverso del que realmente tiene.

Art. 80. Basta que se reclame en juicio una diferencia para que se rechace la demanda. Y si se pide el cumplimiento del contrato como efectivo y no como diferencial, la parte demandada probando que a lo que realmente se obligó fué al pago de la diferencia, podrá también lograr la absolución.

Art. 81. Principio general de derecho, que no tenía por qué invocarse de nuevo tratándose de operaciones bursátiles, de las no prohibidas.

Art. 82. Se discute si comprende a los comisionistas.

Art. 83. Define la utilidad de las Bolsas.

Art. 84. Reglamenta las operaciones bursátiles.

Art. 85. Incapaces para ejercer profesionalmente el comer-

⁽¹⁾ En estas notas seguimos la doctrina desarrollada por Carlos C. Malagarriga, *Código de Comercio Comentado*.



cio son los menores o las mujeres sin autorización, los clérigos, los magistrados y los quebrados e interdictos.

El segundo inciso limita los títulos que pueden admitirse en Bolsa públicamente, es decir, cotizados, pero no creemos que pueda impedir negociaciones sobre títulos, hechas en cualquier domicilio particular, en alguna oficina o aunque sea en la calle.

Art. 86 (1). « En este artículo nuestros legisladores de 1859 exageraron indudablemente un tanto el celo a que responden los demás artículos del Título. Invadieron, por otra parte, el campo del Código Penal y de las leyes Procesales.

« Por de pronto hay que observar que la sanción establecida tendrá que aplicarse a infracciones de muy diverso carácter y gravedad (Segovia, 302) y así en unos casos el mínimo de mil pesos será demasiado alto y en otros el máximo de cinco mil pesos resultará irrisorio.

« Agréguese que la aplicación de multa tan elevada debiera corresponder a otros jueces que los de comercio; pues importa una verdadera pena como en el mismo artículo se reconoce y para la aplicación de éstas hay jueces por lo general adecuados.

« Por otra parte el precepto invade el campo procesal cuya legislación no corresponde constitucionalmente a la Nación. Así podrá ocurrir que en una provincia donde el ejercicio de la acción pública sea negado a los particulares, no pueda quejarse contra un asesino la familia de la víctima, y, sin embargo, puede « cualquiera del pueblo » solicitar a los jueces de comercio la aplicación de nuestro artículo. »

Art. 112. No implica que se sujete a esta sanción la jurisdicción criminal para la que sólo es esencial la existencia de fraude o dolo.

Art. 269. No será aplicable cuando de la circunstancia supuesta hubiese resultado ventaja para el comisionista. Faltaría un elemento de la defraudación: el perjuicio.

Art. 278. El delito será en general el artículo 172 del Código Penal y especialmente el del art. 173, inc. 7°.

Art. 554. El supuesto de la condena a muerte ya no existe en nuestra legislación y a la penal es ajeno el suicidio (salvo para

(1) Copiamos literalmente el comentario antes citado por ser de la parte que más interesa al plan de la presente obra.



el instigador). En cuanto al desafío, el texto no introduce la excepción de los delitos de los cuales el asegurado pudo prevenir las consecuencias sobrevinientes. También debería exceptuarse el caso del que se admite que tiene obligación social de batirse, por ejemplo, por mediar ofensa grave de palabra o de obra.

Pero la muerte en duelo o en empresa criminal del tercero sobre cuya vida se realizó el seguro no eximirá al asegurador de su obligación de pagar la suma convenida al beneficiario del seguro, pues se tratará de hechos en que no intervino la voluntad de éste y por los cuales, en consecuencia, no puede verse perjudicado.

Ahora si la muerte en duelo de la persona sobre cuya vida se realizó el seguro fué cometida por el mismo que ha de reclamar el pago de éste, será un caso de aplicación del artículo 555 que establece que es nulo el seguro en el caso de que la persona que reclame el importe del seguro, sea autor de la muerte de la persona asegurada.

Art. 588. V. en página 277 la nota a los artículos 1178 y 1179 del Código Civil. El estelionato se llama hoy defraudación.

Art. 990. Los tripulantes pueden despedirse antes de empezado el viaje en los casos del artículo 224: 1° si el capitán altera el destino estipulado; 2° si después del contrato (matrícula) la República se encuentra en estado de guerra marítima o hay noticia cierta de peste en el lugar de destino; 3° si contratado para ir el barco en convoy no se verifica esto; 4° si el capitán muere o es despedido; 5° si se muda el buque (art. 996).

El artículo fué aplicado por la justicia federal (Dr. Jantus, 19 mayo 1928) a tripulantes que por el solo hecho de no haberseles abonado los sueldos correspondientes a un mes de *lock-out* hicieron abandono del buque cargado y listo para salir. La condena fué a cumplir el contrato y prestar servicio sin sueldo durante un mes con apremio de prisión.

En cuanto a los desertores, el decreto de 25 de enero de 1906, reglamentario de la ley de organización del cuerpo consular, establece que al funcionario consular argentino, a solicitud del capitán del buque mercante argentino, competirá pedir a la autoridad local la aprehensión y entrega de marineros desertores (a cargo de aquél la manutención).



Art. 1143. Esta responsabilidad criminal será la del artículo 172 del Código Penal.

Art. 1144. En el supuesto del primer inciso se requiere haya mediado fraude según el artículo 1137. « Todo préstamo a la gruesa en suma excedente al valor de los objetos sobre que recae, puede ser declarado nulo a instancias del dador, probándose fraude de parte del tomador ».

El segundo inciso es un caso de delito (siempre defraudación) por omisión y para establecer su existencia habrá que probarle al dador que tenía conocimiento de la circunstancia que omitió hacer saber o que no podía dejar de tener conocimiento en ella.

III^{bis}.—Leyes atinentes al Código de Comercio

I. N.º 4156. Quiebras. — II. N.º 5125. Balances de Sociedades Anónimas. — III. N.º 8875. Debentures. — IV. N.º 11.388. Sociedades cooperativas.

I.—Quiebras

N.º 4156
30 Diciembre
1902 Art. 53. La no presentación del deudor (que está en cesación de pagos) constituirá una presunción de fraude, y el Juez al declarar la quiebra ordenará su arresto y lo someterá al Juzgado de Instrucción criminal.

Art. 87. En cualquier tiempo si los procedimientos de la quiebra se encontrasen detenidos por insuficiencia del activo para ocurrir a los gastos, podrá el Juzgado, oído el dictamen del Síndico, pronunciar, aún de oficio, la clausura de las operaciones de la quiebra. Este hecho importará una presunción de fraude contra el deudor y el auto de clausura dispondrá que pase el expediente al Juez del Crimen que corresponda. Esta sentencia hará que vuelva cada acreedor al ejercicio de sus acciones individuales, así contra los bienes como contra la persona del fallido, salvo las limitaciones que en este Código se establecen.

Art. 135. Si del informe de los interventores resultaren indicios de culpa o fraude, se mandará remitir un testimonio de la parte pertinente de aquel informe y de los demás antecedentes y justificativos del caso, al Juez competente.

Art. 136. Los fallidos, culpables o fraudulentos y sus cómplices, serán castigados con arreglo a las disposiciones del Código Penal.



Art. 137. Para determinar la culpa, se tendrán presentes los hechos y circunstancias siguientes: 1° Si el fallido ha sido declarado nuevamente en quiebra, sin haber cumplido las obligaciones de un concordato precedente. Estas obligaciones se entenderán cumplidas para este efecto, siempre que el fallido hubiese pagado dividendos que alcanzaren al sesenta y cinco por ciento de la deuda total; 2° Si ha contraído por cuenta ajena sin recibir valores equivalentes, compromisos que se juzguen demasiado considerables, con relación a la situación que tenía cuando los contrajo; 3° Si no se ha presentado en el tiempo y en la forma establecida en esta ley; 4° Si se ausentase o no compareciese durante el progreso del juicio; 5° Si los gastos personales del fallido o de su casa, se considerasen excesivos, con relación a su capital y al número de personas de su familia; 6° Si hubiese perdido sumas considerables en el juego o en operaciones de agio o apuestas; 7° Si con el propósito de retardar la quiebra, hubiese revendido a pérdida o por menos del precio corriente, efectos que hubiese comprado al fiado en los seis meses anteriores a la declaración de quiebra, y cuyo precio se hallase todavía debiendo; 8° Si con el mismo propósito, hubiese recurrido en los seis meses anteriores a la prestación, a medios ruinosos de procurarse recursos; 9° Si después de la presentación o cesación de sus pagos, hubiese pagado a algún acreedor, con perjuicio de los demás; 10. Si constase que en el período transcurrido desde el último inventario hasta la presentación, hubo época en que el fallido estuvo en débito, por sus obligaciones directas, de una cantidad doble del haber que la que resultaba según el mismo inventario; 11. Si no hubiese llevado con regularidad sus libros en la forma determinada por este Código; 12. Si no hubiese cumplido con la obligación de registrar las capitulaciones matrimoniales u otras acciones especiales de propiedad de la mujer.

Art. 138. La quiebra se reputará fraudulenta en los casos en que concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1° Si se descubriese que el fallido ha supuesto gastos o pérdidas o no justificase la salida o existencia del activo de su último inventario, y del dinero o valores de cualquier género que hubiesen entrado posteriormente en su poder; 2° Si ocultase en el balance alguna cantidad de dinero, créditos, efectos u otra cualesquiera clase de bienes o derechos; 3° Si hubiese contraído deudas ficticias, otorgado escrituras simuladas, o se hubiese constituido deudor sin causa, ya sea por escritura pública o privada; 4° Si verificase enajenaciones simuladas de cualquiera clase que sea; 5° Si hubiese consumido y aplicado para sus negocios propios, fondos o efectos que le hubieren sido confiados en depósito, mandato o comisión, sin autorización del depositante, mandante o comitente; 6° Si hubiese comprado bienes de cualquier clase en nombre de tercera persona; 7° Si después de haberse hecho la declaración de quiebra, hubiese percibido y aplicado a usos personales, dinero, efectos, créditos de la masa, o por cualquier medio hubiese distraído de ésta alguna de sus pertenencias; 8° Si no hubiese llevado los libros que indispene-



sablemente debe tener todo comerciante, los hubiese ocultado o los presentasen trunucados o falsificados.

Art. 139. Serán considerados cómplices de quiebra fraudulenta: 1º Los que se hubieren confabulado con el fallido, haciendo aparecer créditos falsos, o alterando los verdaderos en cantidades o fechas; 2º Los que de cualquier modo hubieren cooperado para la ocultación o substracción de bienes, sea cual fuere su naturaleza, antes o después de la declaración de quiebra; 3º Los que ocultasen o rehusasen entregar al síndico, bienes, créditos o títulos que tengan del fallido; 4º Los que después de publicada la presentación en quiebra, admitieren cesiones o endosos particulares del fallido; 5º Los acreedores, aunque fueren legítimos, que hicieren concierto con el fallido en perjuicio de la masa; 6º Los corredores que interviniesen en cualquiera operación mercantil del fallido después de declarada la quiebra.

Art. 140. Los cómplices de los quebrados fraudulentos, además de la pena en que incurrn con arreglo a la legislación criminal, serán castigados: 1º A perder cualquier derecho que tengan en la masa de la quiebra; 2º A reintegrar a la misma los bienes, derechos, y acciones sobre cuya substracción hubiera recaído su complicidad; 3º A pagar a la masa por indemnización de daños y perjuicios, una suma igual al importe que intentaron defraudar.

Art. 141. Las quiebras de los corredores se reputarán siempre fraudulentas, sin admitirse excepción en contrario, siempre que se justifique que el corredor hizo por su cuenta, en nombre propio o ajeno, alguna operación mercantil, o que se constituyó garante de las operaciones en que intervino como corredor, aun cuando la quiebra no proceda de esas causas.

Art. 142. En todos los casos a que se refieren los artículos anteriores, el Juez tendrá presente: 1º La conducta del fallido en el cumplimiento de la obligación que le impone el art. 6; 2º El resultado de los balances que se formen de la situación mercantil del fallido; 3º El estado en que se encuentran los libros de su giro; 4º La relación que haya presentado el fallido sobre las causas de la quiebra y lo que resulte de los libros, documentos y papeles sobre el origen de aquélla; 5º Los méritos que ofrezcan las investigaciones a que se refiere el art. 20 y las pruebas que se produzcan en el término competente.

Art. 143. Los acreedores tendrán derecho a ser oídos como parte en juicio criminal, pero lo harán a su costa, sin acción a ser reintegrados por la masa de los gastos del juicio, cualquiera que sea el resultado de sus gestiones. La circunstancia de que el Juzgado de Comercio no hallare mérito para proceder contra la persona del fallido, con arreglo a las disposiciones del presente título, no será un inconveniente para seguir el procedimiento establecido, siempre que aparecieran en cualquier época del juicio de quiebra los indicios que dan lugar a dicho procedimiento.



1. Esta ley forma parte integrante del Código de Comercio cuyo libro IV deroga al substituirlo.

Se discute si el Congreso al dictar la ley de quiebras ha dictado la ley general para toda la Nación sobre bancarrotas a que se refiere el artículo 67, inciso 11, *in fine*, de la Constitución, o según lo que este inciso menciona al principio « dicta los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería »; mas de hecho el punto está resuelto por la misma ley, cuyo artículo 165, al derogar el libro IV del Código, añade que « el P. E. dispondrá que en la primera edición oficial del Código sea reemplazado dicho libro por los artículos de esta ley guardando la numeración correspondiente ».

Pero la doctrina es contraria a este procedimiento.

El doctor Agustín N. Matienzo en su *Curso de quiebras*, tomo I, página 75, sostiene el carácter federal de la ley de quiebras, y, por tanto, ser éstas de jurisdicción federal excluyente de las locales u ordinaria, y añade que « aun cuando se entendiera que por estar incluida en el Código de Comercio, su conocimiento debe conferirse a los tribunales ordinarios, siempre cabría observar que la reserva del artículo 67, inciso 11, no altera las jurisdicciones cuando por razón de la materia o las personas el asunto legislado en el Código es de competencia federal o provincial ». Y está el libro III del Código manifestamente federal y el caso de un contrato civil que siendo uno de los contratantes argentino y el otro extranjero, por razón de las personas, puede entender de él la justicia federal.

« El Congreso, añade, no ha podido dictar las leyes 48 (su artículo 12, inciso 3°) ni la 927 (art. 2° sobre juicios civiles y comerciales universales) en cuanto cercenan la jurisdicción federal en materia de quiebras. Nótese que la Constitución en su artículo 100 dispone expresamente que todas las causas que versen sobre las leyes nacionales, con la reserva del inciso 11 del artículo 67, corresponden al conocimiento de la justicia federal. La constitución lo ha dispuesto en forma imperativa y si la justicia federal ha sido creada para juzgar los asuntos de orden nacional, sería desnaturalizar los propósitos institucionales el entregar a los tribunales de provincia los asuntos que precisamente se ha querido quitar de su conocimiento... Esto se agrava con la falta de un recurso extraordinario ante la Corte, que lo ha declarado improcedente en repetidas ocasiones, lo que ha traído la anarquía en la jurisprudencia de esta materia ».



El doctor Carlos C. Malagarriga, en su *Código de Comercio comentado* (3ª edición, tomo IX, pág. 11), se inclina en el mismo sentido y alude a una encuesta realizada por la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, en la que se expresaron en igual forma los doctores Lamadrid, Tezanos Pinto, Martín y Herrera y Zavalía. Cree este autor que la referencia constitucional a la ley de bancarrotas se debe a haber copiado literalmente la Constitución norteamericana.

Mueve a creer esto último el empleo de la palabra *bancarrota* que nunca ha entrado en nuestra terminología legal, antigua ni moderna.

2. Entrando en el detalle del texto, observamos:

Art. 53. Se elude su severidad llamando al deudor « a dar explicaciones » con lo que se obtiene la *presentación* del deudor.

Lo curioso es que después de tanto rigor, en el texto, cuando llega el caso de sacarle consecuencias, no se considera la quiebra del no presentado, como fraudulenta, sino como culpable. Art. 137-3º.

Por lo demás, hoy no hay pena de arresto, sino de prisión que ya queda dicho cómo se evita.

Art. 87. Se ha intentado leer el texto como si dijera al Juez de sentencia y considerar como sumario lo actuado en el Juzgado de Comercio. Pero doctrina tan opuesta al procedimiento penal no ha prosperado.

Art. 135. No es preciso enviar el informe al Juez de Instrucción; la prueba de dolo o fraude no resulta del informe sino de las comprobaciones que haga dicho Juez para constatarlas.

Art. 136. La función del Juez de Comercio se reduce a plantear dentro de los términos de su ley propia, la comercial, los caracteres de una quiebra calificada como delito. Por su parte sigue sus procedimientos comerciales con prescindencia de la suerte que dentro de lo criminal está reservada a aquella presunción que toma el Juez del Crimen, tal como se la dan, a efectos de servir de cabeza en un juicio en que, como en todos los criminales, aquella presunción puede ser destruida por el procesado. En efecto, a pesar de la calificación comercial de la quiebra como culpable o fraudulenta, el tribunal represivo apli-



ca las leyes de fondo y de forma de su propia jurisdicción ⁽¹⁾.

Art. 137. Son varios grupos de indicios:

- a) Relacionados con la conducta privada: los n^{os} 5^o y 6^o;
- b) Con la conducta general del fallido: 2^o, 10^o, 11^o y 12^o;
- c) Sanción de otras prescripciones: 3^o y 9^o;
- d) Obligaciones del deudor: 1^o, 7^o, etc.

Art. 138. Los incisos 1^o a 5^o se refieren a hechos abiertamente delictuosos.

El 6^o presupone la ocultación prevista en el 2^o. Los 7^o y 8^o sancionan disposiciones de la ley.

A este respecto es de notar que el Código Penal no considera fraudulenta la quiebra más que en los casos que taxativamente enumera en su artículo 176, como no la considera culpable más que en los casos que enuncia aunque con mayor generalidad el 177.

Arts. 139 y 140. Escusado es decir que las conclusiones a que arriba la jurisdicción comercial en materia de complicidad no valdrán para la criminal que se atendrá a los arts. 46 y 47 del Código Penal para aplicarles, como autores o cómplices, las penas de los arts. 176-180 que han de ser norma de la Instrucción y en su día de la sentencia.

Art. 141. Pero el Juez del Crimen debe establecer si ha habido dolo o fraude.

Art. 142. Disposición por lo general indiferente para establecer la responsabilidad penal.

Art. 143. Autoriza la querella de los perjudicados y niega a los que intervinieran en el juicio criminal, derecho a ser reembolsados de los gastos que hubieran hecho, porque a la masa no le interesa en principio el castigo del fallido. Con este artículo, además, el Congreso ha invadido un terreno reservado a las provincias. Así en el caso de que una de éstas niegue al damnificado el derecho de con la querella coadyuvar a la acción del fiscal, la autorización contraria que le concede el Código de Comercio sería rechazada por el Tribunal provincial y llevado el caso a la Corte Suprema por el recurso extraordinario, ésta seguramente declararía inconstitucional el ar-

⁽¹⁾ También seguimos en todo esto la obra citada del Dr. Carlos C. Malagurri (lo copiado es del tomo IX, pág. 377), no creyendo que deban privarnos de esta satisfacción las repetidas citas que hace de nuestro libro: «Efectos de la quiebra».



título. En cuanto a la Capital regiría éste porque como en el caso del artículo 114 y quizás el 29 del Código Penal, el Congreso ha obrado no por el inciso 11 del artículo 67 de la Constitución Nacional, sino por el inciso 27.

II. — Balances de Sociedades Anónimas

Nº 5125
19 Setiembre
1907 Artículo 1º. Las sociedades anónimas nacionales y extranjeras tendrán la obligación de remitir trimestralmente sus balances a la Inspección General de Justicia para su aplicación, y mensualmente todos los balances de sociedades anónimas comprendidas en el art. 368 del Código de Comercio, ajustándose a una fórmula aprobada por el Ministro del ramo. El balance de las sucursales se referirá únicamente a las operaciones realizadas en el país.

Art. 2º. La omisión o falta de cumplimiento de esta obligación, será penada con una multa de 200 a 1.000 \$, sin perjuicio de quedar sujetas a la inspección, que en tal caso debe practicarse.

1. Una anterior ley sobre sociedades anónimas nº 3528, de 30 de septiembre de 1897, modifica el artículo 286 del Código de Comercio; no contiene referencia alguna a lo penal.

2. La multa a que se refiere el artículo 2º se impondrá por la Inspección de Justicia y se ejecutará ante el Juez de Comercio de la localidad respectiva.

El procedimiento será el civil y comercial que tenga cada provincia o la justicia ordinaria de la Capital en su caso.

III. — Debentures ⁽¹⁾

Nº 3875
23 Febrero
1912 Artículo 1º. Las sociedades anónimas y en comandita por acciones y las administraciones autónomas del Estado podrán contraer préstamos contra la emisión de debentures con o sin garantía, nominales o al portador, siempre que sus estatutos lo autoricen.

Art. 3º. Los que intenten emitir debentures, deberán celebrar pre-

(1) Un comentarista del Código, observa el uso de esta palabra inclusa en reemplazo de la «obligación» que empleaba el Código en los artículos 365-368 que la presente ley deroga. «Podría ella admitirse, dice, si los debentures de que habla la ley no fueran exactamente las obligaciones de los artículos derogados. Pero no es así. No hay más que examinar la ley para advertir que no se trata sino de un mayor



viamente un contrato con uno o varios representantes de los futuros tenedores de debentures, que se llamarán fideicomisarios, en el cual se estipule las condiciones del préstamo y las garantías que se otorguen a favor de los debentures en su caso y las demás cláusulas que se convengan. Este contrato deberá ser hecho en escritura pública e inscripto en el Registro Público de Comercio.

Art. 4°. Los debentures pueden ser emitidos sin garantía, con garantía especial o con garantía flotante (1).

Art. 5°. Debentures con garantía especial son aquellos en garantía de cuyo pago se afecte uno o varios bienes inmuebles determinados de la sociedad. Debentures con garantía flotante son aquellos en garantía de cuyo pago se afectan todos los derechos, bienes muebles y raíces, presentes o futuros, o una parte de ellos.

Art. 9°. La sociedad que hubiere constituido una garantía flotante, no podrá vender o ceder la totalidad de su activo, ni tampoco tal parte de su activo que imposibilite la continuación del giro de sus negocios o fusionarse con otra sociedad sin la autorización dada por la asamblea de los tenedores de debentures en la forma establecida en el art. 27 de esta ley.

Art. 12. Los que hubiesen emitido debentures con garantía flotante, no podrán otorgar otros debentures de igual carácter que tengan prioridad o que deban pagarse *pari passu*, con los primeros, salvo el consentimiento dado por la asamblea de los tenedores de obligaciones.

Art. 17. Los fideicomisarios tendrán todas las facultades comunes a los mandatarios, incluso las mencionadas en el art. 1881 del Código Civil con excepción de las determinadas en los números 4, 5, 6, 12, 14 y 15 del mismo artículo.

Art. 27. Cuando hubiera necesidad de reemplazar a un fideicomisario o cuando se tratase de la remoción sin causa de un fideicomisario, el Juez a pedido de uno de los fideicomisarios o de un número de tenedores que representen la vigésima parte del capital emitido de debentures, convocará a los tenedores de debentures a una asamblea, a la que serán aplicables los artículos 349 al 351 del Código de Comercio, nombrándose el reemplazante por mayoría del capital presente en la asamblea. En la primera convocatoria el quorum exigido será de la mitad del capital emitido en debentures. De la misma manera se convocará a la asamblea de tenedores de debentures, cada vez que se requiera una resolución de los tenedores de debentures, apli-

desarrollo, de una legislación más prolija de las obligaciones. Por otra parte, la ley que emplea 55 veces la palabra inglesa la reconoce sinónimo de obligación en varios de sus artículos. Aparece así toda la inutilidad del empleo en una ley argentina de una palabra inglesa, bárbara derivación del latín, en substitución de un sonoro vocablo castellano». (Carlos C. Malagarriga, Código de Comercio comentado, II 266, 3ª ed.).

(1) Sin garantía quiere decir que las obligaciones se emiten sin afectar especialmente a su pago algún bien social (especial) y sin establecer en favor de la colectividad de las obligaciones la llamada flotante. (Carlos C. Malagarriga, ob. cit., pág. 272).



cándose a sus resoluciones todas las disposiciones que rigen a las asambleas de las sociedades anónimas.

Art. 28. Las sociedades que pretendan emitir debentures o las que hubiesen tomado a su cargo la emisión del público, deberán formular previamente un prospecto, el que deberá ser inscripto en el Registro Público de Comercio en un registro especial, previa publicación por quince días en dos diarios del lugar en que se haga la emisión. No podrá empezar la emisión sino después de efectuado este registro y el que ordena el artículo 3 de esta ley.

Art. 29. El prospecto debe contener: 1º El monto del capital nominal, del capital suscripto y del capital realizado, de la sociedad deudora; 2º La descripción de la clase de negocios de la sociedad; 3º Los nombres de los administradores o directores; 4º El nombre de los fideicomisarios; 5º La inscripción del contrato de los fideicomisarios en el Registro Público de Comercio; 6º El monto de los debentures a emitir, las condiciones generales del contrato de préstamo y los derechos de los tenedores de debentures; 7º Las deudas con privilegio que la sociedad emisora tenga reconocidas al tiempo de hacer el prospecto y el monto de debentures emitidos con anterioridad; 8º Los principales bienes de la sociedad; 9º La cuenta de ganancias y pérdidas de los últimos dos ejercicios siempre que la Sociedad no exista de tiempo menor; 10. La firma de los administradores y directores de Sociedad y de los fideicomisarios, siendo los dos primeros solidariamente responsables por la exactitud de los datos contenidos en el prospecto.

Art. 30. Las sociedades constituidas en el extranjero que emitan debentures con garantía flotante que afecten bienes situados en la República, deberán proceder a registrar dentro de los seis meses a contar desde la fecha de la emisión, en el Registro Público de Comercio de la Capital Federal, el contrato de préstamo a que obedece la emisión de los debentures y del cual surja el monto de los debentures emitidos y las garantías otorgadas a favor de ellos, so pena de que esas garantías no surtirán efecto en la República. Si los bienes de la sociedad estuvieren situados exclusivamente en el territorio de una sola provincia, la inscripción se hará en el Registro de Comercio que corresponda; toda emisión de debentures con garantía que no se limite a la garantía de bienes inmuebles determinados, se considerarán emitidos con garantía flotante. Si la garantía fuese especial, deberá procederse también a su registro en el Registro de Hipotecas donde estuviera situado el bien afectado. Las inscripciones de que habla este artículo, se harán a solicitud de la sociedad, de los fideicomisarios o de cualquier tenedor de debentures. La falta de cumplimiento de estas disposiciones será penada con una multa de 1.000 pesos a cargo de la sociedad deudora, por cada mes de retardo.

Art. 34. Los directores y Administradores que violasen las disposiciones de los arts. 3, 9, 28 y 29 de la presente ley, serán personal y solidariamente responsables de las pérdidas que sufran los tenedores de



debentures, pudiendo el Juez además aplicar una pena de arresto de seis meses, si no fuesen satisfechos los perjuicios en el término que ordene en la sentencia y sin perjuicio de la acción criminal que pueda corresponder.

Art. 35. Los fideicomisarios no contraen responsabilidad personal salvo el caso de grave culpa o negligencia en el desempeño del mandato, que el Juzgado apreciará libremente en cada caso y sin perjuicio de la acción criminal a que hubiere lugar.

Art. 36. Quedan derogadas todas las disposiciones vigentes que se opongan a la presente ley, la que queda incorporada al Código de Comercio en substitución de los arts. 365 a 368.

1. Los artículos del Código de Comercio substituídos por la presente son, según el artículo 36 de ésta, los siguientes:

Art. 365. Las sociedades anónimas pueden emitir bonos u obligaciones, nominales o al portador, hasta el monto del capital realizado y existente, conforme al último balance aprobado.

Art. 366. No estando autorizada por los estatutos la emisión de obligaciones, sólo podrá hacerse por resolución de la asamblea general.

Art. 367. Si para la emisión de obligaciones se hubiere de recurrir a la subscripción pública, se indicarán en los programas todas las circunstancias sobre el estado de la sociedad y el objeto y condiciones de la emisión que sean necesarias para el juicio exacto de los subscriptores.

Art. 368. Las sociedades que emitieren obligaciones conforme a los artículos anteriores, deberán publicar mensualmente un balance de su activo y pasivo.

2. No insertamos de la ley más que los artículos que explican o a que se aplican las disposiciones de carácter penal.

3. El artículo 34 establece el supuesto de que una sentencia judicial, del Juez de Comercio, determine la responsabilidad de los directores y administradores que por faltar a las prescripciones de los artículos 9, 28 y 29 hayan causado perjuicios a los tenedores de debentures. Se supone que éstos habrán iniciado la correspondiente acción de carácter civil o comercial. Tendríamos entonces que el Juez al fallar este pleito civil, declarar bien fundada la acción y fijar el monto de los perjuicios, al ejecutar la sentencia y no siendo ésta cumplida por el demandado o demandados, les impondría una pena de arresto lo cual va contra todas las reglas procesales civiles.

Si el supuesto de la ley es que el que ha fijado el monto



de la indemnización es un Juez del Crimen en proceso contra directores o administradores, no ha podido hacer más que como una de las cláusulas de la sentencia, condenarlos a una pena, art. 29 del Código Penal. Siendo así y suponiendo que la pena fuera de tres meses de arresto y aun de un año de prisión, con cumplirla el condenado o los condenados quedaban libres de toda responsabilidad corporal, no de la civil; y por más que rehuyeran esta última no podrían ser condenados a los seis meses de arresto de nuestro artículo 34 por una regla de derecho penal; *non bis in idem*.

Pero es que el artículo viola esta regla al establecer que además de la pena de arresto, cabe la acción criminal.

Quiere decir que el primer supuesto es el de la ley y ya hemos visto que no se puede cumplir.

Quiere también decir que el redactor de la ley que con el título que le dió demostró ser ajeno a las cuestiones léxicas, con estas raras disposiciones punitivo civiles, probó ser también ajeno a la ciencia penal.

IV. — Sociedades Cooperativas

Nº 11388 Artículo 1º. Las sociedades cooperativas se registrarán
20 Diciembre por las disposiciones de la presente ley.
1926

Art. 2º. Sólo podrán denominarse «cooperativas» las sociedades que, además de este título, reuman los caracteres siguientes: 1º Acompañar su nombre social con la palabra «limitada»; 2º No poner límite estatutario al número de socios, ni al de las acciones, ni al capital social, ni a la duración de la sociedad; 3º Las acciones serán nominativas o indivisibles y transferibles, solamente con acuerdo del directorio en las condiciones que determinen los estatutos. Todas las acciones, una vez integradas, serán del mismo valor; 4º Cada socio no tendrá más que un voto, sea cual fuere el número de sus acciones; 5º Expresarán en sus estatutos las condiciones de admisión, cese o exclusión de los socios. Los socios tienen derecho de salir de la sociedad en la época establecida en los estatutos, y a falta de ésta, al fin de cada año social, dando aviso con 10 días de anticipación. 6º Cuando los estatutos de la sociedad establezcan una cuota de entrada, no podrá elevarse a título de compensación por las reservas sociales; 7º Los socios salientes por cualquier causa, no tendrán derecho individual alguno sobre las reservas sociales; 8º En caso de liquidación de la sociedad, los fondos de reserva se entregarán al fisco nacional o provincial, según el domicilio real de la sociedad, para fines de educación económica del pueblo; 9º No concede-



rán ventaja ni privilegio alguno a los iniciadores, fundadores y directores, ni preferencia a parte alguna del capital; 10. No podrán remunerar con comisión ni en otra forma a quien aporte nuevos socios o coloque acciones; 11. No podrán tener por fin principal ni accesorio la propaganda de ideas políticas, religiosas, de nacionalidades o regiones determinadas; ni imponer como condición de admisión la vinculación de los socios con organizaciones religiosas, partidos políticos o agrupaciones de nacionalidades o regionales; 12. No podrán conceder créditos para el consumo; 13. De los servicios de la sociedad, sólo podrán hacer uso los socios; 14. El Directorio, sin excluir socios, podrá ordenar, en cualquier momento, el retiro de capital a los socios con mayor número de acciones. Si todos los socios tuvieran igual número de acciones, el retiro se hará a prorrata; 15. Cuando efectúen préstamos en dinero a los socios, no cobrarán a título de premio, prima o con otro nombre, suma alguna que reduzca la cantidad efectiva prestada a menos del monto nominal del préstamo, salvo el descuento por el pago de intereses, si así se hubiera establecido. El interés no podrá exceder más del 1 % de la tasa efectiva cobrada por los bancos oficiales en operaciones semejantes, y no podrá ser aumentado durante la vigencia del préstamo. Los préstamos podrán ser cancelados en cualquier momento por el prestatario, sin recargo alguno de interés; 16. De las utilidades realizadas y líquidas, podrá pagarse sobre el capital empleado en operaciones que no sean de crédito, un interés que no exceda del uno por ciento al que cobra el Banco de la Nación en sus descuentos; 17. De las utilidades realizadas y líquidas de cada ejercicio, se destinará por lo menos el 5 % al fondo de reserva y se distribuirá el 90 % entre los socios: a) En las cooperativas o secciones de consumo, en proporción al consumo hecho por cada socio; b) En las cooperativas de producción, en proporción al trabajo hecho por cada uno; c) En las cooperativas o secciones de adquisición de elementos de trabajo y de transformación y venta de productos, en proporción al monto de las operaciones de cada socio con la sociedad; d) En las cooperativas o secciones de crédito, en proporción al capital; 18. Los balances y memorias del Directorio serán anuales y sometidos con igual periodicidad a la asamblea que se celebrará dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio; 19. Las asambleas serán convocadas por lo menos con ocho días de anticipación, en la forma que cada sociedad establezca en sus estatutos, y se celebrarán, sea cual fuere el número de los socios concurrentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se ha reunido ya la mitad más uno de los socios; 20. Los estatutos podrán prohibir el voto por poder o autorizarlo. Si autorizan el voto por poder, las representaciones deberán recaer en un asociado, y éste, no podrá representar más de dos socios; 21. Cuando los socios pasen de 10.000, la asamblea general será substituída por una asamblea de delegados elegidos en asambleas electorales de secciones o de distrito, en las condiciones que determinen los estatutos. Igual procedimiento pueden adoptar los



estatutos para la representación de los socios que residan en localidades distintas del lugar de la asamblea general; 22. Para el control de las cuentas sociales, la asamblea elegirá un síndico titular y otro suplente. Podrá elegir también para el control de la marcha de la sociedad, un consejo de inspección formado por un número de socios doble del de los miembros del Directorio y auxiliar de éste.

Art. 3°. Las sociedades cooperativas podrán ampliar su objeto y fusionarse con otra u otras de la misma naturaleza por el voto de la mayoría de la asamblea ordinaria, siempre que el asunto figure en la orden del día. La ampliación de su objeto o la fusión, serán registradas e inscriptas en la forma establecida en los artículos 5° y 6° de esta ley.

Art. 4°. Las sociedades cooperativas podrán asociarse entre sí por el voto de la mayoría de la asamblea ordinaria, para constituir una cooperativa de cooperativas y hacer operaciones en común, según los principios establecidos en esta ley.

Art. 5°. Las sociedades cooperativas podrán constituirse válidamente sin necesidad de escritura pública, labrándose actas por duplicado, las que deberán ser firmadas por los constituyentes e inscriptas en un registro especial que llevará el Ministerio de Agricultura.

Art. 6°. Para el reconocimiento y autorización de una sociedad cooperativa, bastará la presentación de la lista de los socios, de una copia de los estatutos sociales y la constancia de la instalación de la sociedad, ya en operaciones o bien el depósito bancario de la vigésima parte del capital subscrito. Las sociedades constituidas de acuerdo con las disposiciones de esta ley serán autorizadas a funcionar dentro de los 90 días de su solicitud.

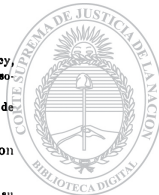
Art. 7°. Los menores de más de 18 años de edad y las mujeres casadas pueden ingresar a las cooperativas sin autorización paternal ni marital y disponer por sí solos de su haber en ellas.

Art. 8°. Las sociedades cooperativas existentes deberán sujetarse dentro de un año de su promulgación a las disposiciones de la presente ley si desean conservar la denominación de «cooperativas». Las que no lo hicieren incurrirán en la penalidad establecida en el artículo siguiente.

Art. 9°. Queda prohibido el uso de la palabra «cooperativa» en el nombre de cualquier sociedad o empresa posterior a la fecha de la promulgación de esta ley, que no se haya constituido de acuerdo con sus disposiciones. La violación de esta prohibición será penada con multa, desde 500 hasta 2.000 pesos y la clausura del establecimiento, oficina, locales de ventas y demás dependencias públicas de la sociedad o empresa, mientras no se suprima el uso indebido de la palabra «cooperativa».

Art. 10. El Ministro de Agricultura tendrá a su cargo el control público de las sociedades cooperativas...

Art. 11. Quedan derogados los artículos 392, 393 y 394 del Código de Comercio y toda otra disposición que se oponga a la presente. Para



las sociedades cooperativas constituidas según las normas de esta ley, rigen subsidiariamente las prescripciones del Código de Comercio sobre las sociedades anónimas en cuanto no sean contrarias.

Art. 12. Esta ley se incorporará en título especial al Código de Comercio.

1. Los artículos del Código de Comercio derogados son los siguientes:

Art. 392. Las sociedades cooperativas deberán adoptar para su constitución alguna de las formas establecidas en los capítulos anteriores (colectivas o anónimas), y quedarán sujetas a las respectivas prescripciones con las modificaciones del presente capítulo. Deberán siempre acompañar su firma o denominación social con las palabras **Sociedad Cooperativa Limitada o Ilimitada**, según fuere.

Art. 293. En el acto constitutivo deberán siempre expresarse las condiciones de admisión y cese o conclusión de los socios, así como el minimum del capital social y la manera de constituirlo. El capital podrá aumentarse conforme al acto constitutivo.

Art. 394. Las acciones serán siempre nominales, y cada socio no podrá tener más que un voto, sea cual fuere el número de ellas que posea. Salvo estipulación expresa en contrario, los socios tienen derecho de salir de la sociedad en las épocas establecidas, o a falta de ésta al fin de cada año social, dando aviso con diez días de anticipación.

2. Realmente era una legislación muy diminuta de esas sociedades. Muchos creen que la actual peca en cambio de excesiva.

3. Disposición penal no contiene esta ley más que la del artículo 9, pero sus penas accesorias de la de multa no creemos que corresponde al juez imponerlas y mucho menos levantarlas: será asunto administrativo o policial.

IV. — Del Código de Minería

Nº 1919
8 Diciembre
1887

Art. 1º. El Código de Minería rige los derechos, obligaciones y procedimientos referentes a la adquisición, explotación y aprovechamiento de las sustancias minerales.

Art. 2º. Con relación a los derechos que este Código reconoce y acuerda, las minas se dividen en tres categorías: 1º Minas de las que el suelo es un accesorio, que pertenecen exclusivamente al Estado, y que sólo pueden explotarse en virtud de concesión otorgada por autoridad competente; 2º Minas que por razón de su importancia, se con-



ceden preferentemente al dueño del suelo; y minas que, por las condiciones de su yacimiento, se destinan al aprovechamiento común; 3^ª Minas que pertenecen únicamente al propietario, y que nadie puede explotar sin su consentimiento, salvo por motivos de utilidad pública.

Art. 3^º. Corresponden a la primera categoría las instalaciones metalíferas siguientes: oro, plata, platino, mercurio, cobre, hierro, plomo, estaño, zinc, níquel, cobalto, bismuto, manganeso y antimonio. Los combustibles: hulla, lignito, antracita, betunes y aceites minerales. El arsénico, las piedras preciosas (según la ley n^º 10388 de 16 de julio de 1918, también la mica y el wolfram).

Art. 4^º. Se comprenden en la segunda categoría: 1^º Las arenas metalíferas y piedras preciosas que se encuentran en el lecho de los ríos y aguas corrientes, y los placeres; 2^º Los desmontes, relaves y escoriales de explotaciones anteriores, mientras las minas permanecen despobladas, y los relaves y escoriales de los establecimientos de beneficio abandonados o abiertos, en tanto que no las recobre su dueño; 3^º Los boratos y salitres; 4^º Las salinas y turberas; 5^º Los metales no comprendidos en la primera categoría; 6^º Las tierras piritosas, vitrílicas, aluminosas, magnesianas y de batán; el esmeril, oceres, almágres, resinas, esteatitas, fosfatos calizos, azufre, baritina, espato-fluor, caparrosas, grafito, kaolin, sales alcalinas o alcalino terrosas.

Art. 5^º. Componen la tercera categoría las producciones minerales de naturaleza pétreo o terrosa y en general todas las que sirven para materiales de construcción y ornamento cuyo conjunto forman las canteras.

Art. 7^º. Las minas son bienes privados de la nación o de las provincias, según el territorio en que se encuentren.

Art. 8^º. Concédese a los particulares la facultad de buscar minas, de aprovecharlas y disponer de ellas como dueños, con arreglo a las proscripciones de este Código.

Art. 9^º. El Estado no puede explotar ni disponer de las minas, sino en los casos expresados en la presente ley.

Art. 10. La propiedad particular de las minas se establece por la concesión legal.

Art. 11. Las minas forman una propiedad distinta de la del terreno en que se encuentran; pero se rigen por los mismos principios que la propiedad común, salvo las disposiciones especiales de este Código.

Art. 12. Las minas son inmuebles. Se consideran también inmuebles las cosas destinadas a la explotación con carácter de perpetuidad, como las construcciones, máquinas, aparatos, instrumentos, animales y vehículos empleados en el servicio interior de la pertenencia, sea superficial o subterráneo, y las provisiones necesarias para la continuación de los trabajos que se llevan en la mina por el término de ciento veinte días.

Art. 13. La explotación de las minas, su explotación, concesión y demás actos consiguientes, revisten el carácter de utilidad pública. La utilidad pública se supone en todo lo relativo al espacio comprendido



dentro del perímetro de la concesión. La utilidad pública se establece fuera de ese perímetro, probando ante la autoridad minera la utilidad inmediata que resulta a la explotación.

Art. 14. Es prohibida la división material de las minas, tanto en relación a sus dueños como respecto de terceros. Ni los dueños, ni terceros, pueden explotar una región o una parte de la mina, independientemente de la explotación general.

Art. 15. Cuando las minas consten de dos o más pertenencias, la autoridad permitirá a solicitud de las partes, que se haga la separación siempre que, previo reconocimiento pericial, no resulte perjuicio ni dificultad para la explotación independiente de cada una de ellas. Las diligencias de separación se inscribirán en el registro de minas, y las nuevas pertenencias quedan sujetas a las prescripciones que rigen las pertenencias ordinarias.

Art. 16. Las minas sólo pueden ser expropiadas por causa de utilidad pública de un orden superior a la razón del privilegio que les acuerda el artículo 13 de este Código.

Art. 17. Los trabajos de las minas no pueden ser impedidos ni suspendidos, sino cuando así lo exija la seguridad pública, la conservación de las pertenencias y la salud o existencia de los trabajadores.

Art. 18. Las minas se conceden a los particulares por tiempo ilimitado.

Art. 19. Toda persona capaz de adquirir y poseer legalmente propiedades raíces, puede adquirir y poseer las minas.

Art. 38... (Cateo). El explorador no puede establecer una explotación formal ni hacer extracción de minerales, antes de la concesión legal de la mina, pero hace suyos y podrá disponer de los que extraiga de las calicatas o encuentre en la superficie o necesite arrancar para la prosecución de los trabajos de cateo ni hacer minerales, antes de la cesación legal de la mina. En caso de contravención se mandará suspender todo trabajo hasta que se haga la manifestación y registro, y se pagará una multa de 25 hasta 300 pesos, según la importancia del hecho.

Art. 67. Los establecimientos públicos de fundición y beneficio de minerales se sujetarán a las disposiciones que rigen las empresas industriales comunes.

Art. 68. Son de aprovechamiento común las substancias comprendidas en los números primero y segundo del artículo cuarto. Cuando las enumeradas en los números tercero y siguientes de dicho artículo cuarto están en terreno de dominio particular corresponden preferentemente al propietario; pero la autoridad las concederá al primer solicitante, siempre que el dueño, requerido el efecto, no las explote dentro del término de cien días, o no declare en el de veinte, su voluntad de explotarlas.

Art. 69. No son de aprovechamiento común las substancias comprendidas en el número primero de dicho artículo cuarto, cuando se encuentran en terrenos cultivados.



Art. 70. Para el aprovechamiento de las substancias comprendidas en el inciso primero del artículo 68, no se requiere concesión, permiso ni aviso previo.

Art. 71. A solicitud de cualquiera persona, la autoridad declarará de aprovechamiento común, cualquiera que sea el dueño de los terrenos donde se encuentren, los terrenos, relaves y escoriales procedentes de minas o establecimientos de beneficio abandonados, previas las comprobaciones necesarias. Con la publicación de esa declaración, podrán aprovecharse los depósitos sin necesidad de licencia, aviso ni otra formalidad.

Art. 97. No podrá suspenderse la explotación de los establecimientos fijos, ni de las concesiones para el aprovechamiento de los desmontes, escoriales y relaves, sin dar previo aviso al juez del mineral, quien lo hará constar en un libro especial destinado a los negocios de minas; firmando las diligencias con el escribano; y a falta de éste, dos testigos abonados y el interesado, al que se le dará la correspondiente copia. No se concederá la suspensión de los trabajos por más de cincuenta días en un año.

Art. 98. Son denunciabiles las concesiones a que se refiere el artículo precedente cuando no habiéndose dado el aviso, o estando vencido el tiempo de la suspensión, se encontrare la mina sin trabajo por el espacio de veinte días. Para verificar el hecho, el juez del mineral, a solicitud del denunciante y acompañado del escribano, y a falta de éste, dos testigos, inspeccionará la mina en días y horas hábiles, y extenderá la diligencia.

Art. 99. No oponiéndose el concesionario, podrá optar entre el abandono de la mina o el pago de una multa, que no baje de doscientos pesos, ni exceda de quinientos. La multa se adjudicará al denunciante.

Art. 100. Declarado o reconocido el despueblo, se adjudicará la mina al solicitante o se entregará al aprovechamiento común o se dejará a disposición del propietario según los casos. Será causa especial de despueblo en las concesiones, para el beneficio de las producciones de ríos y placeres no haber ejecutado las obras y aparatos, dentro de los términos señalados.

Art. 101. Las concesiones referentes al número tercero y siguientes, del artículo 4º se sujetarán con relación al despueblo, a las reglas establecidas para las pertenencias de la primera categoría. El concesionario podrá en este caso, optar entre el abandono de la mina o el pago de una multa a favor del denunciante, que no baje de cien pesos ni pase de trescientos.

Art. 106. Substancias de la tercera categoría. El Estado y las municipalidades pueden ceder gratuita o condicionalmente y celebrar toda clase de contratos con referencia a las canteras, cuando se encuentran en terrenos de su dominio. Mientras tanto, estas canteras serán de aprovechamiento común.

Art. 107. Cuando haya de cederse a un tercero, por cualquier título o onusa, el sitio que otro está explotando en virtud de lo dispues-



to en el artículo anterior, el ocupante será preferido bajo las mismas condiciones.

Art. 108. Si las substancias se encuentran en terreno de dominio privado, un tercero podrá explotarlas con tal que la empresa se declare de utilidad pública. En este caso se dará al propietario la preferencia para que las explote por su cuenta bajo las mismas condiciones que proponga el ocurrente.

Art. 109. La explotación de las canteras está sometida a las disposiciones de este Código y de los reglamentos de las minas en lo concerniente a la policía y seguridad de las labores.

Art. 110. Las minas se adquieren en virtud de la concesión legal otorgada por autoridad competente con arreglo a las proscriptpciones del presente Código. Son objeto de concesión: Los descubrimientos. Las minas nuevas en criaderos conocidos. Las minas caducadas.

Art. 149. El dueño de una mina que quiera abandonarla, lo declarará por escrito ante la autoridad minera con veinte días de anticipación. Este escrito comprenderá el nombre de la mina, el del mineral en que se encuentra, la clase de substancias que se explota y el estado de sus labores. El escrito con su proveído se asentará en el libro correspondiente a los registros, y se publicará.

Art. 153. No dándose el aviso de abandono, se pagará a favor del denunciante de la mina, declarado que sea el despueblo, una multa de cincuenta a doscientos pesos, según las facultades de los dueños. En el mismo caso, se perderá el derecho de retirar o cobrar el valor de lo dispuesto en los dos precedentes incisos, sesenta días después de verificado el hecho del despueblo; quedando ya el caso sujeto a las reglas especiales del denuncia.

Art. 247. Los dueños de minas deben mantener constantemente firmes y bien conservados sus linderos. Si están deteriorados o en parte destruidos, deben ocurrir a la autoridad para que ordene la reparación con citación de los colindantes. Si los linderos han desaparecido o han sido removidos, se ocurrirá igualmente a la autoridad para que designe al ingeniero que, previa la citación, marque los puntos en donde deben colocarse con arreglo a los títulos del interesado. El juez del mineral presidirá la diligencia, ordenará y hará efectiva la citación y cuidará de que los linderos se construyan en los puntos marcados, extendiendo de todo constancia. Si los dueños de las pertenencias colindantes no se encuentran ni en el mineral ni en el municipio residencia de la autoridad, el juez mandará citar al administrador o a la persona que ocupe la pertenencia. Se señalará al minero un término, que no baje de veinte días, ni exceda de cuarenta, para que proceda a la reparación o reposición de los linderos. No verificándolo, pagará una multa de veinte pesos, que puede extenderse hasta cincuenta.

Art. 282. Los mineros pueden explotar sus pertenencias libremente, sin sujeción a otras reglas que las de seguridad y policía prescriptas en este Código y que prescriban los reglamentos. A este fin, la autoridad ejercerá una constante vigilancia por sí y por medio de sus agentes.



Art. 283. Las labores de las minas se mantendrán en completo estado de seguridad; y cuando por la poca consistencia del terreno o por cualquier otra causa, haya riesgo de un desplome o de un derrumbamiento, los dueños deben fortificarlas convenientemente, dando oportuno aviso a la autoridad.

Art. 284. No podrán quitarse ni rebajarse los pilares, puentes o macizos, sin el permiso de la autoridad, que lo otorgará, previo el reconocimiento o informe del ingeniero de minas. Si el informe fuere contrario o los medios propuestos no convinieren al propietario, la autoridad resolverá admitiendo las pruebas legales que se presentaren y nombrando nuevo perito, si fuese necesario.

Art. 285. En las minas deben conservarse limpias, ventiladas y desarradas todas las labores necesarias o útiles para la explotación.

Art. 286. Las escaleras, aparatos y labores destinados al tránsito o descenso de los operarios y demás personas empleadas en la mina, deben ser cómodas y seguras. Se suspenderán los trabajos cuando los medios de comunicación y tránsito no ofrezcan la seguridad suficiente, y mientras se reparan o construyen. Pero los trabajos continuarán en las labores expeditas.

Art. 287. Para la comunicación o desagüe de las labores superiores por medio de trabajos a nivel inferior, es necesario el permiso de la autoridad, que lo otorgará previo informe de un ingeniero. Los interesados podrán reclamar ante la misma autoridad si encuentran inconvenientes las medidas de precaución que se les impongan.

Art. 288. No debe emplearse en las minas niños menores de diez años, ni ocuparse en los trabajos internos niños impúberes ni mujeres.

Art. 289. En el caso de sobrevenir algún accidente que ocasiona muertes, heridas o lesiones u otros daños, los dueños, directores o encargados de las minas darán aviso al juez del mineral o al más inmediato, quien lo transmitirá sin dilación a la autoridad minera. Desde el momento en que el Juez adquiera conocimiento del suceso, adoptará las medidas necesarias para hacer desaparecer todo peligro; valiéndose al efecto del ingeniero o perito que exista en el asiento minero. Sin perjuicio de estas medidas, procederá a levantar información sumaria de los hechos y de sus causas.

Art. 290. El mismo aviso debe darse siempre que haya motivo para temer cualquier accidente grave. El aviso se dirigirá a la autoridad minera, sin perjuicio de comunicarlo oportunamente al Juez del mineral.

Art. 291. La autoridad, acompañada del ingeniero o perito oficial y del escribano, y a falta de éste de dos testigos, visitará una vez cada año por lo menos los minerales sujetos a su jurisdicción. Si en las visitas encontrase que se ha faltado a alguna de las disposiciones de esta sección o de las demás referentes a la seguridad, orden y policía, dictará y mandará ejecutar las medidas convenientes. Si de la inspección resultare que la vida de las personas o la conservación de las minas corren peligro, mandará suspender los trabajos.

Art. 292. Las infracciones de lo dispuesto en los artículos anterior-



res, serán penadas: Lo de los arts. 283 y 289, con una multa de cien a quinientos pesos. La del art. 284, con una multa de doscientos pesos, que puede extenderse hasta dos mil, según el valor de los minerales extraídos, y sin perjuicio de la responsabilidad personal. La de los arts. 285, 286, y 287, con cincuenta a trescientos pesos. Y la del artículo 288, con veinte a cien pesos.

Art. 293. Siempre que el Juez del mineral o el ingeniero oficial tenga de cualquier manera conocimiento de algún accidente o de alguna contravención a las precedentes disposiciones, concurrirán a la mina, verificarán los hechos, extenderán la correspondiente constancia con asistencia de escribano, y a falta de éste, de dos testigos. Si se tratase de un siniestro, se adoptarán las medidas que la gravedad y urgencia del caso requirieren. Procederá cualquiera de ellos, el juez o el ingeniero, si ambos no hubieren concurrido.

Art. 294. La autoridad, con el informe del ingeniero, mandará que se hagan efectivas las multas correspondientes, notificando al minero que para dentro de un término prudencial haga las reparaciones convenientes, bajo apercibimiento de pagar una nueva multa. En el caso de oposición, la autoridad nombrará un nuevo perito si fuese necesario, pudiendo el interesado nombrar otro por su parte. Con el informe de estos peritos y teniendo presente el del perito oficial, se resolverá definitivamente.

Art. 349. Las minas pueden venderse y transmitirse como se venden y transmiten los bienes raíces. En consecuencia, el descubridor de un criadero puede vender y transmitir los derechos que adquiere por el hecho del descubrimiento.

Art. 350. Nadie puede comprar minerales a los operarios, sirvientes o empleados de una mina, sin autorización de su dueño, visada por el Juez del mineral. Los que contravengan a lo dispuesto en el párrafo anterior, pagarán una multa de veinticinco a doscientos pesos, debiendo embargarse los minerales hasta que se pruebe que pertenecían al vendedor o que estaba autorizado a venderlos.

1. En este Código se habla de « juez del mineral », de la « autoridad minera » o simplemente de la autoridad, del ingeniero oficial y del escribano de minas. Pero no se indica de dónde salen esos funcionarios y cuáles son sus atribuciones.

Tampoco podría hacer esto la ley que a pesar de que en su artículo 1º se refiere a procedimientos, no toca para nada los judiciales y aun los administrativos los reduce a lo preciso.

Se debe esto al carácter del Código que es ley común en el sentido de que la jurisdicción nacional como las provinciales deben aplicarlo. Lo primero en lo que toca a los territorios nacionales; lo segundo según lo que en su autonomía admi-



nistrativa y judicial cada una de las provincias establezca. En algunas de éstas hay autoridades de minas y jueces del mineral y todo lo que el Código previene.

En lo nacional, que se concreta a los territorios, el juez letrado es el juez del mineral. En cuanto a « la autoridad » un decreto del P. E. de 27 de junio de 1912 determina que « las funciones atribuidas por el Código de Minería a la autoridad minera serán en adelante desempeñadas por la Dirección General de Minas, Geología e Hidrología, mientras no se dicte la ley organizando los tribunales de minas (art. 1º) de cuyas resoluciones (art. 2º) podrá interponerse recurso de apelación ante el Ministerio de Agricultura dentro del plazo improrrogable de 15 días, a contar desde la fecha de la correspondiente notificación, salvo los casos en que el término para la apelación sea alguno de los fijados por el Código de Minería. »

2. El Código de Minería no sufrió modificación alguna durante casi treinta años. En 12 de noviembre de 1917 el Congreso dictó la ley 10.273 alterando algunas disposiciones de la antigua, principalmente en materia de despueble.

Su último artículo, 18, dice:

Los jueces y las autoridades administrativas en tales casos y mientras no se sancione la reforma general del Código, aplicarán las disposiciones del actual, teniendo en cuenta la supresión del pueble por trabajo y el denuncia por despueble; y en los casos de silencio u obscuridad insubstituíbles, se guiarán por los principios generales de esta legislación, por los del Código Civil y por los de leyes análogas.

3. La ley que se acaba de citar habla de la reforma del Código. Más modestamente el decreto de 1912 anunciaba una ley de tribunales de minas.

Pero ni una ni otra reforma parecen inmediatas, aunque haya pasado a ser una preocupación general la llamada cuestión « del petróleo » que involucra cuestiones constitucionales y que por la creciente importancia del producto tiene ya una extensa bibliografía de derecho comparado.



V.—Código Rural para los Territorios Nacionales

LIBRO PRIMERO

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Nº 3088
14 Agosto
1894

Artículo 1º Las disposiciones de este Código serán exclusivamente aplicables a los «Territorios Nacionales».

Art. 2º Las autoridades superiores deberán poner en conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional, las dificultades que ofrezca su aplicación, así como las reformas o ampliaciones que fueran requeridas para el mejor servicio público.

Art. 3º. La posesión de las tierras fiscales será acordada por los Gobiernos de los Territorios, con sujeción a las condiciones que el Poder Ejecutivo establezca, e instrucciones que al efecto les sean comunicadas por la Oficina de Tierras y Colonias.

Art. 4º. Los Gobernadores de los Territorios Nacionales deberán dar cuenta anualmente a la Oficina de Tierras y Colonias, del estado de las tierras fiscales en el territorio de su jurisdicción, y las concesiones que hubiesen otorgado conforme al artículo precedente.

Art. 5º. Corresponde a los Gobernadores de Territorios la guarda, conservación y fomento de los bosques en terrenos fiscales, sin que sea permitida la explotación de éstos u otros productos del suelo, sin concesión escrita del Gobierno Federal y con sujeción a las disposiciones especiales.

Art. 6º. Todas las infracciones a las disposiciones de este Código, que no tengan una pena especialmente establecida, serán castigadas con multa que se graduará de 5 a 50 pesos, según su gravedad.

TÍTULO II

CAZA Y PESCA

CAPÍTULO UNICO

Art. 7º. La apropiación por la caza que establece el Código Civil, se ajustará a las prescripciones del presente título.

Art. 8º. La caza no será permitida sino en las épocas que deberá fijar la autoridad administrativa de cada Gobernación. Los animales



dasinos podrán ser destruidos en todo tiempo por los propietarios o encargados de terrenos en que se encuentran. La caza de animales insectívoros será prohibida en todo tiempo.

Art. 9°. En ninguna época podrá cazarse dentro de los ejidos de los pueblos o ciudades. Si la autoridad consintiese o diese permiso para ello, quedará sujeta a la misma pena que el cazador.

Art. 10. La caza a bala queda prohibida, salvo para cazar animales feroces.

Art. 11. Viola la propiedad particular quien cazase o hiciese batidas en terreno ajeno, sin previa licencia de su dueño o de quien lo representante.

Art. 12. Aun en los terrenos fiscales es absolutamente prohibido las boleadas de guanacos, avestruces, etc., o su destrucción por otros medios.

Art. 13. Todo dueño, arrendatario o poseedor de tierras puede cazar libremente dentro de ellas; pero con completa sujeción a lo dispuesto en el art. 8°.

Art. 14. Las infracciones a lo dispuesto en el presente capítulo serán penadas con 20 a 50 pesos de multa, a beneficio del fondo de puentes y caminos.

Art. 15. Todo cazador responde de la culpa o imprudencia, en la forma que establecen las leyes comunes, y está obligado a reparar el daño que causare.

Art. 16. Los animales que se cazaren en terrenos ajenos, sin permiso de su dueño, pertenecen al dueño del terreno.

Art. 17. Toda caza que, herida, huye a otro terreno o cae del aire en él, pertenece al dueño del terreno y no al cazador.

Art. 18. Es libre la pesca en aguas de uso público. Cada uno de los ribereños tiene el derecho de pescar por su lado hasta el medio del río o arroyo.

Art. 19. Los productos naturales que se encuentren en tierras públicas o en las riberas del mar no son apropiables sin permiso del Estado.

Art. 20. La autoridad administrativa podrá fijar épocas en que la pesca no sea permitida.

Art. 21. Ninguna acción o denuncia sobre violación de los artículos anteriores será admitida si no se entabla dentro de las 48 horas siguientes al hecho, salvo la acción ordinaria de daños y porjuicios.

TÍTULO III

DE LA VIABILIDAD

CAPÍTULO I

Del fondo de puentes y caminos

Art. 22. La gobernación de cada territorio formará un fondo especial de puentes y caminos, de cuya inversión será personalmente responsable el Gobernador.



Art. 23. El fondo de puentes y caminos se formará con los siguientes recursos: 1° Las donaciones de los particulares. 2° Las multas que este Código establece. 3° Los recursos o subvenciones que acuerde el Tesoro General.

Art. 24. Los Jueces de Paz remitirán mensualmente al Gobernador el importe de las multas que hubieren recaudado, con una planilla en que conste el importe de cada multa, el nombre del que la abonó y la causa, dejando un duplicado para el archivo del Juzgado. El Gobernador está obligado a publicar mensualmente el estado del fondo de puentes y caminos.

Art. 25. El Gobernador llevará cuenta documentada de lo que reciba e invierta por este concepto.

Art. 26. El fondo especial de puentes y caminos sólo podrá invertirse en los siguientes objetos: 1° Apertura y refacción de caminos generales o vecinales. 2° Subvención a las Municipalidades para los mismos objetos. 3° Construcción de puentes. 4° Prover de agua a los caminos que carezcan de ella, desecación de pantanos, desagües u otras obras análogas.

CAPITULO II

De los caminos

Art. 27. Son caminos **generales** los que cruzan varios partidos, sea cualquiera la extensión que tengan; son **municipales**, los que dentro de un municipio o distrito cruzan varias propiedades y dan acceso a caminos generales, estaciones de ferrocarril, pueblos, vías de tranmway, etc; son caminos **vecinales**, los que comunican varias propiedades rurales y no están comprendidos en las clasificaciones anteriores.

Art. 28. Los caminos generales tendrán un ancho uniforme de 50 metros, los municipales de 25, y los vecinales de 12.

Art. 29. El trazado de los caminos generales, se determinará por el Gobierno Nacional, previa consulta al Departamento de Ingenieros; pertenecen a la Nación y quedan bajo su jurisdicción. En caso de cambiarse el trazado de un camino, la propiedad del suelo será recobrada por el dueño actual del fundo.

Art. 30. La conservación de los caminos generales corresponde al Gobierno Nacional. La conservación y jurisdicción de los caminos municipales y vecinales corresponde a la Municipalidad respectiva.

Art. 31. Queda absolutamente prohibido cerrar, obstruir o desviar un camino abierto al servicio público, sin el permiso de autoridad competente.

Art. 32. La autoridad podrá acordar o negar el desvío o clausura de un camino, si se demostrase ser conveniente. Si el terreno hubiera sido de propiedad particular, volverá a su dueño; si fuere fiscal o estuviese en el deslinde de dos o más propiedades, cada lindero puede adquirir una parte proporcional, solicitándolo en compra dentro de tres



meses y abonando el precio que se fijará, tomando por base la valuación por la contribución directa.

Art. 33. En los puentes del Estado no se cobrará peaje.

Art. 34. Toda cuestión entre vecinos y pasajeros, relativa al libre tránsito del camino, será resuelta por la autoridad judicial más inmediata.

CAPÍTULO III

De las cercas y tranqueras

Art. 35. Todo propietario tiene derecho a cercar su propiedad, de acuerdo con las disposiciones de este Código.

Art. 36. Cuando un propietario quiera cercar su propiedad, deberá presentar su solicitud a la Municipalidad local acompañando los planos, autorizados por un Agrimensor, en los que se determinará la cerca que se desea construir, las tranqueras que se proyecta dejar, y el trazado de los caminos que cruzan la propiedad.

Art. 37. La Municipalidad deberá acordar o negar el permiso dentro de los treinta días de presentada la solicitud. En caso de negar el permiso, el propietario podrá apelar de esa resolución, para ante el Gobernador de Territorio, quien deberá resolver el asunto dentro de 20 días.

Art. 38. Acordado el permiso, se devolverá al propietario uno de los planos con nota al pie, en la cual se hará constar la fecha en que se acordó la autorización para cercar. El otro plano quedará en el archivo de la Municipalidad.

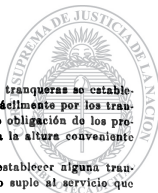
Art. 39. Los propietarios pueden construir las cercas en los destiendes de las propiedades, o dejar entre ellas el espacio necesario para el camino vecinal, en cuyo caso deberá dejar fuera de la cerca 6 metros.

Art. 40. Los cercamientos medianeros y su conservación, se harán a comunidad de gastos, si las dos heredades quedasen encerradas; pero si una de las heredades está sin cerca, el dueño de ésta no estará obligado a contribuir, salvo que por las cercas hechas por los colindantes, su propiedad quedase cerrada, por lo menos en la mitad del perímetro total de su terreno, en cuyo caso podrán aquéllos compelerlo al pago de la medianería.

Art. 41. La misma obligación pesará sobre quien al cercar su propiedad aproveche las cercas vecinas.

Art. 42. Cuando sea necesario determinar el valor de una cerca medianera, su valuación se hará por peritos nombrados uno por cada parte, quienes nombrarán un tercero en caso de discordia y su fallo será inapelable. Tratándose de tierras de pastoreo o labranza, el precio no exajustarse a las prácticas usuales de cada localidad. (Ley n: 7071 de 16 septiembre 1910).

Art. 43. Todo propietario que cercase su fundo, está obligado a dejar tranqueras o portillos de cinco metros de ancho, como minimum, cada



cinco kilómetros sobre cada línea de cercas. Las tranqueras se establecerán de manera que puedan abrirse y cerrarse fácilmente por los transeúntes a toda hora del día y de la noche; siendo obligación de los propietarios poner postes pintados de rojo en ellas a la altura conveniente para que sirvan de señal.

Art. 44. Podrá exonerarse al propietario de establecer alguna tranquera en su propiedad, cuando el camino público suple al servicio que aquella debía prestar, o cuando el tránsito ocasionado por la apertura de la tranquera perjudique algún establecimiento industrial, cabaña, chacra, etc. Es autoridad competente para dicha exoneración la Municipalidad, con recurso a la Gobernación.

Art. 45. Toda persona que utilice una tranquera para el tránsito, debe cerrarla inmediatamente de pasar, bajo multa de cinco pesos.

Art. 46. Quedan exonerados los propietarios de la obligación de abrir caminos vecinales, cuando el área de sus propiedades no exceda de 100 hectáreas.

Art. 47. Es permitido poner tranqueras en los caminos públicos generales, con sujeción a las siguientes prescripciones: 1° Que sean fáciles de abrir y cerrar por cualquier transeúnte; 2° Que cada tranquera no tenga un ancho menor de siete metros; 3° Que se establezcan tantas tranqueras cuantas exija el ancho total del camino.

Art. 48. Cuando por accidentes del terreno o por circunstancias supervinientes fuere menester cambiar la situación de una tranquera se obtendrá previamente autorización de la autoridad.

Art. 49. Podrá cerrarse una tranquera; pero es forzoso tener un llavero permanente que la abra a los transeúntes.

Art. 50. Las disposiciones de este capítulo no son aplicables a las calles de los pueblos, que se regirán por las respectivas ordenanzas municipales.

Art. 51. Las infracciones a los artículos del presente título, que no tuvieran pena especial, serán penadas con multa de veinte pesos, a beneficio del « fondo de puentes y caminos ».

TÍTULO IV

DE LA INDUSTRIA DE TRANSPORTES

CAPÍTULO I

De los acarreadores

Art. 52. Los acarreadores de ganado serán matriculados en un registro que llevará la autoridad municipal, o en su defecto el Juzgado de Paz de cada partido, previo otorgamiento de una fianza a su satisfacción; debiendo munirlos de una boleta numerada y sellada que se renovará gratis y se expedirá cada año. Exceptúanse de la matrícula a los conductores de ganado por cuenta del propietario de éste.

Art. 53. El fiador saldrá garante de la buena conducta del acarreador en el ejercicio de tal, y en las relaciones, tanto con los peones suyos que le acompañan, cuanto con los de establecimientos particulares que atraviese; pero no responde por las compras que el acarreador haga, a no habérsele dado carta-orden para hacerlas, responsabilizándose por tales contratos, y a cuya carta-orden deberá el acarreador referirse en los recibos o documentos que otorgase.

Art. 54. Hecha la tropa, el acarreador exigirá de los dueños o mayordomos de los establecimientos, un certificado expreso del número de los ganados, con el dibujo de su marca y señal, para ocurrir con él al encargado de dar la guía.

Art. 55. Además de su matrícula, el acarreador deberá llevar consigo la boleta de los caballos o bueyes de su marca que conduzca, así como las de los peones, y con arreglo a sus documentos, solicitará de la autoridad administrativa del partido donde se haga la tropa, una constancia del número de marcas de tales animales, con expresión del nombre de sus dueños.

Art. 56. Durante su camino, el acarreador que lleve ganado no podrá:

1º Agregar a la tropa, sin los requisitos establecidos, otros animales, bajo pena de ser ellos reputados mal habidos; 2º Vender animales o productos que conduzca, a no ser que la autoridad administrativa del partido donde verifique estas ventas las anote en las guías, debiendo dar un certificado al comprador, expresando los objetos, su número, las marcas, el número y el distrito donde fué otorgado; de lo contrario, las ventas serán consideradas fraudulentas. A falta de autoridad inmediata, podrá hacerse la venta dando un certificado, visado por dos vecinos propietarios que acrediten haber examinado la guía, y los que deberán firmar la anotación que debe hacerse en ella.

Art. 57. El acarreador conducirá los animales y productos que lleve, a la tablada correspondiente, la que procederá a su revisión y pase con arreglo a lo dispuesto en este capítulo.

Art. 58. Contada y entregada la hacienda en un establecimiento, se considerará de cuenta del acarreador; pero si antes de los límites del campo donde fué apartada se dispersan, serán devueltos los animales, o en su defecto, reintegrado su número o pagado su precio si no hubiese estipulación en contrario.

Art. 59. El hacendado vendedor hará acompañar la tropa durante el tránsito anterior, para que ambos interesados estén de acuerdo respecto de los animales que se hayan vuelto, si fueron anotados y certificados antes de pasar la línea del establecimiento.

Art. 60. Ocurriendo pérdida más allá de los límites indicados, cualquiera que sea la distancia, podrá el acarreador cobrar los animales vueltos a la querencia, si por señales especiales que la práctica enseña a conocer, no dejase duda acerca de la procedencia.

Art. 61. Los acarreadores o troperos o quienes se les hayan dispersado las tropas, serán oídos preferentemente por la autoridad judicial o administrativa más cercana, quien dispondrá que dentro de las vein-



ticuatro horas se franqueen los rodeos en que racionalmente puede conceptuarse haber algo de su ganado, a fin de practicar el aparte.

Art. 62. Los acarreadores que ejerciesen su oficio sin estar debidamente matriculados, incurrirán en una multa de cuarenta pesos. La misma multa se impondrá a los que carguen con boleta sin vigor, por falta de renovación.

Art. 63. Los gobernadores de los territorios llevarán un duplicado del libro de matrículas de los acarreadores, a cuyo efecto las municipalidades o Juzgados de Paz en su defecto, les comunicarán los datos necesarios a medida que sean inscriptos en sus respectivos registros.

CAPITULO II

De los acopiadores

Art. 64. Todo acopiador o comprador, de cualquier clase que sea, deberá llevar un libro registro, en el cual anotará día a día y con la debida especificación, los objetos que compre con las señales y las marcas de cueros que hubiere entre ellos y el nombre y domicilio del vendedor.

Art. 65. Anotará igualmente en el libro registro toda remesa de productos que haga, con la fecha y destino de ellos.

Art. 66. El libro registro a que se refieren los precedentes, estará siempre a disposición de la autoridad judicial o policial, o a solicitud de cualquier hacendado, toda vez que se sospeche de la legitimidad de las operaciones.

Art. 67. La propiedad de los cueros orejanos de terneros y corderos, de la lana, cerda y pluma de avestruz, se justificará por certificado, por el dueño del establecimiento de donde procedan, especificando con precisión el peso, cantidad y clase.

Art. 68. La falta de cumplimiento a alguna de las disposiciones precedentes, induce presunción de fraude, y la autoridad judicial más cercana podrá levantar una indagación sumaria del hecho, así como embargar los productos que se supongan mal habidos, procediendo en seguida a resolver el caso si resultare de poca importancia.

Art. 69. Si el caso resultase o pareciese de gravedad, se remitirá a la decisión del Juez Letrado juntamente con el acopiador y cómplice, si pudiesen ser habidos, depositando entretanto los productos embargados en poder de algún hacendado de responsabilidad, hasta la decisión del juez competente.

CAPITULO III

De las guías

Art. 70. Nadie puede extraer haciendas de un distrito para otro, o de un territorio a otro, sin proveerse de una guía que lo será expedida por el Juez de Paz del lugar de la extracción. El Juez de Paz otorgará



la guía si en su respectivo registro estuviese anotada la marca o señal del propietario, u otros justificativos que acrediten su dominio.

Art. 71. Las guías serán extendidas con arreglo a los certificados expedidos por el dueño o vendedor de las haciendas o productos, o por su representante legítimo.

Art. 72. La guía especificará el número de animales o la descripción de los frutos, las marcas y señales, el nombre del comprador en su caso, el del acarreador y el punto de destino.

Art. 73. En las guías, las marcas se asentarán al centro de ellas y las señales se describirán sin dejar claros, y al final se consignará en letras el número de marcas y señales que contenga la guía.

Art. 74. Cuando del cotejo de la guía con la tropa detenida, resultasen diferencias que no fuesen de consideración, podrá la autoridad permitir que la tropa siga su camino, si el acarreador diere caución.

Art. 75. Las municipalidades percibirán el impuesto de guías que ellas determinasen; pero el que hubiese abonado guías en el punto de extracción, no abonará otro derecho de guía o tránsito, cualesquiera que sean los distritos, secciones o territorios que cruzase.

Art. 76. Las municipalidades llevarán un libro en el cual registrarán las firmas de los dueños de los establecimientos, y el de las personas autorizadas por ellas para subscribir los certificados de enajenación de haciendas o frutos; no pudiendo expedir guía alguna sin que este requisito haya sido llenado.

CAPITULO IV

Del tránsito con animales

Art. 77. El dueño, arrendatario o poseedor de un campo, no podrá impedir, ni oponerse, bajo pena de abono de perjuicios, a que pascen o se suelten en él, por vía de descanso o parada, animales que van de tránsito, ya pertenezcan a tropas de carretas o ya a arcos de ganado de cualquier especie que sean no excediendo la parada de doce horas en los arcos, y de veinticuatro en las carretas, si una causa de fuerza mayor no exige mayor permanencia, bajo todos los conceptos y requisitos siguientes: 1º Deberá el arriero o conductor seguir, siempre que fuere posible y salvo las eventualidades de temporales u otras extraordinarias, los caminos reconocidos como tales; 2º Conservará sus animales, bajo riguroso pastoreo todo el tiempo de la parada y especialmente de noche; 3º Avisará al dueño del campo o al encargado del establecimiento, la parada que va a hacer, a fin de que, si lo quiere, señale el punto en que ella debe efectuarse y pueda además practicar vigilancia; 4º Si por una disculpable o inevitable dispersión de los animales, se viese obligado a penetrar y recorrer el campo para unirlos, no debe perjuicios por ello, pero si los animales dispersos se mezclan con los del dueño de la estancia, suspenderá la corrida y avisará a dicho propietario para que le dé rodeo.



Art. 78. El que contraviniere a lo dispuesto en el artículo anterior, sufrirá una multa de veinte pesos, que aplicará la autoridad judicial más cercana, mitad a beneficio del dueño del campo y mitad al del fondo de puentes y caminos.

Art. 79. No mediando avenimiento entre el porteador o tropero y el dueño de la estancia, podrá éste cobrar en la proporción de veinte centavos por hora por cada cien cabezas de ganado mayor, y cinco centavos por cada cien cabezas de ganado menor.

Art. 80. Cuando un arreo cause perjuicios en propiedad ajena, cortando cereos, destruyendo tranqueras, etc., el dueño o conductor del arreo responde del daño causado, y la autoridad judicial del distrito, a requisición de parte interesada y en juicio sumario, decidirá el monto de la indemnización.

Art. 81. Si el tropero no se conformase con la sentencia, dará fianza o caución que calificará el Juez y podrá iniciar el juicio ordinario dentro de los noventa días siguientes.

Art. 82. Queda exceptuado de responsabilidad el porteador por los perjuicios que los animales causasen en los sembrados, si el cultivo se ha hecho a los costados del camino público y el propietario no ha construido cercos para evitar los perjuicios.

Art. 83. Quedan exceptuados de la servidumbre de tránsito en las campañas, las casas, patios, corrales y todo campo cultivado, salvo que existiera camino público, o que se dispusiera la apertura de caminos.

Art. 84. En materia de transportes rurales son aplicables las disposiciones de los artículos 162 a 206 del Código de Comercio.

Art. 85. Los abastecedores están sujetos a las ordenanzas y reglamentos que dicte cada Municipalidad.

TITULO V

DE LA GANADERIA

CAPITULO I

Amojonamiento

Art. 86. Todo propietario de campo de estancia queda obligado a tenerlo deslindado y amojonado dentro del plazo de cinco años contados desde la promulgación de este Código, y quien adquiriera, sea cual fuere el título, la propiedad de un campo, deberá, aunque la porción adquirida sea parte de una área mayor ya deslindada y amojonada, hacer deslindar y amojonar esa porción dentro del año siguiente a la adquisición; debiendo colocarse los mojones a una distancia no mayor de mil metros el uno del otro.

Art. 87. Quien falte al cumplimiento de alguna de las disposiciones contenidas en el artículo anterior, abonará mientras no las cumpla, una multa de veinte pesos nacionales al año, por cada diez kilómetros lineales del perímetro.



Art. 88. Queda prohibido remover mojones o colocar nuevos en campos ya deslindados, sin intervención de la autoridad y citación de linderos, salvo el caso de mensura judicial.

Art. 89. La violación de lo prescripto en el artículo anterior, será penada con multa de cien pesos, a menos que por las circunstancias del caso constituyese un delito común.

Art. 90. El estanciero que hallase removidos sus mojones tendrá derecho a pedir que la autoridad local y dos testigos hagan la inmediata inspección ocular. Del resultado de esta diligencia se extenderá un certificado que se entregará al denunciante, para que haga el uso que le convenga.

CAPÍTULO II

Animales invasores

Art. 91. El ganadero que encuentre en su campo puntas, tropillas o animales sueltos, dará parte a la autoridad judicial más inmediata para que presencie si el hecho es cierto, en cuyo caso podrá encerrarlos, avisando inmediatamente al dueño de ellos, para que abone diez centavos por cada cabeza de ganado vacuno o yeguarizo, y dos, por cabeza de ganado menor. Esta indemnización se hará efectiva por dicha autoridad.

Art. 92. Si el dueño de los animales rehusase abonar la indemnización, dicha autoridad ordenará la venta en pública subasta del número de hacienda suficiente para cubrir el importe de la indemnización y gastos del remate, devolviendo el remanente al dueño de los animales.

Art. 93. Mientras el dueño de los animales invasores no los recoja y abone la indemnización penal establecida, el dueño del establecimiento los hará pacer y abreviar convenientemente, mientras se venden judicialmente, y tendrá derecho a una indemnización igual a la determinada por el artículo 91, por cada día que pase desde que entabló su gestión.

Art. 94. Lo dispuesto en los artículos anteriores es sin perjuicio del caso en que los animales hayan causado daños en zanjas, cercos, plantíos, etc., pudiendo entonces el dueño del campo demandar ante el Juez competente los daños e intereses.

Art. 95. Cuando no se conociese al dueño de los animales, el dueño o encargado de la estancia invadida podrá entregarlos al Juez de Paz, y éste, fijará edictos en los parajes más públicos, con las marcas dibujadas al margen y mención de las señales, por el término de 20 días, y dirigirá copia del edicto a los Jueces de Paz de los Partidos colindantes, con encargo de publicarlos por el término que falte para los 20 días. Igual aviso dará a la policía.

Art. 96. Si vencido el plazo que señala el artículo anterior, no se presenta el dueño a reclamarlos, el Juez ordenará la venta, y los adjudicará bajo condición de ser prontamente carneados.



Art. 97. Si el comprador no cumplierse con esta condición dentro de los diez días siguientes al remate, el antiguo dueño tendrá derecho a tomar los animales donde los encuentre.

Art. 98. Exceptúase de la obligación impuesta en este artículo a los compradores de animales yeguarizos, que harán constar la propiedad adquirida por el certificado expedido por la autoridad judicial.

Art. 99. Del precio que se obtuviere, se descontará la cantidad debida por alimentación y cuidado de los animales, así como los gastos de remate. El resto se depositará para que pueda reclamarlo dentro de los doce meses siguientes al remate.

Art. 100. Transcripto dicho plazo sin que nadie reclame, el excedente pasará al fondo de puentes y caminos.

Art. 101. En caso de grandes sequías o de inundaciones, quemazones de campos u otros accidentes que constituyan una calamidad común, haciendo inevitable la dispersión de las haciendas, el estanciero no es responsable de los daños que éstas causaren, salvo la prueba de dolo o mala fe.

CAPITULO III

Animales de raza

Art. 102. Cuando un caballo o toro ordinario, penetrando en campo ajeno cercado cubriese yeguas o vacas de razas especiales, el dueño del animal invasor pagará la indemnización por el daño causado, la que será valuada por peritos, si el que recibió el daño probara el hecho ante la justicia ordinaria.

Art. 103. Si el criador de animales finos castrase al animal invasor dentro de sus alambrados, no deberá indemnizaci6n; si lo matare, sólo deberá su valor; pero en ambos casos perderá el derecho de ejecutar la acción del artículo anterior.

Art. 104. Para justificar el daño causado por la monta, podrá usarse ante el Juez que conozca de la causa de todos los medios de prueba que autoriza el Código de Procedimientos. Si la prueba no satisficiera plenamente, podrá el Juez, para mejor proveer, decretar la suspensión del procedimiento, hasta que la cría esté en estado de apreciarse por peritos que se expedirán sobre los caracteres de la raza y de la cría.

Art. 105. Los peritos serán nombrados uno por cada parte, y el tercero por el Juez. La presunción estarán a favor del dueño de los animales de raza.

Art. 106. Los propietarios de caballos o toros de razas especiales tendrán derecho a recurrir del dueño de yeguas o vacas ordinarias, que hubieran sido servidas mientras invadían su campo, el pago de una indemnización. A este objeto podrán retener las madres hasta que las crías puedan ser examinadas y comprobados los caracteres de las razas. La indemnización se limitará al pago del valor de la cría y de



la multa fijada en el artículo siguiente: pero el dueño de las vacas o yeguas ordinarias salvará su responsabilidad, abandonando la cría, en cuyo caso no podrá apartar la madre, mientras la cría corra riesgo de perecer por la separación.

Art. 107. Lo establecido en el artículo anterior, es sin perjuicio de que el dueño de los animales abone cincuenta centavos por cada animal invasor.

Art. 108. Si una majada ordinaria o una punta de ovejas invadiese el campo donde existiese otra con padres finos y se mezclase con ella, su dueño abonará cinco centavos por cada animal y se observará lo prescripto en los artículos 91, 92, 93 y 94.

CAPÍTULO IV

Apartes y mezclas

Art. 109. Todo hacendado tiene obligación de dar rodeo en todo tiempo, menos en la época de la forma de la parición, después de un temporal, no estando el campo oreado, y en los casos de sequía u otro impedimento que provenga de fuerza mayor.

Art. 110. Todo el que pida rodeo está obligado a llevar los peones que sean necesarios para ese trabajo y con los mismos ayudar a contener el ganado.

Art. 111. Cesa también la obligación de dar rodeo en la época de la marcación o herra, hasta ocho días después que haya terminado.

Art. 112. Sólo podrá exigirse que el rodeo se mantenga parado durante seis horas y podrá negarse el pedido después de las doce del día.

Art. 113. Si el que pidiese rodeo no fuese conocido del dueño del campo, podrá pedirlo que acredite su identidad o su poder. La identidad o el poder se justifican: la primera, por dos testigos o certificado de cualquier autoridad, y el segundo, por carta visada por la misma, en la que se dibujará la marca y describirá la señal.

Art. 114. Es obligación dar rodeo dentro de los tres días siguientes a aquel en que se solicita. Si el hacendado se negase a ello u obstruyese la operación, la autoridad judicial inmediata podrá compelerlo, aplicándole una multa de veinte pesos y condenándole a pagar los jornales de los individuos que se presenten al aparte. Si, a pesar de ello, se obstinase en su negativa, podrá condenársele al pago de multas sucesivas por cada negativa; todo sin perjuicio de que el hacendado pueda invocar los casos de excepción de los artículos precedentes.

Art. 115. Todos los apartadores, no siendo linderos, están obligados a pagar al dueño del rodeo donde aparten cincuenta centavos por cada toro o novillo de más de dos años y medio, y veinticinco centavos por los demás animales vacunos, no computándose los terneros que sigan a las madres. Por yeguarizo se abonará cuarenta centavos y por los laneros de año para arriba cinco centavos.



Art. 116. Si el dueño de los animales rehusa el abono, se aplicará las disposiciones de los artículos 92 y siguientes.

Art. 117. Quedan exceptuados del pago de aparte: 1° Los animales rezagados o extraviados de las tropas, hasta sesenta días después que el extravío tuvo lugar; 2° Las tropillas o puntas de animales de reciente extravío, ocasionado por temporales u otras causas de fuerza mayor.

Art. 118. Si estando trabajando un apartador, llegasen otros, sólo dos de ellos podrán trabajar en un mismo rodeo, haciéndolo los demás por turno.

Art. 119. El aparte se hará bajo la dirección o inspección del dueño del rodeo, y todas las dudas a que el acto dé lugar, serán dirimidas inmediatamente y sin apelación por la autoridad judicial más próxima. Si la cuestión versase sobre la propiedad, se decidirá a favor del dueño de la marca y por las demás circunstancias del caso; la decisión será acatada y continuará el aparte; pero queda al perjudicado la vía ordinaria.

Art. 120. Todo ternero o potrillo orejano que siga a la madre pertenece al dueño de ésta. Si no sigue a madre alguna y no pudiera comprobarse de una manera cierta la propiedad, presúmese que pertenece al dueño del rodeo.

Art. 121. Nadie puede tener rodeo de terneros orejanos, bajo multa de un peso por cabeza.

Art. 122. Siempre que se probase el hecho de que un hacendado por codicia de hacerse pagar arriendo a título de aparte, ha entreverado con los suyos ganados de otros, no sólo no tendrá derecho a percibir suma alguna, sino que pagará los gastos e incurrirá en una multa de cincuenta pesos nacionales.

Art. 123. La autoridad no puede proceder de oficio a investigar si en una estancia hay animales ajenos o de marcas desconocidas, bajo multa de cien pesos al empleado que ordene la investigación.

Art. 124. Es prohibido penetrar en campo ajeno a recorrer haciendas, ni sólo a campear, ni so pretexto de cazar sin permiso previo del dueño del campo, bajo multa de diez pesos, si éste lo pidiere.

Art. 125. La multa de que habla el artículo anterior se duplicará si penetrando sin permiso a campo ajeno la saca de ganados se hace por recogidas. Se entenderá por recogida la saca de un trozo o más de animales vacunos, de puntas de yeguas, de ovejas, cabras o piaras de cerdos.

Art. 126. Mezclados dos o más rebaños de ovejas, se hará el aparte inmediatamente de pedirlo cualquiera de los dueños.

Art. 127. Producidas dudas o controversias, las decidirá a buena fe la autoridad judicial más próxima.

Art. 128. Requerido el propietario o encargado de una majada para ir a separarla de otra con quien se ha mezclado, y no concurriendo por sí o apoderado, procederá a apartar el requirente asistido de la autoridad judicial o de dos testigos en su defecto.



Art. 129. Cuando una majada invade repetidamente en un sentido dado, la autoridad judicial, a pedido de parte, podrá imponer multas que no excedan de veinte pesos, mitad a beneficio del perjudicado y mitad para el fondo de puentes y caminos.

Art. 130. Antes de proceder a la esquila, se avisará a los vecinos para que aparten las ovejas rezagadas que puedan tener, y si no concurren dentro de los dos días del aviso, perderán los vellones que se esquilan a las mismas.

TITULO VI

CAPITULO I

Marcas y señales

Art. 131. La marca indica y prueba acabadamente y en todas partes la propiedad del animal u objeto que la lleva. Las gobernaciones marcarán las caballadas de la Policía con la Marca R. A.

Art. 132. Todo dueño de ganado mayor puede usar para herrario de una o más marcas.

Art. 133. Queda prohibido hacer uso de marcas o señales que no estén registradas, ni señalar los ganados trozando una o las dos orejas o haciendo orqueta y puntas de lanza a la raíz.

Art. 134. Quien violase el artículo anterior abonará dos pesos de multa por cada animal, sin perjuicio de la acción de los damnificados.

Art. 135. Al ganado vacuno se le marcará únicamente a hierro randente, y será obligatorio hacerlo en la pierna, brazo, pescuezo o cabeza del animal, y siempre del lado izquierdo, bajo multa de cincuenta centavos por cada animal.

Art. 136. La misma pena abonará el que, después de la promulgación de este Código, usase marcas cuyo diámetro o línea máxima exceda de quince centímetros, pudiendo reducirse aún más el tamaño, si los interesados lo quisieren.

Art. 137. Es igualmente prohibida la contramarca en cualquier parte del animal; debe ponerse al mismo lado de la marca y lo más próximo posible de ésta.

Art. 138. En el ganado mayor respétese la señal a la par de la marca; en caso de obscuridad o confusión de ésta, sirva aquélla para dirimir toda duda que sobre la propiedad del animal ocurra; pero en ningún caso la sola señal establecerá en absoluto el derecho de propiedad.

Art. 139. El que marque un animal que no sea orejano, ni esté contramarcado, atenta contra la propiedad y debe ser condenado como cuatrero, si con documento o de otra manera fehaciente no justifica la propiedad.

Art. 140. En los cueros vacunos y yeguarizos, aplíquese la contramarca en la quijada izquierda.



Art. 141. Supónense mal habidos, y caerán en comiso los cueros vacunos o yeguarizos que no lleven contramarca, salvo certificado del dueño de la marca. Caerán también en comiso los cueros ovinos que careciesen de la parte correspondiente a la cabeza. Las autoridades no acordarán guías a cueros en estas condiciones.

Art. 142. Queda prohibido reynar caballos o yeguas, bajo multa de cincuenta pesos y daños y perjuicios.

Art. 143. La señal se hará en la quijada, en la frente, en la oreja o en la nariz del animal.

Art. 144. La señal indica y prueba en todas partes la propiedad del ganado menor, salvo prueba en contrario.

Art. 145. Ningún impuesto de carácter local se cobrará por el registro de marcas y señales.

Art. 146. La marca no registrada sólo establece presunción de propiedad, salvo si se trata de ganado de tránsito o recientemente introducido, en cuyo caso, la guía hará plena fe.

CAPÍTULO II

Del registro de marcas y señales

Art. 147. Cada Gobernación llevará un registro general de marcas y señales para el ganado mayor, en el que se anotará: 1º El nombre del propietario por orden alfabético; 2º El partido de campaña en el cual se va a usar; 3º El diseño de la marca concedida; 4º La señal, si fuere solicitada; 5º Fecha en que se otorga el boleto; 6º Las transferencias sucesivas por venta, donación o herencia. Las solicitudes se presentarán ante el Gobernador en el sello que determine la ley de papel sellado.

Art. 148. Los registros de marcas y señales de cada partido, impresos en número suficiente por la Gobernación, se distribuirán por intermedio de la Policía entre las autoridades de todo el Territorio.

Art. 149. El Juez de Paz de cada Partido llevará un archivo especial, con su competente índice de apellidos de los dueños de marcas, con expresión de cuarteles o distritos a que pertenezcan, de las marcas y señales existentes en el Partido y de las que se vayan concediendo, para cuyo fin los interesados presentarán los boletos y títulos de adquisición en su caso, dentro de los treinta días de ser expedidos por la Oficina Central, o de la adquisición si se tratare de marca ya registrada. Sólo se expedirán guías en vista del registro.

Art. 150. El archivo y las anotaciones de transferencias se llevarán por duplicado, debiendo remitirse un ejemplar a la Gobernación, a los efectos del art. 146, inciso 6º.

Art. 151. Los Jueces de Paz de cada Partido certificarán gratuitamente y en papel simple el registro de la marca y la señal; certificarán igualmente las transferencias que consten en sus archivos.



Art. 152. Queda prohibido usar marcas que no se hayan expedido por la Gobernación.

Art. 153. Las Gobernaciones cuidarán que no haya dos marcas iguales en el Territorio que representen propiedades distintas. De las marcas que se encuentren en estas condiciones se anulará la más moderna.

Art. 154. Repútanse iguales aquellas marcas que vuelta la una al revés represente exactamente a la otra.

Art. 155. Los boletos de señal para el ganado menor serán expedidos por el Juez de Paz de cada Partido.

Art. 156. No podrá haber dos señales iguales para el ganado menor en campos que disten menos de 20 kilómetros entre sí. Los Jueces de Paz proveerán el modo de hacer saber a sus colegas de los partidos limítrofes las señales que acuerden a los vecinos próximos a las líneas divisorias de dichos Partidos.

Art. 157. Los Jueces de Paz llevarán por duplicado un Registro de las señales existentes en el Partido, con su indicación correspondiente de los dueños por apellidos, teniendo presente al anotar en el Registro, expresar la señal que lleva el animal en la oreja derecha, o en el centro; de modo que quede completamente de acuerdo con el así como en la izquierda, si es hecha de abajo, de arriba o en la punta diseño que deberá ser dibujado en el Registro, así como en el margen de cada boleta, de acuerdo con los modelos que se enviarán a cada Partido. Uno de los ejemplares del expresado Registro se enviará todos los años a la Gobernación para su custodia.

Art. 158. Dentro de los 12 meses siguientes a la publicación de este Código, todo dueño de ganado menor hará tomar razón de sus señales en el respectivo Registro a que se refiere el artículo anterior.

Art. 159. En el caso de traslación de animales de ganado menor de un partido a otro, se hará la toma de razón en el Registro del destino, haciéndose constar este acto en la boleta sin retribución alguna.

Art. 160. Puede variarse la señal de una majada o de un cierto número de animales; pero debe avisarse al Juez de Paz, manifestando las boletas de las respectivas señales, o bien la guía si los animales fuesen recientemente introducidos. Puede, bajo los mismos requisitos, establecerse una nueva señal en los procreos.

Art. 161. Los infractores de las disposiciones del presente capítulo serán penados con multa de diez a veinte pesos, según la importancia del caso.

CAPÍTULO III

Hierros y señaladas

Art. 162. El ganadero que quiera marcar sus haciendas vacunas o yeguarizas deberá circular a sus linderos el aviso de ello, con anticipación de seis días, a fin de que concurran dentro de dicho plazo a



sacar los animales de su propiedad que, entre aquéllas, pudiera haber. Dará igual aviso a la autoridad por si quisiera concurrir, y ésta a los demás distritos inmediatos para que informen a los vecinos. Omitiendo este aviso, el dueño de la hierra pagará cien pesos de multa.

Art. 163. Llegado el día de la hierra, no se dará rodeo. El dueño de la hierra tendrá facultad para separar en presencia de la autoridad si hubiese concurrido, o de dos testigos en caso contrario, los animales ajenos, procediendo en lo demás de conformidad con lo dispuesto en los artículos 91 y siguientes.

Art. 164. Es deber de todo hacendado recorrer sus rodeos después de la hierra y contramarcas los terneros o potrillos que sigan a las madres que no sean de su propiedad y que involuntariamente hubiese marcado. Si por falta de cumplimiento de esta disposición y transcurrido un mes después de la marcación, se encontrasen terneros de vacas ajenas marcados, y el dueño de éstas lo solicitare de la autoridad judicial del distrito, se impondrá al marcador una multa de veinte pesos por cada ternero, son perjuicio de hacerlos contramarcas.

Art. 165. El criador de animales finos podrá hacer marcaciones parciales, con aviso de dos días a sus linderos y a la autoridad, al solo objeto de que puedan presenciar la operación.

Art. 166. En caso de sequías extraordinarias, de epidemia o de trastornos públicos, la autoridad administrativa podrá prohibir las hierras y adoptar prudencialmente las medidas generales o locales que estime convenientes.

Art. 167. La operación de señalar el ganado menor se avisará con dos días de anticipación a los linderos, a fin de que puedan concurrir a apartar y señalar lo suyo. La falta de aviso se pena con cincuenta pesos de multa.

Art. 168. Igual formalidad se guardará cuando se quiera remover majadas del mismo dueño, o bien contraseñalar ganado recientemente adquirido o enajenado.

TITULO VII

DE LOS VICIOS REDHIBITORIOS

Art. 169. Cuando se enajenase animales con vicios ocultos, que, de haberlos conocido el adquirente no los hubiese comprado o no hubiese dado tanto precio por ellos, el adquirente podrá optar entre rescindir la venta o rebajar una cantidad proporcional del precio.

Art. 170. Si la adquisición hubiese sido a título gratuito, no procede la acción por vicios ocultos.

Art. 171. Sólo podrá usarse de una de las dos acciones del artículo 168.

Art. 172. Las acciones redhibitorias en la adquisición de animales, sólo pueden ejercitarse dentro de los diez días siguientes a la tradición.



Art. 173. No tiene lugar el saneamiento de los vicios ocultos en las ventas judiciales. (Artículos 90 y siguientes).

Art. 174. Incumbe al adquirente probar que el vicio existía al tiempo de la adquisición, y no probándolo, se presume que sobrevino después, a menos que se trate de mañas o defectos de educación.

Art. 175. En general, son vicios redhibitorios cualquier defecto de educación, enfermedad, etc., que haga inútil al animal para el objeto que se propuso el adquirente.

Art. 176. En los animales de raza se considera vicio toda enfermedad que se transmite por herencia o que se haga inútil al semental para la reproducción. En este último caso la acción podrá entablarse dentro de los doce meses siguientes a la tradición.

Art. 177. El engaño sobre el origen de un animal reproductor o sobre las cruas que tenga, dará lugar a la acción redhibitoria y a los daños y perjuicios, si optare por la rescisión del contrato, sin perjuicio de la acción criminal a que hubiese lugar.

Art. 178. Las cuestiones por vicios redhibitorios serán decididas por amigables componedores, nombrados, uno por cada parte, y el tercero, por el Juez.

TITULO VIII

REVISACION DE HACIENDAS

Tabladas

Art. 179. Las haciendas que deban venderse en los mercados de venta, así como las destinadas al consumo, a los mataderos públicos o a la exportación, se revisarán en las tabladas generales que establezca el Gobierno o en las locales que establezca cada Municipalidad.

Art. 180. Los derechos sobre las haciendas destinadas al consumo interno, así como las prescripciones higiénicas que aseguren la salud pública, serán fijadas por las ordenanzas municipales, dentro de las atribuciones que les confieren las leyes respectivas.

Art. 181. Los encargados de Tabladas llevarán cuatro libros: un diario, en donde se anotarán todas las operaciones que se efectúen en su repartición; un mayor, donde se anotará la introducción de ganado, especificando los distritos de su procedencia, guías de campaña y toruaguas expedidas, con su numeración, nombre de los introductores y compradores, nacionalidad de unos y otros, clases de animales, marcas y derechos abonados en la Oficina; un libro especial para reguarizos y otro para reparto.

Art. 182. El encargado de la Tablada visitará y anotará las guías que estuviesen conformes.

Art. 183. Por cualquier informalidad que se encuentre en las guías, lo mismo que si resultase excedente en el número de animales, el encargado hará responsable al conductor del ganado y no despachará la



tropa sin que dé fianza abonada, que garantice la presentación de la guía en forma o que deposite el importe de la tropa, interin no llene este requisito, para lo cual se concederá un plazo prudencial, según la distancia desde donde fué despachada. Cuando la informalidad se refiera sólo a una parte de la tropa, se dará una fianza o se depositará el duplo del importe de los animales que motivasen la duda, pudiendo disponerse libremente del resto.

Art. 184. Siempre que el encargado presumiese que una tropa fuere de ilegítima procedencia, dará inmediatamente aviso al Juez de Paz del Distrito, y si del sumario resultase que era robada, procederá, en caso de no conocerse su legítimo dueño, a rematarla, depositando su importe, y someterá al introductor al Juez letrado.

Art. 185. El importe de la venta a que se refiere el artículo anterior será depositado a la orden del Juez, el que publicará avisos llamando a los que se consideren con derechos a esas sumas. Si a los seis meses no se presentasen a reclamarlas, su importe ingresará al fondo de puentes y caminos.

Art. 186. Corresponde a la autoridad administrativa de cada Partido reglamentar lo concerniente al servicio sobre los consumos locales.

Art. 187. Mientras no se establezcan Tabladas generales, las haciendas que se exporten serán examinadas por las Aduanas fronterizas, que confrontarán las marcas y el número de animales con las guías, anotando los datos estadísticos del caso.

Art. 188. Los mataderos públicos serán reglamentados por las ordenanzas municipales.

TITULO IX

ENFERMEDADES CONTAGIOSAS

Art. 189. Las Municipalidades de campaña reglamentarán los medios de combatir las enfermedades infecciosas de los ganados y fijarán las penas en que incurrieran los negligentes.

Art. 190. El que tuviere majadas sarnosas las internará en su campo, por lo menos a trescientos metros del límite del campo vecino y de todo camino público.

Art. 191. La autoridad policial del distrito vigilará el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, siempre que la autoridad administrativa haya declarado la existencia de la sarna en alguna estancia.

Art. 192. Es obligatorio curar la sarna y desinfectar o cambiar de sitio los corrales, pesebres y galpones que hayan sido ocupados por animales enfermos.

Art. 193. La policía o cualquier vecino podrá dar aviso a la Municipalidad, a falta de ésta al Juez de Paz, de la existencia de la sarna en una majada. La Municipalidad, o en su caso el Juez de Paz, previa verificación de los hechos, ordenará la curación, fijando al efecto un plazo prudencial.



Art. 194. Si transcurridos treinta días después de dicho plazo, se constatare la reaparición de la sarna, la Municipalidad o su delegado podrá ordenar la curación a su presencia.

Art. 195. La autoridad podrá compeler a los estancieros negligentes a que curen la sarna por medio de multas sucesivas, que no excedan de cien pesos en cada año, por cada majada de más de 1.000 ovejas.

Art. 196. Mientras no se cree la inspección veterinaria nacional, las Municipalidades harán imprimir instrucciones y descripciones de los síntomas y medios curativos de la fiebre aftosa, el carbunco, la peritonía, el claveté o viruela de las ovejas, la peste bovina, la rabia y el muermo, y dictarán las medidas del caso para evitar en lo posible sus efectos.

LIBRO PRIMERO

SECCIÓN SEGUNDA

TÍTULO I

DE LA AGRICULTURA

CAPÍTULO I

Art. 197. Todo propietario que dedique sus tierras al cultivo de plantas forrajeras, textiles, cereales, viñas, olivos, morera, remolacha, caña de azúcar o árboles frutales, quedará exento del impuesto de contribución directa por toda la superficie ocupada por el cultivo y por el término de cuatro años. (Derogado por la ley 10.230, de 28 febrero 1917).

Art. 198. El que desee ser exonerado del impuesto de Contribución Directa se presentará al Receptor con el certificado de la autoridad o declaración de dos testigos propietarios. El Receptor ordenará la inspección, que podrá confiarla a dos testigos, y resolverá sin más trámite. (Derogado, ídem).

Art. 199. Las Municipalidades procurarán establecer criaderos de plantas las más adecuadas a cada localidad, y el Departamento Nacional de Agricultura les prestará su concurso.

Art. 200. Quedan exceptuados de impuestos directos nacionales y municipales, por el término de diez años, las máquinas, útiles, bueyes y herramientas destinadas a la agricultura.

Art. 201. Las tierras regadas artificialmente se exceptúan del pago de Contribución Directa por el término de cinco años.

Art. 202. En los terrenos situados dentro de los ejidos será permitido el apacentamiento de ganados, siempre que sus dueños los tengan bajo



riguroso pastoreo de día y encerrados de noche, bajo multa de diez pesos, sin perjuicio de las acciones de los particulares.

Art. 203. Cuando la agricultura se haya generalizado en algún Distrito, la Municipalidad, por unanimidad de votos, podrá solicitar de la Gobernación del Territorio que decreta la obligación de cercar los campos destinados a la ganadería que lindan con las chacras del ejido.

Art. 204. La solicitud a que se refiere el artículo anterior, se elevará con los datos necesarios sobre el número de chacras cultivadas, etc., y si fuese acordada, la Municipalidad fijará el decreto en los parajes públicos, dando a los propietarios plazo de un año para cumplirlo, bajo multa de doscientos pesos por kilómetro de frente al ejido.

CAPITULO II

Art. 205. Las Municipalidades son agentes necesarios del Departamento Nacional de Agricultura, y están obligadas a suministrarle los datos e informes que éste les pida. Se entenderán con él en todo lo relativo a la agricultura, provisión de semillas, enfermedades de las plantas, etc. Nadie puede negarse a dar datos estadísticos a la Municipalidad, bajo la multa de cien pesos nacionales.

Art. 206. Las Municipalidades adoptarán, previa consulta al Departamento de Agricultura, las medidas del caso para proteger el desarrollo y conservación de los cultivos y fomentar especialmente la formación de bosques.

Art. 207. Los reglamentos que dicte el Departamento Nacional de Agricultura son obligatorios para la Municipalidades de los Territorios Federales.

Art. 208. Las Municipalidades, previa consulta al Departamento de Agricultura, podrán hacer obligatoria la denuncia de los síntomas que corresponden a las enfermedades epidémicas de las plantas; pero, a condición de que vulgaricen los signos por los cuales se reconoce su presencia.

Art. 209. A las autoridades municipales corresponde dictar oportunamente las ordenanzas que determinen la penalidad para los casos de infracción a los preceptos que establezcan, como consecuencia de las disposiciones de este capítulo.

CAPITULO III

Art. 210. Cuando un agricultor vea su chacra invadida por hormigas que procedan del terreno de un lindero y éste no pueda o no quiera extirpar el hormiguero, permitirá al damnificado que lo destruya a su costa.

Art. 211. Si para extirpar un hormiguero fuese necesario remover cercos, practicar excavaciones u otra operación que altere las condiciones del terreno, el damnificado operante podrá hacerlo; pero estará



obligado a reponer todo en su primitivo estado a su costa, y aun dar fianza previa, si el dueño del terreno lo exige.

Art. 212. Las cuestiones que se susciten con motivo de la destrucción de hormigueros serán resueltas por la autoridad judicial más cercana, con recurso ante el superior.

Art. 213. El daño causado por animales invasores se registrá por las disposiciones del artículo 91 y siguientes.

TITULO II

REGIMEN DE LAS AGUAS

De las concesiones

Art. 214. El agua de los ríos y arroyos está destinada al uso y beneficio de los propietarios y tendrá preferente aplicación a la agricultura.

Art. 215. La distribución de las aguas estará en cada Territorio a cargo de un Inspector General de agricultura, que tendrá los deberes y atribuciones siguientes:

1º Velar por el orden, economía y equitativa distribución de las aguas de riego. 2º Dictar ordenanzas reglamentarias del riego y ordenar las obras necesarias para impedir la formación de pantanos o la obstrucción de caminos públicos. 3º Promover y solicitar del Gobierno Federal los fondos y medidas necesarias para mejorar la viabilidad, construir puentes, desecar pantanos y formar represas o pozos en las inmediaciones de los caminos que carezcan de agua potable. 4º Formar estadísticas de la riqueza pastoril y agrícola del Territorio, a cuyo efecto las Municipalidades y la Policía serán sus agentes naturales. 5º Conceder el aprovechamiento de las aguas. 6º Reglamentar y vigilar los canales del Estado. 7º Fijar una tarifa módica para el uso del agua de dichos canales, previa aprobación del Poder Ejecutivo, y percibir su importe, empleándolo en el mantenimiento y mejora de los mismos.

Art. 216. Mientras no se cree el cargo de Inspector General, hará sus veces el gobernador del Territorio.

Art. 217. Las solicitudes de concesión de agua deberán contener:

1º El nombre del propietario de la tierra, la extensión de ésta, la parte que se calcula irrigar y un croquis del perímetro. 2º Las obras, canales, acequias, bocatoma y marco de sección que se proyecta. 3º La cantidad de litros de agua por segundo que solicita tomar. 4º El número aproximado de las propiedades ribereñas por donde corre el cauce de agua y los acueductos que alimenta. 5º Presentada la solicitud, el inspector citará a los ribereños y a todos los que se consideren con derecho a oponerse, por el término de 30 días, para que se presenten a estar a derecho. El edicto se publicará en un periódico local, si lo hubiere, y se fijará en los parajes públicos.



Art. 218. Deducida la oposición, se oír a la Municipalidad del distrito, y se resolverá la solicitud.

Art. 219. Para otorgar el aprovechamiento de aguas, se tendrá presente:

1° Si en el curso de agua en donde ha de hacerse la toma fuera abundante, se acordará el aprovechamiento que se solicite, siempre que no perjudique a terceros. 2° Si el curso de agua no fuese abundante, podrá acordarse el uso de un volumen limitado por segundo y por hectárea, y aun podrá prorratearse el agua. 3° Si aun esta distribución fuera inconveniente, podrá establecerse el turno entre los ribereños.

Art. 220. Siempre que más de tres personas aprovecharan el agua de un mismo canal, elegirán los regantes, por mayoría de votos, un Juez de aguas, que decidirá *ex oequo et bono* todas las cuestiones que se susciten entre los regantes, con apelación ante el Inspector General.

Art. 221. El Juez de aguas durará un año en sus funciones, pudiendo ser reelecto. El 1° de diciembre de cada año, el Juez de Paz del Distrito abrirá el Registro, en el que se inscribirán los regantes, mayores de edad, sin distinción de nacionalidad, y lo cerrará el 10 del mismo mes.

Art. 222. El Registro estará a la vista de cualquier interesado que desee examinarlo, y podrá tachar ante el mismo Juez de Paz a cualquier individuo mal inscripto. Las tachas podrán deducirse hasta el 20 de diciembre, y deberán ser resueltas antes del 1° de enero siguiente. De las resoluciones del Juez de Paz, se podrá apelar ante el Presidente de la Municipalidad.

Art. 223. El segundo domingo de enero de cada año se hará la elección, y dentro de los 10 días siguientes, la Municipalidad, en sesión pública, hará el escrutinio y comunicará el nombramiento al electo, quien se hará cargo de su puesto el 1° de febrero.

Art. 224. El Juez de Paz o su suplente, el Presidente de la Municipalidad y tres inscriptos sacados a la suerte compondrán la Mesa Receptora de votos, que funcionará con simple mayoría.

Art. 225. En lo que no esté previsto en los artículos precedentes, se aplicará por analogía la Ley general de Elecciones.

Art. 226. El Juez de aguas es el jefe inmediato del canal, y la Policía le debe su concurso; podrá aplicar multas que no excedan de veinte pesos a los que violen los reglamentos. Toda resolución del Juez es apelable ante el Inspector.

Acueductos

Art. 227. Las heredades que carezcan de las aguas necesarias para irrigar sus tierras podrán obtenerlas por medio de acueductos descubiertos o subterráneos, que crucen heredades ajenas hasta llegar al punto de toma. En este caso, se constituirá servidumbre real de acueducto, sobre las heredades por donde cruce, a favor del predio dominante.



Art. 228. Si no hubiese convenio expreso entre las partes que constituyan la servidumbre, el instrumento constitutivo lo formará la concesión que en forma se otorgue a favor del predio dominante por la autoridad.

Art. 229. Presentada la solicitud, se citará al propietario o propietarios de las heredades por donde cruce el acueducto, señalándoles un término que no exceda de 20 días, a fin de que hagan las observaciones que juzguen convenientes y manifiesten los perjuicios que la construcción del acueducto les irrogará.

Art. 230. El derecho de acueducto comprende el de llevarlo por un rumbo que permita el libre descenso de las aguas, y que por la naturaleza del suelo no haga excesivamente dispendiosa la obra. Verificadas estas condiciones, se llevará el acueducto por el sitio que menos perjuicio ocasione al predio sirviente.

Art. 231. Las casas y corrales, patios y jardines que de aquéllas dependan, no están sujetos a la servidumbre de acueducto; tampoco lo están las huertas cuya superficie no exceda de una hectárea.

Art. 232. Acordada la concesión de acueducto, y antes de dar comienzo a las obras, el propietario de la heredad dominante abonará al dueño del predio sirviente un precio por la ocupación del terreno con el acueducto; el de un espacio a cada uno de los costados, que no bajará de un metro de anchura en toda la extensión de su curso, y podrá ser mayor por convenio de partes, y un diez por ciento más sobre el valor de la indemnización.

Tendrá, además, derecho para que se le indemnice de todo perjuicio ocasionado por defectuosa construcción del acueducto.

Art. 233. Las indemnizaciones del artículo anterior serán fijadas por peritos nombrados por las partes. En caso necesario, el Juez nombrará el tercero.

Art. 234. Es autoridad competente para acordar concesiones de acueductos el Inspector General de Agricultura; y para entender en todo lo relativo a las indemnizaciones y a las cuestiones que surjan en el ejercicio de la servidumbre, el Juez que deba conocer, según las leyes de procedimientos.

Art. 235. En todo lo que esté legislado en este título se aplicarán los artículos 2970 y siguientes del Código Civil (1).

(1) Se refiere al Título XII del Libro Tercero sobre servidumbres en general y al XIII «De las servidumbres en particular», especialmente su capítulo primero «De las servidumbres de tránsito», el segundo «De la servidumbre de acueducto», el tercero y el cuarto, «De la servidumbre de sacar agua, muy modificados todos por el Código Rural.



LIBRO SEGUNDO

DE LA POLICÍA RURAL

TITULO I

PROCEDIMIENTO EN LOS CASOS DE CONTRAVENCION

Art. 236. La Policía de seguridad tiene la misión de conservar el orden público, evitar los crímenes y delitos y aprehender a los delincuentes. Es su obligación prestar auxilio en caso de agresión a la vida, al honor o a la propiedad; pero en ningún caso puede constituirse en Juez, ni aplicar penas, limitándose sus facultades a la detención provisoria del delincuente o contraventor y a ponerlo a disposición del Juez competente.

Art. 237. La Policía cumple y hace cumplir las órdenes y disposiciones de los poderes públicos, cuando es requerida su intervención.

Art. 238. Las penas que este Código establece serán aplicadas por el Juez de Paz del distrito a pedido de la Municipalidad, de la Policía o de los particulares damnificados. El procedimiento será sumario, verbal y actuado. Deducida la queja o aprehendido el infractor, será oído, y si negase el hecho, el Juez le fijará un término que no exceda de tres días para que presente sus descargos. Confesada la infracción o producida la prueba en su caso, el Juez dictará sentencia dentro de las 24 horas. La prisión preventiva durará estrictamente el tiempo necesario para tomarle la indagatoria, y no tendrá lugar si el infractor se prestara voluntariamente a concurrir al Juzgado en el acto.

Art. 239. Cuando la pena excediese de 50 pesos o diez días de prisión, la sentencia del Juez de Paz será apelable para ante el Juez Letrado.

Art. 240. El mismo procedimiento se observará para la aplicación de las penas que las ordenanzas municipales establezcan.

Art. 241. Los individuos condenados por infracciones podrán ser empleados en trabajos de carácter municipal, durante ocho horas diarias, como máximo.

Art. 242. La negligencia o el abuso de las autoridades policiales, que, sin constituir delitos de derecho común, causen sufrimientos o vejaciones ilícitas o perjuicios inútiles, las hace pasibles de multas que variarán entre 10 y 50 pesos, y serán aplicables por el Juez Letrado, a requisición de los damnificados.

Art. 243. Las penas pecuniarias establecidas por este Código, en caso de no ser satisfechas, se convertirán en la de arresto, a razón de un día por cada cinco pesos.



Art. 244. Las multas serán percibidas por el Juez de Paz, quien dará recibo al interesado. Las multas por infracción a las disposiciones de este Código serán remitidas al Gobernador en la forma que establece el artículo 24; las demás serán entregadas a la Municipalidad, con una relación de nombres y causa, para ser publicada.

Art. 245. En los casos de crímenes o delitos, la policía procederá observando lo dispuesto por los artículos 183 a 195 del Código de Procedimientos en lo Criminal, con la modificación del plazo de 24 horas, que se extenderá hasta el primer correo.

TITULO II

ORDEN DE ALLANAMIENTO. REUNIONES PUBLICAS. JUEGO. EMBRIAGUEZ. VAGANCIA. ARMAS.

Art. 246. En los Partidos que distan más de 20 kilómetros del asiento del Juzgado de Letras, los Jueces de Paz podrán ordenar el allanamiento de domicilio, si se tratara de un crimen o delito, hubiese semiplena prueba o fuere indispensable para la aprehensión del criminal cuya fuga se tema.

Art. 247. En las campañas, la Policía podrá allanar por sí el domicilio, siempre que un delincuente perseguido por ella se oculte en alguna casa; cuando por voces de auxilio hagan sospechar que en el interior de una casa se está cometiendo un delito; cuando sea necesario contener un incendio o una inundación, y cuando se denuncie por uno o más testigos haber visto personas asaltando una habitación con indicios manifiestos de ir a cometer algún delito.

Art. 248. Para celebrar una reunión pública, es indispensable dar aviso a la Policía con 24 horas de anticipación, bajo multa de diez pesos a los promotores.

Art. 249. La policía perseguirá los juegos de azar: con orden del Juez de Paz allanará la casa de juego, secuestrará los objetos destinados al juego, así como la banca y dinero expuestos en él, cuidando hacer constar a quién pertenecen.

Art. 250. Se procederá igualmente al arresto de los dueños, administradores, agentes del establecimiento y jugadores y los pondrá a disposición del Juez de Paz. El dueño o administrador de la casa abonará cincuenta pesos de multa y el doble en las reincidencias, y las demás personas diez pesos de multa.

Art. 251. Toda persona que en parajes públicos aparezca en estado de embriaguez, profiriendo gritos, insultos o promoviendo escándalo, sufrirá multa de cinco pesos por la primera vez, y diez por cada reincidencia.

Art. 252. Todo agente policial que haga uso de sus armas para conducir una persona embriagada, se presume que abusó de la fuerza y podrá ser penado con arreglo al artículo 238, si no resultase de las circunstancias del hecho un delito común.



Art. 253. La Policía no podrá prohibir o restringir el derecho de llevar armas, y, en consecuencia, ninguna persona será registrada con el objeto de averiguar si lleva armas consigo.

Art. 254. Es prohibido, sin embargo, hacer ostentación de armas o llevarlas a la vista, bajo pena de diez pesos de multa.

Art. 255. Si alguien, con miras hostiles o en medio de una disputa o con el fin de producir escándalo o desorden, sacase armas, abonará cincuenta pesos de multa y perderá el arma.

Art. 256. Las autoridades locales no podrán dictar reglamentos sobre la vagancia, limitándose a la observación de las personas que, por su falta de medios de vida aparezcan sospechosas, y teniendo presente esta circunstancia como agravante para los casos de infracción.

1. Este Código no entra en los que el Congreso puede dictar para toda la Nación: es una ley de la Nación para los Territorios. Lo aplicará por tanto la justicia federal que en éstos representan los jueces letrados.

2. La penalidad de las contravenciones, o mejor faltas, previstas por el Código Rural, es casi toda de multas, aunque muchas de éstas son verdaderas indemnizaciones que paga el infractor y percibe el damnificado. Las multas son de varias clases: sucesivas como las de los artículos 114 y 195, o por año, 87; o por animal como la del artículo 107, centavos 0.50, o los 0.5 del 108.

3. Es notable el título primero del libro 2º, sobre todo el artículo 236, que debería generalizarse. En el siguiente título el artículo 253 permite llevar armas, mientras el 255 pena con cincuenta pesos al que sacare armas « con miras hostiles o en medio de una disputa » y el 254 ostentarlas.

4. Los artículos 189-196 se refieren a la Policía Sanitaria de los animales, sobre la cual veremos una ley federal. (V. Parte Tercera, Leyes).

5. Todo el libro segundo del Código es notable porque, dictado a los seis años de vigencia del Cód. Proc. Crim. que rige también en los Territorios, llegado el caso de legislar sólo para éstos, da a entender que el Congreso había ya advertido las fallas de este último.

Así le vemos insistir en limitar las facultades judiciales de la policía y establecer que no pasan de « la detención provi-



soria del delincuente o contraventor y ponerlo a disposición del Juez competente » Art. 236. Que la negligencia y el abuso de las autoridades policiales, aunque no lleguen a constituir delitos, autorizan al damnificado por los sufrimientos, vejaciones o perjuicios a pedir al Juez la aplicación de multa. Art. 242. Aun las multas por infracciones no las puede cobrar la policía. Art. 244. En cuanto al sumario de prevención que como veremos en el comentario del Cód. Proc. Crim. pone un límite de tiempo, para la intervención judicial, es cosa que en la capital no sucede de hecho y de ahí que se haya desnaturalizado el procedimiento desde su base.

6. El art. 250 ha sido derogado por la ley 4097 (Juegos de azar) que rige en la Capital y Territorios.

VI.— Del Código de Procedimientos en materia civil y comercial

Nº 1893
Parte
Primera

Art. 33. Serán notificadas en el domicilio de los litigantes: 1º La providencia de emplazamiento de la demanda; 2º La que ordene absolución de posiciones; 3º El auto de prueba; 4º Las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales; 5º Las demás providencias de que se haga mención expresa en esta Ley.

Los funcionarios judiciales serán notificados en su despacho.

Art. 34. Las notificaciones deben ser practicadas en estos casos, dentro de veinticuatro horas después de dictados los autos o providencias, o antes si el Juez lo ordenare, o estuviere así dispuesto para casos determinados.

Art. 35. En la Suprema Corte y Cámaras de Apelación, las notificaciones serán diligenciadas por los Ujieres.

Art. 36. Cuando las notificaciones se hiciesen en la Oficina, se extenderán en el expediente, pudiendo la persona a quien se hagan, sacar copia de la providencia.

Art. 37. La notificación será firmada por el actuario y por el interesado. Si éste no supiere o no pudiese firmar, lo hará a su ruego un testigo. Si no quisiese firmar, lo harán dos testigos requeridos al efecto por el actuario, no pudiendo servirse nunca para ello de los dependientes de su Oficina.

Art. 38. Si la notificación se hiciere en el domicilio del litigante, el actuario llevará por duplicado una cédula en que esté transcrito el



auto que va a notificar y después de leerla íntegra al interesado, lo entregará una de las copias y al pie de la otra, que se agregará al expediente, pondrá constancia de todo, con expresión del día, hora y lugar en que se hubiese practicado la diligencia, observando respecto de la firma, lo prescrito en el artículo precedente.

Art. 39. Cuando el actuario no encuentre a la persona a quien va a notificar, entregará la cédula a cualquier persona de la casa, empezando por las más caracterizadas, y a falta de ellas a cualquier vecino que sepa leer, prefiriendo los más inmediatos, y procediendo en todos los casos en la misma forma del artículo anterior. Si el vecino requerido se negase a recibir la cédula, será ésta fijada por el actuario en la puerta del domicilio constituido por el litigante.

Art. 40. Toda notificación que se hiciese en contravención a lo prescrito (arts. 33-39) será nula y el actuario o empleado que la practicase, a más de responder de los perjuicios que cause a las partes, incurrirá en una multa de 500 pesos m/c., por la primera vez, de 1000 por la segunda, y perdiendo el empleo en caso de nueva reincidencia.

Art. 52. Los jueces y tribunales tienen el deber de mantener el decoro y buen orden en los juicios, pudiendo imponer al efecto correcciones disciplinarias a los litigantes, abogados y funcionarios que intervienen en aquéllos por las faltas que cometieren, ya sean contra su dignidad en las audiencias o alegatos, ya sea contra su autoridad, obstruyendo el curso de la justicia en daño de las partes.

Art. 53. Se entenderá corrección disciplinaria... 3º La multa que no podrá exceder de 5000 pesos m/c. o la detención hasta diez días en caso de no ser satisfecha.

Art. 54. La multa o detención se impondrán con sujeción a lo dispuesto en los respectivos Reglamentos de los Juzgados y Tribunales.

Art. 55. Si el interesado reclamase se le oír brevemente y sumariamente con apelación para ante el superior inmediato y sin recurso alguno cuando la corrección sea impuesta por la Suprema Corte (hoy o Cámara).

Art. 82. Si el emplazamiento se hiciese en contravención a lo prescrito en los artículos que preceden (77 a 81) será nulo y se aplicará lo dispuesto en el artículo 40.

Art. 117. Cuando ambos litigantes hayan solicitado el término extraordinario, las costas serán satisfechas en la misma forma que las demás del pleito. Pero si se hubiese concedido a uno solo y éste no ejecutara la prueba que hubiese propuesto, abonará las costas incluso los gastos en que incurriese la otra parte para hacerse representar donde hubiesen de practicarse las diligencias. Podrá también ser condenado a pagar a su colitigante una multa de cinco a diez mil pesos moneda corriente, salvo que apareciese no haber procedido maliciosamente.

Art. 135. Si al trasladarse a la casa de la parte (absolvente que ha alegado enfermedad) averiguase el Juez que ha podido comparecer, diferirá el interrogatorio para la próxima audiencia, intimándole que



comparezca sin más citación. En este caso el que haya alegado falso impedimento será condenado a pagar una multa que no exceda de mil pesos (moneda corriente).

Art. 180. Si de las diligencias de comprobación (del documento redarguido de falso) resultaren indicios de falsedad de sus autores, se pasarán los antecedentes necesarios al Juzgado del Crimen, para la conveniente investigación y castigo del delito.

Art. 182. Si la prueba testimonial fuese admisible en el caso, el Juez mandará recibirla señalando con un día a lo menos de anticipación la audiencia pública en que haya de tener lugar el examen de los testigos y citando a éstos por cédula, en papel común, en la que transcribirá este artículo. No compareciendo, el Juez, de oficio, los condenará a pagar una multa de quinientos a mil pesos m/c., sin admitir excusa alguna que no haya sido alegada antes de la hora de la audiencia. Si citados nuevamente no compareciesen sin alegar impedimento bastante a juicio del Juez antes de la hora de la audiencia, incurrirán en el duplo de la multa y el Juez podrá mandarlos traer por la fuerza pública y ordenar que permanezcan arrestados hasta que presten declaración, la que deberá ser tomada en el día o dentro de 24 horas a más tardar.

Art. 183. Los testigos deberán dar siempre la razón de su dicho; si no la diesen el Juez la exigirá. Si alguno de los litigantes interrumpiese al testigo en su declaración, podrá ser condenado a una multa que no exceda de doscientos pesos m/c. En caso de reincidencia incurrirá en doble multa y podrá ser expulsado de la audiencia.

Art. 208. Si las declaraciones ofreciesen indicios graves de falso testimonio o de soborno, el Juez podrá decretar acto continuo la prisión de los presuntos culpables, remitiéndolos a la disposición del Juez del Crimen con testimonio de la parte de prueba referente a los indicios.

Art. 459. El depositario de objetos embargados a la orden judicial estará obligado a presentarlos dentro de 24 horas de cualquier intimación judicial, pudiendo ser compelido a ello con arresto personal.

Art. 482. Trabado embargo en bienes raíces, el Secretario lo hará saber dentro de 24 horas al encargado del Registro de Hipotecas, quien lo anotará en un libro especial que llevará al efecto en la forma de los demás registros poniéndose constancia en los autos. Las anotaciones en el Registro, a que este artículo se refiere, así como todas las demás que judicialmente se ordenen, deben ser hechas dentro de 48 horas a lo más so pena de 500 pesos m/c. de multa, a beneficio de la educación común.

Art. 534 (Tercera). Cuando resulta probada la connivencia del tercer opositor con el ejecutado, el Juez podrá aplicar la pena de detención por el término de 3 a 6 meses, sin perjuicio de las acciones criminales a que hubiere lugar.

Art. 665. Si apareciese motivo fundado para creer que ha habido



cohecho o fraude de parte de los peritos (inventario sucesivo) el Juez los remitirá inmediatamente a disposición del Juez del Crimen con testimonio de lo que contra ellos resulte.

Reformas al Código de Proc. civil y comercial

Nº 4128
3 Octubre
1902

Art. 19. Desestimada una recusación con causa se aplicarán las costas y una multa de cien pesos por cada recusación a beneficio de la otra parte si la recusación es calificada de maliciosa por el fallo desestimatorio.

Art. 20. El Juez o Vocal de Cámara a quien se pruebe que estaba impedido de entender en el asunto y a sabiendas diete en él resolución que no sea de mero trámite, será penado con una multa de 500 pesos a beneficio del Consejo Nacional de Educación. La tolerancia de la providencia de mero trámite no será admisible después de contestada la demanda, si proveyere en los autos, sin excusarse.

1. El número que damos a este Código es el de la ley de organización de los tribunales de la Capital, que en parte hemos transcrito en las páginas 60-62 y 100-112. En la parte que hemos suprimido figura el siguiente artículo:

« Art. 318. Los tribunales de la Capital se regirán por las leyes de Procedimientos Cíviles, Comerciales y Criminales que actualmente rigen para los de la provincia de Buenos Aires, en cuanto sean compatibles con la presente ley y hasta tanto se dicten por el Congreso las que hayun de subrogarlas. »

En lo criminal el Congreso dió la ley procesal penal, el Cód. Proc. Crim., pero no la civil y comercial, y de ahí que demos al margen del primer artículo que del Código publicamos, el 33, el número y fecha de una ley que simplemente legalizó la situación de hecho que existía después de la federalización de la ciudad de Buenos Aires.

Por la ley nº 1532 rige en los Territorios Nacionales (su artículo 37) y se explica, porque la ley nº 50, de procedimiento en lo federal, ha sido objeto de muchas adiciones sacadas de este Código, que al fin fué declarado supletorio de aquélla por la ley 3981, de 31 mayo 1901, que no hemos insertado en la sección de Tribunales Federales, porque se refiere al procedimiento civil.

2. Las disposiciones penales del presente Código son prin-



principalmente para conservar el orden y el mutuo respeto en los debates judiciales.

La del artículo 20 de la ley de reformas tiende a impedir abusos que sin duda se cometerían cuando hubo que reprimirlos con una fuerte multa, pero deben haber desaparecido, pues no hay noticia de que en el cuarto de siglo que pende esa espada de Damocles sobre ese hipotético magistrado que no se excusa, haya caído sobre la cabeza de ninguno.

VI^{bis}.—Leyes atinentes al Código de Proc. civiles y comerciales

I. N° 50. Procedimiento federal en lo civil y comercial. — II. N° 189. Expropiación. — III. N° 10.996. Ejercicio de la Procuración.

I. — Procedimiento Federal

N° 50
14 Setiembre
1863

Art. 68. Las notificaciones serán hechas en los asuntos que pendan ante la Suprema Corte, por el Secretario en su oficina, o por acordadas firmadas por él, cuando se hayan de hacer fuera del Municipio, y por el ujier, cuando dentro de él; en los Juzgados Seccionales por sus Escribanos, y por las órdenes requisitorias, de que habla el artículo 66.

Art. 69. En las causas en que una Provincia sea parte, el emplazamiento se hará por medio de oficios dirigidos, el uno al Gobernador y el otro al Fiscal o Procurador de la Provincia. Estos oficios serán firmados por el Presidente de la Suprema Corte.

Art. 70. Ningún ujier podrá autorizar cédula alguna, ni diligencia en la cual tengan interés ellos, sus mujeres o sus parientes consanguíneos, dentro del cuarto grado civil, o afines dentro del segundo.

Art. 71. Toda notificación que se hiciera en contravención a lo que esta ley prescribe, anulará lo que se obre después de ella, y el escribano o ujier que la hubiese hecho, pagará veinticinco pesos fuertes por la primera vez, cincuenta por la segunda, privándosele del oficio si después reincidiere.

Art. 117. Si el Juez o comisionado, al trasladarse a la casa de la parte (absolvente), averiguaren que ha podido comparecer, diferirán el interrogatorio a la próxima audiencia, y en ella será condenada, la que alegare falso impedimento para no comparecer, en una multa que no exceda de cincuenta pesos.



Art. 122. El Juez podrá proveer:

1° Que el testigo inobediente sea conducido a su presencia por la fuerza pública; 2° que esté arrestado hasta el día señalado para recibirse su declaración si no pudiere tomarse desde luego.

Art. 130. La parte que interrumpiere al testigo en su declaración, podrá ser condenada en una multa que no exceda de diez pesos fuertes. En caso de reincidencia incurrirá en doble multa y podrá ser expulsada de la audiencia.

Art. 234. Si la información ofreciere indicios graves de falso testimonio o de soborno de los testigos, el Juez decretará acto continuo la prisión de los presuntos reos, mandando al mismo tiempo sacar un tanto de la parte de la prueba referente a los indicios para proceder en el juicio correspondiente al castigo de los culpables.

Art. 308. La vía de apremio tendrá lugar contra los deudores de las clases siguientes:

1° Los consignatarios a quienes sean entregadas las mercaderías que les viniesen consignadas, o cualquiera otra persona que las hubiera recibido con título legítimo, por los fletes en los transportes marítimos y los portes en las conducciones terrestres, con tal que no hayan transcurrido treinta días desde la entrada. 2° Los capitanes de las naves por las vituallas suministradas para la provisión de éstas, y los consignatarios o cargadores de las mismas, cuando se haya hecho de su orden este suministro. 3° Los dueños o capitanes de las naves por el pago de los salarios vencidos de la tripulación.

Art. 309. En la ejecución de las sentencias de los Tribunales o de las arbitrales que hayan pasado en autoridad de cosa juzgada, y de los laudos de amigables componedores, que sean ejecutables, se procederá también por la vía de apremio, intentándose ésta en los tres meses siguientes al día en que dicha sentencia o laudo hubieren adquirido fuerza ejecutiva. Después de este plazo tendrá solamente lugar el procedimiento de ejecución por los trámites señalados en el Título XXIV de esta ley. («Juicio ejecutivo»).

Art. 310. El apremio no podrá decretarse si los acreedores que lo pidiere no justifican su derecho en la forma siguiente: Los créditos por fletes o portes con la carta de fletamento o conocimiento original, y el recibo de las mercaderías contenidas en este documento. Los suministros hechos para la provisión del buque, por las facturas valoradas de los efectos suministrados, aprobados por el capitán, consignatario o cargador de cuya orden las haya entregado el acreedor. Los salarios de la tripulación, por las copias de las contratas extendidas en el libro de cuenta y razón del buque, de que el capitán debe facilitar copia a cada interesado con la nota de los alcances que le resulten, conforme al artículo 1150 del Código de Comercio. En el caso que aquél rehuse dar este documento, se le obligará a exhibir el libro, se sacará testimonio de lo que resultare de sus asientos con respecto al crédito reclamado, equivaliendo éste a la certificación que el capitán hubiera debido dar.



Art. 311. El crédito sobre que se pida el apremio ha de resultar líquido del título que se presente. De lo contrario, no tendrá lugar hasta que se haga la liquidación por acuerdo común de las partes, por sentencia judicial o por árbitros.

Art. 312. Si el título del acreedor fuese un documento privado que sin previo reconocimiento no tenga fuerza ejecutivo, deberá éste proceder al auto de apremio. Si el deudor negare la legitimidad del documento, usará el acreedor de su derecho en el juicio competente.

Art. 313. Con presencia del título ejecutivo de su crédito pedirá el acreedor el apremio, y hallando el Juez que procede de derecho, despachará mandamiento cometido a los oficiales de justicia, para que con asistencia de Escribano, requieran al deudor el pago de la deuda; y no haciéndolo en el acto, procedan al embargo de sus bienes. En el requerimiento y ejecución se observarán las disposiciones de los artículos desde el 257 al 261 de esta ley.

Art. 314. Hecho el embargo se citará al deudor para la venta de los bienes embargados, si dentro de tercero día no propusiese excepción legítima contra el apremio.

Art. 315. En este procedimiento se admitirán solamente las excepciones siguientes: Falsedad del título. Falta de personería en el portador. Pago. Transacción o compromiso.

Cualquiera de ellas que competa al deudor, la ha de proponer por escrito y probarla, en los tres días prefijados en la citación.

Art. 316. La prueba de la excepción ha de ser con documentos, o por confesión judicial del acreedor y no por otro medio probatorio.

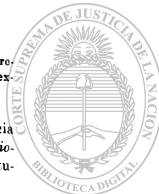
Art. 317. En el caso de que se pida la confesión judicial del acreedor, el Juez la recibirá inmediatamente.

Art. 318. Vencido el término de tres días, el escribano dará cuenta, y el Juez citará a las partes señalando día para que ellas o sus defensores aleguen verbalmente sobre sus derechos respectivos. En este día podrán las partes presentar cualquier documento que convenga a la defensa; y haciéndolo se hará relación por el Escribano de lo que de él resulte.

Art. 319. Si el deudor no hubiere hecho oposición a la demanda, o no hubiese probado sus excepciones, el Juez mandará proceder a la venta de los bienes ejecutados y al pago del acreedor. En caso contrario el Juez revocará el auto de apremio condenando en costas al actor.

Art. 320. De esta decisión del Juez no se dará recurso de apelación, quedando a salvo el derecho de las partes para que puedan usarlo en juicio ordinario.

Art. 321. En el caso de que por la sentencia se mande llevar a efecto el apremio, estará obligado el acreedor, antes de hacérsele el pago, si el deudor lo exigiere, a asegurar con fianza idónea las resultas del juicio que éste puede intentar contra el título del acreedor. Esta fianza caducará de derecho si en el término de sesenta días no



se promoviese esta repetición. No se exigirá la fianza cuando el apremio se haya pedido en virtud de una sentencia ejecutoriada, y la excepción opuesta no sea de fecha posterior a la sentencia.

1. Esta ley, una de las que crearon en 1863 la justicia federal, es llamada *De procedimientos de los tribunales nacionales en lo civil y criminal*. De esto último trata su título XXX, que ha sido derogado por el Cód. Proc. Crim.

2. La parte no derogada no tiene objeto en este libro; de ella damos los artículos que encierran prescripciones penales y son los 68, 69, 70, 71, 117, 122, 130 y 134.

Insertamos además los 308-321 que forman el título XXV sobre *Procedimiento de apremio* que se aplica en algunos casos de leyes federales (Parte Tercera) en los cuales debe entenderse que el título del acreedor de los artículos 308 y 310, lo constituye la resolución administrativa de imposición de la multa.

3. La presente ley ha sufrido, en la parte no derogada, agregaciones tomadas del Procedimiento que rige en la jurisdicción ordinaria de la Capital, cosa en verdad innecesaria desde que su artículo 374 establece que las leyes de procedimientos civiles y comerciales de la Capital de la República serán en lo adaptable supletorias de la presente.

II. — Expropiación

Nº 189
13 Setiembre
1866

Art. 1º. Están sujetos a expropiación aquellos bienes del dominio provincial, o de particulares, cuya ocupación se requiere para ejecutar obras de utilidad nacional.

Art. 2º. El Congreso autorizará la expropiación, declarando en cada caso la utilidad pública de la ocupación.

Art. 3º. Esta declaración se hará siempre con referencia a los planos descriptivos, informes profesionales u otros datos necesarios para determinar con exactitud la cosa que ha de expropiarse.

Art. 4º. La expropiación no se perfecciona mientras no haya sido entregado, o judicialmente consignado, el precio o la indemnización. Sin embargo, en caso de urgencia, habrá derecho a la ocupación desde que el Poder Ejecutivo consigne, a disposición del propietario, el precio ofrecido y no aceptado, quedando ambos obligados a las resultas del juicio, como se expresará más adelante.



Art. 5º. Queda autorizado el Poder Ejecutivo para abonar al propietario que lo acepte, el valor que, previa tasación o informes de peritos, considere ser el justo precio de la cosa, y también para entregar la indemnización correspondiente.

Art. 6º. No habiendo avenimiento, el Juzgado de Sección, o la Corte Suprema, según la jurisdicción territorial en que la propiedad esté ubicada, o según la calidad de la persona legal a quien pertenezca, decidirá la diferencia entre el interesado y Procurador Fiscal, o el Procurador General de la Nación, según corresponda, procediendo verbal y sumariamente y con el mérito de los informes de peritos, que las partes nombren para apoyar su pretensión.

Art. 7º. De las resoluciones del Juez de Sección y de la Corte Suprema, en su caso, habrá lugar a los recursos permitidos por la ley nacional de procedimientos.

Art. 8º. Terminado el juicio, el dueño es obligado a recibir lo que de él resulte, por toda indemnización; y hecho que sea, o verificada la consignación, se declarará transferida la propiedad.

Art. 9º. Si los bienes por expropiar pertenecen a personas incapaces de administrar por sí mismas, el juicio se tendrá con sus representantes legítimos.

Art. 10. El Tribunal nombrará defensor al ausente de la jurisdicción en que los bienes estén situados.

Art. 11. Designará también aquel de los condueños que deba representarlos, cuando éstos no se avienen en uno.

Art. 12. Podrá asimismo nombrar perito por la parte que se niegue a hacerlo.

Art. 13. El Poder Ejecutivo queda autorizado para constituir mandatarios especiales, con el objeto previsto en el artículo 5º.

Art. 14. Ninguna acción de tercero podrá impedir la expropiación, ni sus efectos. Los derechos del reclamante se considerarán transferidos de la cosa a su precio, o a la indemnización, quedando aquella libre de todo gravamen.

Art. 15. El valor de los bienes debe regularse por el que hubieren tenido, si la obra no hubiese sido ejecutada, ni aun autorizada.

Art. 16. La indemnización deberá comprender todos los gravámenes o perjuicios que sean consecuencia forzosa de la expropiación, tales como el valor del terreno o edificio, plantaciones, depreciación por fraccionamiento, explotaciones, etc., no debiendo, sin embargo, tomarse en consideración las ventajas o ganancias hipotéticas.

Art. 17. La indemnización no excederá, en ningún caso, a la demanda del interesado.

Art. 18. Los costos del juicio serán a cargo de la Nación, siempre que la indemnización sea superior a la oferta del Poder Ejecutivo o su mandatario, aunque sea inferior a la demanda del interesado. Si no excede a lo ofrecido por aquél, los costos serán satisfechos por mitad.

Art. 19. Si la cosa expropiada no se destinase al objeto que motivó



la expropiación, el dueño anterior puede retraerla en el estado en que se enajenó, consignando el precio o la indemnización que recibió.

Art. 20. Los concesionarios de las obras de utilidad pública, para cuya ejecución se sancione la expropiación, se substituyen al Gobierno de la Nación en los derechos y en las obligaciones que «cra» la presente ley.

Art. 21. Todo aquel que, a título de propietario, de simple poseedor, o cualquier otro, resistiese de hecho la ejecución de los estudios u operaciones periciales que en virtud de la presente ley fuesen dispuestas por el Poder Ejecutivo, por sus mandatarios, o por los concesionarios de la obra, incurrirán en una multa de 50 a 1.000 pesos, a arbitrio del Juez, quien procederá ejecutivamente a su aplicación, previo informe sumario del hecho; sin perjuicio de oír y resolver como corresponda acerca de los que la resistencia hubiere causado.

1. Esta ley no encierra más que una disposición penal, la del artículo 19.

2. Cuando se trate de la Municipalidad, entiende la justicia ordinaria.

3. El procedimiento es sumario y ante el mismo Juez de Sección que conoce del pleito civil sobre la expropiación.

La multa que el Juez podrá aplicar en este verdadero incidente del juicio de expropiación, viene expresada en pesos que debe entenderse que son «moneda corriente» de la provincia de Buenos Aires, veinticinco de los cuales equivalían a un peso fuerte oro de la ley monetaria de 1875. No es apelable ante la Cámara.

III. — Ejercicio de la Procuración

Nº 10906
20 Octubre
1919

Art. 1º. La representación en juicio ante los tribunales de cualquier fuero en la capital de la República y territorios nacionales, así como ante la justicia federal de las provincias, sólo podrá ser ejercitada:

- 1º Por los abogados con título expedido por la universidad nacional.
- 2º Por los procuradores inscriptos en la matrícula correspondiente.
- 3º Por los escribanos nacionales que no ejerzan la profesión de tales.
- 4º Por los que ejerzan una representación legal.

Art. 2º. La secretaría de la Suprema Corte de Justicia o el funcionario de su dependencia que designe este tribunal, llevará un registro de matrícula de procuradores, en el cual serán inscriptos, a solicitud de parte interesada, los que reúnan las condiciones establecidas en la presente ley.



Este registro estará a cargo de las cámaras federales de apelación en las capitales o provincias que las tuvieren y de los Jueces de Sección o Letrados en las provincias y en los territorios nacionales, respectivamente.

Unos y otros funcionarios comunicarán oportunamente a la Suprema Corte Nacional la nómina de los inscriptos, a los efectos de su anotación en los registros de esta última.

Art. 3º. Para ser inscripto en la matrícula de procuradores, se requieren las siguientes condiciones:

1º Mayoría de edad. 2º Juramento de estar en el pleno goce de sus derechos civiles y de no estar afectado de ninguna de las inhabilidades establecidas en la presente ley. 3º Título acordado por universidad nacional; y a falta de éste, serán títulos de suficiencia: a) El título de doctor en jurisprudencia, emanado de universidades oficiales de las provincias; b) los certificados expedidos en forma por las facultades universitarias de la Nación que acrediten haber sido aprobado el postulante en todas las materias codificadas. 4º Constituir a la orden del Presidente de la Suprema Corte de Justicia Nacional, un depósito de 5.000 \$ m/n. en efectivo, o su equivalente en títulos de crédito público nacional o en cédulas hipotecarias argentinas, o una primera hipoteca o una fianza personal, solidaria, a satisfacción del mismo funcionario, otorgada por dos letrados de la matrícula, por igual suma.

En la justicia federal de las provincias y territorios nacionales, este depósito, hipoteca o garantía, será por valor de 2.000 \$ m/n., a la orden de los respectivos presidentes de las cámaras de apelaciones o Jueces de Sección o Letrados, en su caso.

Art. 4º. Podrán ser inscriptos en la matrícula de procuradores los que a la promulgación de la presente ley, hubieron desempeñado por más de cinco años empleos judiciales de actuación en los tribunales de la capital, los que deberán solicitar su inscripción dentro de los seis meses, comprobando el buen desempeño de sus funciones, con el justificativo legal del hecho enunciado y el certificado del depósito requerido por el artículo anterior.

Art. 5º. No podrán inscribirse en el registro de procuradores:

1º Los que hubiesen sido condenados a penitenciaría o presidio o a cualquier pena por delitos contra la propiedad o contra la administración o la fe pública, lo mismo que en las falsedades y falsificaciones. 2º Los escribanos con registro, titulares o adscriptos, que ejerzan la profesión de tales. 3º Los funcionarios o empleados públicos nacionales, provinciales o municipales que hagan parte del personal administrativo de organización jerárquica y retribuido.

Art. 6º. Cualquier juez o tribunal ante el cual se probara que un procurador en ejercicio se encontrara comprendido en alguno de los casos de inhabilidad de la presente ley, decretará su eliminación de la matrícula, poniendo el hecho en conocimiento del funcionario encar-



gado de ésta. El auto que decreta la eliminación será apelable en relación, para ante el tribunal superior correspondiente. Si fuere dictado por la Suprema Corte, o cualquiera de las cámaras de apelación, procederá el recurso de revocatoria.

Art. 7°. El depósito o garantía a que se refiere el inciso 4° del artículo 3°, aseguran, no sólo las responsabilidades del procurador para con sus mandantes, por faltas, omisiones o delitos en el desempeño de sus funciones, sino de las multas o costas cuando proceda responsabilizarlo personalmente por ellos.

El depósito o garantía no será embargable por otras causas u obligaciones que las determinadas a su destino, y si por tales motivos disminuyeran o desaparecieran, deberán integrarse dentro de los cinco días subsiguientes, bajo pena de suspensión del procurador, la que será pronunciada de oficio.

No podrá retirarse el depósito mientras no se cancele la inscripción del procurador, o se hayan hecho efectivas las responsabilidades del mismo, en su caso. Igual disposición rige en caso de hipoteca o fianza personal. Esta última deberá renovarse o modificarse como la hipoteca en su caso, toda vez que el tribunal respectivo lo disponga.

Art. 8°. Los procuradores serán eliminados del registro en los siguientes casos:

1° Por cancelación voluntaria de la inscripción. 2° Por reiteradas reprensiones disciplinarias o una grave incorrección en el desempeño del mandato judicial. 3° Por condena sobreviniente a causa de los delitos enumerados en el inciso 1° del artículo 5°. 4° Por insanía o incapacidad declarada judicialmente. 5° Por pérdida de los derechos civiles posterior a la inscripción.

En todos estos casos, procede la devolución del depósito o de la parte del mismo que no se afectare por alguna de las causas establecidas en el artículo 7°.

Art. 9°. Los procuradores serán suspendidos por un término de uno a seis meses, como maximum:

1° En los casos autorizados por las leyes de procedimiento. 2° Por falta de integración del depósito, modificación de la fianza o renovación o ampliación de la hipoteca a que se refiere el inciso 4° del artículo 3°. Si en cualquiera de estos casos no se cumpliera la orden del tribunal dentro del plazo de seis meses, el procurador será eliminado del registro. En los casos de suspensión o eliminación, como sanción disciplinaria, el procurador tendrá recurso de apelación para ante el tribunal superior inmediato, y el de revocatoria si se tratara de resoluciones tomadas por la Suprema Corte o las cámaras. La eliminación por reiteradas correcciones disciplinarias sólo puede ser decretada por la autoridad judicial que tiene a su cargo el registro. 3° Por haberse dictado auto de prisión preventiva en cualquier proceso criminal.

Los tribunales comunicarán al funcionario encargado del registro



de matrículas las declaraciones de incapacidad, los autos de prisión, las condenas, las suspensiones, multas o apercibimientos decretados contra procuradores inscriptos, a los efectos de su anotación en el registro y de las medidas que fueran conducentes.

Art. 10. Los procuradores podrán fijar por contrato la retribución de sus servicios hasta la terminación del juicio, el que deberá formularse por escrito, no admitiéndose otra prueba de su existencia que la exhibición del documento y su autenticación.

Será nulo el pacto de «cuota litis» y no será permitido contratar la retribución con arreglo al tiempo que dure el asunto.

Art. 11. Son deberes de los procuradores:

1º Interponer los recursos legales contra toda sentencia definitiva adversa a su parte y contra toda regulación de honorarios que corresponda abonar a la misma, salvo el caso de tener instrucciones por escrito en contrario de su respectivo comitente. 2º Asistir, por lo menos en los días designados para las notificaciones en la oficina, a los juzgados o tribunales donde tenga pleitos y con la frecuencia necesaria en los casos urgentes. 3º Presentar los escritos, debiendo llevar firma de letrado los de demanda, oposición de excepciones y sus contestaciones, los alegatos y expresiones de agravios, los pliegos de posiciones e interrogatorios, aquellos en que se promuevan incidentes en los juicios y, en general, todos los que sustenten o controviertan derechos, ya sean de jurisdicción voluntaria o contenciosa. Se tendrá por no presentado y se devolverá al firmante todo escrito que debiendo llevar firma de letrado no la tuviese, si dentro del segundo día de notificada la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión, sea suscribiendo un abogado el mismo escrito ante el actuario, quien certificará en los autos esta circunstancia, sea por la nueva ratificación que separadamente se hiciere con la firma de letrado. Esta disposición no regirá en los tribunales en que el número de letrados matriculados y en ejercicio no exceda de cinco. 4º Concurrir puntualmente a las audiencias que se celebren en los juicios en que intervengan.

Art. 12. Los abogados y los escribanos nacionales que optaran por el ejercicio de la procuración estarán obligados a acreditar su respectivo título y llenar los demás requisitos establecidos en el artículo 3º.

Art. 13. Podrán ser inscriptos también en la matrícula los procuradores y escribanos con título provincial expedido con anterioridad a la presente ley, y los que, no teniendo título alguno en las condiciones prescriptas por ella, acreditaren dentro de los seis meses de su promulgación, con los certificados que consten su actuación continua en los expedientes, una práctica judicial de cinco años en el ejercicio de la procuración de los tribunales letrados de la capital, provincias o territorios nacionales, y llenar la exigencia del depósito, hipoteca o fianza prescripta por el artículo 3º, inciso 4º.

Art. 14. El título provincial de procurador o escribano expedido



según las leyes locales, con posterioridad a la presente, habilitará para el ejercicio de la profesión ante los tribunales federales en las provincias donde hubiera sido otorgado.

Art. 15. Exceptúase de las disposiciones establecidas en la presente ley las personas de familia, dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. Y los mandatarios generales con facultad de administrar, respecto de los actos de administración.

Art. 16. Los procuradores que intervienen en juicios iniciados antes de la vigencia de esta ley, pueden continuarlos hasta su terminación.

Art. 17. No rige esta reglamentación para los que han de representar a las oficinas públicas de la Nación, de las Provincias y de las Municipalidades, cuando obren exclusivamente en ejercicio de esa representación.

Art. 18. La Suprema Corte de Justicia Nacional reglamentará la forma en que ha de llevarse el registro de procuradores, y lo comunicará, con las modificaciones que sufra, a las cámaras de apelaciones de la Capital y demás cámaras federales de apelación, a efectos de que a su turno, las transmitan a los jueces de su respectiva jurisdicción.

Art. 19. Esta ley se considerará parte integrante de las leyes de procedimiento para ante los tribunales federales, así como del Código de Procedimientos para la capital de la República.

Art. 20. Deróganse todas las leyes de carácter orgánico y procesal que se opongan a la presente.

1. El artículo 19, al referirse al Código de Procedimientos para la Capital, alude evidentemente al de Civ. y Com. para la jurisdicción ordinaria, sobreentendiéndose que regirá para el caso en que el mandatario deba actuar como representante del damnificado en lo criminal.



VII.—Código de Justicia Militar

TRATADO PRIMERO

ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES MILITARES

TÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Nº 4708
21 Setiembre
1905 (1)

Artículo 1. La jurisdicción militar en la República se ejerce únicamente por los tribunales, autoridades y funcionarios que este Código determina.

Art. 2. Los tribunales militares no podrán aplicar otras disposiciones que las de este Código y las cláusulas penales de las demás leyes militares vigentes.

Art. 3. Ningún militar puede eximirse de desempeñar los cargos de la justicia militar, sino por las causas que la Ley enumera. Si la excusación fuese por enfermedad, dará parte al superior, para que ordene, si estima conveniente, el reconocimiento médico correspondiente.

Art. 4. Los miembros de los Tribunales Militares no podrán ser ocupados en comisiones incompatibles con el cargo de justicia, sino por motivos urgentes en tiempo de guerra.

Art. 5. Siempre que un miembro de los tribunales militares resulte inhabilitado para el desempeño del puesto, será inmediatamente reemplazado en la misma forma de su designación.

Art. 6. Todos los que intervengan en el ejercicio de la jurisdicción

(1) *Antecedentes.* Un decreto de 1870 nombrando al Dr. Francisco Pico «para redactar el proyecto de Código Militar» no dió resultado por lo que en 1890 se nombró una comisión de los doctores Alcorta, Obarrio, del Valle, Zeballos, etc., que elaboró un vasto plan de legislación militar: Ley orgánica, Código de procedimientos, Código penal para el ejército y Código penal para la Armada. Estos proyectos revisados por otra comisión, Dres. Obarrio, Garmendia, Araujo, Alcorta, Urtubey, Alvarez y Magnasco, fueron promulgados en el mismo año, pero eran tan visibiles sus defectos que se suspendió el «Código militar de justicia» (1898) hasta que se encargó al Dr. José M. Bustillo la redacción del hoy en vigor.



militar serán responsables por la violación o por la no aplicación de las leyes y disposiciones que rigen el caso; y el Presidente de la República podrá hacer efectiva esta responsabilidad por la vía disciplinaria u ordenando el juicio en los casos y formas prescritas por esta Ley.

Art. 7. Los militares en retiro pueden desempeñar los cargos de justicia militar con la jerarquía con que fueron retirados, sin que esto importe su reincorporación al Ejército; pero mientras desempeñan las funciones judiciales y al solo efecto de ellas, serán considerados como en servicio activo.

Art. 8. El tratamiento de los Consejos de Guerra es impersonal.

TITULO II

TRIBUNALES MILITARES EN TIEMPO DE PAZ

CAPITULO I

Disposiciones generales

Art. 9. La jurisdicción militar marítima o de guerra se ejerce en tiempo de paz:

1° Por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. 2° Por los Consejos de Guerra permanentes. 3° Por los Consejos de Guerra especiales, en los casos del artículo 53. 4° Por Jueces de Instrucción. 5° Por los demás funcionarios que expresamente determina esta Ley.

CAPITULO II

Del Consejo Supremo de Guerra y Marina

Art. 10. El Consejo Supremo de Guerra y Marina funciona permanentemente en la Capital y ejerce jurisdicción sobre todo el territorio de la República.

Art. 11. Se compondrá de siete miembros, siendo cinco militares y dos abogados con diploma de una de las universidades de la República.

Art. 12. Los vocales militares serán oficiales generales, tres del Ejército y dos de la Armada, prefiriéndose los de mayor jerarquía. Los vocales abogados deberán ser ciudadanos argentinos y haber ejercido ocho años la profesión o haber desempeñado durante cuatro un puesto en la magistratura.

Art. 13. Corresponde la presidencia al vocal militar superior en grado, y en igualdad de grados al más antiguo. En ausencia o impedimento del Presidente del Consejo, desempeñará sus funciones el vocal que le siga, en las mismas condiciones. Los suplentes serán designados



por sorteo, de la lista de oficiales generales que se hallen en la Capital, y los abogados, de la lista de conjucees de la Suprema Corte de Justicia Nacional.

Art. 14. Los miembros del Consejo Supremo serán nombrados por el Presidente de la República, debiendo prestar juramento por la Patria y por su honor ante el Consejo reunido en quórum. El juramento será tomado por el Presidente.

Art. 15. En caso de ausencia, impedimento o cualquier otra causa justificada de alguno de los miembros del Consejo, éste podrá funcionar con cinco de sus vocales; pero se necesita Tribunal íntegro cuando la sentencia recurrida ha aplicado la pena de muerte, o cuando sea esa la pena que corresponde al hecho imputado, en los casos de jurisdicción originaria.

Art. 16. Los miembros del Consejo Supremo duran seis años en el cargo y pueden ser reelegidos.

Art. 17. El Consejo Supremo depende del Ministerio de Guerra y se entiende directamente con él en todo lo relativo a las funciones que le están encomendadas.

Art. 18. Los miembros del Consejo Supremo tendrán en sesión, las mismas atribuciones, igual representación e idénticos derechos, honores y prerrogativas.

Art. 19. El Poder Ejecutivo establecerá la asimilación de los vocales abogados del Consejo Supremo y de todos los demás funcionarios letrados de la Administración de Justicia Militar.

CAPITULO III

De los Consejos de Guerra permanentes

Art. 20. Los Consejos de Guerra permanentes son comunes al Ejército y Armada.

Art. 21. Estos Consejos son de dos categorías:

1º Para jefes y oficiales. 2º Para clases e individuos de tropa.

Art. 22. En la Capital de la República funcionará uno de cada categoría, y su jurisdicción, respectivamente, se extenderá a todo el territorio de la Nación.

Art. 23. Si el Presidente de la República lo considera conveniente, podrá aumentar el número de Consejos en la Capital y establecerlos por separado para el servicio del Ejército y de la Armada.

Podrá también establecer los Consejos permanentes en otros puntos de la República deslindando en el decreto de creación la jurisdicción territorial de cada uno.

Art. 24. Los Consejos de Guerra para jefes y oficiales serán presididos por un general de división o de brigada, o por un vicealmirante o un contraalmirante, y se compondrán de seis vocales: dos de Marina, de la clase de capitán de navío, y cuatro de Ejército, de la clase de coronel.



Art. 25. Los Consejos de Guerra para tropa serán presididos por un coronel o teniente coronel, o por un capitán de navío o de fragata y se compondrán también de seis vocales: dos de Marina, de la clase de capitán de fragata o teniente de navío y cuatro de Ejército, de la clase de teniente coronel o mayor.

Art. 26. La presidencia de los Consejos será desempeñada alternativamente, si fuese posible, por los jefes del Ejército y de la Armada.

Art. 27. Si se estableciesen por separado Consejos permanentes para el fuero de Guerra y para el de Marina, ellos se formarán con los respectivos oficiales de Ejército o de Armada; pero su composición, en cuanto al número y jerarquía de los miembros, será la determinada en los artículos 24 y 25.

Art. 28. Se procurará, en cuanto sea posible, que los vocales del Ejército representen las armas tácticas y la auxiliar de Ingenieros.

Art. 29. Los Presidentes de los Consejos de Guerra durarán tres años en el desempeño de este cargo. El mismo tiempo durarán los vocales, renovándose por terceras partes cada año.

La renovación se hará por turno, y éste se establecerá de la manera siguiente:

El primer año saldrán los dos vocales de Ejército que tuvieren menor grado o menos antigüedad de empleo militar.

El segundo año saldrá un vocal de Armada y otro de Ejército. Ambos deberán ser, respectivamente, de menor grado o más modernos que los dos vocales restantes.

El tercer año se renovarán estos últimos.

Una vez establecido el turno en la forma expresada, la renovación en lo sucesivo se hará por orden de entrada.

Art. 30. El Presidente de la República nombra los presidentes y vocales de los Consejos de Guerra permanentes.

Art. 31. En caso de impedimento accidental del presidente del Consejo, será reemplazado por el vocal que tenga más antigüedad de empleo militar.

Art. 32. Los Consejos de Guerra pueden celebrar acuerdo y aun dictar sentencia con cinco de sus miembros, en caso de impedimento accidental de alguno de ellos; pero se necesita tribunal íntegro cuando la pena que corresponde al hecho imputado fuese la de muerte.

Art. 33. Los suplentes de vocales se sortearán entre jefes y oficiales de las jerarquías expresadas. A este efecto los Ministerios de Guerra y Marina ordenarán que el primer día de cada trimestre se remita a cada uno de los presidentes de Consejo una lista de los jefes y oficiales correspondientes que estén en condiciones de desempeñar estos cargos.

Cualquiera alteración que durante el trimestre se haga en ella se pondrá inmediatamente en conocimiento del respectivo Consejo.

Art. 34. Los Consejos de Guerra celebrarán acuerdos ordinarios y extraordinarios. Los primeros tienen por objeto resolver excepciones e incidentes, y tendrán lugar los días que los reglamentos determinen.



Los segundos tienen por objeto deliberar sobre la sentencia y tendrán lugar el mismo día o al siguiente de aquel en que se haya hecho la discusión pública de la causa.

El acuerdo extraordinario será siempre reservado.

Art. 35. El Presidente y vocales de los Consejos de la Capital prestarán juramento ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina. Los suplentes lo prestarán ante el respectivo Consejo de Guerra.

La forma de juramento es la establecida en el artículo 14.

Art. 36. Si se establecieren Consejos de Guerra permanentes en otros puntos de la República, el Presidente tomará en cada uno de ellos, el juramento a los vocales, y a éste el vocal más antiguo.

TITULO III

TRIBUNALES MILITARES EN TIEMPO DE GUERRA

CAPITULO I

Disposiciones generales

Art. 37. En tiempo de guerra funcionarán los Tribunales permanentes de tiempo de paz en cuanto fuere posible y lo permitan las necesidades de la guerra, pero con sujeción al procedimiento establecido en la Sección I, Libro III, Tratado II de este Código.

Art. 38. En los ejércitos y escuadras de operaciones la jurisdicción militar se ejerce:

1º Por los comandantes en jefe. 2º Por los jefes de cuerpos, divisiones, buques, destacamentos, etc., cuando operen independientemente o se encuentren incomunicados. 3º Por los Consejos de Guerra especiales. 4º Por los comisarios de policía.

Art. 39. En las plazas de guerra, puertos militares y lugares fortificados, la jurisdicción militar se ejerce:

1º Por los Gobernadores o jefes respectivos. 2º Por los Consejos de Guerra, a menos que en el lugar hubiera sido establecido un Consejo de Guerra permanente. 3º Por los comisarios de policía.

CAPITULO II

De los Consejos de Guerra especiales

Art. 40. Los Consejos de Guerra especiales se formarán para cada causa y se compondrán de un Presidente y seis vocales. Si la autoridad que ordena la formación del Consejo lo creyere conveniente o necesario, podrá formarse éste, tan sólo, con cuatro vocales.

Art. 41. El Presidente del Consejo, el Fiscal, el Auditor, y el secretario, serán nombrados:

1º En los ejércitos y escuadras de operaciones, por los comandantes



en jefe. 2º En los cuerpos, divisiones, destacamentos, buques, etc., independientes o incommunicados, por los respectivos comandantes o jefes superiores. 3º En las plazas de guerra, puertos militares, lugares fortificados, etc., por los gobernadores o jefes de los mismos. *en comisión*

Estos nombramientos y la formación del Consejo se harán constar en la orden del día respectiva.

Art. 42. Los vocales serán sorteados en número doble de una lista que al efecto preparará el Estado Mayor o Detall correspondiente. Los primeros sorteados serán titulares y los siguientes, por su orden, suplentes para el caso de impedimento legal de aquéllos.

Art. 43. El sorteo lo hará el Presidente con el Secretario en presencia del acusado, si lo pidiere; del Defensor, del Fiscal y del Auditor.

Art. 44. En caso de impedimento accidental del Presidente, será reemplazado por el vocal de mayor graduación o antigüedad.

Art. 45. Los Consejos de Guerra especiales son de tres categorías: a) Para clases e individuos de tropa. b) Para oficiales. c) Para jefes.

Los primeros serán compuestos de un teniente coronel del Ejército o capitán de fragata, como Presidente, y de capitanes de Ejército o tenientes de fragata, como vocales.

Los segundos serán presididos por coroneles de Ejército o capitanes de navío, debiendo ser los vocales de la clase de teniente coronel o mayor de Ejército y respectivamente capitán de fragata o teniente de navío.

Los terceros serán presididos por militares de la clase de general de división o de brigada y sus equivalentes en la Armada, debiendo ser los vocales de la clase de general de brigada o coronel de Ejército y contraalmirante o capitán de navío.

Todos los miembros tendrán las mismas atribuciones, igual representación e idénticos derechos en sesión.

Art. 46. Cuando el Consejo se constituya para conocer de una causa, y resulte, durante el juicio, que los verdaderos culpables son de una jerarquía inferior que aquella para la que fué constituido el Consejo, éste será, sin embargo, competente para juzgarlo.

Art. 47. Si para la constitución del Consejo no hubiera disponible el número de jefes y oficiales de las jerarquías expresadas en el artículo anterior, se formará o completará con los que hubiere, prefiriendo siempre los de mayor graduación.

Art. 48. Si en los destacamentos, fuertes, buques, etc., no hubiere jefes y oficiales suficientes para constituir un Consejo con el mínimo de miembros que esta ley establece, se remitirá el reo con los antecedentes del hecho, para ser juzgado, a un Consejo de Guerra permanente o al jefe de cualquier fuerza de consideración que se encontrare próxima.

Art. 49. No siendo posible la remisión del reo, o cuando la plaza esté sitiada o el destacamento incommunicado, el Gobernador o jefe respectivo ejercerá por sí solo la jurisdicción militar en los caso



graves o urgentes, y aplicará la pena correspondiente, con cargo de dar parte al superior en la primera oportunidad.

Art. 60. Para juzgar a un médico o cirujano, capellán, empleado de administración, farmacéutico, ingeniero, maquinista o torpedista, veterinario u otro individuo asimilado a los militares, el Consejo de Guerra se compondrá con arreglo a las disposiciones precedentes, según la asimilación o empleo del acusado.

Cuando la categoría de éste no esté fijada, la determinará el sueldo que goce, equiparado al de un oficial de Ejército o de Armada.

Art. 61. Los Consejos de Guerra llamados a juzgar a los prisioneros de guerra, se compondrán de la manera establecida en este Código y según la graduación o asimilación que ellos tengan.

Art. 62. Toda duda que suscite la aplicación de estas disposiciones, será resuelta por el comandante en jefe del Ejército o Escuadra, previa vista de su Auditor.

CAPITULO III

Disposiciones complementarias

Art. 63. Si el Presidente de la República lo estima conveniente, podrá autorizar la organización, en tiempo de paz, de los Tribunales especiales de tiempo de guerra:

1° En las escuadras, divisiones navales de maniobras, buques en navegación, etc.; 2° En toda fuerza militar estacionada en las fronteras de la República o destacada a más de dos días de camino del asiento de los tribunales permanentes; 3° En los casos del artículo 497, cuando la distancia del lugar en que el hecho se ha producido no permita la intervención del Consejo permanente, sin perjudicar la rapidez del juicio.

- Estos Consejos funcionarán con el procedimiento de paz en los casos de los incisos 1°, 2° y con el procedimiento sumario de la sección I, Libro III, en los casos a que se refiere el inciso 3°.

Art. 64. Todas las funciones que por esta ley se encomiendan a los comandantes o jefes de fuerza, serán desempeñadas por los segundos, en caso de ausencia o impedimento de aquéllos.

TITULO IV

DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Y DE LOS QUE EJERCEN CARGOS EN LA JUSTICIA MILITAR

CAPITULO I

De los Fiscales permanentes

Art. 65. En los Tribunales Militares permanentes el Ministerio Fiscal será ejercido:



1° Por un Fiscal General, en el Consejo Supremo de Guerra y Marina; 2° Por un Fiscal, en cada uno de los Consejos de Guerra.

Art. 56. El Fiscal General será nombrado por el Presidente de la República; no podrá ser removido sin causa justificada.

Debe tener las mismas condiciones que los vocales letrados del Consejo Supremo; le corresponde igual asimilación y goza de los mismos derechos y retribución.

Art. 57. En caso de impedimento del Fiscal General, será éste reemplazado por el Auditor General.

Art. 58. El Fiscal General prestará juramento ante el Consejo Supremo en la misma forma que los vocales del Consejo.

Art. 59. Los Fiscales de los Consejos de Guerra permanentes serán jefes de la misma graduación de los vocales de los respectivos Consejos. Si no los hubiere, se elegirán de los grados inmediatos inferiores.

Art. 60. El puesto de Fiscal de los Consejos de Guerra permanentes será desempeñado, alternativamente si fuere posible, por jefes y oficiales del Ejército y de la Marina, a menos que se estableciesen por separado los Consejos de uno y otro fuero, en cuyo caso las fiscalías respectivas serán servidas por oficiales del Ejército y de la Armada.

Art. 61. Los fiscales de los Consejos de Guerra permanentes serán nombrados por el Presidente de la República, y durarán en sus funciones el mismo tiempo que los Presidentes de Consejos. No podrán ser removidos sin causa justificada, y en los casos de impedimento o inhabilitación serán reemplazados en la misma forma de la designación.

Art. 62. Al Fiscal General le corresponde:

1° Intervenir como acusador en todas las causas de jurisdicción originaria del Consejo Superior de Guerra y Marina; 2° Intervenir en todas las causas falladas por Consejos de Guerra y de que conozca el Consejo Supremo, en virtud de lo que se dispone en el Tratado II de este Código; 3° Promover ante el Consejo Supremo los recursos de revisión de las sentencias firmes de los tribunales militares; 4° Dictaminar en todos aquellos casos en que el Consejo Supremo requiriese su opinión; 5° Velar por la recta y pronta administración de justicia, pidiendo, en su caso, las medidas que estime convenientes al Consejo Supremo o a los Ministerios de Guerra y Marina; 6° Practicar todas las diligencias conducentes a la estricta ejecución de las sentencias que el Consejo Supremo dictare en los casos de jurisdicción originaria, a cuyo efecto tendrá libre entrada en los establecimientos militares donde aquéllas se cumplen, y podrá solicitar, por intermedio del Consejo Supremo o directamente de las autoridades militares, las medidas que considere oportunas; 7° Ejercer todas las demás funciones que expresamente confiere este Código y demás leyes militares.

Art. 63. Corresponde a los fiscales de los Consejos:

1° Intervenir como acusadores en todas las causas de la competencia de los Consejos de Guerra permanentes; 2° Velar porque el orden legal en materia de competencia sea estrictamente observado; 3° Prac-



tiar todas las diligencias conducentes a la estricta ejecución de las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra permanentes, a cuyo efecto tendrán las mismas facultades concedidas al Fiscal General por el inciso 6º del artículo anterior; 4º Cumplir todas las obligaciones que les impone este Código y demás leyes militares.

Art. 64. Los fiscales de los Consejos deberán concurrir diariamente al local donde éstos funcionan, a efecto de oír providencias y firmar notificaciones.

Art. 65. Los fiscales prestarán juramento ante el respectivo Consejo de su adscripción, en la forma establecida en el artículo 14.

CAPÍTULO II

De los Auditores permanentes

Art. 66. La Auditoria permanente será desempeñada por un Auditor General en los departamentos de Guerra y de Marina y por un Auditor en cada uno de los Consejos de Guerra.

Art. 67. El Auditor General será nombrado y removido por el Presidente de la República.

Art. 68. Para el desempeño de este puesto se requiere las mismas condiciones que para ser Fiscal General, y le corresponde al Auditor General la misma asimilación, derechos y retribución.

Art. 69. En caso de impedimento accidental del Auditor General, será reemplazado por alguno de los auditores de los Consejos permanentes.

Art. 70. Los auditores del Consejo serán también nombrados y removidos por el Presidente de la República.

Art. 71. Para ser Auditor de Consejo se requiere ser ciudadano argentino, tener diploma de abogado por Universidad de la República y haber ejercido la profesión durante seis años consecutivos, o haber desempeñado un puesto en la magistratura durante un tiempo no menor de dos años.

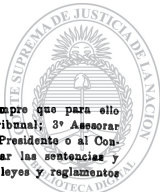
Art. 72. En caso de impedimento accidental, los auditores de Consejo se reemplazarán mutuamente. No siendo esto posible, la designación de suplentes se hará por el Presidente de la República a pedido del Presidente del Consejo respectivo.

Art. 73. Corresponde al Auditor General:

1º Revisar todos los sumarios que eleven los jueces instructores, indicando los vicios o defectos de procedimiento para que sean debidamente subsanados y aconsejar el sobreseimiento o la elevación a plenario; 2º Asesorar a los ministerios de Guerra y de Marina en lo que se refiere a la ejecución de las leyes orgánicas y administrativas del Ejército y Armada.

Art. 74. Corresponde a los auditores del Consejo:

1º Vigilar la tramitación de los juicios y asesorar en todo lo que a ella se refiere; 2º Asistir a las deliberaciones y acuerdos del Consejo,



y resolver cualquier duda o dificultad legal, siempre que para ello fuese requerido por alguno de los miembros del Tribunal; 3º Asesorar al Consejo en las contiendas de competencia y al Presidente o al Consejo en los incidentes de excusación; 4º Redactar las sentencias y cumplir con todas las demás obligaciones que las leyes y reglamentos les impusieran.

Art. 75. Los auditores prestarán juramento ante los Consejos respectivos, en la misma forma que los fiscales.

CAPITULO III

Fiscales y Auditores ad hoc

Art. 76. Cada Consejo de Guerra especial tendrá un Fiscal y un Auditor.

Art. 77. En los Consejos de Guerra para jefes y oficiales, la jerarquía del Fiscal será por lo menos igual a la del acusado, no pudiendo, en caso alguno, ser inferior a la de subteniente y su equivalente en la Marina.

Art. 78. Las obligaciones de los fiscales *ad hoc* serán las mismas que esta ley señala a los fiscales permanentes, en cuanto sean compatibles con el carácter transitorio de sus funciones.

Art. 79. Cada uno de los generales en jefe del Ejército o Armada tendrá adscripto como Auditor un abogado que nombrará previamente el Presidente de la República.

No habiéndose hecho el nombramiento, y no habiendo en el Ejército o en la Armada abogados que puedan desempeñar este puesto, podrá ser provisto por el General en Jefe, con jefes u oficiales a quienes se juzgue con competencia suficiente.

Art. 80. El Auditor en campaña asesorará al General en Jefe en todo lo relativo a la justicia militar en el Ejército o Armada.

Art. 81. La jerarquía de los Auditores de Consejo no podrá ser superior a la de los vocales del mismo.

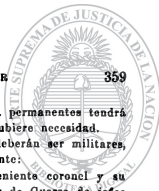
Art. 82. La elección del Auditor de Consejo se hará entre oficiales que hayan demostrado más aptitud en todo lo referente a justicia militar, y sus funciones serán las mismas que esta ley señala para los auditores permanentes, en cuanto lo permita el carácter transitorio del cargo.

Art. 83. Los fiscales y los auditores *ad hoc* prestarán juramento ante sus respectivos Consejos, en la forma establecida en el artículo 14.

CAPITULO IV

De las Secretarías y del Archivo

Art. 84. El Consejo Supremo de Guerra y Marina tendrá un Secretario, un Prosecretario y los demás empleados que considere necesarios.



Art. 85. Cada uno de los Consejos de Guerra permanentes tendrá dos o más Secretarios y los empleados de que hubiere necesidad.

Art. 86. Todos los empleados de Secretaría deberán ser militares, y la graduación de los Secretarios será la siguiente:

1º Para el Consejo Supremo, un coronel o teniente coronel y su equivalente en la Armada; 2º Para los Consejos de Guerra de jefes y oficiales, mayores o capitanes y sus equivalentes en la Armada; 3º Para los Consejos de Guerra de tropa, oficiales subalternos.

Art. 87. Los empleos subalternos de las Secretarías pueden ser servidos por clases.

Art. 88. Las Secretarías de los Consejos de Guerra permanentes serán desempeñadas, a la vez, por los jefes y oficiales de Ejército y Armada, a menos que se establecieren por separado los Consejos para el fuero de Guerra y para el de Marina, en cuyo caso las Secretarías serán tenidas por los oficiales respectivos.

Art. 89. Todos los empleados en las Secretarías de los Tribunales Militares serán nombrados por el Presidente de la República, a propuesta de los Consejos respectivos.

Art. 90. Los Secretarios prestarán juramento de fiel desempeño ante el Consejo. La fórmula del juramento es la establecida en el artículo 14.

Art. 91. El Secretario del Consejo Supremo es el jefe inmediato de las oficinas de Secretaría y del Archivo, y le corresponde:

1º Intervenir en todas las causas de que conozca el Consejo Supremo, autorizando todas las diligencias que en ella se practiquen. 2º Refrendar la firma del Presidente del Consejo en todos los casos. 3º Redactar las actas de los acuerdos y llevar los libros correspondientes. 4º Preparar la estadística criminal militar, de acuerdo con los reglamentos que al efecto se dictaren. 5º Cumplir con las demás obligaciones que especialmente le señalen las leyes y reglamentos.

Art. 92. Los Secretarios de Consejo son los jefes inmediatos de sus respectivas Secretarías, y les corresponde:

1º Intervenir en la substanciación de los procesos, autorizando todas las diligencias que en ellos se practiquen. 2º Ejecutar todas las diligencias de pruebas que les sean encomendadas. 3º Refrendar en todas las causas la firma del Presidente. 4º Redactar las actas de los acuerdos y llevar el libro correspondiente. 5º Cumplir todas las demás obligaciones que les impusieren las leyes y reglamentos.

Art. 93. El Archivo del Consejo Supremo de Guerra y Marina es el único archivo de Justicia Militar, y a él se remitirán en la oportunidad debida todas las causas terminadas del Ejército y Armada.

Art. 94. El Consejo Supremo dictará un reglamento en el que se determinará prolijamente el mecanismo de las oficinas del Archivo y las obligaciones de sus empleados.



CAPITULO V

De los Jueces de Instrucción

Art. 95. Cada sumario será instruido por un Juez de Instrucción, designado por la autoridad encargada de disponer, en cada caso, la formación del sumario.

Art. 96. La graduación o categoría de los Jueces de Instrucción será, por lo menos, igual a la del procesado, no pudiendo en caso alguno ser menor de subteniente y sus equivalentes en la Armada.

Exceptúanse de esta disposición las causas de los oficiales generales, en las cuales el Juez Instructor podrá ser de menor graduación que el sumariado, siempre que sea de la clase de general.

Art. 97. Corresponde a los Jueces de Instrucción:

1º Formar los sumarios para que hayan sido nombrados, observando estrictamente las disposiciones contenidas en el tratado II de este Código. 2º Prover todo lo necesario a la seguridad del encausado guardando siempre a su jerarquía aquellas consideraciones que fueran compatibles con el estricto cumplimiento de la ley. 3º Informar a la autoridad militar que lo nombró, sobre el resultado del sumario, aconsejando la elevación a plenario o el sobreseimiento definitivo o provisional. La indicación de cualquiera de estas resoluciones deberá ser fundada en las constancias del expediente, clara y prolijamente relacionadas.

Art. 98. El Juez Instructor nombrará a su Secretario, a cuyo efecto se informará en las oficinas respectivas, de los oficiales que estuviesen disponibles. No habiendo oficiales en disponibilidad, puede nombrar clases.

Art. 99. El Juez Instructor que no practicare con la diligencia debida todas las medidas legales que fueren necesarias para el rápido y perfecto esclarecimiento del hecho, será responsable por la vía disciplinaria.

Art. 100. El P. E. nombrará los jefes y oficiales que han de desempeñar las funciones de jueces de instrucción en el asiento de los Consejos de Guerra permanentes.

CAPITULO VI

De los Comisarios de Policía

Art. 101. En tiempo de guerra, los generales en jefe de ejércitos en campaña, los jefes superiores de cuerpo o divisiones independientes, etc., nombrarán para los servicios de policía de las fuerzas a sus órdenes, el número de comisarios que consideren convenientes.

Art. 102. Los comisarios ejercerán sus funciones de acuerdo con los



reglamentos militares y sin perjuicio de las facultades disciplinarias de los jefes.

Art. 103. La acción policial de los camisarios se extiende en la retaguardia, flancos y frente, a todo el terreno a que alcanzan los servicios de seguridad del Ejército, Cuerpo o División.

Art. 104. Cada comisario, será ayudado en el desempeño de sus funciones por los oficiales subalternos que necesite, debiendo éstos actuar como secretarios y ayudantes.

CAPITULO VII

De los defensores

Art. 105. Todo procesado ante los Tribunales militares debe nombrar defensor. Al que no quisiera o no pudiera hacerlo, se lo nombrará defensor de oficio por el presidente del tribunal respectivo.

Art. 106. Ante los tribunales militares, el defensor deberá ser siempre militar de servicio activo.

Art. 107. La defensa es acto del servicio, y no podrá excusarse de ella ningún jefe de graduación inferior a coronel o capitán de navío, ni oficial, cualquiera que sea el cuerpo o buque a que pertenezca, y aun siendo menor de edad.

Art. 108. Cuando un mismo defensor patrocina a varios procesados y resultan incompatibilidades entre la defensa de unos y otros, el nombramiento sólo aprovechará al primero que lo eligió.

Art. 109. Al defensor que no preste la debida asistencia a la defensa de su patrocinado o no cumpla con los deberes de su cargo, podrá imponérsele por los Consejos respectivos apercibimiento o arresto hasta por treinta días.

TITULO V

DE LAS EXCUSACIONES

Art. 110. La excusación del cargo de Presidente o de vocal de un Consejo de Guerra debe fundarse en alguna de las causas siguientes:

1º Parentesco de consanguinidad dentro del 4º grado civil y del segundo de afinidad (1): a) Con cualquiera de los procesados; b) Con

(1) Los grados civiles, en la línea recta, se cuentan por generaciones: así, el hijo está en primer grado descendente, el nieto en segundo, el padre en el primer grado ascendente, el abuelo en segundo.

En la línea colateral también se cuentan por generaciones, subiendo desde la persona cuyo parentesco se quiere establecer hasta el autor común, y bajando, de éste hasta el otro pariente de igual grado en la respectiva línea recta: así, los hermanos están en segundo grado; el sobrino y tío, en tercero; los primos hermanos, en el cuarto; etc.

El parentesco por afinidad se cuenta por el número de grados en que



la persona ofendida o perjudicada directamente por el delito; c) Con alguno de los otros miembros del mismo Tribunal o con los que desempeñen en él las funciones de Fiscal, Auditor y Secretario. 2º Haber hecho la denuncia o intervenido en la causa como perito o testigo. No se considera comprendido en este inciso el militar que se limita a pasar el parte correspondiente del hecho que motiva la causa. 3º Haber sido acusador o defensor, en causa criminal, de alguno de los procesados, en los dos años precedentes a la iniciación del juicio. 4º Haber sido denunciado o acusado como actor, cómplice o encubridor de un delito, por alguno de los procesados o por el ofendido. 5º Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con el acusado u ofendido. 6º Servir a las órdenes del acusado, cuando éste fuese sometido a juicio por hechos relativos al ejercicio de su mando. 7º Ser deudor, acreedor o fiador del acusado.

Art. 111. Los fiscales, auditores y secretarios pueden fundar su excusación en las causales indicadas en los incisos 1º, 3º, 5º y 6º del artículo anterior. Los jueces instructores, en las mismas causas, con excepción de la consignada en el acápite c) del inciso 1º. Los peritos, en todas las que sirven de excusación a los testigos.

Art. 112. Son causas únicas de excusación de los defensores: 1º Ser parte en el proceso, como perjudicado o testigo. 2º Enfermedad debidamente justificada. 3º Enemistad manifiesta. 4º Comisión especial y permanente del servicio, a no ser que fuese reducido el número de oficiales disponibles. 5º Haber intervenido en la formación del sumario como preventor, juez de instrucción o secretario de uno o de otro.

Art. 113. La autoridad militar podrá ordenar la remoción de un defensor, tan sólo cuando un asunto urgente del servicio lo reclame.

Art. 114. No podrán ser obligados a desempeñar cargo alguno judicial: 1º Los retirados. 2º Los que pertenecen al clero castrense. 3º Los inválidos.

Art. 115. Todo miembro de un Tribunal Militar que se encuentre comprendido en alguna de las respectivas causas de excusación deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento de quien corresponda; y cuando no lo hiciere, el reo, el fiscal o el defensor podrán hacerlo presente a fin de que requiriéndose, al respecto, una manifestación del funcionario indicado, se resuelva si ha de ser o no reemplazado. Contra esta resolución no hay recurso.

Art. 116. Las causas de excusación de los vocales, fiscales, auditores, secretarios y defensores, serán apreciadas por el Presidente del Tribunal; las del Presidente, por el Consejo respectivo en las permanentes, y por la autoridad militar que lo nombró, en los Consejos de

cada uno de los cónyuges está con su pariente por consanguinidad: así, el suegro y el yerno, están en primer grado ascendente y descendente, porque es el en que está el padre y el hijo respectivamente; los cuñados en segundo grado colateral, porque es el que corresponde a los hermanos entre sí, etc. (Código Civil, arts. 352 y siguientes).

Guerra especiales. La del Juez Instructor, por la autoridad militar que lo designó; y la de los peritos, por el Juez Inspector o por el Presidente del Consejo, según el caso.

TITULO VI

DE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES MILITARES

CAPITULO I

Disposiciones generales

Art. 117. La jurisdicción militar comprende:

1º Los delitos y faltas esencialmente militares, considerándose como de este carácter todas las infracciones que, por afectar la existencia de la institución militar, tan sólo las leyes militares prevén y castigan; 2º Los delitos y faltas que afectan directamente el derecho y los intereses del Estado o de los individuos, cuando son cometidos por militares o empleados militares en actos del servicio militar o en lugares sujetos exclusivamente a la autoridad militar, como ser plazas de guerra, teatro de operaciones, campamentos, fortines, cuarteles, arsenales, hospitales y demás establecimientos militares; 3º Todos los demás casos de infracción penal que este Código expresamente determina.

Art. 118. Están en todo tiempo sujetos a la jurisdicción militar:

1º: Los alistados en la marina de guerra o en las armas tácticas y auxiliares del ejército permanente de la República, cualquiera que sea su jerarquía y la situación en que se encuentren, ya estén en actividad, en disponibilidad o con licencia; 2º Los guardias nacionales y escuelas militares de la República, por infracciones no previstas ni castigadas en los reglamentos propios; 4º Los que forman parte con asimilación militar: del clero castrense, de la justicia, de la sanidad, de la administración militar y de las demás dependencias del Ejército y Armada; 5º Los penados que extingan condena en establecimientos sujetos a la autoridad militar.

Art. 119. En tiempo de guerra la jurisdicción militar es extensiva:

1º A los empleados y operarios sin asimilación militar que presten sus servicios en los establecimientos o dependencias militares, por cualquier delito o falta cometida dentro de ellos; 2º A los prisioneros de guerra; 3º A los vivanderos, postillones, cantineros, sirvientes, comerciantes y demás individuos que acompañan a los ejércitos, por los delitos o faltas cometidas en el terreno comprendido dentro de los servicios de seguridad. Esta disposición se refiere también a las mujeres que desempeñan en los ejércitos alguno de los oficios o trabajos expresados; 4º Los particulares o personas extrañas al Ejército que en la zona de las operaciones activas cometan alguno de los delitos previstos en el Tratado III de este Código, o cualquier acto que los bandos de los comandantes en jefe prohíban y castiguen.





Art. 120. Cuando las tropas de operaciones se hallasen en territorio del enemigo, están sujetos a la jurisdicción de los tribunales militares todos los que fueren acusados por cualquiera de los delitos o faltas comunes.

Art. 121. Si estuviesen en territorio extranjero, amigo o neutral, se observarán en cuanto a la competencia y jurisdicción de los Tribunales Militares, las reglas que fueren estipuladas en los tratados o convenciones con la potencia a quien perteneciera el territorio.

A falta de convención, la jurisdicción y competencia de los Tribunales serán regladas por los principios del Derecho Internacional.

CAPITULO II

Orden de las competencias

Art. 122. Cuando una persona sujeta a la jurisdicción militar cometa dos o más infracciones penales que, por su naturaleza y circunstancias, sean del conocimiento de los tribunales militares y de los ordinarios, juzgarán primero aquellos a quienes les competa la aplicación de la pena mayor, remitiendo luego el reo a la otra jurisdicción, para el juzgamiento del hecho que le corresponde.

Si las infracciones merecieren la misma pena, conocerán primero los Tribunales Militares.

Art. 123. Cuando, por la naturaleza o por las condiciones de la infracción, sea exclusiva la jurisdicción militar, conocerá primero aquel de los Tribunales permanentes en cuyo territorio se hubiera producido el hecho.

Habiendo duda al respecto, corresponderá el conocimiento del asunto al del lugar donde el reo ha sido aprehendido, y si no estuviera claramente determinado a cuál de las dos jurisdicciones corresponde el paraje donde se hizo la aprehensión, será juzgado primero por el Consejo permanente del lugar donde estuviese de guarnición o estacionado el cuerpo o destacamento a que el reo pertenece.

Art. 124. Cuando en los casos previstos por esta Ley tenga que comparecer ante un Consejo de Guerra, en calidad de actor principal, un individuo que no sea militar ni esté asimilado a los militares, el Consejo de Guerra será el de las clases de tropa. Compareciendo en calidad de cómplice, será juzgado por el Consejo que entienda en lo principal.

TITULO VII

COMPETENCIA EN CASO DE COMPLICIDAD

Art. 125. Si un delito común ha sido cometido, a la vez, por militares y por particulares, serán todos justiciables ante los tribunales ordinarios, a menos que el hecho hubiere sido cometido en actos del servicio



o en parajo sujeto exclusivamente a la autoridad militar, en cuyo caso y con las excepciones de esta Ley, los militares serán juzgados por los Tribunales Militares y los particulares por los ordinarios.

Art. 126. Cuando un mismo delito fuese cometido por individuos de diversas graduaciones serán todos juzgados por el Consejo que corresponda a los de mayor graduación.

Art. 127. Cuando un mismo delito fuese cometido por individuos sujetos a los Tribunales Militares de Marina y a los de Ejército, serán todos procesados y juzgados por los Tribunales de Marina, si el delito fuese cometido en buques del Estado o dentro del recinto de puertos militares, arsenales u otros establecimientos marítimos; y por los Tribunales Militares del Ejército, si el delito se cometiera en cualquier otro lugar de jurisdicción militar.

Art. 128. Todos los que estuvieren complicados en las infracciones penales que son de competencia de los Tribunales Militares, quedan sujetos a la jurisdicción de los mismos, en los casos siguientes:

1º Cuando pertenecieren al Ejército o Armada aunque por razón del lugar del hecho o por no hallarse en actos del servicio, no hubieran estado sujetos a la jurisdicción militar al tiempo del delito. 2º Cuando el delito fuese perpetrado en el Ejército o Armada estando en país enemigo. 3º Cuando fuere cometido en territorio argentino al frente del enemigo.

TITULO VIII

COMPETENCIA EJECUTIVA

Art. 129. Corresponde, en todo tiempo, al Presidente de la República y a sus agentes de mando militar, la aplicación, de acuerdo con los reglamentos, de las penas disciplinarias enumeradas en el Capítulo II, Título II, Tratado III de este Código.

TITULO IX

COMPETENCIA EN TIEMPO DE PAZ

CAPITULO I

De los Consejos de Guerra permanentes

Art. 130. Corresponde a los Consejos de Guerra, el juzgamiento de todos los delitos que el Tratado III de este Código califica y castiga y que no tienen señalado tribunal especial en esta Ley; y el castigo de las faltas, en los casos en que esa fuera la calificación correspondiente a los hechos probados, o cuando el procesado fuera acusado a la vez por delitos y faltas.



CAPITULO II

Del Consejo Supremo de Guerra y Marina

Art. 131. Compete al Consejo Supremo de Guerra y Marina:

1° Juzgar, en única instancia, a los oficiales generales del Ejército y Armada. 2° Juzgar, en única instancia, por las infracciones que hubieren cometido en el desempeño de sus cargos: 1° A los vocales letrados del Consejo Supremo; 2° A los miembros de los Consejos de Guerra permanentes; 3° A los funcionarios letrados de la Administración de Justicia Militar. 3° Conocer de las causas falladas por los Consejos de Guerra, en los casos y en la forma que se establece en el Tratado II de este Código. 4° Decidir las contiendas de competencia entre los Tribunales Militares. 5° Resolver los conflictos de atribuciones entre funcionarios de Justicia Militar. 6° Asesorar a los ministerios de Guerra y de Marina en lo relativo a la ejecución de las leyes de Justicia Militar. 7° Conocer de los recursos de revisión, en los casos y en la forma que se establecen en la Parte III, Sección III, Tratado II de este Código. 8° Informar en los casos de indulto o conmutación. 9° Dictar los reglamentos internos de sus oficinas y los de los Consejos de Guerra permanentes. 10. Suministrar a los ministerios de Guerra y de Marina los informes que le fuesen pedidos sobre el funcionamiento de los Tribunales Militares. 11. Conocer e intervenir en todos los demás asuntos que este Código expresamente le señale.

TITULO X

COMPETENCIA EN TIEMPO DE GUERRA

CAPITULO I

De los Consejos de Guerra especiales

Art. 132. Compete a los Consejos de Guerra de los ejércitos y escuadras de operaciones, el juzgamiento de los mismos delitos y faltas que juzgan los Consejos de Guerra permanentes, y el de los que los bandos prevén y castigan.

CAPITULO II

Del General en Jefe

Art. 133. A los Generales en Jefe de ejércitos o escuadras de operaciones, a los comandantes superiores de cuerpos o divisiones independientes, competen, respecto de las fuerzas a sus órdenes, las mismas facultades disciplinarias que al Presidente de la República.



Les compete igualmente el ejercicio de las facultades relativas a la ejecución de las sentencias.

Art. 134. El General en Jefe de un ejército o escuadra en campaña, o de una división que opere por separado, tendrá autoridad para hacer promulgar los bandos que creyere convenientes para la seguridad y disciplina de las tropas, y estos bandos obligarán a cuantas personas sigan al ejército o escuadra, sin excepción de clase, estado, condición ni sexo.

Art. 135. Compete al General en Jefe del Ejército y al Comandante en Jefe de la Escuadra, ejercer, en cuanto a los procesos juzgados en Consejo de Guerra, toda la jurisdicción que por la presente Ley se confiere al Consejo Supremo de Guerra y Marina.

CAPITULO III

De los Gobernadores Militares

Art. 136. A los gobernadores de plazas fuertes, puertos militares, lugares fortificados, como también a los jefes de buques o destacamentos aislados o incomunicados, les corresponden las mismas facultades disciplinarias y jurisdiccionales de los Generales en Jefe.

Art. 137. Las personas designadas en el artículo anterior tendrán el ejercicio pleno de la jurisdicción en los casos del artículo 49 de este Código.

CAPITULO IV

De los Comisarios de Policía

Art. 138. Los Comisarios de Policía del Ejército tienen jurisdicción:

1º Sobre los postillones, vivanderos y vivanderas, cantineros y cantineras, lavanderos, comerciantes, sirvientes de los oficiales y cualesquiera otros individuos que acompañaren al Ejército o hicieran parte de su comitiva. 2º Sobre los vagabundos y desconocidos.

Art. 139. Los Comisarios de Policía conocerán, cuando el Ejército se encuentre en territorio enemigo y en relación a las personas mencionadas en el artículo precedente:

1º De las infracciones de las leyes y reglamentos de policía, sin perjuicio de la competencia ejecutiva de los jefes. 2º De las reclamaciones por daños y perjuicios resultantes de las infracciones sujetas a su jurisdicción y competencia, cuando no excedieran del valor de ciento cincuenta pesos nacionales.



TRATADO SEGUNDO

DEL MODO DE PROCEDER EN LOS JUICIOS MILITARES

LIBRO PRIMERO

PROCEDIMIENTOS GENERALES

TITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Art. 140. La Justicia Militar se administra gratuitamente.

Art. 141. Las actuaciones judiciales se escribirán en papel de hilo y con tinta negra.

Tan sólo a falta de este material, podrá emplearse de otra clase (1).

Art. 142. Para las diligencias de Justicia Militar son hábiles los días feriados. Ellos están incluidos en todos los términos que este Código señala.

Art. 143. Los términos de días se cuentan de 12 a 12 de la noche y empiezan a correr desde la media noche siguiente a la notificación.

Los términos de horas, desde la indicada en la notificación o diligencia respectiva.

Art. 144. Todos los términos pueden ser prorrogados, cuando a juicio del Tribunal o de la autoridad militar, según el caso, no sea posible practicar, dentro de ellos, los actos o diligencias para que han sido establecidos.

Art. 145. Cuando no haya plazo establecido, para practicar una diligencia o acto judicial, debe ejecutarse inmediatamente y sin demora alguna.

Art. 146. En los juicios militares se procede, únicamente, por acusación del Fiscal y no se admite acción privada, salvo lo dispuesto en el artículo 139, inciso 2º.

La intervención de los perjudicados por la infracción se reduce a presentar la denuncia y auxiliar a la justicia dentro de los límites y en la forma prescripta por este Código.

Art. 147. No se iniciará juicio ante los tribunales militares por

(1) En cada foja se harán tres dobles: uno de un centímetro, para la costura del expediente; otro de cinco centímetros, a continuación, para indicaciones o extractos del contenido de la foja, y el tercero de dos centímetros, en el costado opuesto, para margen exterior.



delitos de violación, estupro o rapto, si no mediare queja de la parte perjudicada.

Art. 148. La acción de daños y perjuicios proveniente de los delitos de jurisdicción militar debe ser deducida ante los tribunales civiles.

Art. 149. Los tribunales militares pueden ordenar, en beneficio de los propietarios, la restitución de los objetos tomados a los delinquentes y de los que hubiesen sido presentados en juicio, en comprobación de la infracción criminal, una vez que por disposición de la ley no hayan sido decomisados en favor del Estado.

TITULO II

CUESTIONES DE COMPETENCIA

Art. 150. Las cuestiones de competencia entre dos consejos de guerra permanentes pueden promoverse en dos formas:

1º Cuando el Consejo de Guerra que se considera competente se dirige por oficio al Consejo que conoce de la causa y le pide que se inhiba de seguir conociendo en ella, que le remita el proceso y ponga a su disposición el reo. 2º Cuando el Consejo a quien se ha pasado la causa se niega a conocer en ella y remite las actuaciones al Consejo a quien atribuya la competencia.

Art. 151. En la primera forma, el Consejo requerido acusará inmediatamente recibo del oficio y dentro de las 24 horas siguientes resolverá, en acuerdo, si se inhibe del conocimiento o sostiene su competencia.

Si se acordare la inhibición, remitirá los autos al Consejo requirente, poniendo a su disposición el reo.

Si decidiere sostener su competencia, contestará expresando las razones en que se funda su decisión.

Si el requirente no acepta estas razones y considera que debe insistir en su competencia, remitirá en el acto al Consejo Supremo de Guerra y Marina las actuaciones del incidente y dará simultáneo aviso al Consejo requerido, para que remita también sin demora al Consejo Supremo el expediente de la causa.

Art. 152. Recibidas las actuaciones por el Consejo Supremo, las pasará sin más trámite al Fiscal General, quien se expedirá en el término de 24 horas. Devueltos los autos, el Consejo Supremo resolverá definitivamente en acuerdo dentro de los dos días siguientes.

Art. 153. En la segunda forma, el Consejo que se niega a conocer, remitirá en el acto el expediente con oficio al Consejo a quien atribuya la competencia.

Si éste acepta el conocimiento del asunto, dará inmediatamente aviso al otro Consejo para que ponga a su disposición el reo.

Si no acepta, devolverá los expedientes con las observaciones correspondientes y debidamente fundadas.



En este último caso, si el primer Consejo insiste en su declinatoria, remitirá los expedientes al Consejo Supremo, para que proceda en la forma del artículo anterior.

Art. 154. En todas las cuestiones de competencia los consejos de guerra resolverán en acuerdo, y con consulta de sus auditores.

Art. 155. Las actuaciones practicadas por el Consejo declarado incompetente, serán válidas y no habrá que proceder a su ratificación.

Art. 156. En todos los casos mientras la contienda no se resuelve, quedan en suspenso los procedimientos.

Art. 157. Los conflictos de atribuciones entre los demás funcionarios y empleados de Justicia Militar, serán resueltos en acuerdo por el Consejo Supremo, a requisición de la autoridad militar y previa vista del Fiscal General. Esta vista se expedirá en el término de 24 horas y la resolución se dictará dentro de los dos días siguientes a la devolución del expediente por el Fiscal General.

Art. 158. Las cuestiones de competencia pueden promoverse por iniciativa propia de los Consejos, por requisición fiscal o petición de parte.

Art. 159. La segunda forma de promover la competencia, o sea por declinatoria, se opendrá como excepción, inmediatamente después de la aceptación a que se refiere el artículo 340.

Art. 160. Cuando un Juez Instructor tenga noticia de que se sigue otra instrucción por el mismo hecho de que está él encargado, lo hará presente a la autoridad militar correspondiente, para la determinación que convenga.

Art. 161. Las cuestiones de competencia entre los tribunales militares y los federales u ordinarios de los Estados, son decididas por la Suprema Corte de Justicia Federal.

TITULO III

DE LAS NOTIFICACIONES, CITACIONES Y EMPLAZAMIENTOS

Art. 162. Las notificaciones se harán inmediatamente de pronunciadas las sentencias, resoluciones y providencias. En ningún caso podrán demorarse más de 24 horas.

Art. 163. Cuando la notificación se haga en la Secretaría del Consejo, el secretario dará lectura al interesado de la sentencia, resolución o providencia que se notifica; permitiéndole sacar copia de ella, si lo solicitase.

Art. 164. La notificación que se hace en las oficinas, se extenderá en el mismo expediente y será firmada por el secretario y el interesado.

En caso de que este último no supiere o no quisiera firmar, se hará constar en la notificación y ésta se firmará por dos testigos que el secretario requerirá en el momento.

Art. 165. La notificación de la sentencia se hará siempre personal.



mento a los interesados y en el mismo expediente de la causa. En ella se observará lo dispuesto en el artículo 163.

Respecto a las demás providencias o resoluciones, la notificación que se practique fuera de las oficinas se hará por cédula, y ésta debe contener:

1º La indicación de la causa. 2º La designación del Consejo que conoce de ella y la del secretario. 3º El nombre de la persona a quien se notificará. 4º La fecha. 5º La copia de la resolución o providencia que se notifica.

Art. 166. Esta cédula se hará por duplicado. Una copia se dejará en poder del interesado, en la otra se pondrá constancia de la entrega, con indicación del lugar, día y hora; se hará firmar por el interesado y se agregará al expediente.

Art. 167. Si el oficial u ordenanza encargado de la notificación no encontrase a la persona a quien va a notificar, entregará la cédula al militar más caracterizado, si la notificación se hiciera en cuartel o establecimiento militar; y si fuera en domicilio particular, a cualquier persona de la familia, y en defecto de ésta al agente, puesto u oficina de policía más inmediato.

En ambos casos se procederá de la manera indicada en el artículo 166, haciendo firmar a la persona que recibe la cédula y recomendándole la entrega de ésta.

Art. 168. El emplazamiento y la citación de las personas cuya concurrencia a la instrucción o al juicio sea necesaria, se hará en la misma forma que las notificaciones; pero la cédula del emplazamiento contendrá, además, el término dentro del cual debe presentarse el emplazado.

La citación de testigos puede hacerse por nota a los jefes respectivos o por intermedio de la policía, cuando se trate de particulares, a cuyo efecto se librará a ésta, el oficio correspondiente.

Art. 169. En caso de urgencia y en los consejos de guerra especiales, las notificaciones, citaciones y emplazamientos, pueden hacerse en cualquier forma y aun verbalmente, dando conocimiento al jefe respectivo cuando se trate de militares.

Art. 170. Si la persona que debe comparecer a la instrucción o al juicio se encuentra fuera del lugar donde funcione el Consejo o el Instructor, la citación o emplazamiento se hará por oficio dirigido a la autoridad militar de quien depende, y si no fuera militar, por exhorto a cualquiera de los jueces ordinarios de la localidad.

Art. 171. Cuando se ignore el paradero, la citación o emplazamiento podrá hacerse por edictos publicados tres días en diarios del lugar, y en caso de no haber diarios, por edictos fijados en parajes públicos.

Art. 172. La copia de los edictos y los periódicos en que se hubieren publicado, se agregará al expediente.



TITULO IV
DE LA REBELDIA O CONTUMACIA DEL PROCESADO

Art. 173. Será declarado rebelde:

1º El procesado que no compareciere a la citación o llamamiento.
2º El que fugase de la prisión.

La declaración de rebeldía se hará por el Instructor o por el Tribunal, previo informe del secretario.

Art. 174. Si la rebeldía se declara en el plenario, se suspenderá la causa hasta la presentación o aprehensión del procesado.

Art. 175. Si se declara durante la instrucción, se proseguirán las diligencias de esclarecimiento hasta la completa terminación del sumario, y concluido éste, se declarará la elevación a plenario, y se reservará con todas las piezas de convicción que fuere posible conservar, hasta la presentación o aprehensión del procesado.

Art. 176. Las piezas de convicción pertenecientes a terceros, extraños al hecho que motiva la causa, serán devueltas a sus dueños, previa comprobación de su derecho.

En este caso se dejará en autos la constancia correspondiente y la descripción de la pieza devuelta, si fuera posible.

Art. 177. Cuando se declara rebelde a un jefe u oficial, cualquiera que sea la jerarquía queda por el hecho de la declaratoria dado de baja del Ejército o Armada, a menos que al presentarse, probare que le ha sido materialmente imposible comparecer en el término del emplazamiento.

Art. 178. Si se presentare sin producir esa prueba o si fuere aprehendido y la causa terminase por la absolución, el Presidente de la República podrá darlo nuevamente de alta, si lo considera justo o conveniente, pero no con la colocación que tenía en el escalafón.

LIBRO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN TIEMPO DE PAZ

SECCION PRIMERA

Del Sumario

TITULO I

AUTORIDADES QUE LO ORDENAN. — OBJETO Y DURACION DEL SUMARIO

Art. 179. La orden de proceder a la instrucción de sumario emanará, en la Capital, de los ministros, de Guerra o Marina, según corresponda, o de los funcionarios o empleados militares que ellos expresamente designen.



Art. 180. Fuera de la Capital, la orden a que se refiere el artículo anterior, será expedida por los jefes con mando superior independiente y por los directores o jefes de establecimientos militares.

Art. 181. En las causas de los oficiales generales y funcionarios letrados de la administración de justicia, la orden de proceder a la instrucción de sumario será dictada siempre por el Presidente de la República.

Art. 182. La orden a que se refieren los artículos anteriores debe preceder siempre a la iniciación o prosecución del sumario.

Art. 183. El sumario tiene por objeto:

1º Comprobar la existencia de alguno de los hechos que este Código castiga. 2º Reunir todos los datos y antecedentes que puedan influir en su calificación legal. 3º Determinar la persona de los autores, cómplices o encubridores. 4º Practicar todas las diligencias necesarias para la aprehensión de los delinquentes y para asegurar la efectividad de la pena.

Art. 184. Un sumario debe comprender:

1º Los delitos conexos. 2º Todos los delitos de jurisdicción militar, aunque no tengan analogía o relación entre sí, que se imputen al sumariado al iniciarse la instrucción o en el curso de ella y sobre los cuales no haya recaído sentencia firme.

Art. 185. A los efectos del artículo anterior, se reputan delitos conexos:

1º Los cometidos simultáneamente por dos o más personas reunidas. 2º Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares, si hubiere mediado concierto entre ellas.

Art. 186. El sumario es secreto y no se admiten en él debates ni defensas. Puede iniciarse:

1º Por denuncia. 2º Por prevención.

Art. 187. El sumario no podrá durar más de cinco días, no computándose en este término las demoras por diligencias forzosas que hubiere que practicar fuera del lugar donde funciona el Instructor.

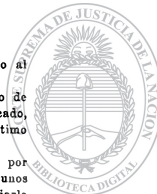
Los exhortos y oficios diligenciados que se reciban después, se agregarán a los autos, en cualquier estado que éstos se encuentren.

Art. 188. Cuando por razones imputables a las oficinas militares, administrativas o judiciales, o cuando por cualquier circunstancia especial no se pudiera terminar el sumario en el plazo señalado, el Instructor lo hará saber a la autoridad o jefe que lo nombró, a fin de que resuelva lo que corresponda, llevando entretanto la instrucción adelante.

TITULO II

DE LA DENUNCIA

Art. 189. Los militares o asimilados militares que por cualquier medio tuviesen conocimiento de la perpetración de un delito sujeto



a la jurisdicción de los tribunales militares, deberán denunciarlo al superior de quien dependan.

La denuncia se hará siempre en el acto de tener conocimiento de la comisión del delito y en interés del buen servicio o del perjudicado, pero nunca para aprovechar personalmente de ella. En este último caso, la denuncia no será admitida.

Art. 190. Las personas sin carácter ni asimilación militar que por cualquier motivo tuvieren conocimiento de la perpetración de algunos de los delitos a que se refiere el artículo anterior, podrán denunciarlo ante cualquier autoridad o funcionario militar.

Art. 191. La denuncia debe contener:

1º La relación circunstanciada del hecho que se denuncia. 2º El nombre del autor o de los cómplices, así como la indicación de las personas que lo presenciaron o que pudieran tener conocimiento o suministrar datos. 3º Todas las demás circunstancias que de cualquier modo pudieran concurrir a la averiguación del delito, a calificar su naturaleza y gravedad y a descubrir a sus autores y cómplices.

Art. 192. En el caso del artículo 189, la denuncia será hecha por escrito en oficio firmado por el denunciante. Si éste fuera el jefe del delincuente, deberá acompañarla con todos los antecedentes que sobre la persona y servicios de aquél constaren en los libros del cuerpo, buque o repartición militar a que perteneciere.

Art. 193. En el caso del artículo 190, la denuncia puede ser presentada verbalmente o por escrito.

La denuncia escrita será firmada por el denunciante u otra persona a su ruego.

La autoridad o funcionario que la reciba, rubricará o mandará rubricar todas sus fojas a presencia del que la presenta.

Art. 194. Cuando la denuncia fuese verbal, se extenderá un acta en la que en forma de declaración, se expresarán todas las circunstancias a que se refiere el artículo 191, y esa acta será firmada por el que recibe la denuncia, por el que la hace o por cualquier otra persona a su ruego.

Art. 195. La autoridad o funcionario que reciba una denuncia escrita o verbal, hará constar en cualquier forma la identidad del denunciante, y si estuviese facultado para ello, mandará instruir el sumario correspondiente, nombrando inmediatamente el Juez Instructor. Si no tuviera esa facultad, remitirá la denuncia, sin pérdida de tiempo, a la autoridad o funcionario militar a quien compete la atribución.

Art. 196. Hecha la denuncia se expedirá a los denunciantes un resguardo en que consten: el día y la hora de su presentación, el hecho denunciado, los nombres de denunciador y denunciados, si éstos fueran conocidos, los comprobantes que se hubieren presentado de los hechos y las demás circunstancias que ellos consideren importantes.

Art. 197. La denuncia anónima no será tomada en consideración a los efectos de la formación de sumario.



Art. 198. El denunciante no contrae otra responsabilidad que la que puede corresponderle por los delitos que cometiere por medio de la denuncia o con ocasión de ella.

TITULO III

DE LA PREVENCION

Art. 199. En caso de flagrante delito, el comandante de cuartel, oficial de guardia, jefe del establecimiento, y, en general, todo militar a quien corresponda en ese momento el mando inmediato de la fuerza o del lugar donde el hecho se ha perpetrado, procederá rápidamente a la detención de los culpables y a comprobar por los medios a su alcance, la existencia del hecho, tomando las declaraciones y practicando las diligencias que fueren necesarias para asegurar el perfecto esclarecimiento y fijar el verdadero carácter y las circunstancias de aquél.

Art. 200. Levantada de esa manera la prevención, y con el parte correspondiente, se elevará por el conducto debido y a la mayor brevedad, a la autoridad o jefe a quien compete ordenar la instrucción del sumario.

Art. 201. Si por cualquier circunstancia iniciaran prevención por un mismo delito dos o más militares, deberá continuarla tan sólo el de mayor jerarquía o antigüedad.

Art. 202. Si de las primeras diligencias de la prevención resultare, con evidencia, que el hecho no reviste los caracteres de delito sino de falta disciplinaria, el militar que previene, si no estuviere facultado para imponer por sí el castigo que ella merece, se limitará a pasar inmediatamente un parte a fin de que lo aplique el jefe o funcionario militar a quien compete.

Art. 203. Cuando el hecho se produzca a bordo de un buque de guerra que navega solo o se halla de estación en puerto extranjero, la prevención se hará con todas las formalidades y requisitos de un sumario en forma.

SECCION II

De la Instrucción

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 204. El Instructor puede solicitar directamente de las autoridades civiles o militares del lugar donde el sumario se instruye, todas las diligencias, datos e informaciones que, para el buen desempeño de su misión, considere necesarios.



Art. 205. Si los funcionarios que deben practicar las diligencias o suministrar los datos e informaciones, residen en otros lugares, o pertenecen a otras jurisdicciones, el Instructor dirigirá los oficios o exhortos correspondientes.

Art. 206. Cada vez que se cometa una diligencia por oficio o por exhorto, se pondrá en autos la correspondiente constancia, y se agregará el oficio o exhorto cuando vuelva diligenciado.

Art. 207. El Instructor podrá incomunicar a los detenidos o presos, siempre que hubiere causa para ello; pero la incomunicación no pasará del tiempo absolutamente necesario para que se practique la diligencia que la hubiere determinado, y por ninguna razón podrá mantenerse por más de cuatro días en cada caso.

El Instructor que contraviniere estas disposiciones, será separado de la instrucción y arrestado en buque o cuartel por un mes. La aplicación de las penas a los instructores será hecha por la autoridad, funcionario o jefe que los nombró.

Art. 208. La incomunicación se hará constar en autos por resolución motivada, y al notificárselo al detenido no se le leerán los fundamentos de ella.

Art. 209. Se concederá al incomunicado el uso de libros y recado de escribir, previa inspección del jefe o encargado de su custodia.

Art. 210. Si de la instrucción resultase que alguno es culpable de delitos cuyo juzgamiento sea del resorte de otras jurisdicciones, el Juez Instructor podrá detenerlo y ponerlo a disposición de quien corresponda.

Art. 211. Los Instructores harán nombramientos de peritos y citarán y mandarán comparecer a todos los que deban declarar en el sumario, requiriendo el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario.

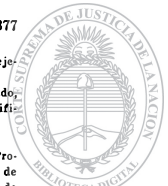
Art. 212. El Instructor podrá disponer la detención, apertura y examen de la correspondencia particular del procesado, cuando sospeche que ella puede suministrar los medios y comprobación del hecho que ha dado origen al sumario. A los efectos de la detención, librará oficio al jefe de la respectiva oficina de correos o de telégrafos y dejará en autos la debida constancia.

Art. 213. El examen de la correspondencia se hará por el Instructor en la misma oficina y en presencia del Secretario y del jefe de la oficina, devolviendo inmediatamente la correspondencia que no tenga interés y agregando a los autos, debidamente rubricada, toda aquella que tenga relación con el hecho que se indaga.

De esta operación se labrará un acta que firmarán todos los presentes y que se agregará a los autos.

Art. 214. Los jueces de instrucción podrán hacer registros en el domicilio particular del procesado cuando haya indicios de que el supuesto delincuente está allí o que puedan encontrarse instrumentos, papeles u objetos que sirvan para el esclarecimiento de los hechos.

Estos registros domiciliarios sólo podrán hacerse desde la salida



hasta la puesta del sol, a menos que haya peligro en demorar su ejecución, en cuyo caso podrán hacerse a cualquier hora.

Art. 215. El Juez Instructor podrá también, con el fin indicado, hacer registros, a cualquier hora del día o de la noche, en los edificios o lugares públicos.

A tal efecto se reputan edificios o lugares públicos:

1º Los destinados a cualquier servicio oficial del Estado, de la Provincia o del Municipio, aunque habiten en ellos, los encargados de dicho servicio o los de la conservación del edificio o lugar. 2º Los de propiedad particular, siempre que estén destinados a recreo o reunión de público. 3º Cualquier otro edificio o lugar cerrado que no sea domicilio de un particular. 4º Los buques del Estado.

Art. 216. Para la entrada y registro en la casa de un cuerpo legislativo, será necesaria la autorización de su Presidente.

En los templos y demás lugares religiosos, bastará pasar recado de atención a las personas a cuyo cargo estuvieren.

En los edificios, buques, cuarteles o establecimientos militares, deberá darse aviso al jefe superior, para que preste el debido auxilio.

En los demás edificios públicos se pedirá permiso del jefe o encargado; si lo negare, se prescindirá del permiso.

Art. 217. A excepción de lo dispuesto en el artículo 214, no podrá hacerse registro o pesquisa alguna en domicilio particular sin permiso de su dueño. Si éste lo negare, el Juez Instructor requerirá del Juez competente de la localidad la orden de allanamiento correspondiente; pero en los casos muy urgentes, en que haya peligro de evasión del culpable o de desaparición de las pruebas del delito, procederá sin más trámite a hacer el registro, poniendo los motivos de la resolución en la diligencia que firmará el denegante o dos testigos en su defecto.

En todos los casos el Instructor adoptará las medidas necesarias para impedir que se defraude su objeto, requiriendo el auxilio de la fuerza pública, si fuese necesario.

Se evitará en el registro, cuidadosamente, todo lo que pueda molestar al interesado más de lo estrictamente necesario, con las precauciones convenientes para no comprometer su reputación ni violar sus secretos, si no interesasen a la instrucción de la causa, procurando en lo posible que todo pase a presencia del interesado, de persona de su familia que sea mayor de edad, o de dos testigos, en último caso.

Art. 218. En los buques mercantes se hará el registro o pesquisa con permiso del capitán o patrón, y si éstos lo negasen, se procederá como queda dispuesto en el artículo anterior.

Art. 219. No se puede hacer pesquisa ni proceder al registro de un buque de guerra extranjero, sin permiso de su comandante, y a la falta de éste, del representante diplomático de la nación a que el buque pertenece.

Cuando el registro hubiera de hacerse en la casa de una legación, se requerirá el permiso del jefe o encargado de ella.



TITULO II

DEL CUERPO DEL DELITO

Art. 220. Cuando el delito deja vestigios materiales de su perpetración, el Instructor procederá en la forma siguiente:

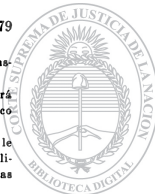
1º Procurará recoger las armas, instrumentos, substancias y efectos que hayan servido a la comisión del delito; lo hará constar por diligencia y hará firmar ésta por las personas en cuyo poder hubieran sido aquéllas encontradas. Si lo solicitaren, les dará justificativo de la entrada. 2º Describirá detalladamente, en caso de ser habidas, la persona y la cosa objeto del delito, consignando su estado, circunstancias y todo lo que se relacione con el hecho punible. 3º Dispondrá el reconocimiento pericial, cuando fuere necesario para conocer o apreciar debidamente un hecho o circunstancia. 4º Hará el reconocimiento de algún lugar cuando lo considere necesario, consignando en autos el resultado de la inspección ocular. 5º Examinará a las personas que se hallen presentes al hacer las investigaciones antedichas, respecto de todo lo que se relacione con la comisión del delito o fuere objeto de él, exigiendo a dichas personas que declaren cuanto sepan sobre las alteraciones que observen en los lugares, armas, instrumentos, substancias o efectos recogidos y examinados, así como el estado que tuviesen anteriormente. 6º Dispondrá, cuando fuere necesario, el levantamiento de planos, medición de distancias, etc., y que se saquen croquis o diseños de los lugares u objetos que puedan conducir al esclarecimiento del delito, reclamando al efecto los auxilios correspondientes.

Art. 221. El Instructor sellará y rubricará, agregando a los autos, si es posible, todos los objetos que hubiere recogido durante las investigaciones y que de alguna manera puedan servir o aprovechar a la causa.

Art. 222. Cuando el delito que se persigue no deje huellas materiales, el Instructor hará constar si la desaparición de las mismas, ocurrió natural, casual o intencionalmente; así como las causas que hubieren influido para ello, y recogerá las pruebas de cualquier clase que pueda adquirir sobre la perpetración del delito y la preexistencia de las cosas que hubiesen sido objeto de él, justificando, en cuanto sea posible, el estado que tuviesen antes de ser destruidas o deterioradas.

Art. 223. Cuando el delito fuere de homicidio, se describirá el estado del cadáver y se procederá a su indentificación por todos los medios de prueba posibles.

Si no se pudiera acreditar la identidad, el Instructor deberá guardar las ropas o prendas que el cadáver conserve a fin de que en cualquier tiempo puedan servir de comprobación a los efectos de la identidad.



Aun cuando se presuma la causa de la muerte, deberá hacerse constar, si fuere posible, por informe médico.

Art. 224. Cuando el delito fuere de lesiones corporales, se hará constar el estado del herido y se dispondrá el reconocimiento médico correspondiente.

Art. 225. Si el lesionado estuviere en peligro de muerte se le tomará declaración inmediatamente, prescindiendo de toda formalidad ordinaria, y se le interrogará principalmente sobre el autor, causas y circunstancias del delito.

Art. 226. Antes de cerrar el sumario, el Juez Instructor solicitará de los médicos que asisten al herido, una manifestación respecto a su estado.

Si el herido hubiere fallecido, los médicos expresarán en su certificación, si la muerte ha sido el resultado de las heridas, o si reconoce otra causa.

Si el herido ha sido curado, los médicos manifestarán:

1º El tiempo empleado en la curación. 2º El estado en que ha quedado a consecuencia de las lesiones. 3º Si ha quedado inutilizado para el trabajo y por qué tiempo.

Art. 227. Cuando el delito fuese de malversación, independientemente del expediente administrativo, el Instructor dirigirá sus investigaciones a comprobar: — el importe de la suma en descubierto — si se distrajo para uso propio — si se administraba por razón de cargo militar — y en caso que la malversación se hubiere producido en tiempo de guerra, si a consecuencia de ella se ha malogrado alguna operación militar.

Art. 228. En los delitos de carácter esencialmente militar, se considerará toda circunstancia que pueda influir en la calificación legal y en la imposición de la pena, como por ejemplo:

La parte que cada culpable haya tenido en la comisión del delito.

Si los hechos tuvieron lugar en actos del servicio o fuera de él, con armas, en actitud de tomarlas o sin ellas.

Si hubo concierto o complot.

Si hubo insubordinación de hecho o simplemente de palabra.

Si se produjo en presencia de tropa formada o no.

Si la insubordinación o la desobediencia ha hecho peligrar alguna operación militar.

Si hubo abandono de puesto o servicio, y cómo se produjo.

Si el desertor cometió deserciones anteriores y qué penas tuvo.

Si se llevó prendas de vestuario, armas o pertrechos.

Si medió inducción, auxilio o encubrimiento en la perpetración del delito.

Si el hecho se produjo en las proximidades del enemigo o si de alguna manera ha podido favorecer sus planes y operaciones, etc.

Art. 229. En todos los casos, el Instructor practicará las diligencias que conduzcan a la comprobación del delito y de sus circunstancias.

cias, aunque el procesado confiese desde el primer instante ser su autor.

TITULO III

DE LAS DECLARACIONES

CAPITULO I

Disposiciones comunes a todas las declaraciones

Art. 230. El Juez Instructor tomará declaración a todas las personas a quienes considere en condiciones de suministrar noticias o datos que sirvan a la comprobación del hecho.

Art. 231. El Juez Instructor hará el interrogatorio en una forma clara y precisa, y al dictar las respuestas procurará consignar las mismas palabras y expresiones de que el declarante se hubiere valido.

Art. 232. Concluida la declaración, se le dará lectura por el Secretario o la leerá el declarante si así lo pidiera y se hará mención de esta lectura en la misma.

Art. 233. Si después de leída la declaración el declarante tuviera algo que añadir o reformar en ella, se hará constar al final de la misma.

Art. 234. La declaración será, bajo pena de nulidad, firmada por todos los que hubieren intervenido en ella, y si el declarante lo quisiere, rubricará cada una de sus hojas o pedirá que se rubriquen por el Instructor, en caso de que no pudiera o no supiere.

Art. 235. En las declaraciones, como en todas las demás diligencias del sumario, no son permitidas abreviaturas, raspaduras ni interlineados, debiendo salvarse cualquier error al final de la misma diligencia o declaración.

Art. 236. Si el interrogado no entendiese el idioma nacional, será examinado por intermedio del intérprete, quien prestará juramento o hará promesa de desempeñar fielmente el cargo.

El nombramiento de intérprete recaerá entre los que tengan títulos de tales, si los hubiese en el lugar de la declaración. En su defecto, será nombrada cualquier persona, que posea el idioma de que se trate y el idioma nacional.

Art. 237. Si el interrogado fuese sordomudo y supiera leer se le harán por escrito las preguntas: si supiera escribir, contestará por escrito, y si no supiera ni lo uno ni lo otro, se nombrará también un intérprete, por cuyo conducto se le harán las preguntas y se recibirán las contestaciones.

Rigen para esta clase de intérpretes las disposiciones del artículo anterior.





CAPÍTULO II

De la declaración indagatoria

Art. 238. Cuando haya motivo bastante para sospechar que una persona es autor, cómplice o encubridor de un delito, se procederá a recibirle declaración indagatoria.

Art. 239. Si al presunto culpable se le ha privado de su libertad, la declaración se tomará dentro de las veinticuatro horas desde que se recibiere el proceso para iniciar la instrucción, o desde que el detenido hubiese sido entregado o puesto a disposición del Instructor, a no impedirlo algún grave motivo que se consignará en la causa, en cuyo caso se verificará lo más pronto posible.

El Instructor que no cumpliera estrictamente dichas disposiciones, será separado de la instrucción y arrestado por quince días.

Art. 240. Las declaraciones se tomarán separadamente a cada una de las personas complicadas en el delito, y no podrá exigirse juramento o promesa de decir la verdad, aunque puede exhortárseles a que se produzcan con ella.

Art. 241. El detenido será preguntado:

1° Por su nombre, apellido, sobrenombre o apodo, edad, estado, profesión, oficio, alistamiento, patria, domicilio o residencia. 2° Sobre el sitio en que se hallaba el día y la hora en que se cometió el delito y si ha tenido noticia de él. 3° Con qué personas se acompañó. 4° Si conoce a los que son reputados autores y cómplices en la ejecución. 5° Si estuvo con ellos antes de perpetrarse el delito. 6° Si conoce el instrumento con que fué cometido el delito o cualesquiera otros objetos que con él tengan relación, los que se le pondrán, de manifiesto, si fuera posible. 7° Si se le han hecho conocer anteriormente las leyes penales. 8° Por todos los demás hechos y pormenores que puedan concurrir a descubrir los antecedentes y causas que motivaron el delito y produjeron su perpetración.

Art. 242. La declaración deberá recibirse en un solo acto, a no ser que por su mucha extensión o por razones muy atendibles, el Juez Instructor, creyese conveniente suspenderla. Los motivos de la suspensión deberán hacerse constar en autos.

Art. 243. Las preguntas serán siempre directas, sin que por ningún concepto puedan hacerse de un modo capcioso o sugestivo.

Tampoco se podrá emplear con el declarante género alguno de coacción o amenazas o promesas de ninguna especie.

El Instructor que contraviniera estas disposiciones, será separado de la instrucción y arrestado en buque o en cuartel por un mes. La aplicación de estas penas a los instructores será hecha por la autoridad o jefe que los nombró.

Art. 244. El procesado no será obligado a contestar precipitada-



mente. Las preguntas le serán repetidas siempre que parezca o manifieste que no las ha comprendido y con mayor razón cuando la respuesta no concuerde con la pregunta. En estos casos no se escribirá sino la respuesta dada a la pregunta repetida.

Art. 245. Es obligación del procesado contestar las preguntas que se le hicieren. Si se negase a ello, se le podrá exhortar a que lo haga, haciéndole reflexiones por las que comprenda que su silencio no le favorecerá. Si, no obstante esto, persistiese en su negativa o en su silencio, se acreditará todo por diligencia que firmará el procesado, Instructor y Secretario, y no sabiendo, no queriendo o no pudiendo aquél hacerlo, se hará constar.

Art. 246. Se permitirá al procesado manifestar cuanto tenga por conveniente para su exculpación o para la explicación de los hechos, evacuéndose con urgencia las citas que hiciese y las demás diligencias que propusiere, siempre que el Instructor las estimare conducentes.

Art. 247. En ningún caso podrán hacerse cargos y reconvenciones, ni se le leerá parte alguna del sumario, con excepción de sus declaraciones anteriores si lo pidiere.

Art. 248. Si se advirtiese en el procesado indicios de enajenación mental, se averiguará por personas que lo hayan tratado, por reconocimientos de facultativos y por medio de pruebas u observaciones, si esta enajenación era anterior al delito o posterior; si es permanente, eventual o pasajera; si es cierta o simulada.

Art. 249. A los efectos del artículo anterior, se suspenderá toda declaración, y el interrogatorio será detenido si ya no lo estuviese, mientras se hacen las investigaciones requeridas. Estas no obstarán a la prosecución o verificación de otras diligencias del sumario, que sean urgentes y no tengan relación con el estado del procesado.

Art. 250. Si el presunto reo, al prestar su declaración, negase su nombre o domicilio, o los fingiese, se procederá a identificar su persona por su filiación, testigos y todos los medios que se consideren oportunos.

Art. 251. A fin de que puedan servir como prueba de identidad, se harán constar con minuciosidad todas las señales particulares del procesado.

Art. 252. El Instructor reclamará, desde luego, para unir a los autos, copia de la filiación o de las fojas de servicios del procesado, cuyos documentos deberán, además, contener las calificaciones y notas de concepto que hubiere merecido antes de la comisión del delito.

Art. 253. Cuando el Instructor considere conveniente el examen del procesado en el lugar de los hechos o ante las personas o cosas con ellos relacionadas, podrá disponerlo así, pero las declaraciones deberán ser siempre tomadas en el local de la prisión, o en su defecto, en la oficina donde funcione el Juez Instructor.

Art. 254. Si las diligencias practicadas dieron mérito para que continúe la detención del acusado, según las disposiciones del artículo 315, se dictará, dentro de veinticuatro horas, auto motivado de prisión,



de acuerdo con lo que al respecto establece el Título *De la prisión preventiva*.

Art. 255. Terminada la declaración indagatoria, se hará saber al acusado la causa de su detención, si no se hubiere hecho antes, y así le permitirá nombrar defensor si desde luego quiere hacerlo. Todas las diligencias ulteriores del proceso serán nulas si de cualquier manera se le estorba el nombramiento de defensor.

TÍTULO IV

DE LOS TESTIGOS

CAPÍTULO I

De los que pueden ser testigos

Art. 256. Puede servir como testigo toda persona que tenga conocimiento de los hechos que se investiguen y de sus circunstancias, cualquiera que sea su estado, sexo, jerarquía o condición.

Art. 257. El número de testigos no tiene limitación; pero el Instructor, en obsequio a la brevedad, tomará solamente aquellas declaraciones que considere suficientes para que quede bien probado y caracterizado el hecho que se averigua. No obstante, deberá dejar en autos indicaciones precisas respecto de aquellos testigos a quienes no hubiese considerado necesario interrogar, por si fuere conveniente ampliar más tarde la prueba.

CAPÍTULO II

De la citación de los testigos

Art. 258. Los testigos serán citados en la forma prescripta por los artículos 168 y siguientes de este Código.

Art. 259. Si el testigo estuviese ausente del lugar donde funciona el Instructor, y la distancia, a juicio de éste, hiciere onerosa su traslación o la del testigo, comisionará, para tomar la declaración, a los funcionarios militares o judiciales de la localidad, a cuyo efecto librará, a nombre de la autoridad o jefe militar que lo nombró, los oficios o exhortos correspondientes, con inserción de los interrogatorios al tenor de los cuales debe ser examinado el testigo.

Art. 260. Los exhortos o suplicatorios a los jueces o tribunales extranjeros serán solicitados de los ministros de Guerra o Marina, según corresponda, quienes les darán curso por la vía diplomática, de acuerdo con los tratados o con las leyes generales, en defecto de ello.

Art. 261. Toda persona debidamente citada concurrirá a prestar su declaración en el lugar en que el Instructor le haya señalado. Los jefes con mando no podrán oponerse a que sus subalternos concurren



a prestar declaración, salvo dificultad de carácter grave, en cuyo caso lo manifestarán inmediatamente al Juez Instructor, solicitando al mismo tiempo copia del interrogatorio, para mandar prestar la declaración a su tenor.

Art. 262. Están obligados a declarar pero no están obligados a concurrir a la citación:

1° Las personas enfermas o físicamente imposibilitadas, las mujeres de vida públicamente honesta.

Estas personas declararán en sus domicilios a los que se trasladará el Juez Instructor con su Secretario.

2° El Presidente de la República, los Gobernadores de provincias y de territorios nacionales, los ministros del Ejecutivo Nacional o de los ejecutivos provinciales, los miembros del Congreso y de las legislaturas provinciales, los miembros de la justicia federal o de la ordinaria de la capital y de las provincias, los de los tribunales militares permanentes y los funcionarios, en general, de la justicia militar, las dignidades del clero y vicario general castrense, los oficiales generales del Ejército y Armada, los coroneles o capitanes de navío con mando efectivo, los jefes de reparticiones militares y civiles de la administración nacional.

Todos estos funcionarios declararán por medio de oficio, a cuyo efecto se les transcribirá el correspondiente interrogatorio.

Art. 263. Cuando un testigo no concurre a la citación, se le hará comparecer por medio de la fuerza pública, y cuando compareciese pero se negase a declarar, se le compelerá por medio de arresto, sin perjuicio de ser procesado por desacato o por desobediencia o insubordinación, si fuere militar.

CAPÍTULO III

Del examen de testigos

Art. 264. Cada testigo debe ser examinado separadamente en presencia del Secretario, bajo pena de nulidad.

Art. 265. Los testigos deben dar razón de sus dichos, esto es, manifestar cómo y por qué saben o tienen conocimiento de los hechos sobre que declaran. Esta manifestación deberá hacerse constar.

Art. 266. Antes de que los testigos comiencen a declarar, se les instruirá de las penas impuestas a los testigos falsos.

Art. 267. Nadie podrá asistir a las declaraciones, excepto:

1° Cuando el testigo sea ciego o no sepa leer ni escribir. 2° Cuando sea una mujer soltera. 3° Cuando sea mujer casada y ella o su marido quiera que esté acompañada. 4° Cuando el testigo ignore el idioma nacional, o sea sordo o mudo, o sordomudo.

Art. 268. En el primer caso del artículo anterior, el Instructor nombrará acompañante al testigo, quien deberá firmar la declaración



después que éste la hubiera ratificando. En el segundo y tercer caso, elegirán los interesados el acompañante, pudiendo éste ser rechazado por el Instructor. En el cuarto caso, se procederá como lo prescribe el artículo 237.

Art. 269. Antes de principiar el interrogatorio, se tomará a los testigos juramento de decir la verdad.

Art. 270. Recibido el juramento, se le exigirá al testigo que manifieste su nombre y apellido, edad, estado, profesión u oficio; si conoce el procesado y tiene noticia de la causa; si es pariente y en qué grado, amigo o enemigo del encausado, o si le comprenden algunos de los otros impedimentos de la ley, que se le harán conocer.

Art. 271. Hecha la manifestación anterior, el testigo será preguntado:

1º Por todas las circunstancias del delito, tiempo, lugar y modo de perpetración, dando razón de su dicho; 2º Cuando declare como testigo de vista: por el tiempo y lugar en que lo vió, si estaban otras personas que también lo vieron y quiénes eran; 3º Cuando declare de oídas: por las personas a quienes oyó, en qué tiempo y lugar, y si estaban presentes otras personas y quiénes eran.

Art. 272. Si con motivo de la declaración, el testigo presentare algún objeto que pueda servir para hacer cargo al reo o para su defensa, se hará mención de su presentación y se agregará al proceso, siendo posible, o se guardará por el Secretario, haciendo en autos la debida referencia.

Siendo un escrito, será rubricado por el Instructor y testigo o por el Secretario, en caso de que el testigo no supiese o no pudiese firmar.

Art. 273. En las declaraciones que se presentaren evacuando alguna cita, no se leerá al testigo la diligencia en que aquélla se hubiere hecho.

Art. 274. Los testigos declararán de viva voz, sin que les sea permitido leer respuestas llevadas por escrito. Sin embargo, podrán ver algunas notas de documentos que llevarén, según la naturaleza de la causa.

Art. 275. El Instructor cuidará de no consignar en los autos las declaraciones redundantes, inoficiosas o inconducentes, debiendo recordar que la concisión y la celeridad es la condición de todo proceso.

Art. 276. El Juez Instructor evacuará las citas que se hagan en las declaraciones y que sean pertinentes.

Art. 277. Mientras duren las declaraciones, el Juez Instructor podrá incomunicar a los testigos entre sí, si lo considera conveniente.

Art. 278. El Juez Instructor podrá disponer que el examen de los testigos se haga en el paraje donde el hecho se ha producido o en presencia de los objetos sobre que versa la declaración.

Podrá también repetir o ampliar las declaraciones de los testigos, cuando lo considere conveniente.



Art. 279. Si de la instrucción apareciere que algún testigo se ha producido con falsedad, se anejará copia de las piezas conducentes para la averiguación del delito, formándose separadamente el debido proceso militar o remitiéndolas a la justicia ordinaria, cuando se trate de testigos que no estén sujetos a la jurisdicción militar.

CAPÍTULO IV

De la confrontación

Art. 280. Toda persona que tuviere que designar a otra en su declaración o en otro acto, lo hará de un modo claro y distinto, mencionando bien su nombre, domicilio y todas las circunstancias que conozca respecto de ella, y que fueren conducentes al objeto de la averiguación. Se procederá a la comprobación, si no pudiere dar noticia exacta o hiciere presente que la reconocería si se la presentasen.

Art. 281. En la confrontación se cuidará:

1° Que la persona que sea objeto de ella, no se disfraze o desfigure o borre las impresiones que puedan guiar al que tiene que designarla. 2° Que el que haga la designación manifieste las diferencias o semejanzas que advirtiere en el estado actual de la persona o personas señaladas y sus acompañantes si los hubiere, y el que tenían en la época a que se refiere su declaración.

Art. 282. El que deba ser confrontado puede elegir el punto en que quiera colocarse entre los que le acompañan en esta diligencia y pedir que se excluya de la reunión a cualquier persona que se le haga sospechosa. El Instructor podrá limitar prudentemente el uso de este derecho cuando lo crea malicioso o exorbitante.

Art. 283. Colocadas en una fila, la persona destinada a la confrontación y las que deben acompañarla, se introducirá al declarante, y después de tomarle la protesta de decir verdad, se le preguntará:

1° Si persiste en su declaración. 2° Si después de ella, ha visto a la persona a quien atribuye el hecho, en qué lugar, por qué motivo y con qué objeto. 3° Si entre las personas presentes se encuentra el que designó en su declaración.

Contestando afirmativamente la última pregunta, para lo que se permitirá que reconozca detenidamente a las personas de la fila, se le prevendrá que toque con la mano a la persona designada, limitándose a señalarla, siendo superior jerárquico.

Art. 284. Cuando sean varios los declarantes o las personas confrontadas, se verificarán tantos actos separados cuantas sean las confrontaciones que hayan de practicarse.



CAPITULO V

De los carcos

Art. 285. Cuando los testigos o los procesados entre sí, o aquéllos con éstos, discordasen acerca de algún hecho o de alguna circunstancia interesante, el Instructor procederá a carearlos.

Art. 286. Al careo no concurrirán más que las personas que se van a carear y los intérpretes, si fuese necesario.

Art. 287. El Juez Instructor mandará dar lectura de las declaraciones en la parte que se reputen contradictorias y llamará la atención de los careados sobre esas contradicciones, a fin de que se reconvenzan entre sí y poder de ese modo averiguar la verdad.

Art. 288. Se escribirán las preguntas y contestaciones que mutuamente se hicieren, sin permitir que los careados se insulten o amenacen; se hará constar además, las particularidades que sean pertinentes y firmarán todas las diligencias que se extiendan, previa lectura y ratificación.

Art. 289. Cuando el careo fuere entre testigos, se les tomará nuevamente juramento de decir verdad. Los procesados no prestarán juramento.

Art. 290. No se recurrirá al careo cuando hubiero otros medios de comprobar el delito o descubrir la verdad.

Art. 291. No se podrá practicar careo entre los individuos y clases de tropa, con oficiales de cualquier graduación.

TITULO V

DEL EXAMEN PERICIAL.

Art. 292. Se procederá con intervención de peritos, siempre que para el examen de una persona o para la apreciación de un hecho o circunstancia pertinente a la causa, se requieran conocimientos especiales en algún arte, ciencia o industria.

Art. 293. Se nombrarán dos o más peritos, a no ser que haya uno solo disponible y que sea peligroso retardar la operación.

Bastará también un solo perito en los casos de poca importancia.

Art. 294. Los peritos serán designados por el Instructor y deberán tener título de tales en la ciencia o arte a que corresponda el punto sobre el que han de ser examinados si la profesión o arte estuviesen reglamentados por las leyes, y en caso de que no lo estuvieran, se podrá nombrar otras personas entendidas, aunque no tuvieran título.

El despacho militar es título de pericia, en el desempeño de los cargos o funciones militares.

Art. 295. Siempre que fuese preciso hacer revisar un informe pe-



ricial otorgado por persona sin título, por otra u otras con título, el Inspector podrá ordenarlo, si lo conceptuase necesario.

Art. 296. Los peritos aceptarán el cargo bajo juramento y para ello deberán ser citados como los testigos.

Art. 297. El perito que no concurriera al llamamiento o que resistiese dar su dictamen, será compelido en la mismas forma que los testigos.

Art. 298. Los peritos no están obligados a comparecer ni a dar opinión en los mismos casos en que los testigos no están obligados a concurrir y a declarar.

Art. 299. El Instructor podrá asistir al reconocimiento que hagan los peritos, de las personas o de las cosas.

Art. 300. El Instructor hará a los peritos todas aquellas preguntas que crea oportunas, y les dará verbalmente o por escrito todos los datos pertinentes, cuidando de no hacerlo en forma sugestiva o maliciosa. Se dejará constancia de todo en la diligencia.

Después de esto, los peritos practicarán todas las operaciones y experimentos que conceptúen indispensables, expresando los hechos y circunstancias en que funden su opinión.

Art. 301. Los peritos emitirán su opinión por medio de declaración que se asentará en acta, exceptuándose los casos en que la naturaleza o la gravedad del hecho requiera la forma escrita y los informes facultativos de los profesores en alguna ciencia, los que se presentarán siempre por escrito, pidiéndose previamente para ello el tiempo que sea necesario.

Art. 302. El informe pericial debe comprender:

1º La descripción de la persona o cosa que sea objeto del reconocimiento, así como el del estado y forma en que se hallara al ser reconocida. 2º La relación detallada de todas las operaciones practicadas y de su resultado. 3º Las conclusiones que formulen al respecto.

Art. 303. La diligencia de examen podrá suspenderse si la operación se prolongare demasiado, pero deberán tomarse en tal caso las precauciones convenientes y posibles, para evitar alteraciones en las personas, objetos o lugares sujetos al examen.

Art. 304. Cuando el número de peritos haya sido par y entre ellos hubiere discordancia de opiniones, se llamará uno o más peritos en número impar, se renovarán las operaciones y experimentos en su presencia, si fuera posible, y en caso contrario, los primeros peritos les comunicarán el resultado que hayan obtenido; y con estos datos, los nombrados últimamente emitirán su opinión.

Art. 305. Cuando el juicio pericial recaiga sobre objetos que se consuman al ser analizados, el Instructor no permitirá que se verifique el primer análisis sino, cuando más, sobre la mitad de las substancias, a no ser que haya imposibilidad de opinar sin consumirlas todas, lo que se hará constar en autos.

Art. 306. Siempre que se trate de informes médicos legales, se



permitirá a los peritos revisar las actuaciones para informarse minuciosamente de los antecedentes del caso, si consideran insuficientes los datos suministrados.

La divulgación de las constancias del sumario los hará incurrir en la misma responsabilidad que impone el Código Penal Ordinario a los que violan el secreto profesional.

Art. 307. Los peritos que no sean militares o no tengan sueldo de la Nación, cobrarán honorarios por los informes que hayan producido, los cuales deberán ser abonados por la parte que hubiera solicitado dichos informes, salvo el caso de que hubiesen sido pedidos por el acusado y éste fuese absuelto.

TITULO VI

DE LA PRUEBA DE DOCUMENTOS

Art. 308. Se agregarán a los autos todos los documentos que se presenten durante la instrucción o que de alguna manera puedan servir en el proceso.

Art. 309. De los documentos existentes fuera de la jurisdicción del Instructor, se pedirá copia por exhorto u oficio.

Art. 310. Los documentos privados serán sometidos al examen y reconocimiento de aquellos a quienes perteneciesen, poniéndoles de manifiesto todo el documento.

Art. 311. Siempre que el Instructor pidiese copia o testimonio de todo o parte de un documento o pieza que obre en los archivos militares, deberá serlo expedido si para ello no hubiere algún inconveniente.

TITULO VII

DE LA DETENCION Y DE LA PRISION PREVENTIVA

Art. 312. Toda persona sospechada de ser autor o cómplice de un delito sujeto a la jurisdicción de los Tribunales Militares, puede ser detenida mientras se practiquen las primeras diligencias tendientes a poner en claro su culpabilidad.

Art. 313. La detención puede ser ordenada:

1° Por las autoridades o jefes militares a quienes compete disponer la instrucción; 2° Por cualquier militar de graduación superior al acusado, en caso de urgencia o de delito flagrante; 3° Por el Juez Inspector.

En los dos primeros casos los detenidos serán puestos a disposición del Juez Instructor simultáneamente con su nombramiento.

En el último, el Juez Instructor lo pondrá inmediatamente en conocimiento del funcionario o jefe de quien dependa el detenido.

Art. 314. Ningún jefe o funcionario militar podrá eximirse de



arrestar un subordinado y de ponerlo inmediatamente a disposición del Instructor, cuando éste se lo pidiere por medio de oficio.

Art. 315. La simple detención se convertirá en prisión preventiva, cuando concurran las tres circunstancias siguientes:

1º Que esté debidamente comprobada la existencia de una infracción que este Código castigue con la pena de muerte, presidio, prisión mayor, prisión menor o confinamiento; 2º Que al detenido se le haya tomado la declaración indagatoria y se le haya hecho conocer la causa de su detención; 3º Que haya datos suficientes, a juicio del Instructor, para creer que el detenido es responsable del hecho probado.

Art. 316. La prisión preventiva se hará constar en autos por medio de resolución especial y fundada.

Esta resolución se le hará conocer al detenido, recomendándole al mismo tiempo que se prevenga para el nombramiento de defensor en el acto que se le intime.

Art. 317. La prisión preventiva será rigurosa o atenuada.

Se impondrá la primera, cuando al hecho probado le corresponda pena de muerte, presidio o prisión mayor; y la segunda, cuando la pena sea de confinamiento o prisión menor. Contra los jefes y oficiales no procede esta última sino cuando pueda corresponder al hecho comprobado el máximo de la pena de prisión menor.

Art. 318. La prisión preventiva rigurosa se sufrirá en buque, fortaleza, cárcel o prisión.

La atenuada se sufrirá en la forma siguiente:

1º Los jefes y oficiales permanecerán arrestados en sus alojamientos o domicilios y relevados de todo mando de servicio; 2º Las clases e individuos de tropa permanecerán arrestados en cuartel o establecimiento militar, prestando los servicios que los respectivos jefes consideren convenientes.

Art. 319. En todos los demás casos de juicio militar los encausados conservarán su libertad y permanecerán en servicio, pero tendrán obligación de concurrir a todos los actos del juicio.

Si no dieren cumplimiento inmediato a dicha obligación, se les impondrá prisión preventiva atenuada.

Art. 320. La prisión de un ausente se pedirá por exhorto, insertándose en él la orden de detención. En los casos de suma urgencia podrá usarse la vía telegráfica.

Si el ausente estuviere en el extranjero, el Instructor se dirigirá a la superioridad, para que ésta gestione la extradición en la forma que corresponde.

Art. 321. Los directores o administradores de cárceles y los jefes de cuerpo o de buque en que se hallen presos acusados, darán cumplimiento a las órdenes o instrucciones que en relación a los mismos recibieran del Instructor o del Presidente del Tribunal a que los procesados se hallen sometidos.



TITULO VIII

DEL SUELDO DE LOS PROCESADOS

Art. 322. Todo jefe u oficial procesado percibirá medio sueldo durante la instrucción del sumario. Elevada la causa a plenario, se le retendrá íntegramente el sueldo cuando sufriera prisión preventiva rigurosa, y lo mismo se hará durante toda la tramitación de la causa en los casos de robo, hurto, defraudación o malversación. Si fueran absueltos se les devolverá la parte que dejaron de percibir.

Art. 323. A los procesados de la clase de tropa les será retenido el sueldo íntegro durante toda la tramitación de la causa, el que les será devuelto en caso de que corresponda su devolución, después de terminado el proceso.

TITULO IX

DE LA CONCLUSION DEL SUMARIO

Art. 324. Practicadas por el Juez Instructor todas las diligencias para la comprobación del delito y averiguación de las personas responsables, expondrá el resultado en un informe que elevará, junto con las actuaciones, a la autoridad, funcionarios o jefes militares expresados en el artículo 179, o en el 180, según el caso.

Art. 325. El informe del Juez Instructor debe contener:

1º Una relación sucinta de la prueba del sumario, con indicación de la foja en que se encuentra cada una de sus piezas; 2º Los cargos que resulten contra cada inculcado; 3º La apreciación general de los hechos; 4º El pedido fundado de sobreseimiento o de elevación a plenario.

Art. 326. Recibido el sumario por la autoridad o funcionarios que menciona el artículo 179, lo pasarán inmediatamente para dictamen al Auditor General.

En los casos del artículo 180, el jefe que lo reciba lo elevará sin pérdida de tiempo y según corresponda, al Ministerio de Guerra o al de Marina, para que éste oiga la opinión del Auditor General y resuelva en consecuencia.

Art. 327. El Auditor General, examinará prolijamente el sumario y dentro de cuarenta y ocho horas expedirá dictamen fundado, aconsejando cualquiera de los temperamentos siguientes:

1º La ampliación del sumario cuando advierta en él omisiones importantes que afecten la validez legal del procedimiento, señalando las diligencias que deben ampliarse o practicarse de nuevo; 2º El sobreseimiento para todos o algunos de los sumariados, indicando la clase de sobreseimientos que corresponde; 3º La elevación de la causa a plenario, indicando, en este caso, a qué Consejo de Guerra corresponde;



4° La aplicación de pena disciplinaria cuando se trate de hechos que deben ser castigados con esas penas.

Art. 328. Expedido ese dictamen, el Ministro o cualesquiera de los funcionarios a que hace referencia el artículo 179, dictará la resolución que corresponde, y si ella fuera de acuerdo con el primer temperamento, se devolverá sin pérdida de tiempo al Juez Instructor, para que a la mayor brevedad, haga la ampliación ordenada.

Practicada ésta, devolverá el sumario en el acto, para que se dicte resolución previo un nuevo dictamen del Auditor.

Art. 329. En las causas de los oficiales generales, la resolución sobre el sumario será dictada por el Presidente de la República.

Art. 330. En los casos del artículo 53, de este Código, la ampliación, sobreseimiento o elevación a plenario, será resuelta por el jefe respectivo, oyendo previamente a un Auditor *ad hoc*, que el mismo jefe nombrará de acuerdo con lo que disponen los artículos 79 y 82.

Art. 331. La resolución elevando la causa a plenario debe contener la orden de comparecer ante el Consejo de Guerra, y todas las indicaciones relativas al hecho que motiva el proceso y a la persona del delincuente.

TITULO X

DEL SOBRESEIMIENTO

Art. 332. En lo que respecta a los procesados, el sobreseimiento puede ser total o parcial: el primero, los comprende a todos, el segundo a uno o varios de ellos.

Art. 333. En cuanto a sus efectos, el sobreseimiento es definitivo o provisional.

El definitivo impide todo procedimiento ulterior sobre los mismos hechos.

El provisional permite abrir otra vez la causa, cuando nuevos datos o comprobantes dieren mérito para ello, salvo el caso de prescripción.

Art. 334. Procede el sobreseimiento definitivo:

1° Cuando resulta evidenciado que no se ha producido el hecho que motiva el sumario; 2° Cuando se ha probado el hecho, pero éste no constituye una infracción sujeta a pena; 3° cuando apareciesen, de un modo indudable, exentos de responsabilidad criminal los procesados; 4° Cuando el procesado falleciere.

En los tres primeros casos deberá hacerae la aclaración de que la formación del sumario no perjudica el buen nombre y honor de los procesados.

Art. 335. Procede el sobreseimiento provisional:

1° Cuando no está bien probado el hecho que motiva el sumario; 2° Cuando el hecho está debidamente probado, pero no hay motivo o indicación suficiente para hacer responsable de él a persona determinada.



Art. 336. Decretado el sobreseimiento definitivo respecto de todos los procesados, se librará orden de libertad, si estuvieran presos o detenidos, y se remitirán en seguida al archivo general las actuaciones y las piezas de convicción que no tuviesen dueño conocido.

Art. 337. Si el sobreseimiento fuese provisional, el expediente y las piezas de convicción se reservarán según corresponda, en la sección de justicia de los Ministerios de Guerra o Marina, hasta que nuevos antecedentes permitan continuar la causa, o hasta que transcurra el término de la prescripción.

En este último caso se declarará la prescripción, y se remitirá el expediente y las piezas al archivo general.

SECCION III

Del plenario

PARTE PRIMERA

PROCEDIMIENTOS EN LOS CONSEJOS DE GUERRA PERMANENTES

TITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Art. 338. Resuelta la elevación a plenario, se remitirán, con oficio, al Presidente del Consejo de Guerra que corresponda, el expediente de la causa y las piezas de convicción.

Art. 339. Recibido todo se hará constar en autos por medio de una nota, y si el procesado no hubiere nombrado defensor, el Presidente proveerá intimando lo haga en el acto de la notificación, bajo apercibimiento de nombrarlo de oficio.

Art. 340. Hecha la designación del defensor se le hará la notificación correspondiente, requiriendo en el mismo acto la aceptación o los motivos de la excusación.

Art. 341. Inmediatamente el Presidente proveerá mandando que las partes comparezcan a oponer excepciones, si las tuvieren, a cuyo efecto señalará hora dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

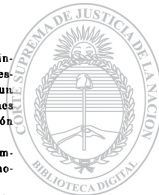
TITULO II

DE LAS EXCEPCIONES

Art. 342. Las únicas excepciones que se pueden oponer en juicio militar, son las siguientes:

1º Incompetencia; 2º Prescripción; 3º Cosa juzgada; 4º Amnistía o indulto.

Art. 343. Las excepciones se opondrán verbalmente ante el Presi-



dente y el Secretario del Consejo. El comparendo será público y principiará por la lectura de la exposición del Juez Instructor, oyendo después al Fiscal y al Defensor. De este comparendo se levantará un acta donde consten prolijamente las excepciones opuestas, las razones alegadas y las diligencias que se pidieron para probar la excepción de cosa juzgada. Esta acta será firmada por todos los presentes.

Art. 344. La prescripción, la amnistía y el indulto, pueden también ser declarados de oficio por cualquier tribunal militar en el momento de pronunciarse sobre la causa.

Art. 345. La prueba de la excepción de cosa juzgada será recibida por el Secretario y presentada por el que la ofreció, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al comparendo en que aquéllas se opusieron.

El Presidente puede prorrogar este término cuando lo considere insuficiente.

Art. 346. Vencido el término, haya sido o no presentada la prueba, o inmediatamente después del comparendo, cuando no se hubiera ofrecido prueba alguna, el Presidente mandará poner los autos al acuerdo, y el Consejo, con asistencia de su auditor, resolverá la excepción dentro de las veinticuatro horas.

Art. 347. Si el Consejo acepta la excepción y ésta no es de incompetencia, se elevará la resolución en consulta al Consejo Supremo, y, aprobada por éste, se archivará el expediente. Si la excepción aceptada fuere la de incompetencia, se procederá como lo determina el artículo 153.

Art. 348. Si el Consejo rechaza la excepción opuesta, no habrá, contra esta resolución, recurso alguno; pero el Consejo Supremo podrá tomar en consideración los fundamentos legales del rechazo, cuando conociera de la sentencia definitiva, si ésta fuere recurrida.

Art. 349. Rechazadas las excepciones o inmediatamente o después del comparendo a que se refiere el artículo 341, si aquéllas no se opusieran, el Presidente conferirá vista al Fiscal, a efecto de que se formule la acusación en el término de ley, y mandará que se le entregue los autos bajo recibo en el acto de firmar la notificación.

TITULO III

DE LA ACUSACION

Art. 350. El Fiscal deberá devolver los autos con el escrito de acusación, en el término de dos días, que el Presidente podrá prorrogar hasta tres, según el volumen e importancia de la causa.

Art. 351. El escrito de acusación contendrá en párrafos separados y numerados:

1° La exposición metódica de los hechos, relacionados minuciosamente a las pruebas que obran en autos; 2° La participación que en ellos tenga cada uno de los procesados, designando claramente a éstos



por sus nombres, apellidos y empleos; 3° Las circunstancias que modifiquen la responsabilidad de los mismos; 4° La calificación legal que corresponda a los hechos relacionados, determinando la categoría de delitos a que cada uno pertenece; 5° La petición de la pena que corresponda a los hechos calificados; 6° La petición de absolución, cuando de la prueba de autos resulte la inocencia del procesado o cuando, por falta de aquélla, no se le pueda hacer efectiva la responsabilidad.

Art. 352. La acusación se referirá a todos los delitos comprendidos en el sumario a menos que el Fiscal considere que conviene, para la más pronta y eficaz represión de los culpables, hacer separación de cargo respecto de alguno de ellos; en cuyo caso, y siempre que no se trate de delitos conexos, deberá solicitarlo de una manera expresa, indicando claramente el delito sobre que ha de formarse juicio aparte.

Art. 353. Si el Fiscal lo considera conveniente para los fines de la acusación podrá pedir en ésta que se practique cualquiera de los diligencias de prueba autorizadas por el artículo 360.

TITULO IV DE LA DEFENSA

Art. 354. Devueltos los autos por el Fiscal, el Presidente conferirá traslado de la acusación al defensor, por el mismo término concedido a aquél.

Art. 355. Para el debido desempeño de su cargo, el defensor podrá comunicarse libremente con el procesado y examinar el proceso en la Secretaría del Consejo, tomando de él las copias que necesite; pero si el Presidente lo estima conveniente por la naturaleza e importancia de la causa, podrá autorizar al defensor para llevar el expediente bajo recibo.

Su pérdida o extravío hará incurrir al defensor, lo mismo que al Fiscal, en la pena establecida en la parte correspondiente de este Código.

Art. 356. El escrito de defensa se limitará a aceptar o impugnar los puntos de hecho o derecho contenidos en la acusación fiscal, exponiendo las razones que conduzcan a demostrar la inocencia del defendido o a atenuar su responsabilidad, pero ateniéndose siempre a las constancias del expediente.

Art. 357. Si el defensor lo considera conveniente para la defensa, podrá pedir en el mismo escrito que la contiene, que se practique cualquiera de las diligencias de prueba que permito al art. 360.

Art. 358. La defensa debe ser redactada en términos claros, precisos y moderados, y en ningún caso será permitido aducir en favor del procesado consideración alguna que menoscabe los respetos debidos al superior, ni hacer contra éstos imputación o acusación alguna sobre hechos que no tengan íntima relación con la causa.



Tampoco es permitido al defensor hacer críticas o apreciaciones desfavorables a la marcha o a los actos políticos o administrativos del Gobierno.

Art. 359. El defensor que faltare a lo prevenido en el artículo anterior, en cuanto a los respetos debidos al superior y a la apreciación de los actos del Gobierno, será separado del cargo y castigado por insubordinación, disciplinariamente o en forma de juicio, según el caso.

Si el escrito de defensa estuviere redactado en términos que, sin ser irrespetuosos, fueran inconvenientes o inmoderados, el Consejo los mandará testar.

TITULO V

DE LA PRUEBA

Art. 360. Las únicas diligencias de prueba que pueden practicarse a instancias del fiscal o a pedido del defensor, son:

1º Reconocimiento de lugares, objetos o documentos. 2º Informes periciales. 3º Ratificación de testigos presentes, cuando se trate de delitos comunes.

Art. 361. El Presidente concederá las diligencias pedidas si fueran pertinentes al mejor esclarecimiento de los hechos y de las responsabilidades contraídas y mandará hacer en su caso las citaciones correspondientes.

Art. 362. Se practicarán por el Secretario antes de la vista de la causa:

1º El reconocimiento o inspección de lugares, certificando minuciosamente sobre su resultado. 2º La ratificación de testigos del sumario.

A estas diligencias podrá concurrir tanto el Fiscal como el defensor.

Art. 363. Precederá también, a la vista de la causa, la observación facultativa que debe ser previa al informe pericial.

Art. 364. Si el Presidente del Consejo lo considera conveniente para aclarar o ilustrar algún punto de la causa, podrá mandar practicar, aunque no se solicite, cualquiera de las diligencias de prueba determinadas en el artículo 360, y requerirá de las oficinas públicas los datos administrativos o informes técnicos que fueren necesarios.

Art. 365. Se practicarán ante el Consejo de Guerra y en el momento de la vista de la causa:

1º El reconocimiento de objetos o documentos; 2º Las declaraciones de los nuevos testigos y las de los peritos.

No se podrá suspender la vista de la causa para presentar otras pruebas que no sean de las concedidas.

Art. 366. Una vez evacuadas las diligencias a que se refiere el artículo 362, o cuando se ha presentado el escrito de defensa y no haya que producir prueba, estará la causa en estado de ser vista ante el Consejo de Guerra, a cuyo efecto el Presidente señalará día y hora, dejando transcurrir el tiempo estrictamente necesario para que los

vocales del Consejo puedan estudiar e imponerse de los autos en Secretaría.

En ningún caso podrá diferirse la resolución del Consejo más de seis días.

TITULO VI

DE LA VISTA DE LA CAUSA

Art. 367. La vista de la causa se hará en sesión pública, a menos que por razones de moralidad o por consideraciones que se rocen con el orden público o la disciplina del Ejército y Armada, el Consejo resuelva que se verifique en acto privado.

Art. 368. Para la vista de la causa, se hará venir al reo a la sala del Consejo, tomándose todas las precauciones posibles para evitar una evasión.

Art. 369. La vista de la causa principiará por establecer la identidad del procesado, a cuyo efecto el Presidente, después de declarar abierta la sesión, le interrogará por su nombre, apellido, edad, nacionalidad, estado, profesión o empleo militar, cuerpo o buque o repartición a que pertenece. Contestado este interrogatorio, se le mandará sentar y descubrirse.

Si fueren varios los reos, se hará el mismo interrogatorio a cada uno de ellos.

Art. 370. Establecida así la identidad, se mandará dar lectura por el Secretario:

1º Del informe del Juez Instructor; 2º De la orden de comparecer a Consejo de Guerra; 3º De toda pieza de prueba o documento cuya lectura sea solicitada por el Fiscal o Defensor.

En seguida se procederá a leer la acusación y la defensa por sus respectivos autores, a menos que éstos estuvieren físicamente imposibilitados, en cuyo caso lo hará el secretario.

Art. 371. Terminada la lectura de la defensa, se entrará a la producción de la prueba, en el orden siguiente:

1º Se reconocerán los objetos o documentos. Este reconocimiento se verificará sometiendo unos u otros al examen del Consejo; 2º Se examinarán los testigos y peritos, según el orden en que se hubieren presentado, empezando por los de la acusación; 3º Se tomarán si fuera necesario, nuevas declaraciones al acusado con relación a los hechos principales del proceso.

Todo lo que se dispone respecto a la manera de recibir la prueba en el sumario, es de aplicación en este caso.

Art. 372. Los vocales del Consejo, el Fiscal y Defensor pueden interrogar al acusado, a los testigos y a los peritos, dirigiendo las preguntas por intermedio del Presidente. Queda reservado a éste el derecho de no dirigir las preguntas que se soliciten, si no las considera pertinentes.

Art. 373. El defensor y el Fiscal pueden tachar a un testigo en





el momento de prestar su declaración. El Presidente oír la manifestación que al respecto haga el tachado y de todo se tomará nota en el acta para que el Consejo aprecie la tacha en el momento de pronunciar la sentencia.

Art. 374. Producida la prueba, se entrará a los alegatos orales, hablando primero el Fiscal y después el Defensor. No podrán hacer uso de la palabra más que una vez.

Art. 375. Concluidos los alegatos, el Presidente se dirigirá al procesado y mandándolo poner nuevamente de pie le dirá: *«De todo lo que se os ha leído resulta que estáis acusado...; os prevengo que la ley os dará el derecho de decir todo lo que consideréis que pueda ser útil a vuestra defensa, siempre que no os apartéis de los deberes y respetos que la disciplina os impone. Si tenéis, pues, algo que agregar a vuestro descargo, podéis hablar»*.

Si fueren varios los reos, esta prevención se dirigirá conjuntamente a todos.

Art. 376. Hecha por el reo la manifestación que crea conveniente, se le mandará sentar y se declarará cerrado el acto de la discusión, suspendiéndose la sesión pública mientras se formulan las cuestiones de hecho.

Art. 377. Durante la discusión de la causa no podrá suspenderse la sesión sino por el tiempo estrictamente necesario para procurar un descanso a los miembros del tribunal.

Art. 378. Las cuestiones de hecho se plantearán en la siguiente forma:

1º *El hecho de que está acusado N. N., de haber... (y se hará referencia de acuerdo con las constancias de autos al hecho producido, a la persona del autor, al tiempo y al lugar en que se produjo...) ¿está dividamente probado?* 2º *Está igualmente probado que el hecho de que se acusa a N. N., se ha producido con las circunstancias tales...* (se referirán por separado, cada una de las circunstancias que puedan influir en la calificación legal del hecho o en la clase y duración de la pena).

Art. 379. Si fueran varios los acusados, se establecerá el cuestionario respecto a cada uno de ellos.

Si un mismo individuo fuese acusado a la vez por diversas infracciones penales, se establecerá el cuestionario respecto de cada una de esas infracciones.

Art. 380. Establecidos los hechos en la forma indicada, se reabrirá la sesión pública, y el Presidente mandará que el Secretario dé lectura del cuestionario, requiriendo en seguida la conformidad del Fiscal y del Defensor.

Art. 381. Si el Fiscal o el Defensor hicieran alguna reclamación sobre la manera cómo están referidos los hechos y el Consejo la considera legítima y atendible, se agregará en forma de cuestión, a cuyo efecto se presentará por escrito.

Art. 382. Las cuestiones de hecho serán escritas en pliego separado



que firmará el que las formuló. Los respectivos pliegos serán oportunamente agregados al expediente, precediendo a la sentencia.

Art. 383. Formuladas definitivamente las cuestiones de hecho, el Presidente requerirá del Auditor su opinión respecto del procedimiento, y si éste observase alguna deficiencia u omisión que sea indispensable salvar, ordenará al Secretario, que proceda a subsanarla en el acto, si fuere posible, o antes que el Consejo se reúna para deliberar sobre la sentencia.

En seguida declarará terminada la sesión pública, mandará retirar el reo y prevendrá al Fiscal y Defensor que están obligados a concurrir al día siguiente, para notificarse de la sentencia.

La misma prevención se hará al reo, cuando no estuviere en prisión preventiva, pues de lo contrario se le notificará la sentencia en el lugar de su prisión, inmediatamente después de notificada al Fiscal y Defensor.

Art. 384. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando la discusión de la causa no hubiera sido de mucha duración y se considerase que hay tiempo bastante para deliberar sobre la sentencia, deberá dictarse ésta en el día.

En este caso, al declarar cerrada la sesión pública, se prevendrá al Fiscal y Defensor que la sentencia va a ser pronunciada y que deben esperar para oír su lectura y ser notificados de ella.

Art. 385. El Secretario tomará nota de todos los incidentes y detalles de esta sesión, y labrará el acta correspondiente, que será firmada por todo el Consejo, por el Auditor, Fiscal y Defensor y agregada a los autos.

Art. 386. Si durante la discusión de la causa, por la declaración de testigos o por documentos, el acusado resulta complicado en otro delito que aquel a que debe responder en ese momento, el Consejo, a requisición fiscal o sin ella, dejando constancia en el expediente, dispondrá se remitan los antecedentes a quien corresponda, para el nombramiento del Instructor respectivo.

En este caso, siendo la sentencia condenatoria, se suspenderá su ejecución hasta que el acusado sea juzgado por los nuevos delitos; pero si fuere absolutoria, será retenido en prisión.

Lo mismo se procederá en caso de que cualquier funcionario militar hubiese incurrido en responsabilidades penales, descubiertas por cualquier motivo en autos o en la escuela del juicio.

TITULO VII

DE LA DELIBERACION Y DE LA SENTENCIA

Art. 387. Al día siguiente de la sesión pública en que se ha hecho la discusión de la causa, o el mismo día, si fuere el caso del artículo 384, el Consejo se reunirá en acuerdo para deliberar sobre la sentencia.



Art. 388. El Presidente abrirá el acto mandando que el Secretario dé lectura de las cuestiones de hecho sometidas a la deliberación, y concluida esa lectura, concederá la palabra a cada uno de los vocales, en el orden que la pidieren.

Art. 389. Estos podrán solicitar del Secretario o del Auditor todos los datos y explicaciones que consideren necesarios para ilustrar su juicio sobre la clase y valor de las pruebas producidas.

Art. 390. Cuando el Consejo advierta en el sumario omisiones o errores importantes que afecten la validez legal del procedimiento, y que no hayan podido salvarse por medio de las únicas diligencias de prueba permitidas en el plenario por el artículo 360, dictará resolución fundada declarando nulo lo actuado, a partir del estado en que se encontraba cuando se cometió la infracción u omisión que motiva la nulidad; y, devolviendo el proceso, señalará las diligencias que deban ampliarse o practicarse de nuevo.

Art. 391. Terminada la discusión o cuando no se haga uso de la palabra, el Presidente pondrá a votación cada una de las cuestiones, en el orden en que se hallaren escritas, y en seguida las adicionales, cuando se haya decidido que se deben tomar en consideración.

La votación se hará por el orden inverso de su puesto y antigüedad, y el Presidente sólo votará en caso de empate.

Art. 392. La votación se hará por escrito, en la forma siguiente: El Secretario pasará un pliego con copia de la primera cuestión al vocal que corresponda y éste pondrá al pie su firma entera, precedida de estas palabras: *Está probado o No está probado*.

El pliego pasará sucesivamente a los demás vocales por su orden, y escritos que sean los votos, el Secretario lo recogerá y proclamará el resultado general de la votación haciéndolo constar bajo su firma, a continuación de los votos, en esta forma: *Por unanimidad (o por mayoría) se declara probado (o no probado) el hecho, tal imputado a N. N.* (aquí se refiere el hecho como está en la pregunta).

Art. 393. Si se declara que no se ha producido prueba del hecho imputado, se pronunciará la absolución, y una vez que la sentencia sea notificada, si el Fiscal no la recurre en el término de la ley, se archivará el expediente y se hará la comunicación correspondiente.

Art. 394. Si el hecho se declara probado, el Presidente propondrá a la discusión esta cuestión previa:

¿El hecho probado constituye delito o falta punible?

La votación será verbal y de su resultado tomará nota el Secretario para hacerlo constar, como corresponde, en el acta del acuerdo.

Si el voto fuera negativo, se procederá también a declarar la absolución; pero en este caso, si la sentencia no fuera recurrida por el Fiscal en el término de ley, se elevará en seguida en consulta al Consejo Supremo.

Si se declara que constituye delito o falta punible, el Presidente pondrá a votación en la forma establecida en el artículo 392, la segun



da cuestión de hecho, y el resultado general de esta votación, se consignará en esta forma:

Por unanimidad (o por mayoría de votos) está probado (o no está probado) que el hecho cometido por N. N. se ha producido con las siguientes circunstancias (aquí se refieren como en la pregunta).

Art. 395. Votados los hechos de la manera indicada, quedan irrevocablemente establecidos, y el Presidente pondrá a discusión las cuestiones referentes a la aplicación de la ley.

Esa discusión se hará en el orden siguiente:

1° Cuál es la calificación legal del delito y cuál la disposición de la ley en que él está previsto. 2° Cuál es la calificación legal de las circunstancias con que el delito se ha producido, esto es, si ellas lo exusan, lo atenúan o lo agravan y con arreglo a qué disposiciones de la ley. 3° Cuál es la pena que corresponde por la ley al delito cometido.

La votación de estas cuestiones será verbal, y el Secretario tomará nota de su resultado para consignarlo en el acta del acuerdo.

Art. 396. Si se declara que la ley no impone pena al hecho probado, se procederá como lo establece el artículo 394 (párrafo 3°).

Art. 397. El Auditor deberá ilustrar a los vocales sobre las cuestiones relativas a la aplicación de la ley, siempre que su opinión fuere solicitada por ellos.

Art. 398. En la aplicación de las penas, se observarán las reglas siguientes:

1° Si la pena fuese de muerte, se requerirán dos tercios de los votos del Tribunal íntegro siendo nula la sentencia que la imponga por menos votos. 2° La imposición de las demás penas se hará por simple mayoría. 3° En caso de empate decidirá el Presidente. 4° Si los votos se fraccionasen en varias opiniones, sin que alguna de ellas tuviese mayoría, se procederá a una nueva votación, y si ésta diese igual resultado, se aplicará la pena que resulte ser la intermediaria entre las votadas.

Art. 399. El acuerdo en que se delibera sobre la sentencia será secreto.

El acta se asentará en el libro correspondiente, y en ella se hará referencia a todos los incidentes producidos y a todas las opiniones manifestadas en el mismo. Se hará constar, además, el voto de cada vocal en cada una de las cuestiones legales.

Esta acta será firmada por todos los presentes al acuerdo.

Art. 400. Terminada la votación de las cuestiones de hecho y de las que se refieren a la aplicación de la ley, se encargará al Auditor que redacte la sentencia.

Esta debe contener, en primer término, la fecha y el lugar en que se dicte, la expresión de la causa, el nombre del encausado, su estado, edad, nacionalidad y todas las demás circunstancias con que figura en la causa.

En seguida, y en párrafos separados y numerados:



1º La relación de los hechos que han sido votados en el Consejo, refiriendo cada uno de ellos a las piezas de prueba correspondientes e indicando el número de las fojas en que éstas se encuentran. 2º La relación de las circunstancias con que los hechos se han producido, presentada de acuerdo con lo establecido en la votación y acompañada de las mismas referencias indicadas en el inciso anterior. 3º La calificación legal de los hechos probados y de la participación que en ellos haya tenido cada uno de los encausados. 4º La calificación legal de las circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes.

En cada uno de estos párrafos, deberán citarse las disposiciones legales que se consideren aplicables.

Finalmente, la sentencia se cerrará con la parte dispositiva o sea el fallo, condenando o absolviendo al procesado por el delito que ha sido materia del proceso e imponiéndole la pena debida con la correspondiente cita de la ley.

Art. 401. Redactada la sentencia, será firmada por el Presidente y por todos los vocales. En seguida se notificará a las partes; pero la notificación al reo, a excepción de lo dispuesto en el artículo 319, se le hará siempre en el lugar de su prisión. Si la prisión preventiva fuese rigurosa, la notificación se hará en presencia de la guardia formada con armas.

Art. 402. En las sentencias de muerte, la notificación al reo se hará de conformidad a lo dispuesto en el artículo 470.

Art. 403. La sentencia de los tribunales militares declarará comisados a favor del Estado los instrumentos del delito y los objetos quitados a los delincuentes o que hubiesen sido traídos al juicio como prueba del delito, cuando así se halle dispuesto en la ley. Se ordenará que los demás sean devueltos a sus dueños.

Art. 404. Notificadas y no recurridas las sentencias condenatorias que no son de consulta, se remitirán en copia a los ministerios de Guerra o de Marina, según corresponda, para que disponga lo necesario a su ejecución.

TÍTULO VIII

DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS SESIONES PÚBLICAS

Art. 405. Al Presidente del Consejo corresponde mantener el orden y compostura en las sesiones, usando para ello de medios moderados y prudentes, empleando, cuando éstos no basten, todos aquellos de que pudiere disponer en los límites de su autoridad y jurisdicción, sin excluir, cuando sea necesario, el auxilio de la fuerza pública, para cuyo efecto deberá, en cada caso, ponerse a disposición del Presidente la guardia militar que solicite.

Art. 406. En el momento de ser conducido el reo a la sala, la guardia que hubiere en el local formará frente a la entrada de aquélla, y cuando el Consejo vaya a ocupar su puesto, le rendirá los honores que corresponden por reglamento a los oficiales generales.



Una vez que el Consejo haya penetrado al recinto cesarán esos honores, pero la guardia no deberá retirarse sin orden del Presidente.

Art. 407. Cuando la sesión fuese para juzgar oficiales generales, la guardia rendirá al Consejo Supremo los honores que corresponden a los ministros de Guerra y de Marina.

Art. 408. El reo penetrará acompañado del Defensor, y en los casos graves y cuando se trate de reos de tropa, serán éstos custodiados durante toda la sesión por uno o más soldados armados.

Art. 409. El Fiscal ocupará su puesto en los estrados antes que penetren los miembros del Tribunal.

Art. 410. En el momento en que el Consejo penetre en la sala, se pondrán todos de pie; el reo militar hará el saludo de reglamento si tuviere las manos libres, y los soldados de custodia lo harán también con el arma, como corresponde.

Art. 411. Los miembros del Consejo, Defensor y Secretario, deberán concurrir a las sesiones públicas con uniforme de media gala, salvo las excepciones que este Código establece. El reo concurrirá con uniforme de gala si lo tuviere.

El Presidente y vocales del Consejo de Guerra permanecerán cubiertos desde el momento en que se declare abierta la sesión.

El Fiscal, el Defensor, el Auditor y Secretario estarán descubiertos, y cuando los dos primeros dirijan la palabra al Consejo, se pondrán de pie.

En las causas de los oficiales generales, los vocales letrados del Consejo Supremo también permanecerán descubiertos.

Art. 412. La distribución de los asientos en todo Consejo se hará del modo siguiente: el Presidente tomará asiento en el centro de la mesa y en lugar más elevado, teniendo a su izquierda al Auditor; en el primer lugar de la derecha, el vocal de más antigüedad o graduación; en el primero de la izquierda después del Auditor, el vocal que sigue en antigüedad o grado, después alternativamente, a derecha e izquierda, los demás vocales, según el orden de sus respectivas graduaciones y antigüedades.

El Secretario se colocará frente al Presidente, dando la espalda al público; el Fiscal ocupará la tribuna de la derecha del Tribunal y el Defensor la de la izquierda.

El banco del acusado se colocará en el centro del recinto y en medio de las tribunas del Fiscal y Defensor. Los testigos ocuparán los asientos que el Presidente designe.

Art. 413. Los espectadores se mantendrán descubiertos y sin armas, guardando silencio, compostura y el respeto debido. Si se hicieren señales de aprobación o reprobación, o se causara algún desorden en la audiencia, el Presidente prevendrá el desalojo parcial o general del público. Si las manifestaciones se repitiesen, se expulsarán del recinto los autores, o se desalojará la concurrencia cuando no fuere posible descubrir los autores del desorden.



La fuerza pública será empleada en este caso, si fuere necesario, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda a los promotores del desorden, a cuyo efecto se les mandará arrestar. La orden de arresto servirá de cuerpo del delito.

Art. 414. Cuando el acusado, por vociferaciones o por cualquier otro medio tendiente a causar tumulto, procurase impedir el libre curso de la justicia, será mandado retirar de la audiencia, y la discusión de la causa continuará, pudiendo serle impuesta por tal hecho la pena que corresponda.

Art. 415. Las faltas de respeto del Defensor serán castigadas después que haya cumplido su misión salvo que fueran de tal naturaleza que obstruyeran el curso de la justicia, en cuyo caso se le mandará retirar, si así lo resuelve el Consejo, continuándose la causa como si estuviere el Defensor, sin perjuicio de las responsabilidades de orden penal.

PARTE SEGUNDA

EL PLENARIO EN LOS CONSEJOS DE GUERRA ESPECIALES

Art. 416. Cuando mediare la autorización a que se refiere el artículo 53, el jefe a quien se eleve el sumario, procederá inmediatamente a nombrar un Auditor *ad hoc*, en las condiciones del artículo 82, el cual deberá intervenir en las ulteriores de la causa y dictaminará sobre los puntos que indica el artículo 327.

Art. 417. Producido este dictamen, si el jefe resolviese mandar seguir la causa en plenario, nombrará en el mismo acto el Presidente, Fiscal y Secretario del Consejo de Guerra que ha de conocer en el caso.

Art. 418. El Presidente nombrado tomará al Secretario el juramento de ley, y requerirá el nombramiento de Defensor en los casos y en la forma que prescriben los artículos 339 y 340.

Art. 419. Nombrado el Defensor y aceptado el cargo, se procederá a la constitución del Consejo, de acuerdo con lo que al respecto dispone el Cap. II, Tít. III, Tratado I de este Código.

Art. 420. Constituido el Consejo, el Presidente dispondrá su instalación, señalando hora dentro de las veinticuatro siguientes y haciendo al efecto las citaciones debidas a los vocales, al Fiscal, Auditor y Defensor.

Si el Presidente o algunas de las personas citadas, dejaren de concurrir al acto sin causa justificada, serán castigados con arresto por quien corresponda, sin perjuicio de que el Consejo se instale con los presentes, y de que los ausentes se incorporen antes o después de cumplido el arresto. Cuando la falta fuera del Presidente, el vocal que deba reemplazarlo dará cuenta al superior.

Art. 421. Prestado que sea por los presentes el juramento de ley, terminará el acto, y el Secretario labrará el acta correspondiente, que será firmada por todos ellos.

Art. 422. Terminado el acto de la instalación, el Presidente hará



saber al Fiscal y al Defensor, que deben concurrir a alegar, ante él, las excepciones que tuvieren, a cuyo efecto señalará hora dentro de las veinticuatro siguientes.

Respecto de la discusión y de la prueba de las excepciones, se observará lo dispuesto en el Título II, Parte I, Sección III, Tratado II; pero el Consejo las tomará recién en consideración después de llenado el trámite de la acusación y de la defensa.

Art. 423. Probadas las excepciones, o inmediatamente después del comparendo, si éstas no se opusieran, el Presidente dará vista al Fiscal y luego traslado al Defensor, a los efectos de la acusación y de la defensa las que se presentarán en los plazos y en la forma que este Código establece.

Art. 424. Producida la defensa, el Presidente convocará el consejo a un acuerdo, para considerar y resolver las excepciones e incidentes.

Resueltas éstas, si la causa hubiere de continuar se reunirá el Consejo en sesión, y luego otra vez en acuerdo, a los efectos de la discusión y de la sentencia.

Art. 425. Con las salvedades establecidas en los artículos precedentes, son aplicables a estos juicios las disposiciones relativas al juicio en los Consejos permanentes, y proceden contra la sentencia de unos y de otros los mismos recursos ante el Consejo Supremo.

Art. 426. A la sesión de la vista de la causa, los miembros del Tribunal, Fiscal, Defensor y Secretario, lo mismo que el reo, podrán concurrir con uniforme de diario.

PARTE TERCERA DE LOS RECURSOS

Art. 427. Contra la sentencia de los Tribunales militares hay dos recursos:

- I De infracción de ley.
- II De revisión.

I Recurso de infracción de ley

Art. 428. Este recurso se da contra las sentencias definitivas de los consejos de guerra y procede en dos casos:

1º Cuando se ha infringido la ley en la sentencia. 2º Cuando hay quebrantamiento de las formas.

Art. 429. En el primer caso, el recurso debe fundarse:

1º En la errónea calificación legal del hecho probado o de sus circunstancias; 2º En la no aplicación de la pena señalada, o en la errónea o indebida aplicación de la misma.

Art. 430. En el segundo caso el recurso debe fundarse:

1º En que no se ha tomado al reo declaración indagatoria, ni se ha



oido su defensa; 2º En que no se ha dado intervención al Fiscal; 3º En que se han omitido diligencias de prueba que han sido ofrecidas y aceptadas como pertinentes y necesarias; 4º En la incompetencia o en la organización ilegal del Consejo que dictó la sentencia.

Art. 431. No serán recurribles por el acusado a su defensor las sentencias que sólo impongan arresto, suspensión de empleos o mando.

Art. 432. El término para interponer el recurso es de veinticuatro horas a contar de la última notificación. Espirado este plazo, sin que el recurso se interponga, la sentencia quedará firme, salvo lo dispuesto por el artículo 437.

Art. 433. La deducción del recurso por el reo, puede hacerse de palabra en el acto de la notificación de la sentencia, en cuyo caso el Secretario lo hará constar en autos. Si lo dedujera por escrito, éste deberá ser enviado al Consejo por intermedio del jefe de la prisión.

Art. 434. El Fiscal y el Defensor interpondrán el recurso por escrito y en forma breve. En todos los casos se indicará la infracción legal que lo determina.

Art. 435. El recurso deducido por el Fiscal aprovecha al acusado aunque éste no recurriere. Cuando son varios los reos y recurre alguno de ellos, este recurso no aprovecha a los demás que no lo hubieren deducido. Cuando el recurso fuere promovido solamente por el acusado, no podrá ser aumentada o agravada la pena que el Consejo de Guerra le hubiere impuesto.

Art. 436. Interpuesto el recurso, el proceso será remitido con oficio por el Presidente al Secretario del Consejo Supremo, haciéndose saber al Fiscal y al acusado.

Art. 437. Vencido el término sin que se haya deducido recurso alguno, se elevarán los autos en consulta al Consejo Supremo de Guerra y Marina, en los casos siguientes:

1º Cuando la sentencia fuere de muerte; 2º Cuando fuere absolutoria y la absolución se fundare en alguna de estas dos causas

- a) Que el hecho probado no constituye delito o falta punible;
- b) Que no tiene pena señalada en la ley.

En los casos de este artículo, el decreto de elevación de los autos se notificará al Fiscal y al Defensor, y en seguida se remitirán con un oficio al Presidente de aquél.

II Recurso de revisión

Art. 438. Este recurso se da contra las sentencias firmes de los tribunales militares, y su efecto es suspender la ejecución o interrumpir el cumplimiento de las mismas.

Procede en los casos siguientes:

1º Cuando en virtud de sentencias contradictorias, estén sufriendo condena dos o más personas, por un mismo delito que no ha podido ser cometido más que por una sola; 2º Cuando alguno esté sufriendo con-



dona como autor, cómplice o encubridor del homicidio de una persona cuya existencia se acredite después de la condena; 3° Cuando alguno esté sufriendo condena en virtud de sentencia cuyo fundamento haya sido un documento declarado después falso, por sentencia firme en causa criminal.

Art. 439. El recurso de revisión puede promoverse por el condenado o por cualquiera de sus parientes inmediatos, y puede solicitarse a los efectos de la rehabilitación, después de cumplida la sentencia o después de la muerte del condenado.

Art. 440. El recurso se iniciará con solicitud motivada, ante los ministros de Guerra o Marina, según el caso, quienes oyendo previamente al Auditor General, lo enviarán al Consejo Supremo, si consideran que hay razón para deducirlo.

Art. 441. El Fiscal General del Consejo puede también promoverlo, cuando tenga conocimiento de algún caso en que proceda.

Art. 442. El recurso de revisión se substanciará oyendo por escrito al Fiscal General y a los interesados, a quienes se citará oportunamente, si antes no hubieren comparecido.

Cuando unos u otros pidieren la unión de antecedentes a los autos, el Consejo acordará sobre el particular lo que estime oportuno.

Practicadas las diligencias de substanciación que se crean necesarias, se oír de nuevo al Fiscal y a los interesados, y, sin más trámite, el Consejo dictará sentencia, que será firme.

Art. 443. En el caso del inciso 1° del artículo 438, el Consejo declarará la contradicción de las sentencias, si en efecto existe, y anuladas una y otra, mandará instruir de nuevo la causa.

En el caso del inciso 2°, el Consejo, comprobada la identidad de la persona cuya muerte hubiere sido penada, anulará la sentencia.

En el caso del inciso 3°, dictará la misma resolución con vista de la ejecutoria que haya declarado falso el documento, y mandará que la causa se instruya de nuevo.

Art. 444. Cuando por consecuencia de la sentencia anulada, hubiere sufrido el condenado pena corporal, y en la segunda sentencia se le impusiera alguna otra pena, se tendrá en cuenta, para el cumplimiento de ésta, el tiempo y la importancia de la que anteriormente sufrió.

SECCION IV

PROCEDIMIENTO ANTE EL CONSEJO SUPREMO

Art. 445. Recibido el proceso a virtud del recurso reducido, el Secretario anotará, en el mismo proceso, la fecha del recibo.

Art. 446. Si el defensor del reo no pudiera seguir desempeñando su cargo ante el Consejo Supremo, el nombramiento del reemplazante será la diligencia previa.

A este efecto, se procederá como lo indican los artículos 339 y 340;



pero si el reo estuviere ausente, el Presidente de oficio y sin más trámite hará el nombramiento de Defensor.

Art. 447. Cuando el recurso haya sido interpuesto por el reo o por la defensa, el proceso se pondrá en secretaría a disposición del Defensor, a fin de que pueda examinarlo y tomar las notas que considere necesarias para establecer los fundamentos de aquél.

Si el recurrente fuera el Fiscal, el Secretario remitirá los autos, con el mismo objeto, al Fiscal General.

Art. 448. El recurso se fundará en el término de dos días, que, en el primer caso del artículo anterior, se contarán desde que se haga saber al Defensor que el expediente está a su disposición en secretaría; y en el segundo, desde que se remita al Fiscal General.

Art. 449. Del escrito en que se funda el recurso, se dará traslado a la otra parte, por el mismo término.

Art. 450. Vencido este último término, hayan sido o no presentados los escritos a que se refieren los artículos anteriores, se pondrán los autos al despacho del Presidente.

Art. 451. En la sesión pública del Consejo Supremo, se observarán las disposiciones del Título VII, Parte I, Sección III de este tratado, en cuanto fueren de aplicación. Los vocales letrados tomarán asiento a continuación de los dos últimos vocales militares y por orden de antigüedad de su nombramiento.

Art. 452. La resolución sobre el recurso deberá ser tomada en acuerdo, y no podrá demorarse más de tres días después de producidos los informes o de vencido el término del traslado.

Art. 453. El acuerdo empezará por la lectura de los escritos en que se ha hecho la discusión del recurso, y luego el Presidente propondrá al debate las cuestiones relativas a la legalidad o ilegalidad de las excepciones que hubieren sido opuestas en el juicio, votándose en seguida, como lo dispone el artículo 395.

Art. 454. Una vez debatidas las excepciones y si ellas son rechazadas, el Presidente propondrá sucesivamente a la discusión la siguiente cuestión relativa al recurso:

Si existe o no la causal o las causales de nulidad alegadas como fundamento del recurso.

Art. 455. Cerrada la discusión sobre cada una de estas cuestiones, el Presidente las pondrá sucesivamente a votación y ésta se hará también de conformidad con lo que dispone el artículo 395.

Art. 456. En todos los debates se oirán primero las opiniones de los vocales letrados, pero la votación empezará siempre por los vocales militares, en el orden que corresponde.

Art. 457. Terminadas las votaciones y proclamado y anotado su resultado general, el Presidente encargará al vocal letrado en turno la redacción de la sentencia o de la resolución.

Art. 458. Si el resultado de la votación fuere contrario a la existencia de causales de nulidad o a la legalidad de las excepciones



opuestas, se declarará firme la sentencia, y, notificadas que sean las partes, se harán las comunicaciones necesarias para la debida ejecución de aquélla.

Art. 459. Si se declara la existencia de alguna de las causas de nulidad enumeradas en el artículo 429, el Consejo Supremo anulará la sentencia, y partiendo de los hechos irrevocables que ella ha establecido, pronunciará una nueva y definitiva sentencia en la que hará la debida aplicación de la ley. Lo mismo se procederá cuando se reconozca la legalidad de las excepciones opuestas durante el juicio.

Quando en la nueva sentencia hubiera que calificar los hechos o votar la pena, se observará lo dispuesto en los artículos 395 y 398.

En ningún caso el Consejo Supremo podrá modificar los hechos votados por el Consejo de Guerra, ni hacer apreciaciones sobre la prueba de esos hechos.

Art. 460. Si las causas de nulidad existentes fueran de las comprendidas en el artículo 430, el Consejo Supremo declarará la nulidad del juicio, a partir del estado en que se encontraba cuando se cometió la violación u omisión que la ha determinado, y devolverá el expediente al Consejo de Guerra correspondiente, para que el juicio se instruya o se sentencie de nuevo.

Contra esta segunda sentencia no habrá más recurso que el que se funda en la infracción que en ella se haya hecho de la ley.

Art. 461. Cuando la sentencia viniere en consulta, el Presidente mandará pasar los autos en vista al Fiscal General, quien deberá expedirse en el término de tres días, aconsejando su aprobación o reforma.

Expedido el dictamen fiscal, se pondrán los autos al acuerdo para la resolución definitiva.

Art. 462. Cuando se apruebe la sentencia consultada, se hará saber al Consejo que elevó la consulta, y dirigiendo al mismo tiempo las comunicaciones necesarias a la debida ejecución de la sentencia, se mandará archivar el expediente.

Si el Consejo considera que la sentencia no ha sido dictada de acuerdo con las disposiciones de la ley, la reformará en esa parte, y luego procederá como lo indica el párrafo anterior. Las cuestiones relativas a la aprobación o reforma de la sentencia consultada serán propuestas por el Presidente y votadas en la forma establecida para las cuestiones legales.

Art. 463. Además de los fundamentos legales de la decisión sobre el recurso, las sentencias del Consejo Supremo deben contener, en cuanto lo permita su naturaleza, todas las enunciaciones del artículo 400.

Es de aplicación estricta a estas sentencias las disposiciones del artículo 401, a excepción de la notificación al reo, que se hará sin presencia de la guardia.

Art. 464. El Secretario asentará en el libro correspondiente el acta del acuerdo, observándose al respecto lo dispuesto en el artículo 399.

Art. 465. En las causas de los oficiales generales y en las de los

funcionarios letrados de la administración de justicia, se observará lo dispuesto sobre el juicio en los consejos de guerra permanentes; pero, contra las sentencias que en ellas se dicten, no hay recurso alguno.

SECCION V

DE LA EJECUCION DE LAS SENTENCIAS

Art. 466. La ejecución de las sentencias firmes de los tribunales militares debe ser ordenada por el Presidente de la República; pero las que en tiempo de guerra pronuncian los consejos especiales en las plazas fuertes o ejércitos de operaciones, serán ejecutadas por orden de sus respectivos gobernadores o comandantes en jefe.

Art. 467. La ejecución será practicada de completa conformidad a lo establecido en la sentencia, observándose lo dispuesto en el Tratado III de este Código y en los reglamentos respectivos.

Art. 468. En las sentencias absolutorias, el Tribunal que las pronuncie en definitiva, dispondrá la libertad de los encausados, y hará las comunicaciones del caso, a efecto de que se impartan las órdenes correspondientes.

Art. 469. Las sentencias de los tribunales militares serán publicadas en la Orden General del Ejército o de la Armada, siempre que, a juicio de la autoridad militar correspondiente, esa publicación no perjudique el interés de la disciplina o el prestigio de las clases militares.

Art. 470. La sentencia de muerte no se notificará al reo hasta el momento de ponerlo en capilla, y una vez en ella, se le concederá los auxilios que solicite y se permitirán las visitas que él desee recibir.

La notificación se hará en presencia del Fiscal de la causa, quien deberá vigilar la debida ejecución de la sentencia.

Art. 471. La sentencia de muerte se ejecutará públicamente y de día, a las veinticuatro horas de hecha la notificación. No podrá ejecutarse en los días de fiesta cívica.

Art. 472. El condenado a pena de muerte será fusilado en presencia de tropa formada, en el paraje y a la hora que designe el Presidente de la República o el Jefe que ordenó la ejecución. Allí mismo será cumplida previamente la pena de degradación, cuando le hubiere sido impuesta.

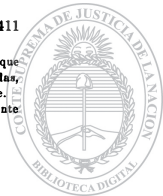
Art. 473. El ejecutor de una sentencia militar que la altere en cualquier sentido, sufrirá la pena señalada en el Tratado III de este Código.

SECCION VI

DE LA AMNISTIA, INDULTO Y CONMUTACION

Art. 474. La amnistía extingue la acción penal y la pena con todos sus efectos y aprovecha a todos los responsables del delito, aun cuando ya estuviesen condenados.





Art. 475. La aplicación de la amnistía se hará por el Tribunal que conoce de la causa o por el Consejo Supremo, en las causas falladas, observándose las disposiciones especiales de la ley en que se acuerde.

Art. 476. El indulto y la conmutación se harán por el Presidente de la República, previo informe del Consejo Supremo.

LIBRO TERCERO

PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS

SECCION PRIMERA

PROCEDIMIENTO EN TIEMPO DE GUERRA

Art. 477. El juicio en tiempo de guerra es verbal y sumario; y la sesión del Consejo será pública, siempre que no se oponga a ello alguna de las causas a que hace referencia el artículo 367.

Art. 478. Cuando las autoridades militares o los jefes superiores correspondientes tengan noticia, por medio de parte, por denuncia o por cualquier otro medio, que se ha cometido un delito de competencia de la justicia militar, procederán inmediatamente al nombramiento de Presidente, Fiscal, Auditor y Secretario del Consejo de Guerra, y simultáneamente con el nombramiento mandarán pasar al primero el parte o la denuncia y los antecedentes todos que se tuvieren sobre el hecho.

Art. 479. Recibidos que sean por el Presidente los antecedentes y los nombramientos de que hace mención el artículo anterior, hará en el acto a los nombrados, las comunicaciones necesarias, para su aceptación en forma.

Art. 480. Si de los antecedentes remitidos resultare la probable existencia del delito, el nombre del presunto delincuente y su aprehensión, se hará saber a éste, sin dilación alguna, el derecho que tiene para nombrar Defensor. Si no lo hiciere, se le nombrará de oficio.

Art. 481. Aceptado el cargo por el Defensor, se le citará sin demora, como igualmente al Fiscal y Auditor, para que concurren al lugar que el Presidente designe, a presenciar el sorteo de vocales, según lo prevenido en el Tratado I, a cuyo efecto se pedirá con anticipación la lista de jefes y oficiales hábiles.

Art. 482. Si hubiere antecedentes que comprueben la existencia del delito, pero no la persona del delincuente, el Presidente, asistido del Secretario, procederá breve y sumariamente a la averiguación de la persona o personas que lo hubiesen cometido y a ordenar su captura. Obtenido esto, se procederá a efectuar las diligencias indicadas en los artículos anteriores.

Art. 483. Si las diligencias de averiguación no dieron resultado, el Presidente elevará con dicho oficio los autos a la autoridad o jefe que lo nombró, para que ella, previa vista de su Auditor, ordene el sobresseimiento que corresponda o provea lo que a su juicio estime justo.



Art. 484. Constituido el Consejo, en los casos en que procede la causa, se instalará acto continuo en el local que el Presidente designe, observándose en su instalación las disposiciones referentes al tiempo de paz.

Art. 485. Abierta la audiencia, el Presidente del Consejo procederá: 1º A ratificar en presencia del Defensor y del Fiscal, si éstos lo pidieren, todas las diligencias substanciales que sin conocimiento del Consejo se hubieren practicado antes de su constitución; 2º A examinar los testigos que hubieren de declarar, para cuyo efecto Defensor y Fiscal los harán comparecer; 3º A nombrar y citar peritos, si fuese necesario para practicar algún reconocimiento pericial; 4º A tomar al reo presente, declaración indagatoria, conforme a las disposiciones aplicables del procedimiento en tiempo de paz.

Durante el tiempo en que el acusado preste su declaración, cualquiera de los vocales del Consejo, como también el Defensor y el Fiscal, podrán dirigirle preguntas por intermedio del Presidente, siempre que éste las estime pertinentes.

Art. 486. A medida que el preso vaya declarando, el Presidente dictará al Secretario, en voz alta e inteligible, lo substancial de la declaración, pudiendo aceptar observaciones al respecto, de cualquiera de las partes, antes de fijarlas definitivamente por escrito.

Art. 487. Escrita la declaración, el Secretario la leerá, haciéndola firmar al declarante. Si no pudiese, no supiere o no quisiere, se hará constar, concluido lo cual se le mandará retirar de la audiencia.

Art. 488. El Presidente examinará verbalmente los testigos de cargo y descargo dejando constancia escrita tan sólo de la parte de la declaración que estime pertinente y la que designe el Fiscal o el Defensor del acusado.

Art. 489. La misma brevedad se observará en la redacción del resultado de los carceos, cuando éstos fueran necesarios, observándose, al ordenarlos y practicarlos, las disposiciones del capítulo respectivo.

Art. 490. Todas las referidas diligencias se asentarán en la misma acta, las unas a continuación de las otras, según el orden en que se hubieran producido, debiendo darse por terminada la prueba testimonial cuando el Presidente considere suficiente la producida.

Art. 491. Cuando fuere necesaria la prueba pericial, los peritos, o el perito en su caso, practicarán el reconocimiento delante del Consejo y demás funcionarios presentes, y expidiendo verbalmente su informe, dictarán con precisión al Secretario la parte substancial de sus conclusiones, que firmarán. En seguida se retirarán de la audiencia. Si fuere necesario el examen pericial fuera del recinto del Tribunal, el Presidente les dará un breve plazo para su expedición, continuando entretanto las diligencias de la causa.

Art. 492. Clausuradas definitivamente las diligencias de prueba, el Presidente ordenará que sean puestas por el Secretario a disposición del Defensor y Fiscal, a objeto de organizar la defensa, fijando al



efecto un plazo común improrrogable que no exceda de tres horas, durante el cual se suspenderá la sesión del Consejo, con cuya resolución se clausurará al acta de las diligencias de prueba, que será firmada por el Presidente, Defensor y Secretario.

Art. 493. Acusación y defensa serán orales y producidas sin demora, a cuyo fin los encargados de hacerlas podrán, durante la audiencia, tomar apuntes de la prueba, a medida que se vaya rindiendo. Vencido el plazo acordado, se reunirá de nuevo el Consejo, oír la acusación y defensa, y terminadas, se procederá a labrar y firmar el acta correspondiente, pudiendo las partes dictar al Secretario lo substancial de su argumentación, en forma de incisos separados.

Art. 494. El Presidente ordenará entonces el desalojo, para formular las cuestiones de hecho, en la forma del procedimiento de tiempo de paz.

Art. 495. Acto continuo, en acuerdo secreto se procederá a la discusión y resolución de las cuestiones propuestas y a la aplicación de la pena, o a la declaración de absolución, según corresponda, labrándose la sentencia correspondiente.

Art. 496. El plazo para interponer los recursos será de una hora, y deducidos éstos ante el Consejo de Guerra, se otorgarán, remitiéndose la causa a la autoridad militar que corresponda, la que, previa vista del Auditor en campaña o de un Auditor *ad hoc*, en su caso, resolverá sin más trámite lo que estime arreglado, mandando en caso de confirmación de la sentencia, que ella sea ejecutada.

SECCION II

DEL JUICIO SUMARIO EN TIEMPO DE PAZ

Art. 497. Los juicios sumarios sólo tendrán lugar en tiempo de paz, cuando sea necesaria la represión inmediata de un delito para mantener la moral, la disciplina y el espíritu militar del Ejército y Armada, o cuando se trate de delitos graves, como traición, sublevación, motín, saqueos, vías de hecho contra superiores, ataque a guardia y asesinato de centinela.

Art. 498. El procedimiento será el sumario del capítulo anterior y su aplicación corresponderá, según los casos, a los consejos de Guerra Permanentes o a los Especiales, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 53. Los recursos se promoverán para ante el Consejo Supremo.

Art. 499. Ante el Consejo Supremo, el procedimiento del recurso será el mismo que establece la sección anterior respecto del que se deduce para ante los comandantes en jefe o divisionarios independientes.



SECCION III
PROCEDIMIENTO ANTE LOS COMISARIOS DE POLICIA

Art. 500. Los comisarios de policía del Ejército procederán en las materias de su competencia, a requisición de los interesados, por orden superior o de oficio. Su procedimiento es verbal y actuado.

Art. 501. Presentes las partes, harán la expresión y petición, así como alegarán en su defensa lo que estimaren necesario, y producirán la prueba agregando documentos o trayendo testigos hábiles a declarar.

Art. 502. Oídas las partes, como queda indicado, el comisario dictará sentencia, que será escrita en el acta correspondiente y publicada inmediatamente por el Secretario.

De su fallo no habrá recurso.

TRATADO TERCERO

DE LA PENALIDAD

LIBRO PRIMERO

DE LAS INFRACCIONES Y DE LAS PENAS EN GENERAL

TITULO PRIMERO

DE LOS DELITOS Y DE LAS FALTAS

CAPITULO I

Disposiciones generales

Art. 503. Constituye delito militar toda violación de los deberes militares que tenga pena señalada en este código y que no se encuentre comprendida entre las faltas de disciplina; y, además, todo hecho penado por los bandos que los comandantes en jefe dicten en tiempo de guerra.

Art. 504. Constituye falta de disciplina toda violación de los deberes militares que la ley o los reglamentos castiguen con algunas de las penas enumeradas en el artículo 537.

Art. 505. Las disposiciones del Libro I, del Código Penal Ordinario, serán de aplicación a los delitos militares, en cuanto lo permita su naturaleza y no se opongan a las prescripciones del presente Código.

Art. 506. Las disposiciones penales de este Código serán igualmente

aplicables a los delitos militares cometidos en territorio extranjero por individuos del Ejército y Armada de la República.

CAPITULO II

Complicidad

Art. 507. Cuando se haya cometido delito por la ejecución de una orden del servicio, el superior que la hubiere dado será el único responsable; y la responsabilidad del inferior, como cómplice, sólo se hará efectiva si se hubiera excedido en su ejecución.

CAPITULO III

Atenuación y agravación de los delitos militares

Art. 508. Las únicas causas de atenuación de los delitos militares son:

1º Ejecutar una acción heroica de las señaladas en la ordenanza, después de haber cometido el delito, si éste ha tenido lugar en operaciones de guerra; 2º No haberselo leído o hecho conocer las disposiciones de las leyes penales a las clases e individuos de tropa, con anterioridad a la comisión del delito; 3º Haber terminado el tiempo de servicio militar sin que se hubiese expedido la baja correspondiente, salvo el caso de encontrarse en campaña; 4º Hacer carecer a los individuos del Ejército o Armada, de los medios necesarios para la subsistencia, o de las prendas de vestuario indispensables, siempre que el hecho no fuera general y que el delito reconociera este origen; 5º Haber observado hasta el momento del delito una conducta intachable y haberse hecho acreedor a la estimación de sus superiores por el estricto cumplimiento de todos sus deberes.

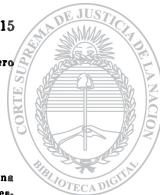
Art. 509. Se considerará como atenuante de la insubordinación, la circunstancia de haber sido precedida, inmediatamente, de un abuso de autoridad por parte del superior contra el cual se comete.

Art. 510. La embriaguez no es causa de exención ni de atenuación de pena de los delitos de jurisdicción militar.

Art. 511. No se tomará en consideración circunstancia alguna atenuante en los casos de trición, de espionaje, de rebelión, deserción, insubordinación a mano armada o abandono del puesto de centinela frente al enemigo.

Art. 512. Son causas especiales de agravación de los delitos militares:

1º Ejecutar el delito en actos del servicio o con daño o perjuicio del mismo; en presencia de tropa formada; al frente del enemigo; en unión de inferiores o tener participación en los delitos de éstos, abusando de posición militar; en grupos de dos o más, o en presencia de





una reunión o de una muchedumbre; en plaza sitiada o en momentos anteriores próximos al combate, o en el combate o durante la retirada. 2° Ejecutar igualmente el delito faltando a la palabra de honor, o en la persona del prisionero de guerra o en su propiedad, o en las personas y propiedades de su familia o servidumbre; 3° Ser jefe; 4° Ejecutar el hecho por temor de un peligro personal, siempre que éste, por sí mismo, no constituya delito; 5° Haber quebrantado la prisión preventiva.

Art. 513. Siempre que quede librado al criterio del Tribunal determinar la porción de la pena, la aplicará en concepto de agravarla cuanto mayor sea la jerarquía del que debe sufrirla.

Art. 514. Se considerará como agravante del abuso de autoridad la circunstancia de haber determinado, con él, la comisión de un delito por parte del inferior.

Art. 515. Con excepción de lo prescripto en el artículo 510, las disposiciones de este capítulo no rigen sino respecto de los delitos militares, y en ningún caso serán de aplicación a los delitos de carácter general ni a los delitos especiales cuando ellos sean de la competencia de los tribunales militares.

CAPÍTULO IV

Conspiración

Art. 516. La conspiración y la proposición para cometer un delito, son tan sólo punibles cuando la ley expresamente las pena.

Art. 517. Existe conspiración cuando dos o más personas se concertan para la ejecución del delito y resuelven ejecutarlo; y proposición cuando el que ha resuelto cometerlo procura inducir a otro u otras personas a concurrir a su ejecución.

TÍTULO II

DE LAS PENAS

CAPÍTULO I

Clasificación, duración y efectos de las penas del delito

Art. 518. Los delitos militares serán castigados con las siguientes penas, que se aplicarán por sentencia de Consejo de Guerra:

1° Muerte; 2° Presidio; 3° Prisión mayor; 4° Prisión menor; 5° Degradación.

Art. 519. La pena de muerte se hará efectiva en la forma prescripta por el artículo 472, y el cadáver se inhumará sin pompa alguna.

Art. 520. Siempre que se imponga la pena de muerte con degradación pública, el reo será fusilado por la espalda.



Art. 521. La pena de presidio consiste en la sujeción a trabajos forzados, constantes y sin compensación.

En tal caso habrá separación entre los penados militares y estos últimos.

Art. 522. La pena de prisión consiste en la detención del delincuente en cárcel, fortaleza o buque destinado exclusivamente al efecto. La prisión se distingue en mayor o menor, produciendo, respectivamente, los efectos señalados en los artículos 527 a 532.

Art. 523. La pena de degradación consiste en la declaración formal de que el delincuente es indigno de llevar las armas y vestir el uniforme de los militares de la República.

Esta declaración se hará con las solemnidades que prescriben los reglamentos.

Art. 524. La pena de presidio no puede imponerse por toda la vida, sino por un número determinado o indeterminado de años.

Si el presidio fuera por tiempo indeterminado, el penado que hubiere sufrido ya quince años de condena, que hubiere observado buena conducta y dado pruebas evidentes de reforma durante los últimos años, tendrá derecho de pedir que se le conceda la libertad.

Art. 525. El presidio por tiempo determinado, variará entre tres y quince años.

Art. 526. La pena de muerte y la de presidio llevarán siempre aparejada la degradación, cuando sean impuestas por violación de la ley penal general; pero en los delitos militares, tan sólo cuando este Código expresamente lo determine.

Art. 527. La prisión mayor durará de dos a seis años.

Art. 528. Las penas de presidio o de prisión mayor, impuestas a jefes u oficiales, llevarán siempre como accesoria la destitución.

Art. 529. Las clases o individuos de tropa condenados a presidio o prisión mayor, ingresarán, al terminar su condena, a un nuevo cuerpo o compañía de disciplina, para cumplir en él el tiempo que les falte con arreglo a las disposiciones de la ley sobre reclutamiento o a su compromiso de enganche, debiendo las clases ingresar a dicho cuerpo o compañía en condición de soldados con la excepción establecida en el Artículo IV, del Título I, Capítulo I, de la Ley Orgánica Militar.

Art. 530. La prisión menor durará de cuatro meses a dos años, y llevará como accesoria, respecto de jefes y oficiales, la suspensión de empleo por el mismo tiempo de su duración.

Art. 531. Las clases e individuos de tropa condenados a prisión menor, llenarán, después de cumplida su condena, el tiempo que les falte de servicio en los cuerpos del Ejército o en los buques de la Armada.

Art. 532. Los jefes y oficiales en prisión estarán siempre separados de los presos de tropa. Durante la condena, éstos últimos serán ocupados en los trabajos de carácter militar que autoricen los reglamentos de la prisión.

Art. 533. La pena de degradación produce los efectos siguientes:



1º Destitución; 2º Inhabilitación perpetua para desempeñar cargo alguno en el Ejército o Armada de la República; 3º Prohibición de usar condecoraciones y de recibir pensiones o recompensas por servicios anteriores.

Art. 534. Cuando la degradación se impone como pena principal, lleva como accesoría la prisión menor por el tiempo que la sentencia señale.

Art. 535. Cualquiera que sea la duración asignada a las penas en este capítulo, cuando ellas se imponen como accesorias durarán lo que dure la principal.

Art. 536. Las penas impuestas a militares por los tribunales ordinarios, producirán, respecto de los condenados, los efectos que se determinan en este Código para la pena de la misma especie.

CAPÍTULO II

Clasificación, duración y efectos de las penas disciplinarias

Art. 537. Las faltas de disciplina se castigarán con las penas siguientes:

1º Destitución o baja; 2º Suspensión de empleo; 3º Arresto; 4º Suspensión de mando; 5º Aprehimiento; 6º Confinamiento; 7º Destitución de clase; 8º Suspensión de clase; 9º Recargo de servicio; 10. Calabozo; 11. Barra; 12. Plantón; 13. Fajinas.

En la marina puede también imponerse:

1º Cofa o puente. 2º Prohibición de raciones espirituosas.

Art. 538. Salvo lo dispuesto en este capítulo, la imposición de las penas disciplinarias se hará en la forma y extensión que establezcan los reglamentos que al efecto diere el Presidente de la República. Ellos determinarán también la clase y la porción de pena que corresponde imponer a cada uno de los individuos comprendidos en la jerarquía militar.

Art. 539. A los jefes y oficiales no se impondrá más penas disciplinarias que las de suspensión de empleo, arresto, suspensión de mando, apreimiento, destitución o baja.

Art. 540. La pena de destitución consiste en la privación del estado militar, considerándose como tal el conjunto de derechos, prerrogativas y honores que son propios de cada empleo militar.

Esta pena se aplicará por el Presidente de la República previo sumario en los casos que el Código la estableciera y no podrá ser impuesta a los oficiales superiores del Ejército y Armada, sino por sentencia de Consejo de Guerra.

El destituido no podrá obtener pensiones ni recompensas por servicios anteriores.

Art. 541. La suspensión de empleo es pena aplicable únicamente a jefes y oficiales y consiste en la privación temporal de los derechos prerrogativas y honores propios del empleo, a excepción del derecho



de percibir una tercera parte del sueldo. Esta pena no podrá exceder de un año ni ser menor de un mes, ni podrá ser impuesta más que por decreto del Presidente de la República mediante una prevención sumaria.

Art. 542. La pena de confinamiento consiste en prestar servicios en las compañías o cuerpos de disciplina estacionados en las islas, fuertes o puntos fronterizos de la República.

Art. 543. La pena de confinamiento se impondrá únicamente a las clases e individuos de tropa, y su duración será de cuatro meses a cinco años. Esta pena, se aplicará por el Presidente de la República, previo sumario, en los casos establecidos en esta ley.

Art. 544. En el tiempo de duración que se asigne a la pena de confinamiento, no se incluye el que faltaba al condenado para cumplir su compromiso o su obligación de servicio, el cual, una vez cumplida la pena, debe llenarse en el mismo cuerpo o compañía disciplinaria y a razón de un día de servicio en él, por dos de los que faltaban.

Art. 545. Los confinados no perciben sueldo. Exceptúase de esta disposición a los que cumplen en cuerpo de disciplina su tiempo de servicio.

Art. 546. La facultad de imponer arresto al inferior es inherente a todo empleo militar, dentro de los términos que para cada uno señalan los reglamentos decretados por el Presidente de la República.

Art. 547. La pena de arresto consiste en la simple detención de la persona que lo sufre, en domicilio particular, buque de guerra, cuartel o establecimiento militar.

Art. 548. Cuando el arresto se cumple en buque, cuartel o establecimiento militar, la autoridad o empleado militar que lo ordenó podrá disponer que el arrestado, si es de tropa, permanezca detenido en la guardia, y si es jefe u oficial, en el alojamiento propio o en el cuarto de banderas. Podrá también prohibirle que reciba visitas cuando, a su juicio, ese rigor fuese necesario para la eficacia del castigo.

Art. 549. La pena de arresto a los jefes y oficiales lleva siempre como accesoria la suspensión de mando por el tiempo de su duración.

Art. 550. Los individuos de tropa en arresto serán ocupados en fajas y, tanto ellos como las clases, podrán ser utilizados para el servicio, cuando fuese necesario a juicio del jefe u oficial de quien dependen.

Art. 551. El máximo de la pena de arresto es de seis meses y el mínimo es de 24 horas.

Art. 552. La suspensión de mando consiste en la privación temporal de la parte de mando asignada al empleo militar.

Art. 553. La suspensión de mando como pena principal, es aplicable únicamente a jefes y oficiales, y no podrá durar más de seis meses.

Art. 554. Cuando la suspensión de mando se imponga como pena principal y por mayor tiempo de un mes, el penado percibirá tan sólo



dos terceras partes del sueldo correspondiente al empleo, y no tendrá derecho a reclamar después la otra parte. A este efecto la suspensión de mando se hará constar en las listas de revistas.

Art. 555. La reducción de sueldo prescripta por el artículo anterior, no se producirá cuando la suspensión se impone por menos de un mes o cuando se sufre como pena accesoria.

Art. 556. Las penas de destitución y suspensión de clases, consisten en privar perpetua o temporalmente a los sargentos, cabos, condestables, contramaestres, etc., de sus funciones y de sus insignias.

Art. 557. El recargo de servicio consiste en prolongar la permanencia en las filas por mayor tiempo del que señala la ley de reclutamiento o del que establece el compromiso de enganche.

Esta pena no podrá exceder de tres años y no podrá imponerse sin que medie, en cada caso, una resolución del Presidente de la República. En tiempo de guerra podrán dictar esa resolución los comandantes en jefe de ejército o escuadras de operaciones, gobernadores de plazas fuertes, etc.

Art. 558. La pena de calabozo consiste en recluir al autor de la falta.

Esta pena no podrá exceder de tres meses debiendo sacarse al penado diariamente para ejercicios y fajas. Las clases no saldrán más que para ejercicios.

CAPITULO III

De la aplicación de las penas

Art. 559. Ningún tribunal o autoridad militar podrá aumentar ni disminuir las penas, traspasando el máximo o el mínimo de ellas; ni agravarlas ni atenuarlas substituyéndoles alguna circunstancia, sino en los términos y casos en que las leyes lo autoricen.

Art. 560. Ninguna infracción puede castigarse con penas no establecidas en la ley antes de ser cometida.

Si por leyes penales posteriores a la infracción, ésta perdiese ese carácter, cesan de pleno derecho el juicio o la condena.

Si la ley penal del tiempo de la infracción y las posteriores son diversas, se aplica la que contenga disposiciones más favorables a la conservación de la disciplina.

Si la pena se ha impuesto ya por sentencia ejecutoria y una ley posterior castigue la infracción con pena más benigna en clase o duración, la pena de la sentencia será substituida por ésta.

Art. 561. Ninguna pena podrá ser aplicada por simple analogía, a no ser en los casos en que la ley así lo haya establecido determinando las disposiciones que servirán para ello.

Art. 562. Cuando el autor de un delito militar sea menor de quince años, se disminuirá en dos grados la pena del delito, si es divisible; y si no lo fuere, se aplicará la inferior inmediata.



Art. 563. Para la imposición de una pena accesoria, basta que esté declarada en la ley, sin que sea necesario la declaración de la sentencia.

Art. 564. Cuando la pena sea divisible se aplicará al delito el término medio de la señalada en la ley, y los tribunales la recorrerán en toda su extensión hasta llegar al máximo o al mínimo, según que haya circunstancias agravantes o atenuantes.

Exceptúanse de esta regla los delitos a que se refiere el artículo 511, a los cuales corresponde como pena el mínimo de la señalada en la ley, la que podrá aumentarse hasta el máximo si concurren circunstancias agravantes.

Art. 565. Son grados de pena:

En la de presidio, tres años. En la de prisión mayor o confinamiento, un año. En la prisión menor, cuatro meses.

Art. 566. Cuando se hubieran agotado los grados de una pena se pasará a la pena inmediata.

Art. 567. Cuando este Código impone penas conjuntas, se aplicarán todas ellas con sujeción a la regla del artículo 564, si fueren divisibles.

Art. 568. Cuando este Código señala al delito penas alternativas, el tribunal aplicará la que, a su juicio, sea más apropiada al caso; y si fueran divisibles, lo hará de acuerdo con la misma regla a que se refiere el artículo anterior.

Art. 569. Si las penas alternativas fuesen de diversa categoría, es decir, pena de delito y pena disciplinaria, esta última no podrá aplicarse sino por sentencia de Consejo de Guerra.

Art. 570. Para la debida aplicación de las penas a los delitos militares, los tribunales tendrán siempre en cuenta las circunstancias enumeradas en el Capítulo III, Título I de este tratado.

Art. 571. Cuando concurren, a la vez, circunstancias atenuantes y agravantes, ellas serán compensadas a los efectos de la pena, aumentando o rebajando ésta, según que haya excedente de agravantes o de atenuantes.

Art. 572. Cuando corresponda la aplicación de la pena de muerte y concurren únicamente circunstancias atenuantes, se aplicará la pena inferior inmediata; y cuando la que corresponda sea la de presidio indeterminado, se aplicará presidio por doce o quince años.

Art. 573. Ninguna presunción, por vehemente que sea, dará lugar a la imposición de la pena de muerte.

Art. 574. Al culpable de dos o más infracciones sujetas a la jurisdicción militar se le aplicará la pena de la infracción más grave, considerándose las otras como causa de agravación.

Art. 575. Cuando por razón del carácter del procesado no se pueda aplicar pena militar, será ésta reemplazada de la manera siguiente:

1° La degradación militar impuesta como pena principal, por la privación de los derechos políticos. 2° La destitución y el confinamiento,



por prisión mayor o menor, graduados dentro del máximo y mínimo que a estas penas corresponde.

Art. 576. Cuando los consejos de guerra impongan a los militares penas del Código Penal Ordinario no establecidas en este Código, la sustitución se hará en la forma siguiente: Penitenciaria por prisión mayor, arresto ordinario por prisión menor, y multa por arresto militar.

Art. 577. Las penas temporales empiezan a correr:

1° Las que van acompañadas de degradación, desde que ésta se verifica. 2° Las demás, desde que la sentencia condenatoria haya sido pronunciada, si el reo se encuentra preventivamente preso, y desde que sea reducido a prisión cuando se encuentre fuera de ella.

Art. 578. En las penas privativas de la libertad, los tribunales militares harán abono de la prisión preventiva, con arreglo a la siguiente escala:

Cuatro días de prisión preventiva equivalen a un día de presidio; dos, a uno de prisión mayor; uno, a otro de prisión menor o de confinamiento, y uno de prisión preventiva, a dos de arresto.

Art. 579. No gozan del beneficio de abono:

1° Los reincidentes. 2° Los que, por cualquier otro delito, hubieran sido condenados a la misma pena u otra superior. 3° Los que se hubieren fugado de la prisión durante el curso de la causa. 4° Los condenados por robo, hurto, estafa o malversación.

Art. 580. Toda condenación pronunciada contra un jefe, oficial o clase, por razón de robo, hurto, estafa o malversación, entraña la destitución.

Art. 581. La aplicación de penas a los asimilados, se hará con arreglo al empleo a que se refiere la asimilación.

Art. 582. Cuando al señalar el castigo de un delito, este Código designe genéricamente una pena, ella podrá aplicarse en sus diversas formas o modalidades, según las circunstancias del caso, apreciadas por el Tribunal.

CAPÍTULO IV

Extinción de la acción penal y de las penas

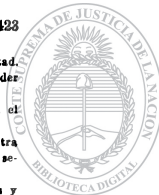
Art. 583. La acción penal se extingue:

1° Por muerte del acusado. 2° Por amnistía e indulto. 3° Por prescripción. 4° Por sentencia irrevocable.

Art. 584. Las excepciones comprendidas en los números 2 y 4 del artículo anterior, pueden alegarse en cualquier estado del proceso, cuando se producen después de pasado el acto a que se refiere el artículo 341.

Art. 585. La muerte del acusado extingue la acción en cuanto a la pena corporal.

Art. 586. La amnistía extingue la acción con todos sus efectos y aprovecha a todos los responsables del delito aun cuando ya estén



condenados. Si se hallaron presos se les pondrá desde luego en libertad.

Art. 587. El indulto es personal y extingue el derecho de proceder por acción penal contra la persona a cuyo favor se decreta.

Art. 588. Por la prescripción de la acción se extingue también el derecho de proceder contra los delinquentes.

Art. 589. La prescripción es personal: corre a favor y en contra de toda persona; para ello basta el simple transcurso del tiempo señalado.

Art. 590. Los términos de la prescripción han de ser continuos y se contarán en ellos el día que comienzan y aquel en que concluyen.

Art. 591. La acción penal se prescribe:

1° Por el transcurso de veinte años, si la infracción se castiga con la pena de muerte. 2° Por el transcurso de doce años, si la pena correspondiente fuera la de presidio por tiempo indeterminado. 3° Por el transcurso de ocho años si la pena correspondiente fuera la de presidio por tiempo limitado. 4° Por el transcurso de seis años, si se castiga con pena de prisión mayor. 5° Por el transcurso de cuatro años, en todos los demás casos.

Art. 592. Los plazos determinados en el artículo anterior empiezan a correr:

1° Para las infracciones consumadas, desde el día en que éstas fueron cometidas. 2° Para la tentativa o delito frustrado, desde el día en que se cometió el último acto de ejecución, lo mismo que para la proposición o la conspiración, cuando éstas sean punibles. 3° Para las infracciones continuas, desde el día en que se cometió el último acto criminal.

Art. 593. La comisión de un nuevo delito interrumpe también la prescripción respecto del autor del delito.

Art. 594. Pronunciada una sentencia irrevocable, sea condenatoria o absolutoria, no se podrá intentar de nuevo la acción criminal por el mismo delito, contra la misma persona.

Art. 595. La sentencia pronunciada en un proceso seguido contra alguno de los autores de un delito, no perjudicará a los demás responsables no juzgados cuando sea condenatoria, pero les aprovechará la absolutoria si tuvieran a su favor las mismas excepciones que sirvieron de fundamento a la absolución.

Art. 596. La pena se extingue por los mismos medios determinados en el artículo 583 y además:

1° Por conmutación. 2° Por cumplimiento de la condena.

Art. 597. La muerte del condenado extingue la pena corporal.

Art. 598. La amnistía extingue la pena y todos sus efectos en los mismos casos en que extingue la acción penal.

Art. 599. El indulto remite la pena a que el reo hubiere sido condenado y extingue sus efectos, con excepción de la indemnización debida a particulares.

Art. 600. La conmutación importa la remisión de la pena estable-



cida en la sentencia y su reemplazo por la designada en la resolución que la acordare.

Art. 601. La prescripción de una pena extingue el derecho de ejecutarla y de conmutarla en otra.

Art. 602. Para la prescripción de las penas se observarán las reglas siguientes:

1° La pena de muerte se prescribe por el transcurso de treinta años y se conmuta de pleno derecho en la de presidio indeterminado, por el transcurso de cinco años. 2° La pena de presidio por tiempo indeterminado, se prescribe a los quince años. 3° La pena de presidio por tiempo determinado, se prescribe a los doce años. 4° La prisión mayor se prescribe a los ocho años. 5° Las demás penas corporales, por un tiempo igual al de la condena.

Art. 603. Los términos para la prescripción de las penas empiezan a correr desde el día en que la sentencia queda ejecutoriada, o si la sentencia ha principiado a cumplirse, desde el día que la ejecución se interrumpe.

Art. 604. La prescripción de las penas se interrumpe:

1° Por los medios establecidos en el artículo 593 para la acción penal. 2° Por la presentación voluntaria del reo o por su aprehensión.

Art. 605. Son aplicables a la prescripción de la pena las disposiciones referentes a la prescripción de la acción penal en cuanto no se opongan a las de los artículos anteriores.

LIBRO SEGUNDO

INFRACCIONES MILITARES EN PARTICULAR Y SUS PENAS

SECCION PRIMERA

INFRACCIONES COMUNES AL EJERCITO Y ARMADA

TITULO PRIMERO

DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA DISCIPLINA

CAPITULO I

Motín y sublevación

Art. 606. El motín es la insubordinación ejecutada conjuntamente por cuatro o más militares en armas.

Art. 607. Se consideran, particularmente, autores de este delito, a los militares que en el número expresado en el artículo anterior, ejecuten los actos siguientes:

1° Reclamar o peticionar tumultuosamente al superior. 2° Recla-



mar o peticionar colectivamente en voz de cuerpo y sin tumulto, siempre que no se ajuste, estrictamente, a las formas prescriptas por las leyes o reglamentos militares. 3º Tomar las armas sin autorización y proceder sin orden de sus jefes. 4º Entregarse a cualquier violencia haciendo uso de las armas y desoyendo la voz de sus jefes cuando los manden volver al orden.

Art. 608. Los promotores del motín, los cabecillas y los jefes u oficiales de más graduación o antigüedad que estos que participen del delito, serán condenados a muerte en los casos siguientes:

1º Cuando el motín ocasionare derramamiento de sangre. 2º Cuando tenga lugar frente al enemigo. 3º Cuando hiciere peligrar la existencia de una fuerza militar o comprometiere gravemente una operación de guerra.

En los casos de los incisos precedentes, los demás partícipes del delito serán condenados a presidio indeterminado.

Art. 609. En todos los demás casos, no comprendidos en el artículo anterior, los promotores, cabecillas y jefes u oficiales de mayor graduación o antigüedad que éstos, serán condenados a presidio por cinco a quince años. A los demás partícipes del motín, se les impondrá prisión mayor o confinamiento.

Art. 610. El militar que sin objeto lícito conocido y sin la autorización competente, saque fuerza armada de una plaza, destacamento, cuartel o buque será castigado con apercibimiento y arresto, siempre que el hecho no constituya delito.

Art. 611. Será castigado como promotor de motín, el militar que, estando la tropa reunida, levante la voz en sentido subversivo o excite de cualquier modo a la comisión de delito.

Quando no se pudiera descubrir el autor o autores de la voz, será quintada la unidad o fracción de donde aquélla hubiere partido.

Los quintados serán castigados con apercibimiento, arresto o prisión menor o mayor según las circunstancias y la gravedad del caso.

Quedarán exentos de pena si se denuncia al verdadero culpable.

Art. 612. Será castigado con las mismas penas del artículo anterior el militar que, estando formado el cuadro en que debe ejecutarse un reo, levante la voz pidiendo gracia. Esta prescripción, en su caso, será leída o dicha en alta voz por el jefe que manda la ejecución.

Art. 613. Será castigado con presidio o con prisión mayor, el jefe u oficial que presencie un motín, y no emplee todos los medios a su alcance para contenerlo o dominarlo. A las clases, en el mismo caso, se les aplicará pena de confinamiento por uno a tres años.

Art. 614. Los particulares o personas sin carácter ni asimilación militar, que inciten o promuevan el motín, serán penados con prisión por el Juez o Tribunal competente.

En los casos del artículo 608, se les impondrá presidio por tres a ocho años.

Art. 615. La conspiración para el motín, se castigará con prisión



mayor, presidio o destitución en los jefes y oficiales y con confinamiento por cuatro meses a dos años o con recargo de servicio hasta dos años, en las clases e individuos de tropa.

Art. 616. Los militares que con fines subversivos sublevaran la tropa a sus órdenes o sedujeren cualquier otra fuerza militar organizada, serán castigados con la pena de presidio por tiempo indeterminado.

En estos casos los subordinados que hubiesen procedido por obediencia a órdenes de su jefe, quedarán exentos de pena, a menos que se pruebe que tuvieron conocimiento de que cometían una sublevación.

CAPÍTULO II

Rebelión

Art. 617. Cometén rebelión militar los individuos del Ejército y Armada que promuevan, ayuden o sostengan cualquier movimiento armado para alterar el orden constitucional o para impedir o dificultar el ejercicio del gobierno en cualquiera de sus poderes.

Art. 618. Los culpables de rebelión militar producida en presencia del enemigo extranjero serán castigados:

1º Con pena de muerte y degradación, los iniciadores, directores, o jefes, con mando superior en la rebelión. 2º Con presidio indeterminado los demás jefes y oficiales. 3º Con presidio hasta doce años o con prisión o con confinamiento máximo, las clases e individuos de tropa.

Art. 619. Si la rebelión se produce en presencia de enemigo rebelde, las penas serán:

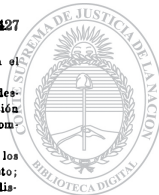
Presidio indeterminado, para los comprendidos en el inciso 1º del artículo anterior; ocho a quince años de presidio para los comprendidos en el inciso 2º del mismo; prisión o confinamiento máximo para los comprendidos en el inciso 3º.

Art. 620. En todos los demás casos de rebelión militar la pena será: ocho a quince años de presidio para los comprendidos en el inciso 1º del artículo 618; tres a ocho años de presidio para los comprendidos en el inciso 2º del mismo; tres a cinco años de confinamiento para los comprendidos en el inciso 3º.

Art. 621. Si los rebeldes desisten voluntariamente antes de producir hostilidades o deponen las armas a la primera intimación de la autoridad, serán castigados en la forma siguiente:

En los casos del artículo 618, con prisión mayor de tres a seis años y destitución, los comprendidos en el inciso 1º; con prisión mayor de dos a tres años y destitución los comprendidos en el inciso 3º.

En los casos del artículo 619, las penas serán: prisión mayor de dos a tres años y destitución para los comprendidos en el inciso 1º; prisión menor y destitución para los comprendidos en el inciso 2º;



recargo de servicio en su grado máximo para los comprendidos en el inciso 3°.

En los casos del artículo 620, se castigará: con prisión menor y destitución a los comprendidos en el inciso 1°; con arresto y destitución a los comprendidos en el inciso 2°; con recargo de servicio a los comprendidos en el inciso 3°.

Art. 622. La conspiración y la proposición se castigarán: en los jefes y oficiales con destitución o suspensión del empleo y arresto; y en las clases de tropa, con recargo en el servicio u otra pena disciplinaria.

Art. 623. Si durante la rebelión o para llegar a ella, se cometiere cualquiera otra infracción de carácter general o militar, se aplicará al rebelde la pena del hecho más grave, con las agravaciones a que hubiere lugar.

Art. 624. El jefe u oficial que presenciare la rebelión de una fuerza militar y no pusiere todos los medios a su alcance para evitarlo, será castigado con arresto y destitución.

Art. 625. En los casos del artículo anterior, las clases que tuvieron el mando de un destacamento, retén, avanzada, etc., que se rebela, serán castigados con penas disciplinarias.

CAPITULO III

Desobediencia

Art. 626. Incorre en desobediencia el militar que deja de cumplir, sin causa justificada, una orden del servicio.

Art. 627. Ninguna reclamación dispensa de la obediencia ni suspende el cumplimiento de una orden del servicio militar.

Art. 628. Si la desobediencia hubiese causado daño o perturbación en el servicio, se castigará con arresto y suspensión de empleo, o con destitución o con prisión menor; y si con los mismos caracteres se produjera frente al enemigo, la pena será de prisión mayor o de presidio por tres a seis años, según fuere la importancia del daño causado.

Art. 629. Se impondrá la pena de presidio indeterminado o muerte, cuando la desobediencia haya sido causa:

1° De que se malogre una operación de guerra. 2° De la pérdida o derrota de fuerzas del Ejército o Armada; 3° De la entrega de una plaza fuerte; 4° De la aprehensión o de la destrucción, en tiempo de guerra, de un convoy de armas, municiones, víveres, heridos, etcétera.

Art. 630. Se aplicarán las mismas penas del artículo anterior, siempre que la desobediencia haya favorecido en cualquier forma, las operaciones o los planes del enemigo.

Art. 631. Será considerado culpable de desobediencia y castigado con penas disciplinarias, el militar que, requerido por un agente de autoridad para que contribuya a la detención de una persona no preste el concurso pedido.



Art. 632. Al militar que quebrante su arresto se le impondrá prisión menor.

Art. 633. El militar que contrajere matrimonio contrariando las disposiciones que el P. E. dictare al respecto, será castigado con destitución, sin perjuicio de las responsabilidades que en aquéllas se le impongán.

Art. 634. Incurrirá en prisión, destitución o suspensión de empleo según la gravedad del caso y sin perjuicio de las demás responsabilidades legales, el militar que acepte cargos, pensiones u honores de gobiernos extranjeros, sin permiso de la autoridad competente, como asimismo el que usare en su uniforme militar condecoraciones extranjeras que no sean aquellas que como premio de servicios o campañas han sido autorizadas por el Congreso.

CAPÍTULO IV

Insubordinación

Art. 635. Comete insubordinación:

1° El militar que viola manifiestamente o hace resistencia ostensible al cumplimiento de una orden del servicio. 2° El militar que falte, en cualquier forma, a los respetos debidos a la autoridad, o a la dignidad personal del superior.

Art. 636. En los casos del inciso 1° del artículo anterior la insubordinación será castigada:

1° Con pena de muerte, cuando se produce frente al enemigo. 2° Con presidio por cuatro a diez años, cuando se produce en formación. 3° Con presidio por tres a seis años cuando se produce en el momento de desempeñar cualquier otro acto del servicio. 4° Con prisión o con penas disciplinarias, en todos los demás casos.

Art. 637. En los casos del inciso 2° del artículo 635, la insubordinación será castigada con pena de muerte:

1° Cuando al frente del enemigo y en presencia de la tropa, se ataca, insulta, ofende de palabra o de obra al superior. 2° Cuando sin estar frente al enemigo, pero en presencia de tropa formada con armas, se le ataca o se le ofende de obra.

Art. 638. Cuando los casos de insubordinación a que se refiere el artículo anterior, se produzcan en cualquiera de los otros actos del servicio, la pena será:

1° De muerte, siempre que haya inferido al superior herida o lesión grave. 2° De presidio indeterminado, si se le ofende de obra o por vías de hecho sin llegar a tocarlo o sin producir lesiones o siendo éstas leves. 3° De presidio de tres a seis años, si se le insulta u ofende de palabra. 4° Con prisión si se le falta al respeto con gestos, modales o actitudes inconvenientes.

Si la insubordinación se produce fuera del servicio, se aplicarán: tres a ocho años de prisión en el primer inciso a menos que las lesiones



hubieran producido la muerte del superior, en cuyo caso se castigará con la de presidio o muerte; prisión mayor en el inciso 2°; prisión menor en el inciso 3°, y penas disciplinarias en el 4°.

Art. 639. Toda falta de respeto al superior se presume cometida en acto de servicio, salvo la prueba en contrario.

Art. 640. Si la insubordinación se comete contra un asimilado con ocasión de los servicios profesionales que éste preste, se impondrá al culpable pena disciplinaria, a menos que resulte muerte o lesiones, en cuyo caso se aplicará la pena correspondiente.

Art. 641. Los particulares o personas sin carácter ni asimilación militar que en buque, cuartel o establecimiento militar, pasaren a vías de hecho contra el oficial de servicio, serán castigados por el Juez o Tribunal competente con prisión por uno o dos años. Si la amenaza u ofensa fuere de palabra, será castigado con cuatro a ocho meses de la misma pena.

En iguales penas incurrirá el particular que ofenda de palabra o de obra a un militar en presencia de la tropa de su mando.

CAPITULO V

Insultos a centinelas, salvaguardias o fuerza armada

Art. 642. El militar que cometa, con armas, cualquier violencia contra centinelas o salvaguardias, será condenado a presidio por tres a ocho años.

Si la violencia se hiciera sin armas, será condenado a prisión mayor.

Si estos mismos hechos se produjeran en tiempo de guerra, la pena será de muerte en el primer caso, y de presidio por doce a quince años en el segundo.

Art. 643. Incurrir en las mismas penas del artículo anterior, el militar que resiste con actos de violencia a una patrulla que procede en cumplimiento de una consigna.

Art. 644. El particular o persona sin carácter militar que ejecute los hechos a que se refieren los dos artículos anteriores, será castigado por el Juez o Tribunal competente con prisión en el primer caso, y con arresto en el segundo.

Art. 645. El militar que amenace u ofenda de palabra a un centinela o salvaguardia, será condenado a prisión menor, si es jefe u oficial, y a confinamiento por cuatro meses a dos años, si es clase o individuo de tropa.

Art. 646. Se considera como centinelas a los efectos de este capítulo, los encargados del servicio telegráfico militar y los imaginarias dentro del buque, cuartel o establecimiento militar. Igualmente se considera como fuerza armada, al militar encargado de la conducción de órdenes o pliegos.

Art. 647. El militar que, públicamente, de palabra o por escrito, vertiese conceptos injuriosos para el Ejército o Armada, para cual-



quiera de sus institutos, armas, cuerpos o clase, será penado con arresto y suspensión del empleo o con destitución, si es jefe u oficial y con recargo de servicio o con confinamiento hasta dos años, si es clase o individuo de tropa.

CAPITULO VI

Deshonor e indecoro militar

Art. 648. El militar que en combate o en presencia del enemigo vuelva la espalda y huya, o haga tales demostraciones de pánico que ponga las tropas en peligro inminente de contagio, podrá ser muerto en el mismo instante, para castigo de su cobardía y ejemplo de los demás. Si escapara a castigo en ese momento y fuera capturado después, se le aplicará la pena de muerte con degradación.

Art. 649. El que habiendo incurrido en los actos de cobardía a que se refiere el artículo anterior, vuelva a la acción y se conduzca en ella de una manera digna, será castigado solamente con pena disciplinaria; y quedará exento de toda pena si diese pruebas de extraordinario valor, realizando algún acto heroico.

Art. 650. Será condenado a muerte y degradado el militar que, teniendo los medios y la posibilidad de resistir, entregue por capitulación o rinda al enemigo extranjero, sin resistencia alguna la tropa, buque, plaza o puesto cuyo mando tuviere o cuya defensa se le hubiere confiado. Si el enemigo fuere rebelde o sedicioso, la pena será de presidio por cinco a quince años.

Art. 651. Será condenado a muerte el militar que, en presencia del enemigo extranjero, se retira o cede el puesto cuya defensa o posesión se le hubiere confiado sin ser obligado a ello por fuerza superior. Si el enemigo fuere rebelde o sedicioso, la pena será de presidio por tres a ocho años.

En las mismas penas incurrirá el que por cobardía se deje arrebatar por el enemigo un convoy de heridos, armas, o municiones.

Art. 652. Será condenado a muerte, o a presidio indeterminado, el militar encargado de una plaza, puesto o tropa que, contando con medios de defensa, se adhiere a la capitulación estipulada por otro militar con el enemigo extranjero, aunque dependa de aquél y haya recibido sus órdenes al respecto. Si la capitulación se hubiere estipulado con enemigo rebelde o sedicioso, la pena será de presidio por tres a cinco años o prisión mayor.

Art. 653. Será condenado a presidio por tres a cinco años, el militar que, combatiendo con un enemigo extranjero, se rinda o capitule sin haber agotado las municiones o perdido los dos tercios del efectivo a sus órdenes. Si el enemigo fuere rebelde o sedicioso, la pena será de dos a cuatro años de prisión mayor.

Art. 654. Será condenado a las mismas penas del artículo anterior, el militar que en una capitulación asegure para sí o para los



jefes u oficiales, garantías o ventajas que no ha asegurado para la tropa.

Art. 655. Incurrirán en las mismas responsabilidades penales, los que haciendo presión sobre sus jefes hubiesen provocado las infracciones a que se refieren los cinco artículos precedentes y también los que hubieren contribuido a ellas con su opinión o con su consejo.

Art. 656. Quedan exentos de toda responsabilidad penal los militares que capitulen o rindan las fuerzas a sus órdenes, obligados por una rebelión o por un motín que no hubieren podido dominar, a pesar de haber empleado todos los medios y recursos a su alcance.

Art. 657. El militar que se substraiga al servicio con enfermedades o males supuestos o que se valga para ello de cualquier otro medio fraudulento, será castigado con arresto o con suspensión de empleo o con destitución.

Art. 658. El militar que cometa cualquiera de los actos deshonestos que afrontan a un hombre y rebajan su dignidad, será degradado, si fuese jefe u oficial y condenado a tres años de confinamiento, si fuese de tropa.

Art. 659. Será castigado con destitución o con confinamiento hasta dos años o con prisión menor, siempre que el hecho no constituya delito más grave:

1° El jefe u oficial que acepta su libertad bajo palabra de no hacer armas contra el enemigo que lo retiene prisionero. 2° El militar que mantenga correspondencia con enemigos sobre asuntos particulares o familiares.

Exceptúase de esta disposición al que tenga necesariamente que mantenerla, por razón de su cargo militar por circunstancia de guerra.

Art. 660. Se castigará con prisión mayor o con prisión menor al militar que revele el santo y seña, una orden reservada de servicio o cualquier secreto de que fuere depositario por razón de su empleo. Si del hecho resultare daño o perjuicio al servicio o si se produjera en tiempo de guerra, la pena será de presidio por cuatro a ocho años, y si la revelación aprovechara al enemigo, se impondrá la pena de la traición.

Art. 661. El militar que se embriagase o se presentase embriagado en el servicio de guardia o en cualquier otro servicio, con armas, que no sea el de centinela, será castigado con una pena disciplinaria. Si el embriagado fuese jefe del puesto o comandante de la guardia, la pena será: apercibimiento y suspensión de empleo por tres meses, si es oficial; arresto y suspensión por dos meses, si es clase. En caso de reincidencia serán destituidos.

Art. 662. Los jefes y oficiales que contraigan habitualmente deudas, sin necesidad o por motivos viciosos y no las paguen, y los que usen o se valgan de ardides, artificios, cautelas o combinaciones capciosas para pedir prestado dinero u otras cosas, serán apercibidos por sus superiores, y en caso de reincidencia, suspendidos o destituidos.



Se considera circunstancia agravante en esta clase de infracciones, el hecho de contraer deudas con las clases o individuos de tropa.

Art. 663. Será destituido todo jefe u oficial:

1° Que ofendiere a otro militar de su misma jerarquía, en forma que imprima afrenta o menosprecio. 2° Que en el transcurso de un año, haya sufrido tres condenas impuestas por sentencia de Consejo de Guerra. 3° Que falte a la palabra de honor comprometida en acto público u oficial. 4° Que por temor de un peligro personal, no tome medidas represivas contra los subalternos culpables de actos que perjudiquen el servicio o menoscaben la disciplina.

TITULO II

DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN AL SERVICIO

CAPITULO I

Abandono de servicio

Art. 664. El militar que no se encuentre en su puesto para el desempeño de cualquiera de los actos del servicio y que no justifique debidamente su ausencia, será castigado con pena disciplinaria. Si el hecho tuviere lugar en tiempo de guerra, se castigará con prisión.

Art. 665. Incurrirá en las mismas penas del artículo anterior, el jefe u oficial que habiendo solicitado su baja abandone el servicio antes de haber sido ella concedida y comunicada.

Art. 666. Se considera cometido el abandono de servicio, cuando el que se halle prestándolo se separe de su puesto a una distancia que lo imposibilite para ejercer la debida vigilancia o cumplir las órdenes referentes al servicio que debe prestar.

Art. 667. Si el abandono de servicio tiene lugar en combate, frente al enemigo o en circunstancias tales que ponga en peligro la seguridad del Ejército o Armada, la pena será de prisión mayor, de presidio o de muerte, salvo los casos previstos en el Reglamento de disciplina.

Art. 668. El jefe u oficial que abandone la escolta de presos, será penado con prisión mayor hasta cuatro años. Si abandonare escolta de armas o municiones, la pena será prisión mayor hasta cinco años.

CAPITULO II

Negligencia

Art. 669. Será castigado con presidio por cuatro a ocho años, el militar que en guerra nacional pierda la fuerza, plaza, puesto o buque a sus órdenes por no tomar las medidas preventivas o no solicitar con tiempo los recursos necesarios para la defensa, cuando le conste el peligro de ser atacado. Si el hecho se produjera combatiendo con



enemigo rebelde, la pena será de presidio por tres a seis años. Quedará exento de pena si prueba que hizo en tiempo los pedidos y que no fueron provistos.

Art. 670. Será castigado con prisión mayor por dos a cuatro años, el militar que por negligencia u omisión en el cumplimiento de sus deberes causare perjuicios o trastornos graves en las operaciones de guerra.

Art. 671. El militar a quien se encomendare la formación de planos o proyectos de construcción de buques u otras obras y consignase en ellos, por negligencia, errores que independientemente del perjuicio en la obra misma lleguen a producirlo de otro orden para el Estado, sufrirá la pena de suspensión de empleo o la destitución, según la gravedad del hecho.

Art. 672. Si el militar encargado de la escolta de un buque o convoy se hallase separado de aquél o de todo o parte de éste, por efecto de su negligencia, será castigado, en tiempo de guerra, con arresto y destitución, y en tiempo de paz, con cuatro a ocho años de prisión.

CAPÍTULO III

Abandono de destino o residencia

Art. 673. Cometén abandono los jefes u oficiales:

1° Cuando faltan tres días continuos del lugar de su destino o residencia sin autorización superior. 2° Cuando no se presentan al superior de quien dependen, cuarenta y ocho horas después de vencida su licencia temporal. 3° Cuando no llegan al punto de su destino; regresan después de emprendida una marcha o se desvían del derrotero que en su pasaporte se les señaló como indispensable, haciéndolo sin orden correspondiente y sin motivo justificado. 4° Cuando estando en marcha las fuerzas a que pertenecen, se quedan en las poblaciones sin el correspondiente permiso o con pretexto de enfermedades o malos supuestos o por otros motivos que no sean legítimos. 5° Cuando hubieren recibido orden de marcha y no la emprendiesen, después de cuarenta y ocho horas, sin impedimento legal y sin permiso de la autoridad militar que corresponde. 6° Cuando recobran su libertad como prisioneros de guerra y no se presentan, sin causa justificada, a cualquier autoridad militar de la República en el plazo de cinco días.

Si se encontraren en territorio extranjero, los cinco días se cuentan desde que tuvieron oportunidad o el medio de presentarse a la autoridad a que se refiere el párrafo anterior.

Art. 674. El plazo señalado en el inciso 6° del artículo anterior, podrá ser reducido en tiempo de guerra por resolución del Presidente de la República o por los bandos de los generales en jefe.

Art. 675. La pena de abandono de destino, cuando el caso no está comprendido en los hechos a que se refiere el Capítulo I de este título,



será: en tiempo de paz, apercibimiento o arresto hasta dos meses; en tiempo de guerra arresto, suspensión o prisión o destitución, según las circunstancias de cada caso. Cuando el abandono de destino exceda de quince días, la pena será en todo tiempo de destitución.

CAPÍTULO IV

Infraacciones de los deberes del centinela, violación de consigna

Art. 676. El militar que estando de facción o centinela abandona su puesto sin haber cumplido su consigna, será castigado:

1° Con la pena de muerte, si el hecho aconteció al frente del enemigo. 2° Con cuatro a seis años de presidio, si el hecho tuvo lugar en estado de guerra, no estando frente al enemigo. 3° Con prisión menor o confinamiento hasta dos años, en todos los demás casos.

Art. 677. El militar que estando de facción o centinela se hallare dormido o ebrio, sufrirá las penas siguientes:

1° Presidio desde ocho años a tiempo indeterminado o muerte, si se hallare al frente del enemigo. 2° Prisión menor o confinamiento hasta dos años, si el hecho ocurriere en estado de guerra no estando frente al enemigo. 3° Calabozo por quince días y recargo de servicio hasta un año, en todos los demás casos.

Corresponderá siempre la pena mayor al caso de ebriedad.

Art. 678. El centinela que no cumpliera su consigna o se dejare relevar por otro que no sea su cabo o quien autorizadamente haga sus veces, será castigado:

1° Con la pena de muerte, cuando el delito tenga lugar frente al enemigo, si de sus resultas se siguiera algún daño de consideración al servicio. 2° Con la de presidio de ocho a quince años, si en las circunstancias del número anterior no se siguiese daño de consideración al servicio. 3° Con la de cuatro a ocho años de presidio, cometéndose el delito en campaña, en buques, en operaciones o en el lugar declarado en estado de guerra, no estando al frente del enemigo. 4° Con la pena de prisión menor o confinamiento de cuatro meses a tres años, en los demás casos.

Art. 679. El centinela que viere saltar o escalar el buque, embarcación, muralla, pared, foso o estacada, tanto para salir como para entrar a la plaza, fuerte, recinto cercado o buque, o viese que se aproximan a su puesto los enemigos, que no diera pronto aviso o no disparase su arma, sufrirá la pena de muerte, si el hecho tuviera lugar frente al enemigo; de presidio por cuatro a doce años si tuviera lugar en estado de guerra, y de confinamiento por uno a cuatro años, en todos los demás casos.

Art. 680. El militar que no estando comprendido en el caso del artículo 678, de cualquier manera quebrante o viole una consigna en presencia del enemigo, será castigado con la pena de presidio por



cuatro a ocho años. En el caso de que la consigna tuviera por objeto la seguridad del Ejército o Armada, o de una parte de ellos, de la plaza sitiada, de puesto militar, buque, parque de artillería, depósito de víveres, forrajes o de otros lugares u objetos afectados al servicio, se aplicará la pena de muerte, siempre que con la violación de consigna se hubiere realmente comprometido esa seguridad o se hubiese impedido una operación militar.

En el caso en que la consigna hubiere sido quebrantada o violada en tiempo de guerra, pero fuera de la presencia del enemigo, el delito será castigado con prisión o con confinamiento por dos a cinco años.

En todos los demás casos, el quebrantamiento o violación de la consigna será penado con calabozo y recargo de servicio hasta dos años.

CAPITULO V

Infracciones diversas: en el mando, en comisiones o en el servicio

Art. 681. El militar con mando que prolongue las hostilidades después de haber recibido la noticia oficial de haberse hecho la paz, tregua o armisticio, será condenado a presidio por diez a quince años.

Art. 682. El militar, que encontrándose en las condiciones del artículo anterior, hubiera verificado, sin necesidad, actos hostiles no ordenados ni autorizados por el Gobierno, exponiendo a la Nación a una declaración de guerra, será castigado con presidio por ocho a doce años.

La pena será de presidio indeterminado, si las referidas hostilidades han consistido en un ataque a mano armada contra buque, tropas o súbditos de una nación aliada o neutral, o si por efecto de aquellos actos se ha declarado la guerra, o se ha producido incendio, devastación o muerte de alguna persona.

Art. 683. El militar que, por haber practicado sin necesidad algunos actos no autorizados por el Gobierno, diera lugar con ellos a que cualquiera persona que se halle bajo la protección de las leyes del Estado sufra represalias, será castigado con prisión mayor, y si hubiere existido provocación, la pena será disminuida de uno a tres grados, atentas las circunstancias.

Si los actos arbitrarios de que se trata no hubieran producido represalias, la pena será de cuatro meses a un año de prisión o confinamiento por el mismo tiempo.

Art. 684. El militar con mando de fuerzas que lleve al enemigo un ataque no reclamado por las necesidades de la guerra o por la ejecución de algún plan de operaciones, será castigado con prisión menor.

Si el ataque hubiere dado mal resultado o hubiere producido pérdidas de consideración en el personal o en el armamento, la pena será de prisión mayor.

Art. 685. El comandante en jefe de un ejército o escuadra, o el jefe superior con mando independiente, que pierda una acción de



guerra por impericia o negligencia, será destituido, en el primer caso, y condenado a prisión mayor en el segundo.

Art. 686. Se impondrá prisión menor o destitución, o prisión mayor, a todo militar con mando de fuerzas:

1° Cuando pudiendo atacar y combatir un enemigo inferior o destruir un convoy del mismo, no lo hiciere sin estar impedido por instrucciones especiales o por motivos graves. 2° Cuando, sin ser obligado por fuerzas superiores o por razones legítimas, ha suspendido la persecución de un enemigo derrotado o desorganizado.

Art. 687. Será condenado a presidio, el militar que comprenda en capitulación por él estipulada, fuerzas o puestos que, aunque dependan de su mando, no sean de las tropas o lugares comprometidos por la operación o hecho de armas que ocasiona la capitulación.

Art. 688. Los comandantes de buques, cuerpos o destacamentos que provocaren, incitaren o dieran lugar a que sus inferiores obran ofensivamente contra los del mismo u otro buque, cuerpo o destacamento, serán penados con prisión de dos a cuatro años, aunque no resulten lesiones; y los inferiores que tomasen parte en la ofensa, o cuando éstos la promovieren o suscitaren entre sí, con la de prisión de uno a cuatro años, o con la de confinamiento, en su caso, por el mismo término.

Art. 689. El militar encargado del cumplimiento de alguna orden superior, o el que, en ejercicio de sus funciones, emplease o hiciese emplear, sin motivo legítimo, contra cualquier persona, violencias innecesarias para el cumplimiento de su cometido, será castigado con destitución o con cualquiera otra pena disciplinaria según la gravedad del caso. Si los actos de violencia de que se trata, fueran calificados de delitos a los que corresponda pena mayor, se le aplicará ésta, con agravación.

Art. 690. El militar encargado de conservar o restablecer el orden público, que empleare o hiciese emplear las armas sin causa justificada, o sin orden expresa para ello, o dejare de cumplir las formalidades expresadas en la ley, será condenado a prisión menor, si no resulta delito a que corresponda pena más grave.

Art. 691. El militar que en tiempo de guerra recibiese encargo de transmitir una orden por escrito o cualquier otro despacho, y que voluntariamente hubiere abierto, o no lo hubiese entregado a la persona a quien iba dirigido, o que hallándose en peligro de ser sorprendido por los enemigos, no hubiese intentado a toda costa destruirlo, sufrirá la pena de muerte o la de presidio por tiempo indeterminado, si por aquel hecho hubiere comprometido la seguridad del Estado, del Ejército o de la Armada, o de una parte de ellos. En caso contrario, la pena será prisión mayor hasta cinco años.

Art. 692. El militar a quien, en tiempo de paz, se comisionara para transmitir una orden o despacho cualquiera, y lo hubiese abierto,



incurrirá en la pena de prisión menor o de confinamiento hasta dos años.

Si lo hubiese perdido por no haberlo guardado cuidadosamente, o si no lo entregare a la persona a quien iba dirigido, será penado con cuatro meses a un año de prisión menor.

Art. 693. El militar que, teniendo a su cargo la custodia de archivos, papeles o efectos sellados por la autoridad, viola los sellos o consiente en su violación, será castigado con prisión menor o con confinamiento hasta dos años.

Art. 694. El militar que abra o permite abrir, sin autorización, papeles o documentos cerrados cuya custodia le estuviera confiada, sufrirá prisión menor o destitución, según las circunstancias especiales del caso.

Art. 695. Todo militar encargado de la construcción de fuertes, arsenales, cuarteles u otra obra del Estado, que intencionalmente se aparte de los planos e instrumentos a que debe sujetarse, será penado con arresto y suspensión de empleo por tres a nueve meses o con destitución. Si por ese empleo se hubiesen perjudicado las condiciones de la obra o se hiciere más gravosa al Estado, la pena será de prisión mayor o presidio hasta seis años.

Art. 696. En el caso en que la infracción a que se refiere el artículo anterior, procediera de impericia o negligencia, las respectivas penas divisibles se reducirán de uno a dos grados, según las circunstancias.

Art. 697. El militar que en tiempo de guerra y frente al enemigo cause intencionalmente una falsa alarma, o introduzca confusión, o desorden en las tropas, será castigado con penas disciplinarias, o con presidio, o con muerte, según las circunstancias del caso y las consecuencias que el hecho haya tenido.

Art. 698. El militar que sin autorización entrase en los lugares en que se hubiere puesto salvaguardia, será castigado con penas disciplinarias o prisión, salvo las mayores penas en que pudiera haber incurrido, en caso de violencia contra aquélla.

Art. 699. El militar que indebidamente tomase alojamiento o se apoderase de carros, animales o cualesquiera otros objetos, hallándose en marcha el cuerpo a que pertenece, en acantonamiento o guarnición, o cuando se le encargase alguna diligencia, o en cualquier otro caso será castigado con pena disciplinaria.

Art. 700. Incurrirá en la pena de prisión mayor o de presidio hasta cuatro años:

1º El que obligase a los prisioneros de guerra a combatir contra sus banderas, los maltratase de obra, los injuriase groseramente o los privare del alimento necesario. 2º El que atacare sin necesidad, hospitales, asilos de beneficencia, templos, conventos, cárceles o casas de agentes diplomáticos o de cónsules extranjeros dados a canocer por los signos establecidos para tales casos. 3º El que destruyere templos, conventos, bibliotecas, museos, archivos u obras notables de arte, sin



exigirlo las operaciones de la guerra. 4º El que de obra o de palabra ofendiere a un parlamentario.

Art. 701. El militar que en operaciones de guerra no preste el auxilio que le sea reclamado por el jefe de una fuerza comprometida, pudiendo hacerlo, será castigado con prisión menor o destitución.

Si, a consecuencia de la falta de auxilio, se hubiere perdido o hubiere sido derrotada la fuerza que lo solicitó, se aplicará pena de prisión mayor hasta muerte. En la misma pena incurrirá el jefe u oficial que dé lugar a la pérdida o derrota de su fuerza, por no solicitar un auxilio que se le habría podido prestar.

Art. 702. El militar que pudiendo hacerlo no lleve los pliegos que se le confiaren sobre operaciones de la guerra, será castigado con pena de prisión mayor hasta muerte.

Art. 703. El militar que en cualquier forma obstruyera las funciones de un juez instructor o de un tribunal militar, será castigado con suspensión de empleo, o con cualquier otra pena disciplinaria. En caso de reincidencia será destituido o confinado por cuatro meses a un año.

CAPITULO VI

Deserción

Art. 704. Consuman deserción las clases e individuos de tropa en los casos siguientes:

1º Cuando faltan arbitrariamente a las listas de ordenanza por tres días consecutivos. 2º Cuando después de faltar por dos días a las listas de ordenanza se les encontrare fuera del lugar de su destino y a distancia que evidencie el propósito de abandonar las filas. 3º Cuando se hallaren disfrazados u ocultos a bordo de embarcaciones prontas a zarpar. 4º Cuando estando en marcha las fuerzas a que pertenecieran, o en el momento de zarpar el buque de cuya dotación formau parte, no se incorporen a ella, o se queden en tierra sin tener el correspondiente permiso o con pretextos o con motivos que no sean legítimos.

Art. 705. Consuman también deserción los prisioneros de guerra que no se presentasen a las autoridades militares de la República dentro de los diez días siguientes a aquel en que recobrasen la libertad. Si el prisionero estaba en país extranjero, los diez días se contarán desde aquel en que tuvo la oportunidad de presentarse a alguna de las autoridades de la República.

Art. 706. En tiempo de guerra, los plazos señalados en los artículos anteriores para considerar consumada la deserción, podrán ser reducidos por el Presidente de la República y por los comandantes en jefe, en los bandos que dictaren.

Art. 707. El desertor que en tiempo de paz se presentare volunta-



riamente sin justificar su ausencia, dentro de los diez días siguientes a aquel en que se considera consumada la deserción, será castigado con diez días de recargo en el servicio por cada día de demora en la presentación. En tiempo de guerra, el desertor, voluntariamente presentado, será castigado en la forma y con las penas que establezcan los bandos de los comandantes en jefe.

Art. 708. En todos los casos de deserción, se expresará en la sentencia o resolución condenatoria, que el desertor pierde todos los derechos que tuviera contra el Estado en su calidad de individuo del Ejército o Armada. Las clases serán destituidas.

Art. 709. Las condiciones establecidas en este capítulo para constituir la deserción y las penas de ellas en los respectivos casos, se entenderán, sin perjuicio de las alteraciones que en uso de sus atribuciones establezcan en los bandos las autoridades especialmente facultadas para dictarlos.

I

Deserción simple

Art. 710. La deserción que no va acompañada de las circunstancias enumeradas en el artículo 711, será castigada con calabozo y con recargo de servicio hasta tres años.

II

Deserción calificada

Art. 711. La deserción calificada es la que se comete con alguna de las circunstancias siguientes:

1° En tiempo de guerra. 2° En territorio extranjero. 3° Con violencia, fractura, escalamiento o saliendo del buque por lugares no autorizados. 4° Llevando embarcaciones pertenecientes a la Armada, animales al servicio militar, armas, municiones, instrumentos, objetos de navegación, útiles, herramientas o prendas del equipo, con excepción del uniforme de uso indispensable en el momento de desertar. 5° Hallándose en actos del servicio o cumpliendo pena disciplinaria. 6° Habiendo cometido otra vez deserción.

Art. 712. La deserción calificada será castigada:

1° En el caso del inciso 1° del artículo anterior, con pena de muerte si se produjere frente al enemigo extranjero o pasándose a sus filas. Con presidio o prisión, cuando se produjere frente al enemigo rebelde o pasándose a sus filas. Con las mismas penas de este inciso o con confinamiento en los demás casos de deserción durante el tiempo de guerra. 2° En el caso del inciso 2°, con presidio o prisión. 3° En los demás casos, con confinamiento o con recargo de servicio o con ambas penas conjuntas, según las circunstancias del caso.

III

Complot

Art. 713. Hay complot de desertión, cuando cuatro o más individuos han consumado el delito, de acuerdo y conjuntamente.

Art. 714. A cada uno de los complotados se le aplicará la pena que corresponde al hecho, según sus circunstancias, aumentada en un grado, si fuere pena divisible sujeta a graduación.

IV

Complicidad

Art. 715. Los militares que en tiempo de paz inciten, provoquen, favorezcan u oculten la desertión, serán castigados:

1º Con suspensión de empleo, con destitución o con prisión menor, si fuesen jefes u oficiales. 2º Con la mitad de la pena que corresponde el desertor, si fueren clases o individuos de tropa. Las clases, además, serán destituidas.

Art. 716. En los casos del artículo anterior, los particulares o personas sin carácter militar, serán condenados por el juez o tribunal competente con cuatro meses a un año de prisión.

Art. 717. En tiempo de guerra, los cómplices o encubridores serán castigados con dos a cuatro años de prisión mayor, si son jefes u oficiales, con la misma pena que el desertor, si son clases o individuos de tropa, y con prisión hasta dos años, si son particulares.

V

Conato de desertión

Art. 718. Cometén conato de desertión:

1º Los que han faltado consecutivamente a dos listas de ordenanza y se les encuentra fuera del lugar de su destino. 2º Los que fueron aprehendidos dentro del pueblo después de haber faltado dos días consecutivos a las listas de ordenanza.

Art. 719. En tiempo de paz, los culpables de conato de desertión serán castigados con las penas disciplinarias que señalen los reglamentos. En tiempo de guerra, con recargo de servicio o con confinamiento. Las clases serán suspendidas por el mismo tiempo de duración de la pena.





SECCION II

INFRACCIONES ESPECIALES DE LA MARINA

Art. 720. El militar que en caso de tempestad, naufragio o incendio, infunda a bordo el terror o provoque el desorden, sufrirá prisión mayor, presidio o muerte, según las circunstancias.

Art. 721. Todo individuo de la tripulación de un buque de la Armada, que en el momento del naufragio o varada lo abandona sin orden o que después del naufragio se aleje de la playa sin autorización, sufrirá:

1º Destitución, si es oficial. 2º Prisión menor o mayor, si es clase o individuo de tropa.

Art. 722. Todo individuo embarcado en un buque del Estado que en tiempo de guerra tuviere fuegos encendidos durante la noche, sin la debida autorización, sufrirá prisión menor.

Si se hubiese encendido o descubierto el fuego contra órdenes expresas, la pena será de prisión mayor.

Art. 723. Se impondrá la pena establecida en la primera parte del artículo anterior:

1º Al que, destinado a la guarda del fuego en tiempo de guerra, no haya tenido el debido cuidado. 2º Al que, sin autorización, encienda o tenga encendidos fuegos, fuera de los lugares destinados al efecto, o sin usar las debidas precauciones, ya sea en puertos, arsenales u otros establecimientos militares o a bordo de los buques, de modo que comprometa su seguridad. 3º Al que hubiera abandonado los fuegos estando encargado de vigilarlos.

Art. 724. El que sin autorización introdujere en un buque del Estado, pólvora, azufre, aguarrás u otras materias inflamables o espirituosas, será penado con prisión menor hasta diez meses.

Art. 725. El militar encargado de la custodia de un buque o de la conducción de un convoy que, pudiendo defenderlo, lo entregase, rindiese o abandonase al enemigo, será penado con presidio indeterminado o muerte.

Art. 726. El militar que estando encargado de la escolta de un buque o convoy, lo abandonara sin un motivo poderoso y justificado, sufrirá la pena:

1º De ocho a quince años de presidio en tiempo de guerra, si el escoltado fuera de la marina militar o convoy o buque mercante que transporta tropas, efectos militares, víveres, carbón, pertrechos o caudales del Estado, y de resultados del abandono fuese apresado o destruido por el enemigo alguno de los buques. 2º De cuatro a ocho años de presidio si, en las circunstancias del inciso anterior, no fuese apresado ni destruido por el enemigo ninguno de los buques; si el convoy o buque mercante apresado no transporta tropas ni efectos de los



que expresa el mismo inciso; si, aunque sea en tiempo de paz, naufragase por consecuencia del abandono alguno de los buques o pereciese toda o parte de su tripulación o de las tropas de transporte.

Art. 727. El piloto de un buque de marina militar o de un convoy que mediante alguna operación o consejo hubiese inducido en error al comandante, en perjuicio del servicio, será castigado con prisión mayor, si ha obrado voluntariamente, y con prisión menor, si fuere con negligencia.

Art. 728. Todo capitán de una nave de comercio que forme parte de un convoy y que sea culpable de haber perdido voluntariamente el buque puesto bajo su mando, sufrirá la pena de presidio por tres a seis años.

Si voluntariamente se hubiese separado del convoy de que hacía parte, será castigado con cuatro meses a un año de prisión menor.

Si ha desobedecido las órdenes o señales del comandante del convoy, será castigado con cuatro a ocho meses de la misma pena.

Art. 729. Todo capitán de un buque de comercio argentino que rehusa prestar ayuda a buque del Estado en peligro, será castigado con cuatro meses a un año de prisión por el juez o tribunal competente.

Art. 730. El militar que embarca o permite embarcar mercaderías o pasajeros, sin orden o autorización, en un buque del Estado, será castigado con cuatro a ocho meses de prisión menor.

Si el culpable es extraño a la milicia y al servicio de la marina militar, se le impondrá por el juez o tribunal competente hasta seis meses de prisión menor.

Las mercaderías serán decomisadas.

Art. 731. El jefe de embarcación menor que, hallándose con ella en el agua en momentos de combate, naufragio o incendio, desamparase el buque, o el que se embarcase sin orden de sus superiores, sufrirá pena de presidio por cuatro a doce años, a no ser que justificare que obró violentado, en cuyo caso sufrirán la pena los que hubieren ejercido la violencia.

Art. 732. Todo individuo de la marina de guerra que deliberadamente pierda un buque de la Armada, será condonado a presidio indeterminado. Si el hecho se produce en tiempo de guerra, la pena será de muerte.

Cuando la pérdida tiene lugar por impericia o negligencia, la pena será de destitución o prisión.

Se considera buque perdido el que está en absoluta imposibilidad de prestar cualquiera de los servicios a que puede ser destinado.

Art. 733. El militar que destruya o pierda deliberadamente embarcaciones menores del servicio de la Armada, será condenado a prisión menor o a prisión mayor hasta tres años.

Si el hecho se produce por impericia o negligencia, la pena será de suspensión de empleo por dos a cuatro meses o recargo de servicio por seis meses.



Art. 734. El jefe u oficial que deliberadamente cause a un buque de la Armada averías de que no resulte pérdida, será castigado en tiempo de paz con suspensión de empleo o destitución o prisión menor; y en tiempo de guerra, con prisión mayor o presidio.

Si las averías tienen lugar por impericia o negligencia, la pena será de suspensión de empleo en el primer caso y destitución en el segundo.

Si las averías se produjeren por abordaje y el abordado fuese un buque mercante, la pena será de suspensión de mando.

Art. 735. En los casos del artículo anterior, si el causante del abordaje no fuera oficial, la pena será de arresto o recargo en el servicio hasta un año.

Art. 736. El jefe de escuadra, división naval o buque suelto que sin causa justificada se aparte del derrotero que expresamente designen las instrucciones del superior, será suspendido en el mando por el máximo de duración de la pena.

Art. 737. Si el hecho a que se refiere el artículo anterior, hubiere sido causa de cualquier accidente perjudicial a los buques o de entorpecimiento dañoso a la expedición, será castigado con arresto y suspensión de empleo por cuatro meses. En tiempo de guerra, la pena será de prisión menor y destitución, y si a consecuencia de la infracción se hubiere producido pérdida o apresamiento del buque, se impondrá la de presidio por cuatro a diez años.

Art. 738. Incurrirán en las mismas penas de los dos artículos anteriores:

1º El piloto u oficial que varíe el rumbo ordenado por el comandante. 2º El comandante que entre a puerto o rada sin observar estrictamente los reglamentos de navegación o sin tomar todas las medidas o precauciones necesarias para evitar cualquier colisión, choque o abordaje. 3º El comandante que navegando en escuadra o en conserva, se aparte sin orden del superior, o que, habiéndose separado con causa legítima, no se incorpore tan pronto como las circunstancias se lo permitan. Cuando la separación se produce frente al enemigo y sin motivo justificado, se castigará con presidio o con pena de muerte, cualquiera que sean las consecuencias de ella. 4º El comandante que sin necesidad ni orden haga arribadas contrarias a sus instrucciones.

Art. 739. Será condenado a prisión menor o a destitución, el individuo de la marina de guerra que, pudiendo hacerlo, no preste en caso de peligro el auxilio pedido por buques de la Armada, por buques mercantes de la matrícula nacional o de país amigo, o por buque enemigo que haga promesa de rendirse.

La pena será de prisión mayor a muerte, si por falta de auxilio pedido se pierde el buque de la Armada.

Art. 740. Incurrirá en las penas del artículo anterior el comandante que dé lugar a la pérdida o avería de su buque por no solicitar un auxilio que se le habría podido prestar.



Art. 741. Será condenado a prisión menor, o a presidio hasta ocho años:

1º El comandante que en el combate o por evitar fuerzas notoriamente superiores del enemigo, se viere obligado a varar su buque y no lo inutilice después de haber agotado todos los recursos para defenderlo y salvar la tripulación. 2º El comandante que abandona su buque varado, mientras hubiera probabilidades de salvarlo; o que considerando inevitable el naufragio, no pusiere todos los medios para salvar la tripulación, transportes, armas, pertrechos, municiones de boca o guerra, caudales del Estado, correspondencia oficial, etc. 3º El comandante que en caso de salvataje no ponga todos los medios a su alcance para conservar en su tropa la más estricta disciplina o no embarque a los oficiales conjuntamente con la tropa en las lanchas disponibles. 4º El comandante que en caso de naufragio, haga abandono del buque, cuando esté en condiciones de flotabilidad y haya probabilidades de salvarlo.

Art. 742. El comandante de un buque o embarcación de la Armada que, llegado el caso de abandonarlo, no sea el último en efectuarlo, será destituido.

Art. 743. Los jefes y oficiales de la dotación de un buque de la Armada que, en el caso del artículo anterior, se salven con elementos de a bordo, haciendo abandono de la tripulación en el buque naufragado, serán condenados a presidio por cuatro a ocho años y a degradación.

Art. 744. Será castigado con prisión menor, el comandante que oculte averías o deterioros en el buque de su mando o en el armamento del mismo.

Art. 745. Incurrirá en arresto o en suspensión de empleo o destitución el comandante que emprenda viaje sin pertrechar debidamente su buque o sin reparar cualquier avería o deterioro en el buque o en su armamento.

Art. 746. Si a consecuencia de las omisiones a que se refiere el artículo anterior, el buque sufre durante el viaje daño de mayor consideración, se pierde, es apresado por el enemigo o no puede desempeñar en la oportunidad debida una operación de guerra necesaria, la pena será: de prisión menor, de prisión mayor o de presidio hasta ocho años.

Art. 747. El comandante que sin autorización superior haga reformas en la distribución interior del buque, en su arboladura, en la máquina o en la disposición de su armamento, será castigado con arresto o suspensión de empleo por tres a nueve meses o con destitución.

Si a consecuencia de las reformas se hubieren perjudicado las condiciones marinerías del buque o sus condiciones defensivas u ofensivas, la pena será de prisión mayor o de presidio hasta seis años. En tiempo de guerra podrá imponerse presidio hasta diez años.

Art. 748. Incurrirá en las mismas penas del artículo anterior, el jefe u oficial encargado de inspeccionar o vigilar la construcción o



carena de un buque, que consienta que se hagan sin autorización superior, reformas u obras que no estén en los planos aprobados y mandados ejecutar.

Art. 749. Todo jefe de escuadra, división naval o buque suelto a quien el enemigo sorprenda sin tener los fuegos prendidos o sin haber tomado las precauciones defensivas necesarias, será suspendido en el empleo o destituido. Si por esta negligencia los buques sufrieran averías de importancia o fueran aprehendidos, sumergidos, incendiados o volados, la pena será de prisión mayor, presidio o muerte.

Art. 750. Todo individuo de la tripulación de un buque de guerra que intencionalmente produzca cualquier desperfecto o deterioro en la máquina o en el armamento del buque, será penado con prisión mayor, con presidio o con muerte, si el hecho se produjera en tiempo de guerra o en accidente grave de mar.

En todos los demás casos, la pena será de arresto o de prisión menor; pero los oficiales y maquinistas serán, además, destituidos.

Art. 751. Todo jefe u oficial que abriera un peligro cerrado, antes de la fecha o del lugar señalado en las instrucciones, será suspendido en su empleo por tres meses a un año, y en caso de guerra será destituido.

LIBRO TERCERO

INFRACCIONES DE LA LEY PENAL GENERAL O DE LEYES ESPECIALES

TITULO PRIMERO

DISPOSICION PRELIMINAR

Art. 752. Los delitos por violación de la ley penal general o de una ley especial, cometidos por militares o empleados militares en las condiciones expresadas en el inciso 2º del artículo 117, serán penados, respectivamente, con arreglo a las disposiciones del Código Penal Ordinario o de la ley especial violada, salvo las modificaciones establecidas en los títulos siguientes.

TITULO II

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO

CAPITULO I

Traición

Art. 753. Los individuos del Ejército o Armada que cometan el delito de traición definido por el artículo 103 de la Constitución Nacional, serán condenados a degradación pública y muerte:



1º Si han puesto en peligro la independencia o integridad de la República o causado daño grave o irreparable a sus fuerzas militares. 2º Si han impedido que una operación de guerra produzca las ventajas que debía producir.

Cuando el acto de traición no produzca los efectos señalados en los incisos anteriores, la pena será: presidio indeterminado y degradación pública.

Art. 754. Se consideran, particularmente actos de traición:

1º Hacer armas contra la República, militando bajo las banderas de sus enemigos. 2º Facilitar al enemigo la entrada en el territorio nacional, el progreso de sus armas, o la toma de una plaza, puerto militar, buque del Estado, almacén, municiones de guerra o de boca. 3º Proporcionar al enemigo medios directos de hostilizar a la Nación. 4º Destruir o inutilizar en beneficio del enemigo, caminos, telégrafos, faros, semáforos, aparatos para señales, valizas que marquen peligro o rumbo, las líneas de torpedos o de minas, todo o parte importante de un material de guerra, los repuestos de armas, municiones, pertrechos u otros objetos del material del Ejército o Armada. 5º Dejar de cumplir total o parcialmente una orden oficial, o alterarla de una manera arbitraria, con el mismo propósito. 6º Dar maliciosamente noticias falsas u omitir las exactas, relativas al enemigo, cuando fuera su deber transmitir las. 7º Comunicar intencionalmente al enemigo noticias sobre el estado del Ejército o Armada o de sus aliados. 8º Poner en su conocimiento los santos, señas y contraseñas, órdenes y secretos militares o políticos que le hayan sido confiados, los planos de fortificaciones, arsenales, plazas de guerra, puertos o radas, explicaciones de señales o estado de fuerzas, la situación de las minas, torpedos o sus estaciones o el paso o canal entre las líneas de éstos. 9º Reclutar gente dentro o fuera del territorio nacional para una potencia enemiga. 10. Seducir las tropas de la Nación para engrosar las filas enemigas. 11. Provocar la fuga o impedir dolosamente la reunión de tropas desbandadas en presencia del enemigo. 12. Arriar, mandar arriar o forzar a arriar la bandera nacional sin orden del jefe en ocasión del combate o impedir de cualquier modo el combate o el auxilio de fuerzas nacionales o aliadas. 13. Desertar hacia las filas enemigas. 14. Servir de guía al enemigo para una operación militar contra tropas o embarcaciones argentinas o aliadas, o siendo guía de tropa o embarcaciones argentinas o aliadas, desviarlas dolosamente del camino que se proponían seguir. 15. Divulgar intencionalmente noticias que infundan pánico, desaliento o desorden en los buques o tropas. 16. Impedir que los buques o tropas nacionales o aliadas reciban en tiempo de guerra los auxilios y noticias que se les enviaren. 17. Poner en libertad a prisioneros de guerra con el objeto de que engrosen las filas enemigas. 18. Ocultar, hacer ocultar o poner en salvo a un espía o agente enemigo, conociendo su condición. 19. Mantener directamente, o por medio de tercero, correspondencia con el



enemigo, que se relacione con el servicio o con las operaciones encomendadas a las fuerzas nacionales, si no han recibido al efecto orden escrita del jefe superior de quien dependan. Este caso comprende a cualquier otra persona existente en el Ejército o Armada.

Art. 755. En todo acto de traición, el delito frustrado se castigará con presidio por seis a quince años y degradación pública.

La conspiración y la proposición se castigarán, respectivamente, con presidio por cinco a diez años y con prisión mayor por tres a seis. En ambos casos se impondrá la degradación.

Art. 756. El militar que tuviere conocimiento de un acto de traición, a tiempo de poderlo evitar, y no tratase de impedirlo o en caso de imposibilidad, no diera parte inmediatamente, será castigado como cómplice.

Art. 757. Queda exento de pena el complicado en el delito de traición que lo revele antes de comenzarse a ejecutar y a tiempo de poder evitar sus consecuencias.

CAPITULO II

Espionaje

Art. 758. Comete delito de espionaje todo individuo que bajo disfraz, con un falso pretexto, o de cualquier manera oculta o sigilosa, penetra en las plazas de guerra, buques, arsenales, puertos militares, campamentos, columnas en marcha, etc., con el fin de hacer reconocimientos, levantar croquis, hacer planos y recoger, en general, todas las informaciones y noticias que puedan ser de utilidad al enemigo o servir a una potencia extranjera en caso de guerra.

Si el agente es ciudadano o militar argentino, el delito se considerará como traición.

Art. 759. No se consideran reos de este delito:

1º Los militares enemigos que ejecuten manifiestamente y con su uniforme, cualquiera de los actos a que se refiere el artículo anterior. 2º Los correos u otras personas que sin introducirse artificiosamente en los lugares designados, transmitan noticias al enemigo. 3º Los que en globos aerostáticos reconozcan las posiciones del Ejército o Armada o crucen sus líneas con cualquier objeto.

Art. 760. Las personas mencionadas en el artículo anterior, u otras que se encuentran en condiciones análogas, quedarán sujetas, sin embargo, a las leyes de la guerra prescriptas por el Derecho Internacional.

Art. 761. Los espías en tiempo de guerra serán castigados con la pena de muerte o la de presidio por tiempo indeterminado, según el carácter del delito y gravedad de los hechos; y en tiempo de paz, con presidio por ocho a doce años.

Art. 762. La proposición para cometer el delito de espionaje se castigará con prisión menor por uno a dos años.



TITULO III

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS

Mutilaciones

Art. 763. El que se mutile o de cualquier otra manera se inutilice para cumplir las obligaciones que le impone la ley militar o su compromiso de enganche, y el que se haga inutilizar por otro, serán castigados con prisión menor o con prisión mayor hasta cuatro años.

La misma pena se impondrá al que inutilice a otro con el fin indicado.

Art. 764. En los delitos de mutilación de sí mismo o inutilización para substraerse al servicio militar, es siempre punible el conato; pero el castigo de éste nunca excederá del máximo del arresto.

TITULO IV

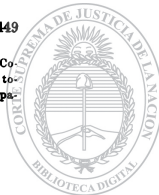
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

CAPITULO I

Robo y hurto

Art. 765. En la aplicación de las penas por robo y hurto, los tribunales militares considerarán especialmente como circunstancias agravantes, las siguientes:

1º Ejecutarlo estando de centinela, hallándose de salvaguardia o en el desempeño de otra comisión o servicio. 2º Recaer sobre armas, pólvoras, municiones u otro efecto militar, en los buques, parques, almacenes, depósitos o convoyes de guerra. 3º Ejecutarlo dentro del buque, cuartel, tienda de campaña o casa de oficial dependiente del Ejército. 4º Recaer sobre objetos destinados al culto, siempre que el robo se efectuase en un templo o lugar sagrado. 5º Cometerlo frente al enemigo o en lugar donde el agente se encontrase alojado. 6º Ejecutarlo de objeto salvado de la guerra, del fuego, de la inundación o del naufragio y en los momentos de ser salvados. 7º Ejecutarlo en perjuicio de camaradas o compañeros. 8º Ejecutarlo en la persona de un herido o prisionero de guerra, o en la de alguno de los individuos de un buque apresado, en convoy o sometido a la visita. 9º Ejecutarlo en vestidos o efectos de los muertos en combate. 10. Cometerlo en campaña y en perjuicio de un vivandero o comerciante que trafique con el Ejército. 11. Cometerlo en perjuicio del Erario público, de las administraciones de los cuerpos militares, en el cuartel, arsenales o en cualesquiera otros almacenes o dependencias militares, aun cuando



sólo estuvieren destinados momentáneamente a tal objeto. 12. Cometerlo en objeto y a bordo de una presa cuando ésta no ha sido todavía declarada tal. 13. Substraer o destruir fraudulentamente paños de abordó de un buque detenido o capturado.

CAPITULO II

Exacción

Art. 766. El militar que con violencias o amenazas obliga a cualquier persona a hacer o dejar de hacer alguna cosa, con el objeto de procurar para sí o para otro un beneficio ilícito, será castigado con las penas establecidas para el robo.

Art. 767. Se impondrán las penas del hurto, al militar que, con fines de lucro personal, cobra contribuciones de guerra o contribuciones forzosas, sin autorización para ello; y al que, teniendo esa autorización, se exceda con el mismo fin en sus facultades.

Art. 768. En los casos del artículo anterior, si la exacción no se ha cometido con propósito personal sino en beneficio público, será castigada con prisión de cuatro a ocho meses, si excede del valor de cincuenta pesos moneda nacional, y con arresto hasta un mes, si no pasa de esa cantidad.

CAPITULO III

Venta, empeño u ocultación de objetos y prendas militares

Art. 769. El militar que vendiese, empeñase, donase, permutase, inutilizase o abandonase prendas del equipo, del vestuario, instrumentos de música, instrumentos u otros objetos de navegación, útiles o herramientas, cuyo valor no exceda de diez pesos moneda nacional, será castigado con penas disciplinarias.

Si excede de ese valor, será penado con arresto, con prisión menor o con recargo de servicio hasta dos años.

En ambos casos será obligado a reintegrar de sus haberes el valor de la prenda o pieza perdida, vendida, inutilizada, etc., etc.

Art. 770. El militar que ejecute cualquiera de los actos a que se refiere el artículo anterior con los animales destinados al servicio, armas o municiones, será penado con prisión menor o con recargo de servicio hasta tres años.

Si con cualquiera de estos actos se hubiere perjudicado el servicio, la pena será de prisión mayor o confinamiento hasta cuatro años.

En tiempo de guerra, se aplicará presidio o pena de muerte cuando los referidos actos hubieren estorbado o dificultado una operación de guerra o debilitado los medios de acción o defensa de la Nación.



Art. 771. Todo individuo que a sabiendas compre, empeñe u oculte cualquiera de los objetos a que se refieren los dos artículos precedentes, será condenado por el juez o tribunal competente con arresto o prisión hasta tres años.

CAPÍTULO IV

Incendios y otros estragos

Art. 772. El militar que dolosamente ponga fuego, haga volar, destruya o inutilice por cualquier otro medio, documentos, bienes muebles o inmuebles del Estado, que tengan relación o estén afectos a la defensa del país o al servicio del Ejército o Armada, será castigado con prisión o con presidio, según la importancia del daño causado.

Art. 773. Los hechos a que se refiere el artículo anterior se castigarán con presidio o con pena de muerte:

1° Cuando hubieren sido causa del fallecimiento de alguna persona.
2° Cuando se producen en tiempo de guerra y perjudican o debilitan los medios de acción o de defensa de la Nación.

Art. 774. Si los hechos a que se hace mención en los dos artículos precedentes, se produjeren por imprudencia, descuido o negligencia, se impondrá pena disciplinaria o prisión menor o prisión mayor, según las circunstancias y la importancia del daño causado.

Art. 775. El que fuere sorprendido con explosivos o preparativos evidentemente destinados a incendiar o causar alguno de los estragos indicados en este capítulo, sufrirá prisión menor o si no diese explicaciones satisfactorias del fin que se proponía al aplicar esos elementos de destrucción.

Art. 776. Los daños causados en los cables submarinos y las infracciones de los convenios internacionales sobre la materia, serán penados con arreglo a las leyes especiales que al cometerse la infracción rigen sobre el particular en la República.

TÍTULO V

DELITOS EN EL DESEMPEÑO DE CARGOS

CAPÍTULO I

Abuso de autoridad. — Usurpación de funciones

Art. 777. El militar que se exceda arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones perjudicando a un inferior, o que lo maltrate prevalido de su autoridad, será castigado con pena disciplinaria o con prisión, siempre que del hecho no resulte un delito más grave, en cuyo caso se aplicará la pena que a éste corresponde.



Si el acto se produjere estando el inferior en formación con armas, la pena será de confinamiento, destitución o prisión mayor.

Art. 778. Queda exento de responsabilidad penal el militar que en los casos del artículo anterior obrase en legítima defensa o tuviere necesariamente que recurrir a ese medio para reprimir delitos flagrantes de traición, rebelión, sedición, motín, insubordinación o cobardía.

Art. 779. Lo prevenido en el artículo anterior es aplicable también a los centinelas o salvaguardias que, en circunstancias análogas, hagan uso de sus armas, aun cuando sea contra sus superiores.

Art. 780. Todo militar que ejerza influencia o haga presión sobre jueces o tribunales para que en los juicios se violente la ley en beneficio o perjuicio de un encausado, será castigado con suspensión de empleo o con destitución.

Art. 781. Será condenado a prisión menor el militar que asuma o retenga un mando sin autorización superior.

Si el hecho se produjera en tiempo de guerra, será condenado a prisión mayor.

Art. 782. El militar que sin una necesidad bien manifiesta, inicie o emprenda sin orden una operación de guerra con las tropas a sus órdenes, será condenado a prisión mayor o a presidio por cuatro a ocho años.

Si con el hecho hubiere puesto en peligro fuerzas del Ejército o Armada o causado grave daño a las operaciones de la guerra, será condenado a presidio indeterminado o a muerte.

CAPÍTULO II

Prevaricato — Cohecho

Art. 783. Cometen prevaricato, los que formando parte de un tribunal militar o desempeñando cualquier otra función de justicia militar:

1º Expidieran maliciosamente sentencia injusta, o violaran a sabiendas las leyes de procedimiento y las que determinan el orden de las jurisdicciones. 2º Citaran hechos o resoluciones falsas. 3º Fundasen sus fallos en leyes supuestas o derogadas. 4º Se negasen a administrar justicia dentro de los términos señalados por las leyes. 6º Se negasen a juzgar bajo pretexto de obscuridad o insuficiencia de la ley.

Art. 784. Los que incurran en cualquiera de los tres primeros casos del artículo anterior, serán castigados con destitución de empleo o con separación del cargo judicial e inhabilitación absoluta para desempeñar otro de igual o análogo carácter.

Los que incurrieren en los dos últimos casos, sufrirán la destitución



de empleo o la separación del cargo judicial e inhabilitación por cinco años.

Art. 785. Cometén igualmente prevaricato:

1° Las personas que, desempeñando las funciones del Ministerio Fiscal o Auditoría, faltaren maliciosamente a sus deberes en favor o en contra de los procesados. 2° Los que, ejerciendo el cargo de defensores, con abuso malicioso de su oficio, perjudicasen al procesado o descubriesen sus revelaciones.

Art. 786. En el caso del inciso 1° del artículo anterior, el prevaricato se castigará con destitución de empleo o con privación absoluta del cargo judicial, y en el caso del inciso 2°, con suspensión de empleo.

Art. 787. El militar que en ejercicio de funciones judiciales, administrativas o sanitarias, hubiese recibido dádivas o aceptado promesas para ejercer o dejar de ejecutar algún acto, será castigado, en el caso de ser el acto justo, con destitución, si fuese jefe u oficial, y con arresto hasta tres meses, si fuese clase de tropa.

Art. 788. En los casos expresados en el artículo anterior, si el acto ejecutado o no ejecutado fuera injusto, el culpable será castigado con prisión mayor de dos a cinco años.

Art. 789. Si el cohecho ha tenido por objeto favorecer o perjudicar al acusado de algún delito, el militar revestido de funciones judiciales o empleado en los servicios de justicia militar, sufrirá la pena de presidio por cuatro a doce años.

Art. 790. Si por efecto del cohecho, se hubiese impuesto pena superior a la de presidio por doce años, se impondrá la misma pena al vez de cohecho, con excepción de la muerte, que se conmutará en la de presidio por tiempo indeterminado.

Si la sentencia no se hubiese llevado a efecto, se rebajará la pena de uno o dos grados.

Art. 791. Los militares autores del cohecho, sufrirán la pena fijada para los militares cohechados, rebajándola, sin embargo, en uno a dos grados.

No se hará la predicha rebaja, si el autor del cohecho fuera superior en graduación al que se hubiese dejado cohechar.

Art. 792. La simple tentativa de cohecho, será castigada con prisión menor.

En ningún caso se entregará al autor del cohecho, los objetos que hubiese dado ni su valor; si existieren, se confiscarán y se les dará el destino que señale la autoridad militar.

Art. 793. Si el daño producido o que ha podido producir el prevaricato o el cohecho fuera menor de doscientos pesos, se rebajará, respectivamente, de uno a dos grados las penas establecidas para tales delitos.



CAPITULO III

Omisiones, malversaciones y fraudes en la administración militar

I

Omisiones

Art. 794. Los empleados del cuerpo de administración militar a quienes corresponda proveer a las tropas de los elementos de guerra necesarios, y que voluntariamente o por negligencia no lo hicieren en la oportunidad en que debieran verificarlo, serán castigados:

1º Con pena de muerte, o presidio por tiempo indeterminado, si el hecho tuvo lugar al frente del enemigo y fuera la causa única y principal de una derrota, capitulación o entrega de buques, tropas, plazas fuertes, puertos o puestos militares. 2º Con prisión, cuando el hecho se produjese en tiempo de guerra y fuera de los casos a que se refiere el inciso anterior. 3º Con suspensión de empleo por seis meses a un año, o con destitución, si el hecho tuvo lugar en tiempo de paz.

Art. 795. El que, teniendo a su cargo aprovisionamiento de buque, tropas o cuerpos militares, omite intencionalmente hacerlo en todo o en parte, a pesar de tener a su disposición los medios para ello, será castigado con destitución y prisión menor o con prisión mayor hasta cuatro años.

Art. 796. El empleado en el ramo de víveres o en el de sanidad, que en cumplimiento de los servicios a su cargo se hiciere culpable de negligencia grave, así como todo jefe que, teniendo noticia de esta negligencia dañosa para la tropa a sus órdenes, no pone remedio inmediato o no denuncia el hecho a la autoridad, pudiendo hacerlo, será castigado con destitución y prisión menor.

Si a la negligencia se uniere el propósito de realizar un beneficio ilícito, se impondrá la pena de la malversación o del fraude.

Si esa negligencia fuese causa de la pérdida de salud o de la muerte de algún subordinado, la pena será de prisión mayor por tres a cinco años.

Art. 797. El que por negligencia deja que se deterioren las provisiones o el material de guerra puesto a su cuidado, sufrirá prisión menor y pagará el daño, siempre que su valor no exceda de quinientos pesos.

Si el daño excediere de dicha suma o si se agrega otra infracción más grave, la pena será destitución y prisión menor.



II

Malversaciones y fraudes

Art. 798. Comete delito de malversación y defraudación el militar que teniendo en su poder, por razón de su empleo, dinero, título de crédito o cualquier efecto mueble perteneciente al Estado o a militares, los distrajera de sus legales aplicaciones en provecho propio o en el ajeno, o los administrare de una manera infiel.

Art. 799. Se hace especialmente reo de estos delitos:

1º El que ensajena o emplea en provecho propio los sueldos, víveres o forrajes cuya guarda o distribución le está confiada. 2º El que en un contrato con proveedores, por regalos o por promesas, favorece a uno de ellos. 3º El que en la distribución de salarios, víveres, forrajes u otras cosas, comete una infidelidad de cualquier clase que sea. 4º El que con miras interesadas presenta cuentas inexactas sobre los gastos del servicio. 5º El militar que hubiese obrado fraudulentamente respecto de la naturaleza, calidad o cantidad de trabajos, mano de obra o provisiones destinadas al uso militar. 6º El militar encargado de suministros o cualquier otra cosa destinada al servicio militar, que dolosamente hubiere faltado a su debida entrega. 7º El militar que haya hecho algún tráfico u operación mercantil con fondos pertenecientes a la administración militar o de los cuerpos del Ejército o Armada. 8º El militar encargado de funciones administrativas que, abiertamente o con actos simulados o por medio de una tercera persona, se interesa particularmente en la adjudicación de las subastas u otros actos de la administración militar en los cuales haya tenido alguna intervención. 9º El militar que tome interés como particular en cualquier asunto, relativamente al cual le corresponda dar órdenes, liquidar cuentas, hacer cualquier arreglo o recibir juramento. 10. El militar que teniendo a su cargo un expediente de suministros, construcciones, obras u otros servicios, no lo forma con estricta sujeción a los justificativos o documentos de comprobación que se requieran, con arreglo a las disposiciones que se hallen en vigencia. 11. El militar que firme o autorice orden, libramiento o cualquier otro documento de pago o de crédito extendido por los que se hallen a sus órdenes y que difiera notablemente en cantidad de lo que arroje su liquidación o ajuste correspondiente. 12. El militar que ordenase o hiciese consumos innecesarios de víveres, municiones, pertrechos, carbón u otros efectos destinados al servicio. 13. El militar que, sin autorización y en vista de un beneficio, cambia las monedas o valores que hubiese recibido con otras monedas o valores distintos.

Art. 800. Los delitos de malversación y defraudación se castigarán como hurto, sin perjuicio de las penas establecidas en el artículo 580.



Art. 801. La pena que corresponda a la malversación y defraudación se disminuirá en un tercio de su duración legal, si los dineros o fondos obtenidos por el delito o indebidamente sustraídos, fueran devueltos o entregados espontáneamente antes de haber causado daño o entorpecimiento en el servicio público.

TITULO VI DE LAS FALSEDADES

CAPITULO I

Falsedades en la administración o en el servicio militar

Art. 802. Será condenado a prisión menor o a prisión mayor hasta cinco años, el militar:

1º Que de cualquier modo falsificase dolosamente, estados, relaciones, diarios, libros o cualquier otro documento militar, aumentando el efectivo, número de hombres, caballos o días que se estuviesen adeudando, exagerando el consumo, haciendo relaciones o dando informes falsos o inexactos, o, finalmente, cometiendo cualquier otra falsedad en materia de administración militar, por efecto de la cual pueda causarse algún perjuicio al Estado. 2º Que dolosamente falsificase, de cualquier modo que fuere, actuaciones de algún procedimiento criminal militar, libros de registro, asientos de regimiento o compañía, licencias, bajas, guías o itinerarios, o diera a los superiores informes o expida certificados falsos sobre cualquier objeto del servicio militar. 3º Que no siendo responsable de la falsificación a que se refiere cualquiera de los dos incisos anteriores, hubiese hecho uso de documentos falsificados sabiendo que lo eran. 4º Que se apropiare o hiciere uso de baja, pasaporte, licencia o cualquier otro documento legítimo que no le pertenezca, aunque no sea falsificado. 5º Que en perjuicio de lo que debe suministrar a buques, cuerpos o individuos militares, haga uso de pesas o medidas falsas. 6º Que falsificare sellos de alguna autoridad u oficina militar, destinados a utilizar los documentos relativos al servicio militar o a servir de signo distintivo de objetos pertenecientes al Ejército o Armada. 7º Que hiciere uso de sellos, marcas o cuños falsificados, sabiendo que lo son.

Art. 803. El facultativo militar que en el ejercicio de sus funciones certificara falsamente o encubriera la existencia de cualquier molestia o lesión, o que exagerara o atenuara la gravedad de la molestia o enfermedad que realmente sufriera cualquier militar en servicio, será condenado a prisión por cuatro meses a un año, salvo las mayores penas en que hubiese incurrido, si hubiese mediado corrupción.

Art. 804. El militar que, en perjuicio del Estado o de militares, hiciera fraudulentamente uso de sellos, marcas o cuños verdaderos, de la naturaleza de los indicados en los incisos 6º y 7º del artículo 802



y destinados a algunas de las aplicaciones expresadas en los mismos, sufrirá destitución, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales en que incurra por los actos ejecutados.

Art. 806. En los casos de los artículos 802 y 803, los tribunales militares podrán aplicar la degradación, además de las penas que aquéllos establecen.

CAPITULO II

Falsificación de documentos públicos u oficiales

Art. 806. Será castigado con prisión mayor o con presidio por tres a seis años, el militar que abusando de su cargo cometiera falsedad:

1° Contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica. 2° Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido. 3° Atribuyendo a los que han intervenido en él, declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho. 4° Faltando a la verdad en la narración de los hechos. 5° Alterando las fechas verdaderas. 6° Haciendo en documento verdadero cualquier alteración o intercalación que varíe su sentido. 7° Dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto, o manifestando en ella cosa contraria o diferente de lo que contenga el original. 8° Ocultando, con perjuicio del Estado o de un particular, cualquier documento oficial.

CAPITULO III

Usurpación, ocultación de nombre y otras falsedades

Art. 807. El que, en el acto de ser filiado, oculte su edad, su nombre o apellido y tome otro imaginario o de otra persona, u oculte el lugar de su nacimiento o su estado civil, será castigado con arresto o recargo de servicio hasta ocho meses. Esta disposición se le hará conocer en dicho acto.

Art. 808. Si la ocultación se descubre después que el culpable de él haya cometido otras infracciones de jurisdicción militar, se le aplicará la regla del artículo 574.

Art. 809. Al acusado que declarando ante el juez instructor o ante otra autoridad judicial, oculte su nombre o apellido o tome otro imaginario o de persona diversa, se le impondrá la pena con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 810. El que, de cualquier modo que no esté especificado en los artículos anteriores, cometa falsedad, simulando, suponiendo, alterando u ocultando maliciosamente la verdad, con perjuicio de tercero, por palabras, escritos o hechos, usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponda, suponiendo viva a una persona muerta o atribuyendo existencia a otra que no la ha tenido, o al contrario, sufrirá prisión de cuatro meses a un año.



Art. 811. En la misma pena del artículo anterior incurrirá el militar que presente al superior, queja o agravio fundado en aseveraciones o imputaciones notoriamente falsas.

CAPITULO IV

Usurpación de condecoraciones, de uniformes, distintivos e insignias militares

Art. 812. El militar que usare públicamente uniformes, distintivos, insignias militares, medallas o condecoraciones que no le pertenezcan, será condenado a prisión por cuatro meses a un año.

La misma pena sufrirá cualquier militar que hiciere uso de condecoraciones, medallas o insignias extranjeras sin permiso de la autoridad competente.

Art. 813. El particular que, sin autorización, use públicamente uniforme del Ejército o de la Armada, será condenado por el juez o tribunal competente a las mismas penas del artículo anterior.

TITULO VII

EVASION DE PRESOS Y PRISIONEROS

Art. 814. Al militar que se evadiese de la prisión, cumpliendo condena impuesta por sentencia, se le aumentará en dos grados la pena que le corresponde, siempre que, para la evasión hubiera empleado violencia, fractura o escalamiento.

Art. 815. Si la pena que cumplía el evadido fuese la de presidio indeterminado, no se le contará el tiempo transcurrido a los efectos señalados en el artículo 524.

Art. 816. Contra un prisionero fugitivo se puede hacer uso de las armas, si no obedece a la intimación de detenerse. Si fuere capturado de nuevo, antes de salir del territorio del captor, o de haber podido incorporarse a sus propias filas, se le impondrá pena disciplinaria, y si hubiese logrado escapar y fuere tomado de nuevo, no sufrirá pena alguna.

En ambos casos, si el prisionero capturado hubiese dado palabra de no fugarse, puede ser privado de los derechos de prisionero de guerra.

Art. 817. El militar que hubiese dejado evadir, favorecido o procurado la evasión de algún preso, sufrirá las penas siguientes:

1º Prisión mayor hasta cuatro años, si el evadido estuviese acusado o condenado por delito penado con muerte o con presidio por tiempo indeterminado. 2º Prisión menor, si estuviese acusado o condenado por delito cuya pena sea la de presidio por tiempo determinado. 3º En todos los demás casos, la pena será de arresto, o suspensión de empleo o recargo de servicio hasta seis meses o destitución.



Art. 818. El culpable de evasión de prisioneros de guerra sufrirá la pena de suspensión de empleo o recargo de servicio hasta un año, salvo el caso determinado en el inciso 17 del artículo 754.

Art. 819. Si la evasión tiene lugar violentamente o con fractura, el militar o militares culpables de complicidad en el hecho, sufrirá la pena de dos a cinco años de prisión o de confinamiento.

Art. 820. Si la fuga de presos o prisioneros de guerra tuviese lugar por negligencia de sus guardianes o encargados de conducirlos, se impondrán las mismas penas de los dos artículos anteriores, rebajadas en un grado.

TITULO VIII

DELITOS COMETIDOS POR PRISIONEROS DE GUERRA

Art. 821. Los prisioneros de guerra que incurran en alguno de los delitos previstos por este código, serán juzgados con arreglo a sus disposiciones.

Art. 822. Sufrirán la pena de muerte o presidio por tiempo indeterminado, los jefes u oficiales prisioneros de guerra, puestos en libertad bajo promesa de no volver a la lucha y que fuesen tomados con armas en la mano.

Art. 823. En los casos de sublevación o motín de prisioneros de guerra, sufrirán:

1º Los autores principales, pena de muerte. 2º Los cómplices, presidio.

TITULO FINAL

DEFINICIONES Y ACLARACIONES. — DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 824. Para la aplicación de este Código se entiende que hay estado de guerra:

1º Cuando ella ha sido públicamente declarada. 2º Cuando existe de hecho. 3º Cuando se ha declarado oficialmente el estado de asamblea.

Art. 825. Se considera que una fuerza está frente al enemigo, desde el momento que ha emprendido los servicios de seguridad contra el mismo.

Art. 826. Se considera que una fuerza está en campaña, cuando opera en plazas o territorios declarados en estado de guerra, aunque ostensiblemente no aparezca enemigo armado, y cuando, por razones de gobierno o estado, la autoridad militar dispone que las tropas practiquen servicio como en tiempo de guerra.

Art. 827. Se entiende por acto de servicio, todo el que se refiere o tiene relación con las funciones que a cada militar corresponden, por el hecho de pertenecer al Ejército o Armada.



Art. 828. Se considera que un hecho se ha producido delante de tropa, cuando lo presencian más de cinco individuos del estado militar.

Art. 829. Se considera tropa formada, la que se ha reunido, de acuerdo con los reglamentos, para el desempeño de cualquier acto de servicio o para la ejecución de cualquier función táctica.

Art. 830. La expresión *Militar* comprende: individuos de tropa, las clases y todos los que con propiedad de empleo o asimilación, forman el Ejército y la Armada de la República.

La de *Oficiales generales* comprende tan sólo a los generales de brigada y división, tenientes generales, contraalmirantes, vicealmirantes, almirantes y sus asimilados.

La de *Jefes y oficiales* comprende los individuos de la jerarquía, desde subteniente o guardiamarina inclusive, hasta teniente general o almirante y sus asimilados.

La expresión *individuos de tropa* comprende a los soldados, marineros y sus asimilados, y a los civiles sin asimilación militar que por cualquier causa estén sometidos a la jurisdicción militar.

La expresión *enemigo* se refiere, no sólo a fuerzas extranjeras, sino también a rebeldes, sediciosas o sublevadas.

Art. 831. En toda prescripción no consumada al promulgarse este código, se observará lo siguiente:

1º Si el término fijado en él para la prescripción fuere mayor que el que las leyes anteriores señalaban, se estará a lo que éstas dispongan. 2º Si, por el contrario, fuese menor, se estará a las prescripciones de este código.

Art. 832. Las acciones provenientes de delitos cometidos antes de promulgarse este código y que entonces eran imprescriptibles dejan de serlo.

Los términos para su prescripción serán los que este código señala.

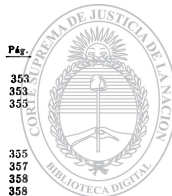
Art. 833. Este código empezará a aplicarse un mes después de su promulgación, y desde ese momento quedará derogada en lo militar toda disposición anterior que estuviere en oposición con él.

INDICE

TRATADO PRIMERO

ORGANIZACION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES MILITARES

	Pág.
Título I. — Disposiciones preliminares	349
Título II. — Tribunales militares en tiempo de paz.	
Capítulo I. — Disposiciones generales	350
Capítulo II. — Del Consejo Supremo de Guerra y Marina	350
Capítulo III. — De los Consejos de Guerra permanentes	351



	<u>Pág.</u>
Título III. — Tribunales militares en tiempo de guerra.	
Capítulo I. — Disposiciones generales	353
Capítulo II. — De los Consejos de Guerra especiales	353
Capítulo III. — Disposiciones complementarias	353
Título IV. — De los funcionarios y empleados y de los que ejercen cargos en la Justicia Militar.	
Capítulo I. — De los fiscales permanentes	355
Capítulo II. — De los auditores permanentes	357
Capítulo III. — Fiscales y auditores <i>ad hoc</i>	358
Capítulo IV. — De las secretarías y del archivo	358
Capítulo V. — De los jueces de instrucción	360
Capítulo VI. — De los comisarios de policía	360
Capítulo VII. — De los defensores	361
Título V. — De las excusaciones	361
Título VI. — De la competencia de los tribunales militares.	
Capítulo I. — Disposiciones generales	363
Capítulo II. — Orden de las competencias	364
Título VII. — Competencia en caso de complicidad	364
Título VIII. — Competencia ejecutiva	365
Título IX. — Competencia en tiempo de paz.	
Capítulo I. — De los Consejos de Guerra permanentes	365
Capítulo II. — Del Consejo Supremo de Guerra y Marina ...	366
Título X. — Competencia en tiempo de guerra.	
Capítulo I. — De los Consejos de Guerra especiales	366
Capítulo II. — Del general en jefe	366
Capítulo III. — De los gobernadores militares	367
Capítulo IV. — De los comisarios de policía	367

TRATADO SEGUNDO

DEL MODO DE PROCEDER EN LOS JUICIOS MILITARES

LIBRO PRIMERO

PROCEDIMIENTOS GENERALES

Título I. — Disposiciones preliminares	368
Título II. — Cuestiones de competencia	369
Título III. — De las notificaciones, citaciones y emplazamientos.	370
Título IV. — De la rebeldía o contumacia del procesado	372

LIBRO PRIMERO

PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN TIEMPO DE PAZ

SECCION PRIMERA. — DEL SUMARIO

Título I. — Autoridades que lo ordenan. — Objeto y duración del sumario	372
Título II. — De la denuncia	373
Título III. — De la prevención	375

SECCION SEGUNDA. — DE LA INSTRUCCION

Título I. — Disposiciones generales	375
Título II. — Del cuerpo del delito	378
Título III. — De las declaraciones.	
Capítulo I. — Disposiciones comunes a todas las declaraciones.	380
Capítulo II. — De la declaración indagatoria	381
Título IV. — De los testigos.	
Capítulo I. — De los que pueden ser testigos	383
Capítulo II. — De la citación de los testigos	383
Capítulo III. — Del examen de testigos	384
Capítulo IV. — De la confrontación	386
Capítulo V. — De los careos	387
Título V. — Del examen pericial	387
Título VI. — De la prueba de documentos	389
Título VII. — De la detención y de la prisión preventiva	389
Título VIII. — Del sueldo de los procesados	391
Título IX. — De la conclusión del sumario	391
Título X. — Del sobreseimiento	392

SECCION TERCERA. — DEL PLENARIO

Parte primera*Procedimientos en los Consejos de guerra permanentes*

Título I. — Disposiciones preliminares	393
Título II. — De las excepciones	393
Título III. — De la acusación	394
Título IV. — De la defensa	395
Título V. — De la prueba	396
Título VI. — De la vista de la causa	397
Título VII. — De la deliberación y de la sentencia	399
Título VIII. — Disposiciones relativas a las sesiones públicas ..	402

Parte segunda

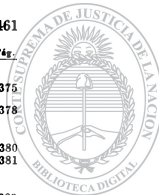
<i>El plenario de los Consejos de Guerra especiales</i>	404
---	-----

Parte tercera*De los recursos*

I. — Recurso de infracción de ley	405
II. — Recurso de revisión	406

SECCION CUARTA

<i>Procedimiento ante el Consejo Supremo</i>	407
--	-----



SECCION QUINTA

De la ejecución de las sentencias	410
---	-----

SECCION SEXTA

De la amnistía, indulto y conmutación	410
---	-----

LIBRO TERCERO

PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS

SECCION PRIMERA

Procedimiento en tiempo de guerra	411
---	-----

SECCION SEGUNDA

Del juicio sumario en tiempo de paz	413
---	-----

SECCION TERCERA

Procedimiento ante los comisarios de policía	414
--	-----

TRATADO TERCERO

DE LA PENALIDAD

LIBRO PRIMERO

DE LAS INFRACCIONES Y DE LAS PENAS EN GENERAL.

Título I. — De los delitos y de las faltas.

Capítulo I. — Disposiciones generales	414
Capítulo II. — Complicidad	415
Capítulo III. — Atenuación y agravación de los delitos militares	415
Capítulo IV. — Conspiración	416

Título II. — De las penas.

Capítulo I. — Clasificación, duración y efectos de las penas del delito	416
Capítulo II. — Clasificación, duración y efectos de las penas disciplinarias	418
Capítulo III. — De la aplicación de las penas	420
Capítulo IV. — Extinción de la acción penal y de las penas	422

LIBRO SEGUNDO

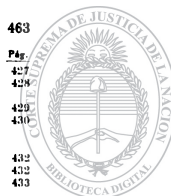
INFRACCIONES MILITARES EN PARTICULAR Y SUS PENAS

SECCION PRIMERA. — INFRACCIONES COMUNES AL EJERCITO Y ARMADA

Título I. — Delitos y faltas que afectan la disciplina.

Capítulo I. — Muñin y sublevación	424
Capítulo II. — Rebelión	426





	<u>Pág.</u>
Capítulo III. — Desobediencia	427
Capítulo IV. — Insubordinación	428
Capítulo V. — Insultos a centinelas, salvaguardias o fuerza armada	429
Capítulo VI. — Deshonra o indecoro militar	430
Título II. — Delitos y faltas que afectan el servicio.	
Capítulo I. — Abandono de servicio	432
Capítulo II. — Negligencia	432
Capítulo III. — Abandono de destino o residencia	433
Capítulo IV. — Infracción de los deberes del centinela, violación de consigna	434
Capítulo V. — Infracciones diversas; en el mando, en comisiones o en el servicio	435
Capítulo VI. — Deserción	438
I. — Deserción simple	439
II. — Deserción calificada	439
III. — Complot	440
IV. — Complicidad	440
V. — Conato de deserción	440

SECCION SEGUNDA

Infracciones especiales de la marina	441
--	-----

LIBRO TERCERO

INFRACCIONES DE LA LEY PENAL O DE LEYES ESPECIALES

Título I. — Disposición preliminar	445
Título II. — Delitos contra la seguridad del Estado.	
Capítulo I. — Traición	445
Capítulo II. — Espionaje	447
Título III. — Delitos contra las personas.	
Mutilaciones	448
Título IV. — Delitos contra la propiedad.	
Capítulo I. — Robo y hurto	448
Capítulo II. — Exacción	449
Capítulo III. — Venta, empeño u ocultación de objetos y prendas militares	449
Capítulo IV. — Incendios y otros estragos	450
Título V. — Delitos en el desempeño de cargos.	
Capítulo I. — Abuso de autoridad. — Usurpación de funciones	450
Capítulo II. — Provariento. — Cohorno	451
Capítulo III. — Omisiones, malversaciones y fraudes en la administración militar	453
I. — Omisiones	453
II. — Malversaciones y fraudes	454
Título VI. — De las falsedades.	
Capítulo I. — Falsedades en la administración o en el servicio militar	454

	Pág.
Capítulo II. — Falsificación de documentos públicos u oficiales	456
Capítulo III. — Usurpación, ocultación de nombre y otras falsedades	456
Capítulo IV. — Usurpación de condecoraciones, de uniformes, e insignias militares	457
Título VII. — Evasión de presos y de prisioneros	457
Título VIII. — Delitos cometidos por prisioneros de guerra	458
Título final. — Definiciones y aclaraciones. — Disposiciones transitorias	458



1. Constitucionalidad de los Consejos de Guerra permanentes.

Parece que estos Consejos son contrarios al art. 18 de la Constitución que declara que ningún habitante de la Nación puede ser juzgado por comisiones especiales. El autor del Código, Dr. Bustillo, ha salvado la dificultad diciendo que « estos Consejos especiales, llamados así porque se forman exclusivamente para cada causa, no son las Comisiones *ex post facto* de la Constitución, pues si bien es cierto que se constituyen después de producido el hecho, ellos se forman con jueces tomados por sorteo de una lista anticipadamente establecida ». Algo sutil es la explicación, porque aunque los jueces militares no pueden ser nombrados arbitrariamente, no por esto se respeta el precepto constitucional que no distingue entre las comisiones especiales nombradas a capricho y las constituidas por sorteo de una lista previamente formada.

2. Exclusión de los abogados defensores.

El autor del Código defendiendo la exclusión de los letrados civiles en los consejos de guerra (art. 106) la funda:

1º. « En que los abogados no conocen las leyes excepcionales de la justicia militar ». Sin embargo, éstas forman parte del plan de estudios universitarios.

2º « Aun conociéndolas, les falta por lo general la educación y el sentimiento militar indispensable para penetrar debidamente su espíritu ». Argumento discutible hasta cuando el ejército era mercenario, pero sin defensa posible cuando el servicio militar es obligatorio y bien que desde la entrada del



conscripto en filas se encargan de insuflarle el espíritu militar a las clases y los oficiales instructores.

3°. "Porque los militares procesados no suelen tener más que el sueldo y para pagar honorarios se ven precisados a dar poder para cobrarlos sobre aquí". Razón de poco peso para los abogados especializados en lo penal que generalmente proponen el honorario al honor de salvar a una víctima de la pasión cuando no de la maldad ajena o de las mallas del procedimiento instructor.

4°. "Porque en la práctica es muy difícil someter al defensor civil a la subordinación necesaria para que el juicio militar esté rodeado de los respetos que reclama la disciplina". Cierto es: lo que no lo es tanto es la necesidad de esa subordinación para que el defensor cumpla con su alta misión que es preferente a la disciplina. ¿Qué puede ser ésta en un juicio militar? ¿El respeto al tribunal? Se exige en todos los juicios y medios dan las leyes a los tribunales para hacerse respetar. A no ser que la disciplina consista en hacer la venia militar...

5°. Ultimamente "los letrados pueden ser siempre consultados por los defensores militares". Pero una defensa no puede depender de una o varias consultas, sino de un estudio detenido de los hechos y del derecho. Si el Dr. Bustillo ha querido decir que el defensor militar puede limitar sus funciones a la lectura de un trabajo que le haya escrito un abogado, nos inclinamos ante el argumento.

6°. "La intervención letrada es permitida ante el Consejo Supremo que es un tribunal también compuesto por letrados y en el cual es donde propiamente se discute la aplicación de la ley". Pero dejando aparte que de esto último siempre algo se discute en los Consejos de Guerra ¿en qué quedan los argumentos anteriores sobre ignorancia del derecho militar y del espíritu guerrero, y sobre honorarios y disciplina?

En resumen no tiene asidero la exclusión de la defensa letrada en los Consejos de Guerra.

5. Observación sobre tres artículos.

Art. 11 Si dos de los miembros del Consejo supremo han de ser abogados ¿a qué responde que haya un Auditor general? Se explica el cargo de Auditor en los Consejos de Guerra com-



puestos exclusivamente de militares que pueden necesitar un asesor legal que además dé forma jurídica a los fallos, pero no se explica en el Supremo.

Art. 17. Al declarar que el Consejo Supremo depende del Ministerio de Guerra, pone por encima de toda organización judicial militar a una autoridad gubernativa. Se remacha el clavo diciendo que debe *entenderse* con dicho Ministerio en todo lo relativo a las funciones que le están encomendadas: como éstas son esencialmente judiciales, resulta que si la primera instancia en los procesos es de los Consejos de Guerra y la segunda del Consejo Supremo, hay algo peor que una tercera instancia en el Ministerio, cuya acción es decisiva, pero también peligrosa, porque se ejerce de un modo privado, por decirlo así, y sin la responsabilidad, moral por lo menos, que tiene un tribunal aún siendo militar.

Art. 21. Establece dos categorías de consejos de guerra, unos para jefes y oficiales y otros para clases e individuos de tropa. Un ilustrado comentarista se pregunta: «¿No debe ser exactamente igual la justicia que ha de administrarse a un general que a un clase o individuo de tropa? ¿Será porque un proceso reviste mayores dificultades cuanto mayor es la graduación del procesado o acaso porque ante los entorchados y galones se le cae la venda de los ojos a la diosa Themis y emocionada rompe su balanza y dobla la espalda?» (1).

Supresión de las recusaciones.

El título V, del Tratado primero, sólo admite las excusaciones: el Dr. Bustillo funda esto en la necesidad de evitar todo pretexto para hacer articulaciones que menoscaban uno de los primeros propósitos de la justicia militar, el mantenimiento de la disciplina. Pudiera esto motivar la eliminación de la recusación sin causa, pero ¿por qué se niega al procesado el derecho de alegar y probar que no puede ser juez suyo un enemigo personal, un deudor, un amigo o pariente del ofendido? La tímida observación que permite hacer al reo el fiscal o al defensor el art. 115 es inocua.

(1) Dr. H. H. Dobranich, «Justicia militar argentina», pág. 59.



4. Conflictos entre la justicia ordinaria y la militar.

Pueden plantearse en los siguientes casos:

A) Una persona sujeta a la jurisdicción militar según el art. 118 del presente Código, comete una infracción de las que por su naturaleza, caen bajo la jurisdicción ordinaria. Tiene prioridad aquella en que el delito se castiga con mayor pena. Si ésta es la misma en el presente Código y en el Penal, conocerán los tribunales militares.

B) Un delito común es cometido a la vez por militares y por particulares. Entenderán los tribunales ordinarios, salvo que el hecho hubiere sido cometido por los primeros en actos del servicio, o en paraje sujeto a la autoridad militar, en cuyo caso, ésta juzgará a los primeros, y la justicia ordinaria, a los segundos.

(V., además, el art. 130).

5. La justicia militar y la Corte Suprema.

El art. 7 de la ley n° 48, establece que la jurisdicción federal en nada altera la jurisdicción militar en los casos en que según las leyes existentes, debe procederse por consejos de guerra.

Pero la Suprema Corte está investida al respecto de las siguientes atribuciones:

1°. Dirime las cuestiones de competencia que se susciten entre un tribunal militar y uno de cualquier otra jurisdicción, nacional o provincial (Ley n° 4055, art. 9; y art. 161 del presente Código).

2°. Conoce en grado de apelación de las sentencias definitivas de los tribunales superiores militares (ibid., art. 6), por la vía extraordinaria del art. 14 de la expresada ley n° 48.

Téngase además presente que el recurso de *habeas corpus* no está limitado por la jurisdicción militar, es decir, que el Juez de Sección y en última instancia la Corte tienen autoridad para establecer si la persona objeto del recurso está privada de libertad con arreglo a las leyes militares.



6. *Sistema procesal de este Código.*

El presente Código, sólo admite tres pruebas: la testifical, la documental y la pericial. Elimina, pues, la de confesión, lo que es plausible, y la de indicios, lo cual, no quiere decir que los jueces no hayan de tenerlos en cuenta cuando aprecien « según su conciencia », la responsabilidad del procesado.

También es plausible que la sentencia se produzca inmediatamente después del juicio oral y público en que se concreta el plenario. Esto y el régimen a que acabamos de referirnos de la convicción moral o libre apreciación de la prueba, hacen más sensibles las deficiencias que encierra el presente Código y que hacen deseable su modificación. Pero cabe preguntar si debe haber un Código Penal militar fuera del tiempo de guerra.

7. *Apreciación de conjunto.*

En realidad, este Código es una supervivencia, la última, del régimen medioeval legislativo en que el Estado apenas existía, sumergido por la autoridad autonómica de los que más tarde habían de formar sus clases, en Francia estados, cada una con sus fueros propios que comprendían tribunales, procedimientos y normas de fondo, los nobles por un lado, los universitarios por otro, la Iglesia para lo suyo, los hombres de guerra también. Este último fuero siguió aún después que los otros desaparecieron o quedaron reducidos a bien poca cosa, por haberse afirmado el órgano jurídico esencial, el Estado. Y subsistió por la especial constitución de los ejércitos europeos, por soldados, es decir, hombres a sueldo, voluntarios o conseguidos por levas en los muelles de los puertos o en los bajos fondos de las grandes ciudades, gente necesitada de una disciplina férrea. ¿Por qué, entonces, duró el régimen privilegiado para el ejército cuando las guerras dejaron de ser luchas de cuerpos armados para serlo de naciones que en ellas han debido poner todas sus fuerzas económicas o civiles? El fenómeno ha sido estudiado como reacción natural de instrumento ejército enfrente del brazo-Estado que lo mueve y de ella presenta hoy más de una Nación ejemplos palpables.



Pero si la democracia ha de ser la forma definitiva del Estado moderno, no hay que dudar que este fuero de excepción tiene que desaparecer como regla general, subsistiendo, naturalmente, en tiempo de guerra, pues la eficacia de ésta exige normas especiales en que lo rápido del procedimiento condiga con el rigor de su resultado.

Es decir, que el Consejo de Guerra sea para lo que dice su nombre, para la guerra, y en tiempo de paz el militar-ciudadano tenga como civil la misma ley penal, y no haya en el Estado más que un poder judicial, y todos los que él ampare estén sujetos a unos mismos tribunales, no siendo a esto óbice lo que entre nosotros se llama fuero federal, único que debe quedar por responder a la forma misma del Estado argentino.

VII^{bis}. — Leyes atinentes al Código de Justicia Militar

I. N° 4707. Ley orgánica militar. — II. N° 4856. Ley orgánica de la Armada. — III. N° 11.386. Enrolamiento general. — IV. N° 9697. Estadística de caballos, etc., para el ejército movuizado (1).

I. — Ley Orgánica Militar

N° 4707
28 Setiembre
1905

Art. 19. El grado y estado militar se pierden:

- a) Para los oficiales: 1° Por baja o solicitud del interesado. 2° Por condena o la pérdida del grado, como pena principal o accesoria impuesta por los tribunales militares o por el Presidente de la Nación en los casos previstos por las leyes militares. 3° Por condena impuesta por los tribunales comunes o federales a penas equivalentes a las penas militares que llevan como accesoria la destitución, de acuerdo con lo establecido en las leyes penales militares. 4° Por pérdida de la ciudadanía.
- b) Para la tropa: 1° Por el cumplimiento de su obligación de servicio bajo banderas y desde el momento en que por la ley de organiza-

(1) Damos lo esencialmente penal de estas leyes (salvo la cuarta que por su brevedad transcribimos íntegra). No creemos necesaria nota alguna por la claridad de sus preceptos.



ción del ejército terminó su sujeción militar. 2º Por las causas que excluyen del servicio y que determina la ley de reclutamiento y servicio militar. 3º Por resolución del Ministerio de Guerra, para los voluntarios en los casos previstos en los respectivos reglamentos.

Art. 22. Al personal militar de la reserva del ejército permanente desde la convocatoria hasta su licenciamiento, le son aplicables todas las disposiciones vigentes para el ejército permanente. Además, están sujetos a la pérdida del grado:

1º Los oficiales de reserva, cuya conducta sea incompatible con el decoro del grado, o que en tiempo de paz no posean el vestuario y demás prendas necesarias para el servicio. 2º Los oficiales de reserva, que no siendo retirados, observen mala conducta, cometan faltas contra el honor o contra el decoro del grado o contra la disciplina o cuando resulten comprendidos en los incisos a y b del art. 19. 3º Los oficiales y suboficiales que en tiempo de paz no obedezcan sin causa justificada a las citaciones o convocatorias de la autoridad militar.

Art. 41. El que se atribuya indebidamente, ya sea en publicaciones o en cualquier forma, denominaciones de la jerarquía del personal militar del ejército de la Nación, será castigado con arresto de un mes o 150 pesos de multa.

Art. 50. Los que contravinieran, a lo dispuesto en el artículo 18 de la presente ley en el sentido de las disposiciones del inciso 1º del artículo anterior, uso de insignias, distinciones y uniforme correspondiente al grado, (son de uso exclusivo del personal del ejército las prendas del modelo reglamentario que determine el P. E.), podrán ser acusados por las autoridades militares o por cualquiera persona ante los jueces federales y serán castigados con prisión de un mes a un año.

Art. 71. El argentino que no cumpla con las prescripciones del enrolamiento determinadas en la presente ley y el conscripto que no se incorpore sin causa justificada en la fecha fijada para efectuar su servicio, serán penados con un año de servicio continuado en las filas del ejército permanente, que cumplirá después de terminar el que le corresponde.

Art. 72. El reservista que no se presentase sin causa justificada a su convocatoria para el período de instrucción, será penado con dos meses de servicio continuado en el ejército permanente, después de terminar el que le corresponde.

Art. 73. A igual pena será condenado el guardia nacional en idéntico caso.

Art. 74. El ciudadano que no diese cuenta de haber desaparecido la causa de su excepción, será penado con un mes de servicio continuado en las filas, además del tiempo que le corresponda por esta ley.

Art. 75. Todos los conscriptos que no renovasen en la época fijada la excepción que les haya sido concedida, pagarán además de la tasa militar, una multa igual al importe de ésta. Si no lo hiciesen, sufrirán un mes de arresto en el cuartel o prisión, si su excepción proviene



de imposibilidad física, o harán seis meses de servicio en un cuerpo de tropa en los demás casos.

Art. 76. Los miembros de la Junta de excepciones que cometiesen el delito de excusación inmotivada, serán penados con arresto de ocho días a un mes.

Art. 77. Los miembros civiles de la Junta de excepciones que acordasen indebidamente éstas, serán penados, en cada caso, con prisión menor de tres meses a un año, y los militares, con la pérdida de su estado militar. Los médicos que presten servicios en las juntas de excepciones y que otorguen certificados de inutilidad física absoluta para el servicio militar cuando no la haya, serán penados con inhabilitación para ejercer su profesión durante dos años si fueran civiles, y con la pérdida de su estado militar, si fueran del cuerpo de sanidad del ejército.

Art. 78. El personal de la Junta de excepciones que otorgase indebidamente la excepción del pago de la tasa militar, por pobreza notoria, queda obligado al pago de la suma que importe la excepción indebidamente acordada, con arresto de ocho días a un mes.

Art. 79. Las demás infracciones a la presente ley, serán castigadas con penas disciplinarias.

Art. 85. Los pobres de solemnidad están exceptuados del pago de la tasa militar. Este estado de pobreza deberá ser comprobado con la declaración, escrita y firmada ante la Junta de excepciones por dos testigos de reconocida responsabilidad, quienes estarán sujetos a las penas de los encubridores, si la declaración de pobreza fuera infundada. La Junta de excepciones apreciará los fundamentos de excepción del pago de la tasa militar.

II. — Ley Orgánica de la Armada

Nº 483
7 Octubre
1905

Art. 8. La inasistencia sin causa justificada a la convocatoria a ejercicios de la primera reserva será penada con 2 meses de servicio continuo en la Armada, a más del tiempo por que hubiese sido convocado.

Art. 1. En todo aquello que no se oponga a lo establecido en el presente capítulo regirá lo dispuesto en el título de la orgánica militar.

III. — Enrolamiento general

Nº 11306
21 Octubre
1926

Art. 2. Todo ciudadano está obligado a enrolarse en los períodos establecidos en el artículo 16. ("Las oficinas enroladoras permanecerán abiertas durante los meses de enero y febrero, julio y agosto de cada año, para que se enrolen los ciudadanos que hayan cumplido 18 años o los que por cual-



quier causa no lo hubieran hecho a su debido tiempo») dentro de los siete meses de cumplidos los 18 años de edad, concurriendo a la oficina enroladora de su domicilio; se entiende por domicilio a los efectos de esta ley el lugar donde reside la familia o donde trabaje habitualmente el ciudadano o donde está el asiento de sus negocios...

Art. 3. Si el ciudadano se hallare físicamente impedido para concurrir en persona debe comunicarlo por sí, por sus representantes o por intermedio de parientes o amigos dentro del plazo legal a la oficina enroladora correspondiente cuyo jefe tomará las medidas necesarias para enrolarlo en su domicilio siempre que resida en la localidad, asiento de la oficina: en caso contrario, le otorgará una constancia escrita para su descargo hasta que cese el impedimento.

Art. 6. El ciudadano en el acto de enrolarse presentará a la oficina enroladora: a) la partida de su nacimiento, la carta de ciudadanía o en su defecto una información judicial comprobatoria de su nacimiento; b) una fotografía del tamaño y forma que establezca la reglamentación... Cuando el ciudadano no pudiese obtener la fotografía por no existir talleres fotográficos en el lugar donde se enrola, la oficina enroladora se la proveerá gratuitamente.

Art. 12. Los ciudadanos están obligados a conservar en su poder su libreta de enrolamiento. Las libretas de enrolamiento de los procesados y condenados quedarán en poder del juez de la causa, debiendo serles devueltas a los interesados al tiempo de notificarles la resolución que ordene su libertad. Las libretas de los dementes y de los sordomudos que no saben darse a entender por escrito siempre que no estén reclusos en asilos públicos quedarán en poder de sus representantes legales. Las libretas de los dementes y mendigos que estén reclusos en asilos públicos y las de los que se encuentren aislados en hospicios públicos o estén habitualmente a cargo de congregaciones de caridad, quedarán en depósito en las direcciones de los respectivos establecimientos, con cargo de devolverlas a los interesados al día en que desaparezca su reclusión o asilamiento...

Art. 18. El enrolado que haya cambiado de domicilio deberá comunicarlo personalmente bajo su firma, dentro de los siete meses de producido en enero y febrero, julio y agosto a la oficina enroladora y donde no la hubiere, a la oficina de correos que corresponda a su nuevo domicilio. El jefe de dicha oficina anotará en la libreta de enrolamiento el nuevo domicilio denunciado y lo comunicará dentro de tres días en formularios especiales cuya redacción dispondrá el P. E. a los distritos militares y a los jueces del nuevo y del anterior domicilio del solicitante. Los distritos militares harán saber, dentro de los ocho días de recibida la notificación, esos cambios a los jueces de nuevo y anterior domicilio del solicitante. Cuando el enrolado no supiere firmar, el pedido de cambio de domicilio contendrá la impresión digital del pulgar derecho. El cambio de domicilio de los incapaces será denunciado por sus representantes legales.



Art. 21. Los ciudadanos que no cumplan con las prescripciones del enrolamiento determinadas en esta ley, serán considerados infractores e incorporados a prestar servicio en las filas del ejército permanente por un año, además del tiempo de servicio que les corresponda, si por su edad están comprendidos entre los 19 y 45 años cumplidos, siempre que sean aptos para todo servicio o servicio auxiliar. Los mayores de 45 años y los menores de 19, los inútiles para todo servicio o servicio auxiliar, serán castigados con prisión de uno a seis meses.

Art. 22. Los naturalizados que omitieren enrolarse a tiempo perderán la ciudadanía y no podrán readquirirla.

Art. 23. Los ciudadanos que fingiéndose físicamente impedidos, hicieran concurrir a su domicilio a los encargados del enrolamiento, serán castigados con prisión de 1 a 3 meses, y en el caso que no diere el aviso a que se refiere el artículo 3, serán castigados como infractores.

Art. 24. Los padres, tutores, representantes legales y defensores de menores que no cumplan con la obligación a que se refiere el artículo 4° (hacer enrolar a los menores impedidos y suministrar a la oficina enroladora los datos necesarios) serán castigados con una multa de 50 a 200 pesos.

Art. 25. Los ciudadanos que se enrolen más de una vez, los que lo hicieran con documentos o domicilio falsos y los que denunciaren un cambio de domicilio falso, serán castigados con prisión de 6 meses a un año. Igual pena sufrirán los que utilizaren con fines electorales o militares cualquier libreta anulada, después de haber obtenido un nuevo ejemplar de la misma y los que utilicen para los mismos fines una libreta ajena, esté o no anulada.

Art. 26. Los ciudadanos que no comuniquen el cambio de su domicilio a su tiempo, serán castigados con multas de 50 a 200 pesos. En igual pena incurrirán los representantes legales de los incapaces que infrinjan lo dispuesto por el artículo 19.

Art. 27. Los jefes de oficinas enroladoras que demoren injustamente el enrolamiento o no enrolen al ciudadano que se presente a hacerlo con los documentos requeridos, serán castigados con prisión de un mes a un año e inhabilitación de uno a dos años.

Art. 28. Los jefes de oficinas enroladoras que concedan libretas de enrolamiento sin corresponder o las retengan indebidamente, serán castigados con prisión de uno a tres años o inhabilitación de 5 a 10 años. Los funcionarios o empleados públicos que tengan en su poder libretas de enrolamiento de terceros, sufrirán prisión de uno a tres años e inhabilitación de 5 a 10 años; y los particulares que cometan el mismo hecho, serán castigados con prisión de seis meses a dos años. La falsificación o cambio de las impresiones digitales o la adulteración de libretas de enrolamiento, matrículas individuales y ficha militar y electoral, serán castigadas con prisión de uno a tres años e inhabilitación de 5 a 10 años. Los oficiales del Ejército y la Armada



que incurran en las mismas infracciones, serán castigados con la pérdida del estado militar.

Art. 29. Los que falsifiquen o imiten libretas de enrolamiento en blanco y demás documentos indicados en esta ley y los que encarguen y acepten realizar esta clase de trabajo, sufrirán prisión de uno a tres años e inhabilitación de cinco a diez años. En igual pena incurrirán los que falsifiquen los sellos oficiales o usen fraudulentamente los sellos verdaderos destinados al cumplimiento de las disposiciones de esta ley.

Art. 30. Los jefes de oficinas enroladoras que extravíen libretas de enrolamiento en blanco por negligencia o no rindan cuenta de las que le han sido provistas por el distrito militar respectivo, y los que por negligencia, omisiones o mala voluntad no cumplan con las disposiciones de esta ley, dando lugar a demoras injustificadas, pagarán una multa de 100 a 500 pesos en cada caso.

Art. 31. Los jefes de distritos militares de oficinas enroladoras y de correo que dejaren de cumplir en su tiempo y forma las obligaciones impuestas en los artículos, 3 (enrolar a domicilio al impedido), 5 (enrolar procesados, condenados, asilados en hospitales y hospicios), 6 (proveer gratuitamente de fotografía), 7 (fichas militar y electoral), 12 (remisión de partidas de fallecimiento de procesados o condenados, dementes, asilados, etc.), 13 (comunicar los duplicados de libretas), 17 (envío de libretas de fallecidos) y 19 (aviso a los jueces del nuevo y anterior domicilio), sufrirán multa de 100 a 500 pesos por cada infracción. En caso de reincidencia, sufrirán prisión de 1 a 3 años e inhabilitación de 5 a 10 años.

Art. 32. En todas las infracciones cuya penalidad sea de servicio, no procede la excarcelación bajo fianza. En los casos en que por esta ley proceda la pena de servicio obligatorio, la prisión preventiva que se cumplirá en los cuarteles se computará un día de prisión por uno de servicio. Cuando la detención preventiva sufrida fuese igual al máximo de la pena que correspondiese a la infracción, procederá la inmediata libertad del encausado, la que se ordenará de oficio. Cuando el condenado no efectúe el pago de la multa en que hubiese incurrido, sufrirá prisión en razón de 1 día por cada 4 a 10 pesos moneda nacional. A las penas de prisión establecidas por esta ley no les alcanza el beneficio de la condenación condicional.

Art. 33. Los hechos y omisiones castigados por esta ley pueden ser denunciados o acusados por cualquier ciudadano mayor de edad, sin que el querellante esté obligado a dar fianza o caución. La acción popular se ejercerá sin perjuicio de las que deben entablar los procuradores fiscales, y las actuaciones, se harán en papel simple.



IV. — Estadística de caballos, enseres, etc. para el ejército movlizado

Nº 9697
11 Octubre
1915

Art. 1. Autorízase al P. E. para organizar y reglamentar la Estadística Militar de la República, la que comprenderá los caballos, mulas, vehículos y sus arneses, enseres y demás elementos necesarios para el ejército movlizado. La Estadística militar se renovará cada tres años.

Art. 2. A los efectos de la presente ley, en todos los distritos militares de la República se llevarán y tendrán al día los registros necesarios de los propietarios de caballos, mulas y vehículos y sus arneses, enseres y demás elementos declarados aptos para el servicio militar en caso de movlización.

Art. 3. Los propietarios de los elementos que comprenderá la Estadística militar, tendrán obligación de presentarlos a la autoridad militar para su inscripción y clasificación, en el paraje donde se encuentren. Anualmente se repetirá esta inspección para cerciorarse de su estado y dar de baja de los registros a aquellos elementos que, por sus condiciones, no sean empleables en campaña.

Art. 4. Decretada la movlización, los propietarios de ganado, vehículos y demás elementos que reciban aviso de entregarlos, deberán hacerlo en el pueblo o estación más cercana en el día y hora que se les indique.

Art. 5. Los infractores a lo dispuesto en el artículo 3, serán penados por una multa de 2 a 20 pesos, sin perjuicio de las acciones ulteriores que pudiesen recaerles.

Art. 6. Las infracciones sin causa justificada a lo dispuesto en el artículo 7, serán penadas con una multa de 5 a 100 pesos, según las circunstancias y valor de los elementos que hayan motivado la infracción, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran por los daños que erogue la falta de cumplimiento a lo dispuesto en dicho artículo.

ERRATAS NOTADAS

- Pág. 24, línea 9: falta una coma, después de *segundo*.
Pág. 71, línea 18: dice *repartición* en vez de *repetición*.
Pág. 79, línea 30: en vez de 11539 debe ser 8843.
Pág. 116: después de la 6 falta *Extensión de la Jurisdicción ordinaria*.
Pág. 117, línea 11: dice *ordinaria* en vez de *originaria*.
Pág. 119, línea 29: en vez de C. *Jueces*, póngase 1° *Jueces*.
Pág. 123, línea 6: en vez de *del Crimen*, debe decir *de Cámara*.
Pág. 135, línea 5: dice *los de la* en vez de *las de la*.
Pág. 141, línea 17: en vez de SEGUNDA, léase PRIMERA.
Pág. 145., línea 26, dice 1096 en vez de 10996.
Pág. 190, línea 29: donde dice *mueble*, debe decir *líquido*.
Pág. 244: Falta como línea 21: I *Trusts*.
Pág. 246: Última línea: es *Penal* y no *Rural*.



INDICE DEL TOMO PRIMERO



Advertencia

Pág.
VII

CAPITULO PRELIMINAR

ANTECEDENTES

I. — La colonia y el virreinato. Legislación española	1
II. — Hasta la legislación moderna	10
III. — Las leyes de 1863	13
IV. — Los cuatro Códigos de la Constitución. El Penal	14
V. — El procedimiento penal	16
1. — Los proyectos González-Plaza. El Jur	16
2. — El actual Código de Procedimiento	24

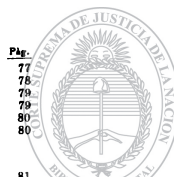
PRIMERA PARTE

TRIBUNALES

CAPITULO I

JUSTICIA FEDERAL

TEXTOS LEGALES. Índice	27
I. — Constitución Nacional	27
II. — Organización de los Tribunales Federales (Ley n° 27) ..	46
III. — Personal de Juzgados. Abogados (Ley n° 51)	51
IV. — Jurisdicción y competencia (Ley n° 48)	52
V. — Secretarios de la Corte Suprema (Ley n° 206) ..	58
VI. — Suplencia de Jueces (Ley n° 935)	58
VII. — Secretarios de Juzgado (Ley n° 1190)	59
VIII. — Organización de los Tribunales de la Capital (Ley n° 1893)	60
IX. — Tercer Juzgado de la Capital (Ley n° 3477)	65
X. — Reformas (Ley n° 4056)	65
XI. — Nuevos Juzgados de Sección. Santa Fe y Buenos Aires (Ley n° 4074)	72
XII. — Integración de Magistrados federales (Ley n° 4162) ..	73
XIII. — Nuevo Juzgado de Sección. Entre Ríos (Ley n° 5011) ..	76



	Pág.
XIV.— Autenticación de actos provinciales (<i>Ley n° 5133</i>)	77
XV.— Cámara en Rosario (<i>Ley n° 7099</i>)	78
XVI.— Reorganización de la Justicia de la Capital (<i>Ley n° 7055</i>)	79
XVII.— Nuevo Juzgado de Sección. Córdoba (<i>Ley n° 11359</i>)	79
XVIII.— Nuevo Juzgado de Sección. Buenos Aires (<i>Ley n° 11192</i>)	80
XIX.— Cámara en Bahía Blanca (<i>Ley n° 11539</i>)	80

COMENTARIO AL CAPÍTULO PRIMERO

1° Extensión y limitación de la jurisdicción federal	81
2° Sus características	85
3° Jurisdicciones federal y común	86
4° Constitución leyes y tratados	89
5° La Corte Suprema	92
6° Cámaras Federales	95
7° Jueces de Sección	96
8° Otros funcionarios judiciales	98

CAPÍTULO II

JURISDICCION ORDINARIA DE LA CAPITAL

TEXTOS LEGALES. Índice	100
I.— Organización de los Tribunales de la Capital (<i>Leyes n° 1893 y n° 2222</i>)	100
II.— Nuevos Juzgados de Instrucción (<i>Ley n° 2844</i>)	112
III.— Justicia de Paz (<i>Ley n° 2860</i>)	112
IV.— Fiscales de Cámara (<i>Ley n° 3071</i>)	113
V.— Reorganización de las Cámaras de la Capital (<i>Ley n° 7055</i>)	113
VI.— Reorganización de la Cámara (<i>Ley n° 8918</i>)	115

COMENTARIO AL CAPÍTULO SEGUNDO

1° Extensión de la jurisdicción ordinaria	116
2° Cámara	117
3° Jueces de primera instancia	118
A) Jueces correccionales	118
B) Jueces del crimen	119
1. Jueces de instrucción	119
2. Jueces de sentencia	122
4° Ministerio público	123
A) Fiscales de Cámara	123
B) Agentes Fiscales	123
5° Otros funcionarios	124
6° La feria	125

CAPÍTULO III

JUECES LETRADOS DE TERRITORIOS NACIONALES

TEXTOS LEGALES. Índice	127
I.— Límites, Administración y Gobernación de Territorios Nacionales (<i>Leyes n° 1522, 2662, 2788 y 3576</i>)	127
II.— Territorio de los Andes (<i>Ley n° 3906</i>)	131
III.— Reformas en la Justicia federal (<i>Ley n° 4055</i>)	133
IV.— Cámara de Bahía Blanca (<i>Ley n° 11539</i>)	134

COMENTARIO AL CAPÍTULO TERCERO

1º Naturaleza de los Juzgados letrados de Territorios; número	134
2º Los Jueces letrados y el P. E.	135
3º Decretos del P. E. sobre funcionarios judiciales	136
4º El Juez Letrado y el Gobernador	137
5º Acordadas de la Corte	138

APENDICE A LA PARTE PRIMERA

1º La justicia en las provincias	141
2º Justicia militar	143
3º Policía, Municipalidad, Aduana, Prefectura	144
4º Otrna reparticiones	144

SEGUNDA PARTE

CODIGOS

I. — CÓDIGO PENAL (Ley n° 11179)	146
Indice del Código Penal	242
I bis. — Agregadas al Código Penal. Indice	244
I. — Trusts (Ley n° 11210)	244
II. — Venta de alcaloides (Ley n° 11309)	248
III. — Ampliación de la anterior (Ley n° 11331)	249
IV. — Trabajo de mujeres y niños (Ley n° 11317)	252
V. — Warrants (Ley n° 9643)	256
VI. — Prenda agraria (Ley n° 9644)	263
VII. — Patronato de menores (Ley n° 10903)	268
II. — Del Código CIVIL (Ley n° 340)	276
II bis. — Atinentes al Código Civil. Indice	279
I. — Matrimonio (Ley n° 2393)	279
II. — Alquileres (Ley n° 11156)	280
III. — Derechos civiles de la mujer (Ley n° 11357)	281
III. — Del Código DE COMERCIO (Ley n° 2837)	282
III bis. — Atinentes al Código de Comercio. Indice	287
I. — Quiebras (Ley n° 4156)	287
II. — Balances de sociedades anónimas (Ley n° 5125)	293
III. — Debentures (Ley n° 8875)	293
IV. — Sociedades cooperativas (Ley n° 11388)	297
IV. — Del Código DE MINERÍA (Ley n° 1919)	300
V. — CÓDIGO RURAL para los Territorios Nacionales (Ley n° 3088)	308
VI. — CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL (Leyes n° 1893 y n° 4128)	335
VI bis. — Leyes atinentes al Código de Procedimientos civiles y comerciales. Indice	339



I. — Procedimiento federal (Ley n° 50)
II. — Expropiación (Ley n° 180)
III. — Ejercicio de la procuración (Ley n° 10998)
VII. — Código de Justicia Militar (Ley n° 4708)
Su índice
VII bis. — Leyes atinentes al Código de Justicia Militar. Índice
I. — Orgánica militar (Ley n° 4707)
II. — Orgánica de la armada (Ley n° 4856)
III. — Enrolamiento general (Ley n° 11386)
IV. — Estadística de caballos, enseres, etc. (Ley n° 9897)
Erratas notadas



